



# Anales de Jurisprudencia

Mayo-Junio 2018

## Contenido

### *Materia Civil*

Juicio ordinario civil / Omisión de exhibir en juicio el contrato base de la acción  
Juicio especial hipotecario / Acumulación de juicios al concurso mercantil

### *Materia Mercantil*

Juicio ejecutivo mercantil / Naturaleza jurídica del interés ordinario y moratorio  
Juicio ejecutivo mercantil / Intereses moratorios establecidos por las partes  
cuándo resultan violatorios de derechos

### *Materia Penal*

Homicidio calificado / Pericial como medio de prueba

### *Materia Justicia para Adolescentes*

Robo calificado (con violencia) / Medida cautelar, consistente en internamiento  
del adolescente, el estado de ingravidez de la inculpada  
no es razón suficiente para revocarla

### *Publicación Especial*

Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua Sentencia de 8 de marzo de 2018  
(Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas)  
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Dirección de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones  
Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial  
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México



# *Anales de Jurisprudencia*

*Mgdo. Dr. Álvaro Augusto Pérez Juárez*

**Presidente del Tribunal Superior de Justicia  
y del Consejo de la Judicatura  
de la Ciudad de México**

**Consejeros de la Judicatura de la CDMX**

*Mtra. Ana Yadira Alarcón Márquez*

*Dr. Miguel Arroyo Ramírez*

*Mtra. Aurora Gómez Aguilar*

*Dr. Jorge Martínez Arreguín*

*Dra. Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés*

La Dirección de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones invita a los magistrados, jueces, abogados y estudiosos del Derecho al envío de artículos y estudios jurídicos originales para su publicación.

Los escritos deberán ser presentados en medio impreso y electrónico, con la correspondiente división de títulos y subtítulos. Toda la correspondencia deberá ser enviada a la Dirección de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones, ubicada en Dr. Claudio Bernard No. 60, 1er. Piso, Esq. Dr. Jiménez, Col. Doctores, delegación Cuauhtémoc C.P. 06720, en México D.F. Teléfonos, 5134 1441 y 51341100 Ext. 2321. Correo electrónico: [analesjurisprudencia.publicaciones@tsjdf.gob.mx](mailto:analesjurisprudencia.publicaciones@tsjdf.gob.mx)

Los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores, y no reflejan en modo alguno el criterio u opinión de la Institución



PUBLICACIÓN CREADA COMO  
“DIARIO DE JURISPRUDENCIA” EN 1903,  
Y CON LA PRESENTE DENOMINACIÓN  
A PARTIR DE 1932

**TOMO 353  
DÉCIMA ÉPOCA  
MAYO-JUNIO 2018**

Informes y ventas de:  
*Anales de Jurisprudencia, Leyes y Códigos Tematizados, Colecciones  
Doctrina y Clásicos del Derecho, y demás obra editorial en la:*

DIRECCIÓN GENERAL DE ANALES  
DE JURISPRUDENCIA Y BOLETÍN JUDICIAL

Dr. Claudio Bernard No. 60, 1er. Piso, Colonia Doctores,  
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06720, Ciudad de México.  
Teléfonos: 51-34-14-41 y 51-34-13-23

AJ ANALES DE JURISPRUDENCIA, año 82, tomo 353, mayo-junio, 2018, es una publicación bimestral editada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Niños Héroes No. 132, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, Tel. 5134-1441, [www.poderjudicialdf.gob.mx](http://www.poderjudicialdf.gob.mx), [analesjurisprudencia.publicaciones@tsjdf.gob.mx](mailto:analesjurisprudencia.publicaciones@tsjdf.gob.mx). Editor responsable: Raciél Garrido Maldonado. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-073014561200-102; ISSN: 2007-1701; Licitud de Título y Contenido No. 14982, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.

Colaboradores:

- Ileana Mónica Acosta Santillan • Sergio Casillas Macedo
- Gustavo Frías Esquivel • Erika Beatriz Ruiz Carballo • Joel Oswaldo Vega Viazcón

Diseño y formato de interiores:

- Ricardo Montañez Pérez

Portada:

- Sandra Juárez Galeote

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.



*DR. ÁLVARO AUGUSTO PÉREZ JUÁREZ*  
**MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

*LIC. RACIEL GARRIDO MALDONADO*  
**DIRECTOR GENERAL DE ANALES DE JURISPRUDENCIA Y BOLETÍN JUDICIAL**

**DIRECTOR DE ANALES DE JURISPRUDENCIA Y PUBLICACIONES**

*LIC. JOSÉ CASTILLO LARRAÑAGA*  
**FUNDADOR**



# MATERIA CIVIL



## SEXTA SALA CIVIL

*MAGISTRADOS:*

LICS. DELIA ROSEY PUEBLA, FRANCISCO JOSÉ HUBER OLEA  
CONTRÓ Y MIGUEL ÁNGEL MESA CARRILLO

*PONENTE:*

MGDA. DELIA ROSEY PUEBLA

**Recurso de apelación interpuesto por la parte actora y los codemandados,  
en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil.**

**SUMARIO:** CONTRATO. OMISIÓN DE EXHIBIR COMO BASE DE LA ACCIÓN DOCUMENTO PACTADO EN CLÁUSULA. Si bien, las partes pactan que el importe de la prestación de servicio materia de un contrato será liquidada al prestador de servicios, una vez que el área solicitante del mismo haya verificado fehacientemente su cumplimiento en los términos del instrumento; comprobado lo anterior, el paso para efectuar dicho pago será dentro del plazo establecido posterior a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas; aceptadas las facturas, se expedirá el contrarecibo correspondiente en el lugar oportuno; no menos cierto lo es, que el hecho de que ante la omisión de alguna de las partes de exhibir el documento pactado en la cláusula, no es obstáculo para que se realice el pago convenido en el contrato base de la acción,

pues éste no se actualiza por meros trámites administrativos, sino que dicho pago se actualiza por la realización de los trabajos encomendados.

Ciudad de México, XX de XXX de XXXX.

Vistos, los autos del toca número XXX/XXXX, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y los codemandados, en contra de la sentencia definitiva de fecha XX de XXX de XXXX, dictada por el C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil de esta Ciudad, en los autos del juicio ordinario civil, seguido por VÍCTOR MANUEL, en contra del Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, delegación Tlalpan, actualmente órgano político administrativo, alcaldía de Tlalpan del Gobierno de la Ciudad de México y secretario de finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, y

### **RESULTANDO:**

1. La sentencia definitiva concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil intentada en el expediente número XXX/XXX, en donde la parte actora VÍCTOR MANUEL no acreditó los extremos de su acción.

SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos de la parte actora, para que los haga valer en la vía y forma que en derecho proceda.

TERCERO. No se hace especial condena en costas.

CUARTO. Notifíquese y guárdese copia en el legajo de sentencias de este Juzgado.

2. Inconformes la parte actora y los codemandados, con la sentencia definitiva antes transcrita, interpusieron recurso de apelación, mismo que les fue admitido en ambos efectos y tramitado que fue conforme a

derecho, se citó a las partes para oír sentencia definitiva en base a los siguientes

### CONSIDERANDOS:

I. Las partes inconformes expresaron como agravios los que constan en sus escritos de fecha XX de XXX de XXXX, respectivamente; mismos que se tienen aquí por reproducidos a la letra en obvio de repeticiones innecesarias.

II. En virtud de que el actor VÍCTOR MANUEL y los codemandados Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México y la delegación del Gobierno del Distrito Federal en XXXX, interpusieron sendos recursos de apelación, por cuestiones de método, se procede en, primer término, al estudio de los agravios hechos valer por la parte actora, lo que se hace en los siguientes términos:

El único agravio que hace valer el actor, en el sentido de que le causa agravio lo resuelto por el inferior, en virtud de que no existe un análisis de las pruebas que dice haber analizado, como tampoco existe un juicio de valoración para cada una de dichas pruebas, resultan fundados y suficientes para revocar la sentencia definitiva recurrida, toda vez que de la cláusula cuarta, denominada “Condiciones de Pago” del contrato abierto de prestación de servicios de impresos exhibido como base de la acción, se aprecia que si bien, las partes pactaron, que: “Las partes convienen en que el importe de la prestación del servicio materia del presente contrato será liquidado a “El Prestador de Servicios”, una vez que el área solicitante del mismo, bajo su responsabilidad, haya verificado fehacientemente su cumplimiento en los términos de este instrumento, comprobado lo anterior, el plazo para efectuar dicho pago será dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas; aceptadas las facturas, se expedirá el contrarecibo correspondiente en la dirección de Recursos Financieros

y Presupuestales en la delegación Tlalpan.”, no menos cierto lo es, que el hecho de que ante la omisión por parte de la hoy actora por cuanto a exhibir el contrarecibo pactado en la cláusula en comento, no es obstáculo para que la parte demandada deje de realizar el pago convenido en el contrato base de la acción, pues éste no se actualiza por meros trámites administrativos, sino que dicho pago se actualiza por la realización de los trabajos encomendados a la hoy parte actora, lo que en el caso concreto se actualiza, atento a lo siguiente:

La parte actora, en los hechos de su demanda, básicamente argumentó que con fecha XX de XXX de XXXX firmó contrato abierto de prestación de servicios de impresos XX-XXXX-XXX, con vigencia hasta el XX de XXX de XXXX, suscrito por el entonces Director General de Administración, Héctor Manuel, y el entonces Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, licenciado Miguel, funcionarios que se encontraban habilitados para firmar el instrumento en términos del acuerdo delegatorio; el contrato de referencia se aprobó por un monto mínimo de XXX (pesos 00/100 moneda nacional) y como máximo XXX, (pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a la suficiencia presupuestal aprobada por la Secretaría de Fianzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, lo que conlleva recursos autorizados para cubrir los importes de las facturas ahora demandadas al titular o alcaldesa del órgano político administrativo en XXXX, denominado delegación política XXXX, actualmente, demarcación territorial de XXXX, que de conformidad con las órdenes de servicios XXXX, XXXX y XXXX recibidas y aprobadas por los demandados y a fin de dar difusión a los programas gubernamentales delegacionales, señala también que entregó lonas, banners, invitaciones en carta, volantes y carteles, entre otros bienes, que se describen en la factura XX y documentación soporte, emitida por el actor el XX de XXX de XXXX, expedida al amparo del contrato XX-XXXX-XXX y órdenes de servicio XXXX y XXXX por la cantidad de XXX



(pesos XX/100 moneda nacional), constante en cincuenta fojas; factura XX emitida por el actor el XX de XXX de XXXX, por suministro de lonas, banners, carteles, según se acredita con la documentación soporte (justificación de adquisición o servicios) órdenes de servicio XXXX y XXXX del contrato XX-XXX-XXX por la cantidad de XXX (XXXX PESOS XX/100 moneda nacional), IVA incluido, constante en dieciocho fojas; factura XX de fecha XX de XXX de XXXX y documentación soporte emitida por el actor incluyendo la orden de servicios XXXX por la cantidad de XXX (XXXX pesos 00/100 moneda nacional), IVA incluido, constante en siete fojas; importes que no le fueron cubiertos a dicha actora, no obstante haber hecho gestiones de cobro extrajudiciales y entregado en tiempo y forma los productos y trabajos encomendados (bienes), por lo que ahora demanda por concepto de suerte principal la cantidad total de XXX (XXX pesos XX/100 moneda nacional); que conforme al artículo 28 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal cuenta con la suficiencia presupuestal para cumplir con las obligaciones que derivan del contrato, mismo que afecta la partida presupuestal XXXX difusión de radio televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales en ese tenor, el titular de la Subdirección de Presupuesto dependiente de la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales de la Delegación XXXXX emitió los folios de adquisiciones XXX,XXX como soporte del importe de XXX (pesos 00/100 moneda nacional); los trabajos, productos y servicios (bienes) fueron recibidos, según se pactó, en días y horas hábiles, la supervisión del contrato quedó a cargo de la jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico, con el fin de verificar el proceso de invitación restringida a cuando menos tres proveedores No. XX/XXX/XXXXX/XXX/XXX/XXXX para la contratación de servicios impresos.

Ahora bien, la parte actora, a efecto de acreditar tales aseveraciones ofreció como pruebas, las que se enumeran y valoran como sigue:

I. La documental consistente en el contrato abierto de prestación de servicios de fecha XX de XXX de XXXX, celebrado por una parte el Gobierno del Distrito Federal, a través de su órgano político administrativo en XXXXX, en lo sucesivo “La Delegación”, y por la otra VÍCTOR en lo sucesivo “El Prestador de Servicios”, el cual le fue adjudicado en el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores número IR/DGA/DRMSG/SRM/XXX/XXXX, mismo que se regula por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su reglamento y demás disposiciones aplicables; documental de la cual se desprenden los términos, las condiciones tanto sobre la prestación del servicio como de pago, la vigencia, la garantía de cumplimiento, así como el cúmulo de derechos y obligaciones que contrajeron las partes al momento de suscribir dicho contrato, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, ya que las codemandadas al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, aceptaron la celebración del contrato exhibido como base de la acción.

II. La confesional ofrecida por el actor a cargo de del (*sic*) titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan, también denominado delegación política XXXXX actualmente demarcación territorial de XXXXX, desahogada vía informe (fojas XXX XXXX), a través del licenciado Marcos Alejandro en su carácter de apoderado legal de la codemandada en mención, acredita que con fecha XX de XXX de XXXX, el órgano político en comento, celebró el contrato exhibido como base de la acción, pues al contestar la posiciones marcadas con los número uno y dos, contestó que sí es cierto.

III. La documentales consistentes en:

III.1 La factura número XX y documentación soporte (justificación de adquisición de servicios), emitida por el actor, a favor del Gobierno del Distrito Federal, que ampara la cantidad de \$XXX (XXX PESOS 40/100 moneda nacional), IVA incluido, el XX de XXX de dos XXXX, expedida al amparo del contrato XX-XXXX-XXX, órdenes de servicio y folio de

adquisiciones 045 y 049, por la cantidad de \$XXX (XXX pesos 62/100 moneda nacional), IVA incluido.

III.2. Factura XX, emitida por el actor el XX de XXX de XXXX, a favor del Gobierno del Distrito Federal, por suministro de lona banners, carteles, según se acredita con la documentación soporte (justificación de adquisición o servicios), órdenes de servicio y folio de adquisiciones 0XX y 0XX al amparo del contrato XX XXXX-XXX, por la cantidad de \$XXX (XXX pesos 40/100 moneda nacional), IVA incluido.

III.3. Factura número XXX de fecha XX de XXX de XXXX expedida por el hoy actor a favor del Gobierno del Distrito Federal, que ampara la cantidad de \$XXX (XXX 00/100 moneda nacional) IVA incluido, junto con la documentación que le sirve de soporte, constante en siete fojas, entre las que se encuentran la nota de remisión número 438, misma que se encuentra firmada de recibido por el personal de las áreas que solicitaron el material convenido en el contrato base de la acción; documental que si bien fueron objetadas por las codemandadas, dicha objeción fue de manera lisa y llana, sin que acreditaran con medio de prueba alguno tal objeción, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se le tiene por reconocida expresamente y con la que se acredita que el actor entregó a la parte demandada, lonas, banners, invitaciones en carta, volantes y carteles, entre otros bienes, que se describen en dichas facturas y por las cantidades en ellas consignadas.

IV.1. La documental pública consistente en la escritura pública número XX, XXX otorgada ante la fe del licenciado Alfredo, titular de la Notaría número XXX del Distrito Federal; documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y con la que se acredita el poder general y especial que el hoy actor otorgó a favor de Dulce María de Jesús.

IV.2. La documental consistente en la póliza de fianza 000220AHXXXX folio XXX, expedida por Fianzas XXX, S.A., por el cumplimiento del contrato, Ramo Administrativo, sub Ramo Proveeduría por un monto afianzado de \$XXX (XXXX pesos 28/100 M.N.), expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México; documental que si bien fue objetada por las codemandadas, dicha objeción fue de manera lisa y llana, sin que al efecto ofrecieran elemento de prueba alguno para acreditar tal objeción, por lo que se tiene por reconocida expresamente, de conformidad con el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, documental que acredita que el hoy actor otorgó fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, para el caso de incumplimiento del contrato exhibido como base de la acción, hasta por la cantidad mencionada.

IV.3. Copia del acuerdo delegatorio, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 1529 del veinticuatro de enero de dos mil trece (visible a fojas 102 a 104 del expediente principal), a la que se le concede valor probatorio pleno al tratarse de una documental pública, de conformidad con el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y la que acredita que el Gobierno de la Ciudad de México en XXXXX, otorgó poder general para la defensa jurídica a favor del licenciado Samuel Francisco.

IV.3. Las documentales consistentes en los oficios de suficiencia presupuestal que obran en los legajos correspondientes a las facturas números XX, XX y XXX, visible a fojas 00XX, 00XX y 00XX respectivamente, documentales que si bien fueron objetadas por las codemandadas, dicha objeción fue de manera lisa y llana, sin que ofrecieran elemento de prueba alguno para acreditar tal objeción, por lo que de conformidad con el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se tiene por reconocida expresamente, las que acreditan que la parte actora cumplió con sus obligaciones derivadas del

contrato exhibido como base de la acción y que se encuentran descritas en las factura en mención.

V. La prueba de ratificación de contenido y firma del contrato de fecha XX de XXX de XXXX, a cargo de Dulce María, Miguel y Héctor Manuel, desahogada en audiencia de XX de XXX del año en curso (visible a fojas 301 a la 303 del expediente principal), manifestando la primera de las nombradas al ponérsele a la vista el contrato materia y objeto de la presente probanza que consta en trece fojas con un anexo único en dos fojas, que sin temor a equivocarse que reconoce el contenido y firma del documento, que la firma contenida en el mismo y que se le atribuye a su persona, fue estampada de su puño y letra.

La segunda de las personas citadas, al ponérsele a la vista el contrato materia y objeto de la presente probanza constante en trece fojas con un anexo único en dos fojas, manifestó que él lo revisó y lo elaboró porque era su función y reconoce plenamente su firma y contenido; asimismo, se le pusieron a la vista los anexos IV, V y VI exhibidos por la parte actora, siendo los anexos IV las fojas 66 y 67 que se refieren a una solicitud de servicio de XX de XXX del XXXX (anterior a la fecha del contrato) y una justificación de adquisición o servicios de la fecha antes citada, las cuales obran en copia fotostática simple, a lo que refiere la citada persona que no obstante que la firma asentada en dichas fojas obra en copia fotostática la reconoce por ser su firma y que el original de dichos instrumentos deben estar en los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; de igual forma se le puso a la vista el anexo V por cuanto hace a las fojas ochenta y tres y ochenta y cuatro del anexo aludido y que contienen dichas fojas una solicitud de servicio de fechas XX de XXX del XXXX en copia fotostática simple y sin firma original o autógrafa y al respecto la persona presente refiere que no obstante que se encuentra su firma en copia fotostática simple en los documentos en cita, reconoce su firma que contienen porque fue hecha por el compareciente en carácter

de visto bueno que era su función, se le pone a la vista también el anexo VI respecto a las fojas noventa y uno a noventa y cinco y que lo son una remisión identificada con el número 0XXX, dos solicitudes de apoyo logístico con números de folio sesenta y ocho, dos justificaciones de adquisición o servicios de fechas XX de XXX del XXXX que contienen firmas autógrafas a lo que manifiesta que reconoce como suyas las firmas de los documentos antes citados por haber sido estampada de su puño y letra y además refiere que todo el concentrado en donde se detallan los servicios recibidos, así como los materiales (lo subrayado es de esta ponencia), se dejaron en el área de archivo de la dirección de recursos materiales y servicios generales para su debido resguardo.

Y la tercera persona, al desahogar dicha prueba de reconocimiento, se le puso a la vista el contrato materia y objeto de la presente probanza y que consta en trece fojas con un anexo único en dos fojas, quien manifestó que reconoce el contrato y que él lo firmó, así como que reconoce su contenido y que se encuentra rubricado en cada una de sus páginas; se le puso a la vista también el anexo cuatro exhibido por la actora específicamente en la foja sesenta y seis de dicho anexo, la que contiene en su texto una solicitud de servicio de fecha XX de XXX del XXXX en copia fotostática simple conteniendo una firma en copia fotostática simple y no autógrafa, a lo que refiere que no obstante que dicha firma se encuentra asentada en copia fotostática simple manifiesta que esa firma es suya porque firmó el documento original en su momento. Las probanzas antes citadas benefician a la parte actora, toda vez que con lo anterior se corrobora la celebración del contrato de prestación de servicios presentado como base de la acción, así como su cumplimiento.

VI. La documental pública vía informe, consistente en el informe rendido por el Jefe de la Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico, David (visible a fojas XXX del expediente), se desprende, que en lo conducente precisó: "...Esta Jefatura de servicios generales

y apoyo logístico de la delegación territorial de Tlalpan, no es el área competente para proporcionar la información relativa al proceso de invitación restringida IR/DGA/DRMSG/SRM/XXX/XXXX o la participación de Dulce María, apoderada de VÍCTOR, porque de acuerdo al Manual de (*sic*) Administrativo de (*sic*) órgano político administrativo, en su parte de dictamen de procedimientos 11/XXXX establece claramente qué áreas son las competentes, mismo que puede ser consultado en la página de internet <http://www.tlalpan.gob.mx/>. En cuanto si existe impedimento legal, para cancelar o se extinga la fianza materia de la solicitud, al respecto quiero, hacer de su conocimiento que esta H. Unidad, no es la encargada de dictaminar la procedencia de dicha solicitud de acuerdo al manual administrativo...", de lo que se colige que si bien, con la documental de que se trata, el actor no acreditó si existía o no inconveniente legal por parte de la Delegación Tlalpan, para que se cancele o extinga la fianza que otorgó y que fue expedida por Fianzas XXX, S.A., a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato exhibido como base de la acción, cierto es también, que el actor al haber acreditado con el contrato base de la acción y con las facturas ya analizadas con anterioridad, el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato en mención, se concluye, que no existe impedimento legal alguno para cancelar o extinguir la fianza en comento, puesto que la misma fue otorgada por el actor, precisamente con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato base de la acción.

VI. La prueba documental pública vía informe, consistente en el informe rendido por el Subdirector de Presupuesto VÍCTOR MANUEL (fojas 251), probanza que acredita que el C. Víctor Manuel manifestó textualmente: "...que al realizar una búsqueda en los archivos de la Jefatura de la Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, se localizó las solicitud (*sic*) de órdenes de servicio de la in-

vitación restringida número IR/DGA/DRMSG/SRM/XXX/XXXX del cual se desprende que esta Subdirección de Presupuestos no emitió los folios de adquisición (solicitud de Servicio) 049 y 045. Asimismo, hago de su conocimiento que los folios de adquisición se recibieron de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para poder dar la suficiencia presupuestaria, mismas que fueron suscritas por el entonces Subdirector de Presupuesto, el C. Jorge Antonio. Los folios 0XX y 0XX dan un total de \$XXX (XXX Pesos 00/100 M.N.). Por lo que respecta al folio de adquisición con el número 0XX a que hace referencia en el folio XXXX, éste no corresponde a la invitación restringida materia de la litis...", de lo que se colige, que con tal documental se acredita que el actor solicitó la autorización de suficiencia presupuestal para poder celebrar el contrato base de la acción.

Toda vez que el Juez no entró al estudio de las pruebas y excepciones hechas valer por los codemandados, esta Sala, con plenitud de jurisdicción, procede a su estudio en los términos siguientes:

Enseguida, se procede al estudio de las pruebas ofrecidas por la codemandada, delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan, mismas que enumeran y valoran como sigue:

1. La confesional ofrecida por la codemandada a cargo Dulce María de Jesús, misma que fue desahogada en audiencia de fecha XX de XXX de XXXX (fojas 240 a 243), de la que se desprende que al contestar las posiciones marcadas con los números de la 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, mismas que se encuentra encaminadas a acreditar lo siguiente:

"7. Que usted pactó en el documento base que el precio de la operación fue por la cantidad de \$XXX (pesos 00/100 M.N.).", contestó "que no es cierto."

"8. Que usted sabe que el precio pactado durante la vigencia del contrato base de la acción fue por la cantidad de \$XXX (XXXX pesos 00/100 M.N.).", contestó "que no es cierto."



“9. Que usted se abstuvo de acreditar la entrega del objeto materia del contrato en la fecha pactada en el documento base de la acción.”, contestó “que no es cierto.”.

“10. Que usted se abstiene de acreditar con documento idóneo la entrega a mi representada del servicio pactado en el documento base de la acción.”, contestó “que no es cierto.”.

“12. Que usted se abstuvo de prestar los servicios que ampara la factura XX de fecha XX de XXX del XXX”, contestó “que no es cierto.”.

“13. Que usted se abstuvo de prestar los servicios a la delegación que ampara la factura XX de fecha XX de XXX del XXXX.”, contestó “que no es cierto.”.

“14. Que usted se abstuvo de prestar los servicios a la delegación que ampara la factura XXX de fecha XX de XXX de XXXX.”, contestó “que no es cierto.”.

“15. Que usted se abstuvo de prestar los servicios a la delegación descritos en el anexo único del contrato de fecha XX de XXX de XXXX.”. Contestó “que no es cierto.”.

“16. Que usted se abstuvo de entregar a la delegación los productos y servicios pactados en el contrato base de la acción.”. Contestó “que no es cierto.”.

“17. Que usted fue omiso en exhibir los comprobantes que acredite el cumplimiento de sus obligaciones.”, contestó “que no es cierto.”.

“18. Que usted se abstuvo de cumplir con sus obligaciones pactadas en el contrato base de la acción.”. Contestó “que no es cierto”.

De lo que se colige, que con la confesional de que se trata, no se acredita la ilegalidad del contrato base de la acción, ni de los anexos que forman parte del mismo, así como tampoco quedó acreditado que las facturas no fueron ingresadas al área administrativa correspondiente, por lo que, la confesional en comento no beneficia los intereses de su oferente.

2. La documental pública consistente en el oficio DT/DGA/XXX/XXX, de XX de XXX de XXXX (visible a fojas XXX), misma que no beneficia los intereses de su oferente, al haber sido exhibida en copia simple

y que al no haber sido robustecida con elemento de prueba alguno, resulta insuficiente para otorgarle valor probatorio.

3. La documental consistente en el contrato abierto de prestación de servicios de impresos, DT-XXXX-XXX, de fecha XX de XXX de XXXX, misma que al no haber sido objetada por su contraria hace prueba plena de conformidad con el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, misma que no beneficia los intereses de su oferente, ya que de tal documental se desprende que el derecho de la parte actora para reclamar las prestación que refieren deriva del contrato en mención.

4. La documental pública, consistente en copia certificada de la reproducción fiel de la pantalla del sistema aplicativo de planificación de recursos gubernamentales SAP-GRP de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, suscrita por la Directora General de Administración, María de Jesús, documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles, misma que no favorece los intereses de su oferente, por cuanto a que no es cierto que la actor haya celebrado un contrato por la cantidad de \$XXX (XXXX pesos 02/100 M.N.), pues ello se advierte, el propio contrato exhibido por la actora como base de su acción.

5. La pericial en grafoscopía ofrecida por la delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan, prueba que no favorece a su oferente, ya que por auto de fecha XX de XXX de XXXX, la autoridad primaria no admitió la pericial en cuestión, auto que al no haber sido recurrido se encuentra firme.

6. La instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, no acreditan el incumplimiento del actor por cuanto a sus obligaciones derivadas del contrato base de la acción.

Se procede al estudio de las pruebas ofrecidas por la codemandada, Administración Pública de la Ciudad de México, mismas que se enumeran y valoran como sigue:

1. La confesional a cargo del actor VÍCTOR MANUEL, misma que fue desahogada en audiencia de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 301 del expediente), y que al desahogar las posiciones marcadas con los números 2, 4, 6 y 7 mismas que se encuentra encaminadas a acreditar, lo siguiente:

“2. Que usted tiene conocimiento que el Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se abstuvo de intervenir en el contrato abierto de prestación de servicios número DT-2015-XXX, de fecha XX de XXX de XXXX.”. Contestó “que no es cierto”.

“4. Que usted carece de relación jurídica alguna que la vincule con el Gobierno del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, en su carácter de administración pública centralizada de la Ciudad de México.”. Contestó “que no es cierto”.

“6. Que usted tiene conocimiento que la jefatura delegacional, en Tlalpan, declaró inexistente el contrato abierto de prestación de servicios, número DT-2015-090, de fecha 20 de febrero de 2015.”. Contestó “que no es cierto”.

“7. Que usted se abstuvo de presentar para su cobro las facturas base de la acción debidamente requisitadas ante el órgano político administrativo en Tlalpan.”. Contestó “que no es cierto”.

De lo anterior se concluye que la confesional de que se trata, no le aporta beneficio alguno a su oferente, ya que dicha probanza fue ofrecida para el efecto de acreditar la falta de legitimación pasiva que hizo valer al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, en atención a que el Gobierno de la Ciudad de México no tiene relación contractual con la parte actora, lo cual resulta desacertado, ya que del contrato exhibido como base de la acción, se desprende que el contrato

lo celebró el Gobierno del Distrito Federal, a través de su órgano político administrativo en Tlalpan, a quien en lo sucesivo se le denominó “La Delegación”, representada por Héctor Manuel, en su carácter de Director General de Administración en Tlalpan, con la asistencia del Lic. Miguel, en su carácter de Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y por la otra, la persona física de nombre VÍCTOR MANUEL, a través de su representante legal, la C. Dulce María de Jesús, a quien en lo sucesivo se le denominó “El Prestador de Servicios”, y del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte actora demandó al Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien contestó la demanda por conducto del Mtro. Vicente, en su carácter de director general de Servicios Legales adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, y al efecto exhibió la documental de fecha XX de XXX de dos XXXX (fojas XXX), en el que consta, que el C. Miguel Ángel Mancera Espinoza, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, nombró al Mtro. Vicente Lopantzi García, como director general de Servicios Legales.

2. La documental consistente en el informe que rindió la Jefatura Delegacional en Tlalpan mediante su oficio DT/DGA//XXXX/XXXX, de fecha XX de XXX de XXXX documental que al haber sido exhibida en copia simple y que al no haber sido adminiculada con elemento de prueba alguno resulta insuficiente para acreditar lo que pretende su oferente.

3. La instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, no favorece los intereses de su oferente, ya que de las constancias que obran en el juicio en que se actúa se aprecia, que la codemandada y oferente de tales pruebas, si tiene legitimación pasiva en el presente juicio.

Enseguida, se procede al estudio de las excepciones y defensas únicas, hechas valer por Norma Carolina, en su carácter de Subprocurado-

ra de Asuntos Penales de la Ciudad de México, en ausencia de su titular en representación del Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, la que no ofreció pruebas, lo que se hace en los términos siguientes:

1. La falta de acción y derecho resulta infundada, toda vez que de la cláusula décimo segunda, denominada “Garantía de cumplimiento”, del contrato abierto de prestación de servicios de impresos exhibido como base de la acción, se aprecia que las partes contratantes pactaron que: “El Prestador de Servicios” constituye en este acto póliza de fianza en moneda nacional, expedida por la institución mexicana legalmente autorizada para tal efecto, a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con una vigencia desde su expedición y hasta un año después de la prestación del servicio como garantía de la calidad del mismo, equivalente quince por ciento (15%) del monto total del contrato (sin incluir el IVA) a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de la obligaciones contraídas en el presente instrumento.”, y al efecto la actora exhibió la póliza de fianza número 000220AHXXXX folio 53XXXX, expedida por Fianzas XXX, S.A., por el cumplimiento del contrato, ramo administrativo, subramo proveeduría por un monto afianzado de \$XXX (XXXX pesos 28/100 M.N.), expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México; documental que si bien fue objetada por las codemandadas, dicha objeción fue de manera lisa y llana, sin que al efecto ofrecieran elemento de prueba alguno para acreditar tal objeción, por lo que se tiene por reconocida expresamente, de conformidad con el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, documental que acredita que el hoy actor otorgó fianza a favor de la Secretaría de Fianzas del Distrito Federal, de lo que se concluye, contrario a lo sostenido por el excepcionista, el actor sí tiene acción y derecho para demandar las

prestaciones que reclama, ya que la póliza de fianza que alude el excepcionista deriva del contrato base de la acción.

2. Falta de legitimación pasiva resulta infundada, debiendo estarse el excepcionista a lo resuelto en la excepción marcada con el número uno.

3. Improcedencia de la vía resulta infundada, toda vez que las prestaciones que reclama la parte actora en su escrito inicial de demanda, derivan del contrato de prestación de servicios exhibido como base de la acción y no de la póliza de fianza que alude el excepcionista, por lo que la vía elegida por la parte actora es procedente.

4. Oscuridad de la demanda resulta infundada, toda vez que del escrito de demanda, no se advierte que la narración haya sido imprecisa, tan es así, que el excepcionista dio contestación a la demanda instaurada en su contra y contestó todos y cada uno de los hechos narrados por la actora.

5. *Sine actione agis*, resulta infundada, toda vez que con las pruebas aportadas por el actor, quedó acreditado el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios base de la acción.

Enseguida, se procede al estudio de las excepciones y defensas hechas valer por el licenciado Samuel Francisco, en su carácter de apoderado general para la Defensa Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan, lo que se hace en los términos siguientes:

1. Falta de legitimación de la parte actora resulta infundada, toda vez que el derecho de la parte actora para demandar las prestaciones que reclama, devienen de lo pactado por las partes en el contrato abierto de prestación de servicios de impresos de fecha veinte de febrero de dos mil quince.

2. La improcedencia de la vía resulta infundada, toda vez que no es procedente que el juicio que nos ocupa, se lleve a cabo mediante un procedimiento administrativo como lo pretende el excepcionista, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley de

Adquisiciones, la presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que realice la administración pública del Distrito Federal, sus dependencias, órganos desconcentrados, entidades y delegaciones, supuestos que no encuentran en las prestaciones reclamadas por el actor en su escrito inicial de demanda.

3. Oscuridad de la demanda resulta infundada, toda vez que contrario a lo aseverado por el excepcionista, del escrito inicial de demanda, se aprecia que el actor precisó en los hechos de su demanda circunstancias de modo, tiempo y lugar, por cuanto al cumplimiento del contrato base de la acción, tan es así, que el hoy codemandado contestó la demanda y opuso las excepciones y defensas que a sus intereses convinieron.

Se procede al estudio de las excepciones y defensas hechas valer por el Mtro. Vicente, en su carácter de director general de Servicios Legales, adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, lo que se hace en los términos siguientes:

1. La falta de legitimación pasiva resulta infundada, toda vez que la excepcionista hizo valer dicha excepción, básicamente en el hecho de que el Gobierno de la Ciudad de México no tiene relación contractual con la parte actora, lo cual resulta desacertado, ya que del contrato exhibido como base de la acción, se desprende que el contrato lo celebró el Gobierno del Distrito Federal, a través de su órgano político administrativo en Tlalpan, a quien en lo sucesivo se le denominó “La Delegación”, representada por Héctor Manuel, en su carácter de director general de Administración en Tlalpan, con la asistencia del Lic. Miguel, en su carácter de Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y por la otra, la persona física de nombre VÍCTOR MANUEL, a través

de su representante legal, la C. Dulce María De Jesús, a quien en lo sucesivo se le denominó “El Prestador de Servicio”, y del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte actora demandó al Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien contestó la demanda por conducto del Mtro. Vicente, en su carácter de director General de Servicios Legales adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, y al efecto exhibió la documental de fecha XXX de XXX de XXXX (fojas XXX), en el que consta, que el C. Miguel Ángel Mancera Espinoza, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, nombró al Mtro. Vicente, como Director General de Servicios Legales.

2. La falta de acción y derecho resulta infundada, debiendo estarse la excepcionista a lo resuelto en la excepción marcada con el número uno.

3. La falta de legitimación activa, que se hizo consistir dicha excepción básicamente en el hecho de que las obligaciones derivadas del contrato únicamente vinculan al órgano político administrativo en Tlalpan y a la actora, resulta infundada, tomando en consideración que tales argumentos ya fueron analizados en la excepción número uno; el excepcionista deberá estarse a lo ahí resuelto.

4. La de *sine actione agis* resulta infundada, ya que con las pruebas aportadas por el actor, quedó acreditado el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios base de la acción.

5. La de oscuridad de la demanda resulta infundada, toda vez que contrario a lo aseverado por el excepcionista, del escrito inicial de demanda, se aprecia que el actor precisó en los hechos de su demanda circunstancias de modo, tiempo y lugar, por cuanto al cumplimiento del contrato base de la acción, tan es así, que el hoy codemandado contestó la demanda y opuso las excepciones y defensas que a sus intereses convinieron.



Por todo lo anteriormente expuesto se concluye, que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con las pruebas aportadas por las codemandadas, Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, titular alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan y Secretaría de Finanzas de Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, no quedaron acreditadas las excepciones y defensas que hicieron valer al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, en tanto, que con los medios de prueba aportados por la parte actora VÍCTOR MANUEL quedó acreditado el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato abierto de prestación de servicios de impresos DT-XXXX-XXX de fecha XX de XXX de XXXX, al amparo de las órdenes de servicio 00XX, 00XX y 00XX.

Por lo que, en consecuencia, se declara procedente la acción intentada por el actor y se deberá condenar a las codemandadas Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan, al reconocimiento y adeudo y pago de la cantidad de \$ XXX (XXX pesos XX/100 M.N.), IVA incluido, por concepto de suerte principal, que ampara la factura número XX.

Se deberá condenar a los codemandados Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan, al reconocimiento y adeudo y pago de la cantidad de \$ XXX (XXX pesos XX/100 M.N.), por concepto de suerte principal, que ampara la factura número XX.

Se deberá condenar a los codemandados Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan, al reconocimiento y adeudo y pago de la cantidad de \$ XXX (XXX pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal, que ampara la factura número XXX, montos anteriores que arrojan un total de \$XXX(XXX pesos XX/100 M.N.), por concepto de suerte principal, cantidad que deberán cubrir a la parte actora VÍCTOR MANUEL o a quien sus derechos legalmente represente, en un término de cinco días contados a partir del día siguiente que cause ejecutoria la presente resolución, apercibido que para el caso de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa.

Se deberá condenar a los codemandados Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan, a pagar a la parte actora VÍCTOR o a quien sus derechos legalmente represente, al pago de los intereses moratorios a razón del 9% (nueve por ciento) anual, sobre la cantidad de \$XXX (XXX pesos XX/100 M.N.), por concepto de suerte principal, a partir del momento en que se hizo exigible la obligación de pago en favor el actor, esto es, a partir del XX de XXX de XXX, fecha en la que se expidió la factura número XXX, hasta la total solución del presente asunto, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia previo aprobación del incidente correspondiente.

Se deberá condenar a los (*sic*) Secretaría de Finanzas de Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, al otorgamiento de recursos y de la suficiencia presupuestal por parte de la Secretaría en comento, para el pago de adeudos del ejercicio fiscal y presupuesto de la delegación Tlalpan XXXX y posteriores, actualmente demarcación territorial Tlalpan del Gobierno del Distrito Federal, actualmente Gobierno

de la Ciudad de México y por tanto, la previsión del pago de sentencias judiciales y/o resoluciones en el Presupuesto de Egresos del Gobierno de la ciudad de México, del presente ejercicio XXX y posteriores para el caso de ejecución forzosa de la resolución que se dicte.

Se deberá tener por cancelada la fianza 000220AHXXXX folio 53XXXX, expedida por Fianza XXX, S.A., en virtud del cumplimiento del contrato, ramo administrativo, sub ramo proveduría, por un monto afianzado de \$XXX (XXX pesos 28/100 M.N.), expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México.

No es procedente condenar a las codemandadas Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan y Secretaría de Finanzas de Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, al pago de daños y perjuicios reclamados por el actor en su escrito inicial de demanda, toda vez que no acreditó con medio de prueba alguno, los daños causados en su patrimonio. En consecuencia, la sentencia definitiva recurrida debe quedar como más adelante se establecerá.

Enseguida, se procede al estudio del primer agravio hecho valer por la codemandada, delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan, mismo que resulta parcialmente fundado, pero insuficiente para modificar la sentencia definitiva recurrida, toda vez que, efectivamente, de la sentencia definitiva recurrida, se advierte que el Juzgador determinó, que el actor no acreditó los extremos de su acción, por lo que no resultaba procedente que dejara a salvo los derechos, en razón de que al no haber acreditado su acción el actor, lo procedente era absolver a los codemandados de las prestaciones reclamadas, sin embargo y atento a lo resuelto por esta Sala, en relación con el recurso de apelación del actor, deberá estarse a lo resuelto en esta sentencia.

El segundo agravio resulta parcialmente fundado, pero insuficiente para modificar el fallo definitivo apelado, toda vez que era procedente condenar a la parte actora al pago de las costas atento a lo resuelto en la sentencia dictada por el Juez; sin embargo, atento a lo analizado y fundado del agravio del actor, deberá estarse a lo resuelto en esta sentencia.

El único agravio que hace valer la parte codemandada, Administración Pública de la Ciudad de México, resulta parcialmente fundado, pero insuficiente para modificar el fallo definitivo apelado, toda vez que era procedente condenar a la parte actora al pago de las costas atento a lo resuelto en la sentencia dictada por el Juez; sin embargo, atento a lo analizado y fundado del agravio del actor, deberá estarse a lo resuelto en esta sentencia.

En consecuencia, la sentencia definitiva recurrida debe quedar como sigue:

PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil, en el que la parte actora VÍCTOR MANUEL acreditó parcialmente su acción y las codemandadas Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan y Secretaría de Finanzas de Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, no acreditaron sus excepciones y defensas.

SEGUNDO. Se tiene por reconocido el adeudo de la cantidad de \$XXX (XXX Pesos 62/100 M.N.), IVA incluido, por parte de los codemandados Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan, y se les condena al pago de dicha cantidad, por concepto de suerte principal que ampara la factura número xx. Asimismo, se tiene por reconocido el adeudo de la cantidad de \$XXX (XXX 40/100 M.N.), por

parte de los codemandados Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo Jefe de Gobierno de la ciudad de México y titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan, y se les condena al pago de la cantidad mencionada, por concepto de suerte principal que ampara la factura número XX y se tiene por reconocido el adeudo de la cantidad de \$XXX (XXX pesos 00/100 M.N.), por parte de los codeemandados Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo Jefe de Gobierno de la ciudad de México y titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan, y se les condena al pago de dicha cantidad, por concepto de suerte principal, que ampara la factura número XXX montos anteriores que arrojan un total de \$XXX (XXX pesos 02/100 M.N.), por concepto de suerte principal, cantidad que deberán cubrir a la parte actora VÍCTOR MANUEL o a quien sus derechos legalmente represente, en un término de cinco días contados a partir del día siguiente que cause ejecutoria la presente resolución, apercibido que para el caso de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa.

TERCERO. Se condena a las codemandadas Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su Titular del Poder Ejecutivo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan, a pagar a la parte actora VÍCTOR o a quien sus derechos legalmente represente, los intereses moratorios a razón del 9% (nueve por ciento) anual, sobre la cantidad de \$XXX (XXX pesos 02/100 M.N.), por concepto de suerte principal, a partir del momento en que se hizo exigible la obligación de pago en favor el actor, esto es, a partir del XX de XXX de XXXX, fecha en la que se expidió la factura número XXX, hasta la total solución del presente asunto, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia previa aprobación del incidente correspondiente.

CUARTO. Se condena a la Secretaria de Finanzas de Distrito Federal ahora Gobierno de la Ciudad de México, al otorgamiento de recursos y de la suficiencia presupuestal por parte de la Secretaria en comento, para el pago de adeudos del

ejercicio fiscal y presupuesto de la delegación Tlalpan XXXX y posteriores, actualmente demarcación territorial Tlalpan del Gobierno del Distrito Federal, actualmente Gobierno de la Ciudad de México y por tanto, la previsión del pago de sentencias judiciales y/o resoluciones en el Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México, del presente ejercicio XXXX y posteriores para el caso de ejecución forzosa de la resolución que se dicte.

QUINTO. Se tiene por cancelada o extinta la fianza 000220AHXXXX folio 53XXXX, expedida por Fianza XXX, S.A., en virtud del cumplimiento del contrato, ramo administrativo, sub ramo proveduría, por un monto afianzado de \$XXX (XXX pesos 28/100 M.N.), expedida a favor de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México.

SEXTO. Se absuelve a las codemandadas Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan y Secretaria de Finanzas de Distrito Federal ahora Gobierno de la Ciudad de México, al pago de daños y perjuicios reclamados por el actor en su escrito inicial de demanda.

SÉPTIMO. No se hace condena en costas a las codemandadas Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su titular del Poder Ejecutivo Jefe de Gobierno de la Ciudad De México, titular o alcaldesa del órgano político administrativo en Tlalpan y Secretaria de Finanzas de Distrito Federal ahora Gobierno de la Ciudad de México, en la Primera Instancia.

OCTAVO. Notifíquese...

III. Por no encontrarse el presente asunto dentro de los supuestos de la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas a las partes Actora y Codemandadas, en esta Segunda Instancia.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se

## RESUELVE:

PRIMERO. Resultó fundado y suficiente para revocar la sentencia definitiva recurrida, el único agravio hecho valer por el actor VÍCTOR MANUEL.

SEGUNDO. Resultó parcialmente fundado pero insuficiente el primer agravio hecho valer por la codemandada Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan e infundado el segundo agravio.

TERCERO. Resultó infundado el único agravio hecho valer por la codemandada Administración Pública de la Ciudad de México.

CUARTO. Se revoca la sentencia definitiva recurrida, debiendo quedar en los términos precisados en la parte final del considerando segundo de la presente resolución.

QUINTO. No se hace especial condena en costas a las partes actora y codemandadas.

SEXTO. Notifíquese con testimonio de la presente resolución, hágase del conocimiento de la *a quo* y hecho que sea archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sexta Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciados Delia Rosey Puebla, Francisco José Huber Olea Contró y Miguel Ángel Mesa Carrillo; siendo ponente la primera de los nombrados, ante el C. Secretario de Acuerdos, licenciado Juan Ulloa Cruz, quien autoriza y da fe.





## SEXTA SALA CIVIL

*MAGISTRADOS:*

LICS. DELIA ROSEY PUEBLA, FRANCISCO JOSÉ HUBER  
OLEA CONTRÓ Y EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, POR  
MINISTERIO DE LEY

*PONENTE:*

MGDA. DELIA ROSEY PUEBLA

**Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio especial hipotecario.**

**SUMARIO:** ACUMULACIÓN DE JUICIOS AL CONCURSO MERCANTIL. SANCIONES Y JUICIOS INICIADOS POR EL COMERCIANTE Y LOS PROMOVIDOS Y SEGUIDOS CONTRA ÉL DE CONTENIDO PATRIMONIAL. NO SE REQUIERE LA OPINIÓN DEL CONCILIADOR DESIGNADO PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO EN EL CONCURSO MERCANTIL. No se requiere la opinión del conciliador designado para iniciar el procedimiento hipotecario, tomando en consideración que la declaratoria de concurso mercantil fue emitida con fecha diferente a la demanda del juicio hipotecario; por ello, de conformidad con lo que prevé el artículo 84 de la Ley de Concursos Mercantiles, que señala: “Las acciones promovidas y los juicios seguidos por el comerciante, y las promovidas y los seguidos contra él, que se encuentren en trámite al dictarse la sentencia de concurso mercantil,

que tengan un contenido patrimonial, no se acumularán al concurso mercantil, sino que se seguirán por el comerciante bajo la vigilancia del conciliador, para lo cual, el comerciante debe informar al conciliador de la existencia del procedimiento, al día siguiente de que sea de su conocimiento la designación de éste...". En consecuencia fue procedente iniciar por separado cualquier otro procedimiento de contenido patrimonial, sin que, por tanto, fuera procedente acumular al juicio de concurso mercantil el seguido ante el *a quo*.

Ciudad de México, cinco de diciembre del año dos mil dieciséis.

Vistos, los autos del toca número XXX/XXXX, relativo al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia definitiva de fecha XX de XXX del año XXXX, dictada por el C. Juez Vigésimo Primero de lo Civil (*sic*) esta Ciudad, en los autos del juicio especial hipotecario, seguido por XXXX, S.A., XXX, XXX, en contra de XXXX, S.A. de C.V., y otros.

### RESULTANDO:

1. La sentencia definitiva recurrida, consta de los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Ha sido procedente la vía especial hipotecaria en que XXX, S.A. XXX, XXX, acreditó su acción real de pago de crédito; las codemandadas XXX, S.A. DE C.V. y PATRICIA, justificaron parcialmente sus excepciones y defensas; por último, se declaró que la moral XXX, S.A. DE C.V. y el señor ENRIQUE, carecen de legitimación pasiva.

SEGUNDO. En consecuencia, se condena a XXX, S.A. DE C.V., en su carácter de obligada principal y a la señora PATRICIA, en su carácter de garante hipotecaria, a pagar a XXX, S.A. XXX, XXX, la cantidad de \$X,XXX,XXX.XX (XXXX XX/100 M.N.), por concepto de suerte principal, que equivale al capital insoluto del crédito; sin embargo, considerando que en autos consta la existencia de un proce-

dimiento concursal en el cual se declaró en concurso mercantil a la comerciante XXX, S.A. DE C.V., así como subsistente la medida cautelar decretada en el auto de XX de XXX de XXXX, que ordena suspender el cobro de deudas en contra de dicha moral, así como de sus obligados solidarios, avales y garantes, y, además, obra copia certificada de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos que se dictó en ese procedimiento, de fecha XX de XXX de XXXX, en donde se declaró y constituyó como reconocido el crédito de la hoy actora XXX, S.A. XXX, XXXX FINANCIERO XXX, para ser pagado en el grado y prelación que le corresponda, conforme a lo previsto en los artículos 217, 222 y 223 de la Ley de Concursos Mercantiles, se ordena suspender la ejecución de esta sentencia hasta en tanto se resuelva dicho procedimiento, conforme a lo ordenado en la sentencia de fecha XX de XXX de XXXX, dictada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en la sentencia de XX de XXX de XXXX, dictada por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, por lo que notifíquese al Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el estado que guardan los presentes autos.

TERCERO. También se condena a XXX, S.A. DE C.V., en su carácter de obligada principal y a la señora PATRICIA, en su carácter de garante hipotecaria, a pagar a XXX, S.A. XXX, XXX, la cantidad de XX,XXX.XX (XXXX PESOS XX/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios, generados del XX de XXX de XXXX, al XX de XXX de XXXX, más lo que se sigan generando hasta que haga pago de la suerte principal, conforme a la tasa anual pactada en la cláusula octava del contrato base de la acción, los que se cuantificarán en ejecución de sentencia, en términos del artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles local; cabe precisar que la ejecución de los intereses moratorios precisados, se suspende por los razonamientos vertidos con anterioridad.

CUARTO. Finalmente, se condena a las demandadas a pagar los gastos y costas del presente juicio, conforme a lo previsto en el artículo 140, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles local.

QUINTO. Notifíquese, debiendo el Secretario de Acuerdos certificar una copia de la presente resolución, para ser agregada al legajo de sentencias que se lleva en este juzgado.

2. Inconforme la parte demandada con la sentencia antes mencionada, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo y tramitado que fue se citó a las partes para oír sentencia definitiva en base a los siguientes

### CONSIDERANDOS:

I. La parte inconforme expresó como agravios los que constan en su escrito presentado el XX de XXX del año XXXX, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

II. El primer concepto de agravio, subíndices primero, segundo y tercero, que hace valer el apelante, resultan infundados, ya que si bien resulta que en el concurso mercantil XXX/2014, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de esta Ciudad, donde se substancia el concurso mercantil de la apelante, se reconoció el crédito a favor de la parte actora, no menos cierto es, que tal condicionante no impide en forma alguna el seguimiento ante el *a quo* de la controversia natural, ya que de conformidad con lo que establece el artículo 84 de la Ley de Concursos Mercantiles, después de dictada la sentencia del concurso mercantil, podrán iniciarse por separado otros procedimientos de contenido patrimonial, sin que esos juicios deban acumularse al concurso mercantil y, por tanto, aún en el caso de que se actualizó el reconocimiento del crédito que refiere el apelante, ello no es obstáculo para el seguimiento y consecución de la controversia, ya que ésta, atento a la fecha de presentación del escrito inicial de demanda, que data del XX de XXX del año XXXX, resulta posterior a la declaratoria del concurso mercantil

que se resolvió interlocutoriamente el XX de XXX del año XXXX en el expediente XXX/XXXX-P.C.

Por otro lado, de las constancias del juicio natural no se advierte que se haya exhibió (*sic*) constancia que acredite el cumplimiento en el pago del crédito que se reconoció a la actora en el juicio concursal, por tanto, resultaba procedente, que atendiendo a los documentos base de la acción, se incoara y resolviera el juicio especial hipotecario materia de la presente controversia, atendiendo al importe consignado en el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente y garantía hipotecaria de fecha XX de XXX del año XXXX, lo que desde luego no implica un doble cobro, pues atendiendo al punto segundo resolutivo de la sentencia definitiva, ahora impugnada, se ordenó que la suerte principal a que fue condenada la apelante, se pagaría en el grado y prelación que le corresponda, atendiendo al procedimiento concursal seguido ante el Juez Décimo Segundo en Materia Civil en el Distrito Federal, y, por tanto, no se actualiza de *facto* un doble cobro.

III. El segundo concepto de agravio que hace valer el inconforme es infundado, y por tanto, no se viola en su perjuicio el artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, en razón de que en el caso en estudio, no se requería la opinión del conciliador designado para iniciar el procedimiento hipotecario, tomando en consideración que la declaratoria de concurso mercantil fue emitida el XX de XXX del año XXXX y la demanda del juicio hipotecario fue presentada el XX de XXX de tal anualidad y, por ello, de conformidad con lo que prevé el artículo 84 de la Ley de Concursos Mercantiles fue procedente iniciar, por separado, cualquier otro procedimiento de contenido patrimonial, como el que resulta materia de la presente controversia, sin que, por tanto, fuera procedente acumular al juicio de concurso mercantil, el seguido ante el *a quo*.

IV. El tercer agravio que hace valer el apelante resulta infundado, ya que tal y como se estableció en el punto segundo resolutivo de la sen-

tencia apelada, atendiendo a la existencia del procedimiento concursal seguido ante el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, se ordenó que la suerte principal a que fue condenada la apelante, fuera pagada en grado y prelación atento a lo previsto en los artículos 217, 222 y 223 de la Ley de Concursos Mercantiles, por consiguiente, contrario a lo que sustenta el apelante, de que se violan en su perjuicio tales normativos, por el contrario, esta Alzada advierte que se les da cumplimiento atento a lo resuelto en la sentencia definitiva apelada, lo que evidencia que en el juicio principal no se realizará pago alguno.

V. El cuarto agravio que hace valer la apelante resulta fundado y suficiente para modificar en lo conducente la sentencia definitiva apelada, ya que tal y como se advierte del punto primero resolutive de la sentencia apelada, el juzgador resolvió que el apelante justificó parcialmente sus excepciones y defensas y, por tanto, si de conformidad con lo que prevé la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, la condena en el juicio sólo fue parcial y no total, como lo prevé el normativo en mención, no resultaba procedente que se condenara al apelante al pago de las costas causadas en primera instancia.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro:

COSTAS EN EL JUICIO CIVIL HIPOTECARIO. NO SE ACTUALIZA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 140 DE LAS LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE COAHUILA, CUANDO EL DEMANDADO HUBIERA SIDO CONDENADO PARCIALMENTE POR LAS PRESTACIONES RECLAMADAS. Del artículo 140, fracción III, de los Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y para el Estado de Coahuila de Zaragoza, este último en su texto abrogado, se advierte que las hipótesis previstas para la condena en costas se sitúan bajo la teoría del vencimiento puro, ya que el legislador estableció dos parámetros netamente objetivos para su procedencia en primera instancia, esto es, que: *a)* el demandado resulte condenado; y, *b)* el actor no obtenga sentencia favorable; de

tal forma que a partir de esos supuestos, se obtiene que a la parte vencida en el litigio es a la que le corresponde la carga adicional del pago de costas a favor de la vencedora. Bajo ese contexto, se estima que la expresión “el que fuere condenado”, que actualiza una de las hipótesis previstas en la citada fracción, se refiere a que el demandado es condenado por el total de las prestaciones reclamadas y no cuando es absuelto por algunas y condenado por otras; de ahí que tratándose de juicios civiles hipotecarios resulte improcedente la condena al pago de costas en primera instancia cuando exista una condena parcial pues, de ser así, necesariamente tendría que actualizarse la otra hipótesis para condenar al actor, al no haber obtenido sentencia favorable, ello sin perjuicio de que pudiera actualizarse alguna otra hipótesis contenida en los preceptos de referencia.

Contradicción de tesis 226/2012. Suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, actualmente Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 26 de septiembre de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuando al fondo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Oscar Vázquez Moreno.

Tesis de jurisprudencia 122/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce.

Época: Décima Época. Registro: 2002733. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 122/2012 (10a.). Página: 396.

VI. El quinto agravio que hace valer el apelante resulta infundado, pues si bien resulta que, como ya se analizó previamente, el XX de XXX del año XXXX se decretó la suspensión de pago de todas las obligaciones vencidas por parte de la apelante, ello no implica que los intereses moratorios se generaran hasta tal fecha, ya que como advierte esta Alzada, la resolución en comento únicamente resolvió la suspensión de

pagos por parte de la apelante en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que evidentemente no implica la suspensión en la generación de los intereses atento a las obligaciones crediticias asumidas y las que se siguieran generando, ya que de conformidad con lo que prevé el artículo 1o. de la Ley de Concursos Mercantiles, ante tal procedimiento, la apelante sólo obtiene la prerrogativa en cuanto a que legalmente pueda suspender sus pagos para evitar el incumplimiento generalizado de sus obligaciones y que pusieran en riesgo la viabilidad de la concursada; pero ello, sólo con el fin de garantizar una adecuada protección a los acreedores frente al propio detrimento del patrimonio de la hoy inconforme, lo que desde luego, no interrumpe la posibilidad de reclamar y que se vea condenada la apelante al pago de las cantidades que en derecho proceda, así como el de sus accesorios consensuales y legales; consecuentemente, fue procedente que el juzgador condenara al apelante al pago de los intereses moratorios, atento al contrato de apertura de crédito en cuenta corriente y garantía hipotecaria, en que se sustentó la controversia natural, sin que para ello fuera menester atender a lo que prevé el artículo 166 de la Ley de Concurso Mercantil, en el sentido de que es el convenio concursal el único documento que rige las obligaciones a cargo del comerciante, ya que como lo advierte esta Alzada, el juicio natural se sustenta y se rige atendiendo al contrato en mención, atento a lo previsto por el artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles.

VII. El sexto agravio hecho valer por el apelante resulta infundado, ya que en tratándose de la impugnación de la calidad del Contador Público facultado por parte de la institución de crédito, así como su designación por parte de la apelada, corresponde al apelante la carga de la prueba, ya que el estado de cuenta expedido por el contador facultado por la institución de crédito, en términos de lo previsto por el artículo 68 del (*sic*) la Ley de Instituciones de Crédito, le otorga una presunción



legal de su certeza, que de conformidad con lo que prevé el artículo 383 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, opera la inversión de la carga de la prueba a quien pretende el desconocimiento del certificado y, por ende, no se vio demeritado por la aseveración vertida por el inconforme.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia bajo el rubro:

CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA PROBAR QUE LA PERSONA QUE LA EXPIDE NO ES CONTADOR CUANDO, VÍA EXCEPCIÓN, CUESTIONA TAL CALIDAD. En materia procesal mercantil se han adoptado diversas reglas en relación con la distribución de la carga de la prueba, entre ellas, la relativa a que el que niega no está obligado a probar; sin embargo, en el Código de Comercio se prevén dos excepciones a ésta, pues de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 1195 y 1196, el que niega estará obligado a probar cuando: a) su negación envuelva una afirmación expresa de un hecho y b) desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante. En congruencia con lo anterior, y tomando en consideración que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito otorga a favor del estado de cuenta certificado por un contador autorizado por la institución de crédito, una presunción legal, en tanto lo eleva a categoría de título ejecutivo junto con otros documentos (título que por su naturaleza es considerado prueba preconstituida), y lo reviste o lo tasa con un máximo valor probatorio al establecer que hará fe de su contenido, salvo prueba en contrario, además de que el valor pleno que le atribuye abarca la totalidad del documento (desde la calidad de quien lo suscribe, hasta los datos en él consignados), puede concluirse que es a la persona que objeta, en vía de excepción, la calidad del contador que certificó el estado de cuenta, a quien corresponde la carga probatoria, en términos del artículo 1196 citado, porque su argumento negativo está dirigido a desconocer la presunción legal de que goza dicho documento por disposición expresa del citado artículo 68. Época: Novena Época, Registro: 188282. Instancia: PRIMERA SALA. Tipo Tesis: Jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial*

*de la Federación y su Gaceta*. Localización: Tomo XIV, Diciembre de 2001. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 100/2001. Pág. PRIMERA SALA. CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2000-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 22 de agosto de 2001. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza.

Tesis de jurisprudencia 100/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de noviembre de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

VIII. El séptimo agravio que hace valer el apelante es infundado, en razón de que de conformidad con lo que dispone la fracción III, del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, siempre será condenado en costas el que intente un juicio hipotecario sin que tenga sentencia favorable, lo que implica, necesariamente, que el accionante no obtenga en forma absoluta ninguna de sus pretensiones, lo que en el caso en estudio no acontece, en razón de que tal y como se advierte de la sentencia definitiva apelada, la parte actora obtuvo el pago de la suerte principal que reclamó en su escrito inicial de demanda y el pago de los intereses moratorios generados, de lo que se colige que obtuvo, aunque mayoritariamente sentencia favorable, por lo que no es procedente que a pesar de que las excepciones y defensas opuestas por el apelante se justificaron parcialmente, se condene el costas al accionante.

Visto lo anterior, y ante lo parcialmente fundado del motivo de inconformidad planteado por el apelante, relativo a la causación de costas en primera instancia, el resolutivo cuarto de la sentencia apelada debe quedar como sigue:

CUARTO. Por no encontrarse el presente juicio dentro de los supuestos que establece el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas en esta primera instancia.

Por no encontrarse el presente asunto dentro de los supuestos que establece el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas en esta segunda instancia.

Por lo expuesto y fundado, se

### RESUELVE:

PRIMERO. Son parcialmente fundados los agravios hechos valer por el apelante.

SEGUNDO. Se modifica la sentencia definitiva apelada en su resolutive cuarto, debiendo quedar como lo establece el considerando séptimo de esta resolución.

TERCERO. No se hace especial condena en costas en esta segunda instancia.

CUARTO. Notifíquese, con testimonio de la presente resolución, hágase del conocimiento del *a quo*.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sexta Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciados Francisco José Huber Olea Contró, Edmundo Vásquez Martínez, por Ministerio de Ley y Delia Rosey Puebla, siendo ponente la última de los nombrados, ante el C. Secretario de Acuerdos, licenciado Juan Ulloa Cruz, quien autoriza y da fe.



# MATERIA MERCANTIL



## JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL

*JUEZ:*

LIC. DAVID LÓPEZ RECHY

### **Sentencia definitiva dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil.**

**SUMARIO:** INTERÉS ORDINARIO Y MORATORIO. NATURALEZA JURÍDICA. El interés es el rédito que produce o debe producir el dinero prestado; es decir, el precio pagado por el uso del propio dinero, de manera que su naturaleza jurídica consiste en la obtención de una cantidad como ganancia, por el simple hecho de que una persona dio a otra una cantidad de dinero que ésta necesitaba para satisfacer sus propias necesidades, por ello se afirma que al momento de regresar el dinero prestado, es cuando cesa la obligación del deudor de cubrir los intereses respectivos. En cambio, los intereses moratorios consisten en una indemnización cuya finalidad es desincentivar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones.

Ciudad de México, XX de XXX del año XXXX.

Vistos, para resolver en sentencia definitiva, los autos del juicio ejecutivo mercantil, promovido por \*\*\*, en contra de \*\*\*\*, expediente número 000/0000, y;

## RESULTANDOS:

1. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), el XX de XXX de XXXX y recibido en este juzgado el XX del mismo mes y año, compareció la actora \*\*\* ahora su cesionario \*\*\*, por conducto de sus apoderados que se mencionan en el proemio de su escrito inicial, demandando en la vía ejecutiva mercantil, de los codemandados \*\*\*, el pago de las siguientes prestaciones:

a) \$000,000.00 (XXXX pesos 00/100 M. N.) (pesos actuales) por concepto de suerte principal.

b) \$00,000.00 (XXXX pesos 00/100 M. N.), (pesos actuales) por concepto de intereses ordinarios pactados, causados, vencidos y no pagados, calculados al día X de XXX de XXXX, más los que se sigan causando hasta el total y completo pago del adeudo, conforme a las tasas, bases y fórmula para su cálculo convenidas y referidas en la cláusula quinta a fojas 8 a 11 capítulo “intereses ordinarios” de la escritura pública no. 00000, documento exhibido como base de la acción y que solicitamos se tenga por reproducida íntegramente.

c) \$00,000.00 (XXXX pesos 00/100 M. N.) (pesos actuales) por concepto de intereses moratorios pactados, vencidos y no pagados, calculados al día X de XXX de XXXX, más los que se sigan causando hasta el total y completo pago del adeudo que se demanda, y conforme a las bases, tasas y fórmula para su cálculo, establecidas en la cláusula quinta a foja 11 “capítulo intereses moratorios” del contrato que se exhibe como base de la acción y que solicitamos se tenga por reproducida íntegramente.

Acompañando como anexo número dos, estado de cuenta certificado con cifras al XX de XXX de XXXX, en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, el que solicitamos se guarde en el seguro de este H. Juzgado, haciendo expresa reserva de adecuar sus cantidades en el momento procesal correspondiente.



Las cantidades demandadas expresadas en Moneda Nacional se encuentran adecuadas al símbolo “\$” y a la palabra “pesos” conforme a las disposiciones del Banco de México, publicadas en el *Diario Oficial* del 15 de noviembre de 1995.

d) Los gastos y costas que se causen en el presente juicio, hasta la total solución y pago del adeudo.

Fundándose para hacerlo en las consideraciones de hecho y preceptos de derecho contenidos en el escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como sí a la letra se insertaren y ofreciendo de su parte las pruebas consistentes en: la confesional a cargo de los demandados, documentales públicas y privadas, instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, que estimó convenientes a sus intereses.

2. Por auto de XX de XXX de XXXX, se admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuesta; ordenándose requerir, embargar y emplazar a los demandados. Habiéndose practicado el emplazamiento a los codemandados \*\*\* el dos de julio de dos mil diez y se tuvo por sabedor de la demanda a \*\*\*\* como se advierte del auto de XX de XXX de XXXX, en vista de que dio contestación a la demandada con fecha XX de XXX de XXXX.

3. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el XX de XXX de XXXX, se tuvo al codemandado \*\*\*, por su propio derecho, dando contestación a la demanda incoada en su contra y con las excepciones y defensas opuestas en proveído de XX de XXX de XXXX, se dio vista a la parte actora para que en el término de tres días manifestará lo que su derecho convenga. Vista que se tuvo por desahogada en términos del ocurso presentado ante oficialía de partes de este Tribunal el XX de XXX de XXXX y recibido en este juzgado el XX del citado mes y año.

4. En proveído de XX de XXX de XXXX, se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrieron los codemandados \*\*\*, al abstenerse de producir su contestación, por lo que se declaró precluido su derecho.

5. Por auto de XX de XXX de XXXX, se suspendió el procedimiento hasta en tanto no se acreditará en autos la existencia de un representante legal de la sucesión de \*\*\*, toda vez que mediante escrito presentado antes este juzgado el XX de XXX de XXXX, el codemandado \*\*\*, exhibió copia certificada del acta de defunción del codemandado \*\*\*.

6. Mediante escrito presentado ante este juzgado el XX de XXX de XXXX, el C. \*\*\*, en su carácter de albacea del juicio intestamentario a bienes del finado \*\*\*, compareció a apersonarse al presente juicio.

7. Seguido el juicio en todas y cada una de sus etapas procesales, se ordenó pasar los autos a la vista del suscrito juzgador para dictar sentencia definitiva, la que se dicta al tenor de los siguientes

### CONSIDERANDOS:

I. Este H. Juzgado es competente para conocer y decidir sobre el presente juicio, atento a lo establecido por los artículos 1092, 1093 y 1094 del Código de Comercio en relación con los preceptos legales números 1, 2, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

II. Por lo que se refiere a la vía en la que se tramita este negocio con fundamento en lo que dispone el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, la vía elegida por la parte actora es procedente en virtud de que el “contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y fianza” celebrado entre las partes el XX de XXX de XXXX, junto con el estado de cuenta certificado con números al XX de XXX de XXXX, expedido por el contador público \*\*\*, facultado por la institución bancaria actora, traen aparejada ejecución, resultando improcedentes sus argumentos de improcedencia de la vía opuestos por el codemandado \*\*\*, tal y como se resolvió en proveído de XX de XXX de XXXX (foja 431 de autos).

Sirve de apoyo al anterior razonamiento la jurisprudencia siguiente:

ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR AUTORIZADO DE INSTITUCIÓN BANCARIA. ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. El estado de cuenta certificado por el contador de una institución bancaria es título ejecutivo junto con el contrato respectivo o póliza en el que conste el crédito otorgado, si en él se precisa claramente la identificación del crédito celebrado entre las partes, la cantidad a la que ascendió, fecha hasta la que se calculó el adeudo, capital vencido a la fecha del corte, los pagarés mediante los que se hicieron las disposiciones del crédito por parte de los acreditados, monto de las mismas, fechas de vencimiento, tasas de interés normales, pagos no efectuados al capital y pagos hechos sobre los intereses, especificándose las tasas aplicadas a cada uno de ellos, y si asimismo contiene el cálculo de los intereses moratorios correspondientes a cada uno de los pagarés derivados del contrato de crédito y la tasa aplicada por ese concepto, de tal suerte que el estado de cuenta así elaborado satisface los requisitos formales que para el efecto exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que dicho documento junto con el contrato o la póliza en que conste el crédito, trae aparejada ejecución y hace procedente la vía ejecutiva mercantil que se ejercite para obtener el pago correspondiente, sin que se oponga a lo anterior el que en dicho estado de cuenta no se haya especificado el método para calcular la tasa de interés aplicada, pues a fin de desvirtuar la fe de dicho documento y destruir la presunción legal de los datos y saldos anotados en él, debe ofrecerse por los demandados, en su caso, la prueba pericial contable a fin de acreditar la inexactitud de los saldos a su cargo por errores matemáticos o de alguna otra circunstancia que evidencie lo inverosímil de él.

No. Registro: 190,933. Jurisprudencia, materia(s): Civil. Novena Época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tomo: XII, octubre de 2000. Tesis: XV.1o. J/7, página: 1166.

III. Toda sentencia definitiva debe dictarse con estricto apego a la ley y a la jurisprudencia, siguiendo los principios generales del derecho como son la justicia y la equidad, en busca de la verdad de los hechos controvertidos por las partes, lo anterior con fundamento en

los artículos 14, 15, 16 y 104 constitucionales, 1407 y 1409 del Código de Comercio.

Por lo anterior, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 constitucional, el cual refiere que, para la plena satisfacción del derecho de audiencia previa al acto privativo de la vida, de la libertad y de las propiedades, posesiones o derechos, la existencia de un “juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Al respecto, nuestro máximo órgano jurisdiccional, ha determinado que las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: *a)* notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; *b)* oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; *c)* oportunidad de alegar; y *d)* dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos

requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Novena Época. Registro: 200234. Instancia: Pleno. Jurisprudencia, fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II*, diciembre de 1995, materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P./J. 47/95, página: 133.

Derivado de lo anterior, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su parte conducente, dispone que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones. Y a su vez el artículo 8, apartado 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones. Y, asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, señala que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, por lo que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones.

Sin perder de vista que el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, expresamente, lo siguiente:

(...) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios universalidad, interdependencia, el estado deberá prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Precepto legal antes mencionado, que dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, sin que preveer distinción alguna, respecto a las personas morales, quienes gozarán también de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines.

Sirve apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia:

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.

Jurisprudencia P./J. 1/2015 (10a.) Décima Época. Instancia: Pleno, fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, libro 16, marzo de 2015, tomo I, materia(s): constitucional, página: 117.

Empero, el derecho de los gobernados de tener acceso a la justicia, no debe confundirse con formular una demanda (en la que solicita el cumplimiento de obligaciones a las cuales sabe no tiene derecho por haber sido satisfechas con anterioridad), o realizar actos (ofrecer elementos de prueba falaces) o en su caso omitir hechos con el objeto de inducir al error a la autoridad judicial y conseguir que se pronuncie en determinada forma, de lo que puede derivarse un beneficio indebido para sí, por lo que tal situación, no puede considerarse como el ejercicio pleno del derecho de acceso a la justicia; por el contrario, no podrá estimarse que el error judicial constituya “cosa juzgada” o que el derecho de los justiciables para combatirlo precluya porque ello se traduciría en que la decisión arbitraria sería incontrovertible por el simple transcurso del tiempo, cuando lo cierto es que la misma nunca debió existir.

ERROR JUDICIAL. ELEMENTOS DE SU CONFIGURACIÓN Y SU CORRECCIÓN POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. El “error” como vocablo es entendido como una equivocación. En el ámbito judicial presenta ciertas notas distintivas: i) surge de una decisión jurisdiccional, no exclusivamente de las sentencias; ii) los sujetos activos son Jueces y Magistrados o las personas que ejerzan sus funciones; y, iii) los errores han de ser crasos, patentes y manifiestos. Aunque los elementos pueden variar, lo cierto es que el último extremo señalado resulta de interés. Esto, porque a juicio de este tribunal, los errores deben ser patentes, al grado de que puedan asociarse con la idea de arbitrariedad, al hacer que la decisión judicial sea insostenible por ir en contra de los presupuestos o hechos del caso. En otras palabras, el error judicial adquiere relevancia constitucional cuando es producto de un razonamiento equivocado que no corresponde con la realidad, por haber incurrido el órgano judicial en un error manifiesto en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión, de tal manera que el error sea inmediatamente verificable, en forma incontrovertible, a partir de las actuaciones judiciales y sea determinante en la decisión adoptada por el Juez por constituir su

soporte único o básico. Aunado a lo anterior, el error judicial adquiere relevancia constitucional cuando atenta contra los principios esenciales del Estado de derecho, como la cosa juzgada —como cuando se obliga al demandado a dar cumplimiento a una sentencia, cuando lo cierto es que el Juez, en las consideraciones del fallo, lo absolvió en forma absoluta—. Ahora, los órganos de control constitucional, al conocer de los juicios de amparo sometidos a su potestad, se encuentran facultados para corregir el error judicial cuando éste presente las características apuntadas en líneas anteriores. Lo anterior, porque toda resolución fundada en el “error judicial” puede calificarse como arbitraria y, por esa sola razón, violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva. Bajo esa óptica, no podría estimarse que el error judicial constituya “cosa juzgada” o que el derecho de los justiciables para combatirlo precluya porque ello se traduciría en que la decisión arbitraria sería incontrovertible por el simple transcurso del tiempo, cuando lo cierto es que la misma nunca debió existir. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Décima Época. Registro: 2003039. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: Aislada, fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 3, materia(s): Constitucional, tesis: I.3o.C.24 K (10a.), página: 2001.

Con base a las diversas disposiciones antes mencionadas de índole nacional e internacional, se concluye que el error judicial adquiere relevancia constitucional cuando un razonamiento equivocado que no corresponde con la realidad es determinable para que un órgano judicial tome una decisión favorable a una de las partes, inducido por el error.

En tal orden de ideas, al analizar las presentes actuaciones, se advierte que mediante escrito de XX de XXX de XXXX, el codemandado \*\*\*, promovió incidente no especificado, mediante el cual hacía del conocimiento de este juzgado que el XX de XXX de XXXX, los ahora demandados \*\*\* promovieron juicio ordinario civil en contra de \*\*\*, en



la cual se dictó la sentencia definitiva en la que operó la prescripción negativa, respecto de cada una de las obligaciones contenidas en el contrato basal, así como la extinción y cancelación de la hipoteca, quedando cancelada la hipoteca deducida de \*\*\*; empero, dicho incidente no fue admitido, como se advierte del auto de veintitrés de octubre de dos mil once; asimismo éste no fue recurrido por las partes.

También mediante ocurso presentado por el apoderado del codemandado \*\*\*, el XX de XXX de XXXX, hizo del conocimiento del juzgado, que la hipoteca relacionada con el presente asunto había prescrito, por lo que la institución actora carecía de derecho para el cobro de la misma, y a fin de que no se dictara una sentencia contradictoria, exhibió copia certificada de la sentencia definitiva de \*\*\*, del juicio seguido ante el Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de esta ciudad, promovido por \*\*\*, en contra de \*\*\*, expediente \*\*\*, constancias con la cuales se dio vista a la parte actora para que manifestará lo que a su derecho corresponda, vista que fue desahogada en términos del escrito presentado el \*\*\*; sin que se admitiera las copias certificadas ya que no fueron ofrecidas como pruebas supervenientes, y que de acuerdo a la fecha de emisión ya tenía conocimiento, proveído que tampoco fue recurrido por las partes.

Empero, es importante precisar que de constancias de autos, las cuales hacen prueba plena en términos del artículo 1294 del Código de Comercio, se advierte que \*\*\* la institución bancaria \*\*\*, en su calidad de cedente y, por la otra parte \*\*\*, y en su calidad de cesionario celebró contrato de compraventa mercantil de cartera a través de la cesión de créditos, cuya protocolización consta en la escritura pública número \*\*\* de fecha \*\*\*, otorgada ante la fe del licenciado \*\*\*, Notario Público número \*\*\* de esta ciudad.

Asimismo, el XX de XXX de XXXX, ratificó ante el Notario Público número \*\*\* de esta Ciudad, el contrato de compraventa mercantil de cartera celebrado entre \*\*\*, como cedente y, por la otra parte \*\*\*, a través

de la cesión de créditos, se encuentra el crédito materia de este juicio; siendo que en auto de \*\*\*, se tuvieron por exhibidos los documentos antes mencionados y se tuvo como parte actora a \*\*\*, ordenándose notificar personalmente a los demandados la cesión en comento, notificación que se tuvo por cumplimentada.

Por lo que se advierte que desde el \*\*\*, \*\*\*, ya había cedido el crédito materia de este juicio a \*\*\*, siendo hasta el \*\*\*, este último, cedió el crédito materia de este juicio a la hoy actora \*\*\*.

Así las cosas, al promover los demandados el XX de XXX de XXXX, juicio ante el Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de esta ciudad, en contra de \*\*\*, expediente \*\*\*, dicha institución bancaria carecía de legitimación pasiva en la causa, dado que las prestaciones reclamadas ya no eran imputables a ella, tal y como se asentó en líneas precedentes desde el XX de XXX de XXXX, cedió el crédito a favor de \*\*\*, y posteriormente éste, en el año XXXX, cede los derechos a favor de la hoy actora; aunado al hecho de que el codemandado \*\*\* ya había intervenido en el presente juicio desde el \*\*\*, por lo que tenía conocimiento del presente juicio.

Por su parte, la demandada \*\*\*, si bien fue emplazada el \*\*\*, fecha posterior en que se dictó la sentencia definitiva del juicio ordinario civil, expediente \*\*\*, tramitado ante el Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de esta ciudad, también lo es que el coactor en aquel juicio \*\*\* ya conocía la existencia del presente procedimiento, puesto que contestó la demanda mediante escrito recibido en este juicio el \*\*\*.

Asimismo, el C. \*\*\*, fue emplazado a este juicio el \*\*\*, fecha posterior en que se dictó la sentencia definitiva del juicio ordinario civil, expediente \*\*\*, tramitado ante el Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de esta ciudad, quien mediante ocurso presentado ante oficialía de partes de este juzgado el \*\*\*, hizo del conocimiento a este juzgado de la sentencia definida de \*\*\*, dictada por el C. Juez Sexagésimo Primero de esta ciudad.

Por lo anterior, se advierte que al demandar en el juicio en comento a \*\*\*, dicha institución carecía de legitimación pasiva, además de que los accionantes \*\*\* fueron omisos en señalar que se seguía juicio ante este juzgado, el que inició el \*\*\*; por ende, el codemandado \*\*\*, ya tenía conocimiento del juicio al haber comparecido a contestar la demandada; por lo que si en su momento se hubiera hecho del conocimiento esta situación al Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de este Tribunal, se hubiese dictado en otro sentido la resolución en comento (sentencia definitiva de \*\*\*), aunado al hecho de que dicha determinación no le puede parar perjuicio a la cesionaria de los derechos (hoy actora) porque no fue llamado a juicio.

En tal virtud, no obstante que exista cosa juzgada en aquel juicio, el suscrito no puede darle a dicha resolución el alcance que pretende darle los hoy demandados \*\*\*, por lo que se reitera que si bien, se hizo la declaración de prescripción negativa sobre las obligaciones contraídas en el contrato basal, también lo es que en dicho procedimiento (exp. \*\*\* Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de esta ciudad), no intervinieron las cesionarias \*\*\*, siendo esta última la actual titular del crédito, para que en su caso le deparara perjuicio la tramitación de dicho asunto.

Asimismo, tal y como se asentó en líneas precedentes, el llamamiento de una persona a juicio es una de las formalidades esenciales del procedimiento, y la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado

oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. Por lo que se le priva de su garantía de audiencia, consagrada en el artículo 14 constitucional.

En consecuencia, la falta o el defectuoso emplazamiento del demandado en un juicio constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que a aquél se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un serio estado de indefensión.

IV. Asentado lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1194 del Código de Comercio, a la parte actora le corresponde probar los hechos constitutivos de su acción y a la demandada sus excepciones, en su caso.

En tal virtud se entra al estudio de las constancias que obran en autos, atendiendo a los elementos de convicción, a la lógica y a la experiencia, así como a lo dispuesto por el Libro Quinto, Título Primero, Capítulo XX del Código de Comercio y a lo dispuesto por el artículo 1194 del citado código se desprende lo siguiente:

La parte actora narra toralmente en su demanda que con fecha <sup>\*\*\*</sup>, celebró “contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y fianza en su calidad de “acreditante” con <sup>\*\*\*</sup> como “acreditados y obligados solidarios”, y por la otra parte como “garante hipotecario” <sup>\*\*\*</sup>, con consentimiento de su esposa <sup>\*\*\*</sup>, en garantía de las obligaciones de los acreditados constituyó hipoteca especial y expresa a favor de “\*\*\*\*”, y se constituyó también como fiador liso y llano pagador a favor de “\*\*\*\*” y se obligó como aval en los pagarés por los cuales se dispondría del crédito, otorgándoles un crédito a los acreditados y deudores solidarios, por la cantidad de N\$000,000.00 (XXX nuevos pesos 00/100 M. N.), quienes dispusieron de la totalidad del crédito el <sup>\*\*\*</sup>, y suscribieron treinta y dos pagarés con vencimientos mensuales y sucesivos a partir

del \*\*\* por la cantidad de N\$0,000.00 (X,XXX nuevos pesos 00/100 M. N.) cada uno de ellos, permaneciendo insolutos veintiún pagarés.

Asimismo, refiere que conforme a lo pactado en la cláusula quinta del contrato basal, que los demandados se obligaron pagar intereses ordinarios e intereses moratorios, obligándose a liquidar a la hoy actora el crédito otorgado, efectuando pagos mensuales, iguales y sucesivos de N\$0,000 (X,XXX (sic) X nuevos pesos 00/100 M. N.) cada uno conforme a la fecha de vencimiento de los pagarés.

Siendo que el presente caso los demandados dejaron de cumplir sus obligaciones de pago desde el mes de \*\*\*, y a efecto de acreditar sus pretensiones, la parte actora ofreció como pruebas las siguientes:

La documental pública, consistentes en el primer testimonio de la escritura número \*\*\* y \*\*\*, otorgado por el titular de la Notaria número \*\*\* de esta ciudad, en el cual se hizo constar el “contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y fianza” celebrado por una parte \*\*\* ahora su cesionario \*\*\*, como “acreditante” y por la otra parte \*\*\*, como “acreditados y obligados solidarios”, y por la otra parte como “garante hipotecario” \*\*\*, con consentimiento de su esposa \*\*\*, en garantía de las obligaciones de los acreditados constituyó hipoteca especial y expresa a favor de “\*\*\*\*”, y se constituyó también como fiador liso y llano pagador a favor de “\*\*\*\*” y se obligó como aval en los pagares por los cuales se dispondría del crédito, junto con el estado de cuenta certificado con números al \*\*\*, expedido por el contador público \*\*\*, facultado por entonces institución bancaria actora, y que conjuntamente al satisfacer los requisitos formales que para el efecto exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, trae aparejada ejecución y hace procedente la vía ejecutiva mercantil que se ejercite para obtener el pago correspondiente.

Las partes pactaron en el contrato de apertura de crédito simple, las siguientes cláusulas, siendo las más importantes para el dictado de la presente resolución las siguientes:

**“IMPORTE DEL CRÉDITO”**

PRIMERA. “\*\*\*\*” abre a “los clientes” un crédito bajo la forma de apertura de crédito simple hasta por la cantidad de XXX,XXX nuevos pesos, moneda nacional.”

**“DESTINO DEL CRÉDITO”**

SEGUNDA. “los clientes” se obligan a invertir las cantidades de que vayan disponiendo en virtud del crédito motivo de este contrato precisamente para capital de trabajo.

**“COMPROBANTES DE LAS DISPOSICIONES DEL CRÉDITO.”**

CUARTA. En reconocimiento de las cantidades de que dispongan, “los clientes” suscribirán a la orden de “\*\*\*\*” treinta y dos pagarés con vencimientos mensuales y sucesivos a partir del quinto mes de firmado este contrato, por la cantidad de X,XXX pesos, moneda nacional, cada uno.

Dichos pagarés no podrán tener vencimientos posteriores a la fecha de vencimiento de este contrato.

**“OBLIGACIONES DE PAGO”**

QUINTA. “los clientes se obligan a pagar a “\*\*\*\*” ...

**“INTERESES ORDINARIOS.**

Las disposiciones que hagan “los clientes” causarán intereses ordinarios sobre saldos insolutos, a razón de la tasa anual más alta que resulte de comparar, entre sí, las siguientes tasas:

1. La tasa anual de interés que se obtengan de sumar a la tasa líder 10 (diez) puntos (margen o diferencial),
2. La tasa anual de interés que se obtengan de multiplicar la tasa líder por 1.47 (uno punto cuarenta y siete) puntos (factor)...

**“INTERESES MORATORIO”**

“los clientes” se obligan a pagar intereses moratorios sobre el saldo del capital e intereses vencidos y no pagados del crédito desde el día inmediato siguiente a su vencimiento, hasta el día en que dicha cantidad quede total y completamente pagada, a razón de la tasa de interés anual que resulte de multiplicar, la tasa de

interés ordinaria aplicable y vigente en la hecha de pago total o parcial por uno punto cincuenta.”

“EL PLAZO DEL CRÉDITO”

“SEXTA. El término de este contrato es el día XX de XXX de XXXX.”

La citada documental se encuentra debidamente adminiculada con las confesionales a cargo de los demandados <sup>\*\*\*</sup>, que se desahogaron en la audiencia celebrada el XX de XXX de XXXX, a la que no comparecieron los absolventes, no obstante de encontrarse debidamente citados, por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento decretados en autos; y en consecuencia, se les declaró confesos de las posiciones que previamente fueron calificadas de legales; en la inteligencia que el desahogo de dicha probanza, favorece a los intereses de la parte actora, pues al no estar en contravención con otros medios de convicción surte plenamente sus efectos y con ella se robustece la relación contractual que vincula a las partes del presente juicio.

Asimismo, al dar contestación al hecho uno, el codemandado <sup>\*\*\*</sup>, reconoce la celebración del contrato basal y que firmó como aval el mismo.

Resulta aplicable al caso, la siguiente tesis aislada, que es del tenor siguiente:

CONFESIONAL FICTA EN MATERIA MERCANTIL. PUEDE TENER VALOR PROBATORIO PLENO. No es verdad que la confesional ficta en materia mercantil solamente pueda revestir un valor presuncional. En efecto, el Código de Comercio dispone en su artículo 1287, fracción III, que la confesión judicial hace prueba plena cuando concurre la circunstancia de que se haya hecho conforme a las prescripciones del capítulo trece de la misma ley. El artículo 1232, fracción I, incluido en el citado capítulo, estatuye que el que deba absolver posiciones será declarado confeso cuando sin justa causa no comparezca a la segunda citación; y el diverso 1289 previene que: Para que se

consideren plenamente probados los hechos sobre los que versen las posiciones que judicialmente han sido dadas por absueltas en sentido afirmativo, se requiere: I. Que el interesado sea capaz de obligarse; II. Que los hechos sean suyos y concernientes al pleito; y, III. Que la declaración sea legal. Tales dispositivos legales, según se advierte, ponen de manifiesto la posibilidad jurídica de que la confesional pueda revestir valor probatorio pleno, siempre y cuando reúna las exigencias a que los propios preceptos aluden. TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Registro No.252709, localización: Séptima Época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, fuente: *Semanario Judicial de la Federación* 103-108 Sexta Parte, página: 68. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.

Con dichos medios de prueba, se acredita la relación contractual existente entre las partes del presente juicio y la forma y términos en que éstas se obligaron, extremos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78 del Código de Comercio, obliga a los contratantes al exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente pactadas en el documento basal, así como a las consecuencias que de éste se deriven, y se advierte que la parte demandada dispuso del crédito otorgado, para lo cual se suscribieron 32 pagarés con vencimientos sucesivos, realizando diversos pagos parciales, tan es así que sólo se exhibieron veintiún pagarés, probanzas que no obstante que fueron objetadas por la sociedad demandada, también lo es que no se ofreció ningún medio de prueba para restarle valor probatorio como se estudiará en líneas siguientes.

Así las cosas, el codemandado \*\*\*, al dar contestación a la demanda refiere que la parte actora carece de acción, personalidad o derecho para reclamar todos y cada una de las prestaciones que indica en su demanda, ya que los documentos base de la acción son accesorios a un contrato, por lo que la accionante actúa de mala fe, excepción que resulta improcedente en atención a que el accionante fundó su demanda



de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Además, alude de que la parte actora carece de legitimación en virtud de que no acompañó a su escrito inicial de demanda documento con el que acreditara su personalidad tanto del secretario como del prosecretario de \*\*\*, con la cual acrediten su personalidad para otorgar poder con el que actúan los apoderados, así como los estados de cuenta detallados y relacionados con el crédito materia de este juicio, dejando en estado de indefensión a la demandada, argumentos hechos valer en sus excepciones denominadas falta de legitimación, falta de acción y derecho.

Excepciones que se estudian bajo los siguientes lineamientos:

De la copia certifica de la escritura \*\*\* (\*\*\*), otorgado ante la fe del Notario Público número \*\*\* de esta ciudad, licenciado \*\*\*, que se encuentra en autos, la entonces parte actora \*\*\*, representada por el señor licenciado \*\*\*, otorgó a favor de los señores licenciados \*\*\*, poder para pleitos y cobranzas, siendo que al final de dicho documento se advierte que el notario certificó:

II. Que el representante de “\*\*\*”, manifiesta que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto, y acredita la personalidad que ostenta la cual no le ha sido revocada, ni en forma alguna modificada, según declara de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, con la certificación que agregó al apéndice de esta escritura con la letra “A”, el ejemplar agregará a los testimonios que de la presente se expidan.

Asimismo, se exhibe en el juicio (de la foja 12 a la 36), los documentos con los cuales \*\*\*, acreditó su carácter de apoderada de la entonces institución bancaria, por ende, resultan infundadas las excepciones en estudio.

Por otra parte, opuso la excepción de nulidad absoluta de los documentos fundatorios de la acción al ser fruto de actos jurídicos de objetos

ilícitos; argumentos que resultan improcedentes ya que el accionante refiere que realizó pagos derivados con el crédito otorgado, además de que no precisó en qué consistieron los actos ilícitos.

Por otra parte, el codemandado refiere que ha realizado los pagos por la cantidad de \$000,000.00 (XXX pesos 00/100 moneda nacional), más los intereses moratorios por lo que adeuda a la actora únicamente la cantidad de \$00,000.00 (XXXX pesos 00/100 moneda nacional), lo cual resulta improcedente ya que si bien señala en su escrito de contestación de la demanda que el momento procesal oportuno exhibiera los pagos relacionados con el crédito, también lo es que no los exhibió, ni exhibe los estados de cuenta que supuestamente le enviaba la parte actora de vez en cuando, para proceder al análisis de los mismos, resulta improcedente su excepción de plus petitio.

Por lo anterior, el suscrito procede analizar el estado de cuenta exhibido por la parte actora, en el que consta que el crédito celebrado entre las partes, del periodo comprendido del \*\*\*, monto del crédito, fechas de vencimiento, tasas de intereses (ordinarios, moratorios), especificándose las tasas aplicadas a cada uno de ellos; de manera, que el estado de cuenta certificado, con números al XX de XXX de XXXX, expedido por el C. P \*\*\* autorizado por la accionante, resulta apto para determinar el monto reclamado como suerte principal en el presente juicio, toda vez que satisface los requisitos formales que para el efecto exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y junto con el contrato de apertura de crédito exhibido como base de la acción constituye un título de crédito, como se asentó en líneas precedentes.

Sin que el codemandado ofreciera medio de prueba para desvirtuar la fe de dicho documento y destruir la presunción legal de los datos y saldos anotados en el mismo, es necesario que la demandada demostrará, a través de la prueba pericial contable, la inexactitud de los saldos a su cargo, y en el presente caso no ofreció dicha probanza para desvir-

tuar el valor de dicho estado de cuenta, por lo que la parte demandada no ofreció ningún medio de prueba para desvirtuar que el cálculo de los intereses fuese incorrecto, como lo refiere la sociedad demandada.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia que a la letra dice:

ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR AUTORIZADO DE INSTITUCIÓN BANCARIA. ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. El estado de cuenta certificado por el contador de una institución bancaria es título ejecutivo junto con el contrato respectivo o póliza en el que conste el crédito otorgado, si en él se precisa claramente la identificación del crédito celebrado entre las partes, la cantidad a la que ascendió, fecha hasta la que se calculó el adeudo, capital vencido a la fecha del corte, los pagarés mediante los que se hicieron las disposiciones del crédito por parte de los acreditados, monto de las mismas, fechas de vencimiento, tasas de interés normales, pagos no efectuados al capital y pagos hechos sobre los intereses, especificándose las tasas aplicadas a cada uno de ellos, y si asimismo contiene el cálculo de los intereses moratorios correspondientes a cada uno de los pagarés derivados del contrato de crédito y la tasa aplicada por ese concepto, de tal suerte que el estado de cuenta así elaborado satisface los requisitos formales que para el efecto exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que dicho documento junto con el contrato o la póliza en que conste el crédito, trae aparejada ejecución y hace procedente la vía ejecutiva mercantil que se ejercite para obtener el pago correspondiente, sin que se oponga a lo anterior el que en dicho estado de cuenta no se haya especificado el método para calcular la tasa de interés aplicada, pues a fin de desvirtuar la fe de dicho documento y destruir la presunción legal de los datos y saldos anotados en él, debe ofrecerse por los demandados, en su caso, la prueba pericial contable a fin de acreditar la inexactitud de los saldos a su cargo por errores matemáticos o de alguna otra circunstancia que evidencie lo inverosímil de él. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO.

Novena Época. Registro: 190933. Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, localización: Tomo XII, octubre de 2000, materia(s): Civil. Tesis: XV.1o. J/7.

ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO. LOS SALDOS RESULTANTES DE ESTE DOCUMENTO PUEDEN DESVIRTUARSE A TRAVÉS DE LAS PRUEBAS IDÓNEAS PARA TAL EFECTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, el contrato o póliza junto con el certificado contable adquieren la calidad de título ejecutivo y, por ende, son documentos que constituyen prueba preconstituida de la acción y dan lugar al juicio que exige ese requisito. El estado de cuenta certificado por contador por sí mismo, también es prueba preconstituida en juicios distintos al ejecutivo y tiene pleno valor probatorio, salvo prueba en contra, para la fijación de los saldos resultantes. En ambos casos, el estado de cuenta certificado hará prueba del saldo adeudado, dado que en cada uno de los supuestos mencionados se les otorga el mismo valor de prueba plena. Sin embargo, la eficacia reconocida por la ley al certificado contable, no impide la admisión de prueba en contra y tampoco restringe la carga probatoria a determinada clase de medios de convicción, sino que el deudor puede presentar las pruebas pertinentes para demostrar que el estado de cuenta no debe tener ese valor pleno. Por lo que, en cada caso corresponde al juzgador determinar si las pruebas aportadas son idóneas para restar eficacia al estado de cuenta certificado y debe atender al sistema de valoración que rige y a los principios de la lógica y la experiencia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Décima Época, registro: 160121. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de Tesis: Aislada, fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, libro VIII, mayo de 2012, tomo 2, materia(s): Civil, tesis: I.3o.C.1024 C (9a.), página: 1921.

Como se ha señalado a lo largo de la presente resolución, los contratos de apertura de crédito y el estado de cuenta certificado por el contador facultado por la institución acreedora es el documento que

constituye el título de crédito, por lo que la ley no exige mayores elementos para que se constituya un título de crédito.

Ya que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, dispone:

Los contratos o pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos... junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni otro requisito...

Por su parte, el artículo 1391, fracción VIII, del Código de Comercio señala:

“El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.

Traen aparejada ejecución: ... VIII. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos...

Por lo que del estudio de los preceptos antes invocados, se determina que el juicio ejecutivo mercantil, procede cuando se funda en un documento que tiene el carácter de ejecutivo, siendo el contrato de cuenta corriente y el estado de cuenta certificado por contador facultado por la institución actora, un documento que trae aparejada ejecución, sin que sea requisito que dicho contrato de cuenta corriente conste en un instrumento público, ni resulta aplicable la fracción que alude del artículo 1391 del Código de Comercio.

Lo que se robustece con las jurisprudencias que rezan:

VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. PARA SU PROCEDENCIA, EL CONTRATO DE CRÉDITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CONSTITUYE UN TÍTULO EJECUTIVO ÚNICAMENTE CUANDO SE PRESENTA JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE. En los contratos de crédito, sean simples o en cuenta corriente, el estado de cuenta

certificado por el contador facultado por la institución acreedora es el documento que sirve de base para determinar el monto a cargo de los acreditados respecto del crédito otorgado por aquella. Esto es, al ser el instrumento que contiene el desglose y soporte documental de las diversas operaciones bancarias que originan el saldo a pagar, el estado de cuenta dota de liquidez y de certeza a las obligaciones contenidas -de manera más abstracta- en los contratos de crédito. Por tanto, para la procedencia de la vía ejecutiva mercantil, el contrato de crédito previsto en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito constituye un título ejecutivo únicamente cuando se presenta junto con el estado de cuenta correspondiente, pues sólo así puede considerarse como un documento autosuficiente para ejercer el derecho literal que en él se consigna, en términos del artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Novena Época, registro: 169769, instancia: Primera Sala, tipo de Tesis: Aislada, fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tomo XXVII, abril de 2008, materia(s): Civil, tesis: 1a. XXXI/2008, página: 360.

CONTRATO DE CRÉDITO Y SU ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR FACULTADO POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. ES SUFICIENTE SU EXHIBICIÓN CONJUNTA PARA EJERCERLA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, SIN QUE SEA NECESARIO ADJUNTAR LOS PAGARÉS RELACIONADOS CON DICHO CONTRATO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). El citado precepto en lo conducente dispone que: “Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos ... junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. ...”; por su parte, el artículo 1391, fracción VIII, del Código de Comercio señala: “El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.-Traen aparejada ejecución: ... VIII. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos...”. Ahora bien, el análisis relacionado de dichos preceptos permite concluir que el juicio ejecutivo mercantil procede, entre otros casos, cuando se funda en un documento que por ley tiene el carácter ejecutivo como sin duda lo es el contrato de crédito junto con el estado de

cuenta certificado por el contador facultado por la institución de crédito acreedora; de manera que no es necesario, para la procedencia de la vía ejecutiva mercantil, que la mencionada institución acreedora exhiba también con la demanda los pagarés con los que se documentó o garantizó el crédito a que dicho contrato se refiere, pues la ley no exige este requisito, máxime que de la interpretación gramatical del aludido artículo 68, se advierte que el contrato de crédito junto con el referido estado de cuenta constituirán título ejecutivo, sin necesidad de otro requisito.

Novena Época, registro: 190905, instancia: Primera Sala, tipo de Tesis: Jurisprudencia, fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tomo XII, noviembre de 2000, materia(s): Civil, tesis: 1a./J. 23/2000, página: 217.

Por último, la sociedad demandada opone la excepción de falta de acción y de derecho, sustentada en que era indispensable que el banco actor hubiere demostrado que cumplió con el contrato base de la acción y que a su vez la demandada incurrió en mora, pues el banco sostiene que la demandada ha incurrido en mora, sin acreditarlo.

Excepción que se estudia bajo los siguientes lineamientos:

Las partes pactaron en el contrato de apertura de crédito en la cláusula “quinta”, lo siguiente:

“PAGOS ANTICIPADOS Y LUGAR DE PAGO.”

“LOS CLIENTES” podrán pagar, antes de su vencimiento, total o parcialmente el importe de las cantidades de que hubieren dispuesto. Los pagos anticipados serán aplicados a la amortización del crédito y sus accesorios, en la forma que “\*\*\*\*” determine según sus intereses.

Todos los pagos que deban efectuar “los clientes” a favor de “\*\*\*\*” al amparo de este contrato, tanto por el capital como por concepto de intereses, comisión y demás consecuencias legales, los harán en las fechas correspondientes, en horas hábiles sin necesidad de previo requerimiento y en el domicilio de “\*\*\*\*” en \*\*\* o en el lugar que éste designe.

De la cláusula antes transcrita se puede observar que no era necesario requerir a la demandada de realizar los pagos, al tener ésta conocimiento de la forma y términos de cómo realizar los mismos; por ello, resulta improcedente la excepción en estudio.

Por lo anteriormente expuesto, le resulta favorable a los intereses de la parte actora, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, ello en virtud de que la parte demandada no demostró con medio de prueba alguno haber dado cumplimiento a su obligación de pago respecto al monto que se le reclaman en la presente demanda como suerte principal, como les correspondía acreditarlo en términos de lo previsto en el artículo 1194 del Código de Comercio y conforme al criterio sustentado por los Tribunales Federales en la jurisprudencia, que dice:

PAGO O CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA. El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor.

Octava Época, registro: 225165, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tesis Aislada, fuente: *Semanario Judicial de la Federación*, VI, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1990, materia(s): Civil, tesis: página: 593.

Por lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que resulta procedente condenar a los demandados, a pagar a la institución actora, o a quien sus derechos represente al pago de la cantidad de \$000,000.00 (XXXX pesos 00/100 M. N.), por concepto de suerte principal, de conformidad con el estado de cuenta certificado suscrito por el contador público facultado por la entonces institución bancaria actora, documento que al no existir prueba en contrario hace fe en los juicios respectivos en que intervengan, para la fijación de los saldos resultantes a cargo del acreditado, cantidad que deberán efectuar dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente aquél en que la presente resolución



cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, apercibidos que, en caso de incumplimiento, se procederá apercibidos que en caso de incumplimiento se procederá al embargo de bienes de su propiedad suficientes a garantizar el monto de lo reclamado.

V. Por otra parte, al momento de contestar la demandada <sup>\*\*\*</sup>, refiere que la entonces institución bancaria, no precisa el mecanismo o el cálculo realizado para obtener los intereses; en tal virtud, el suscrito se encuentra obligado a analizar aún de oficio la procedencia de los intereses ordinarios y moratorios pretendidos, que el accionante demanda en sus prestaciones identificadas con el inciso b) y c), del capítulo respectivo de su escrito inicial de demanda, por referirse a elementos constitutivos de la acción ejercitada por la parte actora, toda vez que esta acción comprende la suerte principal y los accesorios reclamados en la presente vía.

Se apoya el anterior razonamiento en la tesis número XXI.1o.43 C, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 411 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tomo IV, diciembre de 1996, novena época, que a la letra dice:

INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS. DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE PORQUE ATAÑEN A LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Al hecho de que el título de crédito base de la acción sea una prueba preconstituida de la acción ejecutiva, no debe dársele el carácter absoluto atribuido por la Sala responsable, pues la acción cambiaria directa constituye la reclamación no sólo de la suerte principal sino también de las accesorias, como son los intereses tanto ordinarios como moratorios pactados en el documento, por lo que obliga al juzgador a analizar oficiosamente los presupuestos de la acción por tener que ver con los elementos constitutivos de la misma, siempre y cuando en la apelación se hayan dado las bases para el estudio de esas cuestiones.

De la literalidad del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y fianza, se advierte que se pactó como tasa de inte-

reses ordinarios la tasa anual más alta que resulte de comparar, entre sí, las siguientes tasas:

1. La tasa anual de interés que se obtengan de sumar a la tasa líder 10 (diez) puntos (margen o diferencial).
2. La tasa anual de interés que se obtenga de multiplicar la tasa líder por 1.47 (uno punto cuarenta y siete) puntos (factor)..."

"INTERESES MORATORIOS"

"LOS CLIENTES" se obligan a pagar intereses moratorios sobre el saldo del capital e intereses vencidos y no pagados del crédito desde el día inmediato siguiente a su vencimiento, hasta el día en que dicha cantidad quede total y completamente pagada, a razón de la tasa de interés anual que resulte de multiplicar, la tasa de interés ordinaria aplicable y vigente en la fecha de pago total o parcial por uno punto cincuenta.

Además de que sería a elección de "\*\*\*\*" cualquier tasa anual que resulten del promedio aritmético de las cuatro últimas tasas conocidas a la fecha de inicio de cada periodo de intereses, ofrecida por cualquier valor, gubernamental o títulos bancarios.

Por lo que se debe analizar si la tasa pactada por las partes resulta usuraria, entendiéndose ésta una forma de explotación del hombre por el hombre; un fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, pues una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro un interés excesivo, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 21, numeral 3, que refiere que la usura o cualquier otra forma de explotación humana por el hombre, debe ser motivo de prohibición legal.

Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia que a la letra dice:

PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE. El párrafo segundo del citado precepto permite una interpretación conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prever que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal; pues ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisón de acordar intereses no es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, el juzgador que resuelve la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, para determinar la condena conducente (en su caso), debe aplicar de oficio el referido artículo 174, acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y los elementos de convicción con que se cuente en cada caso, para que dicho numeral no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses usurarios, por lo que si el juzgador adquiere convicción de oficio de que el pacto de intereses es notoriamente usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, entonces debe proceder, también de oficio, a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente para que no resulte excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, y con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver. Ahora bien, cabe destacar que constituyen parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés —si de las constancias de actuaciones se aprecian los elementos de convicción respectivos— los siguientes: *a)* el tipo de relación existente entre las partes; *b)* la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; *c)* el destino o finalidad del crédito; *d)* el monto del crédito; *e)* el plazo del crédito; *f)* la existencia

de garantías para el pago del crédito; g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia; h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Lo anterior, sobre la base de que tales circunstancias puede apreciarlas el juzgador (solamente si de las constancias de actuaciones obra válidamente prueba de ellos) para aumentar o disminuir lo estricto de la calificación de una tasa como notoriamente excesiva; análisis que, además, debe complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.

Décima Época, registro: 2006795, instancia: Primera Sala, tipo de Tesis: Jurisprudencia, fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, libro 7, junio de 2014, tomo I, materia(s): Constitucional, Civil, tesis: 1a./J. 47/2014 (10a.), página: 402.

Bajo esta tesitura, es menester precisar, que se debe entender por interés ordinario el rédito que produce o debe producir el dinero prestado; es decir, el precio pagado por el uso del propio dinero, de manera que su naturaleza jurídica consiste en la obtención de una cantidad como ganancia, por el simple hecho de que una persona dio a otra una cantidad de dinero que ésta necesitaba para satisfacer sus propias necesidades, por ello se afirma que al momento de regresar el dinero prestado, es cuando cesa la obligación del deudor de cubrir los intereses respectivos; en cambio, los intereses moratorios, consistente en una indemnización cuya finalidad es desincentivar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones.

Ahora bien, en el año de 1999 propiamente no se hablaba de la usura, ya que si bien en el contrato de apertura de crédito simple, se precisa los mecanismos para obtener el monto de los intereses ordinarios y moratorios, y dado el transcurso del tiempo a la fecha han cambiado

los parámetros para determinar dichos intereses; en tal virtud, no se aprueban los intereses cuantificados al XX de XXX de XXXX; por lo que se condena al pago de los intereses ordinarios y moratorios generados desde la firma del contrato basal, lo que se determinará a juicio de peritos, y deberá calcularse en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo, en el cual los peritos deberán tomar como parámetros, que destino del crédito el cual fue otorgado para capital de trabajo, la calidad con la que intervinieron siendo que la entonces parte actora es una institución de crédito, monto del crédito, existencia o garantías para el pago del crédito, tasa de intereses para operaciones similares a las que se analiza, variaciones del índice inflacionario nacional durante la vida del adeudo, las condiciones del mercado y otras cuestiones que generen convicción en el suscrito, sin que los intereses determinados sean usureros por lo que la tasa aplicable debe ser la media que el perito determina desde la adquisición del crédito, en la inteligencia que ambos intereses pueden coexistir y devengarse simultáneamente siempre y cuando ambos no constituyan, conjuntamente, un interés usurario, pues ambos inciden en un mismo derecho humano, por lo que la únicamente limitante será precisamente que no sean usureros, dando los peritos las bases de sus cálculos de manera razonada y motivada.

Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis que a la letra dice:

PAGARÉ. LOS INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS PACTADOS EN ÉL PUEDEN COEXISTIR Y DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO NO CONSTITUYAN, CONJUNTAMENTE, UN INTERÉS USURARIO, PUES AMBOS INCIDEN EN EL DERECHO HUMANO DE PROPIEDAD [INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 1A./J. 29/2000, 1A./J. 46/2014 (10A.) Y 1A./J. 47/2014 (10A.), ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS]. Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de

jurisprudencia 1a./J. 29/2000, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 236, de rubro: INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE., consideró que tanto los intereses ordinarios como los moratorios pueden coexistir y devengarse simultáneamente, dado que tienen orígenes distintos, pues el primero deriva del simple préstamo y el segundo del incumplimiento en la entrega de la suma prestada; también lo es que en dicho criterio obligatorio no se autorizó que ambos pudieran devengarse simultáneamente de manera ilimitada, aun cuando la magnitud sumada de uno y otro pudiera llegar a constituir una forma de explotación del hombre por el hombre. En este sentido, es primordial precisar que, con el objeto de identificar la usura en cada caso concreto, dicha jurisprudencia (cuya ejecutoria data del treinta de agosto de dos mil), debe interpretarse en armonía con las consideraciones vertidas por la Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 350/2013 (de diecinueve de febrero de dos mil catorce), difundida en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 349, que originó las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 27 de junio de 2014 alas 9:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, páginas 400 y 402, de títulos y subtítulos: “PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) y de la tesis aislada 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].” y “PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.”, respectivamente, ya que en la fecha en que se emitió la primera tesis jurisprudencial 1a./J. 29/2000, aún no se instituía el nuevo esquema de protección de derechos humanos que surgió a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de dos mil once y que implicó la apertura

del Estado Mexicano al derecho internacional de los derechos humanos. Conforme a dichas bases, se obtiene que ambos intereses pactados en el pagaré, tanto ordinarios como moratorios, pueden coexistir y devengarse simultáneamente, siempre y cuando no constituyan, conjuntamente, un interés usurario, pues ambos inciden en un mismo derecho humano: la propiedad. Lo anterior se confirma con el hecho de que el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no hace distingo alguno entre si el interés excesivo debe derivar de una tasa ordinaria o moratoria, o que lo anterior no opera en caso de que, en lo individual, ninguna de ellas sea usuraria, pero en su conjunto sí lo sean, pues sólo precisa que comprende “cualquier caso en el que una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo”. En tales condiciones, si el legislador interamericano no hizo distinción alguna entre intereses ordinarios y moratorios al redactar el Pacto de San José de Costa Rica, sino simplemente en la forma en que nacieron a la vida jurídica (préstamo), no es dable que los operadores jurídicos hagan una distinción al respecto, pues una vez que ambos coexistan deben encontrar un límite para efectos de la usura. Es entonces cuando el Juez de la causa tiene la obligación de realizar un examen oficioso para constatar si el interés es excesivo, conforme a los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada tesis jurisprudencial 1a./J. 47/2014 (10a.), en cuyo caso deberán ser regulados prudencialmente, de manera razonada y motivada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Décima Época, registro: 2013846, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tesis: Aislada, fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, libro 40, marzo de 2017, tomo IV, materia(s): Constitucional, Civil, tesis: III.2o.C.55 C (10a.), página: 2789.

VI. Por último, de acuerdo al sistema objetivo previsto en el artículo 1084 del Código de Comercio, se deberá condenar a la parte demandada al pago de las costas causadas en la presente instancia, reservándole a la

actora su derecho para que las liquide en el correspondiente incidente de ejecución de sentencia, lo anterior, en términos del artículo 1084 fracción III del Código de Comercio, así como 127 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, también sirviendo de apoyo el criterio sostenido en la jurisprudencia, siguiente:

CUANTÍA DEL NEGOCIO. INCLUYE LA SUERTE PRINCIPAL Y LOS INTERESES DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS (DISTRITO FEDERAL). La entonces Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio jurisprudencial contenido en la contradicción de tesis 8/88 con el rubro: “CUANTÍA DEL NEGOCIO. INCLUYE LA SUERTE PRINCIPAL Y LOS INTERESES DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).” el cual resulta aplicable a la legislación del Distrito Federal, en virtud de que los artículos 229 y 230 de la derogada Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común en el Distrito Federal así como el artículo 128 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal establecen, para efectos de regular las costas que, para determinar los honorarios de los abogados debe atenderse al monto del negocio, concepto en el que se incluye tanto la suerte principal como los intereses reclamados en la demanda, en virtud de que el profesionista litiga, presta sus servicios y adquiere responsabilidad sobre la totalidad de las prestaciones que se discuten en el juicio.

No. Registro: 195,786. Jurisprudencia, materia(s): Civil. Novena Época, instancia: Primera Sala, fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tomo: VIII, agosto de 1998, tesis: 1a./J. 35/98, página: 156.

Por lo antes expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 1084, 1085, 1086, del 1321 al 1330 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, tesis aisladas y jurisprudencias transcritas y aplicables al caso concreto, se



**RESUELVE:**

PRIMERO. Ha sido procedente la vía ejecutiva mercantil en la cual la actora \*\*\*, cesionario de \*\*\*, ésta a su vez de \*\*\*, probó su acción y parcialmente la procedencia de sus demás prestaciones y los codemandados \*\*\* se constituyeron en rebeldía y el C. \*\*\*, no acreditó sus excepciones y defensas.

SEGUNDO. Se condena a los demandados \*\*\*, a pagar a la parte actora \*\*\*, o a quién sus derechos represente, las siguientes cantidades \$000,000.00 (XXXX pesos 00/100 M. N.) por concepto de suerte principal de conformidad con el estado de cuenta certificado suscrito por el contador público facultado por la entonces institución bancaria actora, documento que al no existir prueba en contrario hace fe en los juicios respectivos en que intervengan, para la fijación de los saldos resultantes a cargo del acreditado, cantidad que deberán efectuar dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente aquél en que la presente resolución cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, apercibidos que en caso de incumplimiento se procederá al embargo de bienes de su propiedad suficientes a garantizar el monto de lo reclamado.

TERCERO. Se condena al pago de los intereses ordinarios y moratorios generados desde la firma del contrato basal, lo que se determinará a juicio de peritos, y deberá calcularse en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo, en el cual los peritos deberán tomar como parámetros, que destino del crédito el cual fue otorgado para capital de trabajo, la calidad con la que intervinieron siendo que la entonces parte actora es una institución de crédito, monto del crédito, existencia o garantías para el pago del crédito, tasa de intereses para operaciones similares a las que se analiza, variaciones del índice inflacionario nacional durante la vida del adeudo, las condiciones del mercado y otras cuestiones que generen convicción en el suscrito, sin que los intereses

determinados sean usureros por lo que la tasa aplicable debe ser la media que el perito determina desde la adquisición del crédito, en la inteligencia que ambos intereses pueden coexistir y devengarse simultáneamente siempre y cuando ambos no constituyan, conjuntamente, un interés usurario, pues ambos inciden en un mismo derecho humano, por lo que la únicamente limitante será precisamente que no sean usureros, dando los peritos las bases de sus cálculos de manera razonada y motivada.

CUARTO. Se condena a los enjuiciados a pagar a la actora o a quién sus derechos represente los gastos y costas en la presente instancia, reservándole su derecho a la actora para que los liquide mediante la planilla de liquidación correspondiente en ejecución de sentencia, atento a lo expresado en el considerando “V” de esta resolución.

QUINTO. Notifíquese y agréguese copia autorizada del presente fallo al legajo correspondiente de sentencias que se lleva en esté juzgado.

Así, Definitivamente Juzgando, lo resolvió el C. Juez Quincuagésimo Sexto de lo Civil de esta ciudad, licenciado David López Rechy, quien firma en unión del C. Secretario de Acuerdos “A”, licenciado Marco Antonio Silva Serrano, misma quien autoriza y da fe.

## JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

*JUEZ:*

LIC. MARÍA TERESA RINCÓN ANAYA

### **Sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil.**

**SUMARIO:** INTERESES MORATORIOS ESTABLECIDOS POR LAS PARTES CUÁNDO RESULTAN VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS. De conformidad con lo que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país se encuentran obligadas a respetar, proteger y garantizar no solo los derechos humanos que derivan de la Constitución, sino también aquellos que se encuentren contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, lo que conlleva a considerar que en materia de derechos humanos existe control difuso. En este sentido, es evidente que el juzgador puede estudiar y determinar a la luz de las circunstancias particulares del caso y de las constancias que obren en autos, sin dejar de advertir los factores externos, si efectivamente los intereses moratorios establecidos por las partes resultan usurarios y, por tal razón, violatorios de derechos humanos, pudiendo apartarse del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva a fin de preservar que no ocurra el fenómeno usurario.

En la Ciudad de México, XX de XXX del año XXXX.

Vistos. Para resolver en definitiva en los autos del juicio ejecutivo mercantil, seguido por XXX XXX XXX, Sociedad Anónima de Ca-

pital Variable, en contra de BERTHA y CRISTINO, en el expediente 000/0000, y

### RESULTANDO:

1. Por escrito presentado con fecha XX de XXX del año XXXX, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, compareció la persona moral denominada XXX XXX XXX, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus endosatarios en procuración, IVÁN, SARA, BLANCA, ROSARIO, LUZ, CLARA, CLAUDIA, PATRICIA, GUILLERMO, LUIS, KARLA, JUANA, LUZ, TERESA, MARCO, JOSÉ, CLAUDIA, LAURA, OSCAR, NORMA, GABRIELA, ELÍAS, DANIEL, FELIPE, CIRILO, JOSÉ, LUIS, CIRO, JOEL y AIDÉE, personalidad que acreditaron estos últimos en términos del endoso en procuración que forma parte del título de crédito base de la acción, lo anterior, para demandar de FERNANDO, BERTHA y CRISTINO, las siguientes prestaciones:

A) El pago de la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXX pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal. (*sic*);

B) El pago de los intereses a razón del nueve punto cinco por ciento (9.5%) de interés convenido en el pagaré base de la acción, generados desde que incurrieron en mora, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo. (*sic*);

C) El pago del impuesto al valor agregado, que se genere sobre los intereses moratorios, más los que se sigan acumulando, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. (*sic*);

D) El pago de gastos y costas que el presente juicio origine, dada la imperiosa necesidad de requerir por este medio jurisdiccional, a la parte demandada. (*sic*).

Fundándose para tal efecto en las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en su escrito de demanda, las cuales, se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias y para todos los efectos legales a que haya lugar (fojas 1 a 6).

2. Con fecha XX de XXX del año XXXX, la suscrita dictó auto en el cual previno a la parte actora a efecto de que desahogara lo señalado en el mismo, bajo el apercibimiento que, en caso de no hacerlo en el plazo de tres días, se desearía la demanda interpuesta de su parte (fojas 9 y 10), acto procesal que sí fue realizado por la parte actora mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este juzgado el XX de XXX del año XXXX (foja 13), recayendo entonces al escrito de demanda, así como al evacuado (*sic*) previamente señalado, el auto de fecha XX de XXX del año XXXX, en el que la suscrita admitió a trámite la demanda interpuesta en la vía y forma propuestas, ordenando requerir de pago y, en su caso, embargar y emplazar a la parte demandada FERNANDO, BERTHA y CRISTINO, para lo cual, se ordenó girar exhortos a los C.C. jueces competentes en Pachuca y Chilcuautla, ambos en el estado de Hidalgo (fojas 14 a 17); diligencias que sobre estos últimos dos demandados tuvieron verificativo el XX de XXX del año XXXX, tal y como se desprende de las actas levantadas por la actuaria adscrita al Juzgado Segundo de lo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la que los demandados en comento no realizaron el pago de las prestaciones reclamadas, por lo que, practicadas las diligencias conforme lo disponen los artículos 1392 a 1396 del Código de Comercio, y habiendo sido debidamente emplazados, se les citó para que en el plazo de ocho días, comparecieran a este juzgado para hacer pago de las prestaciones reclamadas o para oponerse a la ejecución mediante las excepciones que tuvieran para el efecto (fojas 35 y 38 anversos y reversos).

3. Con fecha XX de XXX del año XXXX, mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este juzgado, la parte actora se desistió de la acción intentada en contra de FERNANDO (foja 90), recayendo a dicha promoción el auto de fecha XX de XXX del año XXXX, mediante el cual se acordó de conformidad lo solicitado, ordenándose seguir el procedimiento únicamente en contra de BERTHA y CRISTINO (fojas 102 y 103).

4. Con fecha XX de XXX del año XXXX, fue presentado escrito ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el cual, la parte demandada CRISTINO dio contestación a la demanda incoada en su contra (fojas 44 a 49); luego entonces, por auto de fecha XX de XXX del año XXXX, se declaró precluido el derecho que la demandada BERTHA dejó de ejercitar al no dar contestación a la demanda y se dio vista a la parte actora por el término de tres días con las excepciones opuestas por el primer demandado citado con antelación (fojas 108 y 109), por tanto, una vez que fue desahogada la vista antes mencionada, mediante escrito presentado el XX de XXX del año XXXX, ante la oficialía de partes de este juzgado (fojas 110 a 116), admitidas las pruebas que se mencionan en la resolución de fecha XX de XXX del año XXXX (fojas 117 y 118), resuelta la excepción de personalidad mediante sentencia interlocutoria dictada con fecha XX de XXX del año XXXX (fojas 119 a 122), desahogadas aquellas probanzas que se desprenden del acta de audiencia de fecha XX de XXX del año XXXX (fojas 125 y 126), cerrada la instrucción y fenecida la oportunidad para formular alegatos verbales en términos del artículo 1406 del Código de Comercio vigente, se citó a la partes para oír sentencia definitiva, que hoy, se dicta al tenor de los siguientes

### CONSIDERANDOS:

I. Que este juzgado es competente para resolver el presente asunto, lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 104 de la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75, 1090, 1092, 1094 y 1104 del Código de Comercio; y 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

II. Que la vía ejecutiva mercantil intentada por la parte actora, en virtud de que se basa en “un” título ejecutivo mercantil de los denominados “Pagaré”, que reúne los requisitos que dispone el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y con base en este numeral y en lo dispuesto por el artículo 167 de la misma ley, así como en lo dispuesto por el artículo 1391 del Código de Comercio, ha resultado procedente.

III. Que atendiendo a que las partes deben asumir la carga probatoria de los hechos constitutivos de sus pretensiones y que el artículo 1194 del Código de Comercio, de conformidad con lo anterior, establece que el actor está obligado a probar su acción y el reo sus excepciones, la suscrita debe señalar que en el presente asunto resulta procedente la acción ejecutiva mercantil ejercitada por la parte actora, ya que, como se señaló con anterioridad, la misma se funda en un documento de los denominados “Pagaré”, que anexa a su escrito de demanda y que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio, que determina que los títulos de crédito, como el pagaré tienen el carácter de ejecutivos, trae aparejada ejecución, luego constituye una prueba preconstituida de la acción ejercitada en el juicio, lo que jurídicamente significa que el documento ejecutivo exhibido por la parte actora es un elemento demostrativo en sí mismo, en consecuencia, debemos entender que el documento base exhibido por la parte actora probó plenamente su acción, correspondiéndole entonces a la parte demandada acreditar sus excepciones, tal y como lo señala la siguiente jurisprudencia de la antigua Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: época: Quinta Época, registro: 392525, instancia: Ter-

cera Sala, tipo de tesis: Jurisprudencia, fuente: Apéndice de 1995, Tomo IV, parte SCJN, materia(s): civil, tesis: 398, página: 266.

TÍTULOS EJECUTIVOS. Los títulos que conforme a la ley tienen el carácter de ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada en juicio, y la dilación probatoria que en este se concede es para que la parte demandada justifique sus excepciones y no para que el actor pruebe su acción; lo que no sucedió durante la secuela procesal, tal y como quedará debidamente precisado en el siguiente considerando.

Por lo anterior, crea plena convicción en la suscrita que está debidamente probada la acción de la parte actora en juicio; consecuentemente, a efecto de determinar la cantidad que por concepto de suerte principal, debe pagar la parte demandada en juicio a favor de la parte actora, es necesario tener en consideración que el escrito de demanda es de aquellos que conforman la *litis*, por lo cual, el juzgador debe acudir al estudio integral del mismo, para que en base en los hechos y reconocimientos vertidos pueda resolver lo que en derecho proceda y, en su caso, dilucidar situaciones contradictorias o dudosas que en él se presenten.

Luego entonces, es necesario señalar que si bien es cierto que la parte actora reclama en su capítulo de prestaciones la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXX pesos con XX centavos moneda nacional), también resulta cierto que del escrito de demanda se desprende como sigue:

...bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el C. FERNANDO, en su calidad de deudor principal, la C. BERTHA en su calidad de aval, y el C. CRISTINO en su calidad de coobligado, incurrieron en mora a partir del día XX de XX de XXXX, al incumplir en lo pactado en lo establecido en la literalidad del pagaré en mención. Situación diversa a la última fecha de pago realizado por la demandado a favor de mi endosante, mismo que fue realizado el XX de XXX del XXXX, toda vez que con



dicho pago, se le tiene reconociendo su obligación frente a la actora e interrumpe la prescripción del documento base de la acción, al no haber fenecido el plazo establecido en el artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito....

Y también se desprende como sigue:

...el último pago realizado a mi endosante por concepto de capital se efectuó el día XX de XXX del XXXX, por la cantidad de \$00,000.00 (XXX pesos 00/100 M.N.)...

Lo que no resulta congruente, pues la cantidad reclamada en el capítulo de prestaciones del escrito de demanda es disímil a la que se obtiene de armonizar los hechos y reconocimientos señalados en el mismo, en relación con lo pactado en el documento basal.

Lo anterior, resulta de esa forma, si se tiene en consideración que la primer semanalidad se pactó para el XX de XXX del año XXXX, ante lo cual, a la fecha en que la parte demandada, según lo narrado y reconocido por su contraparte, incurrió en mora, esto es, hasta el XX de XXX de XXXX, transcurrieron noventa y un semanalidades, mismas que deben entenderse como pagadas en los términos del documento basal, puesto que si no fuera de esa forma, la parte actora hubiera señalado que el demandado incurrió en mora con antelación; pagos que multiplicadas por el importe de una parcialidad señalada en el documento basal, esto es, por \$0,000.00 (XXX pesos con catorce con XX centavos moneda nacional), arrojan como resultado la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXX pesos con XX centavos moneda nacional), misma que al sumarle la cantidad reconocida como pagada a capital el treinta de octubre del año XXXX, esto es, la cantidad de \$00,000.00 (XXX pesos con XX centavos moneda nacional), da como resultado la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXX pesos con XX centavos moneda nacional), por lo que, al restar esta cantidad a la contenida en el documento basal, esto es, a la cantidad

de \$000,000.00 (XXX XXX pesos con XX centavos moneda nacional), da como resultado la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXX pesos con XX centavos moneda nacional); y no la cantidad reclamada por la accionante.

Luego entonces, dado que como se viene señalando lo narrado y reconocido en el escrito de demanda debe tomarse en cuenta, aun y cuando no haya sido hecho valer como excepción, por ser parte de la *litis*, sin que ello implique introducir cuestiones ajenas a la misma, pues una de las partes ya introdujo —en este caso la propia accionante— los puntos fácticos y reconocimientos en el juicio, ante lo cual, si el juzgador los analiza logra dictar una sentencia congruente con lo narrado y reconocido por la accionante; por tanto, dado que la parte actora en este juicio manifestó “bajo protesta de decir verdad” lo trasunto en primer término en líneas anteriores, lo que realiza con el fin de que en base en el compromiso en sus manifestaciones pueda crear certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, lo responsabiliza respecto de su falsedad u omisión de datos, por tanto, de conformidad con lo anterior, al armonizar el contenido del escrito de demanda y al darle más certeza a lo señalado bajo protesta de decir verdad, se debe tener por cierto en este juicio que la parte demandada sólo adeuda la última cantidad señalada en líneas previas y no la señalada en el capítulo de prestaciones, consecuentemente, si la parte demandada no acreditó durante la secuela procesal que su adeudo sea menor al que se viene señalando, en vía de consecuencia, resulta procedente condenar a la parte demandada en juicio BERTHA y CRISTINO, a pagar en favor de la parte actora o de quien sus derechos represente, la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXX pesos con XX centavos moneda nacional), por concepto de suerte principal, lo que deberá hacer dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibida que, en caso contrario, se procederá al trance y remate de los bienes embargados y con su producto se hará pago a la parte actora en juicio.

IV. En cuanto hace a la excepción opuesta por el codemandado CRISTINO, relativa a que no firmó el documento basal y que por ello no existe legitimación activa (parte actora) y pasiva (parte demandada), es de señalarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1196 del Código de Comercio, está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor su colitigante.

Lo que aplica al caso que nos ocupa, ello en razón de que el pagaré base de la acción es un título ejecutivo, que se funda en la presunción *juris tantum* de que el derecho del actor es legítimo y, que el mismo está suficientemente probado, para que sea desde luego atendido, encontrándose legitimado pasivamente el demandado hasta que no se desvirtué la presunción en comento con prueba en contrario.

Sirve de apoyo para lo anterior, la siguiente tesis cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: época: Novena Época, registro: 192600, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: aislada, fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tomo XI, enero de 2000, materia(s): civil, tesis: I.8o.C.215 C, *página*: 1027.

PAGARÉS. SON PRUEBA PRECONSTITUIDA, Y ES AL DEMANDADO A QUIEN CORRESPONDE PROBAR SUS EXCEPCIONES. El pagaré tiene el carácter de título ejecutivo, y constituye una prueba preconstituida de la acción, pues el propio documento contiene la existencia del derecho, define al acreedor y al deudor, y determina la prestación cierta, líquida y exigible de plazo y condiciones cumplidos, como pruebas todas ellas consignadas en el título; en tal virtud, es al demandado a quien corresponde probar sus excepciones. (lo subrayado en líneas anteriores es para efectos de mejor comprensión).

De ahí que, si el título de crédito en que se fundó el ejercicio de la acción ejecutiva mercantil, según lo señalado por la accionante, contiene la firma de la persona que se obligó y además de su literalidad se

desprende que el nombre del excepcionista, entre otros, figura como cobligado (aval) en el documento basal, y éste sostiene que no firmó dicho pagaré, a él mismo correspondía la carga de probar esa excepción, acorde a lo dispuesto por la fracción II del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues el pagaré base de la acción es prueba preconstituida lo cual obliga al deudor que pretende desconocer esa presunción, a demostrar sus negaciones.

Lo que no hizo el excepcionista, pues para acreditar si la firma estampada en el documento basal correspondía o no a su puño y letra, debía de haber ofrecido la prueba idónea para el efecto, que es la pericial en materia de grafoscopia, o algún otro medio de prueba suficiente que acreditara tal extremo, sin que de autos se desprenda que haya cumplido con lo anterior, por lo cual, es de ultimarse que no demostró su negación y, por tanto, al no haber desvirtuado la presunción legal de que una de las firmas que calza el documento basal pertenece al mismo, se encuentra obligado en términos del pagaré basal a responder por las prestaciones que en él se contienen, lo anterior, en términos de esta resolución.

En cuanto hace a las excepciones de oscuridad, irregularidad de la demanda, violación de garantías, incongruencia, oscuridad, falsedad, vaguedad e imprecisión y falta de condición, es de señalarse que las mismas se estudian en conjunto dada su íntima relación, pues se hicieron consistir fundamentalmente en que el actor no reúne los requisitos fundamentales a que está sujeta la condición para expresar cada uno de los hechos de su demanda, ya que no son claros ni precisos, lo que señala lo deja en un estado de indefensión, por no poder contestar adecuadamente la demanda, agregando, que, además, los hechos contenidos en la demanda no guardan relación con la realidad jurídica y que son falsos.

Ahora bien, una vez precisado lo anterior es de señalarse que dichas excepciones devienen infundadas, pues contrario a lo señalado

por la parte excepcionista, la parte actora en los hechos uno a seis (arábigos), sí cumplió con la carga de narrar los hechos necesarios para ejercer la acción cambiaria directa, tales como señalar la fecha de suscripción del documento basal, la cantidad por la que se suscribió y quienes los suscribieron además; indicó, la forma de pago y los pormenores relativos al pacto de la cláusula de vencimiento anticipado; asimismo, precisó lo concerniente a la tasa de intereses moratorios y su impuesto al valor agregado, la fecha en que la excepcionista incurrió en mora y los pagos reconocidos, por lo cual, es claro que no existió oscuridad en la demanda ni tampoco se presenta ninguna de las irregularidades señaladas por la excepcionista, por tanto, la parte demandada estuvo en la posibilidad de dar debida contestación a la demanda incoada en su contra y no se le dejó en estado de indefensión alguno.

Además, en cada hecho narrado se mencionó al documento basal, con lo cual se hizo remisión al mismo, por lo que, con lo anterior, aunado al traslado que se le corrió a la parte demandada con la copia del documento basal, la parte excepcionista pudo obtener válidamente conocimiento de los hechos para así preparar su defensa.

Por último, es de señalarse que no se demostró en este juicio la falsedad de los hechos narrados por la accionante; y que la parte actora no tiene porqué narrar hechos distintos a la acción que ejercita, ante lo cual, es a la parte demandada a la que corresponde aportar los hechos necesarios para acreditar sus excepciones.

Sirve de apoyo para lo anterior, la siguiente tesis, cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: época: Novena época, registro: 1013693, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: jurisprudencia, fuente: Apéndice de 2011, tomo V. civil segunda parte - TCC primera sección - civil subsección 2 – adjetivo, materia(s): común, tesis: 1095, página: 122.

EXCEPCIONES. INEXISTENCIA DE LAS. NO CORRESPONDE AL ACTOR PROBARLA. Es un principio general que a cada parte en el proceso le corresponde la carga de justificar los hechos que sirvan de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella. Así, cuando el actor alega la existencia de un derecho y pretende deducir de él consecuencias en su beneficio, tiene la carga de justificar su nacimiento; mas desde luego no le incumbe acreditar, y ni siquiera afirmar la ausencia de hechos que puedan extinguir, impedir o modificar el derecho que invoque a su favor, toda vez que tales hechos no son el fundamento de su pretensión, sino que podrían serlo de la que haga valer la parte reo, a quien, por ende, le toca aducirlos y demostrarlos. De otro modo, resultaría que el actor en juicio no sólo debe invocar y probar los hechos fundatorios de la acción, sino también la inexistencia de los hechos constitutivos de toda posible excepción, lo cual es jurídicamente inaceptable.

En cuanto hace a la excepción de carga de la prueba, relativa a que los hechos no se presumen sino que es necesario probarlos, es de señalarse que con la exhibición del “título de crédito” se prueba plenamente la acción, lo que se hace claro si se toma que los títulos ejecutivos son pruebas preconstruidas (antes del juicio) de los actos contenidos en dichos instrumentos, y que de conformidad con los artículos 5 y 17 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el beneficiario sólo debe exhibir el título de crédito para ejercer el derecho literal que en el mismo se consigna; luego entonces, corresponde a la parte demandada la carga de la prueba para acreditar sus excepciones, pues como se ha señalado, la parte actora ya cumplió con su carga probatoria.

En cuanto hace a la excepción de falta de acción y derecho, que más bien refiere la personalidad, la misma ya fue resuelta mediante sentencia interlocutoria dictada en este juicio con fecha XX de XXX del año XXXX.

V. Por cuanto hace al pago del interés moratorio reclamado por la parte actora en juicio a razón del nueve punto cinco por ciento mensual, es de tomar en consideración que si bien es cierto que el artículo

174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dispone que los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento y, en defecto de ambos, al tipo legal; que existe similar disposición en el artículo 362 del Código de Comercio, el cual dispone que los deudores que demoren en el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento el interés pactado para este caso, o en su defecto, el seis por ciento anual; que el artículo 78 del Código de Comercio dispone que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados; de lo que se puede advertir que nuestra legislación permite a las partes la libre convención de intereses en un pagaré, esto es, no fija límite para el pacto de los mismos en caso de mora en un título de crédito, pues las partes se obligan en los términos que aparezca que quisieron obligarse, permitiendo el pacto de cualquier tipo de interés sin limitación alguna; y que del texto que conforma al pagaré base de la acción se advierte que las partes convinieron un interés moratorio a razón del nueve punto cinco por ciento mensual, equivalente al ciento catorce por ciento anual; lo cierto resulta también que el contenido normativo de los preceptos antes mencionados, debe interpretarse acorde con las normas constitucionales y las normas de derechos humanos de fuente internacional de los que el Estado mexicano sea parte, lo que trae como resultado que la anterior permisón de acordar intereses no es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo, lo anterior, encuentra sustento en el artículo 1o. Constitucional, que señala entre otras cosas lo siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Pues, del precepto anterior, se puede advertir que todas las autoridades del país, incluyendo en este caso a la suscrita, se encuentran obligadas a respetar, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos que derivan de la Constitución, sino también aquellos que se encuentren contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, lo que conlleva a considerar que en materia de derechos humanos existe control difuso y, por lo tanto, la obligación de aplicar en esa materia, tanto la Constitución como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, generando la obligación en la suscrita, en su carácter de juzgadora, de vigilar la correcta aplicación de dichos derechos humanos en los casos sometidos a su consideración, utilizando en caso de haber contradicción en la ley, la interpretación más favorable, lo que se conoce como principio *pro persona*; la suscrita apoya lo previo en el siguiente criterio aislado emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: décima época, registro: 160589,



instancia: Pleno, tesis Aislada, fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, libro III, diciembre de 2011, tomo 1, materia(s): constitucional, tesis: P. LXVII/2011(9a.), página: 535.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD *EX OFFICIO* EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad *ex officio* en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.

Por tal razón, habrá que tomar en consideración que los Estados Unidos Mexicanos firmaron la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que obliga a la suscrita a realizar un análisis del contenido del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone como sigue: “Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada. 1º. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.”; puesto que del ordenamiento anterior, se puede advertir que la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue firmada por el gobierno mexicano, efectivamente prohíbe de manera expresa la “usura” como forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo.

En las relatadas condiciones, es de señalarse entonces que a juicio de la suscrita se presenta una contradicción normativa en el caso de intereses derivados de un préstamo por la suscripción de un pagaré, pues por un lado, tenemos que si bien es cierto que tanto el Código de Comercio, como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no imponen límites en el pacto de intereses a quienes suscriben un pagaré, pues ambas legislaciones establecen, esencialmente, que las partes se obligan en la manera y términos que aparezca que quisieron obligarse, permitiendo el pacto de cualquier tipo de interés sin limitación alguna, lo que significa que en ese rubro únicamente debe estarse al contenido del documento mismo, también resulta cierto que tal como se seña-

ló en líneas previas, la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe en forma expresa la usura, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; por tanto, atendiendo que el artículo 1o. constitucional establece el control de convencionalidad de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano; que el artículo en comento, amplía el catálogo de derechos humanos no sólo a los contenidos en la Constitución sino a los tratados internacionales aprobados por el Estado mexicano; que los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior; que en el caso de la usura, la Convención Americana sobre Derechos Humanos la prohíbe por considerar que se trata de una forma de explotación del hombre sobre el hombre; en consecuencia, es dable establecer válidamente que la permisón de acordar intereses tiene como límites que una persona no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resulta obligatoria para la suscrita en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la cual se puede ver bajo el siguiente registro: tesis: 1a./J. 46/2014 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, décima época 2006794 Primera Sala, libro 7, junio de 2014, tomo I, pág. 400, jurisprudencia (constitucional, civil).

PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCION DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACION CONFORME CON LA CONS-

TITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 132/2012 (10A.) Y DE LA TESIS AISLADA 1A. CCLXIV/2012 (10A.)]. Una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario en la suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos en las tesis 1A./J. 132/2012 (10A.), así como 1A. CCLXIV/2012 (10A.), en virtud de que en su elaboración se equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que provocó que se estimara que los requisitos procesales y sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio del consentimiento, se aplicaran también para que pudiera operar la norma constitucional consistente en que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los cuales el artículo 1o. constitucional ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Así, resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero además, dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal, permite una interpretación conforme con la Constitución General y, por ende, ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisón de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; destacando que la adecuación constitucional del precepto legal indicado, no sólo permite que los gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino que además, confiere al juzgador la facultad para que, al ocuparse de analizar la *litis* sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar la condena conducente

(en su caso), aplique de oficio el artículo 174 indicado acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al momento de resolver.

En ese sentido, resulta que al realizar el análisis sobre el reclamo de los intereses pactados en un pagaré, la suscrita puede de oficio, con base en el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estudiar y determinar a la luz de las circunstancias particulares del caso y las constancias de autos, sin dejar de advertir los factores externos, si efectivamente los intereses moratorios establecidos por las partes resultan usurarios y, por tal razón, violatorios de los derechos humanos, pudiendo apartarse del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva a fin de preservar que no ocurra el fenómeno usurario, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resulta obligatoria para la suscrita en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la cual, se puede ver bajo el siguiente registro: tesis: 1a./J. 47/2014 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, déci-

ma época 2006795 2 de 215 Primera Sala, libro 7, junio de 2014, tomo I, pág. 402 jurisprudencia (constitucional, civil).

PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE. El párrafo segundo del citado precepto permite una interpretación conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prever que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal; pues ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisón de acordar intereses no es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, el juzgador que resuelve la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, para determinar la condena conducente (en su caso), debe aplicar de oficio el referido artículo 174, acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y los elementos de convicción con que se cuente en cada caso, para que dicho numeral no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses usurarios, por lo que si el juzgador adquiere convicción de oficio de que el pacto de intereses es notoriamente usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, entonces debe proceder, también de oficio, a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente para que no resulte excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, y con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver. Ahora bien, cabe destacar que constituyen parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés —si de las constancias de actuaciones se aprecian los elementos de convicción respectivos— los siguientes: a) el tipo de relación exis-

tente entre las partes; *b*) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; *c*) el destino o finalidad del crédito; *d*) el monto del crédito; *e*) el plazo del crédito; *f*) la existencia de garantías para el pago del crédito; *g*) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia; *h*) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; *i*) las condiciones del mercado; y, *j*) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Lo anterior, sobre la base de que tales circunstancias puede apreciarlas el juzgador (solamente si de las constancias de actuaciones obra válidamente prueba de ellos) para aumentar o disminuir lo estricto de la calificación de una tasa como notoriamente excesiva; análisis que, además, debe complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.

En esa tesitura, se debe tener en consideración que de conformidad con lo anteriormente señalado, para apreciar si en el caso que nos ocupa se actualiza o no el fenómeno usurario, la suscrita empleando el arbitrio judicial puede tomar en cuenta las circunstancias particulares del caso, así como las constancias de actuaciones, sin dejar de advertir los factores externos y las circunstancias económicas que puedan influir en el asunto, tomando como parámetros guía los siguientes elementos: *a*) el tipo de crédito y relación existente entre las partes; *b*) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; *c*) el destino o finalidad del crédito; *d*) el monto del crédito; *e*) el plazo del crédito; *f*) la existencia de garantías para el pago del crédito; *g*) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia; *h*) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; *i*) las con-

diciones del mercado; y, j) otras cuestiones que generen convicción en la suscrita juzgadora.

Por un lado, de constancias de autos que integran el asunto que nos ocupa, se puede advertir que la parte actora en juicio reclama de su contraparte, en la vía ejecutiva mercantil, el pago de cierta cantidad de dinero más accesorios legales, fundando su pretensión en un pagaré, el cual se rige por el principio de literalidad contenido en el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y que de acuerdo al texto que lo conforma, se advierte que el mismo fue suscrito con fecha trece de septiembre del año dos mil doce, por FERNANDO, en su calidad de suscriptor, y BERTHA y CRISTINO, en su calidad de avales, a favor de XXX XXX XXX, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXX pesos con XX centavos moneda nacional), precio de una operación de autofinanciamiento, en la que las partes convinieron su pago mediante doscientos cuarenta y tres abonos semanales, cada uno, por la cantidad de \$0,000.00 (X XXX pesos con XX centavos moneda nacional), pagaderas a partir del día XX de XXX del año XXXX, estableciendo además las partes, el pago de un interés moratorio a razón del nueve punto cinco por ciento mensual, mismo que resulta igual al ciento catorce por ciento anual.

Ahora bien, debemos atender que de acuerdo a las operaciones similares a las que se analizan, los factores externos, las circunstancias económicas y las condiciones existentes en el mercado, encontramos que el Banco de México, a través de su portal de Internet, que se puede ver bajo la siguiente dirección, <http://www.banxico.org.mx/dyn/sistema-financiero/publicaciones/indicadores-basicos-de-creditos-automotrices-/indicadores-basicos-credito-a.html> proporciona, diversos reportes de los indicadores básicos de crédito automotriz, con el objeto de proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para dar seguimiento a los términos de los créditos que los



intermediarios bancarios e intermediarios regulados asociados a un banco ofrecen para la adquisición de un automóvil para uso particular, así como facilitar las comparaciones de las condiciones de crédito ofrecidas y, con ello, fomentar la competencia; reporte que resulta ser un hecho notorio, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento, y que puede ser invocado por la suscrita en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos del artículo 1054 de la legislación en comento.

En tal razón, es de tomar en consideración que del reporte publicado por dicho órgano de gobierno, que contiene datos relativos del mes de XXX del año XXXX al mes de XXX del año XXXX, que resulta ser la publicación que contiene información respecto del periodo en el que se suscribió el pagaré exhibido como base de la acción, la cual, contiene información de los intereses que menciona respecto de aquellos créditos vigentes a dicho periodo, independientemente a la fecha en que fueron contratados, y que para el caso que nos ocupa, se tomará en cuenta en su justa dimensión, encontramos que en la página número siete (cuadro número dos) de dicho reporte, los créditos se otorgaron a tasas de interés diversas que oscilan entre el —14.2%— catorce punto dos por ciento anual (la más alta) y —10.4%— diez punto cuatro por ciento anual (la más baja).

Sirve de apoyo para lo anterior el siguiente cuadro: (*sic*)

Aunado a lo anterior, debe reiterarse que del texto que conforma al pagaré exhibido como base de acción, se puede advertir que dicho pagaré representa el saldo del precio de la operación de autofinanciamiento otorgado por la parte actora a favor de la parte demandada, por lo que, derivado de ello, habrá que tomar en consideración que en el portal de Internet de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que se puede ver bajo la siguiente dirección,

<http://www.condusef.gob.mx/index.php/instituciones-financieras/bancos/credito-para-auto>, se señala que el autofinanciamiento es un sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores que aportan mensualmente o semanalmente a la cuenta de un fideicomiso una cantidad determinada, acorde al plazo y monto contratado; que dicha actividad se encuentra regulada por la Secretaría de Economía a través del Reglamento de Comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores; que de acuerdo con el artículo 21, fracción I, del reglamento en comento, en la parte que nos interesa, la participación de los consumidores en un sistema de comercialización se deberá documentar mediante contrato de adhesión que suscriban el proveedor y el consumidor de que se trate; que dicho contrato deberá estar inscrito ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en tal razón, es de tomar en consideración que en el portal de Internet de la Procuraduría Federal de Consumidor, visible bajo la siguiente dirección, <http://burocomercial.profeco.gob.mx/index.jsp>; se pueden consultar los contratos de adhesión que se encuentran registrados por algunas empresas autorizadas para operar o administrar sistemas de comercialización, en donde se desprende que en los contratos referentes a XXX XXX, Sociedad Anónima de Capital Variable, XXXX XX, Sociedad Anónima de Capital Variable y XXX, Sociedad Anónima de Capital Variable, las tasas de interés por mora se establecieron respectivamente a razón del dos punto cinco por ciento mensual (2.5%) —equivalente al treinta por ciento anual—, esto es, ochenta y cuatro por ciento menos al año que la tasa estipulada en el pagaré base de la acción—, cuatro por ciento mensual (4.0%) —equivalente al cuarenta y ocho por ciento anual—, esto es, sesenta y seis por ciento menos al año que la tasa estipulada en el pagaré base de la acción, y cinco por ciento mensual (5.0%) —equivalente al sesenta por ciento anual—, esto es, cincuenta y cuatro por ciento menos al año que la tasa estipulada en el pagaré base de la acción—.

Parámetros los señalados en el párrafo que precede, a los cuales es válido acudir y no al CAT, pues el principio de igualdad jurídica implica dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, cuenta habida que los riesgos que corren las instituciones bancarias para recuperar el importe del crédito son distintos a los que corren las empresas financieras de autos, tal y como los sostiene la siguiente tesis, cuyo criterio comparte la suscrita y cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: Época: décima época, registro: 2015991, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: aislada, fuente: *Semanario Judicial de la Federación*, publicación: viernes 12 de enero de 2018 10:13 h, materia(s): (constitucional, civil), tesis: I.8o.C.47 C (10a.).

USURA. PARA DETERMINAR SI EL INTERÉS MORATORIO PACTADO EN UN PAGARÉ SUSCRITO COMO GARANTÍA EN UN FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ ES EXCESIVO, ES VÁLIDO ACUDIR A LA TASA PUBLICADA POR EMPRESAS DEDICADAS A ESE RAMO EN ESPECÍFICO. De la contradicción de tesis 208/2015, que dio origen a las jurisprudencias 1a./J. 55/2016 (10a.), 1a./J. 56/2016 (10a.) y 1a./J. 57/2016 (10a.), de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia del País, se colige que para determinar lo notoriamente excesivo de los intereses estipulados en el pagaré y así proceder a su reducción, se puede atender, no necesariamente a todos los parámetros guía siguientes: a) el tipo de relación existente entre las partes, b) la calidad de sujetos que intervienen en el pagaré y si la actividad del acreedor está regulada, c) el destino o finalidad del crédito, d) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares, e) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida del adeudo, f) las condiciones del mercado, atendiendo a las circunstancias de cada caso particular y a distintos factores que concurran, los cuales deben ser apreciados por el juzgador conforme a su libre arbitrio; y que existen parámetros guía que constituyen hechos notorios, como los referentes financieros que publica el Banco de México o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de los cuales el Costo Anual Total (CAT) más alto, es el que generará mayor convicción al

juzgador para determinar si la tasa de interés pactada tiene o no visos de excesiva. En la parte final de esa ejecutoria, se estableció que el CAT es el referente financiero más adecuado, y que “dado que el análisis de usura no está constreñido a uno solo de los parámetros guía, sino a que el juzgador bajo su libre apreciación, tenga elementos suficientes e idóneos para llegar a una conclusión, si éste estima que en el caso concreto sometido a su jurisdicción debe aplicarse algún otro indicador financiero, dadas las circunstancias particulares, conserva su facultad de hacerlo, siempre que su decisión se encuentre debidamente fundada y motivada”. De lo anterior, se puede concluir válidamente que si bien es cierto la tasa de interés bancaria (CAT) es un buen referente para identificar cuándo los intereses pactados en un título de crédito son usurarios, sin embargo, el juzgador puede hacer el análisis respectivo, tomando en cuenta la tasa de interés anual que publican las empresas dedicadas al autofinanciamiento automotriz en el portal de internet, dado que así se cumpliría el requisito de atender también, al tipo de relación existente entre las partes, la actividad financiera del acreedor, las condiciones del mercado, entre otros. Además de que se respetaría el principio de igualdad jurídica que implica dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, cuenta habida que los riesgos que corren las instituciones bancarias para recuperar el importe del crédito son distintos a los que corren las empresas financieras de autos, pues mientras en el primer caso dependen de la solvencia del acreditado, en el segundo supuesto la recuperación se garantiza, incluso, con la disposición del propio vehículo, y el crédito deriva de un autofinanciamiento que por su naturaleza no tiene ni su origen ni las mismas reglas que los primeros.

Por tanto, debe señalarse que los últimos parámetros resultan ser acordes con la parte actora, quien no es una institución de crédito, ante lo cual, el criterio más adecuado resulta ser aquel publicado por la Procuraduría del Consumidor, pues dicho parámetro de conformidad con lo señalado en la página <https://rcal.profeco.gob.mx/rcal.jsp>, es aquel en que el proveedor podrá registrar voluntariamente su modelo de con-

tratos de adhesión aunque no requieran de registro previo, siempre y cuando PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor) estime que sus efectos no lesionan el interés de las y los consumidores, y que su texto se apega a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos aplicables, tal y como lo sostienen los artículos 24, fracción XX, y 63, fracción III, de la Ley de Protección al Consumidor.

Asimismo, tenemos que el artículo 5, párrafo segundo, de la ley citada establece que la Ley de Protección al Consumidor no es aplicable a los servicios regulados por las leyes financieras que presten las instituciones y organizaciones cuya supervisión o vigilancia esté a cargo de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores; de Seguros y Fianzas; del Sistema de Ahorro para el Retiro o de cualquier órgano de regulación, de supervisión o de protección y defensa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de lo que se desprende una marcada distinción entre una institución de crédito y una persona moral como la accionante, por lo que, de ahí queda claro que no resultan aplicables los parámetros relativos a las instituciones financieras, sino aquellos que sean relativos a sistemas de comercialización, en donde la misma parte actora ha registrado su contrato y éste resultó ser aprobado por la Procuraduría Federal del Consumidor; además que dicha ley es según su artículo 1o. de orden público e interés social y de observancia en toda la República por lo que sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

En razón de los parámetros anteriores, especialmente los últimos, la suscrita encuentra que el interés estipulado en el pagaré exhibido como base de acción, a razón del nueve punto cinco por ciento mensual equivalente al ciento catorce por ciento anual, Sí resulta ser notoriamente excesivo, toda vez que de conformidad con los mismos, el interés pacta-

do en el título de crédito exhibido como base de acción, excede *considerablemente* las tasas promedio que se encuentran en el mercado respecto al crédito automotriz que otorgan los intermediarios bancarios y otros intermediarios regulados no asociados a un banco y “principalmente” las tasas de las empresas que prestan servicios de comercialización relativo al autofinanciamiento, lo que denota que hay una desproporción en el pacto de intereses.

En suma de lo anterior, la suscrita de forma oficiosa, al advertir que de aplicar el interés pactado entre las partes en el pagaré base de la acción, se estaría atentando contra los derechos humanos de la demandada en relación con sus propiedades, decide inaplicar el interés convencional pactado a efecto de salvaguardar los derechos humanos en cita.

En tal razón, atendiendo a que del texto que conforma el pagaré exhibido como base de acción no se desprende que las partes hubieran convenido sobre el pago de algún interés ordinario, sino únicamente se advierte que se convino el pago de un interés para el caso de mora; que si bien el interés moratorio convenido por las partes resulta ser una indemnización por la mora y una sanción que tiene por objeto apremiar al deudor para que cumpla con la obligación, también resulta cierto que cuando es usurario no puede producir obligación alguna en la forma pactada en el deudor, pues genera la dificultad para su pago y el de la suerte principal; que la parte actora no es una institución que se dedique a captar recursos; y que las instituciones bancarias tienen otra serie de actividades y mayor soporte económico, por lo que, existe diferencia en cuanto al riesgo asumido por las instituciones de crédito en caso de que no le sea devuelto su dinero y una persona moral que no tenga la capacidad económica de un banco, pues es claro que esta última se encuentra en mayor riesgo que las primeras; y que de acuerdo a los parámetros obtenidos de las empresas autorizadas para operar o administrar sistemas de comercialización, referentes a las personas morales

XXX XXX, Sociedad Anónima de Capital Variable, XXX XXX, Sociedad Anónima de Capital Variable y XXX, Sociedad Anónima de Capital Variable, se observa que las mismas cobran tasas de interés por mora a razón del dos punto cinco por ciento mensual (2.5%), cuatro por ciento mensual (4.0%) y cinco por ciento mensual (5.0%).

Por tales motivos, la suscrita juzgadora concluye que la parte actora tiene derecho a cobrar un interés mayor que las instituciones bancarias por el riesgo que representa su actividad; por ende, si las instituciones bancarias tienen autorizado el cobro de un —14.2%— catorce punto dos por ciento anual (la más alta), y las empresas autorizadas para operar o administrar sistemas de comercialización establecen un interés moratorio entre el dos punto cinco por ciento mensual y cinco por ciento mensual, intereses moratorios estos últimos, que son autorizados por la Procuraduría Federal del Consumidor, en tal virtud, la suscrita considera prudente que la parte demandada haga pago del interés moratorio a razón del cuatro por ciento mensual (4%); interés moratorio que no le causa perjuicio a las partes, toda vez que es la tasa intermedia de interés moratorio que establecen las empresas en casos similares y autorizadas para operar o administrar sistemas de comercialización.

Por tanto, si bien es cierto que del texto que conforma al título de crédito base de la acción, se puede advertir que las partes convinieron su pago en parcialidades, y que de conformidad con el artículo 79 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, aplicable de manera expresa al pagaré de acuerdo con el diverso 174 de la legislación en comentario, las letras de cambio con otra clase de vencimiento, diversas a las señaladas en las cuatro fracciones que conforman dicho precepto legal, y que refieren a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha, a día fijo, o con vencimientos, sucesivos, se entenderán siempre pagaderas a la vista por la totalidad de la suma que expresen; lo que hace a dicho documento exigible a la vista en su totalidad, lo cierto resulta también

que del texto que conforma el documento antes señalado se desprende que las partes establecieron que ante la falta de pago oportuno de dos o más semanalidades se daría por vencido anticipadamente, por lo que, el interés moratorio debe computarse a partir del día siguiente a la fecha de la parcialidad que no fue cubierta por el obligado. Apoya para lo anterior la Jurisprudencia, cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: época: Décima Época, registro: 160281, instancia: Primera Sala, tipo de tesis: jurisprudencia, fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, libro V, febrero de 2012, tomo 1, materia(s): Civil, tesis: 1a./J. 85/2011 (9a.), página: 602.

PAGARÉ CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS Y VENCIMIENTO ANTICIPADO. ES PAGADERO A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE LA PARCIALIDAD QUE NO FUE CUBIERTA POR EL OBLIGADO. En términos del artículo 81 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece que para computar los términos legales no debe comprenderse el día que sirve como punto de partida, ante el vencimiento anticipado de los pagarés por el incumplimiento de alguna de las parcialidades pactadas previamente, los plazos para computar el interés moratorio deben computarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de la parcialidad indicada en el pagaré que no fue cubierta por el obligado. Por su parte, a los pagarés con vencimientos sucesivos, por tener fecha cierta de vencimiento, no les resulta aplicable la regla prevista en el artículo 79 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es decir, no pueden tenerse como pagaderos a la vista, pues ello sería atentar contra el principio de literalidad que rige en los títulos de crédito, ya que las partes estipularon claramente que serían pagaderos a cierto tiempo fecha;

Luego entonces, tenemos que si la parte demandada no acreditó haber pagado la parcialidad señalada por su contraparte correspondiente al XX de XXX de XXXX (semanalidad número noventa y dos); lo anterior, en los términos convenidos, consecuentemente, el interés por



mora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que señala que ni en los términos judiciales ni en los convencionales se comprenderá el día que les sirva como punto de partida, deberá contarse a partir del día siguiente al de la última parcialidad precitada, esto es, a partir del XX de XXX del año XXXX, sobre la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXX pesos con XX centavos moneda nacional), que es la que resulta de restar noventa y un semanalidades pagadas al adeudo que contiene el documento basal, y desde el XX de XXX del XXXX, sobre la cantidad de \$000,000.00 (XX XXX pesos con XX centavos moneda nacional), pues es la cantidad que resulta de restar los \$00,000.00 (XXX pesos con XX centavos moneda nacional) pagados el XX de XXX del año XXXX, luego entonces, resulta procedente condenar a la parte demandada BERTHA y CRISTINO, al pago del interés moratorio causado a razón del cuatro por ciento mensual (4%), sobre la suerte principal, contado a partir del XX de XXX del año XXXX, sobre la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXX pesos con XX centavos moneda nacional), y desde el XX de XXX del XXXX, sobre la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXX pesos con XX centavos moneda nacional) y hasta la total solución del adeudo principal. Cantidad que será liquidada y cuantificada en ejecución de sentencia según lo dispone el artículo 1348 del Código de Comercio.

VI. Por lo que hace a la prestación reclamada por la accionante, consistente en el pago del Impuesto al Valor Agregado generado sobre los intereses moratorios, es de tomar en consideración que los títulos de crédito, como el pagaré, se rigen por el principio de literalidad contenido en el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que implica que el beneficiario de un título no puede exigir al deudor algo que no esté previsto en su texto, pues derivado de éste, el universo de obligaciones y derechos creado con la expedición de un título, no puede ni debe tener otra interpretación que la realizada res-

pecto de lo que esté contenido de manera escrita en el documento; por tanto, tomando en consideración que del texto consignado en el pagaré exhibido como base de la acción se desprende que las partes en juicio establecieron que la falta de pago en las fechas estipuladas causaría un interés moratorio, además del Impuesto al Valor Agregado, en tal razón, debemos entender que la parte demandada en juicio sí se obligó a cubrir, en caso de incurrir en mora, no sólo el interés moratorio, sino también el Impuesto al Valor Agregado que se genere sobre dichos intereses; en consecuencia, se condena a la parte demandada en juicio a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, el Impuesto al Valor Agregado generado sobre los intereses moratorios causados y que se sigan causando por el tiempo en que se encuentre en mora respecto del pagaré base de la acción y, hasta el pago total del capital. Cantidad que deberá liquidarse en ejecución de sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio.

VII. Por lo que hace al pago de los gastos y costas reclamados por la parte actora en juicio, debemos tomar en consideración, que si bien es cierto que la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, dispone como imperativo legal que siempre será condenado en costas el que fuese vencido en juicio ejecutivo, y que el presente asunto refiere a un juicio ejecutivo, sin embargo, se debe señalar que dicha condena debe ser absoluta o total, es decir, dicho supuesto procede cuando se condene al pago de la totalidad de las prestaciones reclamadas en juicio, sirve de apoyo para lo anterior, la siguiente jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resulta obligatoria para la suscrita en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la cual se ubica bajo el siguiente registro: Novena época registro: 196634, instancia: Primera Sala jurisprudencia fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta* VII, marzo de 1998, materia(s): civil tesis: 1a./J. 14/98 página: 206.

COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SU PROCEDENCIA CUANDO LA CONDENA EN EL JUICIO FUE ÚNICAMENTE PARCIAL, DEPENDERÁ DEL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR. El artículo 1084 del Código de Comercio, en su primer párrafo, establece dos presupuestos para el pago de costas en el juicio, el primero de ellos se refiere a la condena obligatoria cuando la prevenga la ley y la segunda deja al prudente arbitrio del juzgador dicha condena, a la luz de la temeridad o mala fe que se advierta en la sustanciación del procedimiento. El propio numeral en comento describe, en su tercera fracción, que pagará las costas “el que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable ...” en donde el término condenado debe entenderse en su acepción absoluta o total, pues cuando se trata de una condena parcial, ésta dependerá del arbitrio judicial, y será el juzgador quien debe analizar el caso concreto para desentrañar las motivaciones que tuvieron las partes para concurrir al juicio y advertir si en alguna de ellas existió una conducta temeraria o de mala fe que deba ser castigada a través del pago de las costas.

En consecuencia, tenemos que si en el caso que nos ocupa, no se condenó al pago de la totalidad de las prestaciones reclamadas por la parte actora en juicio, puesto que no se le condenó a la parte demandada a pagar la tasa de interés moratorio que le fue reclamada por su contraparte, sino aquella que no resultó usuraria, entonces, tenemos que dicho supuesto no encuadra en la hipótesis normativa señalada en líneas previas, apoya a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia de Primera Sala, cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: época: Décima Época, registro: 2015691, instancia: Primera Sala, tipo de tesis: jurisprudencia, fuente: *Semanario Judicial de la Federación*, publicación: viernes 01 de diciembre de 2017 10:13 h, materia(s): (civil), tesis: 1a./J. 73/2017 (10a.).

COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN LOS CASOS EN QUE,

AUN CUANDO PROCEDA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, EL JUEZ OFICIOSAMENTE REDUCE EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CONSIDERARLOS USURARIOS, SIN QUE SEA RELEVANTE QUE EL DEMANDADO HAYA COMPARECIDO O NO AL JUICIO. Del precepto citado, se advierte que siempre se condenará en costas al que fuese condenado en juicio ejecutivo y al que lo intente si no obtiene sentencia favorable. Ahora bien, el término “condenado en juicio” alude a quien no obtuvo sentencia benéfica, ya sea el actor o el demandado; mientras que la expresión “no obtiene sentencia favorable” se refiere a la derrota o condena total, es decir, absoluta. En ese sentido, cuando en un juicio ejecutivo mercantil, la parte actora se beneficia de la procedencia de la acción cambiaria directa y, en su caso, demás prestaciones reclamadas, exactamente en los mismos términos en que fueron planteadas en la demanda, procede la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues se está ante una condena total. Ahora bien, cuando en la sentencia respectiva el juez, de manera oficiosa, reduce el monto de la suerte principal o de las prestaciones accesorias reclamadas, se está ante una condena parcial, pues se justificó la intervención judicial y puede considerarse que el actor no obtuvo plenamente una sentencia favorable, ni el demandado fue totalmente derrotado, ya que este último, con la reducción del monto a pagar con respecto a lo reclamado, obtuvo también una sentencia favorable. Así, si en un juicio ejecutivo mercantil, aun cuando procedió la acción cambiaria directa, el juez, en ejercicio del control convencional ex officio, reduce el pago de los intereses moratorios por considerarlos usurarios, no puede condenarse al pago de costas conforme al precepto legal citado, toda vez que la condena no fue total, al haber dejado de percibir el actor todo lo que pretendió en los montos que reclamó y al no tener que pagar el demandado la totalidad de la cantidad que se le reclamaba por concepto de intereses, sin que sea relevante que comparezca a juicio o no el demandado, pues aun si éste no contestó la demanda, debe entenderse que la actuación del juzgador constituye una oposición oficiosa a las pretensiones del actor. No obstante, este criterio sólo es aplicable en lo que se refiere a la improcedencia de la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues es posible que se den condiciones que

activen la procedencia en términos de una diversa fracción del propio precepto, de su primer párrafo, o del artículo 1082 del citado ordenamiento, quedando al prudente arbitrio del juzgador determinar lo procedente.

Ahora bien, no pasa inadvertido para la suscrita que la legislación mercantil prevé dos hipótesis para la condena en costas, una cuando así lo prevenga la ley, tal como se establece en el supuesto anteriormente citado, y una diversa: cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe; no obstante ello, luego de analizar las constancias de autos, que tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 1294 del Código de Comercio, la suscrita encuentra que de los datos que arrojan las mismas, no se advierten promociones inconducentes, recursos o excepciones frívolas que se encaminen a entorpecer o dilatar el procedimiento, por tanto, la suscrita encuentra que la actuación procesal de la parte demandada en juicio, no resulta temeraria o de mala fe, en tal razón, resulta procedente absolverla del pago de los gastos y costas reclamados por su contraria; sirve de apoyo para lo anterior, la siguiente jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resulta obligatoria para la suscrita en términos del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo, la cual se puede ver bajo el siguiente registro: Novena época, registro: 177044, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta* XXII, octubre de 2005 materia(s): civil, tesis: I.11o.C. J/4, página: 2130.

COSTAS. CONCEPTO DE TEMERIDAD O MALA FE PARA DECRETAR SU CONDENA. De conformidad con lo establecido en el artículo 1084 del Código de Comercio la condena en costas en los juicios mercantiles procede en dos supuestos: el primero, es cuando así lo prevenga la ley, y el segundo, deriva de la facultad discrecional del juzgador cuando advierta que uno de los litigantes haya actuado con temeridad o mala fe.

El primer supuesto prevé la condena forzosa y se rige por las cuatro primeras fracciones y el segundo por el ejercicio del arbitrio judicial del juzgador. El numeral en comento otorga al juzgador la facultad de determinar la temeridad o mala fe examinando los casos en que proceda aplicar la sanción por esos conceptos. El arbitrio judicial no consiste en la simple y llana voluntad del juzgador, sino en una operación de entendimiento que importa el análisis de la actuación procesal de los litigantes temerarios, siendo aquellos que litigan sin justa causa. La generalidad de los juristas opinan que para que a un litigante se le tenga por temerario debe proceder con notoria mala fe, malicia notable o litigar sin justa causa. La temeridad o mala fe, entonces, puede consistir en diversos actos u omisiones del litigante, pues no sólo consiste en la falta de prueba de los hechos en que se funda la demanda o la contestación, sino en ejercitar acciones a sabiendas de ser improcedentes, oponerse a una acción sin causa justificada con pleno conocimiento de que son injustificadas, en la interposición de recursos o excepciones frívolos e improcedentes con el solo propósito de entorpecer el curso del procedimiento.

Por lo anteriormente fundado y motivado con apoyo en los artículos 1321 y 1322 del Código de Comercio, es de resolverse y se

### **RESUELVE:**

PRIMERO. Ha sido procedente el juicio ejecutivo mercantil intentado por la actora, en donde la misma acreditó parcialmente sus pretensiones, las excepciones opuestas por CRISTINO resultaron infundadas y BERTHA se constituyó en rebeldía, en consecuencia;

SEGUNDO. Se condena a la parte demandada BERTHA y CRISTINO, a pagar en favor de la parte actora o de quien sus derechos represente, la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXXX pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, lo que deberá hacer dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso contrario, se proce-

derá al trance y remate de los bienes embargados y con su producto se hará pago a la parte actora en juicio, de conformidad a lo establecido en el considerando tercero de la presente resolución.

TERCERO. Se condena a la parte demandada BERTHA y CRISTINO, al pago del interés moratorio causado a razón del cuatro por ciento mensual (4%), sobre la suerte principal, contado a partir del XX de XXX del año XXXX, sobre la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXXX pesos 00/100 moneda nacional), y desde el XX de XXX del XXXX, sobre la cantidad de \$000,000.00 (XXX XXXX pesos 00/100 moneda nacional) y, hasta la total solución del adeudo principal, de conformidad a lo establecido en el considerando quinto de la presente resolución. Cantidad que será liquidada y cuantificada en ejecución de sentencia según lo dispone el artículo 1348 del Código de Comercio.

CUARTO. Se condena a la parte demandada BERTHA y CRISTINO, a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, el Impuesto al Valor Agregado generado sobre los intereses moratorios causados y que se sigan causando hasta la total solución del presente asunto, de conformidad a lo establecido en el considerando sexto de la presente resolución.

QUINTO. Se absuelve a la parte demandada del pago de gastos y costas reclamados por la parte actora en juicio, de conformidad a lo establecido en el considerando séptimo de la presente resolución.

SEXTO. Notifíquese y cúmplase.

Así definitivamente juzgando lo resolvió y firma la C. Juez Vigésimo de lo Civil de Cuantía Menor, licenciada María Teresa Rincón Anaya, ante la C. Secretaria de Acuerdos, licenciada Carmen Rocío Castillo Hernández, con quien actúa, autoriza y da fe.





# MATERIA PENAL



## SEXTA SALA PENAL

*MAGISTRADOS:*

MARÍA DE JESÚS MEDEL DÍAZ, MARTHA PATRICIA TARINDA  
AZUARA Y R. ALEJANDRO SENTÍES CARRILES

*PONENTE:*

MGDA. MARTHA PATRICIA TARINDA AZUARA

**Recurso de apelación interpuesto por la defensa particular, la defensa oficial del sentenciado y el Ministerio Público, en contra de la sentencia mayoritaria condenatoria dictada por el delito de homicidio calificado.**

**SUMARIO:** LA PERICIAL COMO MEDIO DE PRUEBA. Los medios de prueba en relación a la pericial, a la cual se les concede valor probatorio con fundamento en el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales, que a la letra señala: “La fuerza probatoria de todo dictamen pericial, incluso el cotejo de letras y los dictámenes de peritos científicos, será calificada por el Ministerio Público, por el juez o por el tribunal, según las circunstancias”. Se establecen como idóneos en virtud de que los peritos en la materia que intervinieron, practicaron todas las operaciones y experimentos que su ciencia les sugirió, expresando los hechos y circunstancias que sirvieron de base para emitir su dictamen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del Código en cita. Elementos de prueba que resultan aptos y suficientes para acreditar que la privación de la vida del pasivo ocurrió por una causa externa, esto es,

debido a la neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, que fue clasificada de mortal.

Ciudad de México, XX de XXX del XXXX.

Resolución mayoritaria, que pronuncian las magistradas licenciadas María de Jesús Medel Díaz y Martha Patricia Tarinda Azuara, integrantes de esta Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, respecto del toca XXX/XXXX, relativo al recurso de apelación interpuesto por la defensa particular del sentenciado RACIEL, la defensa oficial del sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR y el Ministerio Público, contra la sentencia condenatoria, dictada el XX de XXX del XXXX, por el Juez Interino Tercero Penal del Distrito Federal, a ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR y RACIEL, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, hipótesis, de ventaja: (cuando el agente es superior por el número de los que intervengan con él), (pasivo caído y activo de pie) e hipótesis de estado de alteración voluntaria: (cuando el agente lo cometa en estado de ebriedad), cometido en agravio de MARIANO, en la causa XXX/XXXX.

El sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR manifestó que su nombre correcto es ÓSCAR ALEJANDRO, cuenta con XX años de edad, fecha de nacimiento XX de XXX de XXXX, estado civil XXX, religión XXX, no pertenece a grupo étnico o indígena, habla y entiende el idioma castellano, originario de esta ciudad, con domicilio en calle XXX, número XX, colonia XXX delegación XXX, código postal XXXX, con instrucción séptimo semestre de la licenciatura en Derecho, ocupación desempleado.

El también sentenciado RACIEL manifestó contar con XX de edad, estado civil XXX, religión XXX, fecha de nacimiento XX de XXX de XXXX, no pertenece a ningún grupo étnico o indígena, habla y entiende el idioma castellano, originario de esta Ciudad, con domicilio en avenida XXX, número XX, colonia XXX primera sección, delegación XXX,

código postal XXXX, con instrucción décimo semestre de la licenciatura en XXX, ocupación particular (*sic*).

Sentenciados que se encuentran actualmente internos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

### RESULTANDO:

1. El Juez Interino Tercero Penal del Distrito Federal, con fecha XX de XXX del XXX dictó sentencia en la causa XXX/XXXX, la cual culmina en los siguientes puntos resolutivos:

...PRIMERO. ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR y RACIEL son penalmente responsables en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO hipótesis de ventaja (cuando el agente es superior por el número de los que intervengan con él), (pasivo caído y activo de pie) e hipótesis de estado de alteración voluntaria: (cuando el agente lo cometa en estado de ebriedad) en agravio de MARIANO, por el cual fueron acusados por el Ministerio Público, por lo que se considera justo y equitativo imponerles, una pena de XX años XX meses de prisión en términos del Considerando VI del presente fallo.

SEGUNDO. Se condena a la reparación del daño moral a los encausados ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR y RACIEL, consistente en el pago por concepto de indemnización por la muerte de su víctima por la suma de \$XXX (XXX 00/100 (*sic*) moneda nacional); asimismo, por concepto de daño material, deberá pagar por los gastos funerarios, la suma de \$XXX (XXX 20/100 Moneda Nacional); de ahí que el monto total de la sanción económica que nos ocupa asciende a la cantidad de \$XXX (XXX 80/100 Moneda Nacional). Se absuelve a los acusados ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR y RACIEL del concepto de perjuicios ocasionados, al no existir pruebas en la causa que vislumbren su actualización.

TERCERO. Se les niegan a los sentenciados ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR y RACIEL los sustitutivos de la pena de prisión, así como la suspensión

condicional de la ejecución de la pena, en términos del Considerando X de la presente resolución.

CUARTO. Como consecuencia de la pena de prisión impuesta, se ordena la suspensión de los derechos políticos de los sentenciados ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR y RACIEL, por un término igual a la sanción privativa de la libertad que se le impuso, en términos del Considerando IX de la presente.

QUINTO. Se ordena que los datos personales de las partes, habrán de quedar como confidenciales de manera indefinida, ello en términos del Considerando X de la presente.

SEXTO. Se ordena girar cédula de notificación personal a la conyugue (*sic*) del occiso, de nombre JESÚS (*sic*), para los efectos precisados en el Considerando XII de la presente resolución; asimismo, hágasele saber a los sentenciados y partes procesales el derecho que tienen para interponer el recurso de apelación en caso de inconformidad con la presente resolución, contando con un término de 05 cinco días, a partir de día siguiente de su notificación, gírense y distribúyanse las boletas de ley, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por último, en su oportunidad, cúmplase con lo establecido por el artículo 578 del cuerpo de leyes invocado.

Notifíquese y cúmplase...

2. Inconformes con la resolución anterior, la defensa particular del sentenciado RACIEL, la defensa oficial del sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR y el Ministerio Público, interpusieron recurso de apelación, que les fue admitido en ambos efectos por auto de fecha XX de XXX del XXXX, remitiéndose a esta Sala el expediente original, quedando radicado por auto del XX de XXX del XXXX, formándose el presente toca.

3. Celebrada la audiencia de vista a que se refiere el artículo 424 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se declara-

ron vistos los autos, quedando el Toca en estado de dictar la resolución respectiva, designándose como Ponente a la suscrita magistrada Martha Patricia Tarinda Azuara, y

### CONSIDERANDO:

I. Este Tribunal *ad quem* es competente para conocer y resolver el presente recurso en forma colegiada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, y 44, párrafo segundo, parte primera, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 23 constitucional.

II. El presente recurso tiene por finalidad que este *ad quem* estudie la legalidad de la resolución recurrida, tomando en cuenta lo establecido por el artículo 1o. constitucional respecto a que en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece, por lo que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia penal, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y tomando en cuenta que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, y por tanto queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y como consecuencia examinar si en la resolución se aplicó exactamente la ley, si se motivó y fundamentó de manera adecuada, se acataron los principios reguladores de la valoración de las pruebas y habrá de resolverse sobre los agravios expresados por los inconformes, y en virtud de tratarse de una apelación de la defensa y Ministerio Público, se suplirán las deficiencias que se observen en la manifestación de los agravios por lo que hace a la defensa, de acuerdo a lo preceptuado por el numeral 415 del código adjetivo penal; no así respecto a los agravios formulados por el Ministerio Público, en razón de que su estudio es de estricto derecho, de conformidad al precepto legal invocado, interpretado a *contrario sensu*.

III. Mediante escritos presentados los días XX de XXX, y XX de XXX, del XXX el Ministerio Público, la defensa particular del sentenciado RACIEL, y la defensa oficial del sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, respectivamente, expresaron agravios que obran en el presente toca, mismos que se tienen por reproducidos de acuerdo a su contenido y alcance, los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver el presente asunto.

IV. A efecto de determinar si en la presente causa se encuentra plenamente acreditado el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto en los artículos 123, párrafo único (hipótesis de al que prive de la vida a otro), en relación con el numeral 124, párrafo único (se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión), 138, párrafo inicial, fracción I (existe ventaja), inciso *a*) (cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se haya armado), *b*) (cuando es superior por el número de los que intervengan con él), e inciso *d*) (cuando éste



se haya caído y aquél de pie), y fracción VII (existe estado de alteración voluntaria: cuando el agente lo comete en estado de ebriedad), párrafo segundo (principio de invulnerabilidad), en concordancia al 15 (acción), 17 fracción I (instantáneo), 18, párrafos primero (acción dolosa) y párrafo segundo (conocer y querer), 22, fracción I (los que lo realicen por sí mismo), numerales del Código Penal para el Distrito Federal, cometido en agravio de MARIANO, que la representación social atribuye a ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR y RACIEL, se estima necesario analizar los elementos de prueba que obran en autos, como:

Declaración del denunciante ANDRÉS, ante el Ministerio Público Investigador (foja xx).

... el día de hoy sábado XX de XXX del año en curso (XXXX), siendo alrededor de las 20:30 veinte horas con treinta minutos a 21:00 veintiuna horas, al domicilio ubicado en la calle de XXX número XX, de la colonia XXX, de la delegación XXX, el declarante acudió a presentar (*sic*) a su señora madre de nombre AMELIA, por lo que al llegar al (*sic*) dicente al domicilio señalado se abrió la puerta principal, percatándose el declarante que quien abrió la puerta es uno de los hoy probables responsables detenidos, siendo a quien se identifica en este momento como quien dijo llamarse ÓSCAR y luego dijo llamarse ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, sujeto que al abrir la puerta dijo al declarante buenos (*sic*) noches, percatándose el declarante que este sujeto se encontraba ebrio ó (*sic*) drogado, ya que hablaba muy raro y se encontraba tambaleante, siendo que el de la voz entra al edificio y se dirige a la escalera, percatándose de que en ese momento, se abrió la puerta del departamento, ubicado junto a la entrada, saliendo del interior de este departamento una persona del sexo masculino, adulto mayor, de quien sabe responde al nombre de MARIANO (*sic*), de quien se entera en este momento cuenta con XX de edad, y esta persona le dice al sujeto que le abrió la puerta al declarante que, por qué le estaba tocando a su puerta, y el dicente procedió a subir las escaleras, dirigiéndose al primer nivel en donde se encuentra el departamento que habita la

mamá del declarante, sitio en donde al llegar el declarante, el de la voz llama a la puerta y le abrió su sobrina de nombre JOSEFINA, y el dicente ingresó al domicilio y se puso a platicar el dicente con su señora madre, cuando de repente y sin motivo se empezó a escuchar en el patio de la entrada del edificio, donde se encontraba el declarante, gritos de personas que se estaban peleando y enseguida golpes y las paredes se zimbarron (*sic*) y se oían gritos, y al declarante de inmediato se le vino a la cabeza la imagen del vecino del departamento, ubicado en la entrada del edificio quien le dijo al sujeto que le abrió la puerta del declarante que, por qué le estaba tocando la puerta, y el declarante de inmediato salió del departamento de su madre y se dirigió a la planta baja, siendo que al llegar al pasillo de la planta baja, el dicente se percató de que frente a la puerta del departamento, de la planta baja, que es el número XX, estaba tirado sobre el piso, el señor MARIANO (*sic*), de XX, y se encontraba de pie parado frente al señor MARIANO el sujeto que momentos antes le había abierto la puerta, al declarante de quien sabe el de la voz en este momento dijo llamarse ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, sujeto que estaba parado con las piernas abiertas y en medio de las mismas tenía el cuerpo del señor MARIANO (*sic*), quiere aclarar el dicente en este momento que el señor MARIANO (*sic*), es un asulto (*sic*) mayor de XX de edad, y el sujeto que dijo llamarse ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, es joven de aproximadamente XX de edad, y junto a este se encontraba otro sujeto de joven (*sic*), de piel clara, de quien sabe el dicente responde al nombre de RACIEL, de XX de edad, y de inmediato el dicente al ver la agresión, le grita a estos chavos, “ya dejen al señor, que no ven que ya está grande”, y en eso se voltea furioso ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, quien ve al dicente y le dice al declarante, “tú qué traes”, y este sujeto empieza a caminar retadoramente hacia el dicente, mientras le dice al de la voz, “a ti también te voy a dar tu chinga, qué te metes, pendejo”, y el dicente le dice a este sujeto, “cálmate, cálmate”, a la vez que el declarante empieza a caminar, subiendo las escaleras, siendo que en este momento el declarante ya se encontraba acompañado de su amigo de nombre MANUEL quien gritó a ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, “oye, cálmate, chamaco, no te pongas al

brinco, porque te vamos a calmar, ya bájale”, y en eso el otro chavo, quien viste bermudas de quien sabe el declarante responde al nombre de RACIEL, empieza a caminar dirigiéndose al amigo del dicente, a quien le dice, “mira tú pinche viejo, ya te cargo, la chingada te coy (*sic*) a partir bien tú madre, para que se te quite lo pendejo”, y en eso el amigo del declarante le dice al de la voz, súbete, vamos a llamar una patrulla, pero el dicente se quedó parado en las escaleras, diciéndole a los dos chavos que se calmaran; en eso llegó a donde estaba el declarante su señora madre quien le pregunta al dicente qué ocurría, y el declarante le dice a su mamá que se suba a la casa y el de la voz sube a su señora madre a su departamento, cierra la puerta, siendo que enseguida por la parte de afuera de la puerta, le empiezan a gritar al declarante los dos sujetos detenidos en este momento, “que saliera hijo de su pinche madre, te vamos a partir tu madre, sal, pendejo, te vamos a matar”, siendo que la madre del dicente se espanto (*sic*) muchísimo, y el declarante después de unos minutos y al cesar los gritos, el declarante abre la puerta y al nov er (*sic*) a nadie baja a la planta baja, acompañado de su amigo MANUEL, ya no vieron a los dos sujetos que les agredieron dentro del edificio, pero los ve que están parados en la calle frente a la entrada, por lo que el dicente sale a la calle y ve primero al sujeto que lo agredió de nombre RACIEL, siendo que en ese momento estaban llegando al lugar de los hechos, varias patrullas de la Policía Preventiva y el dicente, se dirige a los tripulantes, a quienes les pide que detengan a los sujetos que es (*sic*) acababan de agredir y quienes habían golpeado al vecino MARIANO, señalándoles el declarante a sus agresores siendo RACIEL y a ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, quienes estaban en la calle parados frente al edificio y el dicente les dice a los policías que dentro en el patio estaba tirado el vecino del departamento uno y que estaba lesionado, por lo que ingresan nuevamente al edificio y en eso se entrevistaron con al (*sic*) esposa del lesionado MARIANO (*sic*), a quien conoce el dicente por la señora CHUY, a quien le preguntaron que si estaba bien, y esta persona estaba aterrada y decía que los dos sujetos que habían agredido al declarante, habían golpeado a su esposo, quien es un adulto mayor y que a pesar de que su esposo estaba ya tirado en el piso lo seguían pateando y golpeando los

dos sujetos, quienes estaban de pie, pateando al lesionado, y el señor MARIANO (*sic*), sangraba de la cabeza, y decía que no podía mover sus piernas mismas que tenía estiradas, y se solicitó una ambulancia llegando al lugar una ambulancia del ERUM, no recuerdo datos de la misma, quienes dijeron que tenían que trasladar al lesionado a hospital de urgencias, ya que el señor MARIANO (*sic*), tenía fractura de cadera por los golpea (*sic*) recibidos y contusiones en cráneo, siendo que levantaron al lesionado y se lo llevaron al Hospital del XXX de XXXX, para brindarle atención médica, y el declarante y su amigo MANUEL, se trasladaron a esta oficina para rendir la presente declaración, siendo que en este momento por las amenazas recibidas, el declarante formula su querrela por lo que hace a la comisión del delito de amenazas cometido en su agravio y en contra de los hoy probables responsables quienes dijeron llamarse RACIEL y ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, mismos sujetos a quienes al tener a la vista de esta oficina reconoce plenamente y sin temor a equivocarse como a los mismos sujetos a quienes vio junto al hoy lesionado y amenazaron directamente al dicente con ocasionarle daño (*sic*) en su persona...

#### Declaración del denunciante MANUEL, ante el Ministerio Público Investigador (foja XX):

...el da (*sic*) de la fecha sábado XX de XXX del presente año alrededor de las 17:00 diecisiete a 17:30 diecisiete horas con treinta minutos, acudí al domicilio cito en la calle de XXX # XX esto en la colonia XXX, en la delegación XXX, sitio al que acudió el declarante para recoger a su señora (*sic*) madre, de nombre MARGARITA, quien se encontraba en el domicilio en comento, en el que vive su amiga AMELIA, a quien había hecho una visita, y al llegar el declarante al domicilio en mención e ingresar al edificio, el declarante se percató de que en uno de los departamentos ubicado al fondo de la planta baja, se escuchaba la música a todo volumen, y el declarante subió al primer nivel, en donde se encontró con su señor (*sic*) madre y se pusieron a platicar, y el declarante escuchó que iban hablando unas personas,

por lo que el declarante se asomó por la ventana del departamento en que se encontraban, que tiene vista al patio de la entrada y el dicente vio que iban saliendo a la calle dos sujetos del sexo masculino, a quienes identifica en este momento, como quienes dijeron llamarse RACIEL quien viste unas bermudas y ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO a quienes conoce el dicente de vista, y aproximadamente después de 10 diez minutos el dicente volvió a escuchar voces de personas quienes entraban al edificio y el declarante se asomó nuevamente por la ventana, percarándose (*sic*) de que quienes ingresaron al domicilio, eran estos mismos muchachos ya mencionados, quienes traían en las manos unas botellas de refresco y unas botellas de vidrio de las que no distinguió el de la voz su contenido, pero pensó el dicente que estos chavos habían ido a comprar más alcohol, para seguir en (*sic*) su fiesta, y es el caso de que siendo alrededor de las 20:30 veinte horas con treinta minutos a 21:00 veintiuna horas, llegó al domicilio en donde se encontraba el dicente, el hijo de la señora AMELIA siendo el denunciante de nombre ANDRÉS, quien es gran amigo del declarante, quien al llegar saludó a todos y se pudieron (*sic*) a platicar y momentos después (*sic*) se empezaron a escuchar voces de varias personas, quienes estaban en la planta baja en el patio y gritaban y se empezaron a escuchar golpes, como se azotaban y las paredes del edificio se zímbraban (*sic*), ya que el golpeo era muy fuerte y se oían gritos de mujer, que decía, “ya déjenlo, no lo golpean (*sic*), ya está grande y lo van a lastimar”, y en eso salió del departamento en que nos encontrábamos (*sic*), corriendo el amigo del declarante de nombre ANDRÉS, y la madre del declarante y la señora AMELIA empezaron a preguntar (*sic*) qué ocurría y el de la voz les dijo que se calmarán que no ocurría nada y el dicente salió del departamento y bajó las escaleras, encontrándose al final de la misma a su amigo ANDRÉS, a quien le estaba gritando uno de los chavos, a quien había visto el dicente momentos antes por la ventana ingresar al edificio, llevando unas botellas y a quien identifica el declarante como quien en esta oficina dijo llamarse ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, misma persona quien estaba parado sobre del vecino del departamento uno, quien es una persona adulta mayor y sabe el dicente responde al nombre de MARIANO (*sic*), de XX años de edad y

también estaba parado junto a este chavo, otro sujeto joven, de piel clara, de quien sabe el dicente en este momento, que responde al nombre de RACIEL de XX años de edad, quienes estaban gritando a ANDRÉS, “que qué se metía, que le iban a dar una chinga, que no se metiera y que le iban a partir su madre”, y se acercaban a ANDRÉS, retadoramente, motivo por lo cual el declarante interviene y les gritó a estos chavos “que se calmaran y que no se pusieran al brinco, que se tranquilizaran”, en eso le responde al declarante el sujeto de las bermudas, de nombre RACIEL, “mira pinche viejo, ya te cargo la chingada, a ti también te vamos a partir bien en tu madre, para que se te quite lo pendejo”, por lo que el declarante le dice a su amigo ANDRÉS, que se suban al departamento y llamen a la policía, y el dicente se sube e ingresa al departamento por lo que toma el teléfono y llamó al número de emergencias pidiendo una patrulla para que les auxiliara, ya que unos chavos habían agredido a el vecino del departamento uno y al dicente y a su amigo ANDRÉS y en eso el dicente escucha que azotan la puera (*sic*) del departamento y dentro del mismo ya estaba su amigo ANDRÉS, pero desde fuera del departamento, estaban gritando los dos chavos, quienes momentos antes les habían agredido verbalmente, quienes estaban golpeando la puerta y gritaban que saliéramos para que nos dieran en la madre y que nos iban a matar, estaban muy violentos, y después de unos minutos cesaron los gritos y el amigo del dicente de nombre ANDRÉS, abre la puerta pero ya no estaban los chavos, quienes los habían agredido, por lo que bajaron al patio y vieron que estaba tirado en el piso toda vía (*sic*), el vecino de nombre MARIANO (*sic*), acompañado de su esposa quien lo estaba atendiendo y el señor MARIANO, estaba sangrando de la cabeza, y el dicente y su amigo ANDRÉS vieron que los dos chavos estaban en la calle parados frente al edificio, por lo que al salir se percataron de que iban llegando las patrullas de la policía y de inmediato el de la voz se les acercó y les pidió que les auxiliaran y detuvieran a los dos chavos, quienes los habían agredido y amenazado, ya que estaban muy locos, y además habían golpeado a otro vecino, quien estaba dentro del edificio lesionado y era una (*sic*) adulto mayor, y así fue como los policías detubieron (*sic*) en ese momento a los dos agresores y los subieron a la patrulla, y el dicente ingresó

al edificio y se acercó al vecino lesionado y la esposa del mismo dijo que los dos chavos habían golpeado a su esposo y lo habían lesionado, y no les importó que estuviera (*sic*) viejo y lo patearon a pesar de que el señor estaba en el piso tirado y el señor MARIANO (*sic*), se quejaba de tener dolor y no podía mover sus piernas y además sangraba de la cabeza, llegando al lugar una ambulancia del ERUM, de la que no puse atención a sus características, pero los paramédicos que atendieron al señor MARIANO dijeron que estaba delicado y que tenían que ingresarlo de inmediato al hospital de urgencias, ya que tenía fracturada la cadera a causa de la golpisa (*sic*) recibida, y además tenía contusiones en el cráneo, motivo por lo que levantaron al lesionado y dijeron que lo iban a trasladar al Hospital del ISSSTE de XXX, para que le pudieran brindar la atención médica debida, así mismo al ver el dicente que los policías ya tenían las patrullas a los dos agresores, el de la voz y su amigo ANDRÉS procedieron a pedir a los policías los trajeran a esta oficina para querrellarse por las amenazas recibidas, de parte de los hoy detenidos, hecho por lo cual en este momento el de la voz formula su querrella por la comisión del delito de amenazas, cometido en su agravio y en contra de los hoy probables responsables, de quienes sabe dijeron responder a los nombres de RACIEL y ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, mismos sujetos a quienes al tener a la vista en esta oficina reconoce plenamente y sin temor a equivocarse como a los mismos sujetos a quienes vio junto al hoy lesionado y amenazaron directamente al dicente con ocasionarle daño (*sic*) en su persona, agrega que los hoy detenidos estaban muy agresivos y locos, ya que gritaban y pateaban la patrulla y al llegar a esta oficina bno (*sic*) dejaban de gritar y amenazar al personal y estaban muy agresivos y no se callaban...

**Declaración del policía remitente DAVID, ante el Ministerio Público Investigador (foja 16):**

...el día XX de XXX del año XXXX, siendo aproximadamente a las 21:20 veintinueve horas con veinte minutos, al caminar junto (*sic*) mi compañero el también policía

LUCIO, con placa XXX, sobre la calle de XXX a la altura de la avenida XXX, en la colonia XXX, vía radio nos indican que pasáramos a la calle de XXX y XXX, de la colonia XXX, en virtud de que se estaba reportando una riña, por lo que de inmediato nos trasladamos a dicho lugar, en donde nos percatamos que sobre la calle de XXX, frente al número XX, se encontraban dos sujetos del sexo masculino, que dijeron llamarse ÓSCAR ALEJANDRO y/o ÓSCAR, de XX años de edad y RAZIEL (*sic*) de XX de edad, quienes se apreciaban al parecer en estado de ebriedad, y en el lugar se encontraban varias personas, que dijeron ser vecinos de dicho inmueble y quienes nos manifestaron que los sujetos antes refeidos (*sic*), momentos antes habían golpeado al señor MARIANO (*sic*), XX de edad, quien habita en el departamento número XX, del inmueble marcado con el número XX de la calle de XXX, motivo por el cual procedí a asegurar a quien dijo llamarse ÓSCAR ALEJANDRO y/o ÓSCAR, de XX años de edad, mientras que mi compañero aseguró a RAZIEL (*sic*), de XX de edad, por lo que se pidió va (*sic*) radio el apoyo de una ambulancia, la cual llego minutos (*sic*) después, siedo (*sic*) la ambulancia número XX, de protección civil al mando (*sic*) del paramédico MARTÍN, con dos más de personal, quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado MARIANO (*sic*), quien se encontraba en tirado (*sic*) en el piso de su vivienda, apreciándosele un golpe en la frente del lado izquierdo, motivo por el cual fue trasladado por los paramédicos de dicha ambulancia al XXX de XXX, por lo que fuimos apoyados por la patrulla P-XXX para trasladar a dichos sujeto (*sic*), así mismo se trasladaron a estas oficinas los testigos MANUEL y ANMDRÉS (*sic*), motivo por el cual en este acto presento formal denuncia por el delito de lesiones, cometidas en agravio de MARIANO (*sic*), y en contra de ÓSCAR y RAZIEL (*sic*), ratificando en todas y cada una de sus partes, mi formato de detenidos puestos a disposición, reconociendo como mía la firma que obra al reverso, poniendo a disposición a los que dijeron llamarse ÓSCAR de XX de edad y RAZIEL (*sic*) de (*sic*), XX de edad deseando agregar que no me constan los hechos...

Ampliación de declaración del policía remitente DAVID, ante el juez que conoce de la causa (foja XXXX).



...ratifica en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de los hechos, reconociendo como suyas las firmas que obran al margen de la misma por haber sido puestas de su puño y letra, sin tener nada más que agregar o aclarar. A preguntas de la agente del Ministerio Público, respondió: ...que no tuvo diálogo con el ofendido; que los vecinos no les manifestaron de qué forma fue golpeado el agraviado; que no recuerda los nombres de las personas que le manifestaron que golpearon al ofendido; a preguntas del defensor de oficio del procesado ÓSCAR ALEJANDRO U ÓSCAR U ÓSCAR, respondió: que sabe que son vecinos los que habían golpeado al agraviado, ya que manifestaron que vivían cerca del lugar; que fue sobre la banqueta donde tienen por primera vez a la vista al señor MARIANO; que no tuvo comunicación con el señor MARIANO; que no sabe por qué motivo se encontraba lesionado el señor MARIANO; que no recuerda que le hayan hecho alguna manifestación los procesados al momento de ser asegurados...

#### Declaración del policía remitente LUCIO, ante el Ministerio Público Investigador (foja XX).

...el día XX de XXX del año XXXX, siendo aproximadamente a las 21:20 veintuna horas con veinte minutos, al caminar junto a mi compañero también policía DAVID, con placa XXX, sobre la calle de XXX, a la altura de la avenida XXX, en la colonia XXX, vía radio nos indican que pasáramos a la calle de XXX y XXX, de la colonia XXX, en virtud de que se estaba reportando una riña, por lo que de inmediato nos trasladamos a dicho lugar, en donde nos percatamos que sobre la calle de XXX, frente al número XX, se encontraban dos sujetos del sexo masculino, que dijeron llamarse ÓSCAR ALEJANDRO y/o ÓSCAR, de XX años de edad y RAZIEL (*sic*), de XX años de edad, quienes se apercian (*sic*) la parecer (*sic*) en estad (*sic*) de ebriedad, siendo que en el lugar también se encontraban varios vecinos de dicho inmueble, quienes nos erfirieron (*sic*) que ambos sujetos momentos antes habían golpeado al señor MARIANO (*sic*), de XX años de edad, quien habita en el departamento número X del inmueble marcado con el número XX, dela (*sic*) calle

de XXX, motivo por el cual procedí a asegurar al que dijo llamarse RACIEL, mientras que mi compañero aseguró ÓSCAR ALEJANDRO y/o ÓSCAR, solicitando el apoyo de una ambulancia llegando minutos después la ambulancia número X, de Protección Civil al mando (*sic*) del paramédico MARTÍN, con dos más de personal, quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado MARIANO (*sic*), quien se encontraba en tirado (*sic*) en el piso de su vivienda, apreciándosele un golpe en la frente de lado izquierdo, manifestando el paramédico MARTÍN, que el señor MARIANO (*sic*), de XX años de edad, presentaba fractura de cadera, motivo por el cual fue trasladado por los paramédicos de dicha ambulancia al ISSTE (*sic*) de XXXX, por lo que procedimos a trasladar a dichos sujetos a bordo de la patrulla P-XXXX quien nos prestó el apoyo, así mismo, se trasladaron a estas oficinas los testigo (*sic*) MANUEL y ANDRÉS, motivo por el cual en este acto presento formal denuncia, por el delito de lesiones, cometidas en agravio de MARIANO (*sic*), y en contra de ÓSCAR ALEJANDRO y/o ÓSCAR y RACIEL, de XX años de edad, ratificando en todas y cada una de sus partes, mi formato de detenidos puestos a disposición, reconociendo como mía la firma que obra al reverso, poniendo a disposición a los que dijeron llamarse ÓSCAR ALEJANDRO y/o ÓSCAR, de XX de edad, RACIEL, de (*sic*) XX años de edad, deseando agregar que no me constan los hechos...

Ampliación de declaración del policía remitente LUCIO, ante el juez que conoce de la causa (foja XXXX).

...ratifica en todas y cada una de sus partes por contener, la verdad de los hechos, reconociendo como suyas las firmas que obran al margen de la misma por haber sido puestas de su puño y letra, sin tener nada más que agregar o aclarar. A preguntas del Ministerio Público previa su calificación de legales respondió: "... que no tuvo diálogo con el ofendido; que no recuerda que le hayan manifestado los vecinos de qué forma fue golpeado el agraviado; que no recuerda los nombres de la personas (*sic*) que le manifestaron que golpearon al ofendido; a preguntas del defensor de oficio del procesado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR,

respondió: que sabe que son vecinos los que habían golpeado al agraviado, ya que manifestaron que vivían cerca del lugar; que no recuerda en qué lugar tiene por primera vez a la vista al señor MARIANO; que no tuvo comunicación con el señor MARIANO; que no sabe por qué motivo se encontraba lesionado el señor MARIANO; que no recuerda que le haya hecho alguna manifestación los procesados al momento de ser asegurados; a preguntas del defensor particular del procesado RACIEL, respondió: que no recuerda que le haya manifestado la esposa del agraviado de qué forma lo golpearon...

El formato de detenidos puestos a disposición del Ministerio Público signado por los policías remitentes DAVID y LUCIO (foja XX).

...Persona solicitante: MARÍA DE JESÚS (*sic*), MANUEL (*sic*), ANDRÉS. Personas detenidas: (*sic*) RACIEL y ÓSCAR, quienes opusieron resistencia física y verbal, siendo aproximadamente las 21:20 veintiuna horas con treinta minutos del día XX de XXX de XXXX, recibimos el reporte vía radio, para pasar a las calles de XXX XXX, colonia XXX, al llegar al lugar nos solicita el apoyo para presentar ante la representación social a 2 dos personas del sexo masculino, ya que manifestaron que momentos antes habían golpeado a su esposo de nombre MARIANO (*sic*), de XX años, arribando al lugar la ambulancia del (*sic*) protección civil de XXX número XX, al mando el Paramédico MARTÍN con 2 dos (*sic*) personal. Diagnosticando fractura de cadera, por lo que lo trasladan al Hospital de (*sic*) XXX de XXX...

Certificado de estado físico del acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR (foja XX).

...del cual se concluyó que éste se encontraba: ... si conciente (*sic*), si ambulatorio, no coherente, no congruente en su discurso, no orientado en tiempo, no lugar, si persona, a la exploración física aliento etílico, marcha y coordinación motriz alteradas, conjuntivas hiperamíacas (*sic*), reflejos pupilares lentos, cavidad en regular estado de hidratación, disectrico, dislalico, verborreico, romberg positivo, ebrio

clínicamente, tiempo de recuperación 08 ocho a 10 diez horas aproximadamente. No permite revisión médica; clasificación provisional de las lesiones: posterior a tiempo de recuperación...

Certificado de estado físico del acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR (foja XX) ...Suscrito por la doctora HORTENSIA, del cual a la exploración médico legal concluyó: consciente, orientado en tiempo, lugar y persona, discurso coherente y congruente, aliento sin olor especial, no ebrio, marcha normal, palabra normal, romberg negativo a la exploración física como lesiones presenta equimosis rojizas en: región tenar derecha con edema que mide ocho por cinco centímetros; en pulgar derecho; en cara dorsal de la falange proximal del índice derecho y cuarto metacarpiano que mide seis por tres centímetros con edema, sin limitación funcional; con edema en cara externa de codo derecho que mide seis por cuatro centímetros; en forma difusa con cara posteroexterna del tercio distal de antebrazo izquierdo que mide dos por uno y medio centímetros y en cara posterior del tercio distal que mide dos por un centímetros, excoriaciones lineales en las siguientes regiones: cara externa del tercio proximal de brazo izquierdo que (*sic*) veinte por un milímetro y en cara posterior que mide veinte por un milímetros (*sic*) y en cara externa del tercio medio de brazo que mide ocho por un milímetros: rash (*sic*) cutáneo generalizado que no ocasiona prurito. Clasificación provisional de lesiones: no ebrio, lesiones que tardan en sanar menos de quince días.

Certificado de estado físico del acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR (foja 131) "...suscrito por la doctora ADRIANA, a lo que concluyó a la exploración física: despierto, orientado en tiempo, lugar y persona, marcha y coordinación motriz normal, discurso coherente y congruente, aliento sin olor característico, mucosa oral hidratada, romberg negativo, clínicamente no ebrio. Se refiere sano. Permite la

revisión; al exterior presenta equimosis vinosas irregulares localizadas en: dorso y palma de mano derecha, cara externa tercio proximal de antebrazo izquierdo, cara posterior tercio medio y distal del antebrazo izquierdo, cara posterior tercio proximal de antebrazo derecho, cara posterior tercio medio de antebrazo derecho, escapular derecha, la mayor de diez por doce centímetros y la menor dos por un centímetro. Refiere dolor en tobillo derecho, con arcos de movilidad conservados. Lesiones que tardan en sanar más de quince días”.

Certificado de estado físico del acusado RACIEL (foja XX).

...del cual se concluyó que éste se encontraba: si conciente (*sic*), si ambulatorio, no coherente, no congruente en su discurso, no orientado en tiempo, no lugar, si persona, a la exploración física; aliento etílico, marcha y coordinación motriz alteradas, conjuntivas hiperémicas, reflejos pupilares lentos, cavidad en regular estado de hidratación, disartrico, dislítico, verborreico, romberg positivo, ebrio clínicamente, tiempo de recuperación de 08 ocho a 10 diez horas aproximadamente. No permite exploración médica. Clasificación provisional de las lesiones. Posterior a tiempo de recuperación...

Certificado de estado físico del acusado RACIEL (foja XX) “...suscrito por la doctora HORTENSIA, del cual a la exploración médico legal, se apreció: conciente (*sic*), orientado en tiempo, lugar y persona, discurso coherente, congruente, aliento sin olor especial, no ebrio, marcha normal, palabra normal, romberg negativo a la exploración física como lesiones presenta equimosis rojiza oval en región escapular izquierda que miden: en forma difusa de veinte por quince milímetros y de tres y medio por dos y medio centímetros; de forma irregular en forma anterointerna del tercio medio de antebrazo izquierdo que mide doce por cinco milímetros. Una excoriación lineal cubierta con costra hemática rojiza en cara anterointerna del tercio distal de antebrazo izquierdo que mide ocho por dos milímetros. Clasificación provisional de lesiones: no ebrio, lesiones que tardan en sanar menos de quince días”.

Certificado de estado físico del acusado RACIEL (foja XXX) "...Suscrito por la doctora ADRIANA quien a la exploración física concluyo: despierto, orientado, marcha y coordinación motriz normal, discurso coherente y congruente, aliento sin olor característico, mucosa oral hidratada, romberg negativo, clínicamente no ebrio. Se refiere sano, permite la revisión. Al exterior presenta equimosis negras irregulares localizadas en cara interna tercio medio de antebrazo izquierdo, escapular izquierda, en cara externa tercio proximal de muslo izquierdo, la mayor de cuatro por dos centímetros y la menor uno por medio centímetro. Excoriación lineal con costra seca de siete centímetros en cara interna, tercio medio de antebrazo izquierdo. Lesiones que tardan en sanar menos de quince días."

Certificado de estado físico del lesionado MARIANO, (foja XX)

...a la Exploración Física, se lee "Paciente que se encuentra en la cama 04 cuatro de urgencias del XXX XXXX, en decúbito dorsal con posición forzada a expensas de miembro pélvico derecho, quejumbroso, refiere dolor intenso en cadera y muslo, poco cooperador al interrogatorio y exploración física, con base anota de ortopedia de fecha XXXXX, suscrita por el doctor SOTO, refiere que falta estudio radiográfico de pelvis para estar en posibilidad de emitir el diagnóstico: así mismo, se cuenta con el antecedente de caída de su propia altura por terceras personas (empujón), pendiente estudios radiografías. Clasificación provisional de lesiones: pendiente clasificación de lesiones...

Certificado de estado físico del lesionado MARIANO, (foja 70) "...Suscrito por el doctor JOEL ALBERTO. Paciente que se encuentra en el servicio de urgencias del Hospital de XXXX XXX folio XXXX, fecha de admisión: XX de XXX de XXXX 21:14 veintiuna horas con catorce minutos. Paciente orientado en tiempo, lugar y espacio, tensión arterial 120/80 mmhg. Frecuencia cardiaca 70 setenta por minuto y respiratoria 20 veinte por minuto presenta excoriación en piel cabelluda y que interesa piel de un centímetro de longitud, deformidad de la cadera, acortamiento de (*sic*) pierna derecha y dificultad para efectuar movimientos propios de miembro podálico derecho, impresión diagnóstica, luxación de cadera, descartar fractura (*sic*) de cadera,

doctor. Monjarás, 144 ciento cuarenta y cuatro. nota de valoración de ortopedia. XX de XXX de XXXX, 21:43 veintiuna horas con cuarenta y tres minutos. Dolor en cadera, miembro pélvico en actitud de rotación interna y flexión, acortamiento de aproximadamente dos centímetros con ligero aumento de volumen el muslo, crepitación ósea sin equimosis, puede tratarse de una fractura subcapital vs. luxación de cadera, se solicitan rayos anteroposterior de pelvis, doctor. MBTYO. Interpretación de los rayos XS, fractura de cadera, lado derecho, actualmente paciente, consiente, integro, encamado con solución intravenosa, escoriación con costra en piel cabelluda de dos por punto cinco centímetros en región frotto temporal. Lesión que tarda en sanar más de quince días y menos de sesenta días, nota: clasificación provisional que es muy probable que cambie, dependiendo de la evolución y de efectos de la eecuperación (*sic*) sobre el miembro pélvico afectado...”.

Certificado de estado físico del lesionado MARIANO, (foja XXX) “...siendo las 15:00 quince horas del día de la fecha, examinó a un individuo de sexo masculino, quien dijo llamarse MARIANO (*sic*), quien a la exploración física: conciente (*sic*), orientado en tiempo, lugar y persona, lenguaje coherente y congruente, aliento no especial, en la cama XX del hospital XXX de XXXX, presenta costra hemática seca en forma de “C” de cuatro y medio centímetros, y otra de medio centímetro, en región frontal izquierda, aumento de volumen con rotación externa limitación funcional y acortamiento del miembro pélvico derecho según nota médica de ortopedia del doctor Quintana R2 TYO (*sic*) radiológicamente se observa pérdida de la continuidad ósea en línea transtocantera con trazo completo y desprendimiento del trocanter menor, se ingresa para tratamiento quirúrgico que es reducción abierta y fijación interna y colocación de clavo centromedular adendum (*sic*), refieren que el paciente tiene osteoporosis severa, con pronóstico reservado a evolución, lesiones que fueron clasificadas provisionalmente como lesiones que tardan en sanar más de sesenta días...”.

Declaración del ofendido MARIANO ante el Ministerio Público Investigador (foja XX).

...que el día de ayer XX de XXX de XXXX, como a las 16:00 dieciséis horas, en compañía de su esposa de nombre María De Jesús, estaban en su vivienda, cuando escuchó que su vecino de nombre RACIEL (*sic*) comenzó a tocar la puerta y las ventanas, el emitente abrió la puerta y ve al vecino acompañado de otros, (*sic*) un sujeto, de inmediato y sin motivo alguno se le avienta hacia el cuerpo, perdió el equilibrio y cayó en el patio, cuando ya estaba sobre el suelo su vecino RACIEL (*sic*) que es una persona agresiva, comenzó a darle de patadas en la pierna derecha y otro de los sujetos que traía un suéter rojo también le dio de patadas y este sujeto lo levanto a la fuerza y le dice “levántese no se haga pendejo, no le pasa nada”, sus vecinos salieron y en ese momento casi a rastras entró a su vivienda, los vecinos hablaron a la patrulla y detuvieron a los sujetos, quiere agregar que el señor RACIEL (*sic*), es muy agresivo con todos los vecinos y el día de ayer estaba tomando bebidas alcohólicas, en compañía del otro sujeto y por esa razón fue a patear la puerta y las ventanas de la vivienda, denuncia el delito de lesiones en su agravio y en contra de RACIEL, ÓSCAR o ÓSCAR o ALEJANDRO se dice ÓSCAR ALEJANDRO...

En ampliación de declaración (foja XXX), ante el Ministerio Público Investigador, ratificó en todas y cada una de sus partes el contenido de su anterior declaración, reconociendo la firma que obra en ésta, por ser suya, deseando agregar:

...Que ya rindió su declaración anteriormente y una vez que se le vuelve a leer la declaración que rindió ante el personal del Ministerio Público de la coordinación Miguel Hidalgo la ratifica por contener la verdad de los hechos deseando hacer una corrección ya que refiere que el nombre de su vecino, una vez que tuvo a la vista las fotografías y aclarar que obran en fojas XX y XX, que el nombre de su vecino es ÓSCAR ALEJANDRO, y que esta persona quien lo empujó el día sábado XX de XXX del año en curso, aproximadamente a las 20:30 veinte horas con treinta minutos y que con motivo de que ÓSCAR ALE-



JANDRO, lo empujó, se cayó al piso y una vez en el piso lo comenzó a patear ÓSCAR ALEJANDRO, que mi esposa comenzó a gritar y que después llegó otra persona a quien por medio de las fotografías identifiqué como RACIEL, el cual trata de levantarme, encontrándose esta persona tras de mí y me alzo aproximadamente 15 quince centímetros, diciéndome “no te hagas pendejo, no tienes nada, y como no me levanté, me dejó caer, volviéndome a lastimar, después me arrastré hacia mi departamento, hasta que después llegaron varias patrullas y a mí me subieron a una ambulancia, siendo esto lo que sucedió que un primer momento manifesté que RACIEL me había agredido y golpeado pero fue debido a que no conocía sus nombres, pero una vez que observé las fotos a color, quiero manifestar que la persona que me agredió fue ÓSCAR ALEJANDRO y que RACIEL, trata de levantarme, pero como vio que no me levantaba, me soltó, dejándome caer de nuevo, por lo que formulo mi querrela, por el delito de lesiones, cometidas en mi agravio y en contra de ÓSCAR ALEJANDRO y de RACIEL (*sic*) siendo todo lo que deseo manifestar, que los dos sujetos al parecer se encontraban tomados...

Las impresiones fotográficas relativas a los enjuiciados y al lugar de los hechos (foja XX), cadáver (fojas XXX y XXX).

...consistentes en 3 tres fotografías del acusado RACIEL; 3 tres fotografías de ÓSCAR u ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO; y 12 doce fotografías del lugar de los hechos, además de contar con 30 treinta fotografías del cadáver del occiso MARIANO.

Declaración de la testigo MARÍA DE JESÚS, ante el Ministerio Público Investigador (foja 99).

...comparezco ante esta autoridad de manera particular, libre y voluntaria, para manifestar en relación a los hechos lo siguiente: que soy esposa del hoy lesionado, cuyo nombre correcto es MARIANO, desde hace aproximadamente 51 cincuenta y

un años, que nuestro domicilio siempre ha sido el ubicado en la calle de XXX, número XX , departamento XX, colonia XXX, delegación XXX que desde hace aproximadamente 25 veinticinco años lo habitamos solo nosotros dos, ya que nuestro hijo se casó y se independizó y es el caso que el día sábado XX del mes de XXX del año en curso, muy temprano, un vecino que tenemos y habita en el departamento número XX tres del mismo domicilio, cuyo nombre ahora me entero es ÓSCAR ALEJANDRO, tenía muy fuerte el volumen de su aparato de música, siendo esto todo el día, logrando observar en el transcurso del mismo día, que al parecer eran dos personas, las que acompañaban a ÓSCAR ALEJANDRO, y resulta ser que aproximadamente las 20:30 veinte horas con treinta minutos del mismo día y encontrándome con mi marido hoy lesionado, viendo televisión, se escucharon varios toquidos, muy fuertes en nuestra puerta del departamento, por lo que mi marido se levantó y acudió al acceso de nuestro departamento, donde al abrir la puerta escuché que mi esposo dijo “qué te pasa, por qué tocaste la puerta”, de inmediato se metió mi esposo y me dijo que se trataba del vecino, refiriéndose a ÓSCAR ALEJANDRO después de unos 05 cinco minutos, se escuchó que azotaron muy fuerte la puerta principal de acceso a los departamentos, lo anterior debido a que nuestro departamento se encuentra justo al lado de la entrada principal, en ese momento mi esposo volvió a pararse y se dirigió a la puerta de nuestro departamento y yo seguí a mi esposo, en ese momento mi esposo volvió al abrir la puerta de nuestro departamento y salir encontrándose en el pasillo, dando la espalda a la puerta principal del edificio, se encontró de frente con el vecino de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, y mi esposo le dijo que “porqué se portaba agresivo y había azotado la puerta”, en ese momento y sin motivo alguno, el sujeto de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, empujó con ambas manos a mi esposo y debido a esta acción, mi esposo al caer, se golpea la cabeza, con unos medidores que se encuentran en el pasillo a un lado de la puerta de acceso del edificio y cayó sentado, lastimándose la pierna derecha, ante eso yo comencé a gritar que “lo dejara en paz” y comencé a solicitar auxilio a los vecinos del edificio, observando en eso como el sujeto agresor ÓSCAR ALEJANDRO, comenzó a patear a mi esposo, encontrándose éste tendido en el piso, patadas que le daba en la pierna derecha, mientras que

mi esposo sólo se quejaba, en ese momento ví que salió del departamento número 3, otra persona, a quien en este momento identifiqué por medio de las fotografías que obran en el expediente, como RACIEL, sujeto que al percatarse de las agresiones acudió de inmediato a donde se encontraba ÓSCAR ALEJANDRO, lesionando a mi esposo, sujeto que se acercó enseguida y empujó a ÓSCAR ALEJANDRO, por lo que éste dejó de patear a mi esposo, enseguida el sujeto de nombre RACIEL, se colocó detrás de mi esposo, lo sujetó de sus hombros y le dijo “Ya levántate viejo, no te hagas tonto”, pero observé que mi esposo no podía levantarse y observaba que su pierna derecha le bailaba, como mi esposo no se levantó, éste sujeto de nombre RACIEL, lo dejó caer de una altura de veinte centímetros, ya que como referí, se encontraba sujetándolo de los hombros, por lo que mi esposo nuevamente se dio otro sentonazo, observando que ya se encontraban otros vecinos, reclamándoles a estos sujetos de nombres ÓSCAR ALEJANDRO y RACIEL, pero estos de inmediato se dirigieron hacia ellos, los cuales viven en la planta alta del edificio, en ese momento y al ver que mi esposo se arrastraba hacia nuestro departamento, traté de llamar por teléfono, solicitando auxilio, después llamé a mi hijo Mario, para enterarlo de los hechos, presentando rápidamente varias patrullas, los cuales procedieron a detener a los sujetos, siendo el vecino de nombre ÓSCAR ALEJANDRO y su acompañante RACIEL, mientras que se presentó una ambulancia, cuyos paramédicos revisaron a mi esposo y dijeron que sería trasladado al Hospital de XXXX, para su atención y para descartar posibles fracturas, quiero manifestar que actualmente mi esposo se encuentra en el Hospital XXXX, en la cama XX ya que los médicos ya me confirmaron que, mi esposo tiene fractura de cadera y lo operan el día lunes o martes, así mismo una vez que me fue leída la declaración de mi señor esposo, la cual obra en fojas 60 y 61, en la misma se aprecia que mi esposo acusa a RACIEL, como el mismo que lo golpeó pero quiero manifestar que mi esposo se está confundiendo, ya que el sujeto que lo golpeó se llama ÓSCAR ALEJANDRO, así mismo que posiblemente se haya confundido (*sic*), ya que no sabíamos los nombres de estos sujetos, sino que al llegar a estas oficinas, nos indicaron cuales eran sus nombres; asimismo, que al vecino de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, lo conozco de vista desde hace un año

aproximadamente, ya que es el tiempo que al parecer lleva viviendo en dicho lugar, que por cuanto hace al otro sujeto, en cuya foto tiene el nombre de RACIEL, nunca lo había visto, siendo todo lo que sucedió...

Posteriormente, ante el órgano investigador (foja XXX), “ratificó en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de los hechos y la misma que firmé de mi puño y letra ante la autoridad ministerial que me recabó dicha declaración, que el motivo de esta nueva comparecencia y del inicio de la presente averiguación previa relacionada es para manifestar que, el día XX de XXX del XXXX, aproximadamente a las 00:30 cero horas con treinta minutos, recibí mi hijo de nombre MARIO, una llamada telefónica, de una persona que dijo ser trabajadora social del Hospital de XXXX (*sic*), que se encuentra en la calle de XXX, número XX de la colonia XXX, delegación XXX, de quien desconozco su nombre, quien le informó que mi esposo de nombre MARIANO, de XX años de edad, había fallecido, el día de ayer XX de XXX del XXX, aproximadamente a las 23:00 veintitrés horas, sin decirle la causa del fallecimiento de mi esposo, sólo me pidió, que acudiéramos a la brevedad posible al hospital para hacer los trámites necesarios, para la entrega de mi esposo, de su acta de defunción, es por ello que en ese momento mi hijo me indicó lo que la trabajadora social le había dicho y es así que los dos acudimos de inmediato al hospital, que en ese momento no había nadie de mi familia con mi esposo, porque yo estoy enferma ya que tengo artritis reumatoide y mi hijo tenía que trabajar y como somos los únicos familiares que tiene mi esposo, por eso no estaba con nadie, cuando llegamos al hospital XXXX, mi hijo y yo estuvimos haciendo las gestiones necesarias para que nos entregaran certificado de defunción de mi esposo, el cual nos fue entregado por los Médicos que estaban tratando a mi esposo en el hospital XXXX, siendo entregado este certificado de defunción aproximadamente a las 03:00 tres horas y con dicho

certificado mi hijo empezó los trámites con la empresa funeraria, a fin de que nos hicieran la entrega del cuerpo de mi esposo y poderlo velar, siendo así que el cuerpo de mi esposo se lo entregaron a mi hijo, aproximadamente a las 12:30 doce horas con treinta minutos del día de hoy en el hospital XXXX y de ahí fue trasladado por la empresa funeraria del XXX, a los Velatorios Solidaridad del XXX que se encuentra en la calle de XXX, número XX, esquina con XXX, en la colonia XXX, en la delegación XXX, en esta Ciudad de México, a la cual llegó el cuerpo de mi esposo, aproximadamente a las 12:50 doce horas con cincuenta minutos del día de hoy, que los trámites con la funeraria los realizó directamente mi hijo, mientras yo permanecí en mi domicilio, acompañada de una vecina de nombre Amelia, de la que desconozco sus apellidos, aproximadamente a las 12:30 doce horas con treinta minutos, mi vecina y yo escuchamos que el vecino del departamento XX de nombre ÓSCAR ALEJANDRO de XX años de edad se encontraba en su departamento y entonces decidí con mi vecina Amelia solicitar el auxilio de la policía, ya que en primera tengo miedo de lo que me pueda hacer y en segunda porque mi esposo había fallecido, a consecuencia de los golpes que éste le dio, junto con el sujeto de nombre RACIEL, de XX años de edad, el día XX de XXX de XXX, aproximadamente a las 20:30 veinte horas con treinta minutos, a las afueras de mi departamento, que se encuentra en la calle de XXX, en el número XX departamento XX, de la colonia XXX, de la delegación XXX, tal y como ya lo he declarado en mi comparecencia que he ratificado, es así que solicité el apoyo de la policía preventiva, por vía telefónica, llegando la policía aproximadamente a los cinco minutos, siendo que al llegar estos les expliqué todo lo que había pasado con mi esposo y de la persona que le había pegado y por culpa de esos golpes mi esposo falleció, por eso que le pedí a los policías que detuvieran al vecino, ya que era peligroso y que no lo dejaran ir, y así los policías esperaron a las afueras del inmueble donde está mi depar-

tamento, a que saliera el vecino de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, de (sic) XX años de edad, y siendo aproximadamente las 13:30 trece horas con treinta minutos, del mismo día de hoy XX de XXX de XXX, dicho sujeto salió de su departamento hacia la calle y a las afueras del inmueble, fue que los policías a petición mía lo detuvieron y lo subieron a la patrulla y lo trajeron a esta agencia a petición mía, así como de mi hijo y de mi nuera que en ese momento se encontraban conmigo, ya que iban llegando por mí para ir al velatorio, es por ello que en este momento al tener a la vista en estas oficinas al sujeto de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, de (sic) XX años de edad lo reconozco plenamente como a la persona a la que me refiero en esta declaración, que en este momento denuncio el delito de HOMICIDIO DOLOSO, en agravio de mi esposo MARIANO, de XX de edad, y en contra de ÓSCAR ALEJANDRO, de (sic) XX años de edad u ÓSCAR U ÓSCAR y en contra de RACIEL, aclarando que mi esposo desde el día XX de XXX. En que fue ingresado al hospital de XXXX del XXX para la atención de las lesiones que le provocaron los sujetos de nombres ÓSCAR ALEJANDRO, de (sic) XX años de u ÓSCAR U ÓSCAR, y en contra de RACIEL, no volvió a salir del hospital, ya que todo el tiempo estuvo en el mismo tratando de sanar de las lesiones que estos sujetos le provocaron de forma agresiva y violenta, a pesar de que sabían que mi esposo era una persona de edad adulta, sin la misma fuerza que ellos tienen y pido en este momento por todo lo anterior que se le practique la necropsia de ley al cuerpo de mi esposo, así como las diligencias que sean necesarias, para que se determinen la causa del fallecimiento de éste, que es todo lo que tengo que declarar, por lo que previa lectura de mi dicho lo ratifico y firmo para constancia legal...

En ampliación de declaración ante el juez del conocimiento (foja XXXX Vta.), ratificó sus anteriores declaraciones, y a preguntas de las partes, contestó:

...A preguntas del agente del ministerio público, contestó: “que la distancia aproximada a la que la declarante se encontraba de los sujetos cuando observó que golpeaban a su esposo, fue como de 1 un metro; que en el momento en que la declarante observaba tales hechos, sólo les decía a los sujetos que no lo golpearan a su esposo, que lo dejaran en paz.- A preguntas del defensor público, respondió: que la dicente se encontraba en la puerta de su casa, al momento que le dijo al procesado de nombre ÓSCAR que dejara en paz a su esposo; que en el momento en que la dicente el (*sic*) dijo a ÓSCAR que dejara en paz a su esposo había luz artificial (foco); que antes de salir, cuando tocaron la puerta de su departamento, el esposo de la dicente se encontraba sentado con ella en el sillón, viendo la televisión; que el sillón donde su esposo y la declarante se encontraban previo a que su esposo abriera la puerta, es el sillón grande que está frente a la puerta, en la sala de su departamento; que la manera en que la de la voz les pidió apoyo a sus vecinos fue gritarles “auxilio, le están pegando a mi esposo”; que en el momento en que la declarante observaba que el sujeto de nombre ÓSCAR pateaba a su esposo, ella seguía en la puerta. A preguntas del defensor particular, respondió: que la declarante no sabe porqué en la segunda declaración ministerial dijo que su esposo falleció de las lesiones que le provocaron los sujetos, ya que el que lo golpeó fue ÓSCAR.

La nota médica de ingreso del entonces lesionado MARIANO, procedente del hospital XXX De XXXX (foja XXX).

...Suscrito por la Doctora S. BARAJAS, siendo las 21:14 veintiuna horas con catorce minutos del día XX de XXX de XXXX, se ingresó al hospital XXXX a una persona de sexo masculino de nombre MARIANO, paciente quien cuenta con los siguientes antecedentes: originario de XXX Guanajuato, donde vivió el primer alo (*sic*) de edad: posteriormente en la ciudad de México hasta la fecha, cursó hasta primer año de secundaria, trabajó como administrativo, actualmente jubilado, casado católico, úlcera duodenal hace 20 veinte años por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Portador de marcapasos por bloqueo de desde (*sic*) hace 6 seis años. Por el momento

no toma ningún medicamento, controlado cada seis meses por cardiología. Alergias: tabaquismo y alcoholismo negados. En esta ocasión es traído por el servicio de ambulancia al sufrir caída de su propia altura al parecer por terceras personas. A la exploración física consciente (*sic*) bien orientado en espacio y tiempo. Presión arterial 120-80, frecuencia cardíaca 70, frecuencia (*sic*) respiratoria 20 veinte. Escoriación en cuero cabelludo de 1 un centímetro de longitud que solo involucra piel. Pupilas normorrefléxicas (*sic*), ruidos cardíacos rítmicos con soplo sistólico no irradiado, abdomen blandoo (*sic*) ssin datos clínicos de irritación peritoneal. Deformidad a nivel de cadera (*sic*), acortamiento de la pierna derecha, dificultad para fectuar movimientos propios de miembro podálico derecho. Impresión diagnostica luxación der (*sic*) la cadera derecha. Descartar fractura de cadera derecha.

Inspección ministerial practicada en el lugar de los hechos (foja XXX).

...realizada por el personal ministerial en fecha XX de XXX del XXXX, de la que se desprende que el personal que actúa en esta oficina, se trasladó a la calle de XXX número XX, interior XX, colonia XXX, delegación XXX y constituyó legalmente en el lugar antes señalado, por lo que se procede a dar fe de encontrarse el personal actuante en la calle de XXX número XX, interior XX colonia XXX, delegación XXX correspondiente a la acera sur de la calle de XXX, donde se tiene a la vista un inmueble de dos niveles, con fachada de cuatro metros, en color durazno con blanco, presentado en su extremo oniente (*sic*) una puerta metálica, que mide 1.10 un metro por diez centímetros por 2.10 dos metros por diez centímetros, pintada en color blanco con su chapa en orden, dando pasao (*sic*) a un pasillo de unmetro (*sic*) con diez centímetros de ancho por quince metros de largo, apreciándose la cerradura de la puerta de acceso al inmueble sin indicios de violencia o forzada de observa a 50 cincuenta centímetros al sur del acceso del inmueble y sobre el costado oriente del pasillo una puerta metálica pintada en color blanco que corresponde al departamento uno al frente de la puerta del departamento uno y empotrada al muro poniente del pasillo en su parte superior se encuentran los medidores de luz así



como sus respectivos interruptores en orden, no habiendo más huellas o indicios que se relacionen con los presentes hechos...

### Declaración del acusado RACIEL, ante el Ministerio Público Investigador (foja XXX)

...una vez enterado del motivo de mi estancia en estas oficinas y enterado de las imputaciones que me hace el ciudadano MARIANO, así como de lo que declaran los señores ANDRÉS y MANUEL, al respecto niego los hechos que refieren estas personas, por ser totalmente falsos, además de que estas dos últimas personas no se encontraban presentes al momento en que sucedieron los hechos y por cuanto hace a lo declarado por la señora JESÚS, son ciertos en parte y lo que en realidad sucedió es lo siguiente: que el día de sábado XX del mes de XXX del año en curso, siendo aproximadamente 20:30 veinte horas con treinta minutos, me encontraba en el interior del departamento propiedad de un amigo de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, estando ingiriendo bebidas alcohólicas desde alrededor de las 16:00 dieciséis horas, encontrándose también una compañera de ÓSCAR de nombre Anabel, resultando ser que yo ya me encontraba muy tomado y a esas horas aproximadamente la amiga de ÓSCAR de nombre Anabel dijo que, “ya se retiraba del lugar”, por lo que ÓSCAR la acompañó y yo me quedé en el interior del domicilio de ÓSCAR, resultando ser que a los pocos minutos, escuché mucho alboroto, escuchando entre los gritos la voz de ÓSCAR, por lo que al escuchar esto procedí a levantarme, ya que me encontraba sentado en la sala y al salir del departamento de ÓSCAR, observé que en el pasillo del interior del edificio que da hacia la calle de XXX, se encontraba ÓSCAR de espaldas, y observé que delante de él se encontraba una persona en el piso, tratando de incorporarse, por lo que de inmediato me dirigí hacia ÓSCAR y lo empujé hacia a un lado y lo hice hacia atrás, diciéndole que ya se calmara y se metiera a la casa, enseguida y al ver que la persona que se encontraba en el piso era de la tercera edad, traté de ayudarlo, sujetándolo de ambos brazos y le dije a dicha persona

que yo le ayudaría a levantarse, pero debido a mi estado inconveniente, no lo sujeté bien y se me resbaló dicha persona, sin embargo esa no era mi intención, ya que lo que pretendía era ayudarlo a que se incorporara, enseguida volví a ayudarlo a ingresar al domicilio, sujeto que ahora me entero responde al nombre de MARIANO, sujeto que no sangraba, ni le observé lesión alguna, únicamente observé que no podía incorporarse, una vez que lo ayude a ingresar a su departamento en una silla, la señora que ahora me enteró se llama JESÚS, quien es esposa del lesionado, me dio las gracias y me salí de su departamento, es cuando ya no observe a ÓSCAR y enseguida salí a la calle para buscarlo, pensando que estaba en la calle, pero de repente vi llegar varias patrullas y una señora que no recuerdo características les dijo “ahí está”, señalándome, a mí y los oficiales me ingresaron a una patrulla de policía y me trasladaron a estas oficinas, donde me entero que me acusan por el delito de lesiones, quiero agregar que yo en ningún momento lesioné de forma intencional al señor MARIANO, asimismo no vi el momento en que al parecer ÓSCAR ALEJANDRO lesionó a MARIANO, lo que es cierto es que, yo hice a un lado a ÓSCAR y traté de levantar al señor MARIANO, pero debido a que me encontraba alcoholizado sin buenos reflejos, no logré sostenerlo bien, pero fue de forma accidental, siendo esto lo que sucedió, que las lesiones que presento me las ocasioné jugando basketbol, siendo todo lo que deseo manifestar...

En declaración preparatoria de fecha XX de XXX de XXXX (foja XXXX).

...primero ratificó su original depuesto y reconoció como propias las firmas que aparecen al margen de este por haber sido estampadas de su puño y letra, sin ser su deseo agregar algo más y al hacer saber el contenido de la fracción II del apartado “A” del artículo 20 constitucional, dijo que no era su deseo contestar a las preguntas que le pudieran formular las partes.

Ampliación de declaración del sentenciado RACIEL ante el juez que conoce de la causa, ratificó sus anteriores declaraciones, y agregó (foja XXXX):

...que por favor y de la manera más atenta su señoría tome en consideración la declaración efectuada por la esposa del hoy occiso, en la cual menciona que la única persona que agrede a su esposo es ÓSCAR, por lo que de esta manera considero injusta mi detención, ya que yo en ningún momento agredí al señor MARIANO, sólo lo auxilié...

Declaración ministerial del sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, ante el ministerio público investigador (foja XXX, XXX del tomo I):

... que el día sábado XX ocho de XXX del año en curso, le hable a un amigad (*sic*) enombre (*sic*) Anabel para que fuera a su casa, después RACIEL se comunicó conmigo y les dije a los dos que viniera (*sic*) a mi casa, la cual se ubica en la calle de XXX número XX departamento XX, colonia XXX, XXX ya que no iba a ver nadie y que fueran a mi casa, a eso de las 11:00 once horas llegó RACIEL y como a las 14:00 catorce horas llegó Ana, estuvimos tomando cerveza y teníamos la música muy alta, entonces de ahí paso el tiempo y después como a las 18:00 dieciocho horas se fue Anabel y la acompañe a la avenida XXX y de ahí, yo me regresé a la casa y fue cuando al ingresar al edificio asote (*sic*) la puerta principal y en ese momento salió el señor que ahora me enteró responde al nombre de MARIANO y me empieza a gritar de groserías, por lo que nos empezamos a hacer de palabras mutuamente, entonces él, al momento de decirme de cosas me tira un golpe y se cae sólo, ya que me lanzó su puño derecho, pero como lo esquive, este señor se fue de largo, se giró y se cayó, en ese momento escuche gritos de la esposa del señor y yo me voy a mi departamento, entonces RACIEL sale de la casa y él se va hacia donde estaba el señor y lo ayuda a levantarse y lo mete a su casa, yo me cruzo hacia donde está el

pasillo y los vecinos de la planta alta comenzaron a agredirme, por lo que volví a meterme a mi casa y me empezaron a patear la puerta, fue cuando me volví a salir y me fui al primer nivel y ahí me alcanza RACIEL y nuevamente nos metemos a la casa, estando unos minutos y yo le dije a RACIEL que iría a la tienda y fue cuando llegaron varias patrullas cuyos elementos me detuvieron, indicando los vecinos que yo le había pegado al señor, siendo esto lo que sucedió presentando también a RACIEL, quiero manifestar que en ningún momento agredí al señor y los vecinos no estaban al momento del incidente y me señalan a mi como culpable...

(foja XXX) enterado de la imputación que obra en su contra, al respecto refiere que niega los hechos que se le imputan y ratifica sus declaración (*sic*) que obra en las presentes, por contener la verdad de lo sucedido, que es todo lo que tiene que declarar...

En declaración preparatoria de fecha XX de XXX de XXXX (foja XXXX).

...primero ratificó su original depositado y reconoció como propias las firmas que aparecen al margen de este por haber sido estampadas de su puño y letra, sin ser su deseo agregar algo más y al hacer saber el contenido de la fracción II del apartado "A" del artículo 20 constitucional, dijo que no era su deseo contestar a las preguntas que le pudieran formular las partes.

Ampliación de declaración del acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, ante el juez que conoce de la causa, (foja XXXX vta.).

...ratificó sus anteriores declaraciones, y reconoció como suyas las firmas que obran en las mismas, sin manifestar nada más, ni dar contestación a las preguntas que le pudieran formular las partes...

Dictamen de criminalística de campo emitido y signado por el perito en la materia Leonardo (mecánica de lesiones) (foja XXX).

...a fin de que intervenga en los presentes hechos y realice la mecánica de hechos en base al expediente que se adjunta al presente: Siendo que en el apartado de conclusiones, dice: "Primera: por lo que respecta a MARIANO y de acuerdo con las regiones anatómicas afectadas, se establece que el mismo, se encontraba de frente a su agresor o agresores, al momento de que es empujado y pierde la vertical, por lo que se determina, que este sujeto tuvo contacto contra el piso. Segunda: en consecuencia al punto anterior, se establece que al momento de perder la vertical y encontrarse en el piso, el ciudadano MARIANO, quedó en un plano inferior al de su agresor o agresores. Tercera: consecuentemente a lo anterior se determina que la mecánica de hechos en la que se vio envuelto el ciudadano MARIANO es similar a las que se desarrollan en maniobras de lesiones producidas por terceras personas...

Ratificación de dictamen del perito profesional técnico Leonardo, (foja XXXX).

...que ratifica en todas y cada una de sus partes el informe que emitió, reconociendo como suyas las firmas que obran en el mismo por haber sido puestas de su puño y letra, sin desear agregar algo más; a preguntas de la defensa oficial del procesado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, Manifestó: pregunta: En qué se basó para determinar que el hoy occiso fue empujado; respuesta: En el dictamen de Medicina Forense rendido por el doctor JOSÉ LUIS y de acuerdo a las lesiones que se describen y haciendo un estudio de todo (*sic*) la indagatoria que constó de XXX fojas, es que determino todas y cada una de las conclusiones que rindió, aunado a que no presenta otro tipo de lesiones; pregunta: las lesiones que presentó el hoy occiso se pueden ocasionar de otra forma que no sea por empujar?; respuesta: de acuerdo a lo vertido en el dictamen y por las características de las mismas, lo más probable es que se hayan realizado como se concluye en el dictamen, porque se aprecia un conjunto de lesiones en general; a preguntas de la defensa particular del procesado, RACIEL, manifestó: pregunta: que nos precise el momento exacto en el

que el hoy occiso se causó la fractura en la cadera; respuesta: no se puede precisar el momento que se ha producido la lesión que menciona, toda vez que es materia del perito en medicina forense quien realiza la mecánica de lesiones...

Dictamen de criminalística de campo elaborado y suscrito por la perito oficial en la materia MARÍA GUADALUPE (foja XXX).

...realice la búsqueda de material sensible significativo, la descripción del lugar, el levantamiento de cadáver, examen externo del mismo e interpretación de los indicios...". En el apartado de heridas y lesiones, se lee: 1. zona de venopunción en un área de 14.0 catorce centímetros por 2.5 dos punto cinco centímetros, localizada en cara lateral derecha de cuello. 2. venopunción en un área de 2.0 dos centímetros por 1.0 un centímetro localizada en región clavicular derecha, ubicada a 8.0 ocho centímetros a la derecha de la línea media anterior. 3. zona de venopunción con equimosis de 3.0 tres centímetros por 5.0 cinco centímetros, localizad (*sic*) en pliegue de codo derecho y cara lateral del mismo. 4. equimosis en un área de 3.0 tres centímetros por 2.0 dos centímetros, localizada en tercio distal de antebrazo derecho. 5. zona de venopunción en un área de 5.0 cinco centímetros por 4.0 cuatro centímetros, localizada en dorso de mano derecha. 6. equimosis violácea en un área de 25.0 veinticinco centímetros por 8.0 ocho centímetros, localizada en flanco derecho ubicado a 9.0 nueve centímetros a la derecha de la línea media. 7. equimosis de 10.0 diez centímetros por 4.5 cuatro punto cinco centímetros, localizada en tercio proximal de muslo derecho. 8. equimosis de forma circular de 4.0 cuatro por 3.0 tres centímetros, localizada en tercio proximal de pierna derecha. 9. equimosis de forma lineal de 27.0 veintisiete centímetros por 3.0 tres centímetros, localizada en tercio medio de pierna derecha. 10. tres escaras de posición localizada en pie y maleolo derecho, siendo la mayor de 3.0 tres centímetros y la menor de 1.0 un centímetro. 11 zona de venopunción en un área de 2.0 dos centímetros por 2.0 dos centímetros, localizadas en pliegue d (*sic*) codo izquierdo. 12. zona de venopun-sion en un área de 2.0 dos centímetros por 1.0 un centímetro, localizada en tercio

distal de antebrazo izquierdo. 13. excoriación en un área de 7.0 siete centímetros por 2.0 dos centímetros, localizada en región interlumbar, ubicada sobre la línea media posterior acompañada de equimosis a la periferia en un área de 28.0 veintiocho centímetros por 29.0 veintinueve centímetros. 14. escara de posición en u (*sic*) área de 10.0 diez centímetros por 9.0 nueve centímetros, localizada en región sacra ubicada sobre la línea media posterior. 15. equimosis en un área de 4.0 cuatro centímetros por 6.0 seis centímetros, localizada en hueco popíteo derecho. 16. Escara de posición en un área de 4.0 cuatro centímetros por 6.0 seis centímetros, localizada en talón izquierdo. Y concluyó: “Primera. Con base en la observación de las características que presenta la lesión marcada con el número 1,2,3,5,11 y 12 del capítulo correspondiente a las heridas y lesiones, se puede determinar que éstas, son similares a las que se producen en maniobras de atención médico quirúrgicas, para tratar de preservar la vida. SEGUNDA. En base a la ausencia de lesiones características de maniobras de lucha, defensa y /o forcejeo, se puede determinar que el ahora occiso no realizó tales maniobras momentos previos a su muerte. Será la necropsia médico legal, la que nos determine la causa verdadera de muerte y así mismo serán las investigaciones posteriores las que aportarán mayores datos a la presente indagatoria...

Dictamen de medicina forense signado por el perito oficial en la materia JOSÉ LUIS (foja XXX).

...determinar la mecánica de lesiones del ciudadano MARIANO (*sic*), de XX años de edad, y quien refirió como consideraciones: en su momento el ciudadano MARIANO (*sic*) de XX años de edad presentó: fractura la cual consiste en pérdida de solución de continuidad del tejido óseo, además de excoriaciones, la cual consiste en una lesión superficial de la piel comúnmente producida por fricción, en la que el agente contundente desprende la epidermis.” En base a lo anterior, estoy en condiciones de emitir las siguientes: “PRIMERA: El ciudadano MARIANO (*sic*) de XX años de edad, presentó fractura de cadera derecha y fue producido contra obje-

to de consistencia dura de bordes romos, sin filo, siendo el objeto contundente un piso, cinta sfáltica (*sic*) por caída. SEGUNDO: Las excoriaciones acompañadas de costra hemática en región frontal izquierda fueron producidas por percusión, con objeto de consistencia dura de bordes romos, sin filo, siendo el objeto contundente puños cerrados pie-calzado etcétera. Tercero: Las lesiones que sufrió el ciudadano MARIANO (*sic*) son lesiones que tardan en sanar más de sesenta días...

Ratificación de dictamen a cargo del perito médico forense JOSÉ LUIS (foja XXXX).

...ratifica en todas y cada una de sus partes el contenido de dicho documento, reconociendo como suya la firma que obra al calce por ser la que utiliza en todos sus actos públicos como privados, ratifica el contenido del punto primero, conclusión primera y tercera, no así en la segunda, ya que las excoriaciones que presentó también pudieron ocasionarse por fricción contra objeto de consistencia dura de borde romos, sin filo, contra una superficie áspera o rugosa, siendo el objeto vulnerable un piso o cinta asfáltica, pared o muro..."', a preguntas del agente del ministerio público, manifestó: pregunta: ¿Qué nos diga por qué razón en el dictamen que emitió no asentó lo referido en cuanto a esa parte que agregó?; respuesta: en relación a la pregunta anterior y teniendo a la vista mi dictamen en fecha XX de XXX de XXXX y sin afán o interés de beneficiar o perjudicar a las partes involucradas en dicho expediente, agrego o bien hago ampliación de mi dictamen, la cual considero en este momento hacerlo ante el Ministerio Público; a preguntas del defensor particular, licenciado Miguel manifestó: pregunta: ¿Qué diga el perito si puede establecer la forma o la manera en que el lesionado tuvo contacto con el objeto contundente, piso?; respuesta: no, porque ésta pregunta no es de mi competencia, es decir, el que establece la posición víctima-victimario es el criminalista, ya que mi dictamen se basa única y exclusivamente en aspectos técnicos, científicos; pregunta: ¿Qué diga el perito si puede determinar en qué momento se ocasionó la fractura de cadera derecha el lesionado; respuesta: al momento de la caída...



## Declaración del policía remitente RODRIGO VIDAL, ante el Ministerio Público Investigador (fojas XXX).

...el día de hoy XX de XXX de XXX, siendo aproximadamente a las 12:30 doce horas con treinta minutos, cuando mi compañero y yo nos encontrábamos en el ejercicio legítimo de nuestras funciones en la calle de XXX esquina con la calle de XXX en la colonia XXX, delegación XXX cuando en ese momento recibimos mi compañero y yo una llamada de nuestro módulo, en donde se nos reporta que acudamos al domicilio de la calle de XXX número XX al departamento XX, de la misma colonia XXX, en virtud de que una persona solicitaba el apoyo para que detuviéramos a su vecino, porque este en compañía de otro sujeto le habían provocado lesiones a su esposo y a consecuencia de las cuales su esposo había llegado al Hospital y el día de ayer XX de XXX de XXX, había fallecido en el Hospital a consecuencia de los golpes, es por ello que en ese momento nos trasladamos a dicho domicilio en donde fuimos atendidos por la señora de nombre JESÚS, de XX de edad, quien en ese momento nos confirmó que efectivamente quería que aseguráramos a su vecino de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, de XX años de edad, quien habita el departamento tres del mismo inmueble: sin embargo, se le indicó que dicha persona no iba a poder ser detenido en su domicilio, por lo que se le indicó que si esta persona salía del mismo se le podía asegurar, es por ello, que mi compañero y yo en atención a la petición de la señora JESÚS permanecemos en la calle frente al inmueble en donde estuvimos una hora aproximadamente y es cuando a las 13:30 trece horas con treinta minutos, el sujeto de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, de XX años de edad, salió a la calle y la señora JESÚS nos señala al sujeto a fin de que lo detengamos, es así que en ese momento procedimos a pedirle al sujeto que abordara la patrulla ya que la señora pedía que lo detuviéramos por las lesiones que le había provocado a su esposo y a consecuencia de éstas había fallecido en el hospital, es por ello que dicho sujeto abordó la patrulla y procedimos a trasladarlo a esta agencia en virtud de que la señora JESÚS, nos manifestó que por las lesiones de su esposo provocadas por los sujetos mencionados el día X de XXX

de, se había dado inicio a la averiguación previa XXX ,por el delito de Lesiones Dolosas, por ello, es que se procede en este acto a presentar al probable responsable de nombre ÓSCAR ALEJANDRO de XX de edad, en contra de quien denunció el delito de HOMICIDIO en agravio de MARIANO, de XX años de edad, y en contra de ÓSCAR ALEJANDRO, de XX años de edad, de quien en este acto entregó certificado de estado físico el cual fue emitido en la agencia de XXX uno, ya que en esta agencia no había médico legista; asimismo entrego nota de presentación del probable responsable y formato de detenidos puestos a disposición, los que ratifiqué en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de los hechos y de los que reconozco como mía la firma que estampé de mi puño y letra, que es todo lo que tengo declarar, ya que la forma como ocurrieron los hechos de las lesiones no me constan por no haberlas presenciado...

Ampliación de la declaración del policía remitente RODRIGO ante el juez que conoce de la causa, (foja XXXX).

...ratifica en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de los hechos, reconociendo como suyas las firmas que obran a los márgenes de la misma por haber sido puestas de su puño y letra sin tener que agregar o aclarar a preguntas del agente del ministerio público, previa su calificación de legales respondió: que al momento en que aseguró al quien dijo ser ÓSCAR ALEJANDRO, éste no realizó manifestación alguna; que la señora que le solicitó el auxilio no les manifestó cómo fue lesionado su esposo; que en ningún momento tuvo comunicación con ÓSCAR ALEJANDRO en relación a los hechos; a preguntas del defensor de oficio del procesado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, respondió: que puso a disposición a ÓSCAR ALEJANDRO en la 14 décimo cuarta agencia de investigación; que no sabe si dicha agencia tenía conocimiento de los hechos...

Declaración del policía remitente HUGO ante el Ministerio Público Investigador (fojas XXX).

...el día de hoy XX de XXX de XXXX, siendo aproximadamente a las 12:30 doce horas con treinta minutos, cuando mi compañero y yo nos encontrábamos en el ejercicio legítimo de nuestras funciones en la calle de XXX esquina con la calle de XXX, en la colonia XXX, delegación XXX cuando en ese momento recibimos mi compañero y yo una llamada de nuestro módulo en donde se nos reporta que acudamos al domicilio de la calle de XXX, número XX al departamento uno de la misma colonia XXX, en virtud de que una persona solicitaba el apoyo para que detuviéramos a su vecino, porque éste en compañía de otro sujeto le habían provocado lesiones a su esposo y a consecuencia de las cuales su esposo había llegado al hospital y el día de ayer XX de XXX del XXXX, había fallecido en el hospital a consecuencia de los golpes, es por ello que en ese momento nos trasladamos a dicho domicilio en donde fuimos atendidos por por (*sic*) la señora de nombre JESÚS, de XX de edad, quien en ese momento nos confirmó que efectivamente quería que aseguráramos a su vecino de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, de XX años de edad, quien habita el departamento tres del mismo inmueble; sin embargo, se le indicó que dicha persona no iba a poder ser detenido en su domicilio, por lo que se le indicó que si está persona salía del mismo se le podía asegurar, es por ello. que mi compañero y yo en atención a la petición de la señora JESÚS permanecemos en la calle frente al inmueble en donde estuvimos una hora aproximadamente y es cuando a las 13:30 trece horas con treinta minutos, el sujeto de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, de XX años de edad, salió a la calle y la señora JESÚS nos señala al sujeto a fin de que lo detengamos, es así que en ese momento procedimos a pedirle al sujeto que abordara la patrulla, ya que la señora pedía que lo detuviéramos por las lesiones que le había provocado a su esposo y a consecuencia de estas había fallecido en el hospital, es por ello que dicho sujeto abordó la patrulla y procedimos a trasladarlo a esta agencia en virtud de que la señora Jesús, nos manifestó que por las lesiones de su esposo provocadas por los sujetos mencionados el XX de XXX de XXXX, se había dado inicio a la averiguación previa número XXX, por el delito de LESIONES DOLOSAS, por ello, es que se procede en este acto a presentar al probable responsable de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, de XX años de edad, en contra

de quien denunció el delito de HOMICIDIO, en agravio de MARIANO, de XX años de edad, y en contra de ÓSCAR ALEJANDRO, de XX años de edad, de quien en este acto entrego certificado de estado físico, el cual fue emitido en la agencia de XXX uno, ya que en esta agencia no había médico legista; asimismo, entrego nota de presentación del probable responsable y formato de detenidos puestos a disposición, los que ratifico en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de los hechos y de los que reconozco como mía la firma que estampé de mi puño y letra, que es todo lo que tengo que declarar, ya que la forma como ocurrieron los hechos de las lesiones no me constan por no haberlos presenciado...

Ampliación de la declaración del policía remitente HUGO, ante el Juez que conoce de la causa (foja XXXX).

...ratifica en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de los hechos, reconociendo como suyas las firmas que obran a los márgenes de la misma por haber sido puestas de su puño y letra, sin tener nada más que agregar o aclarar, a preguntas de la agente del Ministerio Público, respondió: que al momento en que aseguró al quien dijo ser ÓSCAR ALEJANDRO esté no realizó manifestación alguna; que la señora que le solicitó el auxilio, no les manifestó cómo fue lesionado su esposo, solo manifestó que lo habían golpeado; que en ningún momento tuvo comunicación con ÓSCAR ALEJANDRO, en relación a los hechos; a preguntas del defensor de oficio del procesado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR ALEJANDRO, respondió: que puso a disposición a ÓSCAR ALEJANDRO, en la 14 décimo cuarta agencia de investigación; que no sabe si dicha agencia tenía conocimiento de los hechos ...

Formato de detenidos puestos a disposición el Ministerio Público Signado (*sic*) por los policías remitentes RODRIGO y HUGO (foja XXX).

...al realizar funciones propias de mi servicio sobre la calle de XXX, una persona del sexo femenino de nombre Jacobo, indicando que días antes su marido

MARIANO, tuvo una riña con ÓSCAR ALEJANDRO, por lo que le ocasionó una lesión y a consecuencia de las mismas falleció, por lo que se aseguró y se presenta al Ministerio Público para determinar su situación jurídica a petición de Jacobo. No constándonos los hechos...

Declaración de la testigo ESTELA, ante el Ministerio Público (fojas XXX).

...el motivo de su estancia en estas oficinas es con la finalidad de señalar (*sic*) que al tener a la vista en el interior del anfiteatro anexo a la Coordinación territorial CUH-X de esta delegación Cuauhtémoc, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino lo reconoce e identifica como el de su suegro, el cual en vida respondía al nombre de MARIANO, mismo que contaba con una edad de XX años de edad, persona que sabe era originario de XXX, del Estado de XXX, que era hijo de los señores Fernando y Maria ambos finados, que era el último de 09 nueve hijos, que actualmente era jubilado y tenía su domicilio en la calle de XXX número XX interior XX, en la colonia XXX de la delegación XXX, de esta Ciudad de México y en relación a los hechos que se investigan manifiesta que no le constan por no haberlos presenciado, que tomó conocimiento de los mismos a través de una llamada telefónica, de parte de su suegra, de nombre MARÍA DE JESÚS, mediante la cual les hacía de su conocimiento que el señor MARIANO había sido agredido por los vecinos y que iba a ser traslado al hospital, siendo esto en fecha XX de XXX del año en curso, lugar en donde permaneció hospitalizado hasta el día de ayer XX de XXX del XXXX, ya que éste falleció a consecuencia de las lesiones ocasionadas por la agresión sufrida. Asimismo señala la declarante que una vez que fueron informados del deceso procedieron a realizar los trámites correspondientes ante las oficinas del ISSSTE toda vez que su suegro era pensionado y procedieron a trasladar el cuerpo del ahora occiso a las capillas funerarias ubicadas en la calle de XXX número XX en la colonia XXX, de esta delegación con la finalidad de velarlo y posteriormente llevar al cabo la incineración correspon-

diente, lo anterior en virtud de que desconocían los trámites legales a seguir, y que fue el día de hoy XX del mes de XXXX del año en curso, cuando se presentó en el lugar una ambulancia de esta honorable Institución a efecto de llevarse el cuerpo sin vida de su suegro MARIANO, en virtud de que debido a que había una averiguación previa iniciada por los hechos en los cuales había sido lesionado y posteriormente había fallecido tendrían que practicarse algunas diligencias ministeriales, indicándoles el personal de esta honorable Institución que el cuerpo sería trasladado al interior del anfiteatro anexo a la coordinación territorial CUH-X ubicada en XXX y además les indicaron que tendrían que trasladarse a estas oficinas a rendir su declaración en relación a los hechos y para solicitar la entrega del cuerpo para su velación y posterior incineración o inhumación, y es por todo lo anterior que en este acto denuncia el delito de HOMICIDIO cometido en agravio de su suegro quien en vida respondiera el nombre de MARIANO el cual contaba con una edad de XX años y esto en contra de las personas que sabe responden a los nombres de RACIEL y ÓSCAR u ÓSCAR. Y en el acto solicita a esta autoridad que debido a que no cuentan con los medios económicos para contratar un servicio funerario particular y debido a que los servicios funerarios del XXX fueron cancelados al ignorar los trámites legales que habían que realizar, se les apoye con el traslado del cuerpo del anfiteatro anexo a la coordinación territorial CUH-X al servicio médico forense mientras ellos realizan los trámites correspondientes para el apoyo de servicios funerarios gratuitos que ofrece esta honorable Institución...

Declaración del testigo MARIO, ante el Ministerio Público Investigador (fojas XXX).

...el motivo de su estancia en estas oficinas es con la finalidad de señalar que al tener a la vista en el interior del anfiteatro anexo a la Coordinación territorial CUH-X de esta delegación XXX el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino lo reconoce e identifica como el de su señor padre quien en vida respondía al nombre

de MARIANO, mismo que contaba con una edad de XX años de edad, persona que sabe era originario de del Estado de XXX que era hijo de los señores Fernando y María, ambos finados, que era el último de 09 nueve hijos, que actualmente era jubilado y tenía su domicilio en la calle de XXX número XX, interior X uno, en la colonia XXX de la delegación XXX, de esta Ciudad de México y en relación a los hechos que se investigan manifiesta que no le constan por no haberlos presenciado, que tomó conocimiento de los mismos a través de una llamada telefónica, de parte de su señora madre de nombre MARÍA DE JESÚS, mediante la cual les hacía de su conocimiento que su padre MARIANO había sido agredido por los vecinos y que iba a ser traslado al hospital, siendo esto en fecha XX de XXXX del año en curso, lugar en donde permaneció hospitalizado hasta el día de ayer XX de XXX de XXX ya que este falleció a consecuencia de las lesiones ocasionadas por la agresión sufrida. Asimismo señala la declarante que una vez que fueron informados del deceso procedieron a realizar los trámites correspondientes ante las oficinas del ISSSTE toda vez que su señor padre era pensionado y procedieron a trasladar el cuerpo del ahora occiso a las capillas funerarias ubicadas en la calle de XXX número XX en la colonia XXX de esta delegación XXX con la finalidad de velarlo y posteriormente llevar al cabo la incineración correspondiente, lo anterior en virtud de que desconocían los trámites legales a seguir, y que fue el día de hoy XX del mes de XXX del año en curso, cuando se presentó en el lugar una ambulancia de esta honorable Institución a efecto de llevarse el cuerpo sin vida de su señor padre MARIANO, en virtud de que debido a que había una averiguación previa iniciada por los hechos en los cuales había sido lesionado y posteriormente había fallecido tendrían que practicarse algunas diligencias ministeriales, indicándoles el personal de esta honorable Institución que el cuerpo sería trasladado al interior del anfiteatro anexo a la coordinación territorial CUH-X ubicada en XXX y además les indicaron que tendrían que trasladarse a estas oficinas a rendir su declaración en relación a los hechos y para solicitar la entrega del cuerpo para su velación y posterior incineración o inhumación, y es por todo lo anterior que en este acto denuncia el delito de HOMICIDIO, cometido en agravio de su señor padre quien en vida respondiera el

nombre de MARIANO el cual contaba con una edad de XX años y esto en contra de las personas que sabe responden a los nombres de RACIEL y ÓSCAR u ÓSCAR. Y en el acto solicita a esta autoridad que debido a que no cuentan con los medios económicos para contratar un servicio funerario particular y debido a que los servicios funerarios del XXX fueron cancelados al ignorar los trámites legales que habían que realizar, se les apoye con el traslado del cuerpo del anfiteatro anexo a la coordinación territorial CUH-X al servicio médico forense mientras ellos realizan los trámites correspondientes para el apoyo de servicios funerarios gratuitos que ofrece esta honorable Institución...

Nueva fe de cadáver, reconocimiento del mismo, fe de lesiones y de nueva filiación practicada sobre el occiso MARIANO (foja XXX, XXX).

...en el interior del anfiteatro anexo a la coordinación territorial CUH-X el cadáver de una persona que en vida llevara el nombre de MARIANO, del sexo masculino, aproximadamente de XX años de edad, quien fuera identificado por sus familiares, cadáver que se encuentra en la siguiente posición: cuerpo sin vida totalmente desnudo en posición decúbito dorsal, con la cabeza dirigida al norte y con los pies hacia el sur, los miembros torácicos adosados al eje del cuerpo y los miembros pélvicos en extensión con el compás cerrado, apreciándose signos de muerte real y recientes con temperatura inferior a la del medio ambiente, con signos de muerte real y reciente con temperatura inferior, sin rigidez cadavérica, apreciándose al cuerpo la siguientes lesiones: presenta huellas de veno punción (*sic*) en región subclavia derecha en cara lateral derecha de cuello y en dorso de la mano izquierda, laceración de columna dorsal, úlcera decúbito en región sacra y talón izquierdo, de igual forma objeto redondo en región pectoral izquierda, de cinco centímetros de diámetro, compatible con *prca* (*sic*) pasos; asimismo, se aprecian las siguientes lesiones: equimosis de coloración violácea en codo derecho y cara externa del mismo, en tercio distal, cara posterior de antebrazo derecho, en tercio distal, cara postero-interna de antebrazo izquierdo en cresta iliaca, antero superior,



canal inguinal y tercio superior, cara externa de muslo derecho de diez por cinco, veintidós por diez y ocho por dos centímetros, respectivamente, en hueso popliteo derecho y tercio medio, cara posterior de pierna izquierda, señas particulares: nombre: MARIANO, masculino, edad: XX años de edad, talla: 170 ciento setenta centímetros, perímetro torácico: 90 noventa centímetros, perímetro abdominal: 84 ochenta y cuatro centímetros, constitución asténico, tez blanca, pelo entrecano, lacio y corto, frente amplia, cejas pobladas: ojos café: nariz recta y delgada: boca grande labios delgados: mentón oval, bigote y barba rasurados: señas particulares ninguna: así mismo, se da fe del acta médica número XXX/XX-XX, suscrita por el doctor RICARDO ERNESTO de fecha, XX de XXX de XXXX, documento del que se da fe ...

Fe ministerial de cadáver y levantamiento del mismo (foja XXX).

...el cuerpo ya sin vida de una persona del sexo masculino de aproximadamente XX años de edad, mismo que fuera identificado por sus familiares como la persona que en vida respondiera al nombre de MARIANO; encontrándose en la siguiente posición, en decúbito dorsal con la cabeza dirigida al oriente, extremidades superiores e inferiores en extensión, siguiendo el eje de su cuerpo envuelto en sábana de color blanco, mismo que a simple vista presenta lesiones no recientes en boca, cara y brazos (venopunciones), así como hematomas en varias partes del cuerpo, lesiones propias de atención hospitalaria: asimismo, se aprecia una cinta adhesiva a la altura del tórax misma en la que se suscribe lo siguiente 437 MARIANO Exp. (sic) XXX, fecha defunción XX XXX XXXX 23:00 veintitrés horas. Dx. neumonía intrahospitalaria, Fx. cadera derecha. hepatitis C. shock séptico, en virtud de las diligencias practicadas y, no habiendo otra más por el momento que desarrollar, procede a ordenar el levantamiento del mismo y su traslado al anfiteatro anexo a la coordinación territorial CUH 8 para la práctica de las diligencias ministeriales correspondientes...

## Acta médica del deceso de MARIANO, procedente del hospital XXX de XXXX (foja XXX).

...Con el fin de reconocer al cadáver de MARIANO del sexo masculino, y de aproximadamente XX años de edad. Se localiza cadáver en mesa quirúrgica, en posición decúbito dorsal, con la cabeza al norte y con los pies hacia el sur, los miembros torácicos adosados al eje del cuerpo, y los miembros pélvicos en extensión con el compás cerrado. Presenta signos de muerte real y reciente, con temperatura inferior a la mano que explora, sin rigidez cadavérica generalizada, con livideces cadavéricas en la cara posterior de tórax que no desaparece a la digito presión. Trasladado que fue al anfiteatro de esta Delegación para su reconocimiento como es de rigor en presencia del Agente Investigador en turno, se corroboran los datos anteriormente mencionados, y presenta huellas de veno-punción (*sic*) en región subclavia derecha, en cara lateral derecha de cuello y en dorso de la mano izquierda, laceración de columna dorsal, ulcera de decúbito en región sacra y talón izquierdo, de igual forma objeto redondo en región pectoral izquierda, de cinco centímetros de diámetro, compatible con marca pasos, así mismo se aprecian las siguientes lesiones: equimosis de coloración violácea en codo derecho y cara externa del mismo, en tercio distal, cara posterior de antebrazo derecho, en tercio distal, cara postero interna de antebrazo izquierdo, en cresta iliaca antero superior, canal inguinal y tercio superior, cara externa de muslo derecho, de diez por cinco, veintidós por diez y ocho por dos centímetros respectivamente, en hueco poplíteo derecho y tercio medio, cara posterior de pierna izquierda...

## Resumen clínico del deceso de MARIANO, procedente del hospital XXXX XXXX (foja XXX).

...El paciente MARIANO de XX años de edad, ingresó el día XX de XXX del presente a este hospital con diagnóstico de fractura de cadera derecha trocanterica, con 46 cuarenta y seis días de estancia hospitalaria, antecedente de hepatitis C,

marcapasos funcional. Que durante su estancia presentó: gastritis y sangrado de tubo digestivo alto, así como infección de vías urinarias y neumonía nosocomial, desequilibrio hidroelectrolítico, llegando al choque séptico, provocando paro cardiorrespiratorio el XX de XXX de XXXX, a las 23:00 veintitrés horas, recibiendo maniobra de reanimación por 30 treinta minutos sin respuesta a la misma, marcando las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos como hora de fallecimiento...”

Ratificación de dictamen del perito ANDRÉS (foja XXXX), ante el juez del conocimiento, ratificó su dictamen y a preguntas de las partes, contestó:

Pregunta: cuál fue la causa de fallecimiento del hoy occiso; Respuesta: la causa de fallecimiento del paciente MARIANO fue de Neomonianosocomial; que es la infección pulmonar; pregunta; cuáles son las causas de la neumonía en el caso que nos ocupa; respuesta decúbito prolongado secundario a la fractura de cadera; pregunta; qué relación tiene la neumonía a la fractura de cadera; respuesta que no funciona bien la parte pulmonar debido a postración prolongada; pregunta; que es la postración prolongada; respuesta: es tener 45 cuarenta y cinco días hospitalizado en cama; pregunta; tuvo acceso al expediente clínico del hoy occiso, posterior al fallecimiento; (*sic*) pregunta; cuáles son los cuidados que debe de tener un paciente respecto a las lesiones de cadera que presentaba el hoy occiso; respuesta; movilización temprana fuera de cama, y fisioterapia pulmonar; pregunta en el expediente clínico se aprecia que hayan tenido dichos cuidados con el hoy occiso; respuesta; no lo recuerda; pregunta; cuáles son los cuidados que debe tener un paciente con neomonianosocomial; respuesta; antibióticos si, y fisioterapia pulmonar; pregunta; que nos diga si en el historial clínico del hoy occiso se aprecian dichos cuidados; respuesta; antibióticos si, fisioterapia no lo recuerda; pregunta; cuál fue el tratamiento del hoy occiso en relación a la neumonía que presentó; Respuesta; con antibióticos; pregunta; en relación al antecedente de hepatitis C, al marcapaso funcional y a la gastritis y sangrado de tubo de digestivo alto, éstas pudieron acelerar o desencade-

nar a una posible neumonía?; respuesta; éstas son antecedentes patológicos que no tiene que ver con el padecimiento, por tal motivo no pudieron desencadenar una posible neumonía; pregunta; es posible determinar el momento en el que el hoy occiso comenzó a presentar los síntomas de una neumonía; respuesta: si es posible con la sintomatología del paciente; pregunta: en qué se basó para determina (*sic*) que la neumonía que presentó el hoy occiso fue producto de la lesión de cadera que presentaba el mismo, respuesta: por el encamado prolongado del paciente...

Ratificación de dictamen del perito ANDRÉS (foja XXXX vta.), ante el juez del conocimiento, manifestó:

...ratifica en todas y cada una de sus partes el informe que emitió, reconociendo como suyas las firmas que obran en el mismo por haber sido puestas de su puño y letra, sin desear agregar nada más; a preguntas de la defensa oficial del procesado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, contestó: que lo que hizo para tratar los padecimientos señalados en su resumen clínico fue manejo con medicamentos específicos para cada padecimiento y transfusión para el sangrado de tubo digestivo alto; que la forma en que el paciente adquirió la neumonía por estar encamado en forma prolongada; que estuvo encamado prolongadamente por la fractura de cadera; que para tratar la neumonía del paciente, además se requirió de fisioterapia pulmonar e inhaloterapia (*sic*); que durante su estancia el paciente no fue intervenido quirúrgicamente; que no lo intervienen quirúrgicamente por las malas condiciones en que se encontraba el paciente; que los aludidos padecimientos durante su estancia surgieron a raíz de su estancia prolongada e intrahospitalaria...

Protocolo de necropsia practicado al occiso, por los médicos GREGORIO U. y JORGE N. (foja XXX)

...el cadáver corresponde a un sujeto del sexo masculino, como de XX años de edad, el cual mide 171 ciento setenta y un centímetros de estatura XX centímetros de perímetro torácico, 77 setenta y siete centímetros de perímetro abdominal, con

un peso de 74 setenta y cuatro kilogramos. El cadáver presenta: rigidez muscular generalizada, tela glerosa corneal, livideces en las regiones posteriores del cuerpo que se modifican a la digito presión. Oros hallazgos. Conjuntivas congestionadas y lechos ungueales cianosados. huellas de punturas en yugular derecha, subclavia del mismo lado y ambos miembros torácicos rodeadas de zonas equimóticas de color violácea de formas irregulares, escaras por decúbito en región sacra y talón derecho exteriormente Presenta: dos zonas equimóticas excoriativas de forma irregulares, la primera de 29 veintinueve por 18 dieciocho centímetros en la región tóraco-dorsal, la segunda de 25 veinticinco por 22 veintidós centímetros en la región sacra y ambos glúteos a ambos lados de la línea media posterior. Zona equimótica de color violácea de forma irregular que va desde la cresta iliaca antero-superior derecha a la región perineal del mismo lado, así como la cara medial del muslo del mismo lado. Abiertas las grandes cavidades encontramos, en la craneana: sin alteraciones macroscópicas de los tejidos pericraneales, el cerebro con un peso de 1350 gramos, congestionado a los cortes, sin trazos de fractura en los componentes óseos de la bóveda, base de cráneo y macizo facial. En el cuello: la laringe, la tráquea, la faringe y el esófago con sus mucosas congestionadas y libres en su luz, sin alteraciones en la región cervical. En la torácica: los pulmones con un peso de 620 gramos el derecho y de 1400 gramos el izquierdo, ambos aumentados de peso, volumen y consistencia, con salida de material verdoso de consistencia espesa y espumosa en todo su parénquimia. El corazón con peso de 380 gramos, en el cual se observa implantado marcapasos. En la abdominal: el hígado, el bazo, el páncreas y riñones congestionados a los cortes. El estómago con líquido café en su interior. La vejiga vacía. Pelvis: hecha la disección de la región se observa fractura de fémur derecho a nivel de ambos trocánteres. Estudios: se envían fragmentos de viseras (pulmón, hígado y riñones) para estudio histopatológico, cuyos resultados se comunicaran en su oportunidad. Nota. Las lesiones descritas se observan en vías de reabsorción. Conclusión: MARIANO, falleció de neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, ya descrita y que clasificamos de mortal...

## Ratificación judicial (foja XXXX),

...ratifica en todas y cada una de sus partes el dictamen emitido, reconociendo como suya la firma que obra en el mismo por haber sido puesta de su puño y letra, sin desear agregar algo más; a preguntas de la defensa oficial del procesado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, manifestó: pregunta: ¿al realizar la necropsia el hoy occiso presentaba alguna otra enfermedad?, respuesta: el paciente no presentaba ninguna enfermedad, pregunta: ¿Cómo puede determinar que dichas lesiones provocaron la neumonía?, respuesta: porque son las complicaciones más frecuentes reportadas en la literatura médica a nivel mundial, de pacientes que sufren traumatismos en la cadera estadísticamente repostado (*sic*) y sustentado en diversos estudios histopatológicos y anamomacroscópicos, es decir, estudio de laboratorio y los hallazgos encontrados en la autopsia, como se describe en el apartado de abierta la cavidad torácica de ambos pulmones; pregunta: ¿Qué causa de origen de la neumonía?, respuesta: en el caso particular a consecuencia de una fractura, pregunta: ¿Qué tipo de enfermedad es la neumonía?, respuesta: un proceso infeccioso pulmonar que en el caso particular se produjo en consecuencia de un acontecimiento traumático, pregunta: ¿en relación a la necropsia practicada cómo determina el proceso infeccioso pulmonar?, respuesta: esto se puede observar a simple vista y que se ilustran con las fotografías y se sustentó con los estudios de laboratorio lo que se describió en la cavidad torácica, el material purulento verdoso de consistencia espesa que son signos, es decir manifestaciones reales de muerte de neumonía como complicación de traumatismo, de no haberse presentado el traumatismo, no se hubiese presentado la infección que lo llevó a la muerte; a preguntas de la defensa particular del procesado RACIEL, manifestó: pregunta: ¿Cuál es el tratamiento para una neumonía bilateral a consecuencia de la fractura?, respuesta: como médico lo conozco, pero en este caso corresponde a la autopsia, ya que eso le corresponde a los médicos tratantes y seguramente está en las notas hospitalarias donde fue atendido el paciente; a preguntas de la representación social, manifestó: pregunta: ¿En qué se basa para determinar la neumonía?, respues-

ta: En los signos clínicos anatomomacroscópicos, es decir, de laboratorio de los fragmentos de pulmón, hígado y riñones que se solicitaron en autopsia para estudio histopatológico que después de tiempo transcurrido deben estar integrados en el expediente, en eso fundamentamos la causa de la muerte de MARIANO como neumonía bilateral complicación determinada de la fractura de fémur, pregunta: ¿qué relación hay entre la neumonía bilateral y la fractura de fémur?, respuesta: existe la relación de una causa efecto de un mecanismo traumático que posteriormente hizo que se complicara con un proceso infeccioso pulmonar, es decir causa traumática y efecto patológico, pregunta: ¿En el caso en concreto cuál fue el mecanismo traumático?, respuesta: la fractura del fémur que tiene correspondencia con la zona equimótica que se describió en lesiones externas en el protocolo de autopsia que va desde cresta iliaca antero superior derecha hasta la región perineal del mismo lado derecho que corresponde a la fractura del fémur del lado derecho y que obedeció a un traumatismo por contusión...

Informe de criminalística de campo signado por la perito oficial en la materia MIRIAM (foja XXX).

...Suscrito por la doctora MIRIAM, para determinar la mecánica de lesiones y la muerte del hoy occiso MARIANO, a lo que informa que se encuentran agregadas a la presente averiguación previa dos dictámenes de mecánica de lesiones y que se encuentran la primera de foja XXX a foja XXX de fecha XX de XXX de XXXX (*sic*), firmada al calce por el doctor OMAR ULISES, y la segunda de fojas XXX y XXX de fecha XX de XXX de, firmada por el doctor JOSÉ LUIS. En cuanto a su pregunta de determinar si la muerte del hoy occiso MARIANO se debe a alguna complicación determinada en el órgano u órganos interesados con motivo de las lesiones causadas en fecha XX de XXX de XXXX, le informo a usted que este rubro ya se encuentra contestado en el rubro de conclusión del protocolo de necropsia de fecha XX de XXX de XXXX (*sic*) y que a la letra dice: MARIANO, falleció de neumonía bilateral complicación determinada por la fractura de fémur, ya descrita y que clasificamos de mortal...

## Ratificación judicial de la perito médico forense MIRIAM (foja XXXX).

...ratifica en todas y cada una de sus partes el contenido de dicho documento, reconociendo como suya la firma que obra al calce por ser la que utiliza en todos sus actos públicos como privados, sin tener nada más que aclarar o agregar; a preguntas del defensor de oficio manifestó: pregunta: ¿Qué nos diga la perito a que se refiere a que falleció de neumonía bilateral, determinación realizada por fractura de fémur?, respuesta: en primer lugar es la causa de muerte que determina el protocolo de necropsia que se le realizó, al que en vida llevaba le (*sic*) nombre de MARIANO, y significa lo siguiente: que es un proceso infeccioso de ambos pulmones y que fue secundario a una complicación que tuvo como origen una fractura de fémur. pregunta: ¿Qué nos diga la perito si sabe qué tiempo estuvo internado el señor MARIANO?, respuesta: viene en el rubro de antecedentes de mi informe que ingresó al Hospital XXXX el XX de XXX de XXX y falleció el XX de XXX de ese mismo año, es decir, estuvo interno 46 cuarenta y seis días; pregunta: ¿Qué nos diga la declarante cómo se produce la neumonía en los pulmones?, respuesta: en este caso, al haber una fractura de fémur, éste puede llegar a servir como reservorio (nido) para que crezcan varias bacterias y virus y si ésta fractura se llega a infectar pueden migrar esos gérmenes hasta el pulmón y producir una neumonía; pregunta: ¿Qué nos diga la perito si se puede detectar cuando inicia una neumonía, y nos diga en qué momento el hoy occiso empezó a presentar los síntomas de neumonía?, respuesta: debe estar reportado en el expediente clínico; pregunta: ¿Qué nos diga la perito en el caso concreto cuál fue el tratamiento a seguir en el hoy occiso?, respuesta: no puedo determinar n (*sic*) este momento debido a que tendría que checar hoja por hoja el expediente clínica (*sic*) para poder dar respuesta a su pregunta y versaría en otro dictamen; pregunta: ¿Qué nos diga la perito cuál sería el tratamiento para tratar una neumonía de un paciente con las mismas características del señor MARIANO?, respuesta: no puedo responder esa pregunta debido a que necesitaría saber en primer lugar, el tipo de neumonía que presentó el hoy occiso, checar el expediente clínico y dar respuesta en el dictamen



correspondiente; a preguntas del defensor particular, licenciado MIGUEL manifestó: pregunta:¿Qué diga la perito qué relación tiene la neumonía bilateral con la fractura de fémur?, respuesta: en consecuencia directa de la fractura fémur...”.

El dictamen de medicina forense y signado por el perito de la defensa en la materia SALVADOR (foja XXXX).

...PRIMERA. MARIANO, presenta fractura (*sic*) de cadera trocanterica, secundaria a una caída de su propia altura. Segunda. La fractura de cadera fue atendida por un procedimiento quirúrgico, el cual resolvió el problema de fractura. Tercero. La neumonía adquirida en el hospital fue secundaria a la estancia de 46 cuarenta y seis días en el hospital y no guarda relación con la fractura de cadera, Cuarta. Existieron complicaciones médicas inherentes a la fractura de cadera, como son la gastritis y sangrado de tubo digestivo alto, infecciones de vías urinarias, desequilibrio hidroelectrolítico, neumonía y choque séptico...

Dictamen de medicina forense y signado por el perito de la defensa en la materia ISRAEL (foja XXXX).

...1. Que realice el perito la descripción del lugar denominado como el de los hechos, siendo el ubicado en el interior del inmueble marcado con el número XX (*sic*), en la calle de XXX de la colonia XXX, de la delegación XXX en México, Distrito Federal, realizando planimetría del mismo. Respuesta: el lugar de los hechos es un inmueble destinado a la casa habitación en zona urbana, siendo esta de dos pisos contando con departamentos, así como aéreas (*sic*) comunes, los hechos se suceden en estos siendo el acceso principal, siendo un patio de 1.10 un metro con diez centímetros de ancho por 15 quince metros de largo. 2. Que describa el perito los campos visuales y auditivos que prevalecen en el lugar denominado como el de los hechos. Respuesta: los campos visuales se reducen en función del espacio en el que se sucedieron los hechos, así como la cantidad de gente que se ubique en el área común es decir el acceso peatonal al inmueble frente al departamento número

uno. Por lo que hace a los campos auditivos estos se amplifican por lo reducido del espacio paredes y techos estos campos auditivos buenos. 3. Que realice el perito un análisis del elemento subjetivo que integra la presente causa penal y se analice en función de los siete principios propios de la materia de criminalística. Respuesta: de todas las personas que declaran en la indagatoria solo MARÍA DE JESÚS, estuvo en el momento exacto en la que fue lesionado MARIANO, hoy occiso, y de su declaración solo pueden ser materializables, la lesión que presenta en región fronto temporal y la fractura de cadera a nivel de trocánter, no así las múltiples patadas que recibe, esto de acuerdo a lo referido en los diferentes certificados médicos que obran en la causa en la que se actúa. 4. Que determine el perito la posición víctima victimario. Respuesta: el victimario se sitúa de frente a la víctima bipedestado, la víctima se encuentra también bipedestado de espaldas o ligeramente con su franco o con su franco derecho frente al victimario. 5. Que determine el perito una mecánica de hechos. Respuesta: de un solo movimiento se generan las lesiones, al momento de que la víctima recibe un cambio de dirección sin que se pueda precisar la fuerza que fuera empleada en dicha maniobra, la víctima se golpea en la región fronto temporal ocasionándose la lesión descrita en los diversos certificados médicos para posteriormente caer del plano de sustentación hacia su lado derecho teniendo el primer contacto en su cadera del lado derecho a la altura del trocánter, sin que hubiese colocado las manos para evitar el golpe, sin que tampoco existe algún indicio que relacione a los procesados con el hecho que e (*sic*) investiga. 6. Que determine el perito si en el hecho que se investiga existe intercambio de indicios entre el lugar de los hechos, el hoy occiso y RACIEL. Respuesta: de todas las constancias que obran en autos, no existe indicio material alguno que relacione al hoy procesado RACIEL, con los hechos que dan origen a la presente causa, como lo sería un intercambio de material biológico como lo sería sangre, pelos, saliva, fibras textiles, etcétera. Los cuales debieran estar en las uñas, zapatos o ropas que portaba el inculcado el día de los hechos. Ante la ausencia de material sensible susceptible (*sic*) de mayor investigación denominada indicio no se puede allegar al principio de correspondencia. 7. Que determine el perito si existe indicio alguno

que relacione al procesado RACIEL, con los hechos que se le imputan. Respuesta: no existe indicio alguno que permita establecer que el inculpado participó de manera alguna en los hechos en que resulta lesionado el hoy occiso, lo que sí se puede señalar, considerando el elemento subjetivo, siendo esté la declaración de MARÍA DE JESÚS, que el hoy procesado RACIEL, auxilió al hoy occiso, y también trató de levantarlo del suelo, aunque no existe elemento alguno que permita reconstruir este hecho, como lo sería lesiones por sujeción a la altura de los brazos tercio proximal, hecho que en el presente caso no se da. 8. Que determine el perito sus conclusiones. Respuesta: tomando en consideración que no se cuentan con indicio alguno que relacione al inculpado de nombre RACIEL, con las lesiones que presenta al ciudadano MARIANO, lo cual se desprende que las constancias que obran en autos, por lo que atendiendo al elemento subjetivo criminalísticamente hablando, se desprende que el hoy inculpado RACIEL, auxilió al hoy occiso, y trato de levantarlo del suelo, para lo cual sujetó al occiso de los hombros por la parte trasera y dejarlo caer de una altura de 15 quince o 20 veinte centímetros, del suelo, por lo que se debe atender a esta mecánica dando como resultado lo siguiente: 1. Al sujetar al ciudadano MARIANO, de los hombros con ambas manos este hubiese sido lesionado si se utiliza una fuerza excesiva o si se tiene intención de lesionar, lesiones que no presenta el occiso, por lo que se puede afirmar que el ciudadano RACIEL, sólo utilizó la fuerza suficiente y necesaria para auxiliar al hoy occiso y levantarlo del suelo. 2. Se debe considerar que el ciudadano RACIEL, se encontraba alcoholizado al momento de que auxilia al hoy occiso, lo cual entorpece el actuar de una persona, con todo y eso el occiso no presenta lesión alguna, producto de la mecánica referida por la declaración de la ciudadana MARÍA DE JESÚS. 3. Si se considera que el occiso cae de una altura de 15 quince o 20 veinte centímetros del piso y cae sentado la lesión que debería de presentar sería en la región anatómica de glúteos o región sacra, sin que esto se presente en el cuerpo del hoy occiso. Por lo que se concluye que en los hechos que dan origen a la presente causa penal, no se encuentra indicio alguno que indique que el ciudadano RACIEL, participó de forma alguna en las lesiones que presentó el ciudadano Mariano. 9. Que diga el

perito la metodología empleada para rendir su dictamen. Respuesta: esta pregunta se encuentra contestada en el apartado denominado metodología, en el cuerpo del dictamen emitido probable responsable el suscrito...

La diligencia judicial de junta de peritos (medicina forense), entre los peritos ANDRÉS, GREGORIO URBANO, JORGE y JOSÉ LUIS (foja XXXX).

...una vez que les fue leído a dichos peritos el contenido de sus dictámenes, mismos que fueron confrontados con las experticias oficiales, en el caso del perito ANDRÉS, al tener a la vista el dictamen del doctor Salvador manifestó: que el dictamen de dicho médico es correcto en cuanto a que ingresa por fractura de cadera, la cual da origen a la complicación principal que es neumonía y causa de muerte; mientras que el doctor GREGORIO URBANO manifestó: que no estoy de acuerdo en su conclusión, en el párrafo tercero, en el cual manifiesta que la neumonía fue adquirida en el hospital, secundaria a la estancia de 46 cuarenta y seis días y no guarda relación con la fractura de la cadera, lo que si manifiesto como perito médico forense, es que al haber realizado la necropsia, el aspecto macroscópico de los órganos analizados y con los resultados de dicha patología, nuestra conclusión fue neumonía bilateral, complicación determinada por el traumatismo; oficial por otra parte, el perito médico, doctor Jorge Netzahualcóyotl, manifestó: que la neumonía que presentó la persona que falleció que en vida tenía el nombre de MARIANO, fue complicación determinada por la fractura del fémur derecho, por lo tanto, en la conclusión número 03 tres, el perito de la defensa particular, doctor Salvador, no coincide con el nuestro, y que él manifiesta que no guarda relación con la fractura de la cadera, lo cual sí tiene un causa efecto a un hecho traumático que clasificamos de mortal; en comparecencia del perito doctor, JOSÉ LUIS, manifestó: que en relación al dictamen emitido por el perito particular, doctor SALVADOR, en sus conclusiones que aparecen a foja XXXX del expediente, en la conclusión tercera en donde refiere que la neumonía adquirida en el hospital fue secundaria a su

estancia intrahospitalaria de 46 cuarenta y seis días y que no guarda relación con la fractura de cadera, es decir, si el hoy occiso no hubiese tenido fractura no se hubiera presentado la neumonía bilateral, por lo tanto, no habría sido la causa de su fallecimiento; lo manifestado por el doctor JOSÉ LUIS, refiere: específicamente en relación a mi dictamen, no encuentro puntos de controversia con el doctor, y específicamente estoy de acuerdo co (*sic*) los comentarios vertidos por mis compañeros que me han precedido en el uso de la voz y quiero señalar que existe, como ya se comentó ampliamente, relación causa efecto entre la fractura de cadera ancha y la neumonía nosocomial que llevó finalmente a la muerte del multicitado occiso...

La diligencia judicial de junta de peritos (criminalística forense), entre los peritos LEONARDO e ISRAEL (foja XXXX).

...una vez que les fue leído a dichos peritos el contenido de sus dictámenes, mismos que fueron confrontados con las experticias oficiales, en el caso del dictamen exhibido por el perito particular ISRAEL; el perito oficial LEONARDO, manifestó: existen discrepancias entre su opinión pericial y la de este último, que el dictamen del ciudadano ISRAEL, se apega al dictamen rendido por el suscrito en las conclusiones, sin embargo hace una segunda mecánica en la que manifiesta que en base a un elemento subjetivo es movido el lesionado por una persona que trató de auxiliarlo y que a su vez se le cayó a una altura de 15 quince o 20 veinte centímetros, no encontrando ningún elemento objetivo de índole criminalístico que nos lo pruebe; doctor ISRAEL, manifiesta: que una vez escuchada la manifestación por parte del perito oficial me adhiero a ésta y señalo que la discrepancia entre su dictamen y el mío radica en la contestación al cuestionario planteado por la defensa en el punto 05 cinco y la concusión (*sic*) primera del dictamen oficial, ya que el perito oficial refiere que el ciudadano MARIANO se encontraba de frente a su agresor al momento de que es empujado y pierde la vertical y determina que éste sujeto tuvo contacto contra el piso y el suscrito concluye que el ciudadano MARIANO cae del plano de sustentación hacia su

lado derecho, teniendo el primer contacto en su lado derecho a la altura del trocánter, así como la conclusión 04 cuatro del dictamen emitido por el suscrito en donde se sitúa el victimario, frente a la víctima bidepestados, señalando que el suscrito lo coloca de espaldas o ligeramente con su flanco derecho hacia el victimario, siendo ésta la diferencia que existe entre los dictámenes, pero que no afecta la mecánica del hecho y también me adhiero a lo manifestado por el perito en el sentido de que la segunda mecánica que refiere no existe elemento objetivo criminalístico que permita probarlo por lo que en tal orden de ideas, entre lo opinado por el perito oficial y el suscrito no existe discrepancia alguna; en nuevo dicho del perito LEONARDO manifiesta: que de acuerdo a lo expuesto por el perito Israel, queda ya el punto aclarado y no se cuenta con discrepancias entre nuestros dictámenes...

#### Informe pericial emitido por el perito criminalista FILIBERTO (foja 55)

...Siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día XX de XXX de XXX, a solicitud del agente investigador del Ministerio Público, se realiza la presente intervención pericial para la búsqueda de huellas e indicios en calle XXX XXX , departamento XX , colonia XXX , delegación XXX Distrito Federal; en donde el lugar se encontró cerrado con la siguiente descripción, correspondió a la acera sur de la calle antes señalada, donde se ve una casa habitación de dos niveles, con fachada de color negro y verde, con dos puertas metálicas, ambas en posición de cerrado, tocando en arias (*sic*) ocasiones sus respectivo timbres (*sic*), sin obtener contestación. Lo que motivó que nos retiráramos del lugar son conocer de los hechos...

#### Informe de la policía de investigación RAÚL y EVA; (foja XX).

...RACIEL al ser entrevistado en el área de seguridad (galeras) el mencionado refiere que el día de ayer se encontraba en el domicilio de su amigo de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, ya que éste tenía una reunión y estaba tomando bebidas

embriagantes y es el caso que no recuerda la hora pero ya era casi de noche cuando en diferentes ocasiones vecinos del lugar fueron a solicitarle a su amigo que le bajaran el volumen al estéreo pero que no hizo caso, por lo que de repente escuchó gritos y al asomarse afuera del departamentote (*sic*) su amigo había un señor de la tercera edad tirado en el piso y su amigo estaba gritándole a éste, por lo que el entrevistado le ayudó a levantarse y a meterlo a su departamento, llegando posteriormente la patrulla y trasladándolo a esta Representación Social acusándolo de que también le había pegado al hoy lesionado. Al ser entrevistado ÓSCAR, ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO en el área de galeras, refiere en relación a los hechos que se investigan que el día de ayer hizo una reunión en su domicilio ubicado en la calle de XXX XX (*sic*) departamento XX colonia XXX y siendo casi de noche un vecino de la tercera edad del cual no recuerda su nombre le fue a reclamar por tener la música tan alta y de pronto le quiso aventar un golpe y el entrevistado se hizo a un lado, cayéndose al piso, posteriormente salió su amigo de nombre RACIEL y le ayudó al adulto mayor a levantarse, hasta el momento que llegó la patrulla y los trasladaron a esta Representación Social, no omite en manifestar que es de lo que se acuerda (*sic*) ya que estaba demasiado borracho...

Dictamen médico forense suscrito por el perito médico forense JOSÉ LUIS (foja XXXX):

...En relación al ofrecimiento de pruebas por la defensora de oficio: no me quedan claros el o los puntos a peritar. Posterior al análisis de las documentales objetadas: A) mecánica de lesiones, realizada por el doctor JOSÉ LUIS, B) certificado de estado psicofísico, realizado por el doctor JOEL ALBERTO; C) certificado de estado psicofísico realizado por la doctora; D) informe médico en base a expediente signado por la doctora MARTHA MIRIAM. No encuentro desapego en relación a la verdad histórica que se argumenta. Por otro lado no entiendo a qué se refiere el emitir un dictamen en medicina forense que corresponde.

Dictamen de criminalística emitido por la perito GUADALUPE (foja XXXX):

...La que suscribe no emite conclusiones al respecto por no existir una interrogante o cuestionamiento a contestar. Ahora bien es importante señalar que el hecho de que se objete una prueba pericial solo es indicativo de un desacuerdo con un documento respecto a la intervención pericial y no constituye una pregunta. No es congruente que un sujeto que no cuenta con la experticia en una determinada área del conocimiento ponga el (*sic*) duda el trabajo de un experto...

Ahora bien, al realizarse un análisis de los citados elementos de prueba, se desprende que el ministerio público ejerció pretensión punitiva en contra de RACIEL y otro, en la comisión del delito de HOMICIDIO, previsto en el artículo 123, párrafo único (hipótesis de al que prive de la vida a otro), en relación con el numeral 124, párrafo único (se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión), en concordancia al 15, (acción), 17, fracción I (instantáneo), 18, párrafos primero (acción dolosa) y párrafo segundo (conocer y querer), 22, fracción II (los que lo realicen conjuntamente), numerales del Código Penal vigente para el Distrito Federal, cometido en agravio de MARIANO, y en su momento formuló acusación, la cual hizo consistir en los siguientes hechos:

...El día XX de XXX de XXXX, entre las 20:30 veinte horas con treinta minutos y las 21:00 veintiuna horas, el agraviado MARIANO, se encontraba en compañía de su esposa y testigo de hechos MARÍA DE JESÚS, en el interior de su domicilio ubicado en la calle de número XX interior XX colonia XXX, delegación XXX, Distrito Federal, siendo que al escuchar que tocaron la puerta de su departamento, abrió, percatándose que se trataba de su vecino ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR



u ÓSCAR, quien se encontraba en estado de ebriedad, por lo que el denunciante le reclamó del “porqué tocaba la puerta”, volviendo a cerrar, pero segundos después dicho ofendido, escuchó que azotaban la puerta principal del edificio, ante lo cual nuevamente salió, reclamándole al citado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, siendo que éste último empuja al agraviado, cayendo y golpeándose en la cabeza con un medidor que se encontraba en el lugar, siendo que al estar tirado el denunciante, el encausado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR le propinó diversas patadas, momentos en los que se acerca el enjuiciado RACIEL, quien también se encontraba en estado de ebriedad, comenzando a patear al denunciante que se encontraba en el suelo, para luego tratar de levantarlo del piso, advirtiéndole a dicho ofendido “no te hagas pendejo, no tienes nada”; sin que la víctima pudiera incorporarse, por lo cual lo dejó caer, provocando que cayera sobre su cadera, siendo de esta forma que inicialmente el ofendido presentó fractura de cadera, razón por la cual fue internado en el hospital XXXX, en donde quedó internado a consecuencia de las lesiones que presentó, y que fueron clasificadas de forma provisional como de las que tardan en sanar más de sesenta días; empero, el día XX de XXX del año XXX, las lesiones inferidas por los hoy justiciables le causaron su fallecimiento, pues conforme al protocolo de necropsia, firmado por los peritos GREGORIO URBANO y JORGE, refirieron que el cadáver de quien en vida llevó el nombre de MARIANO, falleció de neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, ya descrita y que clasificamos de mortal. Es así que los sujetos activos conjuntamente le causaron lesiones al ofendido que a la postre le ocasionaron su deceso material...

Hechos de los que si bien es cierto, en su momento existieron elementos de prueba suficientes para decretar a RACIEL, su formal prisión o preventiva, por el delito en comento, pero ello fue con los medios de prueba que hasta ese momento habían sido aportados por el ministerio público, con los cuales se acreditó el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado de referencia, a título de probabilidad,

lo que no implica que esos medios de prueba, en el caso concreto sean suficientes para dictar una sentencia condenatoria, pues al constituir el proceso penal un derecho con que cuenta todo inculpado, para que se le demuestren los hechos que se le atribuyen, a través de los diversos medios de prueba que aporte el Ministerio Público, en el caso concreto no aconteció, porque al realizarse un análisis de los medios de prueba existentes en autos y que se transcribieron con anterioridad, si bien es cierto quedaron acreditados los elementos del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, como son:

*a)* Una conducta en forma de acción, consistente en que el día XX de XXX de XXX, el hoy occiso MARIANO, fue agredido por el encausado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, cayendo y golpeándose en la cabeza con un medidor que se encontraba en el lugar, al estar tirado el denunciante, el encausado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR le propinó diversas patadas, siendo de esta forma que inicialmente presentó fractura de cadera, razón por la cual fue internado en el hospital XXXX, en donde quedó internado a consecuencia de las lesiones que presentó, falleciendo el XX de XXX del mismo año de neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur ya descrita, que fue clasificada de mortal.

*b)* Un resultado material, consistente en la privación de la vida de MARIANO, debido a la neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur ya descrita, que fue clasificada de mortal por los peritos médicos forenses.

De igual forma, quedó acreditado el nexo causal, existente entre la conducta desplegada y el resultado material producido, ya que queda claro que la muerte del pasivo MARIANO, se debió a la complicación determinada inevitablemente por la misma lesión, lo que le provocó neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur ya descrita, que fue clasificada de mortal.

La lesión al bien jurídico, relevante para la comunidad y tutelado por la ley penal, incito en el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal, como lo es la vida de las personas, que en la especie se identifica con la del occiso MARIANO.

El objeto material, entendido éste como la cosa sobre la que recayó la conducta humana y de acuerdo al artículo 123 de la ley sustantiva penal que actualmente rige en el ilícito de homicidio lo es una persona, en el caso MARIANO.

Por otra parte, de la descripción típica se desprende la existencia de elementos normativos, que se hacen consistir en: privar, es decir, despojar o quitar a alguien de lo que poseía; en el caso de la vida, es el bien máspreciado por el hombre, es decir “privar de la vida” significa: matar a una persona, quitarle su existencia en cualquiera de las etapas de su desarrollo vital.

Elemento subjetivo genérico en el caso que se analiza se encuentra deducida la existencia del tipo subjetivo doloso, en específico el dolo directo, en atención a lo dispuesto por el párrafo segundo (obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, quiere su realización) del artículo 18 del Código Penal para el Distrito Federal, pues al analizar el contenido final de la voluntad del sujeto activo (diverso al hoy sentenciado RACIEL) que intervino en la realización de la acción de privar de la vida a una persona, y conforme al propio material probatorio, se advierte que consumó el resultado, esto es la privación de la vida de MARIANO.

Sin embargo, de las constancias que integran el sumario no se encuentra acreditada la participación del ahora sentenciado RACIEL, en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, antes mencionado, por el que lo acusa la Representación Social, dado que dicho acusado únicamente impidió que el coacusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, siguiera golpeando al ofendido MARIANO y trató

de levantar a éste último, sin lograrlo, y sin que exista constancia alguna que pudiera determinar que tales actos los realizó para privar de la vida a MARIANO y así acreditar su participación en los hechos que se le atribuyen.

Al efecto, se advierte de lo declarado por el ofendido (hoy occiso) MARIANO, quien indicó en su primigenia declaración, que su vecino RACIEL (*sic*) comenzó a tocar la puerta y las ventanas, el emitente abrió la puerta y ve al vecino acompañado de otro sujeto, de inmediato y sin motivo alguno se le avienta hacia el cuerpo, perdió el equilibrio y cayó en el patio, cuando ya estaba sobre el suelo su vecino RACIEL (*sic*) que es una persona agresiva, comenzó a darle de patadas en la pierna derecha y otro de los sujetos que traía un suéter rojo también le dio de patadas y este sujeto lo levantó a la fuerza y le dice “levántese no se haga pendejo, no le pasa nada”; asimismo en su segunda declaración, aclaró que el nombre del sujeto que lo golpeó es ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, que después llegó el hoy acusado RACIEL, el cual trató de levantarlo (sin mencionar que previamente lo pateó), encontrándose esta persona detrás del ofendido, lo alzó aproximadamente quince centímetros, diciéndole “no te hagas pendejo, no tienes nada”, y como no se levantó, lo dejó caer.

Declaración que en cuanto a los hechos descritos merece valor probatorio de conformidad al numeral 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que fue emitida por persona que no es considerada como inhábil, al no existir dato alguno para ubicarlo como tal, por su edad, capacidad e instrucción y circunstancias personales, se estima que tiene suficiente criterio para juzgar el acto sobre el cual depuso, por lo que es imparcial, limitándose a señalar única y exclusivamente los hechos de los cuales tuvo conocimiento por medio de sus propios sentidos sin ampliarlos ni exagerarlos, siendo su declaración clara y precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la sustancia y circuns-

tancias esenciales del hecho, máxime que de las constancias existentes en autos, no se advierte que haya sido obligado a declarar por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno, el cual constituye un indicio que permite acreditar que en efecto el día y hora mencionados se causó una alteración en su salud, y derivado de dicha lesión, el ofendido falleció de la complicación determinada inevitablemente por la misma lesión (fractura de fémur); sin embargo como podrá observarse, la versión del ofendido, en torno al suceso delictivo en estudio, y respecto a la acusación del Ministerio Público, esto es, que el acusado RACIEL, llegó al lugar, y trató de levantarlo, y como el ofendido no se levantó, el primero en mención, lo dejó caer, y que dicho sentenciado lo pateó; ante lo cual las declaraciones antes señaladas no son suficientes para acreditar la participación del hoy enjuiciado RACIEL en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, por el que se le acusa.

Por otra parte, de lo declarado por la testigo MARÍA DE JESÚS quien en lo que conducente señaló que el día de los hechos, aproximadamente a las 20:30 veinte horas con treinta minutos, encontrándose con el hoy ofendido MARIANO se escuchó que azotaron muy fuerte la puerta principal de acceso a los departamentos, su esposo se dirigió a la puerta, en ese momento se encontró en el pasillo, al coacusado ÓSCAR ALEJANDRO, al cual su esposo le preguntó por qué se portaba agresivo y había azotado la puerta, en ese momento el sujeto de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, empujó con ambas manos a su esposo y debido a esa acción, su esposo cae, se golpea la cabeza con unos medidores y cayó sentado, lastimándose la pierna derecha, por lo que comenzó a gritar que lo dejara en paz y solicitó auxilio a los vecinos del edificio, observando como ÓSCAR ALEJANDRO, comenzó a patear a su esposo, encontrándose éste tendido en el piso, patadas que le daba en la pierna derecha, que su esposo se quejaba, se percata que salió del departamento 3, el hoy acusado RACIEL, sujeto que “al percatarse de las agresiones acudió

de inmediato a donde se encontraba ÓSCAR ALEJANDRO, lesionando a su esposo, se acercó enseguida y empujó a ÓSCAR ALEJANDRO, por lo que éste dejó de patear a su esposo”, enseguida el sujeto de nombre RACIEL, se colocó detrás de su esposo, lo sujetó de sus hombros y le dijo “ya levántate viejo, no te hagas tonto”, observando que su esposo no podía levantarse, que su pierna derecha le “bailaba”, y como su esposo no se levantó el acusado RACIEL, lo dejó caer de una altura de veinte centímetros, ya que se encontraba sujetándolo de los hombros, por lo que su esposo nuevamente se dio otro sentonazo, observando que ya se encontraban otros vecinos.

Cobrando especial relevancia la ampliación de declaración de la testigo MARÍA DE JESÚS (foja XXXX vuelta), ante el juez del conocimiento ratificó sus anteriores declaraciones, y a preguntas de las partes, contestó:

...A preguntas del agente del ministerio público, contestó: que la distancia aproximada a la que la declarante se encontraba de los sujetos cuando observó que golpeaban a su esposo, fue como de 1 un metro; que en el momento en que la declarante observaba tales hechos, sólo les decía a los sujetos que no lo golpearan a su esposo, que lo dejaran en paz. A preguntas del defensor público, respondió: que la dicente se encontraba en la puerta de su casa, al momento que le dijo al procesado de nombre ÓSCAR que dejara en paz a su esposo; que en el momento en que la dicente le dijo a ÓSCAR que dejara en paz a su esposo había luz artificial (foco); que antes de salir, cuando tocaron la puerta de su departamento, el esposo de la dicente se encontraba sentado con ella en el sillón, viendo la televisión; que el sillón donde su esposo y la declarante se encontraban previo a que su esposo abriera la puerta, es el sillón grande que está frente a la puerta, en la sala de su departamento; que la manera en que la de la voz les pidió apoyo a sus vecinos fue gritarles “auxilio, le están pegando a mi esposo”; que en el momento en que la declarante observaba que el sujeto de nombre ÓSCAR pateaba a su esposo, ella seguía en la puerta. A

preguntas del defensor particular, respondió: que la declarante no sabe por qué en la segunda declaración ministerial dijo que su esposo falleció de las lesiones que le provocaron los sujetos, ya que “el que lo golpeó fue ÓSCAR”.

Declaración que, en cuanto a los hechos descritos, merece valor probatorio de conformidad al numeral 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que fue emitida por persona que no es considerada como inhábil, al no existir dato alguno para ubicarla como tal, por su edad, capacidad e instrucción y circunstancias personales, se estima que tiene suficiente criterio para juzgar el acto sobre el cual depone, por lo que es imparcial, limitándose a señalar única y exclusivamente los hechos de los cuales tuvo conocimiento por medio de sus propios sentidos sin ampliarlos ni exagerarlos, siendo su declaración clara y precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la sustancia y circunstancias esenciales del hecho, máxime que de las constancias existentes en autos, no se advierte que haya sido obligada a declarar por fuerza o miedo, ni impulsada por engaño, error o soborno, el cual constituye un indicio que permite acreditar que en efecto el día y hora mencionados se causó una alteración en la salud al ofendido MARIANO, mismo que falleció de la complicación determinada inevitablemente por la misma lesión; sin embargo como podrá observarse, la versión de la testigo MARÍA DE JESÚS, en torno al suceso delictivo en estudio, y respecto a la acusación del ministerio público, esto es, que el acusado RACIEL, haya pateado al hoy occiso, el cual se encontraba en el suelo, para luego colocarse a su espalda, tratando de levantarlo del piso, y como la víctima no pudo incorporarse, lo dejó caer, provocando que cayera sobre su cadera, no encuentra apoyo con los restantes elementos probatorios, toda vez que la testigo en mención en su primigenia declaración, no refiere que el justiciable haya pateado al pasivo como se sostiene en la acusación, y solo refiere que al tratar de levantar a la víctima

del piso, como ésta no pudo incorporarse, lo dejó caer, aunado a que al ampliar su declaración, ante el juzgado del conocimiento, indicó que el sujeto que golpeó a su esposo, fue diverso al hoy sentenciado RACIEL; por tanto, tal declaración es insuficiente para acreditar la participación del sentenciado RACIEL, puesto que dicha testigo señala a una persona diversa al hoy sentenciado en la comisión del delito a estudio, concretamente en privar de la vida a una persona.

Por su parte, de las declaraciones de los policías remitentes DAVID y LUCIO se advierte que si bien reúnen los requisitos del numeral 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, porque fueron vertidas por personas hábiles para declarar, en virtud de no existir alguna causa que les impida la ley hacerlo, por su edad, capacidad e instrucción, y tener el criterio necesario para juzgar el hecho que presenciaron, y por ende no se les puede atribuir falta de probidad, así como independencia en su posición y antecedentes personales, por tanto resultan imparciales, ya que el hecho que presenciaron es susceptible de conocerse por medio de los sentidos, esto es por sí mismas y no por inducciones, ni referencias de otro, además de ser claros y precisos, sobre las circunstancias esenciales del hecho, sin que aparezca en actuaciones que hayan sido obligados por fuerza o algún medio, ni impulsados por engaño, error o soborno para declarar en el sentido en que lo hicieron, no obstante a éstos no les constan los hechos, únicamente se presentaron al lugar del evento delictivo, en virtud de que requirieron su apoyo para detener al acusado RACIEL y el coacusado ÓSCAR ALEJANDRO y/o ÓSCAR, quienes se apreciaban al parecer en estado de ebriedad, y quienes dijeron ser vecinos de dicho inmueble, les manifestaron que los sujetos antes referidos momentos antes habían golpeado al señor MARIANO, de XX (*sic*) de edad; de ahí que no corroboren la participación del sentenciado RACIEL, en la comisión del delito de HOMICIDIO, que se le atribuye.



Lo mismo sucede con lo declarado por el testigo ANDRÉS, quien indicó que escuchó en el patio de la entrada del edificio, gritos de personas que se estaban peleando y enseguida golpes, las paredes se zimbarron, se oían gritos, de inmediato salió de su departamento y se dirigió a la planta baja, al llegar al pasillo de la planta baja, se percató que frente a la puerta del departamento número 1 uno, estaba tirado sobre el piso, el señor MARIANO (*sic*), y de pie parado frente al señor MARIANO, el co-acusado ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, sujeto que estaba parado con las piernas abiertas y en medio de las mismas tenía el cuerpo del señor MARIANO, junto a éste se encontraba el acusado RACIEL, al ver la agresión, le grita a éstos que dejaran al señor, por lo que ambos sujetos empiezan a caminar retadoramente hacia el testigo; advirtiéndose de la declaración del citado testigo, que si bien es cierto reúne los requisitos del numeral 255 del Código Procesal de la materia, porque fue vertida por persona hábil para declarar, en virtud de no existir alguna causa que le impida la ley hacerlo, por su edad, capacidad e instrucción, y tener el criterio necesario para juzgar el hecho que presencié, y por ende no se le puede atribuir falta de probidad, así como independencia en su posición y antecedentes personales, por tanto resulta imparcial, ya que el hecho que presencié es susceptible de conocerse por medio de los sentidos y el cual recayó en la persona del ofendido, esto es por sí mismo y no por inducciones, ni referencias de otro, además de ser claros y precisos, sobre las circunstancias esenciales del hecho, sin que aparezca en actuaciones que haya sido obligado por fuerza o algún medio, ni impulsado por engaño, error o soborno para declarar en el sentido en que lo hizo; sin embargo, no refiere que el hoy acusado RACIEL, haya intervenido en la comisión del delito que se le acusa, únicamente indica que éste se encontraba junto al ofendido.

En igual condiciones, se encuentra lo declarado por el testigo MANUEL, quien al respecto manifestó que el día señalado como de los

hechos, se empezaron a escuchar voces de varias personas, quienes estaban en la planta baja en el patio y gritaban, que el golpeteo era muy fuerte y se oían gritos de mujer, que decía “ya déjenlo, no lo golpean (*sic*), ya está grande y lo van a lastimar”, por lo que salió del departamento en compañía de su amigo, encontrándose a ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, persona quien estaba parado sobre el hoy ofendido (circunstancia que no mencionó el testigo ANDRÉS, ya que éste indicó que el coacusado, se encontraba entre las piernas del hoy occiso), y también estaba parado junto a éste, el hoy acusado RACIEL, sujetos que les gritaban que les iban a partir su madre, y se acercaban retadoramente, por lo cual suben a su departamento y llaman a la policía; de la anterior manifestación se desprende que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 255 del Código Adjetivo de la materia, porque fue vertida por persona hábil para declarar, en virtud de no existir alguna causa que le impida la ley hacerlo, por su edad, capacidad e instrucción, y tener el criterio necesario para juzgar el hecho que presencié, y por ende no se le puede atribuir falta de probidad, así como independencia en su posición y antecedentes personales, por tanto resulta imparcial, ya que el hecho que presencié es susceptible de conocerse por medio de los sentidos y el cual recayó en la persona del ofendido, esto es por sí mismo y no por inducciones, ni referencias de otro, además de ser claros y precisos, sobre las circunstancias esenciales del hecho, sin que aparezca en actuaciones que haya sido obligado por fuerza o algún medio, ni impulsado por engaño, error o soborno para declarar en el sentido en que lo hizo; no obstante, al citado testigo, tampoco le consta que el hoy acusado RACIEL, haya intervenido en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO que se le acusa, ya que únicamente refiere que el acusado RACIEL, se encontraba parado junto al ofendido.

De igual forma, obran en actuaciones las declaraciones de los testigos de identidad ESTELA y MARIO, las cuales adquieren valor de prueba, en términos del artículo 255 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Distrito Federal, porque fueron vertidas por personas hábiles para declarar, en virtud de no existir alguna causa que les impida la ley hacerlo, por su edad, capacidad e instrucción, y tener el criterio necesario para juzgar el hecho que presenciaron, y por ende no se les puede atribuir falta de probidad, así como independencia en su posición y antecedentes personales, por tanto resultan imparciales, ya que el hecho que presenciaron es susceptible de conocerse por medio de los sentidos, además de ser claras y precisas, sobre las circunstancias esenciales del hecho, sin que aparezca en actuaciones que hayan sido obligados por fuerza o algún medio, ni impulsados por engaño, error o soborno para declarar en el sentido en que lo hicieron, y de las cuales se advierte que no les constan los hechos por no haberlos presenciado, que tomaron conocimiento de los mismos a través de una llamada telefónica, de parte de la testigo MARÍA DE JESÚS, mediante la cual les hacía de su conocimiento que el señor MARIANO había sido agredido por los vecinos y que iba a ser traslado al hospital.

Por cuanto hace a lo declarado por los policías remitentes RODRIGO y HUGO, se les otorga valor probatorio en términos del artículo 255 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Distrito Federal, porque fueron vertidas por personas hábiles para declarar, en virtud de no existir alguna causa que les impida la ley hacerlo, por su edad, capacidad e instrucción, y tener el criterio necesario para juzgar el hecho que presenciaron, y por ende no se les puede atribuir falta de probidad, así como independencia en su posición y antecedentes personales, por tanto resultan imparciales, ya que el hecho que presenciaron es susceptible de conocerse por medio de los sentidos y no por inducciones, ni referencias de otros, además de ser claras y precisas, sobre las circuns-

tancias esenciales del hecho, sin que aparezca en actuaciones que hayan sido obligados por fuerza o algún medio, ni impulsados por engaño, error o soborno para declarar en el sentido en que lo hicieron, advirtiéndose que a éstos no les constan los hechos, únicamente refieren sobre la detención del co-acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR, en virtud de que les fue señalado por la testigo MARÍA DE JESÚS, como la persona que en compañía de otro sujeto le habían provocado lesiones a su esposo y a consecuencia de las cuales su esposo había llegado al hospital y el día XX de XXX de XXXX, había fallecido en el Hospital a consecuencia de los golpes; por lo que las declaraciones de los Policías de referencia, tampoco aportan dato alguno que permita acreditar la participación del acusado RACIEL, en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO.

Cobrando especial relevancia el dictamen de medicina forense, signado por el Perito JOSÉ LUIS, quien concluyó que el ciudadano MARIANO, de XX de edad, presentó fractura de cadera derecha y fue producido contra objeto de consistencia dura de bordes romos, sin filo, siendo el objeto contundente un piso, cinta asfáltica por caída; y ratificación del mismo, y al interrogatorio en lo conducente, contestó que el momento en que se ocasionó la fractura de cadera derecha el lesionado, fue al momento de la caída; dictamen al que se le otorga valor probatorio de conformidad con el numeral 254 del Código de Procedimientos Penales, al haber sido emitido por perito especialista en la materia, sin embargo, con el mismo no se puede acreditar la participación del acusado RACIEL, en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, que el ministerio público, le imputa, al advertirse de dicha pericial que la causa que originó la lesión que en su momento presentó el hoy occiso, fue la caída precisamente por el empujón que le propinó el co-acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR.

Lo anterior, de igual forma se advierte de la nota inicial de urgencias, suscrita por la doctora S., adscrita al hospital de XXXX XXXX, en la que señala: "...ingresó al hospital XXXX XXXX a una persona de sexo masculino de nombre MARIANO ...; por el momento no toma ningún medicamento, controlado cada seis meses por cardiología. Alergias: tabaquismo y alcoholismo negados. En esta ocasión es traído por el servicio de ambulancia al sufrir caída de su propia altura al parecer por terceras personas..."

Aunado al dictamen en materia de medicina, suscrito por LEONARDO (mecánica de lesiones), en el que concluyó: "...Por lo que respecta a MARIANO y de acuerdo con las regiones anatómicas afectadas, se establece que el mismo, se encontraba de frente a su agresor o agresores, al momento de que es empujado y pierde la vertical, por lo que se determina, que este sujeto tuvo contacto contra el piso..."

De igual forma, obra en autos el dictamen de medicina forense suscrito por el perito de la defensa, ISRAEL, quien en lo conducente, concluyó: "...determine el perito la posición víctima victimario. Respuesta: el victimario se sitúa de frente a la víctima bipedestado, la víctima se encuentra también bipedestado de espaldas o ligeramente con su franco o con su franco derecho frente al victimario. 5. Que determine el perito una mecánica de hechos. Respuesta: de un solo movimiento se generan las lesiones, al momento de que la víctima recibe un cambio de dirección sin que se pueda precisar la fuerza que fuera empleada en dicha maniobra, la víctima se golpea en la región fronto temporal ocasionándose la lesión descrita en los diversos certificados médicos para posteriormente caer del plano de sustentación hacia su lado derecho teniendo el primer contacto en su cadera del lado derecho a la altura del trocánter, sin que hubiese colocado las manos para evitar el golpe..."

De igual forma obra en actuaciones el dictamen de medicina forense, signado por el perito de la defensa SALVADOR, quien en lo conducen-

te concluyó que MARIANO, presentó fractura de cadera trocanterica, secundaria a una caída de su propia altura; dictámenes que a los que se les otorga valor probatorio con fundamento en los artículos 175 y 254 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por haber sido emitidos por especialistas en la materia, a través de los cuales se acredita que el hoy ofendido fue lesionado por una persona diversa al hoy acusado RACIEL; y en consecuencia no se encuentra acreditada su participación en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, por el cual lo acusa el ministerio público.

No pasa desapercibido que obra en actuaciones, el protocolo de Necropsia, suscrito por los peritos GREGORIO URBANO y JORGE del que se desprende que la causa que originó la muerte del ofendido antes mencionado, fue neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, que clasificaron de mortal; así como que la fractura en mención, fue originada contra objeto de consistencia dura de bordes romos, sin filo, siendo el objeto contundente un piso, cinta asfáltica, por caída; sin que se pueda determinar que la causa que originó la lesión al hoy ofendido, haya sido derivada de la intervención del acusado RACIEL, únicamente para tratar de levantar al ofendido arriba señalado, sino derivado de una caída de su propia altura, al encontrarse en un primer momento el ofendido frente a su victimario, para en un momento dado el co-acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, empujarlo, lo que motivó que el ofendido cayera sobre su pierna derecha, y de esta forma ocasionarle la lesión (fractura de fémur), y cuya complicación, a la postre le originó la muerte, como se desprende de los diversos dictámenes en la materia. Experticial a la que se le concede valor probatorio pleno, de acuerdo a lo estipulado por los artículos 254 y 175 del Código Adjetivo Penal vigente, por haber sido realizado por peritos en la materia.

De igual forma obra lo declarado por el coacusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, quien indicó que el señor MARIANO, le em-

pieza a gritar de groserías, por lo que se empezaron a hacer de palabras mutuamente, el ofendido le tira un golpe y se cae solo, ya que lanzó su puño derecho, pero como lo esquivó, este señor se fue de largo, se giró y se cayó, en ese momento escuchó gritos de la esposa del señor, RACIEL sale de la casa y se va hacia donde estaba el señor y lo ayuda a levantarse; advirtiéndose de la declaración del co-acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, que únicamente indica que el hoy acusado RACIEL, trató de ayudar al hoy occiso a levantarse, por tanto, dicho elemento de prueba, tampoco es idóneo para acreditar la participación del acusado en la comisión del delito que se le acusa.

Máxime que frente a la imputación que el ofendido MARIANO y la testigo MARÍA DE JESÚS realizan contra el enjuiciado, se cuenta con la negativa de éste; en efecto, RACIEL, ante el Ministerio Público dijo que el día de los hechos, se encontraba en el interior del departamento propiedad del acusado ÓSCAR ALEJANDRO ingiriendo bebidas alcohólicas, la amiga de ÓSCAR de nombre ANABEL dijo que “ya se retiraba del lugar”, por lo que ÓSCAR la acompañó, a los pocos minutos, escuchó mucho alboroto, escuchando gritos, al salir del departamento de ÓSCAR, observó que en el pasillo del interior del edificio, se encontraba ÓSCAR de espaldas, y observó que delante de él se encontraba una persona en el piso, tratando de incorporarse, por lo que de inmediato se dirigió hacia ÓSCAR, lo empujó hacia a un lado y lo hizo hacia atrás, diciéndole que ya se calmara y se metiera a la casa, al ver que el ofendido se encontraba en el piso, trató de ayudarlo, sujetándolo de ambos brazos y le dijo a dicha persona que le ayudaría a levantarse, pero debido a su estado inconveniente, no lo sujetó bien y se le resbaló dicha persona, sin embargo esa no era su intención, ya que lo que pretendía era ayudarlo a que se incorporara; en declaración preparatoria y en audiencia de desahogo de pruebas ante el Juzgado del conocimiento, ratificó sus declaraciones, y en esta última agregó que no le causó ninguna lesión al

señor MARIANO, que es inocente pues no ha cometido ningún delito, está privado de su libertad injustamente, en ningún momento agredió o dio de patadas al señor que estaba en el piso, su intervención fue única y exclusivamente para auxiliar al señor, ya que la señora que estaba parada frente a la entrada de su departamento, gritaba “ayúdenme, ayudenme, ya no le pegues”, que cuando salió del departamento de ÓSCAR, lo vio de espaldas, frente a la puerta de la entrada el señor MARIANO se encontraba tirado en el piso, tratando de incorporarse, caminó hacia donde estaba, hizo a un lado a ÓSCAR, hacia la pared de lado izquierdo, trató de auxiliar al señor MARIANO, agarrándolo de los hombros, pues le dije que lo ayudaría a levantar, pero el señor no hizo esfuerzo, no cooperó para incorporarse, no sabía por qué motivo estaba el señor tirado en el piso y no sabía que el señor estaba lesionado y que por eso no se podía incorporar, que el acusado había ingerido alcohol y por el mismo peso del señor, es que no lo sujetó bien y se le resbaló, pero su intención era ayudarlo; asimismo en audiencia de vista celebrada ante este Tribunal de Alzada, el acusado RACIEL solicitó “...que su señoría tome en consideración la declaración efectuada por la esposa del hoy occiso, en la cual menciona que la única persona que agrede a su esposo es ÓSCAR, por lo que de esta manera considero injusta mi detención, ya que yo en ningún momento agredí al señor MARIANO, sólo lo auxilié...”; declaraciones del acusado RACIEL, de las que se advierte que niega los hechos que se le imputan, indicando que no golpeó al hoy ofendido (occiso), que hizo a un lado al co-acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, y trató de ayudar al ofendido a incorporarse; manifestación con la que tampoco se puede acreditar su intervención en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, por el cual el Ministerio Público formuló su acusación.

Sin que de los restantes elementos probatorios, tales como el formato de detenidos puestos a disposición, los certificados médicos practica-



dos al acusado RACIEL, las fotografías correspondientes al acusado y al lugar de los hechos, la inspección ministerial, se advierta dato alguno que robustezca la imputación realizada por el ofendido (occiso) y testigo MARÍA DE JESÚS.

De lo hasta aquí expuesto se desprende que aparte de lo declarado por la testigo MARÍA DE JESÚS, y la versión que en su momento proporcionó el ofendido MARIANO, aunado a las manifestaciones de los policías remitentes David y Lucio, así como todos y cada uno de los elementos de prueba que ya fueron analizados, se desprenda algún elemento de convicción que acredite que el acusado privó de la vida a una persona; y por el contrario obra en autos la negativa que de los hechos realizó el hoy enjuiciado, misma que no fue desvirtuada con el contexto probatorio que fue recabado en la integración de la averiguación previa como en el desarrollo del proceso, dado que sólo se cuenta con la imputación que el entonces ofendido (hoy occiso) y la testigo MARÍA DE JESÚS (quien no confirma que el acusado haya pateado al pasivo) realizaron en su contra, como lo asevera el Ministerio Público al realizar su acusación, no corroborada con medios de prueba para sustentar que el sentenciado RACIEL, intervino en privar de la vida a MARIANO.

Por lo que se reitera que si bien es cierto en su momento existieron elementos de prueba suficientes para el dictado de un auto de formal prisión, en este momento no son suficientes para el dictado de una sentencia condenatoria atento a lo expuesto líneas arriba, en esa tesitura, al no acreditarse la plena responsabilidad penal del sentenciado RACIEL, en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, por el cual formuló acusación en su contra el Ministerio Público, al carecer de los medios de convicción suficientes que brinden sustento a la acusación ministerial, por lo que con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 247 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que dispone que no podrá condenarse a un acusado sino cuando se prueba que cometió el delito que se

le imputa, se modifica el resolutivo primero de la sentencia de fecha XX de XXX del XXXX, dictada por el Juez Interino Tercero Penal del Distrito Federal, para ajustarlo a lo resuelto en el presente considerando, únicamente por cuanto hace al acusado RACIEL, y se absuelve de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en consecuencia se ordena su absoluta e inmediata libertad, única y exclusivamente por cuanto al sentenciado RACIEL.

V. Por otra parte, en relación al sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, una vez que se ha realizado un análisis de los anteriores elementos de prueba, en términos del artículo 246 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, tienen el valor probatorio que les confieren los artículos 261 y 286 del Código adjetivo de la materia, por haber sido rendidos conforme a lo dispuesto por los numerales 250, 253, 254 y 255 del Código citado; los cuales son aptos y suficientes para acreditar plenamente los elementos del delito de HOMICIDIO, previsto en los artículos 123 (hipótesis de al que prive de la vida a otro), en relación con el numeral 124 párrafo único (se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión), en concordancia al 15 (acción), 17 fracción I (Instantáneo), 18 párrafos primero (acción dolosa) y párrafo segundo (conocer y querer), y 22 fracción I (los que lo realicen por sí mismo) (en virtud de no haberse acreditado la participación del diverso co-acusado RACIEL), numerales del Código Penal vigente para el Distrito Federal, cometido en agravio de MARIANO, que la representación social atribuye a ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR.

Partiendo de la finalidad establecida en el considerando II de la presente resolución, se ha efectuado un análisis de la resolución recurrida, sus argumentos y las constancias que lo integran, y al examinar los agravios exhibidos, al igual que con un sano juicio crítico el cuadro probatorio que conforma la causa, en apego al marco legal que se integra

no sólo por nuestra Constitución Política, sino además a las legislaciones tanto sustantiva como adjetiva en esta materia, permite afirmar que existe una perfecta adecuación de la conducta desplegada por el acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, con la descripción del delito de HOMICIDIO, previsto en el artículo 123, párrafo único (al que prive de la vida a otro), en relación al 124 párrafo único (se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión), del Código Penal para el Distrito Federal, precisamente porque valorados que fueron los elementos de prueba antes citados, de acuerdo a los siguientes artículos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal: 250, que otorga el carácter de prueba plena a los informes de la policía de investigación, como al de puesta a disposición, así como a las documentales públicas que obran en la causa; 254, que da la pauta para apreciar la fuerza probatoria de los certificados de estado físico, dictámenes en necropsia, medicina forense y criminalística de campo; 255 a efecto de apreciar los testimonios que obran en autos; y 286 que otorga pleno valor probatorio a las actuaciones que conforme a las reglas establecidas por el propio código son realizadas tanto por el Ministerio Público como por la policía; todo lo cual al ser apreciado según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando en conciencia en su conjunto el valor de las presunciones, según lo disponen los numerales 245, 246, 261 y 286 de la ley adjetiva, permite arribar a la prueba plena del siguiente acontecimiento:

...El día XX de XXX de XXX , entre las 20:30 veinte horas con treinta minutos y las 21:00 veintiuna horas, el agraviado MARIANO, se encontraba en compañía de su esposa y testigo de hechos MARÍA DE JESÚS en el interior de su domicilio ubicado en la calle de XXX, número XX interior XX, colonia XXX, delegación XXX,

Distrito Federal, siendo que al escuchar que tocaron la puerta de su departamento, abrió, percatándose que se trataba de su vecino, hoy acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, quien se encontraba en estado de ebriedad, por lo que el denunciante le reclamó del “porqué tocaba la puerta”, volviendo a cerrar, pero segundos después dicho ofendido, escuchó que azotaban la puerta principal del edificio, ante lo cual nuevamente salió, reclamándole al acusado, siendo que éste último empuja al agraviado, cayendo y golpeándose en la cabeza con un medidor que se encontraba en el lugar, siendo que al estar tirado el denunciante, el encausado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR le propinó diversas patadas, momentos en los que se acerca RACIEL, quien también se encontraba en estado de ebriedad, quien trató de levantar al ofendido, sin que la víctima pudiera incorporarse; siendo de esta forma que el ofendido inicialmente presentó fractura de cadera, razón por la cual fue internado en el hospital XXXX, en donde quedó internado a consecuencia de las lesiones que presentó y que de forma provisionalmente como las que tardan en sanar más de sesenta días; empero, el día XX de XXX del año XXXX, las lesiones inferidas por el hoy justiciable le causaron su fallecimiento, pues conforme al protocolo de necropsia, firmado por los peritos GREGORIO URBANO y JORGE, refirieron que el cadáver de quien en vida llevó el nombre de MARIANO, falleció de neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, ya descrita y que clasificamos de mortal. Es así que el sujeto activo le causó lesiones al ofendido que a la postre le ocasionaron su deceso material...

Ahora bien, una vez que se ha realizado un análisis de los anteriores elementos de prueba, y principalmente la fe de cadáver y nueva fe de cadáver, declaración de los testigos de identidad ESTELA y MARIO, dictámenes de criminalística y fotografía, dictamen de necropsia, inspección ocular, dictámenes de medicina forense; las declaraciones de los policías DAVID y LUCIO, del denunciante MARIANO, de los testigos MARÍA DE JESÚS, ANDRÉS y MANUEL; en términos del artículo 246 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, tienen

el valor probatorio que les confieren los artículos 261 y 286 del Código adjetivo de la materia, por haber sido rendidos conforme a lo dispuesto por los numerales 250, 253, 254 y 255, del código citado; los cuales son aptos y suficientes para acreditar plenamente, en primer lugar, los elementos del delito de HOMICIDIO, previsto en el artículo 123, párrafo único (al que prive de la vida a otro) en relación al 124, párrafo único (se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión), del Código Penal para el Distrito Federal, respecto del cual formalizó su acusación el Ministerio Público contra ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, cometido en agravio de MARIANO, ya que los hechos sometidos a estudio sí se ubican en esas disposiciones legales, colmándose la tipicidad.

En efecto, del análisis de los elementos de prueba que integran la causa reseñados en el presente considerando, se aprecia que son suficientes para comprobar plenamente la existencia de los elementos del delito de HOMICIDIO, previsto en los artículos 123 y 124, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, ya que conforme al artículo 124 del Código Adjetivo de la materia, se acreditan los siguientes elementos:

Una conducta humana en forma de acción, primer supuesto a que se refiere el artículo 15, del Código Penal para el Distrito Federal, que precisamente debe ser una actividad voluntaria relevante para el derecho penal y violación a una norma prohibitiva, consistente en que el día XX de XXX de XXXX, entre las 20:30 veinte horas con treinta minutos y las 21:00 veintiuna horas, al encontrarse el ofendido MARIANO en el interior de su domicilio ubicado en la calle de XXX, número XX, interior XX, colonia XXX, delegación XXX, Distrito Federal, escuchó que azotaban la puerta principal del edificio, ante lo cual salió, reclamándole al acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, siendo que éste último empuja al agraviado, cayendo y golpeándose en la cabeza con

un medidor que se encontraba en el lugar, al estar tirado el denunciante, el encausado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR le propinó diversas patadas, siendo de esta forma que inicialmente presentó fractura de cadera, razón por la cual fue internado en el hospital XXXX, en donde quedó internado a consecuencia de las lesiones que presentó, falleciendo el XX de XXX del mismo año XXXX, de neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur ya descrita, que fue clasificada de mortal.

La conducta descrita con antelación trajo como consecuencia un resultado material, consistente en la privación de la vida de MARIANO, debido a la neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur ya descrita, que fue clasificada de mortal por los peritos médicos forenses.

De igual forma, quedó acreditado el nexo causal, existente entre la conducta desplegada y el resultado material producido, ya que queda claro que la muerte del pasivo MARIANO, se debió a la complicación determinada inevitablemente por la misma lesión, lo que le provocó neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur ya descrita, que fue clasificada de mortal, provocada por el actuar del sujeto activo ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, puesto que de no haber llevado a cabo su conducta, el resultado material no se hubiera producido. Lo anterior quedó plenamente acreditado con los diversos dictámenes, tales como:

El dictamen de medicina forense, signado por el perito JOSÉ LUIS, quien concluyó que el ciudadano MARIANO, de (*sic*), presentó fractura de cadera derecha y fue producido contra objeto de consistencia dura de bordes romos, sin filo, siendo el objeto contundente un piso, cinta asfáltica por caída; y ratificación del mismo, y al interrogatorio en lo conducente, contestó que el momento en que se ocasionó la fractura de cadera derecha el lesionado, fue al momento de la caída, advirtiéndose

de dicha pericial que la causa que originó la lesión que en su momento presentó el hoy occiso, fue la caída precisamente por el empujón que le propinó el sujeto activo ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR.

Con la nota inicial de urgencias, suscrita por la doctora S., adscrita al Hospital XXX de XXXX, en la que señala: "...ingresó al hospital XXX XXXX a una persona de sexo masculino de nombre MARIANO...; por el momento no toma ningún medicamento, controlado cada seis meses por cardiología. Alergias: tabaquismo y alcoholismo negados. En esta ocasión es traído por el servicio de ambulancia al sufrir caída de su propia altura al parecer por terceras personas...".

Aunado al dictamen en materia de medicina, suscrito por Leonardo (mecánica de lesiones), en el que concluyó: "...Por lo que respecta a MARIANO y de acuerdo con las regiones anatómicas afectadas, se establece que el mismo, se encontraba de frente a su agresor o agresores, al momento de que es empujado y pierde la vertical, por lo que se determina, que este sujeto tuvo contacto contra el piso...".

De igual forma, obra en autos el protocolo de necropsia del que se desprende que la causa que motivó la muerte del ofendido antes mencionado, fue neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, que clasificaron de mortal; así como que la fractura en mención, fue originada contra objeto de consistencia dura de bordes romos, sin filo, siendo el objeto contundente un piso, cinta asfáltica, por caída de su propia altura, al encontrarse en un primer momento el ofendido frente a su victimario, para en un momento dado el acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR empujarlo, lo que motivó que el ofendido cayera sobre su pierna derecha, y de esta forma ocasionarle la lesión (fractura de fémur), y cuya complicación, a la postre le originó la muerte.

Experticiales que cuenta con el valor probatorio que les confiere el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Dis-

trito Federal, al haber sido emitidos por peritos en la materia, y con los cuales se comprueba que la muerte del pasivo MARIANO, se debió a la complicación determinada inevitablemente por la fractura de fémur, que le originó el actuar del sujeto activo ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR.

Con lo anterior, se destruyó un bien jurídico, relevante para la comunidad y tutelado por la ley penal, incito en el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal, como lo es la vida de las personas, que en la especie se identifica con la del occiso MARIANO.

Ahora bien, las pruebas reseñadas en esta resolución pusieron de manifiesto, sin lugar a duda, que la conducta efectuada por el agente del delito recayó sobre un objeto material, entendido éste como la cosa sobre la que recayó la conducta humana y de acuerdo al artículo 123 de la ley sustantiva penal que actualmente rige en el ilícito de homicidio lo es una persona, en el caso MARIANO.

De igual forma, se da la existencia de los sujetos del delito, pues partiendo de la base que sólo la conducta humana tiene relevancia para el derecho penal, solamente tendrá la calidad de sujeto activo del delito una persona. *a)* El sujeto activo es aquel que interviene en el evento típico realizando la conducta que afecta al bien jurídico tutelado por la ley, que en el caso a estudio, el tipo penal de que se trata no requiere de ninguna calidad específica, por tanto, se está en presencia de un tipo penal de sujeto activo común o indiferente, basta que sea una persona, lo que quedó acreditado, al observarse que el activo fue ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR; *b)* El sujeto pasivo del delito, es la persona sobre la cual recae la conducta delictiva, quien resiente los efectos que produce la comisión del delito y que en el presente caso lo es el occiso MARIANO.

Respecto a la “forma de intervención” de ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, en los hechos delictuosos de HOMICIDIO, fue por



sí mismo, prevista en el artículo 22 fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, es decir, tuvo el dominio pleno de la conducta que realizó, y de actuaciones no se desprende la participación de otra persona, ya que si bien es cierto, el Ministerio Público, acusó a ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, conjuntamente con RACIEL, no obstante como se advierte del Considerando IV de la presente resolución, por cuanto hace a este último, no se acreditó su intervención en el delito a estudio.

Por otra parte, de la descripción típica se desprende la existencia de elementos normativos, que se hacen consistir en: privar, es decir, despojar o quitar a alguien de lo que poseía; en el caso de la vida, es el bien máspreciado por el hombre, es decir “privar de la vida” significa: matar a una persona, quitarle su existencia en cualquiera de las etapas de su desarrollo vital.

Elemento subjetivo genérico en el caso que se analiza se encuentra deducida la existencia del tipo subjetivo doloso, en específico el dolo directo, en atención a lo dispuesto por el párrafo segundo (obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, quiere su realización) del artículo 18 del Código Penal para el Distrito Federal, pues al analizar el contenido final de la voluntad del sujeto activo que intervino en la realización de la acción de privar de la vida a una persona, y conforme al propio material probatorio, se advierte que consumó el resultado, esto es la privación de la vida de MARIANO; por lo que, en tal forma se colige que el activo del delito, al tiempo de la realización de su conducta ilícita, conocía y quería la realización del contenido material u objetivo del tipo penal de homicidio, ya que del acervo probatorio se desprende que el activo, como el común de las personas, sabía que está legalmente prohibido privar de la vida a una persona y no obstante tal conocimiento ideó, deliberó, resolvió y aún más realizó todos los actos preparatorios y ejecutivos necesarios y

suficientes para concretizar tal prohibición legal, lo cual efectivamente logró; por lo anterior, se afirma la ausencia de elemento alguno que evidencie lo contrario, puesto que no se hace patente la existencia de fuerza material irresistible o algún elemento negativo del tipo que pudiera erigirse como excluyente del dolo.

Acreditándose el elemento subjetivo específico distinto al dolo *animus necandi*, esto es, la intención del sujeto activo de privar de la vida a una persona, porque al momento del suceso delictivo, infirió al sujeto pasivo una lesión, consistente en fractura de fémur, al empujarlo y caer el sujeto pasivo, y derivado de la complicación determinada inevitable por la misma lesión, es que falleció de neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur ya descrita, que fue clasificada de mortal, por lo que dicho elemento subjetivo específico se encuentra acreditado.

Elementos típicos que se encuentran plenamente probados en autos, con todos y cada uno de los indicios que se desprenden de las pruebas que fueron citadas en el presente considerando; mismas que al ser valoradas y concatenadas entre sí, resultan aptas y suficientes para acreditar la descripción típica del delito de HOMICIDIO.

Conclusión que no es producto de conjetura ni por mayoría de razón, sino el resultado de la correcta valoración y enlace de los diversos elementos de prueba que conforman la causa, y tiene su principal sustento en lo declarado por el agraviado MARIANO, quien ante el Ministerio Público Investigador, en el Hospital General XXXX, en lo conducente, indicó:

...ÓSCAR ALEJANDRO, lo empujó el día sábado XX de XXX del año en curso, aproximadamente a las 20:30 veinte horas con treinta minutos, y que con motivo de que ÓSCAR ALEJANDRO, lo empujó, se cayó al piso y una vez en el piso lo comenzó a patear ÓSCAR ALEJANDRO, que mi esposa comenzó a

gritar..., después me arrastré hacia mi departamento, hasta que después llegaron varias patrullas y a mí me subieron a una ambulancia, siendo esto lo que sucedió que un primer momento manifesté que RACIEL me había agredido y golpeado pero fue debido a que no conocía sus nombres, pero una vez que observé las fotos a color, quiero manifestar que la persona que me agredió fue ÓSCAR ALEJANDRO...

Por su parte, la testigo MARÍA DE JESÚS, ante el órgano investigador, en lo conducente, manifestó:

...mi esposo volvió al abrir la puerta de nuestro departamento y salir encontrándose en el pasillo, dando la espalda a la puerta principal del edificio, se encontró de frente con el vecino de nombre ÓSCAR ALEJANDRO y mi esposo le dijo que “por qué se portaba agresivo y había azotado la puerta” en ese momento y sin motivo alguno, el sujeto de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, empujó con ambas manos a mi esposo y debido a esta acción, mi esposo al caer, se golpea la cabeza, con unos medidores que se encuentran en el pasillo a un lado de la puerta de acceso del edificio y cayó sentado, lastimándose la pierna derecha, ante eso yo comencé a gritar que “lo dejara en paz” y comencé a solicitar auxilio a los vecinos del edificio, observando en eso como el sujeto agresor ÓSCAR ALEJANDRO comenzó a patear a mi esposo, encontrándose éste tendido en el piso, patadas que le daba en la pierna derecha, mientras que mi esposo sólo se quejaba...

En ampliación de declaración ante el Juez del conocimiento (foja XXXX vta.), ratificó sus anteriores declaraciones, y a preguntas de las partes, contestó:

...A preguntas del agente del Ministerio Público, contestó: que la distancia aproximada a la que la declarante se encontraba de los sujetos cuando observó que golpeaban a su esposo, fue como de 1 un metro; que en el momento en que la declarante observaba tales hechos, sólo les decía a los sujetos que no lo golpearan a su

esposo, que lo dejaran en paz. A preguntas del defensor público, respondió: que la dicente se encontraba en la puerta de su casa, al momento que le dijo al procesado de nombre ÓSCAR que dejara en paz a su esposo; que en el momento en que la dicente le dijo a ÓSCAR que dejara en paz a su esposo había luz artificial (foco); que antes de salir, cuando tocaron la puerta de su departamento, el esposo de la dicente se encontraba sentado con ella en el sillón, viendo la televisión; que el sillón donde su esposo y la declarante se encontraban previo a que su esposo abriera la puerta, es el sillón grande que está frente a la puerta, en la sala de su departamento; que la manera en que la de la voz les pidió apoyo a sus vecinos fue gritarles “auxilio, le están pegando a mi esposo”; que en el momento en que la declarante observaba que el sujeto de nombre ÓSCAR pateaba a su esposo, ella seguía en la puerta. A preguntas del defensor particular, respondió: que la declarante no sabe por qué en la segunda declaración ministerial dijo que su esposo falleció de las lesiones que le provocaron los sujetos, ya que el que lo golpeó fue ÓSCAR.

De igual forma obra en actuaciones lo declarado por el testigo ANDRÉS quien indicó que escuchó en el patio de la entrada del edificio, gritos de personas que se estaban peleando y enseguida golpes, las paredes se zimbarron, se oían gritos, de inmediato salió de su departamento y se dirigió a la planta baja, al llegar al pasillo de la planta baja, se percató que frente a la puerta del departamento número XX, estaba tirado sobre el piso, el señor MARIANO (*sic*), y de pie parado frente al señor MARIANO el co-acusado ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, sujeto que estaba parado con las piernas abiertas y en medio de las mismas tenía el cuerpo del señor MARIANO.

Asimismo, existe en constancias lo declarado por el testigo MANUEL, quien al respecto manifestó que el día señalado como de los hechos, se empezaron a escuchar voces de varias personas, quienes estaban en la planta baja en el patio y gritaban, que el golpeteo era muy fuerte y se oían gritos de mujer, que decía “ya déjenlo, no lo golpean

(sic), ya está grande y lo van a lastimar”, por lo que salió del departamento en compañía de su amigo, encontrándose a ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, persona quien estaba parado sobre el hoy ofendido, también estaba parado junto a éste, otro sujeto, mismos que les gritaban que les iban a partir su madre, y se acercaban retardadoramente, por lo cual suben a su departamento y llaman a la policía.

Declaraciones de los testigos antes señalados, que adquieren relevancia, ya que fueron emitidas por el hoy ofendido (cuando se encontraba en el Hospital XXXX, al día siguiente de los hechos, ahora occiso), y por la testigo de los hechos, depositados de los que se advierten datos por demás trascendentes para acreditar que el sujeto activo cometió la conducta ilícita a estudio, pues se desprenden circunstancias de ejecución del evento delictivo, aunado a que lo reconocen plenamente como su vecino, el cual señalaron es agresivo, siendo corroborados sus depositados con las declaraciones de los testigos ANDRÉS y MANUEL, a quienes si bien no les consta el momento preciso en que el acusado infirió las lesiones al hoy occiso, no obstante, sí lo ubican en circunstancias de la ejecución del evento delictivo, aunado a que indican que el acusado, se encontraba en medio de las piernas del hoy occiso, y éste último se encontraba tirado en el suelo, lo que conllevaba a corroborar lo declarado por el ofendido y por la testigo de los hechos, aunado a todos los demás elementos probatorios que obran en el sumario, cobrando especial relevancia la manifestación del denunciante MARIANO, quien previo a su fallecimiento, señaló categóricamente al acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, como el sujeto que le infirió las lesiones que a la postre le produjeron la muerte, de ahí que a los depositados del ofendido MARIANO y de los testigos MARÍA DE JESÚS, ANDRÉS y MANUEL, se les conceda valor probatorio con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que se aprecia que fueron emitidas por personas que no son considera-

das como inhábiles, que por su edad, capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar el acto sobre el cual depusieron, así como de acuerdo a su probidad y la independencia de su posición, se puede establecer la imparcialidad inherente a su testimonio, teniendo además en consideración que la narrativa formulada, parte de la directa observación de los hechos en que recae y no ante el conocimiento obtenido de referencias o inducciones de un tercero, siendo la manifestación de los testigos, claras y precisas; y no existe indicio alguno que demuestre que hayan sido obligados a emitir su testimonio por fuerza o miedo, ni impulsados por algún vicio en su voluntad, como engaño, error o soborno; declaraciones que como correctamente lo enarbola el Juzgador en la resolución combatida, no se encuentran aisladas, sino que adquieren una verdadera corroboración con el restante cúmulo probatorio que integra la causa, primordialmente con lo declarado por los testigos de identidad ESTELA y MARIO, al comparecer ante el Ministerio Público, de manera conteste manifestaron lo siguiente:

...que al tener a la vista en el interior del anfiteatro anexo a la Coordinación Territorial CUH-X de esta delegación XXX, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino lo reconocen e identifican como el de su suegro y su papá, respectivamente, el cual en vida respondía al nombre de MARIANO, mismo que contaba con una edad de XX años de edad, persona que sabe era originario de XXX del Estado de XXX, que era hijo de los señores FERNANDO y MARIA, ambos finados, que era el último de 9 nueve hijos, que actualmente era jubilado y tenía su domicilio en la calle de XXX número XX, interior XX, en la colonia XXX de la delegación XXX, de esta Ciudad de México y en relación a los hechos que se investigan manifiesta que no le constan por no haberlos presenciado, que tomó conocimiento de los mismos a través de una llamada telefónica, de parte de MARÍA DE JESÚS, mediante la cual les hacía de su conocimiento que el señor MARIANO había sido agredido por los vecinos y que iba a ser traslado al hospital, siendo esto en fecha XX de XXX del

año en curso, lugar en donde permaneció hospitalizado hasta el día de ayer XX de XXX del XXX, ya que este falleció a consecuencia de las lesiones ocasionadas por la agresión sufrida...

Testimonios que producen confiabilidad en el ánimo de este Tribunal de Apelación para concederles valor probatorio pleno, en términos del numeral 255 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que no se encuentran calificados como inhábiles por alguna de las causas señaladas en el propio código, quienes además por su edad, capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar el acto, mismo que relataron una completa imparcialidad, limitándose a narrar de manera clara y precisa, única y exclusivamente los hechos que conocieron por medio de sus propios sentidos, refiriéndose en todo momento a la sustancia de los hechos, además de que no se observa que hayan sido obligados a declarar por fuerza o miedo, ni mucho menos impulsados por engaño, error o soborno, quienes corroboran que en efecto MARIANO fue privado de la vida, en razón de que al acudir al anfiteatro de la Coordinación Territorial del Ministerio Público, tuvieron a la vista el cadáver de quien en vida llevó el nombre de MARIANO, al que reconocieron como su suegro y padre, respectivamente, por lo que denunciaron el delito de HOMICIDIO; por lo que dichos medios de prueba apreciados en conjunto, otorgan la plena certeza que el acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR U ÓSCAR, realizó una conducta voluntaria, a través de la cual privó de la vida a MARIANO, lo que se constata con los diversos elementos de prueba existentes en autos, principalmente con las diligencias que fueron practicadas por el órgano investigador en la integración de la averiguación previa, pues en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 94, 95 y 97 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, practicó la inspección ocular en el lugar donde ocurrieron los hechos, en fecha XX de XXX del XXXX,

para lo cual se trasladó el personal del Ministerio Público y procedió a dar fe en los siguientes términos:

...el personal que actúa en esta oficina, se trasladó a la calle de XXX (*sic*) XXX, interior XX colonia XXX, delegación XXX y constituyó legalmente en el lugar antes señalado por lo que se procede a dar fe de encontrarse el personal actuante en la calle de XXX número XX, interior XX, colonia XXX, delegación XXX, correspondiente a la acera sur de la calle de XXX, donde se tiene a la vista un inmueble de dos niveles, con fachada de cuatro metros, en color durazno con blanco, presentado en su extremo oniente (*sic*) una puerta metálica, que mide 1.10 un metro por diez centímetros por 2.10 dos metros por diez centímetros, pintada en color blanco con su chapa en orden, dando pasao (*sic*) a un pasillo de un metro (*sic*) con diez centímetros de ancho por quince metros de largo, apreciándose la cerradura de la puerta de acceso al inmueble sin indicios de violencia o forzada de observa a 50 centímetros al sur del acceso del inmueble y sobre el costado oriente del pasillo una puerta metálica pintada en color blanco que corresponde al departamento uno al frente de la puerta del departamento uno y empotrada al muro poniente del pasillo en su parte superior se encuentran los medidores de luz así como sus respectivos interruptores en orden, no habiendo más huellas o indicios que se relacionen con los presentes hechos...

Diligencia que al haber sido practicada por el Ministerio Público con los requisitos de ley, se le concede valor probatorio pleno con fundamento en el artículo 253 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, a través de la cual el Ministerio Público constató el lugar donde ocurrieron los hechos sito en calle XXX, número XX interior XX, colonia XXX, delegación XXX; medio de prueba que se concatena con la fe de cadáver y levantamiento del mismo, con la que se acredita la existencia del cuerpo del ahora occiso, así como el lugar y condiciones en que fue encontrado, se obtiene que el Ministerio Público, dio fe de tener a la vista:



...el cuerpo ya sin vida de una persona del sexo masculino de aproximadamente XX años de edad, mismo que fuera identificado por sus familiares como la persona que en vida respondiera al nombre de MARIANO; encontrándose en la siguiente posición, en decúbito dorsal con la cabeza dirigida al oriente, extremidades superiores e inferiores en extensión, siguiendo el eje de su cuerpo envuelto en sabana de color blanco, mismo que a simple vista, presenta lesiones no recientes en boca, cara y brazos (venopunciones), así como hematomas en varias partes del cuerpo, lesiones propias de atención hospitalaria; asimismo, se aprecia una cinta adhesiva a la altura del tórax misma en la que se suscribe lo siguiente “XXX MARIANO Exp. (sic) XXXXXX-XX, fecha defunción XX XXX XXXX, 23:00 veintitrés horas. DX. Neumonía Intrahospitalaria, Fx. cadera derecha. hepatitis C. Shock Séptico, en virtud de las diligencias practicadas y, no habiendo otra más por el momento que desarrollar, procede a ordenar el levantamiento del mismo y su traslado al anfiteatro anexo a la coordinación territorial CUH X para la práctica de las diligencias ministeriales correspondientes...

Enseguida realizó una nueva fe de cadáver, reconocimiento del mismo y fe de las lesiones que presentaba y de media filiación, diligencia que se realizó bajo la siguiente temática:

...en el interior del anfiteatro anexo a la coordinación territorial CUH-X, el cadáver de una persona que en vida llevara el nombre de MARIANO, del sexo masculino, aproximadamente de XX años de edad, quien fuera identificado por sus familiares, cadáver que se encuentra en la siguiente posición: cuerpo sin vida totalmente desnudo en posición decúbito dorsal, con la cabeza dirigida al norte y con los pies hacia el sur, los miembros torácicos adosados al eje del cuerpo y los miembros pélvicos en extensión con el compás cerrado, apreciándose signos de muerte real y recientes con temperatura inferior a la del medio ambiente, con signos de muerte real y reciente con temperatura inferior, sin rigidez cadavérica, apreciándose al cuerpo la siguientes lesiones: presenta huellas de veno punción

en región subclavia derecha en cara lateral derecha de cuello y en dorso de la mano izquierda, laceración de columna dorsal, úlcera decúbito en región sacra y talón izquierdo, de igual forma objeto redondo en región pectoral izquierda, de cinco centímetros de diámetro, compatible con *prca* (*sic*) pasos; asimismo, se aprecian las siguientes lesiones: equimosis de coloración violácea en codo derecho y cara externa del mismo, en tercio distal, cara posterior de antebrazo derecho, en tercio distal, cara postero-interna de antebrazo izquierdo en cresta iliaca, antero superior, canal inguinal y tercio superior, cara externa de muslo derecho de diez por cinco, veintidós por diez y ocho por dos centímetros, respectivamente, en hueso popliteo derecho y tercio medio, cara posterior de pierna izquierda, señas particulares: nombre: MARIANO, masculino, edad: XX años de edad, talla: 170 ciento setenta centímetros, perímetro torácico: 90 noventa centímetros, perímetro abdominal: 84 ochenta y cuatro centímetros, constitución asténico, tez blanca, pelo entrecano, lacio y corto, frente amplia, cejas pobladas: ojos café: nariz recta y delgada: boca grande labios delgados: mentón oval, bigote y barba rasurados: señas particulares ninguna; así mismo, se da fe del acta médica número XX/XX, suscrita por el doctor RICARDO ERNESTO de fecha XX/XXX/XXXX, documento del que se da fe...

De igual manera, el Ministerio Público investigador, dio intervención al doctor RICARDO ERNESTO, adscrito a la Secretaría de Salud, para el efecto de que expidiera el acta médica, misma en la que el XX de XXX del XXXX, estableció:

...Con el fin de reconocer al cadáver de MARIANO del sexo masculino, y de aproximadamente XX años de edad. Se localiza cadáver en mesa quirúrgica, en posición decúbito dorsal, con la cabeza al norte y con los pies hacia el sur, los miembros torácicos adosados al eje del cuerpo, y los miembros pélvicos en extensión con el compás cerrado. Presenta signos de muerte real y reciente, con temperatura inferior a la mano que explora, sin rigidez cadavérica generalizada, con livideces cadavéricas en la cara posterior de tórax que no desaparece a la digito presión.

Trasladó que fue al anfiteatro de esta Delegación para su reconocimiento como es de rigor en presencia del agente investigador en turno, se corroboran los datos anteriormente mencionados, y presenta huellas de veno-punción en región subclavia derecha, en cara lateral derecha de cuello y en dorso de la mano izquierda, laceración de columna dorsal, ulcera de decúbito en región sacra y talón izquierdo, de igual forma objeto redondo en región pectoral izquierda, de cinco centímetros de diámetro, compatible con marca pasos, así mismo se aprecian las siguientes lesiones: equimosis de coloración violácea en codo derecho y cara externa del mismo, en tercio distal, cara posterior de antebrazo derecho, en tercio distal, cara posterior interna de antebrazo izquierdo, en cresta iliaca antero superior, canal inguinal y tercio superior, cara externa de muslo derecho, de diez por cinco, veintidós por diez y ocho por dos centímetros respectivamente, en hueco poplíteo derecho y tercio medio, cara posterior de pierna izquierda...

El dictamen de necropsia, suscrito en fecha XX de XXX del XXX, por los médicos forenses GREGORIO U. y JORGE N., mismos que se presentaron en el anfiteatro del Servicio Médico Forense para practicar la necropsia del cadáver de quien en vida llevó el nombre de MARIANO, en el que concluyeron lo siguiente:

...el cadáver corresponde a un sujeto del sexo masculino, como de XX años de edad, el cual mide 171 ciento setenta y un centímetros de estatura, 88 ochenta y ocho centímetros de perímetro torácico, 77 setenta y siete centímetros de perímetro abdominal, con un peso de 74 setenta y cuatro kilogramos. El cadáver presenta: rigidez muscular generalizada, tela glerosa corneal, livideces en las regiones posteriores del cuerpo que se modifican a la digito presión. Otros hallazgos. Conjuntivas congestionadas y lechos ungueales cianosados. Huellas de punturas en yugular derecha, subclavia del mismo lado y ambos miembros torácicos rodeadas de zonas equimóticas de color violácea de formas irregulares, escaras por decúbito en región sacra y talón derecho exteriormente presenta: pre-

senta dos zonas equimóticas excoriativas de forma irregulares, la primera de 29 veintinueve por 18 dieciocho centímetros en la región tóraco-dorsal, la segunda de 25 veinticinco por 22 veintidós centímetros en la región sacra y ambos glúteos a ambos lados de la línea media posterior. Zona equimótica de color violácea de forma irregular que va desde la cresta iliaca antero-superior derecha a la región perineal del mismo lado, así como la cara medial del muslo del mismo lado. Abiertas las grandes cavidades encontramos, en la craneana: sin alteraciones macroscópicas de los tejidos pericraneales, el cerebro con un peso de 1350 gramos, congestionado a los cortes, sin trazos de fractura en los componentes óseos de la bóveda, base de cráneo y macizo facial. En el cuello: la laringe, la tráquea, la faringe y el esófago con sus mucosas congestionadas y libres en su luz, sin alteraciones en la región cervical. En la torácica: los pulmones con un peso de 620 gramos el derecho y de 1400 gramos el izquierdo, ambos aumentados de peso, volumen y consistencia, con salida de material verdoso de consistencia espesa y espumosa en todo su parénquimia. El corazón con peso de 380 gramos, en el cual se observa implantado marcapasos. En la abdominal: el hígado, el bazo, el páncreas y riñones congestionados a los cortes. El estómago con líquido café en su interior. La vejiga vacía. Pelvis: hecha la disección de la región se observa fractura de fémur derecho a nivel de ambos trocánteres. Estudios: se envían fragmentos de viseras (pulmón, hígado y riñones) para estudio histopatológico, cuyos resultados se comunicaran en su oportunidad. Nota. Las lesiones descritas se observan en vías de reabsorción. Conclusión: MARIANO, falleció de neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, ya descrita y que clasificamos de mortal...

Medios de prueba (acta médica y dictamen de necropsia) que se les concede valor probatorio con fundamento en el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales, en virtud de que los peritos en la materia que intervinieron, practicaron todas las operaciones y experimentos que su ciencia les sugirió, expresando los hechos y circunstancias que

sirvieron de base para emitir su dictamen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del Código en cita. Elementos de prueba que resultan aptos y suficientes para acreditar que la privación de la vida de MARIANO ocurrió por una causa externa, esto es, debido a la neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur ya descrita, que fue clasificada de mortal.

Asimismo, el representante social dio intervención al Perito en Medicina Forense, JOSÉ LUIS, quien concluyó que el ciudadano MARIANO, XX años de edad (*sic*), presentó fractura de cadera derecha y fue producida contra objeto de consistencia dura de bordes romos, sin filo, siendo el objeto contundente un piso, cinta asfáltica por caída; y ratificación del mismo, y al interrogatorio en lo conducente, contestó que el momento en que se ocasionó la fractura de cadera derecha el lesionado, fue al momento de la caída.

Aunado al dictamen en materia de medicina, suscrito por LEONARDO (mecánica de lesiones), en el que concluyó: "...Por lo que respecta a MARIANO y de acuerdo con las regiones anatómicas afectadas, se establece que el mismo, se encontraba de frente a su agresor o agresores, al momento de que es empujado y pierde la vertical, por lo que se determina, que éste sujeto tuvo contacto contra el piso...".

De igual forma, obra en autos el dictamen de medicina forense suscrito por el perito de la defensa, ISRAEL, quien en lo conducente, concluyó: "...determine el perito la posición víctima victimario. Respuesta: el victimario se sitúa de frente a la víctima bipedestado, la víctima se encuentra también bipedestado de espaldas o ligeramente con su franco o con su franco derecho frente al victimario. 5. Que determine el perito una mecánica de hechos. Respuesta: de un solo movimiento se generan las lesiones, al momento de que la víctima recibe un cambio de dirección sin que se pueda precisar la fuerza que fuera empleada en dicha maniobra, la víctima se golpea en la región fronto temporal oca-

sionándose la lesión descrita en los diversos certificados médicos para posteriormente caer del plano de sustentación hacia su lado derecho teniendo el primer contacto en su cadera del lado derecho a la altura del trocánter, sin que hubiese colocado las manos para evitar el golpe...”.

Lo que incluso se corrobora con el dictamen de medicina forense, signado por el perito de la defensa SALVADOR, quien en lo conducente concluyó que MARIANO presentó fractura de cadera trocanterica, secundaria a una caída de su propia altura; todo lo cual permite acreditar que el hoy ofendido fue lesionado por el hoy acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR.

Dictámenes que adquieren valor probatorio en términos del numeral 254 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al haber sido realizados por peritos expertos en las materias que intervinieron, quienes realizaron todas las operaciones y experimentos que su ciencia les sugirió, por lo que cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 175 del mismo cuerpo de leyes, con los cuales se obtienen datos relacionados con los hechos que se analizan, de ahí que, de la adecuada justipreciación del diverso cúmulo probatorio que integra la causa, se adquiere la plena certeza que el sujeto activo que se identifica con la persona de ÓSCAR ALEJANDRO U ÓSCAR U ÓSCAR realizó una conducta voluntaria, ya que privó de la vida a MARIANO. Siendo aplicable al caso en concreto, el siguiente criterio jurisprudencial:

PERITOS, NATURALEZA DE LOS DICTÁMENES DE. los jueces disfrutan de la más amplia facultad para valorar los dictámenes periciales, ya que la opinión técnica de los peritos está encaminada a ilustrar el criterio del juzgador sobre algún punto que requiera conocimientos especiales, pero ello no significa que aquél pierda su libertad para valorar tales dictámenes, con vista de las demás constancias procesales, asignándoles el valor probatorio que merezca, ya que el titular del órgano jurisdiccional es el más alto de los sujetos procesales y siendo como es, perito en derecho,

está en aptitud de valorar todas y cada una de las pruebas que obran en autos. Amparo Directo XX/XX: Alfredo Gutiérrez García: 11 de noviembre de 1971. 5 votos: Ponente: Mario G. Rebolledo F. Séptima Época: Vol. Segunda Parte, Pág. 53.

Por otra parte, obran en actuaciones, el informe de policía de investigación, suscrito por los agentes RAÚL y EVA, del que se desprende:

...RACIEL al ser entrevistado en el área de seguridad (galeras) el mencionado refiere que el día de ayer se encontraba en el domicilio de su amigo de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, ya que éste tenía una reunión y estaba tomando bebidas embriagantes y es el caso que no recuerda la hora pero ya era casi de noche cuando en diferentes ocasiones vecinos del lugar fueron a solicitarle a su amigo que le bajaran el volumen al estéreo pero que no hizo caso, por lo que de repente escuchó gritos y al asomarse afuera del departamentote (*sic*) su amigo había un señor de la tercera edad tirado en el piso y su amigo estaba gritándole a éste, por lo que el entrevistado le ayudó a levantarse y a meterlo a su departamento, llegando posteriormente la patrulla y trasladándolo a esta Representación Social acusándolo de que también le había pegado al hoy lesionado. Al ser entrevistado ÓSCAR, ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO en el área de galeras, refiere en relación a los hechos que se investigan que el día de ayer hizo una reunión en su domicilio ubicado en la calle de XXX XX (*sic*) departamento uno colonia y siendo casi de noche un vecino de la tercera edad del cual no recuerda su nombre le fue a reclamar por tener la música tan alta y de pronto le quiso aventar un golpe y el entrevistado se hizo a un lado, cayéndose al piso, posteriormente salió su amigo de nombre RACIEL y le ayudó al adulto mayor a levantarse, hasta el momento que llegó la patrulla y los trasladaron a esta Representación Social no omite en manifestar que es de lo que se acuerda (*sic*) ya que estaba demasiado borracho...

Documental que por haber sido expedida por servidores públicos (Policías de Investigación) con motivo y en ejercicio de sus funciones, y

que no fueron redargüidos de falsedad, acreditan las labores de investigación por parte del agente de policía, destacando lo asentado en dicho informe, en el sentido de que el coacusado RACIEL indicó: "...había un señor de la tercera edad tirado en el piso y su amigo estaba gritándole a éste..."; mismo que se valora y se le concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Y al respecto es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:

POLICÍAS. VALOR PROBATORIO DE SUS INFORMES. Los informes rendidos por los agentes de la Policía Judicial ante la autoridad investigadora en los procesos penales, tienen la categoría de una prueba testimonial, toda vez que el interés que los mueve para hacerlo, no es personal, sino efecto del cumplimiento de las comisiones a ellos encomendadas.

Séptima Época. Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. *Semanario Judicial de la Federación*. Tomo: 187-192 Sexta Parte Página: 111.

De igual forma obra en el sumario la declaración ministerial de los policías remitentes DAVID y LUCIO, de fecha XX de XXX del XXX, quienes en forma conteste, señalaron:

...sobre la calle de XXX, frente al número XXX se encontraban dos sujetos del sexo masculino, que dijeron llamarse ÓSCAR ALEJANDRO y/o ÓSCAR, de XX años de edad y RAZIEL de XX años de edad, quienes se apreciaban al parecer en estado de ebriedad, y en el lugar se encontraban varias personas, que dijeron ser vecinos de dicho inmueble y quienes nos manifestaron que los sujetos antes refeidos (*sic*), momentos antes habían golpeado al señor MARIANO, de XXX de edad...

Así como lo declarado por los policías remitentes VIDAL y HUGO, de fecha XX de XXX del XXXX, quienes en forma conteste, señalaron:



...el día XX de XXX de XXX, aproximadamente a las 12:30 doce horas con treinta minutos, se encontraban en el ejercicio de sus funciones en la calle de XXX, esquina con la calle de XXX, en la colonia XXX, delegación XXX cuando en ese momento recibieron una llamada, en donde se les reporta que acudan al domicilio de la calle de XXX, número XX, al departamento XX, de la misma colonia XXX, en virtud de que una persona solicitaba el apoyo para que detuvieran a su vecino, porque este en compañía de otro sujeto le habían provocado lesiones a su esposo y a consecuencia de las cuales su esposo había llegado al hospital y el día XX de XXX de XXXX, había fallecido en el hospital a consecuencia de los golpes, se trasladan a dicho domicilio en donde fueron atendidos por la (sic) señora (sic) de nombre JESÚS, quien les solicitó que aseguraran a su vecino de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, estuvieron una hora aproximadamente y es cuando a las 13:30 trece horas con treinta minutos, el sujeto de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, salió a la calle y la (sic) señora (sic) JESÚS les señala al sujeto a fin de que lo detuvieran, en ese momento procedieron a pedirle al sujeto que abordara la patrulla ya que la señora pedía que lo detuvieran por las lesiones que le había provocado a (sic) esposo y a consecuencia de estas había fallecido en el hospital...

Declaraciones a las que se les otorga valor probatorio pleno, al reunir los requisitos del artículo 255 del Código procesal de la materia, ya que por lo que hace a los policías preventivos remitentes si bien no les constan los hechos, no obstante los policías DAVID y LUCIO, pusieron a disposición del Ministerio Público al hoy acusado ÓSCAR ALEJANDRO, derivado de las lesiones que en su momento infirió al hoy occiso, y por su parte los policías RODRIGO y HUGO, pusieron a disposición del Ministerio Público Investigador, al citado acusado, en virtud del señalamiento de la testigo MARÍA DE JESÚS, como el sujeto que lesionó a su esposo (hoy occiso), y derivado de las lesiones que le propinó estuvo en el Hospital, donde posteriormente falleció.

De igual forma, obran en actuaciones las diversas diligencias tales como las impresiones fotográficas relativas al enjuiciado ÓSCAR u

ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO y al lugar de los hechos. Diligencias a las que se les otorga valor probatorio pleno, tal y como lo disponen los artículos 250 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al haberse practicado por perito en fotografía, y a solicitud del Ministerio Público ajustándose a las reglas del propio Código, y con las cuales se desprenden las diligencias tendientes a la investigación del delito que nos ocupa, tal como la identidad del sujeto activo y la existencia del lugar señalado como de los hechos; los cuales constituyen indicios que engarzados con los restantes elementos probatorios, acreditan la intervención del hoy acusado en la conducta que se le imputa.

VI. Por lo que hace a las circunstancias calificativas que el Ministerio Público, hace referencia en su escrito de acusación, previstas en el artículo 138 párrafo inicial, fracción I (existe ventaja), inciso *a*) (cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se haya armado), inciso *b*) (cuando el agente es superior por el número de los que intervengan con él), inciso *d*) (cuando éste se haya caído y aquél de pie), y fracción VII (hipótesis de estado de alteración voluntaria, cuando el agente lo cometa en estado de ebriedad), del Código Penal para el Distrito Federal, se advierte que por lo que hace a la primera en mención, es decir, la establecida en la hipótesis de “cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se haya armado”, la misma no se tiene por acreditada, en virtud de que el juzgador fue omiso en analizarla, no obstante de existir acusación ministerial, y si bien el Ministerio Público interpuso Recurso de Apelación en contra de la resolución del *a quo*, sin embargo, en relación a dicho tópico, no formuló agravio alguno, y toda vez que el estudio de los agravios, tratándose del Ministerio Público, es de estricto derecho, de acuerdo a lo preceptuado por el numeral 415, del Código adjetivo penal, interpretado a *contrario sensu*, no se puede ir más allá de lo solicitado, a efecto de no rebasar la petición ministerial.

Ahora bien, por cuanto hace a la circunstancia calificativa, establecida en la hipótesis de “cuando el agente es superior por el número de los que intervengan con él”, la misma no se tiene por acreditada, en virtud de que como se estableció en el Considerando IV de la presente resolución, no se acreditó la participación de RACIEL, en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en consecuencia, la conducta atribuida al acusado ÓSCAR u ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO, la cometió por sí mismo, en términos del numeral 22, fracción I, del Código Penal, y por ende la circunstancia en mención no cobra vida jurídica.

Por otra parte, respecto a la calificativa contemplada, en la fracción I, inciso d), “hipótesis de cuando éste se haya caído y aquél de pie”, del artículo 138 del Código Penal, quedó plenamente acreditada, ya que de autos se advierte que la conducta desplegada por el sujeto activo ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, la ejecutó encontrándose el pasivo caído y el activo se hallaba de pie, si bien es cierto que la lesión que, por complicaciones posteriores, le produjo la muerte al ofendido MARIANO, fue la “...fractura de cadera derecha...”, producida contra objeto de consistencia dura de bordes romos, sin filo, siendo el objeto contundente un piso, cinta asfáltica por caída...; también lo es que, atento a lo manifestado por el hoy occiso, la testigo presencial de los hechos MARÍA DE JESÚS y los denunciantes ANDRÉS y MANUEL, una vez que el pasivo cayó al piso, el agraviado, hoy occiso, continuó siendo golpeado por el activo ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR.

En sustento de lo anterior, obra en autos, primordialmente, lo declarado por el ofendido MARIANO, en el sentido de que el sentenciado ÓSCAR u ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO ...cuando ya estaba sobre el suelo... comenzó a darle patadas en la pierna derecha.

Lo declarado por la testigo MARÍA DE JESÚS, en lo relativo a que: ... el sujeto de nombre ÓSCAR ALEJANDRO empujó con ambas manos a su esposo y debido a esta acción, su esposo, al caer, se golpeó la cabeza

con unos medidores que se encuentran en el pasillo..., y cayó sentado, lastimándose la pierna derecha ...observando... como el sujeto agresor ÓSCAR ALEJANDRO comenzó a patear a su esposo, encontrándose éste tendido en el piso, patadas que le daba en la pierna derecha, mientras que mi esposo sólo se quejaba.

Así como lo expuesto por el testigo ANDRÉS y MANUEL, en el sentido de que: "...estaba tirado sobre el piso, el señor MARIANO, y se encontraba de pie, parado frente al señor MARIANO, el sujeto... ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, sujeto que estaba parado con las piernas abiertas y en medio de las mismas, tenía el cuerpo del señor MARIANO...".

En tanto el testigo MANUEL expuso que: "...ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, estaba parado sobre del vecino del departamento uno, quien es una persona adulta mayor y sabe el dicente responde al nombre de MARIANO...".

Declaraciones a las que se les concede valor probatorio en términos del artículo 255 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Distrito Federal, ya que fueron emitidas por las personas que presenciaron el momento en el que el hoy acusado ÓSCAR u ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO, lesionó al hoy occiso.

Corroboró lo anterior el dictamen de criminalística, suscrito por el Perito Oficial, Leonardo, quien puntualizó lo siguiente:

... PRIMERA: Por lo que respecta al C. MARIANO y de acuerdo con las regiones anatómicas afectadas, se establece que el mismo se encontraba de frente a su agresor o agresores, al momento de que es empujado y pierde la vertical, por lo que se determina que este sujeto tuvo contacto contra el piso. SEGUNDA: En consecuencia al punto anterior, se establece que al momento de perder la vertical y encontrarse en el piso, el C. MARIANO quedó en un plano inferior al de su agresor o agresores...

Dictamen al que se le otorga valor probatorio de conformidad con el numeral 254 del Código de Procedimientos Penales; de lo que se colige que, como ya se señaló, una vez en el suelo, el hoy acusado continuó golpeando al ofendido; actuar que, jurídicamente, es a todas luces reprochable y sin que sea factible dividir la acción del agente —antes de la caída y después de la caída al suelo— a efecto de determinar en específico qué lesión le ocasionó la muerte, sobre todo cuando se tiene perfectamente identificado al autor y su contribución en el hecho delictivo, que debe considerarse como un todo y que, en conjunto, a la postre ocasionó la muerte del agraviado MARIANO.

Finalmente, en relación a la circunstancia calificativa, prevista en el artículo 138, fracción VII (hipótesis estado de alteración voluntaria – cuando el agente lo cometa en estado de ebriedad), del Código Penal para el Distrito Federal, la misma no se encuentra plenamente acreditada, ya que de las constancias que obran en la causa, no se puede establecer que el estado de ebriedad en que se encontraba el hoy acusado haya sido específicamente para cometer el delito, si bien obra en autos el certificado de integridad física, emitido el día XX de XXX del XXXX, por la perito MARÍA ANGÉLICA, quien a la inspección física del acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, concluyó que éste se encontraba:

... si conciente (*sic*), si ambulatorio, no coherente, no congruente en su discurso, no orientado en tiempo, no lugar, si persona, a la exploración física aliento etílico, marcha y coordinación motriz alteradas, conjuntivas hiperémicas, reflejos pupilares lentos, cavidad en regular estado de hidratación, sisartrico, doslalico, verborreico, romberg positivo, ebrio clínicamente, tiempo de recuperación 08 ocho a 10 diez horas aproximadamente...

Dictamen que tiene valor probatorio pleno en términos del numeral 254 de la ley adjetiva penal, no obstante, con el mismo no se acredita que el acusado de referencia se haya puesto en ese estado para cometer la conducta delictiva a estudio, si bien de ninguna manera lo exculpa, por considerarse una “acción libre en su causa”, también lo es que tampoco puede estimarse como una circunstancia calificativa, sobre todo cuando en las constancias no existe prueba alguna que, ni siquiera a manera de indicio, permita demostrar que el agente se colocó en el estado de ebriedad en que se hallaba, a fin de privar de la vida al hoy occiso MARIANO. Al respecto es aplicable la siguiente tesis:

Décima Época

Núm. de Registro: 2001338

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

Libro XI, Agosto de 2012,

Tomo 2 Materia(s): Penal

Tesis: I.4o.P.5 P (10a.)

HOMICIDIO. PARA ACREDITAR LA CALIFICATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 138, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO BASTA DEMOSTRAR EL ESTADO DE EBRIEDAD DEL SUJETO ACTIVO, SINO QUE LA RAZÓN POR LA CUAL ESTE ASUMIÓ LA DECISIÓN DE PRIVAR DE LA VIDA AL PASIVO FUE POR EL ANORMAL ESTADO DE VOLUNTAD EN EL QUE SE ENCONTRABA. El artículo 138, fracción VII, del Código Penal para el Distrito Federal prevé que el homicidio doloso es calificado si el sujeto activo lo comete en estado de ebriedad por constituir ello un estado de alteración voluntario. En ese sentido, conforme a un derecho penal democrático, un resultado es penalmente relevante sólo si es atribuible a una conducta bajo criterios normativos que van más allá de la responsabilidad objetiva o basada por el mero resultado. Por ello, y conforme a una

interpretación teleológica, para acreditar la agravante citada no basta demostrar el estado de ebriedad en el que estaba el sujeto activo cuando privó de la vida a otro, pues tal atribución sería meramente objetiva, sino que también es necesaria una imputación normativa, es decir, que el peligro para el bien jurídico generado por colocarse el sujeto activo en estado de ebriedad se concretó en el resultado típico, lo que implica demostrar que la razón por la cual aquél asumió la decisión de privar de la vida al pasivo fue por el anormal estado de voluntad en el que se encontraba.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Por lo que al no estar debidamente acreditado que el estado de ebriedad en que se encontraba el sentenciado ÓSCAR u ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO, haya sido específicamente para producir el resultado (muerte del ofendido), la circunstancia calificativa, prevista en el artículo 138, fracción VII (hipótesis estado de alteración voluntaria –cuando el agente lo cometa en estado de ebriedad), del Código Penal para el Distrito Federal, no se encuentra plenamente acreditada.

En consecuencia, se tiene por comprobado el delito de HOMICIDIO CALIFICADO con la hipótesis prevista en el numeral 138, párrafo primero, fracción I, inciso d) (pasivo caído y activo de pie), del Código Penal para el Distrito Federal.

Por ende, una vez que se han demostrado todos y cada uno de los elementos del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto en los artículos 123, párrafo único (hipótesis de al que prive de la vida a otro), en relación con el numeral 124, párrafo único (se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión), 138, párrafo inicial, fracción I (existe ventaja), inciso d) (cuando éste se haya caído y aquél de pie), párrafo segundo (principio de invulnerabilidad), en concordancia al 15 (acción), 17, fracción I (instantáneo), 18, párrafos primero (acción dolosa) y segundo (conocer y querer), 22, fracción I (los que lo realicen por sí mismo),

numerales del Código Penal para el Distrito Federal, por ende, la misma resulta típica.

Así mismo, la acción típica desplegada por el sujeto activo no se encuentra amparada por alguna causa de exclusión del delito de las previstas en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, traducida en una causa de licitud, como la defensa legítima, el estado de necesidad cuando el bien sacrificado sea de menor o igual valor que el bien jurídico salvado, el cumplimiento de un deber en forma legítima o el ejercicio de un derecho, ya que de las constancias existentes en autos no se aprecia elemento de convicción alguno que sustente una posición contraria a la plasmada con anterioridad; en consecuencia, debe concluirse que estamos en presencia de una acción típica y antijurídica, siendo procedente tener por acreditada la antijuridicidad en el presente caso; por ende, en los términos ya referidos quedan plenamente comprobados los elementos constitutivos del delito de HOMICIDIO CALIFICADO que nos ocupa.

VI. A efecto de determinar si se encuentran reunidos los elementos para acreditar la capacidad de culpabilidad de ÓSCAR u ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO, se toma en cuenta que contaba al momento de los hechos con la edad de XX años, lo que lo hace imputable, por lo que hace a la edad mínima requerida por la legislación para ser sujeto del Derecho Penal (XX XXXX); que no padece o ha padecido enfermedad mental y, por ende, tenía buena salud mental; posición de la que se colige que el acusado es persona con madurez biológica y desarrollo intelectual suficiente, para llevar a cabo su autodeterminación; por lo cual se desprende que al haber tenido en perfectas condiciones tanto su ente volitivo como cognoscitivo, al momento de los hechos era imputable para todos los efectos legales; asimismo, de acuerdo a dichas capacidades, se deduce que conocía los elementos del delito consigna-



do en la ley, dado que cualquier ser humano medio, puede saber que privar de la vida a una persona, encontrándose el pasivo caído y el activo de pie; constituyen los elementos objetivos de la descripción legal del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, y al conocer lo anterior y aun así querer su realización, se entiende que actuó con dolo directo, en términos de lo previsto por el artículo 18, párrafo segundo, del Código Penal para el Distrito Federal; por otra parte, debido a la capacidad psíquica que tenía el hoy enjuiciado al momento de los hechos, así como al haber sabido que la acción que realizaban se oponía al ordenamiento jurídico, se observa que tenía plena conciencia del carácter antijurídico de la acción desarrollada, y, por ende, conciencia de la antijuridicidad; finalmente, debido a que no actuaron bajo un error de prohibición indirecto o directo, de naturaleza invencible, que le hiciera creer que concurrían circunstancias, que de existir realmente haría lícito su actuar (error de prohibición indirecto) o porque desconociera la existencia de la Ley o el alcance de la misma (error de prohibición directo); además de haber obrado dentro de un amplio margen de autodeterminación, al tener alternativas de elección, por el hecho de no mediar coacción o violencia contra su persona, ya que nadie lo obligó a actuar como lo hizo, sino que fue una decisión personal del antes mencionado, por lo cual resulta evidente que le era exigible una acción diversa a la que desplegó y, por ello, debió ajustar su actuar conforme a derecho, sin embargo optó por quebrantar la norma típica que prohíbe a partir de su marco descriptivo lesionar el patrimonio de las personas; por lo que una vez que se ha demostrado la capacidad de culpabilidad del acusado, resulta pertinente determinar sobre su plena responsabilidad penal.

VII. La plena responsabilidad penal de ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO que se le atribuye, se encuentra demostrada en autos, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción I (los que lo realicen

por sí mismo), 17, fracción I (instantáneo), ya que la consumación se agotó en el mismo momento en que se realizaron todos los elementos de la descripción legal, y 18, párrafos primero (acción dolosa) y segundo (obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, quiere su realización), todos del Código Penal para el Distrito Federal, ya que el acusado conocía la ilicitud de su conducta y no obstante quiso el resultado prohibido por la ley; por lo que se comprobaron los elementos integrantes del dolo, por tanto, al no estar acreditada a favor del acusado alguna causa de licitud y obran datos suficientes para acreditar su plena culpabilidad, resulta válido afirmar que se encuentra acreditada su plena responsabilidad, con los mismos elementos de prueba que sirvieron para tener por acreditado el tipo penal del injusto demostrado, mismos que se dan por reproducidos en el presente apartado, lo anterior conforme al artículo 72, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; lo que se desprende de los elementos de prueba descritos en el Considerando V de la presente resolución, que apreciados y valorados conforme a los artículos 245, 246, 250, 251, 253, 254, 255, 261 y 286 del Código Procesal Penal para el Distrito Federal, de acuerdo a la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, y apreciadas en conciencia el valor de las presunciones debidamente adminiculadas entre sí, es posible considerar su conjunto como prueba plena y otorgan la certeza del siguiente acontecimiento:

...El día XX de XXX de XXXX, entre las 20:30 veinte horas con treinta minutos y las 21:00 veintiuna horas, el agraviado MARIANO ,se encontraba en compañía de su esposa y testigo de hechos MARÍA DE JESÚS ,en el interior de su domicilio ubicado en la calle de XXX, número XX, interior XX, colonia XXX, delegación XXX,

Distrito Federal, siendo que al escuchar que tocaron la puerta de su departamento, abrió, percatándose que se trataba de su vecino, hoy acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, quien se encontraba en estado de ebriedad, por lo que el denunciante le reclamó del “porqué tocaba la puerta”, volviendo a cerrar, pero segundos después dicho ofendido, escuchó que azotaban la puerta principal del edificio, ante lo cual nuevamente salió, reclamándole al acusado, siendo que éste último empuja al agraviado, cayendo y golpeándose en la cabeza con un medidor que se encontraba en el lugar, siendo que al estar tirado el denunciante, el encausado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR le propinó diversas patadas, siendo de esta forma que inicialmente presentó fractura de cadera, razón por la cual fue internado en el hospital XXXX, en donde quedó internado a consecuencia de las lesiones que presentó y que de forma provisionalmente como las que tardan en sanar más de sesenta días; empero, el día XX de XXX del año XXXX, las lesiones inferidas por el hoy justiciable le causaron su fallecimiento, pues conforme al protocolo de necropsia, firmado por los peritos GREGORIO URBANO y JORGE, refirieron que el cadáver de quien en vida llevó el nombre de MARIANO, falleció de neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, ya descrita y que clasificamos de mortal. Es así que el sujeto activo le causó lesiones al ofendido que a la postre le ocasionaron su deceso material...

Tal y como se acreditó con lo declarado por el agraviado MARIANO, quien ante el Ministerio Público Investigador, en el Hospital XXX XXXX, en lo conducente, indicó:

...ÓSCAR ALEJANDRO, y que con motivo de que ÓSCAR ALEJANDRO, lo empujó, se cayó al piso y una vez en el piso lo comenzó a patear ÓSCAR ALEJANDRO, que mi esposa comenzó a gritar..., después me arrastré hacia mi departamento, hasta que después llegaron varias patrullas y a mí me subieron a una ambulancia, siendo esto lo que sucedió que un primer momento manifesté que RACIEL me había agredido y golpeado pero fue debido a que no conocía sus nom-

bres, pero una vez que observé las fotos a color, quiero manifestar que la persona que me agredió fue ÓSCAR ALEJANDRO ...

Por su parte, la testigo MARÍA DE JESÚS, ante el Órgano Investigador, en lo conducente, manifestó:

...mi esposo volvió al abrir la puerta de nuestro departamento y salir encontrándose en el pasillo, dando la espalda a la puerta principal del edificio, se encontró de frente con el vecino de nombre ÓSCAR ALEJANDRO, y mi esposo le dijo que “por qué se portaba agresivo y había azotado la puerta en ese momento y sin motivo alguno, el sujeto de nombre ÓSCAR ALEJANDRO empujó con ambas manos a mi esposo y debido a esta acción, mi esposo al caer, se golpea la cabeza, con unos medidores que se encuentran en el pasillo a un lado de la puerta de acceso del edificio y cayó sentado, lastimándose la pierna derecha, ante eso yo comencé a gritar que “lo dejara en paz” y comencé a solicitar auxilio a los vecinos del edificio, observando en eso como el sujeto agresor ÓSCAR ALEJANDRO comenzó a patear a mi esposo, encontrándose éste tendido en el piso, patadas que le daba en la pierna derecha, mientras que mi esposo sólo se quejaba...

En ampliación de declaración, ante el Juez del conocimiento (foja 1809 vta.), ratificó sus anteriores declaraciones, y a preguntas de las partes, contestó:

...A preguntas del agente del ministerio público, contestó: que la distancia aproximada a la que la declarante se encontraba de los sujetos cuando observó que golpeaban a su esposo, fue como de 1 un metro; que en el momento en que la declarante observaba tales hechos, sólo les decía a los sujetos que no lo golpearan a su esposo, que lo dejaran en paz.– A preguntas del defensor público, respondió: que la dicente se encontraba en la puerta de su casa, al momento que le dijo al procesado de nombre ÓSCAR que dejara en paz a su esposo; que en el momento en que la dicente le dijo a ÓSCAR que dejara en paz a su esposo había luz artificial (foco); que

antes de salir, cuando tocaron la puerta de su departamento, el esposo de la dicente se encontraba sentado con ella en el sillón, viendo la televisión; que el sillón donde su esposo y la declarante se encontraban previo a que su esposo abriera la puerta, es el sillón grande que está frente a la puerta, en la sala de su departamento; que la manera en que la de la voz les pidió apoyo a sus vecinos fue gritarles “auxilio, le están pegando a mi esposo”; que en el momento en que la declarante observaba que el sujeto de nombre ÓSCAR pateaba a su esposo, ella seguía en la puerta. A preguntas del defensor particular, respondió: que la declarante no sabe por qué en la segunda declaración ministerial dijo que su esposo falleció de las lesiones que le provocaron los sujetos, ya que el que lo golpeó fue ÓSCAR.

De igual forma, obra en actuaciones lo declarado por el testigo ANDRÉS, quien indicó que escuchó en el patio de la entrada del edificio, gritos de personas que se estaban peleando y enseguida golpes, las paredes se zimbarron, se oían gritos, de inmediato salió de su departamento y se dirigió a la planta baja, al llegar al pasillo de la planta baja, se percató que frente a la puerta del departamento número 1 uno, estaba tirado sobre el piso, el señor MARIANO (*sic*), y de pie parado frente al señor MARIANO el co-acusado ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO sujeto que estaba parado con las piernas abiertas y en medio de las mismas tenía el cuerpo del señor MARIANO.

Asimismo, existe en constancias lo declarado por el testigo MANUEL, quien al respecto manifestó que el día señalado como de los hechos, se empezaron a escuchar voces de varias personas, quienes estaban en la planta baja en el patio y gritaban, que el golpeteo era muy fuerte y se oían gritos de mujer, que decía “ya déjenlo, no lo golpean (*sic*), ya está grande y lo van a lastimar”, por lo que salió del departamento en compañía de su amigo, encontrándose a ÓSCAR y/o ÓSCAR y/o ÓSCAR ALEJANDRO, persona quien estaba parado sobre el hoy ofendido, también estaba parado junto a éste, otro sujeto, mismos que

les gritaban que les iban a partir su madre, y se acercaban retadoramente, por lo cual suben a su departamento y llaman a la policía.

Testimoniales de las que se advierte que el denunciante MARIANO, previo a su fallecimiento, señaló categóricamente al acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, como el sujeto que le infirió las lesiones que a la postre le produjeron la muerte.

Aunado a lo anterior, se engarzan los diversos dictámenes, tales como:

El dictamen de medicina forense, signado por el perito JOSÉ LUIS, quien concluyó que el ciudadano MARIANO, de XX años de edad (*sic*), presentó fractura de cadera derecha y fue producido contra objeto de consistencia dura de bordes romos, sin filo, siendo el objeto contundente un piso, cinta asfáltica por caída; y ratificación del mismo, y al interrogatorio en lo conducente, contestó que el momento en que se ocasionó la fractura de cadera derecha el lesionado, fue al momento de la caída, advirtiéndose de dicha pericial que la causa que originó la lesión que en su momento presentó el hoy occiso, fue la caída precisamente por el empujón que le propinó el sujeto activo ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR.

Con la nota inicial de urgencias, suscrita por la Doctora S., adscrita al Hospital de XXX XXXX, en la que señala: "...ingresó al hospital XXXX a una persona de sexo masculino de nombre MARIANO...; por el momento no toma ningún medicamento, controlado cada seis meses por cardiología. Alergias: tabaquismo y alcoholismo negados. En esta ocasión es traído por el servicio de ambulancia al sufrir caída de su propia altura al parecer por terceras personas...".

Aunado al dictamen en materia de medicina, suscrito por LEONARDO (mecánica de lesiones), en el que concluyó: "...Por lo que respecta a MARIANO y de acuerdo con las regiones anatómicas afectadas, se establece que el mismo, se encontraba de frente a su agresor o agresor-

res, al momento de que es empujado y pierde la vertical, por lo que se determina, que este sujeto tuvo contacto contra el piso...”.

De igual forma, obra en autos el protocolo de necropsia del que se desprende que la causa que motivó la muerte del ofendido antes mencionado, fue neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, que clasificaron de mortal; así como que la fractura en mención, fue originada contra objeto de consistencia dura de bordes romos, sin filo, siendo el objeto contundente un piso, cinta asfáltica, por caída de su propia altura, al encontrarse en un primer momento el ofendido frente a su victimario, para en un momento dado el acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, empujarlo, lo que motivó que el ofendido cayera sobre su pierna derecha, y de esta forma ocasionarle la lesión (fractura de fémur), y cuya complicación, a la postre le originó la muerte.

Conclusión a la que se llega, sin dejar de considerar la negativa que de los hechos realiza el sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, quien ante el Ministerio Público investigador, señaló:

...que el día sábado XX de XXX del año en curso XXXX le hable a un amigo (*sic*) enombre (*sic*) Anabel para que fuera a su casa, después RACIEL se comunicó conmigo y les dije a los dos que viniera (*sic*) a mi casa, la cual se ubica en la calle de XXX, número XX, departamento XX, colonia XXX, XXX, ya que no iba a ver nadie y que fueran a mi casa, a eso de las 11:00 once horas llegó RACIEL y como a las 14:00 catorce horas llegó ANA, estuvimos tomando cerveza y teníamos la música muy alta, entonces de ahí paso el tiempo y después como a las 18:00 dieciocho horas se fue ANABEL y la acompañe a la avenida XXX y de ahí, yo me regresé a la casa y fue cuando al ingresar al edificio asote (*sic*) la puerta principal y en ese momento salió el señor que ahora me enteró responde al nombre de MARIANO y me empieza a gritar de groserías, por lo que nos empezamos a hacer de palabras mutuamente, entonces él, al momento de decirme de cosas me tira un golpe y se cae sólo, ya que me lanzó su puño derecho, pero como lo esquivé, este señor se fue de largo, se

giró y se cayó, en ese momento, escuche gritos de la esposa del señor y yo me voy a mi departamento, entonces RACIEL sale de la casa y él se va hacia donde estaba el señor y lo ayuda a levantarse y lo mete a su casa, yo me cruzo hacia donde está el pasillo y los vecinos de la planta alta comenzaron a agredirme, por lo que volví a meterme a mi casa y me empezaron a patear la puerta, fue cuando me volví a salir y me fui al primer nivel y ahí me alcanza RACIEL y nuevamente nos metemos a la casa, estando unos minutos y yo le dije a RACIEL que iría a la tienda y fue cuando llegaron varias patrullas cuyos elementos me detuvieron, indicando los vecinos que yo le había pegado al señor, siendo esto lo que sucedió presentando también a RACIEL, quiero manifestar que en ningún momento agredí al señor y los vecinos no estaban al momento del incidente y me señalan a mi como culpable...

En declaración preparatoria de fecha XX de XXX de XXXX (foja XXXX).

...primero ratificó su original depuesto y reconoció como propias las firmas que aparecen al margen de este por haber sido estampadas de su puño y letra, sin ser su deseo agregar algo más y al hacer saber el contenido de la fracción II del apartado "A" del artículo 20 constitucional, dijo que no era su deseo contestar a las preguntas que le pudieran formular las partes.

Ampliación de declaración del acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR ante el Juez que conoce de la causa, (foja XXXX vta.).

...ratificó sus anteriores declaraciones, y reconoció como suyas las firmas que obran en las mismas, sin manifestar nada más, ni dar contestación a las preguntas que le pudieran formular las partes...

Declaración que carece de eficacia probatoria, en razón de que el acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, únicamente se concretó a negar su intervención en el delito que se le acusa, refiriendo



circunstancias tendientes a señalar que el hoy occiso se cayó solo, y que falleció por causas diversas, sin embargo no existe medio de prueba que corrobore su versión de los hechos, de tal forma que de admitir como válida tal manifestación unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la impunidad de cualquier persona sujeta a la potestad del Estado en la investigación criminal, que con el simple hecho de negar su participación se le tenga por exento, lo que es contrario a nuestro ordenamiento jurídico, en los términos del numeral 248, párrafo único, parte segunda, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que el Ministerio Público demostró la atribución del hecho ilícito y en esos términos lo acusó, pero el enjuiciado no demostró ninguno de los extremos de su negativa, sino por el contrario tales manifestaciones se encuentran desvirtuadas con la imputación firme y categórica que en su contra realizó tanto el entonces agraviado (hoy occiso), como la testigo de los hechos, quienes señalaron categóricamente al hoy acusado ÓSCAR u ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO, como la persona que lo lesionó y derivado de ello fue trasladado al Hospital, para posteriormente fallecer por la complicación inevitablemente originada por la misma lesión, aunado a los diversos dictámenes realizados por peritos en la materia de medicina y criminalística, que ya se han detallado, de tal forma que lo declarado por el sentenciado se encuentra desvirtuado. Al respecto, es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial:

DECLARACIÓN DEL PROCESADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). de conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: “El que niega está obligado a probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un hecho.”; la sola negativa del procesado

de haber participado en el delito o delitos que se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime que durante la secuela procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas. Novena época. Tribunales Colegiados de Circuito. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. Tomo: XIV, Septiembre de 2001. Tesis: VI.1o.P. J/15. Página: 1162.

Luego entonces, al quedar comprobada la conducta típica, antijurídica y demostrados los aspectos de la culpabilidad, es fundado en derecho el reproche jurídico contra ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, por resultar penalmente responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto en el artículo 123, párrafo único (al que prive de la vida a otro) en relación al 124 párrafo único (se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión), 138 párrafo inicial ventaja, fracción I, inciso *d*) (cuando éste se haya caído y aquél de pie), en relación al 15 (acción), 17 fracción I (instantáneo), 18 párrafo primero (acción dolosa), y párrafo segundo (obra dolosamente el que conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, quiere su realización), y 22 fracción I (realización por sí), todos del Código Penal para el Distrito Federal.

IX. Ahora bien, para los efectos de la individualización de la pena, y en uso del arbitrio judicial concedido por los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, en términos del artículo 427 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para efectos de la pena a imponer al acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, se acatará lo dispuesto en el artículo 128, párrafo único, del Código Penal, porque el delito fue cometido con la calificativa de ventaja, prevista en el artículo

138, párrafo primero, fracción I, inciso *d*) (pasivo caído y activo de pie), del Código Penal para el Distrito Federal.

En ese orden de ideas, deberá considerarse que la naturaleza de la acción realizada fue dolosa, ya que de los elementos de prueba que obran en la causa se desprende que ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, al momento de los hechos conocía los elementos objetivos del hecho típico de homicidio calificado, y quiso su realización, al haber llevado a cabo su conducta consistente en privar de la vida a una persona en el caso a MARIANO, conducta que realizó con pleno conocimiento de que esa actividad era sancionada por la Ley, y queriendo el resultado prohibido, utilizando para ello sus propios medios; la magnitud del daño causado al bien jurídico “vida”, fue de intensidad máxima, ya que se destruyó la vida de MARIANO, bien jurídico que es considerado de mayor valía para la sociedad y el orden jurídico; las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, han quedado precisados en el desarrollo de la presente resolución, donde se desprende que los hechos tuvieron verificativo el día XX de XXX del XXX, el hoy acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR ejecutó una conducta en forma de acción penalmente relevante, consistente en inferirle lesiones al hoy occiso MARIANO, y que derivada de la complicación determinada inevitablemente por la misma lesión, falleció de neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, que los peritos médicos forense, clasificaron de mortal.

La forma y grado de intervención del acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR en el delito de HOMICIDIO CALIFICADO fue como autor material de acuerdo a la fracción I (los que lo realicen por sí mismo), del artículo 22, de la ley sustantiva penal para esta Ciudad Capital; no existiendo vínculos de parentesco o amistad entre el sujeto activo y su víctima, y sin que se requiera calidad en ambos. Al rendir

su declaración preparatoria ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR manifestó tener XX años de edad, fecha de nacimiento XX de XXX de XXXX estado civil XXX, religión XXX no pertenece a grupo étnico o indígena, habla y entiende el idioma castellano, originario de esta Ciudad, con domicilio en calle XXX, número XX, colonia XXX delegación XXX, código postal XXX, con instrucción séptimo semestre de la licenciatura en XXX, ocupación desempleado; se advierte que estaba en condiciones de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma, dado que tenía otras alternativas, y además como el común de la gente, ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR tenía conocimiento que privar de la vida a una persona, es un comportamiento contrario a derecho, por lo que pudo haber ajustado su conducta al conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los individuos en sociedad, al contar con otras alternativas.

Datos que en su conjunto permiten establecer a este órgano de revisión un grado de culpabilidad ligeramente inferior a la equidistante de entre la mínima y la media, modificando en este sentido la determinación del *a quo*, ya que no se acreditaron las circunstancias calificativas previstas en el artículo 138, fracción I, inciso *a*) (cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado), e inciso *b*) (hipótesis de cuando el agente es superior por el número de los que intervengan con él), y fracción VII (hipótesis de estado de alteración voluntaria —cuando el agente lo cometa en estado de ebriedad—), del Código Penal para el Distrito Federal, y con el mismo este Tribunal de Alzada considera que se cumple con la doble finalidad de la política criminal, ya que la pena a imponer será educativa para el delincuente, logrando con ello destruir todo lo negativo que lo llevó a delinquir, además de ser consensada para el resto de la sociedad.

En este orden de ideas, se procede a imponer al sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, la sanción correspondiente, al resul-

tar penalmente responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, se acatará lo dispuesto en el artículo 128, párrafo único, del código penal, porque el delito fue cometido con la calificativa de ventaja, prevista en el artículo 138 párrafo primero, fracción I, inciso d) (pasivo caído y activo de pie), del Código Penal para el Distrito Federal, y al grado de culpabilidad estimado resulta procedente imponerle, la pena de 27 veintisiete años de prisión.

Pena privativa de libertad que deberá compurgar en el Centro Penitenciario de Ejecución de Sanciones Penales que el Juez de la causa designe a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, debiéndose tomar en cuenta el tiempo que el sentenciado estuvo recluso en prisión preventiva, con motivo de los presentes hechos, es decir, desde el día XX de XXX del XXXX, en que fue cumplida la orden de aprehensión girada en su contra e ingresado al Reclusorio Preventivo Norte, hasta la fecha del dictado de la presente sentencia, debiendo quedar además en custodia de las autoridades penitenciarias para el tratamiento técnico progresivo que permita su reinserción social y evite que vuelva a delinquir, lo anterior con fundamento en el artículo 20, Apartado A, fracción X, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 párrafo segundo del Código Penal para el Distrito Federal y 3 fracción III, y fracción VI, 9 fracción VI y XIII, 10 fracción I inciso a), 25, 26 y 28 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, así como el acuerdo general 59-28/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que a la letra establece “durante los primeros seis meses de operación de los Juzgados del Distrito Federal en materia Penal Especializados en Ejecución de Sentencias Penales, sólo conocerán solicitudes de beneficios penitenciarios, por lo que todo lo demás inherente a la ejecución de las sentencias será substanciado por los juzgados penales y de paz penal que las dicten”, así como con el diverso Acuerdo General 62-48/2011 del Pleno del Consejo

de la Judicatura del Distrito Federal que a la letra establece: “PRIMERO. Atendiendo a que el próximo diecinueve de Diciembre, se vence el plazo a que se refiere el punto PRIMERO del acuerdo general 59-28/2011 emitido en sesión de fecha catorce de Junio del presente año, en el que se determinó que los juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el Distrito Federal, solo conocerían provisionalmente de solicitudes de beneficios penitenciarios, a fin de continuar con el cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del decreto de reformas Constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de Junio de dos mil ocho, en relación con el artículo 21 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal de Alzada determina, de conformidad con la facultad que le otorgan los artículos 100, en relación con el 122 párrafo sexto, inciso c), base cuarta, fracción III de nuestra Carta Magna; 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1º, 201, fracción I, y XXII, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 3 y 10 fracción I, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, aprobar que los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el Distrito Federal, continúen funcionando indefinidamente en tales circunstancias a partir del día diecinueve de diciembre del presente año, hasta en tanto se cuente con los recursos presupuestales necesarios para ampliar el número de Órgano Jurisdiccionales especializados en ejecución de sanciones; debiéndose modificar el resolutivo Primero de la resolución apelada, ya que en el presente caso no se acreditaron las circunstancias calificativas de ventaja, en sus hipótesis de “cuando es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado” y “cuando el agente es superior por el número de los que intervengan con el”, así como la prevista en la fracción VII (hipótesis de estado de alteración voluntaria —cuando el agente lo cometa en estado de ebriedad—), del mismo ordenamiento legal, y por ende, se disminuyó el grado de

culpabilidad, en consecuencia la pena impuesta al sentenciado se vio disminuida.

X. En torno a la reparación del daño, con fundamento en los artículos 37, 42, 43, 44, 45 y 49 del Código Penal vigente para el Distrito Federal resulta procedente condenar al pago de la misma, pues nuestro sistema jurídico, tratándose de delitos que afectan la integridad física y la vida de las personas, en el artículo 47 en función del 43 del Código Penal para el Distrito Federal, contempla un régimen de suplencia bajo el establecimiento de bases mínimos para su fijación atendiendo a lo que en su caso disponga la Ley Federal del Trabajo, las cuales tendrán aplicación, salvo el derecho de las partes para que en la secuela procesal aporten elementos de prueba que acrediten un monto mayor a aquél que contienen las bases mínimas, caso en el cual prevalecerán las pruebas aportadas siempre que represente una cantidad mayor, excluyendo así la aplicación de la base mínima, y cuando no se aporten elementos de prueba, habrá de atenderse a la base mínima; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 44 en relación del 47 del Código Penal para el Distrito Federal, al no haberse aportado durante la etapa de instrucción, elementos de prueba para su cuantificación, resultando de aplicación supletoria la Ley Federal del Trabajo, por lo que para tal efecto, es de atender al artículo 502 del citado ordenamiento laboral, que establece como indemnización 730 setecientos treinta días de salario mínimo, equivalente a la cantidad de \$ XXX, del salario mínimo general vigente al momento del evento (XX de XXX del XXXX), que era de \$XXX; sin dejar de observar que en fecha XX de XXX del XXXX, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que en caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo 501 de la citada ley, será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario..., artículo que antes de esa refor-

ma estipulaba el pago por tal concepto en 730 setecientos treinta días de salario, pero como de autos se advierte que los hechos por los que se resuelve tuvieron verificativo el día XX de XXX del XXXX, es decir, antes de la citada reforma, es por lo que se aplicará lo dispuesto por la Ley vigente al momento de los hechos; sirviendo de aplicación la jurisprudencia 88/2001, sustentada por la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 102/2000-PS, entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Penal del Primer Circuito, que sobre el particular, a la letra señala:

REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO. PARA QUE SE CONDENE A ELLA BASTA QUE EL JUZGADOR TENGA POR ACREDITADA LA COMISIÓN DEL ILÍCITO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal, la reparación del daño será fijada por los Jueces, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso, también lo es que tratándose del delito de homicidio, al resultar claro que tal reparación no puede consistir en la devolución de la cosa obtenida con motivo del delito o en el pago de su precio, ni tampoco en el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con su comisión, toda vez que, por una parte, es imposible restituir la vida de una persona y, por otra, ésta tampoco puede ser valuada económicamente por no encontrarse en el comercio, lo que, a su vez, trae como consecuencia que no sea viable que los beneficiarios o derechohabientes puedan exigir el lucro cesante por una falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial derivada de la muerte de la víctima, la aludida reparación debe circunscribirse al pago de una indemnización por los daños materiales o morales causados a que se refiere la fracción II del artículo 30 del propio código, siendo que es de reconocido derecho que los primeros sí pueden ser objeto de prueba, al revestir un contenido económico patrimonial y, por tanto, objetivo, mientras que los segundos, al no compartir esa misma naturaleza, deben sujetarse a reglas especiales de valoración. Ahora bien, si en este aspecto, el artículo 30, último párrafo, del mencionado código punitivo establece, de manera



especial, que tratándose de delitos que afecten la vida, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte de aplicarse las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, cuyos artículos 500 y 502 prevén una indemnización equivalente a dos meses de salario mínimo por gastos funerarios (daño material) y una cantidad adicional, equivalente a setecientos treinta días de salario mínimo, con la cual se pretende compensar el daño moral, es inconcuso que de manera imperativa obliga al juzgador en este tipo de delitos, a condenar a la reparación del daño, simplemente con tener por acreditada la comisión del delito de homicidio, por lo que, en principio, no es necesario que el Ministerio Público o los interesados aporten mayores pruebas para acreditar el daño causado, salvo en el caso de que consideren que los daños son superiores a los previstos en la legislación laboral, pues en este supuesto encontraría plena aplicación el principio general contenido en el primer párrafo del artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal, en relación con el primer párrafo del artículo 34 del propio ordenamiento legal, en virtud de que el aludido artículo 30, último párrafo, sólo establece una base mínima a la cual deberá sujetarse el juzgador para calcular el monto de la indemnización.

Contradicción de tesis 102/2000-ps. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Penal del Primer Circuito. 13 de junio de 2001. Cinco votos. Ponente: José De Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

Cantidad que deberá ser entregada a MARÍA DE JESÚS, en virtud de que reúne los requisitos necesarios para considerarla como derechohabiente, en términos del numeral 45 del Código Penal vigente para esta Ciudad, pues como se advirtió a lo largo de la secuela procedimental, se acreditó que dicha persona es cónyuge del hoy occiso, de conformidad con la declaración de ésta y de los testigos de identidad ESTELA y MARIO, testimoniales a las que se les concede el valor probatorio pleno de conformidad con el numeral 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Por otra parte, referente a la reparación del daño material, constituido por los gastos funerarios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 44, en relación del 47 del Código Penal para el Distrito Federal, es procedente condenar al sentenciado al pago de éstos, de conformidad con el artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo, y atendiendo a que no se aportaron elementos de prueba, habrá de atenderse a la base mínima, por lo que se condena a ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, a pagar como reparación del daño (indemnización), la cantidad equivalente a 2 dos meses del salario mínimo vigente al momento de los hechos, que era de \$XXX (XX/100 Moneda Nacional), equivalentes a la cantidad de \$XXX (XX/100 Moneda Nacional), con motivo del fallecimiento de MARIANO, a favor de MARÍA DE JESÚS, cónyuge del hoy occiso.

Por lo anterior con fundamento en los artículos 43, 44 y 47 del Código Penal para el Distrito Federal, se condena a ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, al pago de la cantidad total de \$XXX (XX/100 Moneda Nacional).

Cantidades que deberá exhibir el sentenciado ÓSCAR u ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO, mediante billete de depósito a favor de MARÍA DE JESÚS; y en caso de negarse a cumplir con ellas, el Estado las hará exigible a través del procedimiento económico coactivo; y en caso de renuncia expresa de la parte agraviada o de no recogerla dentro del plazo legal concedido para ello, se harán efectivas en términos de Ley.

Por otra parte, se absuelve al acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR del concepto de perjuicios ocasionados, al no existir pruebas en la causa que acrediten su existencia.

En consecuencia, se confirma el resolutivo segundo de la resolución apelada, única y exclusivamente por lo que hace al sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR.

XI. Considerando que la pena de prisión impuesta al sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, excede de 5 cinco años, es obvio que en el particular no se satisfacen los extremos previstos por los artículos 84 y 89 del Código Penal vigente, para el efecto de obtener algún sustitutivo penal, o bien la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por exceder ésta del término antes señalado, en tal virtud se le niega al sentenciado la sustitución de la pena, así como el beneficio antes mencionado, con fundamento en los numerales previamente citados. En consecuencia, se confirma el resolutivo tercero de la resolución apelada, única y exclusivamente por lo que hace al sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR.

XII. Se suspenden los derechos políticos del sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, con fundamento en los artículos 38 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56 párrafo primero, 57 fracción I y 58 del Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que la consecuencia necesaria de la pena de prisión impuesta al sentenciado, es precisamente la imposición por Ministerio de Ley de la suspensión de sus derechos políticos, con la precisión que comenzará al causar ejecutoria la sentencia y concluirá cuando se extinga la pena de prisión. Debiéndose remitir copia certificada de la sentencia a la vocalía estatal del instituto nacional electoral. En consecuencia se confirma el resolutivo cuarto de la resolución apelada, única y exclusivamente por lo que hace al sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR.

XIII. Se dejan intocados los puntos resolutivos quinto y sexto de la resolución impugnada, ante su contenido de índole meramente procesal y administrativo.

XIV. Finalmente, los argumentos de inconformidad vertidos por el Ministerio Público, resultan improcedentes, en atención a los razonamientos expuestos en los considerandos VIII y IX de la presente resolución.

En cuanto a los agravios vertidos por el defensor oficial del sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, resultan inoperantes, en atención a las siguientes consideraciones, señala la defensa que “no se encuentra demostrada plenamente la responsabilidad penal de ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR...; es incorrecta y violatoria de los derechos humanos de mi representado, la determinación que en esta vía se combate, en tanto que la valoración de las pruebas existentes no obedece al principio de presunción de inocencia, pues las mismas fueron valoradas de manera incriminatorias, no tratando a mi representado como inocente...; es incorrecto el criterio sustentado por el a quo, de otorgar valor probatorio a lo declarado por los denunciante ANDRÉS, MANUEL, pues de las declaraciones de los mismos se desprenden una serie de contradicciones debido que no se percatan de lo sucedido respecto a la mecánica en que supuestamente se llevaron a cabo los hechos que ilegalmente se le atribuyen a mis representados (sic), pues dichos atestados se alejan del principio de no contradicción que rige la prueba testimonial y determina la eficacia de la misma...; es incorrecto el criterio sustentado por el a quo, de otorgar valor probatorio al dictamen de necropsia, ya que éste no vincula las lesiones producidas por mi representado al hoy occiso, ya que las lesiones que mi representado realizó eran lesiones no graves y éstas no provocaron la prolongación en la hospitalización del hoy occiso. Asimismo, el hoy occiso permaneció 46 días hospitalizado debido a que durante su estancia presentó neumonía nosocomial, gastritis y sangrado de tubo digestivo debido a una úlcera que tenía desde hace 20 años, también presentaba antecedentes de hepatitis C, osteoporosis severa y portaba un marcapasos, mismos que son productos del estado físico del hoy occiso y que no tienen ninguna relación con las lesiones producidas el día XX de XXX del XXXX...; durante la integración de los elementos del delito existen violaciones en contra de mi representado, debido a que en virtud de lo

previsto en los numerales 123 y 124 del Código Penal, no existe ninguna relación para acreditar el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en cuestión a que mi representado no provocó la fractura de cadera del hoy occiso, lesión que provocó el deceso de éste, las únicas lesiones que se le atribuyen a mi representado no figuran en el dictamen de necropsia..."; afirmación que resulta inoperante en virtud de que contrario a lo que refiere, en la causa los elementos probatorios existentes contra el acusado se mantuvieron y con base en ellos es que el Juez de la causa dictó la sentencia condenatoria apelada, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO que se le atribuye, advirtiendo este Tribunal de Alzada, que el a quo estuvo en lo correcto al acreditar el nexo causal, existente entre la conducta desplegada por el sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, y el resultado material producido, ya que queda claro que la muerte del pasivo MARIANO, se debió a la complicación determinada inevitablemente por la misma lesión, lo que le provocó neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur ya descrita, que fue clasificada de mortal, provocada por el actuar del sujeto activo ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, puesto que de no haber llevado a cabo su conducta, el resultado material no se hubiera producido. Lo anterior quedó plenamente acreditado con los diversos dictámenes, tales como:

El dictamen de medicina forense, signado por el perito JOSÉ LUIS, quien concluyó que el ciudadano MARIANO, de XX años de edad (*sic*), presentó fractura de cadera derecha y fue producido contra objeto de consistencia dura de bordes romos, sin filo, siendo el objeto contundente un piso, cinta asfáltica por caída; y ratificación del mismo, y al interrogatorio en lo conducente, contestó que el momento en que se ocasionó la fractura de cadera derecha el lesionado, fue al momento de la caída, advirtiéndose de dicha pericial que la causa que originó la lesión que en su momento presentó el hoy occiso, fue la caída precisamente

por el empujón que le propinó el sujeto activo ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR.

Con la nota inicial de urgencias, suscrita por la doctora S. Barajas, adscrita al hospital XXX de XXXX, en la que señala: "...ingresó al hospital XXX XXXX a una persona de sexo masculino de nombre MARIANO...; por el momento no toma ningún medicamento, controlado cada seis meses por cardiología. Alergias: tabaquismo y alcoholismo negados. En esta ocasión es traído por el servicio de ambulancia al sufrir caída de su propia altura al parecer por terceras personas...".

Aunado al dictamen en materia de medicina, suscrito por LEONARDO (mecánica de lesiones), en el que concluyó: "...Por lo que respecta a MARIANO y de acuerdo con las regiones anatómicas afectadas, se establece que el mismo, se encontraba de frente a su agresor o agresores, al momento de que es empujado y pierde la vertical, por lo que se determina, que este sujeto tuvo contacto contra el piso...".

De igual forma, obra en autos el protocolo denNecropsia del que se desprende que la causa que motivó la muerte del ofendido antes mencionado, fue neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, que clasificaron de mortal; así como que la fractura en mención, fue originada contra objeto de consistencia dura de bordes romos, sin filo, siendo el objeto contundente un piso, cinta asfáltica, por caída de su propia altura, al encontrarse en un primer momento el ofendido frente a su victimario, para en un momento dado el acusado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, empujarlo, lo que motivó que el ofendido cayera sobre su pierna derecha, y de esta forma ocasionarle la lesión (fractura de fémur), y cuya complicación, a la postre le originó la muerte.

Experticiales que cuenta con el valor probatorio que les confiere el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Distrito Federal, al haber sido emitidos por peritos en la materia, y con los

cuales se comprueba que la muerte del pasivo MARIANO, se debió a la complicación determinada inevitablemente por la fractura de fémur, que le originó el actuar del sujeto activo ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR; aunado a los restantes que también se analizaron y que en obvio de innecesarias repeticiones se tienen por reproducidos en este apartado como si constaran a la letra, conforme al artículo 72, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; los cuales permitieron acreditar tanto el nexo causal entre la conducta ejecutada por el sentenciado ÓSCAR u ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO, con el resultado producido (muerte de MARIANO), así como la plena responsabilidad del acusado en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO que se le acusa, que fueron apreciados y valorados conforme a los artículos 245, 246, 250, 253, 254, 255, 261 y 286 del Código Procesal Penal para el Distrito Federal, de acuerdo a la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, y apreciadas en conciencia el valor de las presunciones debidamente administradas entre sí, por consiguiente no se puede afirmar que no se acreditó el nexo de causalidad de la conducta que se le atribuye al acusado ÓSCAR u ÓSCAR u ÓSCAR ALEJANDRO, y el resultado, por las razones indicadas en la presente resolución.

En esa tesitura, al haber resultado operantes los agravios expresados por el Defensor del sentenciado RACIEL, así como inoperantes los del Ministerio Público, y del Defensor de Oficio del sentenciado ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR, no obstante, al haber operado la suplencia de la deficiencia de la queja, este Tribunal de Apelación procede a modificar la sentencia apelada, para los efectos precisados en los considerandos IV a XII de la presente resolución.

Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 414, 415, 417 fracciones I y II, 418, fracción I, 425, 427 y 432, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se

## RESUELVE:

PRIMERO. Se modifica el punto resolutivo primero de la sentencia dictada el XX de XXX del XXXX, por el Juez Interino Tercero Penal del Distrito Federal, a ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR y RACIEL, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, hipótesis de ventaja: (cuando el agente es superior por el número de los que intervengan con él), (pasivo caído y activo de pie) e hipótesis de estado de alteración voluntaria: (cuando el agente lo cometa en estado de ebriedad), cometido en agravio de MARIANO, en la causa XXX/XXXX, para quedar como sigue:

...PRIMERO. Se absuelve a RACIEL, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO por el cual el Agente del Ministerio Público precisó su acusación y se ordena la inmediata y absoluta libertad del mismo, al no acreditarse su plena responsabilidad penal.

ÓSCAR ALEJANDRO u ÓSCAR u ÓSCAR es penalmente responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, hipótesis de ventaja: (pasivo caído y activo de pie), en agravio de MARIANO, por el cual fue acusado por el Ministerio Público, por lo que se considera justo y equitativo imponerle, una pena de XXX en términos de los Considerandos VI y IX del presente fallo

SEGUNDO. SE confirman los puntos resolutivos segundo, tercero y cuarto (con la precisión señalada en el Considerando XII de la presente resolución) por encontrarse apegado a la legalidad y a las constancias procesales.

TERCERO. Se dejan intocados los puntos resolutivos quinto y sexto, de la resolución apelada, ante su contenido de índole meramente procesal y administrativo.

CUARTO. Notifíquese. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase la causa original al juzgado de origen, y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.



Así, por mayoría de votos, lo resolvieron y firman las magistradas que integran la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciadas María de Jesús Medel Díaz y Martha Patricia Tarinda Azuara, agregándose el voto particular que con fundamento en el artículo 76 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, emite el magistrado doctor R. Alejandro Senties Carriles, quien también firma la presente resolución, por y ante la Secretaria de Acuerdos, maestra en Derecho, Yasmín Ramírez Cortés, quien autoriza, firma y da fe.



# **MATERIA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES**



## SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

*MAGISTRADOS:*

ROSA LAURA SÁNCHEZ FLORES, SADOT JAVIER ANDRADE  
MARTÍNEZ Y EUGENIO RAMÍREZ RAMÍREZ

*PONENTE:*

MGDO. SADOT JAVIER ANDRADE MARTÍNEZ

**Recurso de apelación hecho valer por la defensora pública, en contra de la resolución incidental emitida por el Juez Noveno de Proceso Escrito en Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México, por el delito de robo calificado (con violencia), en contra de la adolescente (sentencia mayoritaria).**

**SUMARIO:** MEDIDA CAUTELAR, CONSISTENTE EN INTERNAMIENTO DEL ADOLESCENTE, NO ES RAZÓN SUFICIENTE PARA REVOCARLA POR EL ESTADO DE INGRAVIDEZ DE LA INCULPADA. De conformidad con lo que establecen los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 5.5 y 6.1 de la Convención Europea, así como 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal, debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en

libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el juicio. Por su parte, el numeral 34 de la Ley de Justicia para Adolescentes de esta Capital, establece que la detención provisional e internamiento del adolescente deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales. Tales disposiciones no implican que deba ignorarse la exigencia social de que se proteja el valor de la seguridad como sucede en el delito de robo calificado, el cual la doctrina denomina de núcleo duro, en virtud del impacto social que éstos generan. En este sentido, se advierte que la inculpada se encuentra en un estado de ingravidez no es razón suficiente para revocar la medida cautelar, consistente en internamiento del adolescente, pues ante ello, desde luego resulta obligatorio para la Comunidad donde se encuentra privada de la libertad, que le sea proporcionada la atención médica que requiera y se tengan las consideraciones propias a su condición física, respetándose así, el principio de proporcionalidad, en el que se sustenta la medida cautelar impuesta.

Sentencia mayoritaria que formulan los magistrados Rosa Laura Sánchez Flores y Sadot Javier Andrade Martínez, en contra del voto particular emitido por el Magistrado Eugenio Ramírez Ramírez en el tomo número XX/XXXX, relativo al recurso de apelación hecho valer por la defensora pública, en contra de la resolución incidental de fecha XX de XXX de XXXX, emitida por el Juez Noveno de Proceso Escrito en Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México, doctor Héctor González Estrada, en la causa número XX/XXXX, incoada por el delito de robo calificado (con violencia), en contra de la adolescente ZAYRA o ZAIRA, quien actualmente se encuentra internada en la Comunidad para Mujeres de la Ciudad de México; por lo que procede elaborar la siguiente

### **SÍNTESIS:**

1. La resolución recurrida concluyó en los siguientes términos:

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando II de la presente resolución, se declara improcedente la solicitud de la licenciada EVELIN, defensora de oficio de la adolescente ZAYRA o ZAIRA, en el sentido de que se le concedan a dicha adolescente medidas cautelares diversas a la detención preventiva impuesta en resolución inicial.

SEGUNDO. Hágase saber a las partes el derecho y término de tres días que se tiene para inconformarse con la presente resolución, interponiendo el recurso de apelación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 414, 416, 417, 545 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal...

2. Inconforme con la resolución anterior, la defensora pública de la adolescente en fecha XX de XXX de XXXX, interpuso el recurso de apelación (fojas 348); mismo que fue admitido en el efecto devolutivo por auto de fecha XX del mismo mes y año en cita (foja 349 frente y vuelta), razón por la cual se remitió a esta Sala el testimonio correspondiente.

3. Se recibieron 02 dos escritos: el primero en fecha XX de XXX de XXXX, mediante el cual el representante social, solicitó: ...se confirme la resolución incidental que niega medidas cautelares, de fecha XX de XXX del XXXX, lo anterior por estar apegada a la ley y a las constancias procesales... (foja 05 del toca) y el segundo de fecha XX del mismo mes y año en cita, a través del cual la defensora pública expresó agravios en los que solicitó: ...se revoque la resolución incidental, motivo de la inconformidad... (fojas 11-15 del toca).

4. En fecha XX de XXX de XXXX, se celebró la audiencia de vista pasando los autos al magistrado Eugenio Ramírez Ramírez para elaborar el respectivo proyecto; asimismo, por disidencia en el proyecto original, por acuerdo de fecha XX del mes y año en cita se retornó el toca al magistrado Sadot Javier Andrade Martínez, a efecto de emitir la resolución mayoritaria, por tanto quedó el toca en estado de dictarse el fallo que ahora se pronuncia, por lo que procede elaborar las siguientes.

## CONSIDERACIONES:

I. Este Tribunal, de manera colegiada, resulta competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación, atento a lo dispuesto en los numerales 1o., 2o. fracción I y 44 *Bis* fracción I y último párrafo, todos los artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia para esta entidad, en virtud de que a quien se le atribuye un hecho tipificado como delito es una adolescente, toda vez que al momento en que sucedió el evento ZAYRA, señaló que contaba con XX XXXXX años de edad, información que se corrobora con la copia certificada del acta de nacimiento número 00000, Entidad 00, 000 delegación, con fecha de registro XX de XXX de XXXX, a su nombre, con fecha de nacimiento XX de XXX de XXXX, nombre de la madre JUDITH, suscrita por el Juez Sexto del Registro Civil de la Ciudad de México, licenciado Jorge (foja 82); documental de la cual, el juez se cercioró de su autenticidad mediante el oficio número DGRC/SSP/0000/0000, recibido el XX de XXX de XXXX, suscrito por JOSÉ, Subdirector de Servicios al Público de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, donde se establece que una vez realizada una exhaustiva búsqueda en los archivos y en la base de datos de la oficina central, se localizó el registro del nacimiento citado, anexando copia debidamente certificada en papel sin valor (fojas 237); información que resulta pertinente y apta para determinar provisionalmente la edad legal de la inculpada, en términos de los artículos 2o., fracción I, 3o. y 20 de la Ley de Justicia para Adolescentes para esta capital.

Ahora bien, de las constancias procesales se advierte que durante la investigación la inculpada fue identificada con los nombres de ZAYRA o ZAIRA, empero ante el original en su declaración inicial dijo que su nombre correcto era ZAYRA, el cual incluso empleó para firmar diversas diligencias durante la instrucción (fojas 73, 74, 89-90, 92-93, 189-192, 239 vuelta, 248, 266 vuelta, 287, 289-295, 308, 311, 313-315, 327, 332, 333-335,



346, 350 y 16 del toca); por tanto, con los datos destacados y para efectos de la sustanciación del presente recurso, es procedente identificar a la inculpada con los nombres de ZAYRA o ZAIRA, quien al momento del evento contaba con XX XXXXX años de edad; empero el original deberá agotar los mecanismos legales con los que cuenta a efecto de allegarse de los medios de prueba suficientes para concluir con certeza la identidad de la justiciable a la brevedad, dado que se trata de cuestiones de orden público y estudio preferencial.

Puntualizado lo anterior, procede analizar el presente recurso de apelación, cuyo objeto se desprende del contenido del artículo 92 de la Ley de Justicia para Adolescentes aludida y aplicando supletoriamente los preceptos 414, en relación al 415 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad; de ahí que este Tribunal se avoque a examinar la legalidad de la resolución impugnada, para verificar si en la misma se aplicó exactamente la ley, si se alteraron los hechos, si se observaron los principios reguladores de las medidas cautelares y de valoración de pruebas, así como si tal decisión se fundó y motivó correctamente; cabe señalar, que por encontrarnos ante una apelación hecha valer por la defensa, se suplirán en su caso las deficiencias que se observaren en la expresión de sus agravios; lo anterior con fundamento en los numerales 95 de la Ley de Justicia para Adolescentes para esta entidad y 415 del código adjetivo para esta capital.

II. Analizadas que fueron las constancias que obran en autos, luego de confrontar los argumentos torales del *a quo* con los agravios de la defensa, esta Alzada concluye que contrario a lo sostenido por el proyecto original que derivó en voto con respecto a esta resolución mayoritaria, es acertada la decisión del juez en cuanto a que la única medida cautelar a efecto de garantizar la comparecencia de la adolescente ZAYRA o ZAIRA, durante la tramitación de la secuela procesal, es la detención preventiva, en virtud de lo siguiente:

Ciertamente, el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra señala: "...El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso...", siendo aplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a la letra dice:

PRISIÓN PREVENTIVA. SU NO CONTRADICCIÓN CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DERIVA DE LOS FINES QUE PERSIGUE Y NO DE SU CARÁCTER CAUTELAR. Independientemente de que la prisión preventiva sea una medida cautelar y provisional, no está en contradicción con la garantía de audiencia; en efecto, debe advertirse que su no contradicción con dicha garantía y con el principio de presunción de inocencia deriva más bien de los fines que persigue y no de su carácter provisional. Fines que son preservar el desarrollo adecuado del proceso y asegurar la ejecución de la pena, además de evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad. No puede atenderse únicamente a que la prisión preventiva es una medida provisional porque aquí, a diferencia de las medidas cautelares de carácter real, se afecta un bien de alta jerarquía axiológica, como lo es la libertad, y no obstante que, en efecto, a veces tiene ese carácter -cuando no se impone pena- debe reconocerse que su ejecución afecta de manera inmediata y directa al derecho sustantivo de la libertad. Además, esa privación provisional puede convertirse en parte de la pena, como lo reconoce el propio legislador constitucional en el artículo 20, fracción X, párrafo tercero, de la Ley Fundamental al decir que 'En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.'. Es decir, en esta hipótesis la prisión preventiva pierde su carácter provisional; se reconoce que ésta y la prisión punitiva son idénticas. novena época; instancia: Pleno; fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*; VII, marzo de 1998; tesis: P. XIX/98; página: 94. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con

el número XIX/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

Resulta correcto lo que argumenta la defensa, sólo en lo relativo a que la aplicación de las medidas de coerción cautelares que implican la privación de la libertad, no deben constituir una pena anticipada, dado su carácter procesal, pues se sustentan en el derecho fundamental de presunción de inocencia previsto en el numeral 20, apartado B), fracción I del Pacto Federal, del que se desprende que todo gobernado sometido a la potestad estatal, por respeto a su dignidad personal, durante la sustanciación del proceso y hasta que se dicte una sentencia de condena, se le reconoce un estado jurídico de no culpabilidad respecto del delito que se le atribuye y en consecuencia, que tiene derecho a su libertad y, que el Estado sólo puede privarla de la misma cuando existan suficientes elementos incriminatorios, seguidos de un proceso penal en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, así como su derecho fundamental de audiencia y de ofrecer las pruebas que considere pertinentes para desvirtuar la imputación correspondiente, que permitan al juez pronunciar la correspondiente sentencia definitiva; situación por la cual notoriamente difieren del carácter socioeducativo que poseen las medidas que se imponen como sanción punitiva y las cuales tienen como finalidad lograr la reinserción social y familiar de los adolescentes.

Es por ello que para su procedencia, tales mecanismos procesales exigen acreditar la necesidad de cautela, sustentada fundamentalmente en la existencia de: un riesgo real y actual en contra de la víctima, denunciantes o testigos, así como en general, de que se obstaculice la prosecución normal del proceso, impidiendo o limitando la obtención de pruebas que operen en su contra y en su caso, que la adolescente se dé a la fuga; objetivo procesal que por su trascendencia legitima la aplicación de la detención provisional como último recurso del Estado para garantizar el fin del proceso penal (esclarecimiento de la verdad y actuación de la

ley sustantiva), ante las graves implicaciones familiares y sociales, que conlleva privar de la libertad a un adolescente, como así se desprende de acuerdo a lo previsto en la Convención Sobre los Derechos de Los Niños en su numeral 37, inciso b), que a la letra dice: "...b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda..." (principios de brevedad y excepcionalidad), así como las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de su Libertad en su punto I inciso 2) y el punto III: "...2. Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en las presentes reglas, así como en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing). La privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales. La duración de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese tiempo..." y "...III. Menores detenidos o en prisión preventiva, 17. Se presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera de juicio son inocentes y deberán ser tratados como tales. En la medida de lo posible, deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la detención antes del juicio. En consecuencia, deberá hacerse todo lo posible por aplicar medidas sustitutorias. Cuando, a pesar de ello, se recurra a la detención preventiva, los tribunales de menores y los órganos de investigación deberán atribuir máxima prioridad a la más rápida tramitación posible de esos casos a fin de que la detención sea lo más breve posible. Los menores detenidos en espera de juicio deberán estar separados de los declarados culpables...", en ese mismo tenor las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o Reglas de Beijing en el pre-

cepto 13° prevé: "...Prisión preventiva, 13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible. 13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa...", así como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad o Reglas de Tokio en sus puntos 2.2 que a la letra dicen: "...Las reglas se aplicaran sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, edad..." y 6° que dispone: "...La prisión preventiva como último recurso, 6.1. En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima. 6.2 Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes posible. La prisión preventiva no deberá durar más del tiempo que sea necesario para el logro de los objetivos indicados en la regla 6.1 y deberá ser aplicada con humanidad y respeto por la dignidad del ser humano..."; disposiciones que resultan acordes a lo dispuesto por la ley de justicia para adolescentes para esta capital, en su artículo 33 párrafo primero que a la letra dice: "...En el caso de que se suspenda una audiencia o el adolescente no estuviera en un centro de internamiento de manera provisional en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se fija en esta ley, el juez puede imponer al adolescente, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares:...", también lo es que para su procedencia se debe de observar, lo dispuesto por los artículos 34: "...La detención provisional e internamiento del adolescente deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales, debiéndose aplicar medidas cautelares y definitivas menos gravosas siempre que sea posible. Las medidas restrictivas y de la libertad serán aplicadas por los períodos más breves posibles...", 35: "...La detención preventiva dictada por el juez respecto de un adolescente

de entre catorce y menos de dieciocho años de edad y cuya conducta cometida sea tipificada como delito grave, será aplicada como último recurso y por el tiempo más breve posible. Se consideran como delitos graves los establecidos en el artículo 30 de esta ley y por ningún motivo se considerará grave algún delito que en la legislación penal para adultos aplicable al Distrito Federal no sea considerado como tal...” y 36 “...La detención preventiva debe aplicarse sólo de manera excepcional, cuando no sea posible aplicar otra medida cautelar menos gravosa y hasta un plazo máximo de seis meses, siempre que: I. La conducta atribuida amereite una medida de internamiento; II. El adolescente sea mayor de catorce años de edad al momento de cometer el hecho. La detención preventiva no podrá combinarse con otras medidas cautelares, y debe ser cumplida en instalaciones diferentes a las destinadas al cumplimiento de la medida de internamiento definitiva...”, éstos, en relación con el artículo 30 “...Se califican como conductas tipificadas como delitos graves, para los efectos de esta ley, los siguientes: VIII. Robo, previsto en el artículo... 225...”. ordenamientos internacionales que resultan aplicables por este Tribunal en el asunto planteado, en virtud del control de convencionalidad *ex officio* en materia de derechos humanos y atentos al contenido del principio *pro persona*, previsto en el numeral 1º constitucional, que ordena a la autoridad judicial su obligatorio cumplimiento, dado que el alcance de tales preceptos implica la protección más amplia de la adolescencia; lo anterior, encuentra sustento en la sentencia de fecha XX de XXX de XXXX, pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso *Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos*, en su párrafo 339 donde se establece:

...En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes

en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” *ex officio* entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana....

En tal tenor, una vez analizadas la constancias que se desprenden del testimonio de apelación correspondiente, resulta inconcuso que correctamente el juez de la causa no impuso medidas cautelares diversas a la detención a la adolescente inculpada ZAYRA o ZAIRA, en tanto que para que ello cobrara procedencia, desde luego, no puede utilizarse como argumentación un análisis que parta de situaciones que carecen de objetiva demostración y acreditamiento ante la autoridad judicial, basadas exclusivamente en aspectos que tienden a subjetivizar los hechos e incluso, involucrarse en un análisis de fondo que no está debidamente sustentado amén de citar criterios de los que, sin poner en tela de juicio su validez, no resultan aplicables al caso concreto.

En efecto, la imposición de medidas cautelares en libertad en el presente asunto, tendrían que fincarse en una ponderación que evite el prejuzgamiento del fondo del asunto y por ende, sustentada sustancialmente en aquellos hechos sobre los cuales ya fue realizado un pronunciamiento por el órgano jurisdiccional competente, que en la especie incide en el auto inicial, del que trasciende lo relativo a la naturaleza del injusto materia del ejercicio de la acción de remisión y la forma de

comisión acreditada hasta ese estadio, lo que dio motivo al proceso seguido en contra de la justiciable y que se refiere a que en fecha XX de XXX de XXXX, se aperturó proceso en contra de la adolescente ZAYRA o ZAIRA, por el supuesto de hecho que se verificó el día XX de XXX de XXXX, a las 00:00, cuando la adolescente ingresó a la ferretería con razón social “XXXX” ABASTECEDORA XXX de XXX Y XXX, SOCIEDAD ANÓNIMA de CAPITAL VARIABLE, ubicada en XX, número 000, en la colonia XXX, delegación XXX, realizando un recorrido por los pasillos, para después a las 00:00 aproximadamente realizó una llamada telefónica y al transcurrir 20 veinte minutos, de igual forma ingresó un sujeto (adulto) con el cual conversó y posteriormente este se dirigió al guardia de seguridad VÍCTOR, a quien empujó y amagó con una pistola tipo escuadra, de color gris, ordenándole: “que se hiciera a un lado y que no hiciera nada”, mientras lo llevaba al final del pasillo donde se encontraba un mostrador el cual brincó y amagó a la cajera LETICIA a quien le ordenó la entrega del dinero de la caja registradora de tal establecimiento y una vez con el numerario, dirigió el arma para todos lados, mientras se dirigía a la salida del referido establecimiento comercial, en donde se encontraba la adolescente ZAYRA o ZAIRA, quien permaneció vigilando, dándose ambos a la fuga; siendo asegurados por unos remitentes, ante el señalamiento de los testigos, sujetos que al revisarlos no les encontraron ni numerario, ni el arma descrita; ante ello, fueron puestos a disposición de la representación social.

Acontecimiento, del que se advierte que los agentes del evento como medios para concretar su cometido, eligieron no solo una actuación de conjunto al intervenir dos personas (adolescente y adulto), sino que además emplearon un objeto apto y eficaz para amagar e intimidar a los pasivos, toda vez que los testigos describieron que emplearon un arma de fuego tipo escuadra, color gris, con la cual inicialmente amagó al guardia de seguridad y posteriormente a la cajera, pues de la mecá-



nica del evento narrada por el guardia de seguridad VÍCTOR, se desprende que luego que dicho sujeto lo empujó por la espalda, le apuntó directamente con la pistola tipo escuadra, refiriéndole que no hiciera nada y toda vez que como se encontraban algunos “clientes”, para no exponerlos, no realizó acción alguna para repeler tal agresión.

Consiguientemente, atendiendo a los términos del evento injusto acreditado por el juzgador original, queda evidenciada la necesidad de que la adolescente inculpada permanezca en detención como medida cautelar para garantizar la continuidad y tramitación normal del proceso, evitando así la sustracción de la inculpada de la potestad estatal y en su caso, la eventual ocultación o destrucción de evidencia probatoria o que se pudiera causar algún daño a los pacientes del hecho; siendo la primera de tales hipótesis la que cobra preponderancia, atendiendo a las características del injusto cometido en el que se hace evidente que independientemente de la actuación atribuida en concreto a la justiciable, se advierte la intervención de un individuo del sexo masculino y que por ende, atendiendo a las reglas de la autoría y participación, sin prejuzgar y únicamente para los efectos de evidenciar la disidencia con respecto del proyecto original que ahora quedó como voto frente a esta resolución mayoritaria, se atiende a que en una realización conjunta del hecho, se involucra respecto de cada partícipe la autoría material, directa y funcional, puesto que, precisamente, la actuación desplegada por cada uno de los activos conforma un eslabón necesario e indispensable en la realización del hecho atribuido y, por ende, deja en claro que se tiene un codominio del hecho, que implica la posibilidad de los intervinientes, de evitar el injusto dentro del supuesto de distribución de actividades que se hubieran dado entre los activos para lograr el éxito de su empresa, tan es así que no sólo intervino en verificar las condiciones del lugar previo al hecho, sino además mantuvo la vigilancia afuera de la negociación durante el hecho; actuación con las que se evidenció un total desprecio

hacia la integridad física de sus semejantes y consecuentemente, un notorio desinterés por sus derechos, aspecto que atendiendo al principio de proporcionalidad debe ponderarse en el caso a estudio, toda vez que la concreción de la proporcionalidad debe ponderarla el órgano jurisdiccional, dado que le corresponde realizar un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes del hecho, las cuales ya quedaron precisadas, mismas que revelan que la detención provisional es la única medida cautelar efectiva para evitar se ponga en riesgo la continuación normal del proceso, evitando riesgos a los pasivos o a la sociedad y que la justiciable se sustraiga de la acción estatal, garantizando así su comparecencia durante la secuela procesal, a efecto de brindar protección a las víctimas y a la sociedad, más aún que precisamente nos encontramos ante una conducta de *facto* y legalmente calificada como delito grave, prevista en el numeral 30, fracción VIII, de la ley de la materia, circunstancia que por sí sola si bien no implica necesariamente que sea el sustento primordial de la negativa para la imposición de una medida cautelar diversa a la detención provisional, toda vez que la necesidad de cautela radica sustancialmente en los argumentos referidos con antelación, respecto del riesgo de obstaculización del proceso; empero, ello no implica —como limitadamente lo estableció el original—, dejar de lado la magnitud del injusto que nos ocupa, máxime que en el presente caso se puso en peligro real la integridad física de los testigos y demás personas que se encontraban en ese lugar.

En otro aspecto, el pretender argumentar en el proyecto original, que ahora se sustenta como voto, que quien desplegó los actos materiales de apoderamiento y previo amago con un arma de fuego en los términos denunciados, lo fue exclusivamente el adulto como coincepado y con ello pretenda minimizarse a su vez la conducta atribuida a la justiciable adolescente, resulta insostenible y más aún contradictoria con el principio de presunción de inocencia.

Por consiguiente, en el recurso que se analiza, resulta trascendente el evidente peligro en que fueron puestos bienes jurídicos de mayor trascendencia al patrimonio de una empresa, al quedar de manifiesto en función de los hechos que el *a quo* tuvo por acreditados, el desprecio de los activos con respecto de la integridad corporal de los pasivos del evento al ser amenazados con un instrumento de alta potencialidad lesiva que incluso eventualmente colocó en riesgo la propia vida de dichos pasivos, aspecto que evidentemente y sin perjuicio de lo que pudiera demostrarse durante la secuela procesal tal priorización de bienes jurídicos no interesó a los activos del injusto con tal de llevar a buen término su empresa delictiva.

Amén de lo expuesto, no debe perderse de vista lo incorrecto que resulta, como se pretende en el proyecto original que derivó en voto, el subjetivisar sobre el hecho de que no se cuenta con mayores datos para determinar la potencialidad lesiva del objeto con el que fueron amagados los pasivos, señalamiento que involucra prejuizgamiento sobre aspectos que no son materia del recurso intentado y que el juzgador original tomó en consideración al momento de emitir la correspondiente resolución inicial que vinculó a proceso a la justiciable, puesto que para ello se requiere ponderar sobre la validez de los dichos de los denunciantes y ello no es el motivo ni la finalidad principal del análisis que se debe realizar en un recurso respecto de una resolución incidental de medidas cautelares, por lo que el órgano decisorio para tal efecto a partir de los hechos acreditados hasta el momento en que se tomó la decisión que motivó el recurso y a partir de la resolución que dio pauta al procesamiento de la justiciable.

Por otra parte, resulta importante destacar que en el caso concreto, no se advierte transgresión a los derechos fundamentales de la adolescente inculpada; así, con respecto a la duración de la medida de detención preventiva, cierto es que debe ser por el menor tiempo po-

sible, tomando en consideración los criterios contemplados en instrumentos internacionales como lo son la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 7.5, que dispone: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.” y 8.1 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”., en este mismo tenor, la Convención Europea en sus artículos 5.5 y 6.1, en tanto que Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 9.3 prevé que: “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.” y 14.3 inciso c) “A ser juzgado sin dilaciones indebidas.”, disposiciones en las cuales se consagra la garantía del “plazo razonable” que impone un límite a la detención preventiva, temporalidad que en la especie no se ha rebasado, cumpliéndose por lo tanto, con lo previsto en el artículo 36 de la ley especializada de la materia.

Es así que con independencia de que la imposición de la medida cautelar de la detención preventiva debe aplicarse como último recurso, empero para el caso concreto no torna procedente la solicitud de la defensa, como ya ha quedado precisado, toda vez que se observa que atendiendo a los principios de legalidad, jurisdiccionalidad, excepcionalidad, instrumentalidad y proporcionalidad, que exigen un examen de las circunstancias sustanciales del hecho a efecto de verificar la gravedad del mismo y así poder determinar la existencia de un riesgo en contra de la o las víctimas, a la ocultación o destrucción de pruebas o de riesgo de fuga; por tanto, atendiendo a las circunstancias en las que se verificó el suceso evidentemente y las cuales ya fueron materia de análisis en una etapa diversa a la que nos ocupa, relativa a la fijación de la litis (fojas 202-228 vuelta); empero, establecer y ponderar la gravedad del hecho por la afectación al bien jurídico que tutela la norma a partir de lo acreditado por el *a quo*, no implica prejuzgar de forma alguna sobre la culpabilidad de la enjuiciada, sino que se abstrae de tal aspecto a efecto de que la autoridad judicial determine mediante un juicio de razonabilidad acerca de la tutela de la finalidad perseguida, pues sin olvidarse del principio de presunción de inocencia a favor de aquellos que asuman el carácter de inculpadados, empero, ello no implica dejar de lado que se examinaron las circunstancias del hecho a efecto de determinar objetivamente cuál es la medida cautelar procedente a adoptar para efectivizar y garantizar el fin del proceso y por ende, busca que sea proporcional para la consecución de los fines procesales, sin que tal análisis transgreda de forma alguna los derechos fundamentales de la adolescente, dado que al ser la detención preventiva el “último recurso” que debe emplear el Estado, como ha quedado precisado, aun atendiendo a que tal aspecto se encuentra previsto en el numeral 34 de Ley de Justicia para Adolescentes para esta capital, que a la letra dice: “...La detención provisional e internamiento del adolescente deberá evitarse y limitarse

a circunstancias excepcionales, debiéndose aplicar medidas cautelares y definitivas menos gravosas siempre que sea posible. Las medidas restrictivas y de la libertad serán aplicadas por los períodos más breves posibles...”; tal disposición, no implica, que deba ignorarse la exigencia social de que se proteja de manera más intensa e incondicional el valor de la seguridad como sucede en el delito a estudio, el cual la doctrina denomina de núcleo duro —de acuerdo a la autora María José Bernuz Beneitez, en su artículo *“Justicia de Menores Española y Nuevas Tendencias Penales, La Regulación del Núcleo Duro de la Delincuencia Juvenil”*, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2005—; lo anterior en virtud del impacto social que éstos generan, máxime que la mecánica desarrollada en el evento que quedó probado, evidencia que la serie de actividades referidas y no probadas por la encausada, no puede ser un aspecto que sin mayor sustento sean tomadas en consideración en sus pretensiones bajo el argumento del principio del interés superior, pues éste no es el sentido del mismo, esto es, no lleva al grado de generar impunidad, ni avalar los actos injustos cometidos por el solo hecho de ser adolescente, o encontrarse en alguna situación que si dicho agente fuera la víctima, debe ser tomado en consideración porque ese estado pudo ser factor de trascendencia para afectar sus derechos, pero no puede alegarse como justificante para que una mujer embarazada o con hijos pequeños que incluso sea adolescente, se le permita un estatus procesal diverso que aquellos que no se encuentran en tales condiciones al cometer hechos delictivos en los que se generó real peligro a bienes jurídicos de la mayor valía como la vida y la integridad corporal, pues en todo caso, lo que procede es que se dé un trato procesal igual, pero con las atenciones y medidas que sean procedentes acorde a su estado físico y/o de salud, dado que en el proyecto que ahora se constituye en voto del magistrado disidente, no se atiende a que la vulnerabilidad de las personas o grupos de ellas, deriva de las circunstancias de pobreza,

origen étnico, edad, género, estado de salud o discapacidad que los coloca en situación de vulnerabilidad o indefensión para hacer satisfacer sus necesidades o afrontar los problemas que su misma condición les genera, convirtiéndolos en presa fácil de actos ilícitos, pero no justifica que por ese hecho cometan actos ilícitos y por ende, solo adquieren condición de vulnerables, si su situación personal fue factor determinante para que dentro del esquema procesal, en su condición de inculpadados, sean sujetos de violaciones a sus derechos fundamentales, como en su caso, acontece en los criterios citados en el voto correspondiente, pero que desde luego, notoriamente carecen de aplicación en la especie al no advertirse que contra la inculpada adolescente se hubiera dado alguna situación que violentara sus derechos en su calidad de encausada.

En efecto, si bien de acuerdo a las constancias que integran los autos, se advierte que actualmente la inculpada se encuentra en un estado de ingravidez, de acuerdo al examen médico que le fue practicado al ser puesta a disposición del Ministerio Público, por el doctor Raúl Estrada Zubia, en fecha XX de XXX de XXXX, al establecerse que la adolescente ZAYRA o ZAIRA, señaló que: "...ésta refirió que está embarazada aproximadamente 13 trece semanas..." (fojas 27); situación que de igual forma se advierte del examen que le fue practicado por la doctora MIRIAM, adscrita a Unidad Departamental del Jurídico en la Comunidad para Mujeres, quien se determinó como diagnóstico, entre otros: "...ecudigesta con embarazo de 13 trece semanas de gestación, normoevolutivo (ya valorada por ginecología y obstetricia)..." (fojas 259); ante ello, desde luego resulta obligatorio para la comunidad donde se encuentra privada de la libertad, que le sea proporcionada la atención médica que requiera y se tengan las consideraciones requeridas a su condición física, con fundamento en los artículos 4o. constitucional, 4o. de la Declaración de los Derechos del Niño, 3o. de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y 10o. de la Ley de Justicia

para Adolescentes para esta capital, de los que se desprende el imperativo legal de que toda decisión judicial debe ajustarse en irrestricto respeto al interés superior del adolescente, así como a las circunstancias y necesidades del menor, a efecto de que exista proporcionalidad en la reacción estatal; por lo cual, al no desconocerse por esta autoridad los derechos del adolescente y su calidad *etaria*, en este aspecto atendiendo a la visión integral de sus derechos y bajo una lógica *pro niño*, es que, como se ha establecido, debe considerarse dentro del proceso su estado de embarazo y requerimientos médicos que necesite, razón por la cual, el original agotando todos y cada uno de los mecanismos que la ley le otorga, deberá requerir a la autoridad ejecutiva (administrativa) que se le brinde a la adolescente la atención médica necesaria y continua correspondiente, situación a la que debe mantenerse pendiente, amén de que deberá solicitar a la autoridad en cita informes periódicos del estado de la inculpada a efecto de ordenar las medidas conducentes a su debida atención y dar cumplimiento al principio de proporcionalidad, en el que se sustenta la medida cautelar impuesta; lo anterior con fundamento en los principios 5.1 y 17 inciso a de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (*Reglas de Beijing*) y 49 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

Por todo lo cual, no es procedente la solicitud de la defensa, quien si bien en abundamiento pretende justificar su petición aduciendo que su representada cuenta con un domicilio fijo y estable dentro de esta jurisdicción, toda vez que argumentó: "...con los comprobantes de domicilio que fueron ofertados por la defensa en el incidente no especificado y que corre agregado a fojas 323 a 324, del testimonio de apelación, se observa que dichas documentales se encuentra expedidas a favor de la ANA, quien ante el juez natural manifestó ser tía de la adolescente y quien ratificó la carta de buena conducta que suscribió a favor de la



adolescente; asimismo, señaló en la audiencia incidental a preguntas de la defensa oficial que la adolescente vive en su domicilio, y al proporcionar sus generales manifestó que tiene domicilio actual en calle XXXX, departamento 000, torre X, colonia XXX, código postal 00000, delegación XXX (visible a foja 333 vuelta)...” (fojas 12-13 del toca); empero, amén de que tal aspecto, se refiere a garantizar el debido cumplimiento de una medida cautelar, sin embargo tal aspecto como ha quedado precisado no es el determinante para que permanezca en internamiento, sino la ponderación de la magnitud del hecho y por ende, la existencia de riesgo de fuga, obstaculización o peligro respecto de la integridad física de los testigos; ante ello, la verdadera motivación del sentido de la resolución lo determinan tales circunstancias; de ahí que dado todo lo razonado, la solicitud de la defensa carece de argumentos operantes para controvertir lo ya razonado y menos para garantizar que de imponerle a la inculpada medidas diversas al internamiento, cumpliría con las obligaciones procesales que en su caso derivarían de las mismas, pues si bien no se desconoce que son factores adecuados para la evaluación de riesgos y garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares: la residencia fija y estable, así como un proceso educativo constante; ello solo cumple su cometido una vez que se haya evaluado la gravedad del hecho cometido y a las circunstancias en las que se verificó, atendiendo al principio de proporcionalidad, de ahí que resulta ajustada a la legalidad la detención preventiva ordenada en su contra, de acuerdo a la forma de comisión del injusto y medios utilizados como han quedado precisado; en este mismo tenor, resulta intrascendente para los efectos de esta resolución el que se hubieran exhibido comprobantes de arraigo domiciliario a nombre de ANA, relativos a un recibo de pago de XXX, un recibo de la XXXX (fojas 323 y 324); así como 02 dos cartas de recomendación a favor de la inculpada, suscritas por ANA (tía) y PRISCILIANO, quienes incluso en la audiencia incidental

de fecha XX de XXX del año en curso, fueron debidamente ratificadas por sus emitentes (fojas 333-335); empero, tales aspectos en absoluto, así como el vinculado con la actual ocupación de la inculpada (ama de casa), no constituyen la razón sustantiva en la no imposición de medidas cautelares diversas a la detención preventiva, como lo resolvió el original, toda vez que los factores necesarios para su procedencia versan respecto a que se dé efectivo cumplimiento a los fines del proceso.

Por último, si bien como lo aduce la defensa, la imposición de la medida cautelar de la detención preventiva debe aplicarse por el tiempo más breve posible, atendiendo el interés superior de la adolescente y la presunción de inocencia, como así lo prevé el precepto 35 de la Ley de Justicia para Adolescentes para esta entidad, el numeral 37 inciso b) y 40.1 de la Convención Sobre los Derechos de Los Niños, el punto I inciso 2 y el punto III de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de su Libertad, el precepto 13.1 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o Reglas de Beijing, así como 6, 6.1 y 6.2 de las Reglas de Tokio, en observancia a los principios de presunción de inocencia y del interés superior de la adolescente, empero de igual forma debe tomarse conciencia por el órgano de defensa que el sistema integral de protección de los adolescentes, en el que se involucra desde luego el de justicia, se reitera que no debe entenderse como se pretende incorrectamente, como una patente de impunidad en la cual sin importar el injusto cometido, la forma de llevarlo a cabo, el daño causado y/o el peligro en el que se colocó a los pasivos, se pretenda que en todos los casos, los órganos jurisdiccionales especializados mantengan en libertad a los encausados argumentando para ello lineamientos generales que carecen de aplicación al caso concreto; asimismo tales razonamientos deben ser ponderados y atendidos cuando el interés por los representados es legítimo y se fundamenta en los aspectos que valo-

rativamente son justos, sin embargo, en la especie tal petición carece de total fuerza vinculatoria hacia la decisión que emitió el juez, pues el hecho de que la inculpada sea adolescente no conlleva a que necesaria e indiscriminadamente deba imponérsele medidas cautelares que permitan su externación, cuando el hecho y las circunstancias señaladas colocaron notoriamente en riesgo a los pasivos, por el injusto perpetrado en su contra o por actos posteriores a éste que involucren a la inculpada, pues el sistema lo que pretende es garantizar el respeto, así como el goce y ejercicio pleno de sus derechos constitucionales y procesales frente al drama del que son protagonistas, siendo éste el sentido verdadero del interés superior de los adolescentes, llevándolos incluso al extremo de la suplencia oficiosa frente a omisiones o deficiencias de su defensa; al respecto resultan aplicables en la parte que se destaca los criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos a la letra dicen:

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El indicado principio tiene tres vertientes: 1) Alternatividad, la cual se desprende del artículo 40, apartado 3, inciso b), de la Convención sobre los Derechos del Niño, de acuerdo con el cual debe buscarse resolver el menor número de conflictos a nivel judicial, lo que se relaciona con la necesidad de disminuir la intervención judicial en los casos en que el delito se deba a que el menor es vulnerado en sus derechos económicos, sociales y culturales, en virtud de que resultaría inadecuado que el juzgador impusiera una sanción gravosa, si el menor no puede hacer nada en contra de sus circunstancias cotidianas, además de que esta vertiente tiene la pretensión de que la normativa correspondiente a menores amplíe la gama de posibles sanciones, las cuales deberán basarse en principios educativos. 2) Internación como medida más grave, respecto de la cual la normatividad secundaria siempre deberá atender a que el internamiento sólo podrá perverse

respecto de las conductas antisociales más graves; aspecto que destaca en todos los instrumentos internacionales de la materia. 3) Breve término de la medida de internamiento, en relación con la cual la expresión “por el tiempo más breve que proceda” debe entenderse como el tiempo necesario, indispensable, para lograr el fin de rehabilitación del adolescente que se persigue; empero, en las legislaciones ordinarias debe establecerse un tiempo máximo para la medida de internamiento, en virtud de que el requerimiento de que la medida sea la más breve posible, implica una pretensión de seguridad jurídica respecto de su duración. Novena Época; instancia: Pleno; fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*; tomo: XXVIII, septiembre de 2008 dos mil ocho, tesis: P./J. 79/2008 dos mil ocho, página: 613. Acción de inconstitucionalidad 37/2006. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 22 de noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia se hizo cargo del asunto Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Rosalía Argumosa López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, María Amparo Hernández Chong Cuy, Miguel Enrique Sánchez Frías y Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 79/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho.

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En relación con el tema de los derechos de las personas privadas de la libertad, se parte de la premisa de que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, que impone especiales deberes al Estado, de ahí que en el caso de los menores, esa vulnerabilidad se hace más patente, dadas sus características físicas y psicológicas, lo que constituye un hecho que necesita ser asumido por los órganos encargados, tanto de la creación de normas, como de la procuración y administración de justicia. En ese contexto, el principio del interés superior del menor implica que la actuación de las instituciones, tribunales y autoridades encargadas de la aplicación del sistema penal para adolescentes, deba orientarse

hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. Por tanto, la protección al interés superior de los menores supone que en todo lo relativo a éstos, las medidas especiales impliquen mayores derechos que los reconocidos a las demás personas, esto es, habrán de protegerse, con un cuidado especial, los derechos de los menores, sin que esto signifique adoptar medidas de protección tutelar. Además, si bien es cierto que las autoridades encargadas del sistema integral deben maximizar la esfera de derechos de los menores, también lo es que deben tomar en cuenta sus límites, uno de los cuales lo constituyen los derechos de las demás personas y de la sociedad misma, razón por la cual se establece, en los ordenamientos penales, mediante los diversos tipos que se prevén, una serie de bienes jurídicos tutelados que no pueden ser transgredidos, so pena de aplicar las sanciones correspondientes; de ahí que bajo la óptica de asunción plena de responsabilidad es susceptible de ser corregida mediante la aplicación de medidas sancionadoras de tipo educativo que tiendan a la readaptación. Novena Época; instancia: Pleno; fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*; tomo: XXVIII, septiembre de 2008 dos mil ocho; tesis: P./J. 78/2008 dos mil ocho; página: 616. Acción de inconstitucionalidad 37/2006. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 22 de noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia se hizo cargo del asunto Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Rosalía Argumosa López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, María Amparo Hernández Chong Cuy, Miguel Enrique Sánchez Frías y Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 78/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho.

Por lo expuesto y, habiendo resultado improcedentes los argumentos expuestos como agravios por la defensa de la adolescente ZAYRA o ZAIRA, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 122 constitucional, así como el 76 del Estatuto del Gobierno de esta capital, 44 *bis*

de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad, además de los artículos 92 y 95 de la Ley de Justicia para Adolescentes en cita, así como los preceptos 414, 425, 427 y 432 del código de procedimientos penales, se

### **RESUELVE:**

PRIMERO. Con las precisiones realizadas se confirma la resolución incidental de fecha XX de XXX de XXXX, emitida por el Juez Noveno de Proceso Escrito en Justicia para Adolescentes, doctor Héctor González Estrada, en la causa número XX/XXXX, instruida en contra de ZAYRA o ZAIRA por el delito de robo calificado (con violencia).

SEGUNDO. Notifíquese, con copia autorizada de la presente resolución, devuélvanse al Juzgado de su procedencia el presente testimonio y en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos lo resolvieron los ciudadanos magistrados que integran la Segunda Sala Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de esta Capital, licenciados Rosa Laura Sánchez Flores y Sadot Javier Andrade Martínez, en contra del voto particular emitido por el magistrado Eugenio Ramírez Ramírez, siendo ponente el segundo de los nombrados, los cuales firman la presente sentencia, con independencia de que por separado, se agregará el voto emitido por el magistrado disidente; quienes firman ante la Secretaria de Acuerdos, licenciada Elizabeth Isela Ortiz Guillén, quien autoriza y da fe.

## SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

*VOTO PARTICULAR*

MAGDO. EUGENIO RAMÍREZ RAMÍREZ

**Recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de la adolescente respecto de la resolución incidental dictada por el Juez Noveno de Proceso Escrito en Justicia para Adolescentes del Distrito Federal instruido por la conducta tipificada como delito de robo calificado.**

**SUMARIO:** PRECISIÓN DEL NÚMERO DE DEPARTAMENTO DONDE SEÑALÓ LA INCULPADA QUE HABITABA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA NEGAR ALGUNA MEDIDA DE MENOR SEVERIDAD, DIVERSA A LA DETENCIÓN PREVENTIVA. Si bien es cierto que la conducta tipificada como robo calificado, es considerada como grave por la Ley de Justicia para Adolescentes de esta Capital, no menos cierto lo es que esto no constituye por sí mismo un factor de anulación total de procedencia de medidas cautelares diversas a la detención preventiva, ya que esta debe ser limitada conforme a los principios de legalidad, presunción de inocencia, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en todos los casos, conforme a la relevancia del interés que se tutela a las personas, respecto de su libertad personal, como parte de la esencia de toda sociedad democrática, donde la restricción de dicha libertad, debe operar de manera excepcional. En este sentido, no es causa suficiente para negar alguna medida cautelar de menor severidad, diversa a la detención preventiva, se advierte que, la falta de precisión del

número de departamento donde señaló la inculpada que habitaba, pues en este caso, no puede considerarse que la citada imprecisión, no implica la inexistencia de un domicilio cierto en el inmueble que la adolescente señaló, pues en todo caso el juzgador deberá exponer la razón por la que considere que ese como un factor de impedimento de la localización de la menor, ni de la eventualidad oportunidad de ubicación de ésta.

México, Distrito Federal, XX de XXX de XXXX.

El suscrito Magistrado Eugenio Ramírez Ramírez, emite el presente voto particular en contra de la sentencia mayoritaria emitida por los Magistrados Rosa Laura Sánchez Flores y Sadot Javier Andrade Martínez, en el toca XX/XXXX relativo al recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de la adolescente ZAYRA o ZAIRA, respecto de la resolución incidental de fecha XX de XXX del XXX, dictada por el Juez Noveno de Proceso Escrito en Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, en el expediente número XX/XXXX, instruido por la conducta tipificada como delito de robo calificado en contra de la adolescente antes mencionada, quien señaló que su nombre correcto era el primero de los antes referidos, precisión que se constató a través del acta de nacimiento (f. 238) y clave única de registro de población (CURP -f. 58-), mismo nombre que se usará en el desarrollo de la presente resolución, sin perjuicio de que a fin de evitar retrasos o deficiencias de comunicación entre instituciones, se haga mención a los otros nombres con que fue identificada dicha menor, dado que los registros que se han producido en torno a ésta, incluyendo los concernientes a las instalaciones en que actualmente se encuentra interna, contienen la expresión de la diversidad de nombres señalada. Asimismo, con los elementos documentales indicados, pudo establecerse debidamente que al momento de los hechos que se atribuyen a dicha adolescente, ésta contaba con la edad de XX años, al ser su fecha de nacimiento el XX de XXX de XXXX



(f. 58 y 238). Misma adolescente que actualmente se encuentra interna en la comunidad para mujeres de la Ciudad de México, por lo que procede elaborar la resolución al tenor siguiente

### RESULTANDO:

1. En fecha XX de XXX de XXXX, el Juez Noveno de Proceso Escrito en Justicia para Adolescentes de esta Ciudad, dictó resolución incidental en la cual resolvió:

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando II de la presente resolución, se declara improcedente la solicitud de la licenciada EVELIN, defensora de oficio de la adolescente ZAYRA o ZAIRA, en el sentido de que se le concedan a dicha adolescente medidas cautelares diversas a la detención preventiva impuesta en resolución inicial.

SEGUNDO. Hágase saber a las partes el derecho y término de tres días que se tiene para inconformarse con la presente resolución, interponiendo el recurso de apelación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 414, 416, 417, 545 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal...

2. Inconforme con dicha determinación, en fecha XX de XXX de XXXX, la defensora de oficio interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo por auto de fecha XX del mismo mes y año, estando en tiempo y forma dicha impugnación, y al tratarse de una resolución recurrible en esta vía.

3. Con motivo de dicho recurso se formó en esta Sala el toca número XX/XXXX, y para la substanciación del mismo, se planteó la resolución del mismo en forma colegiada, por lo que en inicio, se designó como ponente de éste el ciudadano magistrado, maestro en Derecho, Eugenio Ramírez Ramírez. Así, en fecha XX de XXX de XXXX, la defensa oficial expuso agravios en forma escrita, solicitando se revoque

la resolución impugnada, y celebrada la audiencia de vista correspondiente en fecha XX de XXX de XXXX, quedó listo el toca para resolver el recurso instado.

4. Elaborado el proyecto correspondiente, y turnado a los magistrados integrantes de esta Sala para su revisión, en deliberación se expusieron por éstos razones diversas a las apreciadas por el suscrito, y en función de ello, al no coincidir en cuanto al sentido de la determinación que debía producirse en revisión al fallo que nos ocupa, se procedió a turnar la causa y toca, a un ponente distinto a fin de elaborar la resolución mayoritaria correspondiente. De tal suerte, se emite la sentencia mayoritaria por los magistrados Rosa Laura Sánchez Flores y Sadot Javier Andrade Martínez; en tanto que el suscrito, al no coincidir en el criterio sustentado en la idea mayoritaria, en éste acto se procede a formular el voto particular en el que se exponen los aspectos de disenso con la opinión que se emite en la resolución mayoritaria; a efecto de que sea agregado a ésta y se proceda a su comunicación formal al órgano jurisdiccional de origen.

### CONSIDERANDO:

I. Se estableció en inicio, que este Tribunal en materia de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por el artículo 122, párrafo segundo y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 4 y 18 de la precitada ley fundamental; artículo 76 del estatuto de gobierno vigente para la Ciudad de México; así como de los diversos artículos 1, 2, 4, 8, y 92, de la Ley de Justicia para Adolescentes y los diversos artículos 1, 2, 38 y 44 *bis* de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México. Denominación ésta que se empleará a lo largo de la presente resolución, en atención

al Acuerdo General 43-08/2016, denominado “ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL POR CIUDAD DE MÉXICO EN TODO CUERPO NORMATIVO DEL PODER DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión plenaria ordinaria de fecha 9 de febrero del año en curso, en cuyo transitorio primero, se establece su vigencia a partir de su publicación (10 de febrero de 2016), y en su transitorio segundo establece en lo conducente que:

...Se instruye a todos los Órganos Jurisdiccionales... del Tribunal Superior de Justicia... de la Ciudad de México, para que a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo General se haga referencia a la Ciudad de México...

Ahora bien, se establece que ante las circunstancias de disenso que se producen en el caso particular, conforme a lo dispuesto por el artículo 425 de la legislación adjetiva de la materia, y una vez turnada de nueva cuenta el asunto sometido a revisión, a efecto de elaboración de proyecto mayoritario, el suscrito se encuentra en aptitud de emitir su opinión a través del voto particular que deberá agregarse a la resolución mayoritaria.

II. El recurso de apelación materia de estudio, tiene como objeto el análisis para revisar la legalidad de la resolución apelada, conforme a lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del artículo 92 de la Ley de Justicia para Adolescentes vigente en esta ciudad, en función de las disposiciones jurídicas que regulan el caso concreto; en esa tesitura, al instarse el presente recurso por parte legitimada para ello, y en ponderación al artículo 95 de la precitada Ley de Justicia para Adolescentes, se muestra la limitante basada en la regla general de procedencia en la aplicación de la figura de suplencia de la deficiencia en la expresión de agravios, cuando el recurrente sea el adolescente o su defensor; sin

embargo, la limitante del análisis bajo la cual se realiza cada caso particular, implica que en ocasiones, puedan verse inmersos los derechos de la víctima u ofendido, y en tal razón, se impone un margen de apreciación diverso, cuando éstos correspondan a grupos de mayor vulnerabilidad, como ocurre en casos de menores de edad, incapaces, así como otros sectores que encuentran mayor dificultad de ser atendidos, como ocurre por cuestiones de género, o edad; de ahí que con arreglo a lo dispuesto por los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el análisis que se realiza por este Tribunal, atenderá invariablemente la excepción citada, sin que ello implique suplir vicios o inconsistencias, dado que la apreciación de los derechos del ofendido constituyen un margen de apreciación específico, en mayor amplitud, atendiendo las características del agraviado con el hecho delictivo de que se trate.

III. Ahora bien, una vez que han sido ponderados los aspectos de inconformidad planteados por el recurrente, y confrontados con el fallo motivo del recurso instado, se advierte que el punto de inconformidad en que reposa el planteamiento de la defensa, concierne a la negativa de medidas cautelares, diversas a la detención preventiva considerada por el juzgador, quien estimó como base del fallo analizado, la existencia de riesgo de que la adolescente que nos ocupa deje de comparecer a cumplir con sus obligaciones procesales, esto debido a que dicha menor se encuentra sujeta a formal proceso por la comisión del evento tipificado como delito de robo calificado, al cual se destaca, se adecuan los hechos que se le atribuyen, mismos que se indicó, corresponde a que el XX de XXX del XXXX, como a las 00:00 horas, la mencionada adolescente ingresó al establecimiento comercial con razón social “XXXX” ABAS-TECEDORA XXX de XXX y XXX, SOCIEDAD ANÓNIMA de CAPITAL VARIABLE, ubicado en XXXX 000, en la colonia XXX, delegación XXX, y minutos después ingresó un sujeto adulto, con el cual conversó. En

seguida este sujeto se dirigió al guardia de seguridad VÍCTOR, a quien empujó y amagó con lo que se describió como una pistola tipo escuadra, después brincó el mostrador en el que se encuentra la caja registradora y amagó a la cajera LETICIA, así se apoderó del dinero que estaba en dicha caja, para después dirigirse a la salida del establecimiento, donde la menor ZAYRA, había permanecido vigilando, de ésta forma, ambos salieron del establecimiento y se dieron a la fuga. Así, conforme a la percepción del juzgador, existe riesgo de que dicha menor pueda sustraerse de la acción de la justicia, debido a que tales hechos encuentran adecuación típica a la descripción legal del hecho delictivo de robo calificado, conforme a lo dispuesto por el artículo 220, en relación a la descripción normativa contenida por el artículo 225 fracción I del Código Penal, ambos vigentes en esta ciudad, y por el cual, se determinó sujetarle a formal proceso, considerándole probable responsable de su comisión. De esta forma se acota en el fallo analizado que, debido a que el evento típico aludido, es considerado como grave por la legislación especializada, según puede notarse del contenido del artículo 30, fracción VIII, de la Ley de Justicia para Adolescentes vigente para la Ciudad de México, da inicio la percepción de riesgo a que la adolescente imputada pueda incumplir con sus obligaciones procesales, para el caso de que se le fijen medidas cautelares diversas a la detención preventiva que actualmente se encuentra en aplicación. Entonces, tenemos que en inicio, efectivamente se parte de la existencia de un evento delictivo que es calificado por la legislación aplicable como grave, ya que el mismo se encuentra matizado en su concreción, por el empleo de medios violentos, específicamente en el caso particular, por el uso de lo que se describió como una pistola tipo escuadra, que materialmente usaba el sujeto con quien se indica, actuaba la adolescente, y con cuyo objeto, dicho sujeto amagó a los empleados del establecimiento, para enseguida apoderarse materialmente del dinero que se encontraba en

la caja de la citada negociación; todo ello mientras se indica, la adolescente realizaba su aporte vigilando la entrada del establecimiento, dando seguridad al sujeto que materialmente se apoderó del objeto material del hecho descrito. De lo anterior, estima el juzgador que ante la existencia del proceso a que actualmente se encuentra vinculada la adolescente como probable responsable, se suman aspectos inherentes a la sospecha, de que para el caso de concederle medidas cautelares diversas a la que se encuentra en aplicación (detención preventiva), la adolescente mencionada puede incumplir con sus obligaciones procesales, y por tanto, obstaculizar la buena marcha del proceso, esto debido a que según se estimó en el fallo que nos ocupa, no se cuenta con la existencia de un domicilio cierto en que habite la adolescente, aunado a que ésta no realiza actividades educativas ni laborales, lo cual concluye el natural, implica que no cuenta con actividades lícitas que generen la certeza de que, para el caso de asignar a ésta medidas cautelares diversas a la detención preventiva, permanecerá en el lugar del proceso, y por tanto, no obstaculizará el buen cauce del mismo. En esa temática, las razones del natural parten de (1) la magnitud del evento realizado y la potencial consecuencia que éste entraña; (2) la inexistencia de un domicilio cierto que permita su eventual localización y (3) carencia de actividades educativas y/o laborales que representen permanencia en esta demarcación territorial, todo lo que se dijo, engendra sospecha de que pueda incumplir con las obligaciones de comparecencia, y por tanto, obstaculice la buena marcha del proceso. Así las cosas, es necesario considerar que en inicio, como se establece en el fallo analizado, efectivamente se cuenta con una resolución que sujeta a formal proceso a la adolescente imputada, al considerarle probable responsable de la comisión de la conducta tipificada como delito de robo calificado, mismo evento que efectivamente es considerado como grave por la legislación especializada, sin embargo, debe considerarse que esto no

constituye por sí mismo un factor de anulación total a la posibilidad de procedencia de medidas cautelares diversas a la detención preventiva, ya que esta debe ser limitada conforme a los principios de legalidad, presunción de inocencia, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en todos los casos, conforme a la relevancia del interés que se tutela a las personas, respecto de su libertad personal, como parte de la esencia de toda sociedad democrática, donde la restricción de dicha libertad, debe operar de manera excepcional, esto es, ante la ausencia de diversas alternativas de menor impacto en el sujeto, ya que al respecto debe aplicarse como regla general la libertad del mismo, hasta en tanto no se determine su plena responsabilidad en el hecho que se le atribuye, es decir, deben agotarse conforme a los indicados principios de idoneidad y necesidad, las alternativas que permitan asegurar los fines comunes a todas las medidas cautelares, para en ese caso, ante la total ineficacia de dichas alternativas, optar por las que implican un mayor costo de impacto al sujeto, como ocurre con aquellas que representan la restricción de la libertad del sujeto en forma intensa, en específico en el caso particular, la detención preventiva, de tal suerte, la evaluación de los rangos de apreciación en torno a la proporcionalidad de la medida restrictiva de libertad, deberán reposar en circunstancias que expongan la eficacia de esta como única alternativa eficaz a los fines que entraña en cada caso, y de tal suerte, según ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que la ley permite aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción de esa medida cautelar requiere un juicio de proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay proporcionalidad, la medida será arbitraria..." *Caso López Álvarez vs Honduras*, sentencia 1 de febrero de 2006, párrafos 67 y 68. Lo resaltado no es de origen".

Así, los principios indicados, al ser materia de observación en torno a cualquier persona por su simple calidad de persona humana, implican que conforme a la maximización de derechos que opera en especialidad a los menores de edad, la naturaleza excepcional y limitada que se indica, impone una mayor carga de atención a sus circunstancias específicas, cuando estos “menores” se vean inmersos en una problemática con las leyes penales, esto precisamente en función del proceso evolutivo que por edad se encuentran cursando “menor de 18 años”, donde se les considera, precisamente por su limitada edad, y proceso de madurez física y mental, como sujetos que requieren protección y cuidados especiales, estos a cargo de la familia, la sociedad y el Estado” “Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de los Niños en relación al artículo 9 de dicho instrumento, así como por el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José Costa Rica”, esto sin que dicho proceso evolutivo implique la imposibilidad de asumir consecuencias de sus actos, dado el carácter de responsabilidad que conforma el esquema jurídico de adolescentes que entran en conflicto con las leyes penales, como se establece por las razones expuestas por el poder reformador constitucional en torno al artículo 18 y reforma del artículo 73, fracción XXI, al establecer el sistema de justicia penal para adolescentes, de tal suerte, dado que dicho sistema gira en torno a la existencia de hechos delictivos, la forma de regular la interacción entre el estado y los sujetos destinatarios de dicho sistema, es diverso al esquema tradicional penal para adultos, ya que se atiende en forma preponderante, la calidad y circunstancias de tales sujetos, quienes como menores de edad, imponen la observación de aquellos factores que tiendan a evitar en lo posible, los efectos negativos del rigor legal, dado el objetivo de reinserción familiar y social que se persigue con dicho esquema de justicia “párrafos cuarto a sexto del artículo 18 constitucional”. En esas condiciones, se considera que la simple existencia



de un hecho delictivo, aun siendo calificado como grave, no constituye por sí mismo un factor que imposibilite totalmente la oportunidad de aplicación de medidas cautelares diversas a la detención preventiva. Esto es así, ya que todas las formas de detención material, cuando el destinatario de éstas sea un adolescente “sujeto entre 12 años cumplidos y antes de cumplir 18 años de edad”, deben considerarse única y exclusivamente cuando no se cuente con alternativas diversas de menor efecto, esto es, cuando no se cuente con alternativas al internamiento, para lo cual, deberá en todo caso, tenerse en cuenta su edad y situación particular “artículo 40 apartado 2 inciso b), subinciso iii), y apartado 4 de la Convención sobre Derechos del Niño”, y para ello, es necesario considerar los propósitos y objetivos del sistema, lo cual deberá hacerse inclusive al nivel que nos encontramos en el caso materia de análisis “análisis de procedencia de medidas cautelares para afrontar el proceso”, ya que esto es aplicable en todas las fases de la administración de justicia, dado que debe priorizarse a través de mayor flexibilidad, compatible con el tipo y gravedad del delito, la personalidad, antecedentes del sujeto, y protección social, la evitación de la aplicación innecesaria de cualquier forma de detención, en función del principio de mínima intervención, donde cualquier medio de detención deberá operar siempre como último recurso, y cuando no se cuente con alguna alternativa de menor impacto restrictivo “de conformidad con los propósitos del sistema especializado según establece el ya mencionado artículo 18 constitucional, y en atención a los Principios 1.3, 1.5, 2.1 a 2.6 y 6.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas Privativas de Libertad [Reglas de Tokio]”. Así las cosas, al establecerse la existencia del hecho delictivo como base del vínculo que se establece para determinar el formal procesamiento de la adolescente, y la calificación de dicho evento como grave por la legislación aplicable, como se dijo en líneas previas, no constituye la anulación total en la posibilidad

de elección a medidas cautelares diversas a la detención preventiva, pues como se indicó anteriormente, dicha medida por su mayor trascendencia, y la alta probabilidad de generar efectos no deseados, atendiendo la calidad de la imputada como menor de edad, vinculada con autoridades judiciales por la probable comisión de un hecho delictivo, conlleva a que se pondere en función del principio de interés superior del niño, aplicable a la misma por la edad con que cuenta “17 años de edad”, como derecho fundamental, de entre los diversos intereses que se ven inmersos en las problemáticas de conflicto con leyes penales en que ésta se ve envuelta, en el entendido de que en todo caso, las autoridades se encuentran obligadas, cuando existan alternativas a las medidas de mayor restricción, a sobreponer el interés superior del adolescente, a cualquier consideración, esto es, que sobre cualquier finalidad procesal, o incluso sustantiva, deberá considerarse el efecto y beneficios que cada decisión conlleva hacia el menor sujeto al ámbito jurisdiccional, para solucionar las tensiones entre los derechos del niño y los intereses públicos, como es en el particular, la determinación expuesta en el fallo que se revisa, para que se aplique y cumpla una medida cautelar restrictiva (detención preventiva), donde debe imponerse en aplicación del estándar jurídico que proporciona el citado principio del interés superior del niño “Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC 17/2002”, desde la óptica de privilegiar los derechos del menor, siempre que se cuente con alternativas, a través de la mayor flexibilidad, sin perder de vista la justicia social y rehabilitación, cuando las peculiaridades del caso lo permitan “Observación Número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de fecha 2 de septiembre de 2004”. En esa tesitura, y partiendo de que la simple calificación de gravedad del hecho no entraña impedimento infranqueable para analizar la posibilidad de aplicar medidas de menor impacto que la detención preventiva, debe atenderse, en función de los actos ejecutados por la

adolescente en el desarrollo conductual, de cuyo análisis parte la determinación que se revisa. Así se advierte que si bien, el evento delictivo se concretó a través del amago que se hizo usando lo que se describió por los pacientes del evento como una pistola tipo escuadra, cierto es que dicho instrumento se empleó de forma directa, en todo momento, por el sujeto con quien actuaba la adolescente, esto es, considerando las supuestas características con que se considera, contaba el mencionado instrumento “que no se localizó ni recuperó”, la posibilidad de riesgos a la integridad de las personas, o de afectación a las cosas, se controló de forma directa por el sujeto adulto, con quien la menor se encontraba, en tanto los actos de ejecución que se arrogó en el complejo delictivo, concernieron al ingreso previo al establecimiento, y una vez que ingresó su acompañante “sujeto adulto que usaba la mencionada como pistola tipo escuadra”, se dirigió a la zona de ingreso de la negociación, en lo que se menciona implicaba proporcionar seguridad y vigilar en el desarrollo que materialmente ejercía el otro sujeto al interior del establecimiento, amagando a los empelados y apoderándose materialmente del dinero que se encontraba en la caja del mismo. En esa forma, los actos ejecutados por la adolescente, si bien, se suman a los que realizó el otro sujeto, es claro que el riesgo en que se apoya la consideración de peligro a la integridad y /o vida de las personas, se produjo en control directo del sujeto adulto, en tanto que la adolescente, conforme al rol que se le asigna en el evento, se colocó en un punto distante, como es la zona de ingreso al establecimiento, de ahí que no obstante que conociera la existencia de las condiciones objetivas que conformaban el medio idóneo de realización delictiva, los actos de riesgo correspondieron en su ejecución, a un sujeto diverso a ella, y a ésta únicamente compete, el conocimiento, y anticipación de las posibilidades de afectación a otros bienes, de los que en su momento no aportó dato alguno la representación social como parte de los aspectos queridos por dicha menor en la concepción, prepara-

ción y ejecución del desarrollo conductual que da cause a la tipificación que sustenta el proceso. Por tanto, conforme a los actos ejecutados por la adolescente en el mencionado despliegue, y no obstante conocer las condiciones objetivas que habrían de traducirse al medio eficaz de concreción delictiva “uso de una pistola tipo escuadra —con independencia de las características reales de la misma”, en relación al artículo 24 del Código Penal vigente en esta ciudad, no se cuenta en actuaciones dato alguno que implique el acogimiento de la materialización de una afectación diversa a la patrimonial que se dirigió contra la negociación indicada, a través de sus empleados. Así entonces, viendo que el hecho y calificación de gravedad del mismo no constituyen razón de la negativa a la procedencia de medidas cautelares diversas a la de carácter más restrictivo como es la detención preventiva, y dado que los actos específicamente ejecutados por la adolescente en el desarrollo conductual citado, no justifican la imposibilidad de procedencia en otras medidas diversas a la que se encuentra actualmente en aplicación, se hace obligada la revisión de los restantes aspectos que sustentan la posición asumida por el resolutor en el caso particular, y que para fines prácticos en el análisis que nos atañe, se traducen en la suspicacia de contar con el normal cauce del proceso por parte de la adolescente imputada, para el caso de concederle medidas cautelares diversas a la detención preventiva, debido a que se estima por el natural, existe riesgo de que la adolescente no acuda o comparezca normalmente a la celebración de los diversos actos procesales que se desarrollen en la substanciación del caso en que se ve inmersa, y por tanto, con ello se produzca la obstaculización al buen cauce del proceso. Para ello, se estima como razón de sustento en el fallo analizado: (1). Falta de precisión de un domicilio cierto de la adolescente, debido a imprecisiones en la ubicación del inmueble que se dice habita en compañía de su madre, hermanos y su hija, en la vivienda de su tía “quien también se dijo habita en ese sitio con sus hi-

jos” y (2). Falta de actividades educativas o laborales vigentes. Entonces, en cuanto al primer aspecto destacado por el juzgador (1), en que estima que al momento de establecer su domicilio la adolescente, se generaron imprecisiones que impiden tener por actualizada la existencia de un domicilio cierto para ésta. Tal consideración se sustenta en que la adolescente, a lo largo de las indagatorias y los diversos actos desarrollados ante el órgano jurisdiccional, hizo mención de diversos domicilios, de los cuales se precisó por el juzgador, dicha inconsistencia, concierne a la nomenclatura interior del domicilio señalado “departamento”, ya que indica, los datos de localización del inmueble “edificio”, son persistentes en cuanto a la identificación y ubicación exterior del mismo, esto es, se proporcionó el nombre de la calle en que el inmueble se localiza, así como el número económico con que éste se encuentra registrado, así como la colonia y delegación de ubicación del mismo, pero en la imprecisión del departamento específico, se destaca en el fallo materia de revisión, como un aspecto que se estima suficiente para generar suspicacia de la eventual localización de la adolescente, y con ello, se da inicio en perspectiva del juzgador, a la sospecha de riesgo a que ésta no comparezca en el desarrollo normal del proceso, y por ende, lo obstaculice. Estos aspectos de suspicacia, los concibe el juzgador en función de la falta de actividades educativas y laborales por parte de la adolescente imputada “marcado como número (2) en las líneas previas”, ya que se indicó que dicha adolescente imputada, no realizaba, previo a su detención, ninguna de estas actividades, inclusive se refirió que esta menor señaló que era “ama de casa”. En esos términos, y a fin de analizar tales motivos de sustento en el fallo que se revisa, se hace necesario considerar por una parte, los motivos de justificación que entrañan la procedencia o no, de las medidas cautelares que integraron el planteamiento en torno al cual se pronunció el juzgador; esto es, las providencias que conforme señala el natural, deberían generarle certeza de que

en el caso particular, la adolescente se someterá al proceso y no lo obstaculizará, o bien, que no podría cometer una conducta tipificada como delito... contra las víctimas o alguno de los testigos que deponen en su contra, o servidores públicos que intervienen en el proceso, o contra algún tercero. Así, los motivos de procedencia a las medidas cautelares que nos ocupan, contienen desde la perspectiva del natural, requerimientos que no se satisfacen en el caso particular de la menor ZAYRA, ya que como se muestra de las razones expresadas en el fallo materia de revisión, la imprecisión que considera el juez de origen, se encuentra en la ubicación del domicilio exacto de la menor, lo cual se dice, constituye un factor de riesgo a que esta se evada o incumpla con sus obligaciones de asistencia al normal desarrollo del proceso, y se agrega que ello se incrementa ante la ausencia de diversas actividades educativas o laborales, dado que dicha menor dijo dedicarse a labores del hogar, entre ellas el cuidado de sus hermanos y su menor hija. En esas condiciones, debe atenderse que el criterio de análisis que se hace obligado en el caso particular, reposa en el principio del interés superior del menor, esto en sus diversas dimensiones de apreciación, en lo particular, la relevancia que en cada caso se asigna a los elementos de convicción en que se apoya la determinación judicial, por lo cual, considerando en inicio, que la citada adolescente contaba al momento de los hechos con 17 años de edad, y actualmente se encuentra aun por debajo del límite necesario para alcanzar la mayoría de edad, se impone realizar un análisis de las condiciones especiales en que ésta se encuentra, por el proceso de evolución biológico señalado, y en base a la regla de atención que debe realizarse en función del principio antes mencionado, al analizar la eficacia de los elementos de convicción en que se apoyó el planteamiento de la defensa al instar la vía incidental, en esas condiciones, se aportaron a la tramitación indicada, dos cartas de recomendación, la primera de ellas suscrita por ANA, tía de la adolescente de mérito, y quien dijo

que dicha menor, es una persona honrada y confiable, que se dedica al cuidado de su hija y hermanos. En tanto en la segunda de las cartas mencionadas, suscrita por PRISCILIANO, se refirió por éste que la adolescente de mérito es su vecina, que la conoce desde hace 15 años y sabe que su familia es de buenas costumbres. En el mismo orden, en aras de acreditar que la adolescente cuenta con un domicilio fijo dentro del lugar en el que se lleva a cabo el proceso, se aportó a la tramitación incidental un estado de cuenta de XXX y otro de la XXX, ambos a favor de ANA, de los cuales se muestra que la prestación de los citados servicios, corresponden al domicilio que señaló como propio la mencionada ANA, y al cual se refirieron como el mismo en que habían (*sic*) la adolescente que nos ocupa, en compañía de su madre y hermanos, así como su menor hija 2 “ALEILANI”. Domicilio que es coincidente con el que refirió la adolescente de mérito al realizar su declaración inicial, y respecto de quien ANA dijo que era su sobrina. En torno a dichos elementos, se destacó por el juzgador que el domicilio que aparece en la credencial de elector de la mencionada en último lugar, no coincide con el proporcionado por la adolescente “y su madre”, ni con los documentos aportados “estados de cuenta”, y señala que difiere en cuanto al número interior del departamento que dijeron habitar, aspecto en el cual reposa la suspicacia del natural, en cuanto al domicilio en que pudiera localizarse a la menor. En este punto es necesario señalar que, si bien es cierto, se afirma la existencia de imprecisión, en cuanto al número del departamento en que habita ZAYRA, no debe perderse de vista que la ubicación del domicilio que ella proporcionó en su declaración inicial, así como el que se hace constar en los documentos que fueron aportados a la causa por la defensa “comprobantes de servicio de XXX y XXX”, son coincidentes. No obstante, estos tienen diferencia con los datos de localización de dicho inmueble, constantes en la credencial de elector de ANA. En éste punto, cabe señalar que dicha discrepancia o imprecisi-

sión, en que soporta su señalamiento el natural, corresponde únicamente al número del departamento, es decir, al número interior del lugar que se refiere como el que habita la menor con sus familiares, en tanto que los datos de localización del inmueble “edificio”, como son delegación, colonia, calle y número económico del edificio, en que se localiza el departamento específico, son persistentes, y en este sentido podemos afirmar, que contrario a la estimación efectuada en el fallo que se revisa, la adolescente sí tiene un domicilio fijo dentro del lugar en el que se está desarrollando su proceso, pues si bien se difiere en cuanto al número interior, es claro que los números de departamento a los que hicieron referencia se encuentran dentro del mismo complejo o edificio, lo que evidencia aún más la posibilidad de que la adolescente pueda ser ubicada en cualquiera de éstos, sumado a que el hecho de que no se hubiera aclarado dicha circunstancia, sin duda es un aspecto enteramente atribuible al órgano ministerial, pues en la celebración de la audiencia incidental, estando presentes las partes, tuvo la oportunidad de que éstas precisaran los datos que ahora le generan suspicacia, en la localización del departamento en que habita la adolescente, y sin embargo, no lo hizo, por lo tanto es claro que la deficiencia en dicho actuar no puede operar en perjuicio de los intereses de la mencionada menor, y menos aun constituir base de argumento a la representación social, cuando durante la obtención de dichos datos, contando con plena oportunidad reservó su consideración a fin de traducirla en argumento con que sustenta su oposición en la tramitación incidental, es decir, la imprecisión indicada, no obstante conocerse de forma directa por la representación social, no se procuró en el momento oportuno, como es la celebración de la audiencia incidental, donde se contó con la oportunidad que representaba la presencia de las partes, para aclarar el dato que genera la desconfianza en el órgano técnico. Asimismo, puede considerarse que la citada imprecisión, no implica la inexistencia de un domicilio cierto



en el inmueble señalado, es decir, aun con el citado aspecto de diferencia en el número interior del departamento, no se expone la razón por la que debe considerarse ese como un factor de impedimento en la localización de la menor, ni de la eventual oportunidad de ubicación de ésta. Es decir, que si bien, existe un aspecto que se tilda de imprecisión, concerniente únicamente al número interior del sitio en que se alude habita la adolescente con su madre, hermanos y tía, esta última quien le refiere como su domicilio, es claro que la suspicacia que establece el juzgador, parte de una asignación de relevancia a los elementos de convicción aportados, con cargo a los intereses de la adolescente, esto es, que ante la inconsistencia o imprecisión, por una parte, el órgano técnico no realiza acto alguno a fin de esclarecer este aspecto, y por el contrario, le resalta a fin de conformar argumento de oposición al planteamiento que dio origen a la vía incidental, dejando de lado la obligación estatal, que corresponde indudablemente a todas las autoridades, y se incrementa en el caso indicado, al tratarse de la naturaleza de buena fe de la institución. Por otra parte, y resultante necesaria de los aspectos mencionados por la inactividad y falta de precisión señalada en las líneas que preceden, en función del interés superior del niño, debe considerarse que los aspectos de imprecisión en que se basa la determinación que nos ocupa, debe en todo momento, ajustarse a los aspectos que se encuentran debidamente constatados, en tanto que aquellos que no lo estén, obligan a la autoridad al empleo del criterio orientador que contiene el principio antes indicado, para dirigir todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, a fin de concretar la mayor protección posible, dada su calidad de sujetos susceptibles de sufrir mayor vulnerabilidad, consecuentemente, la apreciación de los aspectos de imprecisión, se realizaron en el fallo analizado, de forma restrictiva, cuando en ellos subyace un aspecto que resulta de relevancia para el derecho de la libertad per-

sonal, por ende, la consideración en perjuicio de los intereses de la adolescente, asumiendo la existencia de imprecisiones, como factor suficiente para engendrar sospecha de inexistencia de un domicilio cierto, se traducen en la inobservancia del propio principio del interés superior del adolescente, en su dimensión de apreciación a los elementos convictivos, conforme al principio de *in dubio pro reo*, que en el caso particular, debió materializar la apreciación de los elementos, en la parte benéfica a la adolescente conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, estableciendo que sí se cuenta con un domicilio en esta demarcación territorial, en torno al cual fueron coincidentes tanto la mencionada menor, como la madre de ésta, y del cual, se indicó por la tía de la menor “ANA” que es su domicilio, y que efectivamente la adolescente y su familia habitan en ese lugar con ella. Y dado que la imprecisión en que se apoya la determinación que nos ocupa, corresponde al número interior de la vivienda, sin que en torno a los restantes datos de localización “delegación, colonia, calle, número exterior...” se haga mención alguna de discrepancia, inconsistencia o irregularidad, es claro que la perspectiva que se asumió al descartar la eficacia de dichos elementos, así como de los documentos concernientes a los comprobantes de prestación del servicio de XXX y otro de XXX “de XXX”, más aun cuando éstos son expedidos a favor de ANA, ya que ello en consideración diversa a la sostenida por el resolutor, constituye un principio de certeza, a establecer la posibilidad de localización de la adolescente, a partir de los propios datos aportados, sin perjuicio de que en función de mayor precisión, la mención de imprecisión del número interior del departamento en que habita la adolescente, y que se dijo, corresponde al domicilio de su tía ANA “con quien habita dicha menor y su familia”, puedan ser superados sin mayor complicación durante la propia secuela procesal, sin que se afecten los derechos de la menor. Otro de los elementos en

que el juzgador basó su determinación, es referente a la falta de actividades educativas o laborales por parte de la adolescente, lo que, desde su perspectiva, no genera aspectos de confiabilidad en cuanto a que permanezca en esta demarcación territorial, y comparezca al desarrollo del procedimiento. Al respecto es necesario indicar que si bien es cierto, la adolescente no cuenta con un proceso educativo vigente, en donde inclusive se precisó por ésta, que dicho desarrollo educativo se realizó únicamente hasta nivel de primaria de manera regular, y que había suspendido su formación educativa, debido a que decidió esperar a cumplir 15 años para entrar a la secundaria abierta; edad ésta en que se menciona, quedó embarazada por primera vez, por lo que optó por dedicarse al cuidado de su hija y hermanos, así como a las labores del hogar “datos tomados del contenido del diagnóstico inicial, al igual que los datos de diversidad de domicilios en que reposa la posición ministerial y en atención a que al instar la vía incidental se propuso por la defensa como prueba entre otras, la instrumental de actuaciones”, en este sentido es claro que la interrupción de su proceso escolar atendió a la decisión de la propia adolescente, para dedicarse a las labores del hogar y al cuidado de su hija y hermanos. De tal suerte, las estimaciones del juzgador inciden en que las actividades que señala ANA en la tramitación incidental, como las que tenía la adolescente “labores de la casa y cuidar a sus hermanos”, no constituyeron aspecto de consideración alguno en el fallo que se revisa, y en éste, se estimó que no se aportaron elementos contundentes y fehacientes, que acreditaran que la mencionada adolescente se encontraba trabajando, o que estuviera estudiando, es decir, según se concluye en el fallo revisado, no se acreditó que la adolescente imputada tuviera alguna actividad lícita (*sic*). Así, esa carencia de actividades educativas o laborales, al apreciarles en relación a los aspectos ya destacados del domicilio de la menor, constituyen en opinión del natural, ausencia de arraigo de dicha menor en ésta demar-

cación territorial, y por tanto, el riesgo de que la misma no acuda al normal desarrollo del proceso, y produzca por tanto, obstaculización al proceso. Sin embargo, en opinión diversa a la apreciación del juzgador, se considera que la supuesta ausencia de actividades lícitas, como se refiere en el fallo que se revisa, es una apreciación meramente subjetiva, donde se omite considerar la referencia a que dicha menor se dedica a las labores del hogar, así como al cuidado de su hija de aproximadamente XX meses de edad y XX hermanos “de XX, X, X y X años de edad”, y el aspecto de suspicacia en que se apoya su consideración, desconoce las actividades que en apoyo a las distribuciones del núcleo familiar se establecieron, donde se indicó que su mamá trabaja todo el día, y de lo cual se muestra que ésta asume el rol de proveedor económico, en tanto la adolescente asume el rol de dirección en labores de casa y cuidado de sus XX hermanos, todos menores de edad “XX, X, X y X años”, así como de su menor hija “de XX meses de edad”, por lo tanto, es claro que dicha adolescente sí cuenta con actividades, y desde luego estas son lícitas, como deben ser considerado las actividades realizadas en su domicilio, para los efectos del análisis que nos interesa. Esto debido a que si bien, las actividades que se dice, realiza la adolescente, no se ajusten a la realización de actividades educativas, o laborales remuneradas, en el caso particular, no conllevan por necesidad la inexistencia de actividades que muestren funcionalidad, debido a que las actividades que se indica, realiza, son de contribución al núcleo familiar, con independencia de la conformación de éste (monoparental); dado que la preservación de la familiar ha sido reconocida y estimada como grupo fundamental de la sociedad, y por sí mismo el medio natural de crecimiento y bienestar de todos sus miembros “Preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículo 3o. de la Convención sobre los Derechos del Niño”. Lo antes señalado incide en que la apreciación que realiza el juzgador, reposa en presunciones que se

producen de manera perjudicial a los intereses de la adolescente, en que a partir de aspectos imprecisos o ambiguos, se produce un efecto de anulación de los elementos aportados en la tramitación incidental para mostrar la existencia y localización del domicilio de la adolescente, así como para descartar la existencia de factor alguno, como el caso de las labores que se dijeron desarrolla en casa “entre ellas cuidado de varios menores”, cuando en función de la dimensión de valoración que implica el principio del interés superior del menor, en función del diverso mandato de favorabilidad *in dubio pro reo*, en que necesariamente, todo aspecto que como los señalados, se estimen imprecisos o ambiguos, deberán atenderse en la forma de mayor beneficio a los intereses de la adolescente, y no en contra de ésta, como se hace en el fallo analizado, donde la apreciación realizada, como se indica, parte de la supuesta inexistencia de actividades, que si bien, son generalmente consideradas como oportunidad de desarrollo personal, como se estiman las actividades en plano educativo o laboral, en ninguna manera carecen de funcionalidad las labores diversas que en lo particular, se indicó como las que realiza la menor, esto es, que si bien, es siempre deseable la inclusión de los menores en el desarrollo personal a través de actividades educativas y laborales, que pueden brindar apoyo en el crecimiento y potencialización de sus capacidades, es indudable que actividades concernientes al ámbito del hogar “quehaceres domésticos y cuidado de menores”, no constituye base sólida a la suspicacia que sustenta el natural, menos aun cuando ello se aproxima peligrosamente a la prevalencia de estereotipos ampliamente rechazados en el proceso evolutivo del reposicionamiento de dignificación de la persona, a través del pleno reconocimiento de igualdad “en términos de los artículos 4, inciso e), 6 inciso b), 7 inciso e) y 9 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém Do Para”, más aún tratándose además de un menor de edad en el

caso particular, y en atención al género de esta que, tradicionalmente, ha sido objeto de un mayor grado de vulnerabilidad por consideraciones en desigualdad que históricamente han vulnerado a dicho sector, la descalificación de las actividades que indicó la menor, se reducen a una consideración de “menor importancia” respecto de las actividades educativas o laborales remuneradas “Consideración que inclusive no es ajena a las disposiciones de justicia para adultos, en términos de los párrafos primero y segundo del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales”. En esa tesitura, la consideración producida en el fallo analizado, en la supuesta ambigüedad o imprecisión, por no aclararse la imprecisión en el número del departamento que habita la menor, se deja de reconocer que dicho aspecto, era subsanable, por una parte, con el simple cuestionamiento directo a la menor, a la madre o a la tía de ésta (ANA), quienes se dijo, cohabitan con ella en dicho inmueble, esto durante la oportunidad que representó la audiencia incidental. Además, esto no es limitante a que, con independencia de dicho aspecto de supuesta imprecisión, sea debidamente superado con posterioridad, sin realizar una consideración de total anulación a las oportunidades de apreciación en forma de mayor favorabilidad para la menor, en el caso particular. En cuanto a la ausencia de actividades educativas o laborales, se practicó igualmente una consideración de reducción a diversas formas de ocupación, por ser distintas a las que se consideraron en el fallo revisado como adecuadas, con lo cual inclusive se deja de dar atención a las propias consideraciones de la adolescente, esto es, se deja de lado que ésta es un sujeto de derecho, que cuenta a su favor con la oportunidad de intervenir en el procedimiento, al ser precisamente sus intereses los que se encuentran sujetos al ámbito jurisdiccional, lo cual torna esta oportunidad de participación en una obligación estatal que debe tutelarse como base de un verdadero Estado democrático de Derecho, de tal suerte, en las razones expresadas como base de la determina-

ción que nos ocupa, se contravienen los lineamientos de consideración del principio indicado en líneas previas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 4 y 18 de la Constitución, lo cual se traducen en el respeto a la dignidad y fomento al cabal ejercicio de los derechos de todo menor de edad, esto es, la consecución en el caso concreto, del pleno desarrollo de su persona y capacidad, como apoyo fundamental de la protección integral e interés superior de los adolescentes, por lo que considerando que dicho principio, se funda en la dignidad misma del ser humano, las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades “conforme al sentido contenido por el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y OC-17/2002 (28/agosto/2002, párrafos 56, 57 y 58)”; esto es, generar la verdadera oportunidad de que les sea posible desempeñar un papel constructivo y productivo en la sociedad, como elemento componente de un proyecto de vida consustancial a la existencia en el desarrollo de condiciones de vida digna, seguridad e integridad humana, que presuponga la oportunidad de elegir su propio destino. Ahora bien, en la misma línea, no deja de advertirse que según se indica en la causa, la menor ZAYRA, al momento de su detención, luego de ser valorada médicamente, se determinó que se encontraba cursando embarazo de varias semanas “aproximadamente trece semanas de gestación, conforme a la revisión realizada el X de XXX de XXXX (f. 259)”. A este aspecto, se suman las ya mencionadas actividades que se refiere realiza la menor en su núcleo familiar, específicamente el cuidado de sus XX hermanos e hija “XXX menores de edad”, en tanto la madre de dicha menor asume el rol de proveedor económico. De tal suerte, las circunstancias específicas en que se encontraba la adolescente al momento de producirse el hecho delictivo que se indica, realizó en compañía de otro sujeto adulto, en suma a la edad con

que contaba “XX años”, confluyen a estimarla en una posición de mayor vulnerabilidad “edad, género y gravidez, que se incrementa por encontrarse sujeta a una medida de restricción de libertad esta última conforme a las reglas (1), (2), (3) a (5), (17) y (22) contenidas en el instrumento denominado como “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, y del artículo 2 de la Ley de Atención Prioritaria para las personas con Discapacidad y en situación de Vulnerabilidad, de esta ciudad”, donde el análisis de la procedencia de medidas cautelares diversas a la detención preventiva que actualmente se encuentra en ejecución, debe realizarse de manera más estricta, partiendo de la propia consideración de que se trata de la última opción, que ésta debe ser excepcional y siempre de temporalidad limitada cuando no haya otra medida diversa menos grave por cual optar “la mayor brevedad posible”. Así, todo acto de restricción de la libertad que se practique en contra de un menor que se encuentra en conflicto con las leyes penales, debe realizarse optando preferentemente por aquellas medidas que representen menor efecto sobre éstos, de esa forma, además de los aspectos ya destacados en cuanto a las razones en que se basó el fallo analizado, debe considerarse que en el caso particular, las peculiaridades de la menor ZAYRA, implican atención a dos aspectos más; por una parte, su propio estado de gravidez que, como se dijo, le coloca en una posición que impone una consideración en la mayor flexibilidad posible, de aquellas circunstancias que reduzcan los efectos negativos en mayor medida, esto en la forma en que ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos “*Caso del Penal de Miguel Castro Castro vs Perú*, sentencia de 25 de noviembre de 2006, párrafo 330 y *Caso Goldman vs Uruguay*, sentencia de 24 de febrero de 2011, párrafo 97”, y cuyos lineamientos, al no pugnar con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por el Estado mexicano, permiten en armonización, su atención en el caso



particular, dado que el análisis del marco normativo, en su contexto al punto destacado, como es la mayor vulnerabilidad de la adolescente por sus circunstancias específicas “edad, género y embarazo al encontrarse privada de su libertad”, inciden en coincidencias destacables de imposición a las autoridades, de una mayor tutela, bajo el principio de análisis *pro persona*, observando un estándar mínimo que conlleve a un análisis más amplio o de menor restricción de las circunstancias del caso sometido a estudio, conforme al carácter preventivo de la jurisprudencia interamericana, con apego a transversalidad “Razones contenidas en la ejecutoria de la contradicción de tesis 293/2011”; en orientación a ello, se considera aplicable el siguiente criterio:

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio *pro persona* obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos

humanos. Décima Época. Registro: 2006225. Instancia: Jurisprudencia del Pleno. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Libro 5, abril de 2014, tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 21/2014 (10a.). Página: 204. Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. (Lo resaltado no es de origen.).

En esa atención que debe ejercerse sobre las circunstancias en que se encuentra en el caso particular la menor que nos ocupa, y no obstante que su estancia al interior de un centro de detención, en función de la tutela que en relación a su integridad y salud se encuentran regladas, y en operación, precisamente por su minoría de edad y embarazo que cursa, es claro que la conservación de su salud, como presupuesto del derecho a la vida, no se limita a los aspectos físicos, sino que en ello deben atenderse en su totalidad los aspectos que representen factor a esa preservación de salud, incluidos entonces aquellos de carácter psicológico, lo cual impone necesariamente la toma de medidas especiales, a partir del estado de gravidez que cursa dicha menor, dado el estado de privación de libertad que se aplica a la misma, por la imposición de la medida cautelar de detención preventiva durante el desarrollo de la secuela procesal, a fin de preservar la integridad de ésta “artículo 15.3 inciso a) del Protocolo de San Salvador”, y por otro, en relación al vínculo filial que existe entre ésta y su menor hija ALEILANI “de XX meses

de edad”, sobre quien ejercía cuidados como parte del rol auto asignado en su núcleo familiar, así como de sus cuatro hermanos, todos menores de edad, de donde resulta conforme a la “Teoría del apego”, por la relación esencial en el desarrollo personal que se conforma al interior de los vínculos filiales, entre la madre y sus hijos, desde los primeros meses de vida de éstos “entre los primeros 6 y 36 meses de vida”, en que se conforman las bases de estructuración de personalidad, que necesariamente redundaran en el carácter y comportamiento que determinarían sus posteriores relaciones personales “Tesis III.2o.C.52 C (10ª). Número de registro 2010939. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil Tercer Circuito”, por lo que es claro que se ve involucrado un derecho de forma compleja, esto es, en relación a la menor ZAYRA, quien al interrumpirse el desarrollo de sus actividades comunes de cuidado “principalmente respecto de su hija ALEILANI —y sus XX hermanos—”, y en razón del vínculo filial, trasciende en efectos a otro menor que cursa la etapa de especial relevancia “primeros meses de vida —así como los otros menores, hermanos de la adolescente que nos ocupa, todos menores de edad—”, situación que en función del interés superior del menor “el cual en el presente caso se engasta con el derecho fundamental de su menor hijo —y hermanos, al conformar el grupo familiar en que la menor imputada ejerce rol de dirección y cuidados—”, en relación a la excepcionalidad de toda medida restrictiva de libertad, visto en su dimensión fundamental, obliga a una mayor flexibilidad en la consideración de los aspectos que imperan en el caso particular, bajo perspectiva de transversalidad de los diversos dispositivos indicados, de ahí que en atención a la consideración que se efectuó en el fallo analizado, donde se realiza una valoración de elementos de convicción, sin mirar a la apreciación de los aspectos que representan mayor beneficio a favor de la adolescente, y en razón del propósito que las medidas cautelares implican, en forma dependiente de los objetivos del sistema de justicia

para adolescentes, como es la reinserción y reintegración familiar y social de los adolescentes, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades “artículo 18, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, mediante los mecanismos que permitan el desarrollo armonioso de la personalidad de todo menor, que directa o indirectamente se encuentre vinculado a la problemática de conflicto con leyes penales, y donde se ha enfatizado, la familia constituye el vínculo de toda apreciación que prioriza el desarrollo del adolescente, ya que el estado debe favorecer en la manera más amplia el desarrollo y fortaleza del núcleo familiar “Corte Interamericana de Derechos Humanos OC 17/2002”, esto constituye un dato que impone una revisión de mayor flexibilidad y transversalidad, sobre los rangos de valoración empleados, al descartar, por una parte, la eficacia de elementos convictivos, ante una aparente imprecisión de localización de la vivienda que se dice habita la adolescente, y por otro, al descalificar las actividades que en apoyo a la estructura de su grupo familiar realiza la adolescente, ya que no obstante sea deseable que ésta cuente con mayor diversidad de oportunidades, que coadyuven a la estructuración de su personalidad y desarrollo de potencialidades, es notorio que la imposición forzada de éstas, con afectación directa a la estructura y roles asignados en el entorno familiar, además de reducir el derecho a la autodeterminación y elaboración de proyecto de vida, trasciende de la propia adolescente ZAYRA, a la generación de riesgo a deterioros irreversibles, en la citada estructura familiar, y dado que la conformación, preservación y fortalecimiento de ésta es uno de los aspectos que guardan relevancia en los fines del sistema de justicia para adolescentes, es inconcuso que la apreciación de los elementos convictivos, debe ajustarse en cada caso, tanto a los principios que imperan en el esquema aplicable, como al propio contexto imperante en torno al adolescente vinculado con la autoridad jurisdiccional, en el que como ya se ha expresado, contrario

a la opinión patentizada en el fallo que se revisa, el propio embarazo que cursa la adolescente, en suma a la relación filial que ésta tiene con su menor hija de XX meses de edad aproximadamente, siendo quien ejerce labores de cuidado, tanto de ésta como de sus XX hermanos “todos menores de edad”, aporta expectativas de oportunidad a que dicha menor permanezca en ésta demarcación, ante la problemática que por sí mismo encontrará dicha menor en la evolución de su estado y necesidades de asistencia, aunado a que en ningún momento se ha mostrado desvinculación de dicha menor a su grupo familiar, por el contrario, se afirmó una estrecha relación en que ésta tiene asignado un rol que resulta fundamental a la conformación del mismo “cuidado de los menores en tanto la madre se encarga de las labores remuneradas a fin de proveer”, sin perder de vista que en el caso particular, esa perspectiva no puede desvincularse de los efectos que adicionalmente son susceptibles de engendrarse, atentos al principio de interés superior del niño, dadas las labores que desarrollaba la adolescente imputada, en relación a diversos menores de edad, quienes indirectamente se encuentran en riesgo de resentir afectación a su proceso evolutivo, como resultante de consideraciones restrictivas, existiendo alternativas de evitación, como es el caso de diversas medidas cautelares que favorezcan en mayor forma ese reforzamiento de estructura familiar. De tal suerte, es claro que la edad, el género y estado de gravidez de la menor, al encontrarse sujeta a un procedimiento restrictivo de libertad, como es la detención preventiva, le coloca en un estado de mayor vulnerabilidad, que impone a las autoridades la apreciación de todos los aspectos que puedan resultar relevantes “Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de los Niños en relación al artículo 9 de dicho instrumento, así como por el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José Costa Rica—”, en este sirve de orientación el siguiente criterio:

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad. Décima Época. Registro: 2008546. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Libro 15, febrero de 2015, tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. LXXXIII/2015 (10a.). Página: 1397. Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas

y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*. (lo resaltado no es de origen).

Consecuentemente, dado que el internamiento, aún con carácter preventivo o provisional, debe limitarse a circunstancias excepcionales, cuando no sea posible aplicar otra medida cautelar menos gravosa, según establecen los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Justicia para Adolescentes vigente en la Ciudad de México, en concordancia a los principios de interés superior del adolescente y mínima intervención plasmados expresamente por las fracciones I y V del artículo 10 de la citada legislación especializada, y no obstante que esto no implica que en todos los casos, la autoridad jurisdiccional deba conceder medidas diversas, cuando por la gravedad de la conducta atribuida y circunstancias específicas de cada caso y sujeto, proceda su procesamiento en internamiento, pero sí obliga a que para establecer la pertinencia de medidas cautelares menos gravosas diversas a la detención preventiva, se pondere en primera instancia, en análisis del rango de apreciación que a través de idoneidad y necesidad “test de proporcionalidad”, permitan valorativamente establecer su procedencia, esto conforme a los aspectos de análisis en que se consideren todos aquellos aspectos que impongan elección de los factores de menor restricción en lo relativo a los derechos que prioricen, sobre aquellos que son más restrictivos, como en este caso, la libertad personal de un adolescente, y el posible impacto que ello entrañe en función de los fines del propio sistema de justicia que les es aplicable, sin dejar de lado la obligación de respeto a diversos intereses, especialmente aquellos que como en nuestro caso en análisis, trascienden conforme al interés superior del menor, a diversos sujetos que necesariamente verán impactada su estructuración familiar, como es el caso de la menor hija de la imputada, así como de sus cuatro hermanos, dado que previo al evento que se le atribuye, ejercía actividades específicas de cuidado sobre éstos, asumiendo un rol de relevancia en la función y subsistencia del grupo familiar, lo cual incide en la

posibilidad de que la persistencia de la medida restrictiva que se encuentra en aplicación, pugne con los fines de fortalecimiento de dicho grupo familiar, y por tanto, en los fines del propio sistema, ante la importancia del núcleo familiar en correcto desarrollo de los menores. Esto es en conclusión, que para establecer la procedencia de medidas de restricción de libertad, como es la detención preventiva, se torna indispensable considerar la inexistencia de alternativas de menor impacto, a través de diversas medidas cautelares, siempre que se garantice el fin de éstas, de ahí que para que sea necesaria la aplicación de la detención preventiva, es imperioso que con razones de riesgo que se pretenden mitigar con éstas, se haga ineficaz cualquier alternativa diversa a la detención, para que ésta opere, pero en ello, como se indica en líneas anteriores, los propios hechos delictivos no son suficientes, y en atención a ello, al diluirse, en consideración del suscrito los restantes aspectos que estimó el natural, como base de su resolución "imprecisión de domicilio y carencia de actividades educativas y laborales", se estima que no se establecieron razones que justifiquen a través de la comprobación cierta, no meramente hipotética, de riesgo al buen cause del proceso, la imposibilidad de eficacia en medidas diversa a la detención preventiva, dado el mayor costo que ésta genera en perjuicio de la adolescente que nos ocupa, conforme se ha destacado en el cuerpo de la presente opinión que se expone a título de voto particular. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 10 fracciones I y V, 33, 34 y 36 de la Ley de Justicia para Adolescentes vigente, en opinión del suscrito, procede la revocación del fallo recurrido, a efecto de establecer la oportunidad de aplicación de medidas cautelares de menor severidad, diversas a la detención preventiva, y que conforme a lo dispuesto por la parte penúltima, párrafo segundo del artículo 33, de la legislación especializada en que se dispone que "... El juez podrá imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en esta ley y dictar las ordenes necesarias para garantizar su cumplimiento...", con arreglo a lo dispuesto por el artículo 427 del Código de Procedimientos Penales vigente en ésta ciudad, aplicado en forma supletoria, es posible considerar viabilidad en medidas diversas a la que se aplica, dado que se cuenta con diversas modalidades de ésta "garantía económica;



someterse a cuidado o vigilancia de una persona; presentaciones periódicas ante el juez de la causa; permanencia en el domicilio como mecanismo de detención...”, con que se aporte dicha oportunidad de menor gravedad, a fin de salvaguardar la expectativa de normalidad en el cauce del proceso.

De tal suerte, pese a la suspicacia del juzgador de origen, respecto a la seguridad de que la adolescente no generará riesgos al buen cauce de la secuela procesal, se estima por el suscrito que los aspectos en que se funda tal posición, se ven reducidos conforme a los señalamientos esbozados en la opinión que se emite en las líneas que preceden, y por tanto, puede concluirse que en términos de los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el fallo impugnado sí debería ser revocado. En mérito a lo expuesto, habiéndose realizado las consideraciones que anteceden, al no compartirse el criterio sustentado en la sentencia mayoritaria, se emite el presente voto particular para que sea agregado al toca con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 y 425 en su párrafo último, ambos dispositivos del Código de procedimientos penales vigente en ésta ciudad, aplicado supletoriamente en términos del numeral 13 de la Ley de Justicia para Adolescentes vigente en esta Ciudad de México.

Así emitió y firmó el presente voto particular el magistrado maestro en Derecho Eugenio Ramírez Ramírez, integrante de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de la Ciudad de México, en contra de los señalamientos contenidos en la resolución mayoritaria emitida por los magistrados licenciada Rosa Laura Sánchez Flores y licenciado Sadot Javier Andrade Martínez, ante la Secretaria de Acuerdos, licenciada Elizabeth Isela Ortiz Guillén, quien autoriza y da fe.



# PUBLICACIÓN ESPECIAL



**CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**  
**CASO V.R.P., V.P.C.\* Y OTROS VS. NICARAGUA**  
**SENTENCIA DE 8 DE MARZO DE 2018**

*(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)*

En el caso *V.R.P., V.P.C. y otros*, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”), integrada por los siguientes jueces<sup>\*\*</sup>: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente; Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Elizabeth Odio Benito, Jueza; Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y L. Patricio Pazmiño Freire, Juez; presentes además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento” o “Reglamento de la Corte”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

<sup>\*</sup> Desde la etapa de admisibilidad del presente caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió mantener en reserva el nombre de las presuntas víctimas, utilizándose las siglas “V.R.P.” y “V.P.C.” para referirse a las mismas. Asimismo, la Corte Interamericana decidió continuar con la referida reserva. De igual forma, se mantuvo en reserva los nombres de los demás familiares, por lo que se utilizarán las siglas “N.R.P.”, “H.J.R.P.” y “V.A.R.P.” para referirse a ellos.

<sup>\*\*</sup> Los Jueces Eduardo Vio Grossi y Roberto F. Caldas no participaron en la deliberación y firma de esta Sentencia por motivos de fuerza mayor, lo cual fue aceptado por el Pleno.

## INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

1. *El caso sometido a la Corte.* — El 25 de agosto de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso “V.R.P. y V.P.C.” contra la República de Nicaragua (en adelante “el Estado de Nicaragua”, “el Estado” o “Nicaragua”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la supuesta falta de respuesta estatal frente a la violación sexual cometida por un actor no estatal contra una niña, quien al momento de los hechos tenía ocho años de edad y afirmó que el responsable sería su padre, así como las alegadas afectaciones a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, vida privada y autonomía, a la igualdad y no discriminación y a la protección especial como niña, particularmente por el alegado incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia, en un plazo razonable y de manera acorde con una perspectiva de género y los deberes estatales reforzados derivados de la condición de niña de la víctima, toda vez que ésta habría sido gravemente revictimizada con un impacto severo en su integridad psíquica y en la de su madre y hermanos. Las presuntas víctimas en este caso son V.R.P. y V.P.C., así como N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P., de acuerdo a las consideraciones vertidas *infra* en el capítulo relativo a las consideraciones previas.

2. *Trámite ante la Comisión.* — El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

- a) *Petición.* — El 28 de octubre de 2002 la señora V.P.C. (en adelante “la peticionaria” o “presunta víctima”) presentó la petición inicial ante la Comisión, en la cual alegó la responsabilidad internacional de Nicaragua por las supuestas irregularidades

y situación de impunidad en el proceso penal seguido por el delito de violación sexual cometido en contra de la niña V.R.P. (en adelante “la presunta víctima”).

- b) *Informe de Admisibilidad*.— El 11 de febrero de 2009 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 3/09 en el que concluyó que la petición 4408-02 era admisible<sup>1</sup>.
- c) *Informe de Fondo*.— El 13 de abril de 2016 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 4/16, de conformidad con el artículo 50 de la Convención (en adelante también “el Informe de Fondo” o “el Informe No. 4/16”), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado.

a. *Conclusiones*.— La Comisión concluyó que el Estado era responsable por “la violación de los derechos establecidos en los artículos 5, 8, 11, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento; y del artículo 7.b) de la [Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o] Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las personas que se indican en cada una de las secciones del [...] informe”.

b. *Recomendaciones*.— En consecuencia, la Comisión hizo al Estado una serie de recomendaciones:

<sup>1</sup> En dicho informe, la Comisión decidió que la petición era admisible respecto de la presunta violación de los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 8.1, 11, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento; y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará respecto de V.R.P. Asimismo, la Comisión concluyó la admisibilidad respecto de la presunta violación de los artículos 5.1, 8 y 25 de la Convención en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en relación con V.P.C. Cfr. CIDH, Informe de Admisibilidad No. 3/09, Petición 4408-02. Caso V.R.P. y V.P.C. Vs. Nicaragua, 11 de febrero de 2009 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo XI, folios 4656 a 4669).

- i. [l]levar a cabo con la debida diligencia y en un plazo razonable, las investigaciones y procesos penales correspondientes, con el fin de individualizar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a la persona responsable de la violación sexual en perjuicio de V.R.P.[:]
- ii. [r]eparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el [...] informe tanto en el aspecto material como moral[:]
- iii. [b]rindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las [presuntas] víctimas del presente caso que así lo soliciten. Tomando en cuenta que las [presuntas] víctimas se encuentran fuera del país, esta recomendación puede ser cumplida mediante el otorgamiento de un monto económico que razonablemente permita costear la atención en salud requerida por las [presuntas] víctimas[:]
- iv. [d]isponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso[:]
- v. [d]esarrollar protocolos de investigación para que los casos de violación sexual y otras formas de violencia sexual en contra de mujeres, incluyendo niñas, sean debidamente investigados y juzgados de conformidad con los estándares establecidos en el [...] informe[:]
- vi. [f]ortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad frente a casos de violación sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres,



incluyendo niñas, a través de investigaciones criminales efectivas con perspectiva de género, garantizando así una adecuada sanción y reparación[;]

vii. [d]iseñar e implementar programas de capacitación permanentes para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, sobre estándares internacionales en materia de investigación de violación sexual y otras formas de violencia sexual en contra de mujeres, incluyendo niñas. Asimismo, se deberá capacitar al personal de salud, tanto médico como psicológico, que esté vinculado a dichas investigaciones, sobre los estándares internacionales en materia de trato a niños y niñas víctimas de violencia sexual[, y]

viii. [a]doptar políticas públicas y programas institucionales integrados destinados a enfrentar la violencia contra mujeres y niñas como forma de discriminación, así como a promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a la justicia.

c. *Notificación al Estado.* — El Informe No. 4/16 fue notificado al Estado mediante comunicación de 25 de mayo de 2016, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

d) *Informes sobre las recomendaciones de la Comisión.* — El Estado de Nicaragua no dio respuesta alguna al Informe de Fondo de la Comisión.

- e) *Sometimiento a la Corte.* — El 25 de agosto de 2016 la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo “ante la necesidad de obtención de justicia”<sup>2</sup>.

3. *Solicitudes de la Comisión Interamericana.* — Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por las mismas violaciones señaladas en su Informe de Fondo (*supra* párr. 2. c. a). Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado determinadas medidas de reparación, las cuales se detallan y analizan en el Capítulo IX de la presente Sentencia.

## II

### Procedimiento ante la Corte

4. *Designación de Defensores Públicos Interamericanos.* — En el escrito de presentación del caso, la Comisión indicó que actuó como peticionaria la señora V.P.C. Luego de una comunicación remitida por la Secretaría<sup>3</sup>, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte durante el examen preliminar del sometimiento del caso, el 4 y 10 de noviembre de 2016 las señoras V.P.C. y V.R.P. solicitaron la designación de un Defensor Interamericano. Luego de las respectivas comunicaciones con

2 La Comisión designó, como sus delegados ante la Corte, a la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão. Asimismo, designó, como asesoras legales, a la señora Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, a la señora Silvia Serrano Guzmán y al señor Erick Acuña Pereda, abogados de la Secretaría Ejecutiva.

3 Si bien por tratarse de una presunta víctima, la representación estaría debidamente acreditada en los términos del artículo 35.1.b del Reglamento de la Corte por la señora V.P.C., siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte se informó a las presuntas víctimas que el artículo 37 del Reglamento del Tribunal consagra la figura del Defensor Interamericano, según la cual, “[e]n casos de presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada, el Tribunal podrá designar un Defensor Interamericano de oficio que las represente durante la tramitación de caso”.

la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEP)<sup>4</sup>, el 22 de noviembre de 2016 el Coordinador General de dicha Asociación comunicó a la Corte que las señoras Fidencia Orozco García de Licardi (Guatemala) y Juana María Cruz Fernández (República Dominicana) habían sido designadas como defensoras públicas interamericanas para ejercer la representación legal de las presuntas víctimas en este caso (en adelante “las representantes”)<sup>5</sup>.

5. *Notificación a las representantes y al Estado.* — El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado por la Corte a las defensoras públicas interamericanas de las presuntas víctimas el 25 de noviembre de 2016 y al Estado nicaragüense el 24 de noviembre de 2016.

6. *Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.* — El 27 de enero de 2017 las representantes presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Las representantes coincidieron sustancialmente con los alegatos de la Comisión. Además de los derechos alegados por la Comisión, presentaron argumentos sobre la alegada violación de la libertad de conciencia y de religión (artículo 12.1), del derecho a la protección a la familia (artículo 17.1) y del derecho de circulación y de residencia (artículo 22.1). Adicionalmente, presentaron alegatos sobre otros artículos de la Convención de Belém do Pará, en particular los artículos 1, 2, 4.b) y 4.g), así como sobre los artículos 2.1, 3.1 y 2, 4, 16, 24.1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niños. Asimismo, las defensoras

4 Mediante comunicación de 10 de noviembre de 2016 se solicitó al Coordinador General de AIDEP, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo de Entendimiento entre la Corte y aquélla y siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, que designara, dentro del plazo de 10 días, al defensor o defensora que asumiría la representación legal en el caso e informara del lugar donde se le deben notificar las comunicaciones pertinentes.

5 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 (Defensor Interamericano) del Reglamento de la Corte, el cual prevé que “[e]n casos de presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada, el Tribunal podrá designar un Defensor Interamericano de oficio que las represente durante la tramitación de[l] caso”. Tal como se estableció en la exposición de motivos del Reglamento de la Corte, mediante la implementación de la figura del Defensor Interamericano “se garantiza que toda presunta víctima tenga un abogado que haga valer sus intereses ante la Corte y se evita que las razones económicas impidan contar con representación legal”.

interamericanas hicieron solicitudes respecto a la utilización del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana (en adelante el “Fondo de Asistencia de la Corte” o el “Fondo”). Finalmente, solicitaron a la Corte que ordenara al Estado la adopción de diversas medidas de reparación y el reintegro de determinadas costas y gastos<sup>6</sup>.

7. *Escrito de contestación*. — El 16 de mayo de 2017 el Estado<sup>7</sup> presentó ante la Corte su escrito de contestación al sometimiento e informe de fondo de la Comisión Interamericana y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes (en adelante “escrito de contestación”). En dicho escrito el Estado opuso tres excepciones preliminares y alegó ausencia de responsabilidad estatal por la presunta violación de los derechos alegados por la Comisión y por las representantes.

8. *Observaciones a las excepciones preliminares*. — Los días 5 y 6 de julio de 2017 la Comisión y las representantes presentaron, respectivamente, sus observaciones a las excepciones preliminares opuestas por el Estado. Las representantes se refirieron también a otros aspectos del escrito de contestación del Estado, lo cual no había sido solicitado. Además, las representantes impugnaron determinadas pruebas ofrecidas por el Estado.

9. *Audiencia Pública* — Mediante Resolución de 21 de septiembre de 2017<sup>8</sup> el Presidente convocó a las partes y a la Comisión Interamericana a una audiencia pública para recibir sus alegatos y observaciones finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo,

6 El Estado objetó, mediante escritos de 7 y 15 de marzo de 2017, el plazo de la recepción de los anexos al escrito de solicitudes y argumentos. El 17 de marzo de 2017 se indicó que la recepción de los anexos se dio en el plazo indicado en el Reglamento y que los anexos recibidos con posterioridad corresponden a la subsanación de irregularidades encontradas en el examen preliminar, en virtud del cual se otorgó un plazo para corregir estos errores. Dicho plazo no constituye un plazo adicional fuera del Reglamento ni implica una nueva oportunidad para que las partes o la Comisión envíen documentos o prueba nueva y distinta a la ya sometida, sino que consiste en un pedido de subsanación que permitiría contar con el material probatorio completo en el expediente ante la Corte.

7 El Estado designó como Agentes al señor César Augusto Guevara Rodríguez, Miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Dirección Superior de la Procuraduría General de la República, y a la señora María Elsa Frixione Ocón, Jefa de la Unidad de Asuntos Penales Internacionales, Derechos Humanos y Humanitarios de la Procuraduría General de la República.

8 Cfr. *Caso V.R.P. y V.P.C. Vs. Nicaragua*. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de 21 de septiembre de 2017. Disponible en: [http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/vrp\\_21\\_09\\_17.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/vrp_21_09_17.pdf)

reparaciones y costas, así como para recibir las declaraciones de dos presuntas víctimas, de un perito propuesto por las representantes y de un perito ofrecido por la Comisión. La audiencia pública fue celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017, durante el 58° Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de Panamá, República de Panamá<sup>9</sup>. Antes de iniciar la audiencia pública del caso, se recibió la declaración de V.R.P. en privado, con la sola intervención de las partes del caso, de la Comisión Interamericana y la presencia del personal de la Secretaría indispensable para realizar dicha diligencia. Una vez concluida dicha declaración y el interrogatorio de las partes, se prosiguió con el desarrollo de la audiencia de forma pública, en la cual se recibió la declaración de V.P.C. y de los peritos Enrique Oscar Stola y Miguel Cillero Bruñol. Asimismo, la Corte requirió a las partes que presentaran determinada información y documentación. Las declaraciones solicitadas ante fedatario público fueron recibidas el 10 de octubre de 2017.

10. *Amici curiae*. — Se recibieron escritos en calidad de *amicus curiae* por parte de (1) Muhammad Muzahidul Islam los días 16 y 20 de octubre de 2017<sup>10</sup>, y (2) la Fundación ProBono Colombia y Gómez-Pinzón Abogados<sup>11</sup> el 23 de octubre de 2017<sup>12</sup>.

9 A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: la Segunda Vice-Presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y las abogadas de la Secretaría Ejecutiva, Silvia Serrano Guzmán y Selene Soto Rodríguez; b) por las representantes de las presuntas víctimas: las señoras Fidencia Orozco García Licardi y Juana María Cruz Fernández, defensoras interamericanas, y c) por el Estado de Nicaragua: los agentes designados César Augusto Guevara Rodríguez y María Elsa Frixione Ocón.

10 El escrito presenta un análisis sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la falta de cumplimiento de sus obligaciones de garantía de los derechos a la integridad personal, dignidad, privacidad y autonomía, igualdad y el principio de no discriminación, tomando en consideración la protección especial de la niña y la falta de debida diligencia de la investigación en un plazo razonable.

11 El escrito fue firmado por Ana María Arboleda, Anamaría Sánchez Quintero, David Cujar Bermúdez, María Valentina Díaz Gómez y Diego Alejandro Moreno Baquero. El escrito presenta un estudio comparado sobre los elementos comunes que han sido utilizados en los ordenamientos jurídicos internos de varios Estados parte de la Convención Americana, en las rutas de atención a las niñas y niños víctimas de violencia sexual, las cuales han sido creadas e implementadas con el apoyo de UNICEF, en aras de orientar a la Corte sobre los estándares consuetudinarios que se han aplicado en la protección de los derechos de esta población vulnerable. Además, se hizo referencia al contexto de violencia sexual en América Latina y el Caribe.

12 En sus alegatos finales, el Estado presentó una serie de observaciones sobre los *amici curiae* y solicitó que no fueran tomados en cuenta, en tanto serían opiniones parcializadas y no se le habrían transmitido

11. *Alegatos y observaciones finales escritos.* — El 20 de noviembre de 2017 las representantes y el Estado remitieron sus respectivos alegatos finales escritos, y la Comisión presentó sus observaciones finales escritas.

12. *Prueba para mejor resolver.* — El 27 de noviembre de 2017 el Presidente de la Corte solicitó al Estado prueba para mejor resolver. Nicaragua presentó dicha documentación el 5 de diciembre de 2017. El 15 de diciembre de 2017 el Estado remitió algunos folios faltantes y realizó aclaraciones respecto de otros anexos enviados en virtud de la prueba para mejor resolver solicitada.

13. *Observaciones de las representantes y la Comisión.* — El Presidente otorgó un plazo a las representantes y a la Comisión para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes a la prueba para mejor resolver remitida por el Estado. El 21 de diciembre de 2017 las representantes remitieron sus observaciones sobre la documentación para mejor resolver presentada por el Estado y la Comisión señaló que no tenía observaciones que formular<sup>13</sup>.

con suficiente antelación. La Corte hace notar que, de acuerdo con el artículo 2.3 del Reglamento, quien presenta un *amicus curiae* es una persona o institución “ajena al litigio y proceso que se sigue en la Corte”, es decir, no es una parte procesal, a efectos de ofrecer “razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o formular consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso”. Puesto que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre la corrección o no de tales escritos o sobre solicitudes o peticiones contenidas en los mismos, las observaciones del Estado no afectan la admisibilidad de los *amici curiae*, sin perjuicio de la eventual relevancia de tales observaciones al valorar la información aportada en los mismos. Cfr. *Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párr. 15, y *Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334, nota al pie 11.

13 El 4 de enero de 2018 el Estado manifestó su disconformidad con “las decisiones asumidas en la notas [de Secretaría]”, referidas a la prueba para mejor resolver requerida al Estado, así como a la solicitud de observaciones tanto a la Comisión como a las representantes respecto de dicha prueba. El 10 de enero de 2018 se informó al Estado, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, que la Corte no había abierto una nueva etapa de contradictorio, sino que de acuerdo a su propio Reglamento consideró pertinente solicitar prueba para mejor resolver al Estado, al encontrarse el mismo en condiciones de aportarla. El requerimiento de dicha prueba al Estado no generó un desequilibrio procesal, sino que por el contrario, permitió al Tribunal contar con el mayor acervo probatorio posible para adoptar una decisión y, en todo caso, brindó la oportunidad al Estado de presentar prueba adicional para dar sustento a sus alegatos finales, ya que el Estado “no aportó prueba de soporte”. El Estado, al remitir dicha documentación, tuvo la oportunidad de referirse a la misma y presentar las aclaraciones y explicaciones pertinentes, tal como efectivamente lo hizo mediante sus comunicaciones de fecha 5 y 15 de diciembre de 2017. La solicitud

14. *Erogaciones en aplicación del Fondo de Asistencia.* — El 15 de diciembre de 2017 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, remitió información al Estado sobre las erogaciones efectuadas en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas en el presente caso y, según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del referido Fondo, le otorgó un plazo para presentar las observaciones que estimara pertinentes. El Estado presentó sus observaciones el 21 de diciembre de 2017.

15. *Deliberación del presente caso.* — La Corte inició la deliberación de la presente Sentencia el 8 de marzo de 2018.

### III

#### Competencia

16. La Corte Interamericana es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, en razón de que Nicaragua es Estado Parte de dicho instrumento desde el 25 de septiembre de 1979, y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 12 de febrero de 1991. Además, Nicaragua depositó el instrumento de ratificación de la Convención de Belém do Pará el 12 de diciembre de 1995.

### IV

#### Excepciones Preliminares

17. El Estado presentó las siguientes excepciones preliminares en su escrito de contestación: la alegada falta de agotamiento de los recursos internos; la alegada falta de competencia *ratione temporis* de la Comisión y de la Corte Interamericana, y la alegada falta de competencia *ratione*

de observaciones fue requerida exclusivamente respecto de la prueba para mejor resolver enviada por el Estado, es decir, constituyó una oportunidad para controvertir, objetar o poner en duda la autenticidad de los documentos remitidos. Por consiguiente, no podía ser calificada como una nueva oportunidad procesal para formular alegatos de fondo en el presente caso. Cualquier argumento presentado por las representantes que exceda lo solicitado no será tenido en cuenta por el Tribunal.

*materiae* de la Corte en relación con la presunta violación de artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Corte resolverá las excepciones en ese mismo orden.

*A. Excepción sobre la alegada falta de agotamiento de los recursos internos*

*A.1 Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y las representantes*

18. El *Estado* alegó la falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna con base en el artículo 46.1.a) de la Convención. Sostuvo que la Comisión debió verificar si se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna, ya que el proceso penal no se había agotado. Por tal motivo, el Estado argumentó que la Comisión, al darle el trámite inicial a la petición, estableció un proceso paralelo al proceso jurisdiccional interno, toda vez que éste no había concluido ni existía retardo injustificado de acuerdo a la práctica procesal de la época. El Estado indicó que, en el Informe de Admisibilidad, la Comisión “argumentó la admisión de la petición [...] alegando que existía un retardo injustificado [...] en amplia transgresión a su Reglamento y a la Convención”. Al respecto, el Estado negó que haya existido retardo injustificado en el presente caso ya que el proceso inició el 20 de noviembre de 2001 y la primera instancia concluyó el 13 de abril de 2002, “un plazo razonable en el contexto de la realidad procesal de la época”. Asimismo, señaló que los recursos internos se agotaron con la Sentencia n° 45 de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Norte, emitida el 24 de octubre de 2007. En razón de lo expuesto, el Estado solicitó a la Corte que “se pronunci[ara] sobre la obligación de la Comisión de valorar en cada caso, la eficacia de los recursos internos incluidos y componentes de un ordenamiento jurídico estructurado, sistémico e integral con finalidades y ámbitos de protección específicos pero complementarios”.



19. La *Comisión* confirmó que el Estado argumentó la falta de agotamiento de los recursos internos en el momento procesal oportuno. Reiteró que “en casos en los cuales la situación de los recursos internos se modifica a lo largo de[l] trámite de admisibilidad, el análisis del cumplimiento del requisito de agotamiento de los recursos internos se efectúa con base en la situación vigente al momento del informe de admisibilidad y no con base en la situación vigente al momento de la interposición de la petición o de su apertura a trámite”. La Comisión aclaró que, “si bien en la etapa de fondo tomó conocimiento de que el proceso penal había culminado el 24 de octubre de 2007, [...] no contaba con esta información al momento de emitir su informe de admisibilidad”. Indicó que el último escrito del Estado en la etapa de admisibilidad es anterior a esa fecha. En sus observaciones finales, la Comisión precisó que, en su primera contestación, el Estado habría señalado que la peticionaria había agotado los recursos internos, pero posteriormente informó que no se habían agotado dado que se encontraba pendiente el proceso sobre la nulidad y que el retardo se debía a múltiples diligencias promovidas por ambas partes. Es por ello que, a la luz de la información disponible, la Comisión entendió que el proceso continuaba en curso y dio aplicación a la excepción de retardo injustificado prevista en el artículo 46.2 c) de la Convención Americana. Manifestó que, “de haber conocido oportunamente que el proceso penal había finalizado, en todo caso la petición hubiese resultado admisible, en tanto los recursos internos se encontraban efectivamente agotados”. En virtud de lo indicado, la Comisión solicitó a la Corte que desechara esta excepción preliminar interpuesta por Nicaragua.

20. Las *representantes* sostuvieron que, al momento de los hechos, no existía un debido proceso legal que permitiera la protección efectiva de los derechos que fueron vulnerados. Señalaron que la única vía recursiva posible para la parte acusadora era intentar un incidente de nuli-

dad, el cual se trataba de una vía extraordinaria dispuesta para casos específicos. Por lo tanto, según las representantes, operó la excepción prevista en el artículo 46.2.a) de la Convención, al no existir en la legislación interna del Estado, cuando el caso fuera conocido por jurados, un debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan vulnerados. En sus alegatos finales, agregaron que el Estado interpuso esta excepción de manera genérica, sin especificar cuáles eran los recursos que no se habían agotado y mucho menos si los mismos eran idóneos y efectivos.

## *A.2 Consideraciones de la Corte*

21. El artículo 46.1.a) de la Convención dispone que para determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la Comisión, de conformidad con los artículos 44 o 45 de la Convención, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. La Corte recuerda que la regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios. Lo anterior significa que no sólo deben existir formalmente esos recursos, sino que también deben ser adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención<sup>14</sup>.

22. Asimismo, la Corte ha sostenido en su jurisprudencia constante que una objeción al ejercicio de su jurisdicción basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el

<sup>14</sup> Cfr. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo*. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 61 y 63, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 23 de noviembre 2017. Serie C No. 344, párrs. 27 y 32.

momento procesal oportuno, esto es, durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión. Luego de ese momento, se entiende que opera el principio de preclusión procesal<sup>15</sup>.

23. Por lo tanto, durante la etapa de admisibilidad del caso ante la Comisión, el Estado debe precisar claramente los recursos que, según su criterio, aún no han sido agotados ante la necesidad de salvaguardar el principio de igualdad procesal entre las partes que debe regir todo el procedimiento ante el sistema interamericano<sup>16</sup>. Como la Corte ha establecido de manera reiterada, no es tarea de este Tribunal, ni de la Comisión, identificar *ex officio* cuáles son los recursos internos pendientes de agotamiento, en razón de que no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado<sup>17</sup>.

24. En efecto, la Corte recuerda que lo primero que procede determinar, en relación con una excepción preliminar de esta naturaleza, es si la objeción fue opuesta en el momento procesal oportuno. Al respecto, la Comisión señaló que el Estado cuestionó de manera oportuna la falta de agotamiento de los recursos internos (*supra* párr. 19), y las representantes no han controvertido este aspecto. La Corte advierte que el Estado efectivamente alegó la falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna durante la etapa de admisibilidad, específicamente en el *addendum* a su

15 Cfr. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares*. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 88; *Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 47, y *Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 331, párr. 21.

16 Cfr. *Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 28, y *Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333, párr. 78.

17 Cfr. *Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 23, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú, supra*, párrs. 27 y 33.

respuesta inicial<sup>18</sup> recibido el 16 de febrero de 2005<sup>19</sup>, y afirmó que en dicho momento los mismos aún no habían sido agotados en su totalidad ya que se encontraba pendiente de resolución la solicitud de nulidad del veredicto del Tribunal de Jurados que absolvió al acusado<sup>20</sup>. Por lo tanto, la excepción fue presentada en la debida oportunidad procesal, tal como se desprende del Informe de Admisibilidad<sup>21</sup>.

25. Ahora bien, la Corte destaca que, de conformidad con lo establecido en su jurisprudencia, la Comisión debía analizar el agotamiento de los recursos internos para el momento en que se decidió la admisibilidad de la petición y no para el momento de la presentación de la misma<sup>22</sup>. Además, era preciso que contara con la información actualizada, necesaria y suficiente para llevar a cabo ese examen de admisibilidad, la cual debió ser remitida por las partes en el procedimiento.

26. Sobre el particular, la Corte nota que, al 11 de febrero de 2009, fecha en que la Comisión se pronunció sobre la admisibilidad, los datos obrantes en el expediente de trámite ante ese órgano daban cuenta de que los recursos de apelación interpuestos el 25 de agosto de 2005 por el fiscal auxiliar del Ministerio Público y por la representación legal de la señora V.P.C. (*infra* párr. 120) se encontraban pendientes de resolución y, en efecto, habían transcurrido más de seis años desde el acaecimiento de los hechos sin que el Estado hubiera emitido un pronunciamiento definitivo. No consta en el

18 El 11 de febrero de 2005 el Estado remitió su respuesta inicial guardando silencio sobre la cuestión del agotamiento de los recursos internos. Cfr. Informe MRE/DM-DGOI/196/02/05 de 9 de febrero de 2005, recibido el 11 de febrero de 2005 en la Comisión Interamericana (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VIII, folios 3229 a 3234).

19 Cfr. *Addendum* al Informe MRE/DM-DGOI/196/02/05 de 14 de febrero de 2005, recibido el 16 de febrero de 2005 en la Comisión Interamericana (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VIII, folios 3237 a 3242).

20 Cfr. *Addendum* al Informe MRE/DM-DGOI/196/02/05 de 14 de febrero de 2005, recibido el 16 de febrero de 2005 en la Comisión Interamericana (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VIII, folios 3237 a 3242).

21 Cfr. CIDH, Informe de Admisibilidad No. 3/09, Petición 4408-02. Caso V.R.P. y V.P.C. Vs. Nicaragua, 11 de febrero de 2009, párrs. 42 y 43 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo XI, folios 4657 a 4669).

22 Cfr. *Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 25, y *Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil, supra*, párr. 85.

expediente de trámite ante la Comisión que ésta hubiere tenido noticia del dictado de la Sentencia No. 45 de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte, fechada el 24 de octubre de 2007.

27. De conformidad con lo anterior, y en sintonía con lo establecido previamente por esta Corte, los avances del procedimiento en la jurisdicción interna únicamente podrían haber sido tomados en cuenta por la Comisión en la medida en que las partes le hubiesen brindado esa información en el marco del proceso<sup>23</sup>. En consecuencia, el estudio de la admisibilidad realizado por la Comisión en el año 2009 se ajustó a la información que tenía disponible en aquel momento, no siéndole exigible otro análisis que no pudo ser contemplado en razón de que carecía de información actualizada.

28. Por otra parte, la Corte nota que, incluso en el supuesto de haber contado con información actualizada al año 2009 sobre el proceso interno, los recursos se encontraban agotados, por cuanto el propio Estado aseveró que aquél concluyó con la emisión de la Sentencia No. 45 de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Norte dictada el 24 de octubre de 2007. Por consiguiente, la Corte desestima la excepción preliminar opuesta por el Estado.

29. Finalmente, la Corte advierte que no procederá al análisis de los alegatos de las representantes en cuanto a que habría operado la excepción al agotamiento de los recursos internos al no existir supuestamente un debido proceso legal, ya que no corresponde a la Corte realizar un nuevo estudio de admisibilidad.

## *B. Excepción sobre la alegada falta de competencia ratione temporis de la Comisión y de la Corte Interamericana*

### *B.1 Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y las representantes*

<sup>23</sup> Cfr., *mutatis mutandi*, Caso Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de febrero de 2016. Serie C No. 310, párr. 41.

30. El *Estado* alegó la incompetencia de la Comisión, con base en el artículo 45 de la Convención, en razón de que los hechos del caso habrían ocurrido de manera previa a su reconocimiento de la competencia de la Comisión. El Estado afirmó que el 6 de febrero de 2006 adicionó un tercer párrafo a la declaración N° 49 de 15 de enero de 1991, en el que declara el reconocimiento de la competencia de la Comisión solamente para hechos posteriores o hechos cuyos principios de ejecución sean posteriores a la fecha de depósito de su declaración. Sostuvo que la Comisión habría vulnerado “normas imperativas de competencia [...], contraviniendo la Convención [...], de lo que se deriva una nulidad absoluta que determina la incompetencia de la Comisión para conocer de estos hechos, lo que no admite convalidación alguna y cuyo efecto es la inadmisibilidad de la demanda”. Consecuentemente, entendió que “la Corte [...] no debió admitir la demanda presentada por la Comisión a efectos de asegurar la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional [...], ya que en el presente caso ha[bría] violaciones manifiestas a las reglas procedimentales establecidas en la Convención”. De acuerdo a lo expuesto, el Estado solicitó a la Corte que declarara “fundada la excepción planteada, improcedente la demanda en cuestión y disp[usiera] el archivo definitivo del presente caso”.

31. La *Comisión* señaló que la defensa del Estado se basa en la pretensión de aplicar una reserva formulada por Nicaragua en el año 2006, en relación con el artículo 45 de la Convención Americana que regula lo relativo a las comunicaciones entre Estados o peticiones interestatales, “lo que no guarda relación alguna con el presente caso”. Por lo tanto, solicitó a la Corte que desechara esta excepción preliminar.

32. Las *representantes* sostuvieron que la Corte es competente para conocer del presente caso porque Nicaragua es Estado Parte de la Convención desde el 25 de septiembre de 1979, y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 12 de febrero de 1991. Asimismo, afirmaron

que el único supuesto para el que se requiere el reconocimiento expreso de la competencia de la Comisión es el previsto en el artículo 45 de la Convención, pero el mismo hace referencia exclusiva a recibir y examinar comunicaciones entre Estados, no entre particulares y Estado. De ese modo, las representantes concluyeron que no es aplicable al presente caso el párrafo que adicionó el Estado en febrero de 2006, toda vez que no se trata de una petición interestatal. Por consiguiente, solicitaron a la Corte que desestimara la excepción de incompetencia planteada por Nicaragua.

### *B.2 Consideraciones de la Corte*

33. Considerando los argumentos estatales que sustentan la excepción preliminar bajo análisis, la Corte recuerda que la función contenciosa puede suscitarse con motivo de dos procedimientos diferenciados de quejas o comunicaciones ante la Comisión, cada uno de los cuales se rige por sus regulaciones específicas. Uno de ellos es en el marco del sistema de peticiones individuales, establecido por el artículo 44 de la Convención, conforme al cual los Estados se constituyen en la parte demandada respecto a casos contenciosos originados en peticiones individuales. En el otro procedimiento, dispuesto en el artículo 45 de dicho tratado, los Estados se presentan como partes procesales opuestas, es decir, como demandado y demandante en casos contenciosos originados por comunicaciones interestatales. Una vez concluido dicho trámite, las mismas pueden derivarse en el sometimiento de un caso ante la Corte, siempre que se reúnan los demás requisitos para que ella pueda ejercer su competencia contenciosa<sup>24</sup>.

34. Con relación a las peticiones individuales, según lo indicado por el artículo 44 de la Convención, el artículo 19 del Estatuto de la Comi-

<sup>24</sup> Cfr. Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20, párr. 32.

sión y el artículo 23 de su Reglamento, la competencia de la Comisión queda habilitada de manera automática para conocer de alegadas violaciones a la Convención Americana, siempre que el Estado demandado haya ratificado dicho instrumento. En cambio, respecto de las comunicaciones entre Estados, es menester que el Estado demandado, además de haber ratificado la Convención, haya declarado expresamente su voluntad de someterse a la competencia de la Comisión, con arreglo a lo establecido en el artículo 45<sup>25</sup>.

35. Ahora bien, la Corte nota que la declaración de reconocimiento de competencia señalada por el Estado de Nicaragua del año 2006 se refiere al artículo 45 que, como ya se expresó, rige la competencia de la Comisión para conocer de demandas interestatales. Por consiguiente, considerando que el presente caso no se inscribe en la hipótesis de una comunicación interestatal, sino que se trata de una petición individual, no es aplicable lo dispuesto en el artículo 45.

36. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar la excepción opuesta.

*C. Excepción sobre la alegada falta de competencia ratione materiae de la Corte en relación con la presunta violación de artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño*

*C.1 Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y las representantes*

37. El *Estado* interpuso una excepción preliminar alegando la incompetencia *ratione materiae* de la Corte en razón de la pretensión de las representantes de someter al conocimiento y valoración de este Tribu-

25 En virtud del artículo 45 se establece que: "1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención".



nal los artículos 2.1, 3.1 y 2, 4, 16, 24.1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, con relación a la presunta víctima V.R.P. Al respecto, sostuvo que, de acuerdo con el artículo 62 de la Convención, las controversias sometidas al conocimiento de la Corte sólo pueden referirse a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención Americana y sus dos Protocolos complementarios. Asimismo, el Estado indicó que el artículo 1 del Estatuto de la Corte define claramente que tiene como objetivo la aplicación e interpretación de la Convención Americana, por lo que otros tratados internacionales ajenos al sistema interamericano estarían fuera de la competencia de la Corte. En consecuencia, según el Estado, la Corte no tendría competencia para decidir sobre el cumplimiento de obligaciones que surjan de instrumentos que no derivan del sistema interamericano, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual dispone del Comité de los Derechos del Niño como órgano especializado propio. Por lo expuesto, el Estado solicitó a la Corte que excluya en su valoración la aplicación de los artículos 2.1, 3.1 y 2, 4, 16, 24.1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

38. La *Comisión* observó que la presente excepción se relaciona con los argumentos planteados por las representantes en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, quienes están facultadas para presentar alegatos de derecho adicionales ante el Tribunal. Sin perjuicio de ello, la Comisión destacó que en su Informe No. 4/16 no estableció violaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que utilizó dicho instrumento como parte del *corpus juris* internacional en la materia, a fin de dar alcance a las disposiciones de la Convención Americana, lo que resulta consistente con la práctica tanto de la Comisión como de la Corte.

39. Las *representantes* adujeron que, siendo la Convención sobre los Derechos del Niño parte del *corpus juris* internacional de protección de niñas y niños, “[hicieron] uso de [sus] disposiciones [...] para analizar

el caso que nos ocupa”. Con base en ello e invocando el interés superior de la niña, sostuvieron que fue por tal motivo que hicieron referencia a la normativa de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la Convención. En consecuencia, las representantes solicitaron a la Corte que la excepción sea desestimada.

## *C.2 Consideraciones de la Corte*

40. La Corte nota que las representantes presentaron sus alegatos en torno a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de Niño de forma imprecisa. No obstante, la Corte entiende que las representantes no solicitaron que se declarara la responsabilidad internacional del Estado sobre dichas disposiciones, para lo cual este Tribunal no resulta competente, sino que las invocaron como normas que dotan de contenido el alcance de las medidas especiales de protección previstas en el artículo 19 de la Convención Americana, para cuya interpretación y aplicación la Corte sí tiene competencia. En efecto, la Corte ha señalado que “al examinar la compatibilidad de las conductas o normas estatales con la Convención, la Corte puede interpretar a la luz de otros tratados las obligaciones y los derechos contenidos en dicho instrumento”<sup>26</sup>. Ello se deriva de la cláusula expresa del artículo 29.b) de la Convención Americana que alude a las reglas de interpretación de su propia normativa en función de “otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”. Se advierte, así, en la Convención Americana una tendencia a integrar el sistema regional y el sistema universal de protección de los derechos humanos<sup>27</sup>.

41. Teniendo en cuenta que la persona titular de derechos y presunta

<sup>26</sup> Caso *Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones*. Sentencia de 30 de Noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 24, y Caso *Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 332, párr. 30.

<sup>27</sup> Cfr. “*Otros Tratados*” Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 41.

víctima principal en este caso tenía menos de 18 años de edad al momento de los hechos, la Corte considera útil y apropiado recurrir a la Convención sobre los Derechos del Niño que contiene diversas disposiciones específicas y más desarrolladas en torno a la participación, acceso a la justicia y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos. Tales disposiciones pueden ilustrar sobre el contenido y alcance de las medidas de protección especial que deben ser precisadas en el caso examinado a la luz del artículo 19 de la Convención. La Corte considera la aplicabilidad de dicho instrumento al presente caso en los términos indicados, en tanto Nicaragua es parte de ese tratado internacional<sup>28</sup> y ha reconocido, por lo tanto, las reglas establecidas allí expresamente como fuente de derecho. Pero, además, es necesario recordar, como ya ha sido resaltado en reiteradas oportunidades, que la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional que posee mayor vocación de universalidad, lo cual “pone de manifiesto un amplio consenso internacional (*opinio iuris communis*) favorable a los principios e instituciones acogidos por dicho instrumento, que refleja el desarrollo actual de esta materia”<sup>29</sup>.

42. En suma, este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia que, tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como otros instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados que sirven como guía de interpretación<sup>30</sup>, forman parte de un muy comprensivo *corpus juris* internacional de protección de niñas, niños y adolescentes. Éste debe servir para fijar el contenido y alcance de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con los demás derechos

28 Nicaragua ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 5 de octubre de 1990.

29 Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 29, y Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párr. 57.

30 Cfr. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14, *supra*, párr. 60.

contenidos en dicho instrumento, cuando el sujeto titular de derechos es una persona menor de 18 años de edad<sup>31</sup>. Por lo tanto, en los términos de las consideraciones precedentes, corresponde desestimar la excepción opuesta.

## V

### Consideraciones Previas

43. Antes de examinar los hechos pertinentes y la aplicación de las normas de la Convención Americana a los mismos, es necesario realizar algunas consideraciones previas sobre la determinación de las presuntas víctimas y las presuntas violaciones de derechos alegadas por las representantes, en razón de lo argumentado por el Estado. En lo que se refiere a los argumentos del Estado sobre la supuesta extemporaneidad de la presentación de algunos anexos al escrito de solicitudes y argumentos por parte de las representantes, la Corte resolverá lo pertinente en el apartado correspondiente a la prueba (*infra* párr. 60).

#### *A. Determinación de las presuntas víctimas*

##### *A.1 Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y las representantes*

44. El Estado sostuvo que la Corte sería incompetente para conocer sobre las vulneraciones alegadas a los derechos de N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P., debido a que la Comisión no los habría incluido como presuntas víctimas en su Informe de Fondo. Al respecto, el Estado afirmó que la Comisión en su Informe de Admisibilidad No. 3/09 habría fijado el límite respecto de quiénes eran las presuntas víctimas en el presente asunto. Asimismo, mediante el Informe No. 4/16 habría determinado que las víctimas en

31 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 194, y Caso Yarce y otras Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C No. 325, nota al pie 115.

el presente caso serían V.R.P. y V.P.C. Sin embargo, las representantes en el apartado de su escrito de solicitudes y argumentos referido a las reparaciones incorporaron una solicitud a la Corte para que reconociera como acreedores a los otros hijos de la peticionaria. Por lo tanto, el Estado solicitó a la Corte que declarase su incompetencia para conocer sobre las reparaciones alegadas a favor de N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P., en razón de que la declaración de quienes serían las víctimas y beneficiarios de una eventual reparación no podrían ser otras personas que las determinadas por la Comisión en su informe de fondo. En sus alegatos finales, el Estado sostuvo que en ninguna parte de dicho informe, incluido el párrafo 153, ni de la carta de sometimiento del caso a la Corte, la Comisión se refirió a los artículos de la Convención que fueron supuestamente violentados en cada caso para los hijos de V.P.C.

45. Las *representantes* sostuvieron que, si bien corresponde a la Comisión determinar las presuntas víctimas, constituye un hecho controvertible que los hermanos de la niña V.R.P. no hayan sido referidos por la Comisión como víctimas en el presente caso, según lo que se desprendería de los párrafos 153 y 154 del Informe de Fondo de la Comisión. Por tal razón, las representantes solicitaron a la Corte que declarase como presuntas víctimas a N.R.P., H.J.R.P., V.A.R.P. y, hermanos de la presunta víctima V.R.P. e hijos de la peticionaria y presunta víctima V.P.C.

46. La *Comisión* indicó que en el párrafo 154 del Informe de Fondo estableció violaciones respecto de todo el núcleo familiar de V.R.P. Precisó al respecto que la omisión del párrafo 4 del Informe de Fondo “se trata de un error material involuntario que no invalida dicha determinación”.

## *A.2 Consideraciones de la Corte*

47. Esta Corte recuerda que las presuntas víctimas deben estar señaladas en el Informe de Fondo de la Comisión, emitido según el artículo

50 de la Convención. El artículo 35.1 del Reglamento de este Tribunal dispone que el caso será sometido a la Corte mediante la presentación de dicho Informe, el cual deberá contener “la identificación de las presuntas víctimas”. De conformidad con dicha norma, corresponde a la Comisión y no a este Tribunal, identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante la Corte<sup>32</sup>. La seguridad jurídica exige, como regla general, que todas las presuntas víctimas estén debidamente identificadas en el Informe de Fondo, no siendo posible añadir nuevas presuntas víctimas con posterioridad, salvo en la circunstancia excepcional contemplada en el artículo 35.2 del Reglamento de la Corte, la cual no aplica en el presente caso.

48. La Corte constata que la Comisión no incluyó, en su Informe de Fondo No. 4/16, un párrafo específico que listara a las presuntas víctimas en este caso. No obstante ello, decidió que “existen suficientes elementos para concluir que la violación sexual sufrida por la niña V.R.P., las consecuencias de la misma y la impunidad en que se mantiene el caso atribuible al Estado, provocaron una afectación emocional a su madre V.P.C. y sus hijos e hija H.J.R.P., [V.A].R.P. y N.R.P., en contravención del derecho reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento”<sup>33</sup>. Además, en las conclusiones contenidas en el párrafo 154 indicó que las violaciones de los derechos de la Convención se establecieron “en perjuicio de las personas que se indican en cada una de las secciones del [referido] informe”<sup>34</sup>. Por otra parte, es cierto que en el párrafo 4 del Informe de Fondo, así como en la nota de sometimiento del caso, la Comisión omitió incluir la conclusión referente al análisis realizado respecto de la violación al artículo 5.1 de la Convención en perjuicio de los hermanos de

32 Cfr. *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 98, y *Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329, párr. 41.

33 CIDH, Informe de Fondo No. 4/16, párr. 153.

34 CIDH, Informe de Fondo No. 4/16, párr. 154.

V.R.P. Para la Corte, esta falta de precisión no puede ser entendida en detrimento del examen realizado en el apartado correspondiente y la conclusión expresa contenida en los párrafos 153 y 154, toda vez que el escrito de sometimiento así como el informe de fondo deben ser leídos y entendidos de manera integral. De este modo, la Corte concluye que, en las circunstancias de este caso, el Informe de Fondo No. 4/16 individualizó de forma suficientemente precisa como presuntas víctimas a N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P., alegándose respecto de ellos la presunta violación del artículo 5.1 de la Convención.

49. Por lo expuesto, la Corte considerará como presuntas víctimas en el presente caso a aquellas personas identificadas e individualizadas por la Comisión, esto es, a V.R.P. y V.P.C., así como a N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P.

*B. Otras violaciones de derechos humanos alegadas por las representantes*

*B.1 Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y las representantes*

50. El *Estado* discrepó con lo planteado por las representantes sobre la violación de derechos humanos no presentados por la Comisión. Sostuvo que se vulneró el principio de buena fe procesal al haberse alegado en relación con la presunta víctima V.R.P. violaciones de los artículos 1.1, 8.1, 17.1, 22.1 y 25.1 de la Convención Americana; de los artículos 1, 2, 4.b y 4.g de la Convención de Belém do Pará, así como de los artículos 2.1, 3.1. y 2, 4, 16, 24.1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Señaló lo mismo en relación con V.P.C. respecto de la alegada violación de los artículos 5.1, 8, 11, 12.1, 24 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, y de los artículos 4.g) y 7.b) de la Convención de Belém do Pará; así como también con respecto a los hermanos de la presunta víctima, la violación de los artículos 5.1 y 11 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma,

todos los cuales no habrían sido alegados durante el trámite del caso, ni ante la Comisión ni ante la Corte. El Estado sostuvo que esas invocaciones de nuevas presuntas violaciones constituyen un cambio evidente de la postura original de la peticionaria y sus representantes respecto del Informe de Fondo de la Comisión, lo que a su criterio “constituye una afectación directa al proceso en el [s]istema [i]nteramericano, una violación al derecho defensa y una violación a la seguridad jurídica”. Por ello, el Estado solicitó a la Corte que no admitiera el análisis de dichas disposiciones en el caso.

51. Las *representantes* afirmaron que, con base en el artículo 40 del Reglamento de la Corte, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas constituye un escrito autónomo e independiente de las alegaciones del informe de fondo presentado por la Comisión, por medio del cual se pueden incorporar nuevas violaciones a derechos siempre y cuando estén contemplados dentro del marco fáctico fijado por la Comisión. Agregaron que, en el presente caso, todas las violaciones descritas se encuentran contempladas dentro del marco fáctico. Entendieron que, por ese motivo, sí es posible la inclusión de derechos no contemplados en el Informe de Fondo en virtud de que las violaciones y vejámenes sufridos por V.P.C. y V.R.P., los cuales fueron descritos en el marco fáctico del caso, tuvieron consecuencias ulteriores. En efecto, las representantes concluyeron que en el presente caso “han planteado algunas vulneraciones a derechos de las presuntas víctimas, pero siempre en el marco de los hechos indicados por la Comisión”.

52. La *Comisión* no se pronunció al respecto.

## *B.2 Consideraciones de la Corte*

53. Es preciso recordar la jurisprudencia constante de esta Corte según la cual las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de otros derechos distintos a los comprendidos en el Infor-



me de Fondo, siempre y cuando se atengan a los hechos contenidos en dicho documento, en tanto son las presuntas víctimas las titulares de todos los derechos consagrados en la Convención<sup>35</sup>.

54. En virtud de ello, la Corte advierte que en el Informe de Fondo No. 4/16, a diferencia de lo indicado por el Estado, la Comisión concluyó la violación de los derechos contenidos en los artículos 5, 8, 11, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento; y del artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará. Las representantes, en adición a lo establecido por la Comisión, solicitaron a la Corte que declarase la violación de los derechos contenidos en los artículos 12.1, 17.1 y 22.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, y de los artículos 1.1, 2, 4.b) y 4.g) de la Convención de Belém do Pará. Asimismo, las representantes invocaron los derechos recogidos en los artículos 2.1, 3.1, 3.2, 4, 16, 24.1 y 24.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, como fue analizado *supra*.

55. En primer lugar, respecto de los alegatos referidos a los artículos 12.1, 17.1 y 22.1 de la Convención Americana, la Corte entiende que se sustentan en el mismo escenario fáctico descrito en el Informe de Fondo y, en efecto, guardan conformidad con la jurisprudencia referida precedentemente y con el artículo 40 del Reglamento de este Tribunal. Por lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la pretensión del Estado, de modo tal que tales derechos serán considerados en el análisis de fondo del caso.

56. Por otro lado, con relación a los derechos contenidos en la Convención de Belém do Pará, esta Corte ya ha afirmado en su jurisprudencia que tiene competencia para pronunciarse sobre la misma<sup>36</sup>. Sin

35 Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 155, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, *supra*, párr. 30.

36 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 40, y Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil, *supra*, párr. 67.

embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de dicho instrumento, la posibilidad de la presentación de “peticiones” a la Comisión se refiere a “denuncias o quejas de violación de [su] artículo 7”, no así del resto del articulado. Por consiguiente, al examinar las violaciones alegadas respecto de la Convención de Belém do Pará, esta Corte podrá establecer únicamente la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de lo que mandata el artículo 7, sin perjuicio del valor interpretativo que posee dicho instrumento en su integralidad. En esta medida, se desestiman los alegatos del Estado.

57. Finalmente, en cuanto a los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Corte ya se ha expedido al respecto al momento de abordar la excepción preliminar sobre la supuesta incompetencia *ratione materiae* opuesta por el Estado, por lo que se remite a lo allí resuelto (*supra* párrs. 40 a 42).

## VI Prueba

### *A. Prueba documental, testimonial y pericial*

58. La Corte recibió diversos documentos presentados como prueba por el Estado, las representantes y la Comisión Interamericana, adjuntos a sus escritos principales y como prueba para mejor resolver (*supra* párrs. 1, 6, 7 y 12). Asimismo, la Corte recibió las declaraciones rendidas ante fedatario público (*affidavit*) de N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P., propuestos por las representantes. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte recibió las declaraciones de las presuntas víctimas V.R.P. y V.P.C., así como los dictámenes del perito Enrique Oscar Stola, propuesto por las representantes, y del perito Miguel Cillero Bruñol, propuesto por la Comisión.

## B. Admisión de la prueba

### B.1 Admisión de la prueba documental

59. En el presente caso, como en otros, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes y por la Comisión en la debida oportunidad procesal, que no fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda.<sup>37</sup>

60. El Estado alegó que determinadas pruebas presentadas con el escrito de las representantes serían inadmisibles porque habría sido presentadas de forma extemporánea. Ahora bien, de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, la oportunidad procesal para la presentación de prueba documental es, en general, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda. Al respecto, la Corte nota que la prueba cuestionada por el Estado fue debidamente ofrecida en el momento procesal oportuno y sometida a la Corte junto con el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. La Corte reitera que el hecho de que se haya solicitado la subsanación de ciertas deficiencias en los anexos, específicamente de aquellos folios que se encontraban parcialmente ilegibles o que faltaban, no torna dicha prueba inadmisible o extemporánea *per se*, ya que se encuentra dentro de la facultad del Tribunal procurar las pruebas que sean útiles para la resolución del caso y, de ser necesario, solicitar tal subsanación.

61. Las representantes impugnaron varias pruebas presentadas por el Estado junto con su escrito de contestación. Respecto de una serie de anexos, refirieron que se encontraban incompletos. En cuanto a otros anexos, indicaron que no serían susceptibles de demostrar aquello que se pretende o, como es el caso de la Constitución aportada, que el documento se encontraría desactualizado en tanto no contendría ciertas

<sup>37</sup> Cfr. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra*, párr. 140, y *Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 22 de agosto de 2017. Serie C No. 338, párr. 42.

reformas. Al respecto, la Corte considera que las cuestiones planteadas se refieren al valor probatorio de la prueba pero no a su admisibilidad.

62. De conformidad con el artículo 58.b de su Reglamento, la Corte estima procedente admitir los documentos aportados por el Estado, que fueron solicitados por los jueces del Tribunal o su Presidencia como prueba para mejor resolver. No obstante, la Corte nota que las representantes objetaron los anexos 9.a y 9.b.6 remitidos por el Estado en tanto no consistirían en documentos oficiales. Atendiendo a que no es posible verificar la autenticidad de dichos documentos, la Corte los declara inadmisibles. A su vez, las representantes indicaron que varios de los documentos relativos a normativa y protocolos son posteriores a los hechos del caso, lo cual será tenido en cuenta por la Corte al evaluar dicha documentación.

### *B.2 Admisión de las declaraciones y de los dictámenes periciales*

63. La Corte estima pertinente admitir las declaraciones y dictámenes rendidos en audiencia pública y mediante declaraciones ante fedatario público, en cuanto se ajusten al objeto definido por el Presidente en la Resolución que ordenó recibirlos<sup>38</sup> y al objeto del presente caso.

### *C. Valoración de la prueba*

64. Con base en su jurisprudencia constante respecto de la prueba y su apreciación, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por las partes y la Comisión que fueron incorporados por este Tribunal, así como las declaraciones y dictámenes periciales, al establecer los hechos del caso y pronunciarse sobre el fondo. Para ello se sujeta a los principios de la sana crítica, dentro del marco

<sup>38</sup> Los objetos de todas estas declaraciones se encuentran establecidos en la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de 21 de septiembre de 2017. Disponible en: [http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/vrp\\_21\\_09\\_17.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/vrp_21_09_17.pdf)

normativo correspondiente, teniendo en cuenta el conjunto del acervo probatorio y lo alegado en la causa<sup>39</sup>.

65. Finalmente, conforme a su jurisprudencia, la Corte recuerda que las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias<sup>40</sup>.

## VII Hechos

### A. Antecedentes

66. V.R.P. nació el 15 de abril de 1992 en la localidad de Jinotega, Nicaragua<sup>41</sup>. Es hija del matrimonio constituido por la señora V.P.C. y el señor H.R.A. e integra el grupo familiar también compuesto por sus tres hermanos mayores: N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P.<sup>42</sup>.

67. Hasta el año 2002, tanto V.R.P. como sus hermanos habitaban en una casa propiedad de su madre. La presencia de su padre en el hogar era casi inexistente, ya que el señor H.R.A. tenía una relación extramatrimonial y sólo llegaba esporádicamente a la casa, circunstancia que, a su vez, tornaba muy inestable la relación con su madre<sup>43</sup>.

39 Cfr. *Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo*. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrs. 69 a 76, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú, supra*, párr. 79.

40 Cfr. *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo*. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 43, y *Caso Pacheco León y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 15 de noviembre 2017. Serie C No. 342, párr. 20.

41 Cfr. Certificado de nacimiento de V.R.P. emitido por el Registro del Estado Civil de las Personas de Jinotega (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.a al sometimiento del caso, folio 6632).

42 Cfr. Cédulas de identidad de H.J.R.P. y V.A.R.P. y licencia de conducir de N.R.P. (expediente de prueba, tomo XVI, anexos B.3, B.4 y B.5 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7089 a 7092). Véase también, Informe del Ministerio de la Familia, Delegación Jinotega, emitido el 11 de julio de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 1 al sometimiento del caso, folios 6621 a 6630).

43 Cfr. Informe del Ministerio de la Familia, Delegación Jinotega, emitido el 11 de julio de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 1 al sometimiento del caso, folios 6621 a 6630), y Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

68. El señor H.R.A. era abogado; se desempeñó como Procurador Auxiliar del Departamento de Matagalpa, entre otros puestos<sup>44</sup>. Asimismo, era miembro del Frente Sandinista para la Liberación Nacional<sup>45</sup>.

69. El vínculo matrimonial se disolvió el 31 de enero de 2002, como consecuencia de una demanda presentada por V.P.C. en noviembre de 2001<sup>46</sup>.

### *B. Los hechos ocurridos en el año 2000*

70. V.R.P. relató que, entre los meses de septiembre y octubre del año 2000, cuando tenía ocho años de edad, su padre la llevó en dos ocasiones a un lugar conocido como “Las Flores”. Allí, le dio de tomar café, luego de lo cual se sintió mareada y se durmió. Asimismo, manifestó que, aunque no se enteró de lo que su padre hacía con ella, al despertarse notaba que éste se arreglaba la faja, la parte anterior del pantalón, se subía el “zipper” y, además, le limpiaba la zona anal<sup>47</sup>.

44 Cfr. Certificaciones emitidas por el Ministerio de Justicia (expediente de trámite ante la Comisión, tomo XI, folios 4132 y 4134), y Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

45 En el expediente interno se dejó constancia de “una [sic] volante que refiere que el acusado [H.R.A.], es un compañero de lucha al que se le estaba procesando injustamente, volante suscrita [sic] [por una persona], quien a la vez se presentó como testigo en el Tribunal de Jurados como miembro del Partido Frente Sandinista, declarando a favor del procesado”. Constancia del Juez Suplente de Distrito del Crimen de Jinotega, de fecha 1 de agosto de 2003 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo X, folio 3856).

46 Cfr. Sentencia emitida por el Juzgado de Distrito para lo Civil de Jinotega el 31 de enero de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 3 al sometimiento del caso, folios 6704 a 6706).

47 Cfr. Declaración *ad-inquirendum* rendida por V.R.P. ante el Juez de Distrito Penal de Jinotega el 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 9 a la contestación, folios 8201 a 8202), y Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017. Véase también, Informe Psicológico N° 16275/01 del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia emitido el 27 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 4 al sometimiento del caso, folios 6708 a 6709); Dictamen Médico Legal N° 16273/01 del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia emitido el 27 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 4 al sometimiento del caso, folios 6710 a 6712), y Valoración mental de V.R.P. realizada en el Hospital Victoria de Jinotega el 26 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 5 al sometimiento del caso, folio 6714).

### *C. La denuncia penal y el inicio de la investigación*

71. El 16 de octubre de 2001 la señora V.P.C. llevó a su hija a una consulta médica privada con un médico cirujano pediatra debido a las dificultades que V.R.P. presentaba para defecar y a los dolores que tenía en la región anal. El médico que la atendió, luego de examinar a V.R.P. y tomar la biopsia respectiva bajo anestesia, encontró que la niña presentaba ruptura del himen y condilomas en la región perianal, indicativo de enfermedad venérea<sup>48</sup>. En atención al cuadro clínico que presentaba, el médico pediatra decidió derivarla al Hospital Victoria Motta. El 17 de octubre de 2001 acudieron a un médico gineco-obstetra para una valoración más especializada. Dicho médico, luego de inspección ginecológica bajo anestesia, confirmó el diagnóstico de himen desflorado de vieja data, presencia de úlceras en el ano, desgarros de la mucosa de la región anal, lesiones en el cuello uterino y se detectó la presencia del virus del papiloma humano y condilomas en la región perianal<sup>49</sup>. Debido a estas lesiones, V.R.P. fue sometida a crioterapia para los condilomas en el cuello uterino y una anoplastia en toda la circunferencia perianal<sup>50</sup>. Ambos médicos concluyeron y declararon en el proceso a nivel interno que, conforme

48 Cfr. Declaración testimonial rendida por Alejandro Anastasio Barahona ante el Juzgado de Distrito para lo Penal el 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.8 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7300 a 7301).

49 Cfr. Revisión ginecológica de 17 de octubre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.1 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7272 a 7273); Declaración testimonial rendida por Yader Peralta Alarcón ante el Juzgado de Distrito para lo Penal el 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.6 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7293 a 7294), y Declaración testimonial rendida por Alejandro Anastasio Barahona ante el Juzgado de Distrito para lo Penal el 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.8 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7300 a 7301).

50 Cfr. Epicrisis de 24 de octubre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.1 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7268). Véase también, Dictamen Médico Legal N° 16273/01 del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia emitido el 27 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 4 al sometimiento del caso, folios 6710 a 6712); Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017; Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017, y Declaración rendida ante fedatario público por H.J.R.P. el 9 de octubre de 2017 (expediente de prueba, tomo XVIII, *affidávits*, folio 8347).

a los hallazgos médicos, V.R.P. era víctima de abuso sexual y había sufrido penetración anal<sup>51</sup>.

72. En virtud de estos hallazgos y del relato efectuado por V.R.P., el 20 de noviembre de 2001 la señora V.P.C. denunció ante el Juzgado de Distrito del Crimen de Jinotega al señor H.R.A. por el delito de violación sexual en contra de su hija<sup>52</sup>.

73. El 21 de noviembre de 2001 se recibió la declaración *ad-inquirendum*<sup>53</sup> de V.R.P.<sup>54</sup> y la de V.P.C.<sup>55</sup>, mediante la cual ésta última ratificó la denuncia contra el señor H.R.A. En esa misma fecha, se dictó orden de allanamiento y se procedió a la detención del ciudadano H.R.A.<sup>56</sup>, quien prestó declaración indagatoria ante la jueza de distrito penal. En dicha oportunidad, desconoció los cargos que le fueron formulados y solicitó que se investigara el vínculo de los miembros de la “secta Mormón” con el acto de violación de su hija, debido a que la señora V.P.C., formaba parte de la misma y, supuestamente, tenía conocimiento de que uno de sus máximos representantes habría sido acusado de abuso sexual de personas menores de edad<sup>57</sup>.

51 Cfr. Declaración testimonial rendida por Alejandro Anastasio Barahona ante el Juzgado de Distrito para lo Penal el 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.8 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7302), y Declaración testimonial rendida por Yader Peralta Alarcón ante el Juzgado de Distrito para lo Penal el 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.6 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7294).

52 Cfr. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017, y Escrito de denuncia de 19 de noviembre de 2001 presentado al día siguiente (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.1 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7122 a 7136).

53 De acuerdo al artículo 154 del Código de Instrucción Criminal: “[e]l ofendido o injuriado dará ante todo su declaración <ad-inquirendum>, bajo juramento, salvo el caso de imposibilidad, en que se diferirá aquella hasta que desaparezca el impedimento” (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8048).

54 Cfr. Declaración *ad-inquirendum* rendida por V.R.P. ante el Juez de Distrito Penal de Jinotega el 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 9 a la contestación, folios 8201 a 8202).

55 Cfr. Declaración *ad-inquirendum* rendida por V.P.C. ante el Juez de Distrito Penal de Jinotega el 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.b al sometimiento del caso, folio 6634).

56 Cfr. Auto emitido por el Juzgado de Distrito Penal de Jinotega el 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 31 a la contestación, folio 8275).

57 Cfr. Declaración indagatoria rendida por H.R.A. el 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.d al sometimiento del caso, folios 6639 a 6648).



74. A raíz de lo sucedido, la niña V.R.P. dejó de asistir a clases<sup>58</sup>, por cuanto sentía vergüenza y miedo del rechazo de las personas, debido a que el proceso se había hecho público<sup>59</sup>. Al respecto, cabe mencionar que, mediante el auto del 21 de noviembre de 2001, el Juzgado del Distrito Penal de Jinotega dispuso que “[p]or estar solicitado restrínjase el acceso a la Prensa [, a]sí como al Público en General, debiendo llevarse en [p]rivado la presente Instructiva del proceso”<sup>60</sup>. A pesar de ello, la emisora Radio Stereo Libre, 95.3 FM, la cual estaba relacionada con el abogado de la parte acusadora, cubrió cada una de las etapas del proceso penal seguido contra el señor H.R.A. durante el año 2002<sup>61</sup>.

#### *D. Las medidas de prueba ordenadas*

75. En el marco de la instrucción se ordenó recibir 21 declaraciones testimoniales<sup>62</sup> y se dispuso la realización de otras medidas de prueba que se detallan a continuación:

##### *a) Examen médico de V.R.P.*

76. Se ordenó la realización de un examen médico respecto de V.R.P. Para ello, la jueza de distrito penal a cargo del proceso solicitó al Director del Hospital Victoria Motta que conformara una junta médica compuesta por un pediatra, un cirujano, y un ginecólogo, para que aso-

58 Cfr. Comunicación de V.P.C. dirigida al Procurador Especial de la Niñez y Adolescencia el 9 de septiembre de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.85 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7586).

59 Cfr. Presentación de V.P.C. ante la Comisión IDH del 20 de abril de 2009 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 37 al sometimiento del caso, folio 7003).

60 Auto emitido por el Juzgado de Distrito Penal de Jinotega el 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 31 a la contestación, folio 8275).

61 Cfr. Constancia emitida por Radio Stereo Libre, 95.3FM, el 2 de agosto de 2003 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.55 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7492).

62 Cfr. Informe del Estado de Nicaragua sobre el caso de la niña V.R.P., Petición N° P 4408/02, emitido el 13 de diciembre de 2005 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 17 al sometimiento del caso, folio 6848).

ciados al médico forense practiquen la valoración médico legal de V.R.P.<sup>63</sup>.

Dicha junta médica fue conformada por el Director del Hospital, con base en lo requerido<sup>64</sup> y el 22 de noviembre de 2001 el médico forense intentó realizar la diligencia, en la cual participaron no sólo tres médicos (el forense, el ginecólogo y el pediatra), sino que estuvo presente una psiquiatra, la jueza y la secretaria del despacho judicial<sup>65</sup>.

77. En el Acta Judicial de 22 de noviembre de 2001 se consignó que el médico legista, acompañado de un ginecólogo, un pediatra y una psiquiatra, inició el examen médico legal a V.R.P., describiéndose ciertos hallazgos, pero que “se suspendió todo procedimiento por negatividad de la menor”<sup>66</sup>. La señora V.P.C., en un escrito presentado ante el Director del Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) del Departamento de Jinotega, expuso que lo que sucedió fue que el profesional médico interviniente tuvo un “comportamiento antiético, grotesco y vulgar” al momento de examinar a su hija<sup>67</sup> (*infra* párr. 177). Por su parte, V.R.P. relató ante esta Corte las circunstancias en las cuales

63 Cfr. Comunicación del Juzgado de Distrito Penal de Jinotega al Director del Hospital Victoria de Jinotega de 22 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.9 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7304).

64 Cfr. Comunicación del Director del Hospital Victoria de Jinotega al Juzgado de Distrito Penal de Jinotega de 22 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.10 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7306).

65 Cfr. Acta judicial de 22 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.11 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7308 a 7309).

66 Acta judicial de 22 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.11 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7308 a 7309). Véase también, Comunicación dirigida a la Jueza de Distrito del Crimen de Jinotega por parte del médico forense (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.e al sometimiento del caso, folio 6650).

67 Cfr. Presentación efectuada por la señora V.P.C. ante el director del Sistema Local de Atención Integral en Salud el 22 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 9 al sometimiento del caso, folios 6769 a 6770), en la cual denunció que el médico habría manifestado a V.R.P. que “tenía que someterse al trato vulgar de él y que ni siquiera tenía derecho a dar[le] algún sedante”. Más aun, indicó que éste le dijo a la niña: “ya no llores más, las niñas del campo cuando vienen, estando solo yo, la niña y su madre, les digo que abran sus piernas y ellas se dejan [...] si vaginalmente no te dejas, ya me parece ver cuando tenga que examinarte el ano”. Todo ello habría tenido lugar ante la presencia de otros profesionales médicos. Cfr. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017, y Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

se desarrolló la diligencia y las razones por las que se negó a continuar con el examen<sup>68</sup>.

78. Según surge de las declaraciones recibidas ante esta Corte, durante el primer examen médico forense, el médico olía a alcohol, no le permitió a la madre de V.R.P. poner una colcha y un cojín para que la niña se acostara sobre ellos, teniendo en cuenta que estaba dolorida y tenía llagas puesto que había tenido operaciones quirúrgicas recientes, y le indicó que se acostara sobre la camilla de metal. Las pruebas recibidas ante esta Corte evidencian que, durante el examen médico, la niña V.R.P. manifestó su negativa a realizárselo por el dolor que sentía ante el tacto ejercido de forma violenta por el galeno. En efecto, las declaraciones de V.R.P., V.P.C. y la abuela de V.R.P. son coincidentes en señalar que el médico “abría las piernas” de V.R.P., “usó mucha fuerza” durante el examen, por lo que la niña tendía a cerrar las piernas ya que sentía ardor y mucho dolor en las zonas afectadas<sup>69</sup>. Debido al actuar violento del médico, algunos de los miembros presentes del personal de salud decidieron no continuar participando en la diligencia<sup>70</sup>.

79. Posteriormente, la señora V.P.C. instó que se ordenara que sea la suplente del médico forense, asociada del médico pediatra, y el ginecólogo nombrado por el hospital, quienes practiquen el examen médico a V.R.P.<sup>71</sup>. Asimismo, solicitó que se hiciera una valoración psiquiátrica de su hija.

68 Cfr. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017.

69 Cfr. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017; Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017, y Declaración testimonial de L.C. prestada el 23 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.12 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7313).

70 Cfr. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017, y Acta judicial de 22 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.11 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7308 a 7309).

71 Cfr. Escrito presentado por V.P.C. ante el Juez del Distrito Criminal el 23 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 12 a la contestación, folios 8213 a 8214).

80. El 23 de noviembre de 2001 el Juzgado de Distrito para lo Penal de Jinotega dispuso que se solicitara al director del Hospital Victoria Motta que autorice a una psiquiatra, a fin de que dé seguimiento a la niña V.R.P., para que en su momento se evacúe un informe del estado emocional de la niña<sup>72</sup>.

81. Se programó otro examen para el 24 de noviembre de 2001 en la Casa de la Mujer. En dicha oportunidad, V.R.P. también expresó su negativa a someterse al examen, por encontrarse emocionalmente afectada por el trato que habría recibido por parte del médico forense<sup>73</sup>.

82. El 26 de noviembre de 2001 se realizó una consulta externa de psiquiatría en el Hospital Victoria Motta de Jinotega. El informe indicó que V.R.P. “señala con claridad al actor de lo sucedido en su cuerpo, identificándolo como su papá, especificando que la enfermedad que está padeciendo actualmente la tiene su papá también” y que “su relato es confiable, muy claro y veraz”<sup>74</sup>.

83. El 27 de noviembre de 2001 se practicó el examen médico en el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia en Managua. Allí, se lograron constatar las lesiones que padecía la niña V.R.P.<sup>75</sup>. En dicha oportunidad se le practicó una exploración de zona genital bajo anestesia<sup>76</sup>, según fuera solicitado<sup>77</sup>, y se encontró que la niña V.R.P.

<sup>72</sup> Cfr. Auto emitido por el Juzgado de Distrito para lo Penal de Jinotega el 23 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 10 a la contestación, folio 8204).

<sup>73</sup> Cfr. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017, y Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017. Véase también, Presentación de V.P.C. ante la Comisión IDH de 27 de septiembre de 2007 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 32 al sometimiento del caso, folio 6962).

<sup>74</sup> Valoración mental de V.R.P. realizada en el Hospital Victoria de Jinotega el 26 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 5 al sometimiento del caso, folio 6714).

<sup>75</sup> Cfr. Dictamen Médico Legal N° 16273/01 del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia emitido el 27 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 4 al sometimiento del caso, folios 6710 a 6712).

<sup>76</sup> Cfr. Dictamen Médico Legal N° 16273/01 del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia emitido el 27 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 4 al sometimiento del caso, folios 6710 a 6712).

<sup>77</sup> Cfr. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017, y Presentación de V.P.C. ante la Comisión IDH de septiembre de 2007 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 32 al sometimiento del caso, folios 6962 a 6963).

tenía el “himen desflorado de vieja data[; a] nivel del cuello uterino 3 lesiones de color blancas[; p]aredes vaginales muy dolorosas a la inspección[, y a]no [con] presencia de zona ulcerada”. Además, se constató la presencia del virus del papiloma humano y condiloma acuminado, enfermedades de transmisión por vía sexual. Todo ello permitió concluir que la niña fue víctima de agresión sexual<sup>78</sup>.

84. En esa misma fecha, se practicó también una evaluación psicológica de V.R.P. que concluyó que la niña padecía afectación psíquica de un trastorno de estrés post-traumático, acompañado de un cuadro significativo de depresión, y que existían indicadores emocionales de vergüenza, miedo, sentimientos de culpa, relacionados a la vivencia estresante, compatible con agresión sexual crónica. Además, se especificó que su testimonio fue muy coherente, claro y fundamentado. Por ello se indicó que requería tratamiento terapéutico a largo plazo<sup>79</sup>.

85. El mismo día en el que V.R.P. se sometió a dicho examen en el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, su padre y presunto agresor, el señor H.R.A., fue citado con el fin de someterse a una examinación médica ante la misma entidad, conforme lo demuestra el Dictamen de Medicina Legal No.16271-2001<sup>80</sup>.

86. El 21 de febrero de 2002 la psiquiatra asignada emitió un último informe de seguimiento de V.R.P. donde recomendó que la niña “necesitará, casi siempre, hasta alcanzar su madurez biológica y emocional, ayuda de [p]sicoterapeuta, ya que el daño recibido en su esfera física y [p]síquica, es de secuelas y lesiones duraderas [...]”. Si no se atiende te-

78 Cfr. Dictamen Médico Legal N° 16273/01 del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia emitido el 27 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 4 al sometimiento del caso, folios 6710 a 6712).

79 Cfr. Informe Psicológico N° 16275/01 del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia emitido el 27 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 4 al sometimiento del caso, folios 6708 a 6709).

80 Cfr. Dictamen Médico Legal N° 16271-2001 a H.R.A. del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia emitido de 27 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 20 al escrito de contestación, folio 8244).

rapéuticamente, puede llegar a desarrollar ideación suicida o hundirse en la depresión endógena. Por lo tanto, por precaución a no hacer más daño en su persona, se indica evitar la revictimización de la paciente, no permitiendo que ella siga estando presente en los recuerdos del hecho acaecido o de perjuicio que le haya sucedido o interrogándosele al respecto”<sup>81</sup>.

87. El 22 de abril de 2002 la psiquiatra designada emitió una epicrisis en la cual concluyó que V.R.P. sufría de estrés post-traumático a nivel psicológico, por lo que derivó su tratamiento a psicología por “prevención de secuelas por abuso sexual que podrían interferir en su conducta futura a nivel de comunicación y relación de su entorno”<sup>82</sup>. No hay constancia de que esta terapia se haya llevado a cabo.

*a) Inspección ocular y reconstrucción de los hechos*

88. El 29 de noviembre de 2001 se realizó la inspección ocular judicial y reconstrucción de los hechos<sup>83</sup>. Del acta de la diligencia se comprueba la participación de la defensa del acusado, la defensa legal de la señora V.P.C., la jueza y el secretario del despacho, así como la psiquiatra asignada. Sin embargo, no se deduce la participación de la Fiscal a cargo<sup>84</sup>. De la descripción de la diligencia contenida en el acta, la Corte constata que se solicitó a V.R.P., una niña de nueve años de edad, que relatará lo ocurrido con su padre, se le pidió que recorriera y reconociera los mis-

81 Informe de seguimiento a la niña V.R.P. elaborado el 21 de febrero de 2002 por la Dra. María Delma Terán Caldera, médica psiquiatra del Hospital Victoria Motta, Jinotega (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 17 al escrito de contestación, folios 8232 a 8233). Véase también, estudio de psiquiatría de 22 de abril de 2002 realizado en el Hospital Victoria Motta de Jinotega (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.3 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7280).

82 Estudio de psiquiatría de 22 de abril de 2002 realizado en el Hospital Victoria de Jinotega (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 18 al escrito de contestación, folios 8237 a 8239).

83 Cfr. Acta de Inspección Ocular Judicial y Reconstrucción de los Hechos emitida el 29 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 15 al sometimiento del caso, folios 6836 a 6841).

84 Cfr. Acta de Inspección Ocular Judicial y Reconstrucción de los Hechos emitida el 29 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 15 al sometimiento del caso, folio 6836).

mos lugares a los que habría sido llevada por su progenitor para recrear nuevamente lo ocurrido, así como que vistiera las mismas prendas que llevaba puestas cuando sucedieron los hechos, e incluso se le solicitó que se pusiera en “la misma posición en que se encontraba en el momento que se despertó”<sup>85</sup>. Asimismo, se tomaron fotografías del lugar y de la niña en la posición en la que la jueza del caso le requirió que se pusiera. La Corte nota que, si bien el padre de la niña no estuvo presente junto con ella en la diligencia, se encontraba en las inmediaciones del lugar y participó en la reconstrucción el mismo día e inmediatamente después de que la participación de V.R.P. concluyera<sup>86</sup>.

*a) Examen médico practicado al acusado*

89. Al acusado le fueron practicados dos exámenes médicos con el objeto de determinar si era portador de la enfermedad venérea detectada en la niña.

90. El primero de ellos tuvo lugar el 23 de noviembre de 2001. Fue practicado por el mismo médico que trató de evaluar a la niña en una primera oportunidad. Concluyó que “[a]ctualmente el procesado no padece de papiloma humano o condilomas acuminados y no se puede determinar que el procesado haya padecido de tal enfermedad”<sup>87</sup>.

91. El segundo examen le fue practicado por un médico forense del Instituto de Medicina Legal, quien indicó que, “al momento de su reconocimiento médico legal, no se observa en región geni[tal] y parageni-

<sup>85</sup> Acta de Inspección Ocular Judicial y Reconstrucción de los Hechos emitida el 29 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 15 al sometimiento del caso, folio 6838). Véase también, Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017, y Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

<sup>86</sup> Cfr. Acta de Inspección Ocular Judicial y Reconstrucción de los Hechos emitida el 29 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 15 al sometimiento del caso, folio 6839).

<sup>87</sup> Sentencia Penal N° 714 emitida por el Juzgado de Distrito Penal de Jinotega el 30 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.f al sometimiento del caso, folio 6661).

tal, patología alguna concordante con enfermedad venérea”<sup>88</sup>. Asimismo, recomendó un “estudio de laboratorio para determinar virus de papiloma venéreo en muestras de semen y frotis de la piel de órganos genitales, para descartar posible patología de ser un portador sano de virus de papiloma venéreo”<sup>89</sup>. El estudio de laboratorio indicado en esta segunda oportunidad nunca fue ordenado.

### *E. La detención preventiva del acusado*

92. El 30 de noviembre de 2001 el Juzgado de Distrito Penal de Jinotega dictó la sentencia interlocutoria N° 714, mediante la cual se dispuso la segura y formal prisión del señor H.R.A.<sup>90</sup>. Para así decidir, la magistrada consideró que el delito de violación sexual estaba “plenamente demostrado” mediante el dictamen médico legal; que el testimonio de la víctima era “muy coherente, claro y fundament[ad]o, que se corrobora con el estado emocional intenso de la víctima” y que “la presencia del papiloma virus humano [sic] más condilomatosis acumulado indican enfermedades de transmisión por vía sexual, en las cuales el sujeto portador puede ser asintomático y la persona receptora la que desarrolle la enfermedad, en este caso la menor”<sup>91</sup>.

93. El 6 de diciembre de ese mismo año se elevó a plenario la causa<sup>92</sup>.

88 Sentencia Penal N° 714 emitida por el Juzgado de Distrito Penal de Jinotega el 30 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.f al sometimiento del caso, folio 6661).

89 Sentencia Penal N° 714 emitida por el Juzgado de Distrito Penal de Jinotega el 30 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.f al sometimiento del caso, folio 6661).

90 Esta sentencia fue apelada por la defensa del acusado. No obstante, dicho recurso fue rechazado por lo que la Sentencia Penal N° 714 fue confirmada. Cfr. Sentencia Penal N° 89 emitida por la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte de Matagalpa el 10 de julio de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 8 al sometimiento del caso, folios 6734 a 6767).

91 Sentencia Penal N° 714 emitida por el Juzgado de Distrito Penal de Jinotega el 30 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.f al sometimiento del caso, folios 6652 a 6665).

92 Cfr. Cédula judicial emitida por el Juzgado de Distrito Penal el 6 de diciembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.h al sometimiento del caso, folio 6670).



*F. El juicio por un Tribunal de Jurados y la absolución del acusado*

94. El 9 de abril de 2002 se realizó la desinsaculación de los diez miembros del jurado<sup>93</sup>. Tanto la defensa como la acusación privada recusaron, cada uno, sin causa a un jurado. El Juzgado de Distrito de lo Penal de Jinotega programó la audiencia de integración de jurado para el 10 de abril de 2002.

95. El 10 de abril de 2002 se suspendió la sesión de jurados programada debido “a la presión del público que se encuentra fuera de las instalaciones judiciales, por prudencia”<sup>94</sup>. Más tarde ese mismo día se realizó nuevamente la desinsaculación de los diez miembros del jurado<sup>95</sup>. Consta que el procesado se encontraba presente en dicha diligencia, pero que se retiró espontáneamente. La audiencia fue programada para las tres de la tarde de ese mismo día pero, en atención a un certificado médico presentado por el abogado defensor, quien presentaba cefalea tensional, se suspendió hasta la fijación de una nueva fecha<sup>96</sup>.

96. El 11 de abril de 2002 se realizó nuevamente la desinsaculación de los diez miembros del jurado<sup>97</sup>, con la presencia del abogado defensor, del imputado y del abogado por la acusación privada. Tanto la defensa como la acusación privada recusaron, cada uno, sin causa a una jurado. El Juzgado de Distrito de lo Penal de Jinotega

93 Cfr. Acta de desinsaculación de jurados de 9 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 38 a la contestación, folio 8310).

94 Auto emitido por el Juzgado Penal de Distrito de Jinotega el 10 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 21 a la contestación, folio 8247).

95 Cfr. Acta de desinsaculación de jurados de 10 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 38 a la contestación, folio 8312).

96 Cfr. Cédula Judicial emitida por el Juzgado de Distrito Penal el 10 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.i al sometimiento del caso, folio 6673); Citación de jurados emitida por el Juzgado Penal de Distrito de Jinotega el 10 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.j al sometimiento del caso, folio 6675); Presentación efectuada por la defensa del acusado ante el referido Juzgado el 10 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.k al sometimiento del caso, folios 6677 a 6678), y Constancia médica (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 22 a la contestación, folio 8249).

97 Cfr. Acta de desinsaculación de jurados de 11 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 38 a la contestación, folio 8314).

programó la audiencia de integración de jurado para el 12 de abril de 2002<sup>98</sup>.

97. En esa misma fecha el abogado del acusado solicitó que coadyuven en la defensa otros dos letrados<sup>99</sup>. Al día siguiente, el abogado de la parte acusadora se opuso por escrito a ese pedido y presentó una solicitud igual en el sentido de ser asistido por otro abogado con base en el principio de igualdad<sup>100</sup>. El mismo 12 de abril, la solicitud de la defensa fue concedida<sup>101</sup>, bajo el argumento de que el abogado de la acusación había prestado su anuencia verbalmente. Sin embargo, no consta que se haya resuelto la solicitud similar presentada por la parte acusadora<sup>102</sup>.

98. En esa fecha se constituyó el jurado, que quedó integrado por cuatro personas. Asimismo, se designó como presidenta a la jueza de derecho designada y a un secretario. En el acta de integración del jurado consta que en ese acto se encontraba presente el abogado de V.P.C. y que no formuló observación ni recusación alguna<sup>103</sup>.

98 Cfr. Citación de jurados emitida por el Juzgado Penal de Distrito de Jinotega el 11 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.1 al sometimiento del caso, folio 6680).

99 Cfr. Escrito del abogado defensor presentado el 11 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.49 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7474).

100 Cfr. Escritos del abogado de la parte acusadora presentados el 12 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexos E.50 y E.51 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7476 y 7479).

101 Cfr. Auto emitido por el Juzgado Penal de Distrito de Jinotega el 12 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 39 a la contestación, folio 8318).

102 Al respecto, el defensor de oficio del procesado solicitó que se le permitiera ser auxiliado por dos “doctores”, lo que le fue admitido y que “el [abogado acusador] expresó en esa ocasión de que si él podía estar asistido por dos abogados más, yo creo que le dije que sí, que por mí no había ningún problema, tratándose de la complejidad del caso, pero según recuerdo y creo no equivocarme la [jueza] le dijo al [abogado acusador], que no, y que iba a suspender el jurado, y quedamos de acuerdo en ese momento de que no iba a haber ningún problema”. Acta de declaración testifical del señor Juan Alberto Núñez Gano emitida el 9 de febrero de 2005 (expediente prueba, tomo XVI, anexo E.52 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7481). En igual sentido, Auto emitido por el Juez del Distrito para lo Penal de Jinotega el 15 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.2 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7136 a 7137).

103 Cfr. Acta de integración del jurado de 12 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.1 al sometimiento del caso, folio 6681). Véase también, Informe elaborado por el equipo de casuística del Despacho del Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el 10 de marzo de 2003 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 24 al sometimiento del caso, folio 6892).

99. La señora V.P.C. ha afirmado reiteradamente que, al finalizar la audiencia de vista pública, y antes de que el jurado se reuniera a deliberar en sesión secreta, uno de los abogados de la defensa entregó un paquete en una bolsa gris a la presidenta del jurado, así como dos hojas de papel rosado, que el imputado solicitó que leyeran en la sesión privada<sup>104</sup>. Ello fue corroborado a nivel interno mediante acta de inspección del expediente (*infra* párr. 117) y del video (*infra* párr. 118). La Corte no cuenta con el video de la vista pública, a pesar de haber sido solicitado.

100. Sobre el desarrollo del jurado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en la tarea de fiscalización desarrollada durante el transcurso del juicio por parte de sus funcionarios, consideró que se habían presentado las siguientes supuestas anomalías:

- a) el procesado tuvo tres abogados defensores, incluyéndose el procesado que hizo uso de su propia defensa, mientras la víctima solamente tuvo un acusador, aunque se tiene conocimiento que el [abogado de la parte acusadora] solicitó estuviera presente otro abogado asesor, pero este derecho le fue denegado; [b]) algunos de los miembros del jurado recibieron paquetes en varias ocasiones, a través de los abogados defensores del procesado; c) el Presidente del Tribunal de Jurados, recibió un sobre cerrado que fue ofrecido en público por uno de los abogados defensores del proceso y pidió su contenido fuese leído en privado por los jurados, lo que así se hizo; d) la presencia del Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia y demás miembros del despacho, fue cuestionada por uno de los defensores del procesado, desconociendo la labor [de] la institución, es decir, la Misión que por ley le ha sido encomendada<sup>105</sup>.

104 Cfr. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017. Véase también, Presentación de V.P.C. ante la Comisión IDH de octubre de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 7 al sometimiento del caso, folios 6723 a 6724).

105 Informe elaborado por el equipo de casuística del Despacho del Procurador Especial de la Niñez

101. El 13 de abril de 2002 el Tribunal de Jurados emitió su veredicto, de acuerdo a su íntima convicción, declarando al procesado inocente del delito de violación en perjuicio de V.R.P.<sup>106</sup>. En la misma fecha, el Juzgado de Distrito para lo Penal de Jinotega ordenó la libertad del señor H.R.A.<sup>107</sup>.

102. La señora V.P.C. y su hermana presentaron denuncia ante el Juzgado Local del Crimen de Jinotega contra H.R.A. por amenazas que habrían sufrido la noche del 13 de abril de 2002, fecha del veredicto de absolución<sup>108</sup>.

*G. La continuación del proceso y la confirmación de la sentencia absolutoria*

103. Ante la decisión del Tribunal de Jurados, la acusación privada interpuso incidente de nulidad, por el supuesto cohecho de los miembros del jurado. En el mismo escrito, se solicitó que la jueza se excusara de seguir conociendo la causa por transparencia judicial, ello con base en las siguientes irregularidades ocurridas en el proceso: *a)* permitir la presencia de ocho personas en el primer examen médico; *b)* permitir que la defensa del señor H.R.A. utilice lenguaje que descalificara a la señora V.P.C.; *c)* cancelar la audiencia a ser realizada en la mañana del 10 de abril de 2002 alegando razones legales, cuando en realidad ello aconteció porque había un grupo de niños/as afuera del tribunal reclamando justicia en el caso, y *d)* no permitir la presencia de todas las partes involucradas en la designación del jurado<sup>109</sup>.

y la Adolescencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el 10 de marzo de 2003 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 24 al sometimiento del caso, folio 6892).

106 Cfr. Veredicto N° 33 emitido por el Tribunal de Jurados el 13 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.m al sometimiento del caso, folio 6683).

107 Cfr. Orden de libertad emitido por el Juez del Distrito para lo Penal de Jinotega el 13 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.n al sometimiento del caso, folio 6685).

108 Cfr. Denuncia presentada por las señoras V.P.C. y M.P.C. ante el Juzgado Local del Crimen de Jinotega el 15 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.22 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7375 y expediente de trámite ante la Comisión, tomo XI, folio 4047).

109 Cfr. Incidente de nulidad interpuesto por la representación legal de la señora V.P.C. el 14 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.o al sometimiento del caso, folios 6687 a 6689).

104. El 14 de abril de 2002 el abogado de V.P.C. reiteró su solicitud de nulidad y señaló que “[...] el expediente ha sido cerrado con seiscientos diecisiete folios, no constando en ellos un documento color rosado, manuscrito, entregado por la defensa del procesado al honorable Tribunal de Jurados [...]”<sup>110</sup>.

105. Mediante auto de 15 de abril de 2002<sup>111</sup>, la Jueza de Distrito de lo Penal de Jinotega realizó aclaraciones sobre las irregularidades aducidas (*supra* párr. 103) y con base en la solicitud de excusación interpuesta, remitió el expediente al Juez Suplente de Distrito de lo Penal de Jinotega. Al día siguiente, el abogado defensor solicitó al juez suplente que se excusara de conocer el proceso por estar supuestamente parcializado a favor de una de las partes<sup>112</sup>. El 17 de abril de 2002 el juez suplente negó los motivos invocados por el defensor y envió el expediente al Juez de Distrito Civil de Jinotega<sup>113</sup>. Ese mismo día el abogado de la parte acusadora solicitó que el caso fuera enviado al Tribunal de Apelaciones para que decidiera sobre la excusa legal promovida por la jueza originaria<sup>114</sup>. El 22 de abril de 2002 el abogado acusador remitió una nueva comunicación al Juez de Distrito de lo Civil y Criminal de Jinotega y solicitó que se envíen al Tribunal de Apelaciones para que decida sobre quién debe conocer sobre la excusa legal promovida por la Jueza de Distrito de lo Penal de Jinotega<sup>115</sup>. El 26 de abril de 2002 el abogado defensor solicitó al juez acceder a lo

110 Cfr. Escrito presentado por el abogado acusador al Juez de Distrito del Crimen de Jinotega el 14 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 26 a la contestación, folios 8261 a 8262).

111 Cfr. Auto emitido por el Juez del Distrito para lo Penal de Jinotega el 15 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.2 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7136 a 7137).

112 Cfr. Escrito presentado por el abogado defensor el 16 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.3 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7140).

113 Cfr. Auto emitido por el Juez Suplente del Distrito para lo Penal de Jinotega el 17 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.4 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7142).

114 Cfr. Escrito presentado por el abogado acusador el 17 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.5 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7144).

115 Cfr. Escrito presentado por el abogado acusador el 22 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.6 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7146 a 7147).

solicitado por el abogado de la señora V.P.C., en el sentido de enviar el asunto ante el Tribunal de Apelaciones<sup>116</sup>. El 29 de abril del año 2002 se declaró improcedente la excusa realizada por la jueza de Distrito de lo Penal, así como la recusación realizada por el abogado defensor, por lo que se ordenó regresar el expediente al referido juzgado<sup>117</sup>. El 2 de mayo de 2002 el abogado de la parte acusadora apeló contra dicho auto<sup>118</sup>. El 6 de mayo de 2002 el Juzgado de Distrito de lo Penal de Jinotega declaró improcedente la solicitud de envío del expediente al Tribunal de Apelaciones, asumió competencia y ordenó la apertura a prueba del incidente de nulidad de la parte acusadora<sup>119</sup>. Ese mismo día, el abogado defensor presentó recurso de reposición contra dicho auto<sup>120</sup>, lo cual también habría hecho el abogado de la acusación. El 7 de mayo de 2002 la Jueza de Distrito de lo Penal de Jinotega dispuso notificar a las partes y al ministerio público para que se pronuncien sobre los recursos de reposición, lo cual realizaron el 8 de mayo<sup>121</sup>. En su escrito, el abogado acusador manifestó que los miembros del Tribunal de Jurados se habían estado reuniendo junto con la jueza de derecho y que habrían sido visitados por familiares y amigos del procesado.<sup>122</sup>

116 Cfr. Escrito presentado por el abogado defensor el 26 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.7 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7149).

117 Cfr. Auto emitido por el Juez de Distrito Civil de Jinotega el 29 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.8 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7151).

118 Cfr. Escrito presentado por el abogado acusador el 2 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.9 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7154 a 7155).

119 Cfr. Auto emitido por la Juez del Distrito para lo Penal de Jinotega el 6 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.10 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7157).

120 Cfr. Escrito presentado por el abogado defensor el 6 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.11 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7159 a 7161).

121 Cfr. Auto emitido por la Juez del Distrito para lo Penal de Jinotega el 7 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.12 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7163); Escrito presentado por el abogado defensor el 8 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.13 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7165), y Escrito presentado por el abogado acusador el 8 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.14 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7167 a 7168).

122 Cfr. Escrito presentado por el abogado acusador el 8 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.14 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7167).

106. El 8 de mayo de 2002 la fiscal de Jinotega envió una comunicación al juzgado en la que manifestó que consideraba necesario que el recurso de nulidad se abra a prueba y que se mande a citar a los miembros del jurado que participaron en el veredicto<sup>123</sup>. El 10 de mayo de 2002 el abogado defensor se pronunció sobre el incidente de nulidad interpuesto por la acusación<sup>124</sup>.

107. El 13 de mayo de 2002 el Juzgado de Distrito de lo Penal de Jinotega declaró la nulidad del veredicto en lo que hace al inciso 8° del artículo 444 del Código de Instrucción Criminal. En relación con la acusación de cohecho de los miembros del jurado se basó en que “exist[e] la duda de la parte acusadora”. En virtud de ello, se requirió que se lleve a cabo una nueva selección de jurados y se realice una vista pública<sup>125</sup>. Asimismo, se ordenó la captura del acusado, que se materializó en esa misma fecha<sup>126</sup>.

108. La decisión fue recurrida en apelación por la defensa el 14 de mayo de 2002<sup>127</sup>. Contra el auto admitiendo la apelación, el abogado de la acusación presentó recurso de reposición, el cual fue declarado no ha lugar el 15 de mayo de 2002<sup>128</sup> y la causa remitida al Tribunal de Apelaciones<sup>129</sup>.

109. El 23 de mayo de 2002 tres miembros del Tribunal de Jurados presentaron un escrito ante el Tribunal de Apelaciones de la Circuns-

123 Cfr. Presentación de la Fiscal de Jinotega ante el Juzgado para lo Penal de dicha circunscripción el 8 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.q al sometimiento del caso, folio 6694).

124 Cfr. Escrito presentado por el abogado defensor el 10 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.15 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7170 a 7173).

125 Cfr. Sentencia emitida por el Juzgado de Distrito para lo Penal de Jinotega el 13 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.r al sometimiento del caso, folios 6696 a 6697).

126 Cfr. Orden de captura dirigida al Director de Policía el 13 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.s al sometimiento del caso, folio 6700), y Respuesta a la Orden de Allanamiento y Detención (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.t al sometimiento del caso, folio 6702).

127 Cfr. Escrito presentado por el abogado defensor el 14 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.19 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7182 a 7183).

128 Cfr. Escrito presentado por el abogado acusador el 14 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.20 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7185 a 7186), y Auto emitido por la Juez del Distrito para lo Penal de Jinotega el 15 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.24 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7197).

129 Cfr. Oficio a Juez del Distrito para lo Penal de Jinotega de 15 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.25 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7200).



cripción Norte, Sala de lo Penal, Matagalpa, manifestando su rechazo a las denuncias de la parte acusadora sobre el cohecho y a la decisión del Juzgado de Distrito para lo Penal de Jinotega que declaró la nulidad del veredicto del jurado, por lo que solicitaron que “se [abra] una investigación y que se nos pruebe semejante calumnia y que se nos reciba nuestra declaración”<sup>130</sup>. El abogado que presentó dicho escrito se desempeñó como abogado defensor de H.R.A.

110. El 29 de julio de 2002 la señora V.P.C. solicitó al Fiscal General de la República que designara a un fiscal especializado para que tutelara y garantizara los derechos de su hija en el proceso<sup>131</sup>.

111. El 13 de enero de 2003 la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte de Matagalpa declaró la nulidad sustancial y absoluta del proceso a partir, inclusive, del auto dictado el 13 de mayo de 2002. Ello, con fundamento en que la “duda razonable” sólo podía operar en favor del imputado. Asimismo, en esa oportunidad, el Tribunal de alzada efectuó un llamado de atención a la jueza por haber actuado en forma notoriamente anómala y entendió que como ya había emitido opinión, correspondía remitir las actuaciones al juez subrogante y disponer la inmediata libertad del acusado y que se abra a prueba el incidente de nulidad<sup>132</sup>. Cabe señalar que la citada Sala Penal dejó constancia que la fiscal auxiliar departamental “no se apersonó a la instancia”<sup>133</sup>.

112. Luego de ello, se remitió la causa a la jueza subrogante. El 12 de mayo de 2003 el abogado acusador presentó un escrito ante el Juez

130 Escrito presentado el 23 de mayo de 2002 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VII, folios 2589 a 2591).

131 Cfr. Escrito presentado por V.P.C. el 29 de julio de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.41 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7453 a 7454).

132 Cfr. Sentencia N° 001 emitida por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte, Sala de lo Penal, el 13 de enero de 2003 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 4 a la contestación, folios 8165 a 8178), y Cédula Judicial emitida por el Tribunal de Apelaciones Circunscripción Norte el 17 de enero de 2003 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 19 al sometimiento del caso, folio 6869).

133 Certificación emitida por la secretaria del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Norte Sala Penal el 7 de octubre de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 21 al sometimiento del caso, folio 6873).



Suplente de Distrito de lo Civil y del Crimen, por la cual solicitó dictar auto a la mayor brevedad posible para pronunciarse<sup>134</sup>. El 19 de mayo de 2003 el abogado de V.P.C. solicitó que la jueza se excusara de seguir conociendo la causa en razón de “las múltiples ocupaciones” y de su estado de salud<sup>135</sup>, la cual efectivamente se excusó y pasó el expediente al Juez Suplente de Distrito Penal, quien asumió jurisdicción<sup>136</sup>. El 11 de julio de 2003 el abogado defensor solicitó al juez suplente que se excusara de conocer el proceso, quien ya se había excusado en oportunidad anterior (*supra* párr. 105)<sup>137</sup>. El 12 de agosto de 2003 el Juez suplente no hizo ha lugar a la solicitud de excusación presentada<sup>138</sup>.

113. El 16 de octubre<sup>139</sup> y 26 de noviembre de 2003<sup>140</sup> el abogado de V.P.C. remitió sendos escritos al juez suplente a fin de que asumiera jurisdicción y así evitar la “retardación de justicia en este proceso”, de modo tal que se tramitara el recurso de nulidad del veredicto.

114. No obstante, el 21 de enero de 2004 se remitieron las diligencias al Juzgado de Distrito Civil y Penal para su conocimiento. El 23 de febrero de 2004 ese juez se excusó “sin ningún motivo” de conocer la causa y la remitió al Juzgado Suplente de Distrito Civil. Este último también se excusó de intervenir el 1 de marzo de 2004 y derivó las actuaciones al Juzgado de Distrito Penal de Jinotega<sup>141</sup>.

134 Cfr. Escrito presentado por el abogado acusador el 12 de mayo de 2003 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.16 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7175).

135 Cfr. Escrito presentado por el abogado acusador el 19 de mayo de 2003 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.27 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7205 a 7206).

136 Cfr. Escrito presentado por el abogado acusador el 7 de julio de 2003 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.28 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7208).

137 Cfr. Escrito presentado por el abogado defensor el 11 de julio de 2003 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.29 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7210).

138 Cfr. Auto emitido por el Juez Suplente del Distrito para lo Penal de Jinotega el 12 de agosto de 2003 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.31 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7214).

139 Cfr. Escrito presentado por el abogado acusador el 16 de octubre de 2003 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.32 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7217).

140 Cfr. Escrito presentado por el abogado acusador el 26 de noviembre de 2003 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.33 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7219).

141 Cfr. Informe del Estado de Nicaragua sobre el caso de la niña V.R.P., Petición N° P 4408/02, presentado el 13 de diciembre de 2005 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 17 al sometimiento del

115. El 23 de septiembre de 2004 la señora V.P.C. presentó una solicitud a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia cuestionando la demora en el proceso y solicitando que se agilizará el caso<sup>142</sup>. El 4 de octubre de 2004 la señora V.P.C. presentó otra solicitud ante la Corte Suprema de Justicia por la retardación de justicia<sup>143</sup>. El 9 y 30 de noviembre de 2004 la señora V.P.C. presentó escritos ante el Juzgado de Distrito del Crimen en el cual refirió que habían pasado 23 meses desde que el Tribunal de Apelaciones resolvió sin que se proveyera, por lo que existía un “estado de retardación de justicia”<sup>144</sup>.

116. Finalmente, el 13 de enero de 2005 el Juzgado de Distrito Penal de Juicio asumió jurisdicción y competencia para tramitar la causa y ordenó la apertura a pruebas del incidente de nulidad del veredicto<sup>145</sup>.

117. En ese marco, el 4 de febrero de 2005 se realizó una inspección ocular. En dicha diligencia se verificó que “[...] se procede a revisar el expediente Judicial por el señor Juez y las partes, y se logra corroborar que no existe ningún documento manuscrito color rosado [...]”<sup>146</sup>.

118. Por otra parte, se realizó una inspección ocular en video el 9 de febrero de 2005. En el acta de dicha diligencia se dejó constancia que:

caso, folios 6852 a 6853), y Auto emitido por el Juzgado de Distrito civil suplente y de Distrito Penal por Ministerio de Ley de 1 de marzo de 2004 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.36 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7245).

142 Cfr. Presentación efectuada por la señora V.P.C. ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia el 23 de septiembre de 2004 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 26 al sometimiento del caso, folios 6901 a 6902).

143 Cfr. Carta remitida por V.P.C. a la Presidente de la Corte Suprema de Justicia el 4 de octubre de 2004 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.37 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7248 a 7249).

144 Carta remitida por V.P.C. al Juez de Distrito del Crimen el 9 de noviembre de 2004 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.38 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7251 a 7252), y Carta remitida por V.P.C. al Juez de Distrito del Crimen el 30 de noviembre de 2004 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.34 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7221 a 7225).

145 Cfr. Auto emitido por el Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Jinotega el 13 de enero de 2005 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.39 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7254), e Informe del Estado de Nicaragua sobre el caso de la niña V.R.P., Petición N° P 4408/02, presentado el 13 de diciembre de 2005 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 17 al sometimiento del caso, folios 6852 a 6853).

146 Acta de inspección ocular realizada por el Juzgado de Distrito para lo Penal de Jinotega el 4 de febrero de 2005 (expediente de pruebas, tomo XVII, anexo 37 a la contestación, folio 8307).

[...] el [abogado defensor] tomó una bolsa de color plateado y se [la] entregó a presencia del resto de miembros del Jurado y de las partes presentes, la Juez de Derecho la puso a su lado izquierdo, abriéndola a vista del [secretario].

[...] se observa que el abogado defensor [...] una de las hojas que tiene en su mano una de ellas es de color rosada, se retrocede el vídeo para constatar y se logra verificar que efectivamente es rosada, al efecto manifiesta el [abogado defensor] y dice: Que el defensor de oficio manifestó que su defendido pretende que vosotros recibáis la presente carta y la enseña y es de color rosado, se la entrega a la Jueza de Derecho y le dice: que la lea en su sesión privada, en este acto el [abogado defensor] dice que quiere que quede sentado en acta que la carta fue entrada de manera abierta sin sobre y se le extendió a los miembros del Jurado en presencia de todos; al efecto dice él [abogado de la parte acusadora], pero la misma carta no fue leída públicamente, porque ya escuchamos que la recomendación era leerla en sesión privada; se observa que son dos hojas de papel rosado y la tiene la presidenta del jurado[...]<sup>147</sup>.

119. El 9 de agosto de 2005 el Juez de Distrito para lo Penal de Juicio de Jinotega dictó una nueva sentencia en la que declaró no ha lugar al incidente de nulidad sustancial del Veredicto N° 33 del Tribunal de Jurados y, en consecuencia, que el mismo era firme y con todos sus efectos jurídicos en cuanto declaró la inocencia del señor H.R.A. Consideró, en relación con el alegato de cohecho de los jurados previsto en el artículo 444 inciso 8, que ello había sido resuelto y descartado mediante la Sentencia N° 001 de la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte de Matagalpa, de 13 de enero de 2003, según la cual dicha causal no fue interpuesta oportunamente ni probada de modo explícito. Además, concluyó que se cumplieron los requisitos legales en la conformación del jurado y en la emisión de la sentencia de

<sup>147</sup> Acta de inspección ocular en vídeo emitida por el Juzgado de Distrito para lo Penal de Jinotega el 9 de febrero de 2005 (expediente de pruebas, tomo XVI, anexo E.54 al escrito de argumentos, solicitudes y pruebas, folios 7487 a 7490).

primera instancia. Asimismo, sostuvo que no existió acción u omisión alguna que diera lugar a la nulidad del veredicto. Finalmente, el juzgado valoró un pronunciamiento del Procurador Especial de la Niñez y Adolescencia en el que se habría indicado que no se presentaron anomalías en el proceso<sup>148</sup>.

120. El 25 de agosto de 2005 el fiscal auxiliar del Ministerio Público apeló la sentencia<sup>149</sup>. Lo mismo hizo la representación legal de la señora V.P.C.<sup>150</sup>.

121. El 24 de enero de 2007 la secretaría de la Sala Penal de Apelaciones Circunscripción Norte dejó constancia que el proceso se encontraba en estado de fallo y, además, que mediante auto del 3 de noviembre de 2005 se corrió traslado al fiscal auxiliar del Ministerio Público y que éste “no hizo uso de sus derechos por no haber sacado [sic] el traslado ni expresado agravios”<sup>151</sup>.

122. El 24 de octubre de 2007 la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte de Matagalpa dictó sentencia rechazando los recursos de apelación. En consecuencia, declaró firme el Veredicto N° 33 y la inocencia del señor H.R.A. Además, agregó que contra dicha decisión no cabía ulterior recurso. Respecto al cohecho alegado, en la citada resolución se consideró, entre otras cosas, que del acta de la inspección realizada en la cinta de video de la audiencia cuestionada se desprende que:

[...] a la juez de derecho, quien fungía como presidenta del tribunal de jurado, le fue entregado un papel rosado, a vista de las partes, que la representante del

148 Cfr. Sentencia emitida por el Juzgado de Distrito para lo Penal de Juicio de Jinotega el 9 de agosto de 2005 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 29 al sometimiento del caso, folios 6915 a 6928).

149 Cfr. Apelación presentado por el fiscal auxiliar del Ministerio Público el día 25 de agosto de 2005 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 30 al sometimiento del caso, folio 6930).

150 Cfr. Sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte de Matagalpa el 24 de octubre de 2007 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 31 al sometimiento del caso, folios 6932 a 6952).

151 Constancia emitida por la Sala Penal Tribunal de Apelaciones Circunscripción Norte el 24 de enero de 2007 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.42 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7265).

Ministerio [Público], refirió renunciar a su intervención si no se le estaba poniendo atención, que se entrega un paquete color plateado del cual dos miembros del jurado ponen atención; sin embargo con esta inspección no se evidencia prueba que demuestre el cohecho a los miembros del jurado, por cuanto [...] en la cinta que aporta debió observarse tanto la protesta del acusador como por la señora Procuradora actuante durante la audiencia del jurado [...] situación inexistente en la audiencia descrita por Juez A-quo [...] con cada una de las pruebas relacionadas al incidente no logra demostrar la causal de cohecho [...] por cuanto las pruebas aportadas relatan incidencias que sucedieron a lo largo de la audiencia del jurado; sin embargo, tales incidencias son insuficientes para que esta Sala tenga por acreditado que el jurado recibió dádiva, promesa o recompensa por el veredicto dictado a favor del procesado, debiendo la parte incidentista acreditar en que consiste la dádiva, recompensa, quien la entregó, en qué lugar, a quien se le entregó, de qué manera la recibió el tribunal de jurado [...] <sup>152</sup>.

123. La Sala de lo Penal no habría visualizado el video, sino que sus afirmaciones se basaron en el acta (*supra* párr. 118). El referido video no fue aportado a esta Corte, a pesar de la solicitud de prueba para mejor resolver (*supra* párr. 12).

124. El señor H.R.A. falleció el 29 de agosto del año 2008 <sup>153</sup>.

*H. Las quejas presentadas por la señora V.P.C. por en el transcurso de la investigación y del proceso irregularidades*

125. Además de promover, a través de sus representantes legales, la acusación contra el señor H.R.A. durante el transcurso del proceso, la señora V.P.C. realizó otras gestiones con el objetivo de denunciar

<sup>152</sup> Sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte de Matagalpa el 24 de octubre de 2007 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 31 al sometimiento del caso, folios 6932 a 6952).

<sup>153</sup> Cfr. Acta de certificado de defunción de H.R.A. (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 43 a la contestación, folio 8344).

presuntas irregularidades en el transcurso de la investigación y del proceso.

*a) Quejas de V.P.C. contra el médico forense*

126. El 22 de noviembre de 2001 la señora V.P.C. presentó un escrito al Director del Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) del departamento de Jinotega, mediante el cual denunció el comportamiento del médico forense cuando realizó el examen médico a V.R.P.<sup>154</sup>. El 26 de noviembre de 2001 el SILAIS de Jinotega le informó que no podía tramitar la misma, toda vez que al ser médico forense nombrado por la Corte Suprema de Justicia no dependía del Ministerio de Salud, por lo que la queja debía interponerse ante la Corte Suprema de Justicia<sup>155</sup>.

127. El 30 de abril de 2002 la señora V.P.C. presentó una queja ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia contra el médico forense<sup>156</sup>, lo cual fue reiterado el 22 de julio del mismo año<sup>157</sup>. El 1 de julio de 2003 la abogada de la señora V.P.C. presentó un oficio a la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia, en el cual arguyó la parcialidad con que habría actuado el médico forense. Además, indicó que el hermano del citado médico participó en el proceso penal como testigo a favor del acusado y que interpuso una acción penal por injurias y calumnias contra V.P.C.<sup>158</sup> Según indicó el Estado, dicha queja no se habría tramitado por falta de pruebas y, por ende, se ordenó su archivo.

154 Cfr. Presentación efectuada por la señora V.P.C. ante el director del Sistema Local de Atención Integral en Salud el 22 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 9 al sometimiento del caso, folios 6769 a 6770).

155 Cfr. Oficio del SILAIS Jinotega remitido el 26 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XX, anexo 7.b de la prueba para mejor resolver, folio 9705).

156 Cfr. Denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia el 30 de abril de 2002 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VII, folios 2819 a 2820).

157 Cfr. Denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia el 22 de julio de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.27 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7403 a 7404).

158 Cfr. Presentación efectuada por la representante legal de la señora V.P.C. ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia el 1 de julio de 2003 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 25 al sometimiento del caso, folios 6895 a 6899).

*a) Quejas de V.P.C. contra la fiscal auxiliar departamental*

128. El 17 de julio de 2002 la señora V.P.C. dirigió escrito al Fiscal General de la República, presentando queja contra la fiscal auxiliar departamental, denunciando actuación negligente por parte de la funcionaria durante el proceso penal por violación sexual<sup>159</sup>. La queja fue reiterada posteriormente, el 29 de julio<sup>160</sup> y el 26 de agosto de 2002<sup>161</sup>, ante de la falta de respuesta de la primera.

129. El 21 de octubre de 2002 la señora V.P.C. presentó una queja contra la fiscal auxiliar del Departamento de Jinotega ante la Inspectoría de la Fiscalía General de la República aduciendo que la fiscal del caso no se apersonó al proceso en segunda instancia<sup>162</sup>. En esta línea, sostuvo que la fiscal no garantizó los derechos de su hija. No obstante ello, el Estado informó que no se habría presentado ninguna queja por la señora V.P.C. contra la referida fiscal en el año 2002<sup>163</sup>. No hay constancia sobre el trámite de este proceso.

130. El 8 de noviembre de 2002 la señora V.P.C. presentó una queja contra la fiscal auxiliar departamental ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia<sup>164</sup>. La referida Comisión Disciplinaria resolvió oficiar al Fiscal General de la República respecto a la queja interpuesta en contra de la misma, el cual fue recibido en dicha dependencia el 20 de enero de 2003<sup>165</sup>. No hay constancia sobre el trámite de este proceso.

159 Cfr. Denuncia presentada ante el Fiscal General de la República el 17 de julio de 2002 (expediente de pruebas, tomo XVI, anexo E.34 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7432 a 7433).

160 Cfr. Escrito presentado ante el Fiscal General de la República el 29 de julio de 2002 (expediente de pruebas, tomo XVI, anexo E.35 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7435 a 7436).

161 Cfr. Escrito presentado ante el Fiscal General de la República el 26 de agosto de 2002 (expediente de pruebas, tomo XVI, anexo E.42 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7456).

162 Cfr. Denuncia presentada ante la Inspectoría de la Fiscalía General de la República el 21 de octubre de 2002 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VII, folios 2814 a 2818).

163 Cfr. Constancia emitida por la Inspectoría General del Ministerio Público el 15 de febrero de 2017 (expediente de prueba, tomo XX, anexo 7.c de la prueba para mejor resolver, folio 9730).

164 Cfr. Denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia el 8 de noviembre de 2002 (expediente de prueba, tomo XX, anexo 7.a de la prueba para mejor resolver, folios 9649 a 9661).

165 Cfr. Oficio dirigido al Fiscal General de la República (expediente de prueba, tomo XX, anexo 7.a de la prueba para mejor resolver, folio 9665).

*b) Queja de V.P.C. contra la jueza a cargo del proceso y la jueza de derecho que fungió como presidenta del Tribunal de Jurados*

131. El 8 de noviembre de 2002 la señora V.P.C. presentó una queja ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia alegando las irregularidades presuntamente cometidas por la jueza a cargo del proceso y por la jueza de derecho que fungió como presidenta del Tribunal de Jurados. Agregó, además, que una de las magistradas permitió que la defensa del señor H.R.A. se refiriera a ella y a su hija en términos inmorales<sup>166</sup>.

132. Luego de que ambas juezas presentaran sus descargos, el 24 de febrero de 2003 la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia resolvió archivar el expediente<sup>167</sup>.

*I. Las acciones intentadas contra la señora V.P.C. y sus familiares*

133. A raíz de las quejas presentadas por V.P.C., la fiscal auxiliar departamental<sup>168</sup>, el médico forense<sup>169</sup>, una integrante del Tribunal de Ju-

<sup>166</sup> Cfr. Denuncia interpuesta por la señora V.P.C. ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia el 8 de noviembre de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 23 al sometimiento del caso, folios 6881 a 6888).

<sup>167</sup> Cfr. Decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia el 24 de febrero de 2003 (expediente de prueba, tomo XX, anexo 7.a de la prueba para mejor resolver, folio 9686).

<sup>168</sup> En el mes de diciembre de 2001 la fiscal auxiliar departamental interpuso una acción penal contra la señora V.P.C. por calumnias. No hay constancia sobre el trámite de este proceso. Cfr. Boleta de citación judicial dirigida a V.P.C. para que comparezca a prestar declaración, de 19 de diciembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexos E.75 y E.76 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7553 y 7555). Véase también, Escrito de V.P.C. dirigido a la Comisión, de 16 de abril de 2009 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 37 al sometimiento del caso, folio 7006), y Declaración rendida ante fedatario público por N.R.P. el 10 de octubre de 2017 (expediente de prueba, tomo XVIII, *affidavits*, folio 8379).

<sup>169</sup> El 25 de abril de 2002 el médico forense presentó una acción penal contra la señora V.P.C. por injurias, con motivo de las denuncias realizadas por ésta tras el intento de realizar el examen médico a la niña V.R.P. Dicha causa concluyó en "caducidad a la instancia". Cfr. Escrito presentado el 25 de abril de 2002 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VII, folios 2491 a 2493), y Constancia del Juzgado Local Penal de Jinotega de 23 de julio de 2009 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo XI, folio 4036). A su vez, el 21 de mayo de 2002 el médico forense presentó una acción penal en contra de V.P.C. por calumnias. El abogado del denunciante fue el hermano del médico forense. No hay constancia sobre el trámite de este proceso. Cfr. Escrito presentado el 21 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 35 al sometimiento del caso, folios 6987 a 6990). El 22 de mayo de 2002 el médico forense presentó una acción penal contra la madre de V.P.C. por injurias y calumnias, por haber "hablado mal de él ante la



rados<sup>170</sup> y la jueza de derecho y presidenta del Tribunal de Jurados<sup>171</sup>, presentaron acciones contra V.P.C. y sus familiares por los delitos de injurias y calumnias. Los abogados que apoyaron legalmente dichas acciones se encontraban relacionados con el imputado. Entre ellos, el hermano del médico forense, quien era persona conocida de H.R.A. y declaró como testigo en el proceso a favor del acusado<sup>172</sup>.

*J. La salida de la señora V.P.C. junto a sus hijas a los Estados Unidos de América*

134. El 6 de diciembre de 2002 la señora V.P.C. salió de Nicaragua junto con sus dos hijas V.R.P. y N.R.P.<sup>173</sup>, e ingresó a los Estados Unidos donde se les concedió el asilo<sup>174</sup>.

Juez de Distrito del Crimen” en su declaración testimonial. Cfr. Comunicación de la peticionaria dirigida a la Comisión de 16 de abril de 2009 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 37 al sometimiento del caso, folio 7027). La causa concluyó en “caducidad a la instancia”. Cfr. Constancia del Juzgado Local Penal de Jinotega de 23 de julio de 2009 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo XI, folio 4037).

170 El 7 de mayo de 2002 una persona que formó parte del Tribunal de Jurados presentó una acción penal en contra de V.P.C. y de dos periodistas por el delito de calumnia, con motivo de las denuncias por cohecho realizadas por ésta y su publicación en la prensa. En dicha causa nombró como su abogado al hermano del médico forense. Cfr. Escrito presentado ante el Juez Local para lo Criminal de Jinotega el 7 de mayo de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 34 al sometimiento del caso, folios 6980 a 6982). Los periodistas llegaron a una mediación, en la cual se comprometieron a no involucrar a la denunciante en su información periodística. Cfr. Acta de trámite de mediación de 14 de mayo de 2002 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VII, folio 2584). El 17 de diciembre de 2004 se declaró la caducidad de la instancia por falta de impulso procesal de las partes y archivo de la denuncia por calumnias contra V.P.C. Cfr. Oficio del Juez Local Penal de Jinotega de 1 de febrero de 2005 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 36 al sometimiento del caso, folio 6992).

171 El 8 de mayo de 2002 la jueza de derecho y presidenta del Tribunal de Jurados presentó una acción penal en contra de la señora V.P.C. y su hermana, por injurias y calumnias. Cfr. Escrito presentado el 8 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 34 al sometimiento del caso, folios 6983 a 6985). El abogado de la denunciante fue también abogado defensor de H.R.A. El 25 de agosto de 2003 se habría archivado la referida acción por falta de impulso procesal. Cfr. Oficio del Juez Local Penal de Jinotega de 1 de febrero de 2005 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 36 al sometimiento del caso, folio 6992).

172 Cfr. Declaración indagatoria rendida por H.R.A. el 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 2.d al sometimiento del caso, folios 6640 y 6644), y Presentación efectuada por la representante legal de la señora V.P.C. ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia el 1 de julio de 2003 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 25 al sometimiento del caso, folio 6897).

173 Cfr. Informe de movimientos migratorios de V.P.C. y V.R.P. emitido por el Director de la Dirección de Migraciones de Nicaragua el 6 de mayo de 2014 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 41 a la contestación, folios 8334 a 8336).

174 Cfr. Presentación efectuada por la representante legal de la señora V.P.C. ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia el 1 de julio de 2003 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 25

135. Una vez radicadas en los Estados Unidos, la niña V.R.P. inició un tratamiento psiquiátrico en el mes de octubre de 2003 debido a “sus severos síntomas relacionados con el abuso sexual que sufrió”<sup>175</sup>. Tales síntomas consistían en depresión, ansiedad, hipervigilancia, y comportamiento automutilatorio.

136. En el año 2003 cuando se encontraba ya instalada en los Estados Unidos, la señora V.P.C. manifestó que “h[abía] recibido un anónimo donde una persona [le] hac[ía] ver que ya sab[ía] dónde [se] enc[ontraba] y que pronto vendrá, ha intervenido la Oficina de Inspection Service Post Office, y el Departamento de Niños y Familia a través de Child Protective investigador, para proteger a mi hija de eventuales amenazas de muerte que pudieran llegar a materializarse, y todo por el descuido y abandono generalizado a que las autoridades judiciales nicaragüenses han sometido a toda una familia”<sup>176</sup>.

137. Con posterioridad, el 1 de abril de 2008 la niña V.R.P. tuvo que ser hospitalizada en la ciudad de Miami durante más de quince días debido a su tratamiento frente a la depresión post-traumática<sup>177</sup>. La afectación psicológica de la niña ya había sido señalada mediante diagnósticos e informes psicológicos y psiquiátricos realizados en Nicaragua durante y después del proceso penal por violación sexual<sup>178</sup>.

al sometimiento del caso, folios 6897 a 6898); Resolución de la Corte de Inmigración de Miami, Florida, de 23 de septiembre de 2003 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 40 al sometimiento del caso, folios 7055 a 7058), y Resoluciones de la Corte de Inmigración de Miami, Florida, de 22 de marzo de 2005 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 39 al sometimiento del caso, folios 7050 a 7053).

175 Oficio de Kristi House, organización no gubernamental sin fines de lucro en Miami, Florida, de 3 de enero de 2005 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 41 al sometimiento del caso, folio 7060).

176 Comunicación de la peticionaria a la Comisión de 24 de noviembre de 2003 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 38 al sometimiento del caso, folio 7048).

177 Cfr. Constancia de hospitalización de V.R.P. en Miami Children’s Hospital de 3 de abril de 2008 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.20 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7359), y Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

178 Cfr. Informe psicológico del Instituto de Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, de 27 de noviembre de 2001 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo III, folio 1099); Diagnóstico psiquiátrico de 25 de enero de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.5 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7289 a 7290); Informe de seguimiento a la niña V.R.P. elaborado el 21 de febrero de 2002 por la Dra. María Delma Terán Caldera, médica psiquiatra del Hospital Victoria Motta,

138. Luego de su salida, la señora V.P.C. ha regresado en dos oportunidades a Nicaragua, mientras que V.R.P. nunca ha retornado<sup>179</sup>.

## VIII

### Fondo

139. En el presente capítulo, la Corte abordará el examen de fondo del caso. La Corte se encuentra llamada en el presente caso a analizar la alegada responsabilidad internacional del Estado con base en sus obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana, y de manera particular de la Convención de Belém do Pará, en el caso de una niña quien fue víctima de violación sexual a la edad de ocho años, cometida por parte de un actor no estatal. De acuerdo a los alegatos presentados, la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua se habría configurado por una serie de acciones y omisiones estatales frente a la violación sexual, que no habrían respetado el deber de debida diligencia reforzada y protección especial, y que habrían tenido tal entidad que provocaron una situación de revictimización con grave afectación a diversos derechos de las presuntas víctimas.

140. Por consiguiente, a fin de abordar los alegatos presentados, la Corte procederá de la siguiente manera: en primer lugar, examinará todos los alegatos referidos a la obligación de investigar y el deber de debida diligencia reforzada y protección especial, así como lo referido a las garantías judiciales en el caso de juicio por jurados y el plazo razonable, junto con las obligaciones previstas en el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará. Posteriormente, estudiará los alegatos

Jinotega (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 17 al escrito de contestación, folios 8232 a 8233), e Informe psicosocial realizado en el hogar de V.P.C. por el Ministerio de la Familia a los efectos del juicio de disolución de vínculo matrimonial entre V.P.C. y H.R.A. de 11 de julio de 2002 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VIII, folios 3281 a 3290).

179 Cfr. Informe de movimientos migratorios de V.P.C. y V.R.P. emitido por el Director de la Dirección de Migraciones de Nicaragua el 6 de mayo de 2014 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 41 a la contestación, folios 8334 a 8336).

relativos a la supuesta discriminación en el acceso a la justicia basada en motivos de sexo y género, así como en la condición de persona en desarrollo de la presunta víctima, en los términos de los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana, y se referirá a la alegada situación de revictimización en la niña y su núcleo familiar. Luego, la Corte considerará los alegatos de las representantes respecto de los artículos 12.1, 17.1, 19 y 22.1 de la Convención Americana. Finalmente, abordará las alegadas violaciones a la integridad personal de los familiares bajo el artículo 5 de la Convención Americana

### VIII-1

Derechos a la integridad personal<sup>180</sup>, a la vida privada y familiar<sup>181</sup>, a los derechos de la niña<sup>182</sup>, a la igualdad ante la ley<sup>183</sup>, a las garantías judiciales<sup>184</sup> y a la protección judicial<sup>185</sup>, en relación con las obligaciones

180 Los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención disponen que: “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

181 El artículo 11.2 de la Convención establece que: “[n]adie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.

182 El artículo 19 de la Convención dispone que: “[t]odo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

183 El artículo 24 de la Convención establece que: “[t]odas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

184 El artículo 8.1 de la Convención dispone que “[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

185 El artículo 25 de la Convención establece, en lo pertinente, que:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso.

de respetar y garantizar los derechos y de no discriminar<sup>186</sup>, así como con el artículo 7.b) de la convención de Belém do Pará<sup>187</sup>

141. La Corte dividirá su análisis en cuatro apartados. En primer lugar, la Corte centrará su análisis sobre la cuestión de si las investigaciones y el proceso penal iniciados a nivel interno por el Estado, debido a la denuncia por violación sexual interpuesta por la madre de V.R.P., cumplieron con el deber de debida diligencia reforzada y de no revictimización en investigaciones y procesos penales por violencia sexual en perjuicio de una niña<sup>188</sup>. Asimismo, analizará si Nicaragua actuó con perspectiva de género y niñez y adoptó las medidas de protección especial requeridas para garantizar los derechos de V.R.P. en el desarrollo de la investigación y proceso penal por los hechos de este caso. Luego, la Corte examinará lo relativo a la aplicabilidad de las exigencias del debido proceso al modelo de juicio por jurados vigente en Nicaragua al momento de los hechos y las alegadas violaciones a la garantía de imparcialidad y al deber de motivar, así como en lo atinente al plazo razonable. Finalmente, desarrollará las exigencias debidas para garantizar un acceso a la justicia en términos igualitarios para una niña víctima de violencia sexual y se referirá a la revictimización como una forma de violencia institucional.

186 El artículo 1.1 de la Convención fija que: “[l]os Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

187 El artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará establece que: “[l]os Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: [...] b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

188 Aun cuando la Corte utilizará el término niña durante el desarrollo de la presente Sentencia, por tratarse el caso de una niña quien fue víctima de violencia sexual, los criterios jurisprudenciales que se desarrollen a lo largo de la misma, serán aplicables tanto a niñas, como a niños y adolescentes, sin distinción alguna.

A. *Debida diligencia reforzada y protección especial en investigaciones y procesos penales por violencia sexual en perjuicio de niñas, niños o adolescentes y deber de no revictimización*  
 A.1 *Argumentos de las partes y de la Comisión*

142. La *Comisión* consideró que el proceso judicial seguido por la violación sexual en contra de la niña V.R.P. no fue realizado con la debida diligencia a efectos de esclarecer los hechos y sancionar a la persona responsable. La *Comisión* estimó que, debido a las omisiones e irregularidades en la investigación, el Estado no garantizó los derechos a la integridad personal, vida privada, dignidad y autonomía de V.R.P., sino que, por la manera en que se llevó a cabo la investigación y la consecuente impunidad en que se encuentran los hechos, el Estado materializó violaciones adicionales a la integridad personal de V.R.P., así como a aspectos esenciales de su vida privada, dignidad y autonomía. La *Comisión* consideró que el presente caso era emblemático de la situación de violencia institucional y la desprotección y revictimización por parte del Estado en contra de mujeres y niñas víctimas de violencia y violación sexual que acuden al sistema de justicia. La *Comisión* alegó que, debido a las circunstancias particulares del caso, se exigía los más rigurosos estándares de actuación por parte de las autoridades, tanto en la investigación como para generar una situación de protección a la víctima y su familia, que evitara a toda costa su revictimización y procurara su reintegración. Conforme a lo señalado por la *Comisión*, el Estado no habría cumplido con estas obligaciones reforzadas en consideración del interés superior de la niña y su derecho a ser escuchada.

143. En particular, resaltó que el Estado actuó en vulneración de la debida diligencia debido a que: a) a pesar de que a través de consultas médicas privadas se determinó que V.R.P. había sido víctima de agresión sexual, el Estado ordenó la realización de un nuevo examen médi-

co, el cual además no fue realizado a la brevedad, y se intentó llevar a cabo hasta en tres oportunidades, en vez de adoptar medidas para procurar que la información disponible hasta ese momento fuera relevante para el proceso; *b*) el trato recibido por parte del médico legista a cargo de realizar el examen médico a la niña, fue denigrante y violento, y el Estado no demostró que el médico en cuestión era imparcial, idóneo y estaba capacitado para realizar este tipo de exámenes a niñas víctimas de violencia sexual; *c*) la actuación irregular del médico, denunciada a nivel interno, constituyó un grave acto de revictimización y un nuevo hecho de violencia sexual contra V.R.P.; *d*) el Estado no demostró haber ofrecido la posibilidad a V.R.P. y a su madre de manifestar su preferencia sobre el sexo del personal de salud que la atendería; *e*) el examen médico contó con la presencia injustificada de personal no médico, lo cual generó temor en V.R.P.; *f*) no se justificó la absoluta y estricta necesidad de que V.R.P. tuviera que participar en la inspección ocular y la reconstrucción de los hechos, la cual además fue practicada de forma revictimizante, ya que la jueza le pidió a la niña que se colocara en la misma posición en la que, conforme a su relato, la habría puesto el agresor; *g*) no existe información sobre las medidas especiales adoptadas para proteger a V.R.P. en su condición de niña víctima de violencia sexual ni si se le brindó acompañamiento psicológico durante la diligencia de la reconstrucción de los hechos; *h*) durante el proceso penal relacionado con la violación sexual de la niña, el Estado no brindó a V.R.P. los servicios de salud necesarios a efectos de resguardar su salud física y psicológica una vez conocidos los hechos por las autoridades, sustentándose en que Nicaragua era un Estado pobre, justificación que resulta incompatible con los principios del derecho internacional; *i*) el Estado tampoco brindó una protección especial materializada no solo en un acompañamiento durante el proceso sino también en medidas que procuraran su rehabilitación y reinserción en su entorno, así como

el de su familia, y j) no existió una participación permanente y efectiva de entidad especializada alguna para proteger los derechos de V.R.P.

144. Asimismo, la Comisión consideró que la falta de atención médica e integral, sumada a la situación de impunidad, agravó el estado de salud mental de V.R.P., generando que las secuelas tanto de la violación sexual como de la respuesta inadecuada de las autoridades estatales, se profundizaran. En este sentido, la Comisión observó que el Estado llevó a cabo un proceso penal plagado de falencias y formas de revictimización, al cual la niña tuvo que estar sometida durante parte significativa de su niñez. En consecuencia, la Comisión consideró que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, así como el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de V.R.P. y V.P.C. Asimismo, concluyó que el Estado incumplió su deber de garantía respecto de los derechos a la integridad personal, vida privada, dignidad y autonomía de V.R.P., por lo que también es responsable por la violación de los artículos 5.1, 11.2 y 19 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de V.R.P.

145. Las *representantes* señalaron que el Estado no pudo darle respuestas efectivas a la presunta víctima. Asimismo, alegaron que el Estado incurrió directamente en vulneraciones a la integridad personal de la niña, ya que la expuso a una revictimización innecesaria e imprudente, al realizar una evaluación médica corporal en presencia de varias personas, inclusive ajenas a la investigación, afectando de esta manera la dignidad y vida privada de la niña V.R.P., y ejerciendo violencia psicológica y moral. Según las representantes, V.P.C. no solicitó la junta médica conformada para el primer examen médico, sino que lo habría hecho la jueza a cargo del caso. De igual manera, las representantes indicaron que la jueza del caso también revictimizó a V.R.P. durante la



diligencia de la reconstrucción de los hechos, ya que le solicitó que se colocara en la posición en la fue violada y recreó la vivencia traumatizante de la niña. Agregaron que, a pesar de que la madre solicitó la diligencia, correspondía al Estado determinar cuáles eran las medidas más protectoras a adoptar, y que la actuación de la diligencia no podía ser considerada como responsabilidad de V.P.C. Las representantes resaltaron la falta de especialización del médico forense y de la jueza para casos como el presente, ya que actuaron sin brindarle un trato adecuado a su condición, atendiendo al interés superior de la niña. Conforme a las representantes, el actuar del médico y de la jueza implicó someter nuevamente a V.R.P. a actos de violencia, sin que el Estado haya adoptado medidas especiales de protección y asistencia ante su condición de niña y mujer, haciéndola víctima de una doble agresión, la cual además constituyó violencia institucional. Consideraron que el Estado no veló por el interés superior de la niña ni procuró la protección de V.R.P. para salvaguardar su posterior desarrollo, incluyendo las atenciones necesarias tanto para su salud física (producto del virus del papiloma humano y de la condición de su cuerpo) como para su salud psíquica, sino que más bien el Estado incentivó el trauma de la niña, en violación de su obligación de protección reforzada. Con base en lo alegado, las representantes concluyeron que el Estado violó los artículos 1.1, 5.1, 11, 19 y 24 de la Convención Americana, así como el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará.

146. El *Estado* destacó que la violación sexual cometida en perjuicio de V.R.P. no fue cometida por un agente estatal ni por una persona que hubiere actuado con la aquiescencia del Estado y que, al ser la obligación de investigar de medios y no de resultados, la autoridad judicial realizó una investigación diligente y efectiva. Respecto a los exámenes médicos practicados dentro del proceso penal y la revictimización, señaló que no versaba en el expediente de tramitación ni en los escritos

de V.P.C. dirigidos al Director del Hospital Victoria Motta ni en el expediente de queja contra el médico forense, las frases que se alegó que habría proferido en contra de la niña al momento de su evaluación. El Estado consideró que no existían comunicaciones que aseveraran que dichas expresiones fueron exteriorizadas por el médico, siendo “preocupante” para el Estado que se traigan a colación, después de muchos años, expresiones que no fueron documentadas. El Estado afirmó que la renuencia de V.R.P. a ser examinada no fue producto del actuar del médico forense, sino que obedecía a la situación traumática vivida por la niña, lo cual podía ser corroborado con los testimonios de los dos primeros médicos que la valoraron en consulta privada. Asimismo, el Estado alegó que durante la valoración médico forense estuvieron presentes los especialistas que la madre de la niña solicitó. En relación con la idoneidad, independencia e imparcialidad del personal médico que llevó a cabo dicha diligencia, el Estado afirmó que eran aptos para realizar dicha valoración pues cumplían con los requisitos y calidades para ser médicos forenses, conforme a la normativa interna vigente. El Estado señaló que, ante el alegado comportamiento del médico forense en perjuicio de V.R.P., se inició un proceso de queja la cual no fue tramitada por falta de pruebas, y añadió que dicho médico ya no laboraba para el Poder Judicial debido a su renuncia a dicho cargo.

147. En relación con la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos, el Estado señaló que se realizó conforme a lo indicado en el código procesal de la época y a solicitud de V.P.C. En dicha reconstrucción la niña estuvo acompañada por su madre V.P.C. y fue asistida por la psiquiatra asignada con el fin de darle seguimiento. El Estado manifestó que no constaba en el expediente la presencia del acusado durante dicha diligencia, medida que fue adoptada para salvaguardar la integridad de la niña. El Estado, a su vez, negó la revictimización y la existencia de maltrato a la niña en dicho procedimiento.

148. El Estado contravirtió la afirmación de que V.R.P. no habría recibido asistencia psicológica o psiquiátrica, ya que afirmó que la autoridad judicial ordenó, desde el primer momento en que tuvo conocimiento de la violación sexual, la intervención de una psiquiatra para valorar a V.R.P. Asimismo, destacó que se remitió a la niña al Instituto de Medicina Legal para su valoración física y psicológica, y se brindó el acompañamiento en la inspección ocular. Subrayó que, en el caso en concreto, el Estado tomó las atenciones necesarias para la salud física y psíquica de V.R.P. a través del Hospital Victoria Motta. El Estado señaló que la atención médica fue constante, sin embargo, no pudo ser brindada luego de que V.P.C. y su hija salieran del país, pues el Estado no tenía posibilidad de brindar el tratamiento recomendado fuera de Nicaragua, lo cual no le sería imputable.

149. Finalmente, el Estado señaló que, en el presente caso, cumplió con los estándares de debida diligencia en investigaciones por la comisión de delitos sexuales, ya que: *a)* la declaración de V.R.P. se llevó a cabo en un ambiente cómodo y seguro, se le brindó privacidad y confianza, y contó con la presencia de su madre; *b)* la declaración de V.R.P. fue clara, precisa, tuvo libertad de expresar lo sucedido, no se le hicieron preguntas revictimizantes y no fue citada nuevamente para rendir declaración, limitando la necesidad de repetición; *c)* se le brindó atención médica, sanitaria y psicológica desde que se tuvo conocimiento del hecho, por lo que la psiquiatra asignada le dio seguimiento a la niña durante todo el procedimiento; *d)* inmediatamente después de presentada la denuncia se ordenó la realización del examen médico y psicológico a V.R.P. por personal idóneo y capacitado; *e)* se llevaron a cabo una serie de actos investigativos y se detuvo al denunciado; *f)* se brindó acceso a asistencia jurídica gratuita; *g)* se mantuvo el proceso en reserva para preservar la privacidad de la víctima, y *h)* con el fin de evitar la revictimización, y conforme al informe de la psiquiatra, mediante

el cual se recomendó no permitir que la víctima siguiera encontrándose presente en los recuerdos del hecho, el Estado determinó que V.R.P. no compareciera más en el proceso interno.

## *A.2 Consideraciones de la Corte*

150. La Corte ha establecido que, de conformidad con la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)<sup>189</sup>. Asimismo, ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables<sup>190</sup>.

151. La Corte ha señalado, en su jurisprudencia reiterada, que el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. La obligación referida se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la vio-

189 Cfr. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares*, supra, párr. 91, y *Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C No. 339, párr. 147.

190 Cfr. *Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114, y *Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala*, supra, párr. 147.

lación, aun los particulares, pues, si sus actos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”<sup>191</sup>. Asimismo, la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención<sup>192</sup>.

152. Por otra parte, la Corte recuerda que, en casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b), dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De este modo, ante un acto de violencia contra una mujer, sea cometida por un agente estatal o por un particular, resulta especialmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección<sup>193</sup>.

153. En este sentido, el Tribunal ha establecido que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección,

191 *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra*, párr. 177, y *Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307*, párr. 143.

192 *Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120*, párr. 83, y *Caso Pacheco León y otros Vs. Honduras, supra*, párr. 75.

193 *Cfr. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215*, párr. 193, y *Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala, supra*, párr. 149.

con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y, a la vez, fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva<sup>194</sup>.

154. Para casos de violencia y violación sexual en contra de mujeres adultas, la Corte ha establecido una serie de criterios que los Estados deben seguir para que las investigaciones y procesos penales incoados sean sustanciados con la debida diligencia<sup>195</sup>. En el presente caso, la Corte tiene la oportunidad de referirse a la obligación que tiene un Estado cuando las investigaciones y proceso penal se dan en el marco de un caso de violación sexual cometida en contra de una niña. Por ende, la Corte adoptará un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad de la niña.

155. La Corte considera que, sin perjuicio de los estándares establecidos en casos de violencia y violación sexual contra mujeres adultas, los Estados deben adoptar, en el marco del acatamiento del artículo 19 de la

194 Cfr. *Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México*, *supra*, párr. 258, y *Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil*, *supra*, párr. 243.

195 Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia; vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso, y vii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación. Asimismo, en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género. Cfr. *Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México*, *supra*, párr. 455; *Caso Fernández Ortega y otros Vs. México*, *supra*, párrs. 194, 251 y 252; *Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, párrs. 242 y 252, y *Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil*, *supra*, párr. 254.

Convención Americana, medidas particularizadas y especiales en casos donde la víctima es una niña, niño o adolescente, sobre todo ante la ocurrencia de un acto de violencia sexual y, más aún, en casos de violación sexual. En consecuencia, en el marco del presente caso, y a lo largo de la presente Sentencia, el Tribunal analizará las presuntas violaciones a derechos en perjuicio de una niña, no solo con base en los instrumentos internacionales de violencia contra la mujer, sino que también los examinará “a la luz del *corpus juris* internacional de protección de los niños y las niñas” (*supra* párr. 42), el cual debe servir para definir el contenido y los alcances de las obligaciones que ha asumido el Estado cuando se analizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes<sup>196</sup>, y en el caso particular, de la obligación estatal reforzada de debida diligencia. Asimismo, la Corte dará aplicación concreta a los cuatro principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, esto es el principio de no discriminación<sup>197</sup>, el principio del interés superior de la niña<sup>198</sup>, el principio de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo<sup>199</sup>, y el principio de respeto a la opinión de la niña en todo procedi-

196 Cfr. *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, supra*, párrs. 194 a 195, y *Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr. 217.

197 El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño prevé la obligación de los Estados de respetar los derechos enunciados en dicho instrumento y de asegurar su aplicación a cada niña y niño sujeto a su jurisdicción, *sin distinción alguna*, lo cual “exige que los Estados identifiquen activamente a los niños y grupos de niños cuando el reconocimiento y la efectividad de sus derechos pueda exigir la adopción de medidas especiales”. Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4, 42 y párrafo 6 del artículo 44)*, UN Doc. CRC/GC/2003/5, 27 de noviembre de 2003, párr. 12, y Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia*, UN Doc. CRC/C/GC/13, 18 de abril de 2011, párr. 60.

198 El párrafo 1 del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a que el interés superior de la niña o del niño sea una consideración primordial en todas las medidas que les conciernen. Cfr. Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4, 42 y párrafo 6 del artículo 44)*, *supra*, párr. 12; Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia*, *supra*, párr. 61, y Comité de los Derechos del Niño, *Observación general N° 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)*, UN Doc. CRC/C/CG/14, 29 de mayo de 2013.

199 El artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho intrínseco de la niña y del niño a la vida y la obligación de los Estados Partes de garantizar en la máxima medida posible su supervivencia y desarrollo en su sentido más amplio, como concepto holístico que abarca el desarrollo



miento que la afecte, de modo que se garantice su participación<sup>200</sup>, en lo que resulte pertinente para identificar las medidas especiales que son requeridas para dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de delitos de violencia sexual.

156. Las medidas especiales de protección que el Estado debe adoptar se basan en el hecho de que las niñas, niños y adolescentes se consideran más vulnerables a violaciones de derechos humanos, lo que además estará determinado por distintos factores, como la edad, las condiciones particulares de cada uno, su grado de desarrollo y madurez<sup>201</sup>, entre otros<sup>202</sup>. En el caso de las niñas, dicha vulnerabilidad a violaciones de derechos humanos puede verse enmarcada y potenciada, debido a factores de discriminación histórica<sup>203</sup> que han contribuido a que las mu-

físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de la niña y del niño. Cfr. Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño* (artículos 4, 42 y párrafo 6 del artículo 44), *supra*, párr. 12, y Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia*, *supra*, párr. 62.

200 El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho del niño a expresar su opinión libremente en “todos los asuntos que afectan al niño” y a que se tengan debidamente en cuenta esas opiniones, teniendo en cuenta su edad y grado de madurez. Cfr. Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño* (artículos 4, 42 y párrafo 6 del artículo 44), *supra*, párr. 12; Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 12: El derecho del niño a ser escuchado*, UN Doc. CRC/C/GC/12, 20 de julio de 2009, y Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia*, *supra*, párr. 63.

201 El Comité de los Derechos del Niño ha señalado que “[a] nivel universal, se consideran vulnerables todos los niños hasta los 18 años de edad, porque no ha concluido aún su crecimiento y desarrollo neurológico, psicológico, social y físico. Los lactantes y los niños pequeños son los más vulnerables debido a la inmadurez de su cerebro, y a su completa, todavía en desarrollo dependencia de los adultos. Aunque corren peligro los niños de ambos sexos, la violencia suele tener un componente de género”. Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia*, *supra*, párr. 72.f).

202 Cfr. *Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02*, *supra*, párr. 61, y *Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14*, *supra*, párr. 71.

203 Al respecto, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993, sostiene en su Preámbulo que “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”. Asimismo, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias señaló los factores de discriminación histórica que afirman la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a hechos de violencia, al indicar que “[l]a Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer



jeros y niñas sufran mayores índices de violencia sexual, especialmente en la esfera familiar<sup>204</sup>. En lo que se refiere a la respuesta institucional con miras a garantizar el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, este Tribunal nota que las niñas, niños y adolescentes pueden enfrentarse a diversos obstáculos y barreras de índole jurídico y económico que menoscaban el principio de su autonomía progresiva, como sujetos de derechos, o que no garantizan una asistencia técnica jurídica que permita hacer valer sus derechos e intereses en los procesos que los conciernen. Estos obstáculos no solo contribuyen a la denegación de justicia, sino que resultan discriminatorios, puesto que no permiten que se ejerza el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. De lo anterior se colige que el deber de garantía adquiere especial

y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer proporcionan un marco internacional integral en el que la violencia de género contra la mujer es la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. [...] La persistencia de la violencia de género sistemática contra la mujer, incluso en Estados que han proclamado la tolerancia cero respecto de la violencia contra la mujer, indica que la violencia de género está profundamente arraigada en nuestras sociedades, que siguen siendo predominantemente patriarcales, y se acepta porque ‘simplemente, las cosas son así’”. *Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias*, 13 de junio de 2017, UN Doc. A/HRC/35/30, párrs. 21 y 100. En igual sentido, se ha manifestado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, al sostener que: “la violencia por razón de género contra la mujer es uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados”. *Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, Recomendación General N° 35: sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General N° 19*, 26 de julio 2017, UN Doc. CEDAW/C/GC/35, párr. 10.

204 El Comité de los Derechos del Niño ha indicado que el componente de género implícito en todas las formas de violencia determina que “las niñas pueden sufrir más violencia sexual en el hogar que los niños”. *Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, supra*, párr. 19. En el caso de Nicaragua, según los datos aportados por el Modelo de atención integral a víctimas de violencia de género en Nicaragua, citando cifras del Instituto de Medicina Legal, “la violencia intrafamiliar y sexual por las dimensiones en que se manifiesta, debe considerarse como un problema de salud pública, lo que se expresa en los siguientes indicadores del año 2011: [...] el 84% de las víctimas de [violencia sexual] son menores de 18 años. [...] Las estadísticas de las Comisarias de la Mujer y la Niñez indican que los departamentos donde más prevalece la violencia contra las mujeres, niñas y niños son Managua, Chinandega, Matagalpa, León, Granada, Carazo, Masaya, Esteli, Jinotega, RAAN y RAAS”. UNFPA, *Modelo de atención integral a víctimas de violencia de género en Nicaragua*, Managua, 2012 (expediente de prueba, tomo XXI, anexo 9.d a la prueba para mejor resolver, folio 10976). Asimismo, según datos de UNICEF, “[e]n Nicaragua las niñas y adolescentes están en mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual. El Instituto de Medicina Legal reportó 6.069 casos de violencia sexual en 2013. El 88% de las víctimas eran mujeres y el 82% eran niños y adolescentes. El 51% niños de 13 años de edad, y el 83% eran niñas”. *Cfr.* UNICEF, “La violencia existe aun cuando no la puedas ver. Iniciativas de fin a la violencia”, disponible en <http://www.unicef.org.ni/publicacion/180/iniciativas-de-fin-la-violencia-en-nicaragua/>

intensidad cuando las niñas son víctimas de un delito de violencia sexual y participan en las investigaciones y procesos penales, como en el presente caso.

157. Al efecto, es pertinente precisar que la propia Convención de Belém do Pará consideró pertinente resaltar que las políticas estatales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, debían tener en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que podría sufrir una niña o adolescente. Dicha Convención establece en su artículo 9 que los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón de ser una persona menor de 18 años de edad, por lo que los casos en los que una niña o adolescente sea víctima de violencia contra la mujer, en particular violencia o violación sexual, las autoridades estatales deberán tener particular cuidado en el desarrollo de las investigaciones y procesos a nivel interno, así como al momento de adoptar medidas de protección y de acompañamiento durante el proceso, y después del mismo, con el fin de lograr la rehabilitación y reinserción de la víctima.

*A.2.a Los componentes esenciales del deber de debida diligencia reforzada y protección especial*

158. La especial intensidad mencionada se traduce en el deber estatal de organizar el sistema de justicia, de forma tal que el actuar de las autoridades conforme a la debida diligencia implique la adopción de una serie de medidas y el desarrollo de un proceso adaptado a las niñas, niños y adolescentes. La Corte ya ha indicado que la protección especial derivada del artículo 19 de la Convención implica que la observancia por parte del Estado de las garantías de debido proceso se traduce en algunas garantías o componentes diferenciados en el caso de niñas, niños y adolescentes, que se fundan en el reconocimiento de que su participa-

ción en un proceso no se da en las mismas condiciones que un adulto<sup>205</sup>. El sistema de justicia adaptado a las niñas, niños y adolescentes importará que exista una justicia accesible y apropiada a cada uno de ellos, que tome en consideración no solo el principio del interés superior, sino también su derecho a la participación con base en sus capacidades en constante evolución, conforme a su edad, grado de madurez y nivel de comprensión, sin discriminación alguna. En definitiva, tal y como lo ha sostenido anteriormente esta Corte, si bien el debido proceso y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de asegurar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, garantizar un efectivo debido proceso y velar por que el interés superior se erija en una consideración primordial en todas las decisiones administrativas o judiciales que se adopten<sup>206</sup>.

159. La Corte recuerda que los Estados tienen el deber de facilitar la posibilidad de que la niña, niño o adolescente participe en todas y cada una de las diferentes etapas del proceso. A estos efectos, tendrá derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (*infra* párr. 283), por la autoridad competente. Dicho derecho debe ser interpretado a la luz del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño<sup>207</sup>, el cual contiene adecuadas previsiones, con el objeto de que

205 Cfr. *Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño*. Opinión Consultiva OC-17/02, *supra*, párr. 96, y *Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional*. Opinión Consultiva OC-21/14, *supra*, párr. 114.

206 Cfr. *Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño*. Opinión Consultiva OC-17/02, *supra*, párrs. 96 y 98, y *Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional*. Opinión Consultiva OC-21/14, *supra*, párr. 115.

207 El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que:

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

la participación de la niña, niño o adolescente se ajuste a su condición y no redunde en perjuicio de su interés genuino<sup>208</sup>. En esta línea, el perito Cillero Bruñol indicó que, en la práctica, ello significa “disponer de un conjunto de condiciones, respecto a los interrogatorios, participación de los niños en todo tipo de diligencia en el proceso, realizar todas las actuaciones con su consentimiento y [...] poder valorar las opiniones del niño de acuerdo a su entendimiento y madurez, pero siempre debiendo motivar la valoración que se ha hecho en las decisiones sobre la opinión del niño y en consideración de su interés superior”<sup>209</sup>.

160. La participación de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos en un proceso penal podría ser necesaria para contribuir con el desarrollo efectivo de dicho proceso, sobre todo cuando no hay otros testigos de la comisión del delito. Sin embargo, concebir tal participación sólo en términos de la prueba que pueda aportar, no responde a su calidad de sujeto de derecho, ya que debería encontrarse legitimada a actuar en su propio interés como sujeto participante en el proceso. Para ello, es necesario que se brinde a la niña, niño o adolescente, desde el inicio del proceso y durante todo el transcurso del mismo, la información relativa a su procedimiento, así como sobre los servicios de asistencia jurídica, de salud y demás medidas de protección disponibles<sup>210</sup>.

161. La Corte considera que una interpretación armónica e integral

Véase también, Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 12: El derecho del niño a ser escuchado*, *supra*, párrs. 62 a 64, en la cual se señala que “[e]l niño víctima y el niño testigo de un delito deben tener la oportunidad de ejercer plenamente su derecho a expresar libremente sus opiniones de conformidad con la resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, ‘Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos’”.

208 Cfr. *Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño*. Opinión Consultiva OC-17/02, *supra*, párr. 99, y *Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional*. Opinión Consultiva OC-21/14, *supra*, párr. 122.

209 Declaración pericial rendida por Miguel Cillero Bruñol ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

210 Cfr. Consejo Económico y Social, Resolución 2005/20, *Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos*, UN Doc. E/2005/INF/2/Add.1, 22 de julio de 2005, directrices 19 y 20; Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4, 42 y párrafo 6 del artículo 44)*, *supra*, párr. 24, y Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 12: El derecho del niño a ser escuchado*, *supra*, párr. 64.

del derecho a ser oído de niñas, niños y adolescentes, junto con el principio de autonomía progresiva, conlleva a garantizar la asistencia jurídica de las niñas, niños y adolescentes víctimas en los procesos penales. En este sentido, el acceso a la justicia no solo implica habilitar los mecanismos necesarios para que las niñas, niños y adolescentes puedan denunciar, sino que incluye la posibilidad de que participen activamente en los procesos judiciales, con voz propia y asistencia letrada, en defensa de sus derechos, según la edad y grado de madurez<sup>211</sup>. Para sortear los

211 En este sentido, véase: Consejo de Derechos Humanos, UN Doc. A/HRC/25/L.10, 25 de marzo de 2014, punto 9 [“Reafirma la necesidad de respetar todas las seguridades y salvaguardias jurídicas en todas las etapas de todos los procesos judiciales que afectan a niños, incluidas las debidas garantías procesales, el derecho a la intimidad, la garantía de la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, en condiciones iguales o menos estrictas que las aplicables a los adultos, y el derecho a recurrir las decisiones ante una autoridad judicial superior”] y punto 13.k [“Velando por que todos los niños tengan acceso a asistencia jurídica y de otra índole adecuadas, por ejemplo apoyando el establecimiento de sistemas de asistencia letrada adaptados a los niños”]; Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 12: El derecho del niño a ser escuchado*, *supra*, párr. 64 [“El derecho del niño víctima y testigo también está vinculado al derecho a ser informado de cuestiones tales como la disponibilidad de servicios médicos, psicológicos y sociales, el papel del niño víctima y/o testigo, la forma en que se realizará el ‘interrogatorio’, los mecanismos de apoyo a disposición del niño cuando haga una denuncia y participe en la investigación y en el proceso judicial, las fechas y los lugares específicos de las vistas, la disponibilidad de medidas de protección, las posibilidades de recibir reparación y las disposiciones relativas a la apelación”]; Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño* (artículos 4, 42 y párrafo 6 del artículo 44), *supra*, párr. 24 [“Para que los derechos cobren sentido, se debe disponer de recursos efectivos para reparar sus violaciones. Esta exigencia está implícita en la Convención, y se hace referencia a ella sistemáticamente en los otros seis principales instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. La situación especial y dependiente de los niños les crea dificultades reales cuando los niños quieren interponer recursos por la violación de sus derechos. Por consiguiente, los Estados deben tratar particularmente de lograr que los niños y sus representantes puedan recurrir a procedimientos eficaces que tengan en cuenta las circunstancias de los niños. Ello debería incluir el suministro de información adaptada a las necesidades del niño, el asesoramiento, la promoción, incluido el apoyo a la autopromoción, y el acceso a procedimientos independientes de denuncia y a los tribunales con la asistencia letrada y de otra índole necesaria”]; Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial* (artículo 3, párrafo 1), UN Doc. CRC/C/GC/14, 29 de mayo de 2013, párr. 96 [“El niño necesitará representación letrada adecuada cuando los tribunales y órganos equivalentes hayan de evaluar y determinar oficialmente su interés superior. En particular, cuando se someta a un niño a un procedimiento judicial o administrativo que conlleve la determinación de su interés superior, el niño debe disponer de representación letrada, además de un curador o representante de su opinión, cuando pueda haber un conflicto entre las partes en la decisión”], y Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 20 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia*, UN Doc. CRC/C/GC/20, 6 de diciembre de 2016, párr. 23 [“De conformidad con el artículo 12 de la Convención, los Estados partes deben adoptar medidas para garantizar el derecho de los adolescentes a expresar sus opiniones sobre todas las cuestiones que los afecten, en función de su edad y madurez, y velar por que estas se tengan debidamente en cuenta, por ejemplo, en decisiones relativas a su educación, salud, sexualidad, vida familiar y a los procedimientos judiciales y administrativos. [...] Como complemento de las medidas, es necesario introducir mecanismos de denuncia y reparación seguros y accesibles con competencia para examinar las denuncias formuladas por los adolescentes y brindarles acceso a servicios jurídicos gratuitos o subvencionados y otros tipos de asistencia apropiada”], y UNICEF-

obstáculos en el acceso a la justicia (*supra* párr. 156), la asistencia letrada de un abogado especializado en niñez y adolescencia, con facultades de constituirse en calidad de parte procesal, oponerse a medidas judiciales, interponer recursos y realizar todo otro acto procesal tendiente a defender sus derechos en el proceso, debe ser gratuita y proporcionada por el Estado, independientemente de los recursos económicos de sus progenitores y de las opiniones de éstos últimos<sup>212</sup>.

162. Sobre el particular, el perito Cillero Bruñol, señaló que:

[U]na cuestión fundamental que se ha ido imponiendo en toda América Latina [...] es la representación judicial independiente de la niña [...]. [D]ebe haber alguien, independientemente del fiscal del caso concreto en administración penal, [...] que represente el interés de es[a] niñ[a] y, además de eso, probablemente la existencia de órganos independientes no jurisdiccionales del tipo los ombudsperson que puedan efectivamente revisar estos casos<sup>213</sup>.

163. La Corte advierte que las niñas, niños y adolescentes víctimas, en particular de violencia sexual, pueden experimentar graves con-

UNODC, *Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas*, 2010, págs. 54-5 ["La asistencia para los niños víctimas y testigos de delitos durante los procedimientos debería incluir el acceso a la asistencia jurídica. [E]l derecho de los niños víctimas y testigos de delitos a recibir asistencia eficaz es algo más que la presencia de estas personas de apoyo. [...] La mayoría de los países de derecho civil reconocen el derecho de los niños víctimas a la asistencia jurídica. La asistencia es gratuita para los beneficiarios que no pueden permitirse pagar a un abogado"].

212 Cfr. UNODC, *Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal*, 2013, Principio 2 ["Responsabilidades del Estado. 15. Los Estados deben considerar la prestación de asistencia jurídica como un deber y una responsabilidad. Con ese fin, deben, cuando sea el caso, estudiar la posibilidad de promulgar legislación y reglamentos específicos y velar por que exista un sistema de asistencia jurídica completo que sea asequible, eficaz, sostenible y digno de crédito. Los Estados deben asignar al sistema de asistencia jurídica los recursos humanos y financieros necesarios"], y Directriz 1 ["Prestación de la asistencia jurídica. 41. Cuando los Estados aplican condiciones relativas a los medios de vida de las personas para determinar si tienen derecho a recibir asistencia jurídica, deben asegurarse de que: [...] c) Las personas que requieran asistencia jurídica urgente en las comisarías, los centros de detención o los tribunales reciban una asistencia jurídica preliminar hasta que se determine si tienen derecho a esa asistencia. Los niños están siempre exentos de la condición relativa a los medios de vida"].

213 Declaración pericial rendida ante la Corte Interamericana por Miguel Cillero Bruñol en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

secuencias físicas, psicológicas y emocionales causadas por el hecho violatorio de sus derechos, así como una nueva victimización a manos de los órganos del Estado a través de su participación en un proceso penal, cuya función es justamente la protección de sus derechos. En este sentido, si se estima que la participación de la niña, niño o adolescente es necesaria y puede contribuir con la recolección de material probatorio, deberá evitarse en todo momento la revictimización y se limitará a las diligencias y actuaciones en donde su participación se estime estrictamente necesaria y se evitará la presencia e interacción de aquellos con su agresor en las diligencias que se ordenen<sup>214</sup>. Esta Corte ya ha destacado que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico, que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece con otras experiencias traumáticas<sup>215</sup>. En el caso de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, este impacto podría verse severamente agravado, por lo que podrían sufrir un trauma emocional diferenciado de los adultos, y un impacto sumamente profundo, en particular cuando el agresor mantiene un vínculo de confianza y autoridad con la víctima, como un progenitor. En palabras del perito Stola, en casos en donde el padre es el que concreta la agresión sexual, se produce una afectación terriblemente grave en la psiquis de la víctima, “porque aquella persona que debería cuidar ha producido una profunda destrucción, no solo a la niña, sino además a todo el grupo, porque es una agresión

214 Cfr. *Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 201, y Consejo Económico y Social, Resolución 2005/20, *Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos*, UN Doc. E/2005/INF/2/Add.1, 22 de julio de 2005, directriz 31.b). Véase también, *Declaraciones periciales rendidas ante la Corte Interamericana por Enrique Oscar Stola y Miguel Cillero Bruñol en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017*.

215 Cfr. *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 311, y *Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil, supra*, párr. 255.



que todo el grupo la vive como una agresión familiar”<sup>216</sup>. Para ello, la Corte subraya la importancia de la adopción de un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias sobre el bienestar biopsico-social de la víctima<sup>217</sup>.

164. Además, tomando en cuenta el interés superior, no solo se debe evitar la revictimización, sino que, a través de las protecciones especiales y acompañamiento especializado, se deberán generar las condiciones adecuadas para que la niña, niño o adolescente pueda participar de forma efectiva en el proceso penal. En este sentido, la actuación estatal deberá estar encaminada a la protección reforzada de sus derechos, a través de la actuación multidisciplinaria y coordinada de las agencias estatales de protección y apoyo psicosocial, investigación y juzgamiento, entre ellas el ministerio público, las autoridades judiciales, los profesionales de salud, los servicios sociales y legales, la policía nacional, entre otros, desde que el Estado conozca la violación de sus derechos y de forma ininterrumpida, hasta que esos servicios dejen de ser necesarios, a fin de evitar que su participación en el proceso penal les cause nuevos perjuicios y traumas adicionales, revictimizándolos<sup>218</sup>.

165. Por lo tanto, en casos de violencia sexual, el Estado deberá, una vez conocidos los hechos, brindar asistencia inmediata y profesional, tanto médica como psicológica y/o psiquiátrica, a cargo de un profesional específicamente capacitado en la atención de víctimas de este tipo de delitos y con perspectiva de género y niñez<sup>219</sup>. El acompañamien-

<sup>216</sup> Declaración pericial rendida ante la Corte Interamericana por Enrique Oscar Stola en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

<sup>217</sup> Cfr. Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia*, *supra*, párr. 57.b)

<sup>218</sup> Cfr. Consejo Económico y Social, Resolución 2005/20, *Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos*, UN Doc. E/2005/INF/2/Add.1, 22 de julio de 2005, directriz 23, y UNODC, *Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal*, 2013, directriz 11.c). Véase también, Declaración pericial rendida ante la Corte Interamericana por Miguel Cillero Bruñol en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

<sup>219</sup> La Corte ha señalado que, en casos de violencia contra la mujer, al tomar conocimiento de los actos alegados, es necesario que se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole



to deberá mantenerse durante el proceso penal, procurando que sea el mismo profesional que atienda a la niña, niño o adolescente. Es trascendental que durante el proceso de justicia y los servicios de apoyo se tomen en cuenta, sin discriminación alguna, la edad, el nivel de madurez y de comprensión, el sexo, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, las aptitudes y capacidades del niño, niña o adolescente, así como cualquier otro factor o necesidad especial en la que se encuentren<sup>220</sup>. Todo ello con el fin de brindar a la víctima el apoyo y los servicios necesarios, conforme a sus vivencias y entendimientos, y de acuerdo a las vulneraciones sufridas. Por ello, se entiende como necesaria la existencia de servicios y protección específicos para las víctimas de determinados delitos, como los referidos a agresiones sexuales, especialmente la violación sexual<sup>221</sup>.

166. Por ende, a fin de asegurar efectivamente el derecho a ser oído, los Estados deben garantizar que el proceso se desarrolle en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado a la edad de la niña, niño o adolescente y que el personal encargado de recibir el relato esté debidamente capacitado en la materia, de modo que aquél se sienta respetado y seguro al momento de expresar su opinión en un entorno físico, psíquico y emocional adecuado<sup>222</sup>. Las niñas, niños y

que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea. Dicho examen deberá ser realizado de conformidad con protocolos dirigidos específicamente a documentar evidencias en casos de violencia de género. Cfr. *Caso Fernández Ortega y otros Vs. México*, *supra*, párr. 194, y *Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil*, *supra*, párr. 254. Véase también, Organización Mundial de la Salud, *Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence*, 2003, págs. 81 y 82 y *Responding to children and adolescents who have been sexually abused*. WHO Clinical Guidelines, 2017, pág. 18.

220 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia*, *supra*, párr. 54.b).

221 Cfr. Consejo Económico y Social, Resolución 2005/20, *Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos*, UN Doc. E/2005/INF/2/Add.1, 22 de julio de 2005, directrices 8, 10 a 14, 16, 17, 19, 21 a 31 y 40; Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia*, *supra*, párrs. 51 y 54, y Organización Mundial de la Salud, *Responding to children and adolescents who have been sexually abused*. WHO Clinical Guidelines, 2017, págs. 15 a 22.

222 Cfr. *Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México*, *supra*, párr. 201, y *Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional*. Opinión Consultiva OC-21/14, *supra*, párr. 123. Véase también, Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 12: El derecho*

adolescentes deberán ser tratados a lo largo del proceso penal con tacto y sensibilidad<sup>223</sup>. Se buscará explicarle la razón y utilidad de las diligencias a llevarse a cabo o la naturaleza de los peritajes a los cuales se le someterá, siempre con base en su edad, grado de madurez y desarrollo, y conforme a su derecho a la información<sup>224</sup>.

167. Las autoridades estatales deberán tomar en cuenta las opiniones de las víctimas, respetando en todo momento su intimidad y la confidencialidad de la información, de ser el caso, evitando en todo momento la participación de estos en una cantidad excesiva de intervenciones o su exposición al público, adoptando las medidas que sean necesarias para evitar su sufrimiento durante el proceso y causarle ulteriores daños<sup>225</sup>. La exigencia de personal capacitado, incluyendo autoridades fiscales, judiciales, administrativas, personal de salud, entre otras, significará además que dicho personal se comunicará con las niñas, niños y adolescentes en un lenguaje adecuado y terminología conforme a su edad, que permitirán que relaten los hechos ocurridos o sus vivencias de la manera que elijan, sin la utilización de un lenguaje ofensivo, discriminatorio o estigmatizante<sup>226</sup>.

168. En esta línea, la Corte estima que, de considerarse pertinente la declaración de la niña, niño o adolescente en tanto víctima del delito, la entrevista deberá llevarse a cabo por un psicólogo especializado o un profesional de disciplinas afines debidamente capacitado en la toma de este tipo de declaraciones. Dicho profesional le permitirá a la niña, niño o adolescente ex-

*del niño a ser escuchado, supra, párr. 34, y Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, supra, párrs. 51 y 54.b).*

223 Cfr. *Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos*, UN Doc. E/2005/INF/2/Add.1, 22 de julio de 2005, directriz 10, y Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, supra, párr. 54.b).*

224 Cfr. *Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos*, UN Doc. E/2005/INF/2/Add.1, 22 de julio de 2005, directrices 19 y 30.b).

225 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, supra, párr. 51.*

226 Cfr. Organización Mundial de la Salud, *Responding to children and adolescents who have been sexually abused. WHO Clinical Guidelines*, 2017, págs. 20 y 21.

presarse de la manera que elija y de forma adaptada a sus requerimientos, no pudiendo ser interrogada en forma directa por el tribunal o las partes<sup>227</sup>. La entrevista buscará obtener información precisa, confiable y completa de lo ocurrido a través del relato de la víctima. Para ello, las salas de entrevistas otorgarán un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado (*supra* párr. 166), que les brinde privacidad y confianza<sup>228</sup>. Asimismo, deberá procurarse que las niñas, niños y adolescentes no sean interrogados en más ocasiones que las estrictamente necesarias, atendiendo a su interés superior, para evitar la revictimización o un impacto traumático<sup>229</sup>. La Corte resalta que varios países han adoptado, como una buena práctica, el uso de dispositivos especiales como la Cámara de Gesell o Circuitos cerrados de televisión (CCTV) que habilitan a las autoridades y las partes a seguir el desarrollo de la declaración de la niña, niño o adolescente desde el exterior, a fin de minimizar cualquier efecto revictimizante<sup>230</sup>. Estas buenas prácti-

227 Cfr. Consejo Económico y Social, Resolución 2005/20, *Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos*, UN Doc. E/2005/INF/2/Add.1, 22 de julio de 2005, directriz 31.c). Véase también, UNICEF y Asociación por los Derechos Civiles (ADC), *Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos*, septiembre de 2013, págs. 41 a 42.

228 La Corte ha señalado, en casos de mujeres adultas, que es necesario que la declaración de una víctima de actos de violencia o violación sexual se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza, y que la declaración se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición. Dicha declaración deberá contener, con el consentimiento de la víctima: i) la fecha, hora y lugar del acto de violencia sexual perpetrado, incluyendo la descripción del lugar donde ocurrió el acto; ii) el nombre, identidad y número de agresores; iii) la naturaleza de los contactos físicos de los que habría sido víctima; iv) si existió uso de armas o retenedores; v) el uso de medicación, drogas, alcohol u otras sustancias; vi) la forma en la que la ropa fue removida, de ser el caso; vii) los detalles sobre las actividades sexuales perpetradas o intentadas en contra de la víctima; viii) si existió el uso de preservativos o lubricantes; ix) si existieron otras conductas que podrían alterar la evidencia; y x) detalles sobre los síntomas que ha padecido la víctima desde ese momento. Cfr. *Caso Fernández Ortega y otros Vs. México*, *supra*, párr. 194, y *Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú*, *supra*, párr. 249. Véase también, Organización Mundial de la Salud, *Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence*, 2003, págs. 36 y 37. La Corte estima que, si bien estos estándares pueden ser aplicables a casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, existen otros criterios reforzados a tener en cuenta al entrevistarlos como, por ejemplo, el deber de no revictimización. Véase a este respecto, Organización Mundial de la Salud, *Responding to children and adolescents who have been sexually abused*. WHO Clinical Guidelines, 2017, pág. 20.

229 Cfr. *Caso Rosendo Cantú Vs. México*, *supra*, párr. 201; Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 12: El derecho del niño a ser escuchado*, *supra*, párr. 24; Consejo Económico y Social, Resolución 2005/20, *Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos*, UN Doc. E/2005/INF/2/Add.1, 22 de julio de 2005, directrices 23 y 31.a), y Organización Mundial de la Salud, *Responding to children and adolescents who have been sexually abused*. WHO Clinical Guidelines, 2017, pág. 20.

230 Cfr. *Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos*, UN Doc. E/2005/INF/2/Add.1, 22 de julio de 2005, directriz 30.d).

cas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas durante su declaración en procesos judiciales han sido implementadas, con diferentes alcances, por Estados Parte de la Convención Americana, como Argentina<sup>231</sup>, Bolivia<sup>232</sup>, Brasil<sup>233</sup>, Chile<sup>234</sup>, Colombia<sup>235</sup>, Costa Rica<sup>236</sup>, Ecuador<sup>237</sup>, El Salvador<sup>238</sup>, Guatemala<sup>239</sup>, Honduras<sup>240</sup>, México<sup>241</sup>, Nicara-

231 En Argentina, la utilización de la Cámara de Gesell se incorporó al Código Procesal Penal con los artículos 250 bis y 250 ter mediante Ley 25.852, sancionada el 4 de diciembre de 2003, promulgada el 6 de enero de 2004. Véase también, UNICEF y Asociación por los Derechos Civiles (ADC), *Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos*, septiembre de 2013.

232 En Bolivia, se reguló el uso de la Cámara de Gesell a través de la Ley integral contra la trata y tráfico de personas, Ley N° 263, de 31 de julio de 2012, específicamente a través de los artículos 29.2) y 30.7).

233 En Brasil, se utiliza el circuito cerrado de televisión (CCTV). En 2003, en la Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, se inició la experiencia del “*Depoimento Sem Dano*”. El 23 de noviembre de 2010 el Conselho Nacional de Justiça emitió la Recomendação N° 33, en la cual se recomienda la utilización del “*Depoimento Especial*” en los procesos judiciales para niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia. El 4 de abril de 2017 Brasil sancionó la Ley N° 13.431 que regula la escucha especializada en el “*Depoimento especial*”.

234 En Chile, se implementó en el año 2012 como proyecto piloto la primera Cámara de Gesell. El 9 de enero de 2018 se promulgó la Ley N° 21.057 que estableció las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo para personas menores de edad víctimas de delitos sexuales.

235 Cfr. En Colombia, la Cámara de Gesell y la videograbación fue implementada el 12 de julio de 2013, mediante Ley N° 1652.

236 En Costa Rica, la Cámara de Gesell fue implementada desde el año 2005. Asimismo, mediante la Circular N° 24 – 2012 de 14 de febrero de 2012, la Corte Suprema de Justicia aprobó el Manual de Uso de las Cámaras de Gesell. Además, posee un Protocolo para utilizar en sala de entrevistas.

237 En Ecuador, en el año 2014, el Consejo de la Judicatura mediante Resolución 117-2014 estableció el “Protocolo para el uso de la Cámara de Gesell”.

238 En 2009, El Salvador inauguró su primera Cámara de Gesell.

239 Desde 2013, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, mediante Acuerdo Número 16-2013, dictó el Instructivo para el uso y funcionamiento de la Cámara de Gesell, Circuito cerrado y otras herramientas para recibir las declaraciones de niños, niñas y adolescentes víctimas y/o testigos.

240 En 2015, mediante Decreto N° 22-2015, Honduras reformó su Código Procesal Penal, el cual en su artículo 237.b) dispuso que: “[l]a participación de las personas en el proceso en condición de vulnerabilidad será llevada a cabo en espacio o sala con espejo unidireccional o especialmente acondicionada o en la Cámara de Gesell u otros medios análogos, con la facilitación de un profesional de la psicología y, en aquellos lugares donde no se encuentren, por un profesional instruido en la materia y un traductor en aquellos casos que resulte necesario. Estas diligencias serán grabadas, realizadas o registradas a través de circuito cerrado de televisión, Cámara de Gesell u otros medios análogos y grabados o registrados por cualquier medio audiovisual o técnico. La práctica de esta diligencia se realizará con las formalidades de la prueba anticipada”.

241 En México, según información del Consejo de la Judicatura Federal, algunos centros de justicia del país cuentan con salas especializadas con Cámara de Gesell. Por otra parte, la legislación mexicana relacionada con delitos de trata menciona la comparecencia de las víctimas a través de la Cámara de Gesell, en el artículo 74 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos de 14 de junio de 2012.

gua<sup>242</sup>, Paraguay<sup>243</sup>, Perú<sup>244</sup>, República Dominicana<sup>245</sup> y Uruguay<sup>246</sup>. Asimismo, se recomienda la videgrabación de las declaraciones de las niñas, niños y adolescentes víctimas para no reiterar el acto. Estas herramientas tecnológicas no solo evitan la revictimización de la niña, niño o adolescente víctima y el deterioro de las pruebas, sino que también garantizan el derecho de defensa del imputado.

169. En cuanto al examen físico, las autoridades deberán evitar en la medida de lo posible que sean sometidos a más de una evaluación física, ya que podría ser revictimizante<sup>247</sup>. El examen médico en estos casos debe ser realizado por un profesional con amplio conocimiento y

242 En Nicaragua, se creó la primera Cámara de Gesell en el año 2012 en la Región Autónoma del Atlántico Norte.

243 En Paraguay, el Centro de Atención a Víctimas que cumple, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público N° 1562/00, “todas las funciones de asistencia a las personas ofendidas por los hechos punibles, a los efectos de encarar el correspondiente proceso criminal”, cuenta con cuatro Cámaras de Gesell. Asimismo, según la Oficina técnico forense de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, “[l]a Cámara Gesell tiene por finalidad evitar la re-victimización de las personas en estado de vulnerabilidad, dando así cumplimiento a lo preceptuado en el marco de la Acordada N° 633 [2010] que ratifica las Cien Reglas de Brasilia, para producir eficazmente los anticipos jurisdiccionales de pruebas y/o toma de declaración en juicios orales, evitando así las reiteradas declaraciones de dichas personas con las consecuencias que se mencionan antecedentemente”.

244 En Perú, el Ministerio Público elaboró en el año 2016 una Guía del procedimiento de entrevista única a víctimas en el marco de la Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y, a niños y adolescentes varones víctimas de violencia. Dicha ley, sancionada el 23 de noviembre de 2015, en su artículo 242, dispone que las declaraciones de las niñas, niños y adolescentes serán realizadas con la intervención de psicólogos especializados en Cámaras de Gesell o salas de entrevistas implementadas por el Ministerio Público y que las mismas serán filmadas y grabadas a fin de evitar la revictimización de los agraviados.

245 Desde el 20 de diciembre de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana mediante Resolución N° 3687-2007, cuyo objeto es la adopción de reglas mínimas de procedimiento para obtener las declaraciones de la persona menor de edad víctima, testigo o coimputada en un proceso penal ordinario, dispuso la implementación de la Cámara de Gesell y Circuito Cerrado de Televisión.

246 En Uruguay, el Código del Proceso Penal, aprobado por Ley N° 19.293 de 19 de diciembre de 2014, establece en sus artículos 160 y 164, relativos a los testigos menores de dieciocho años de edad y a la declaración de la víctima, que a los efectos de contemplar sus derechos y brindar su testimonio en el proceso deberán adoptarse una o más de las siguientes medidas, entre ellas, “pantallas de cristal para ocultar al testigo del imputado u otros elementos que constituyan barrera física con el mismo efecto [o] prestar testimonio desde una sala adyacente al tribunal a través de un circuito cerrado de televisión u otra tecnología con similar efecto”. Existen Cámara de Gesell en las instalaciones del Instituto Técnico Forense, los Juzgados Letrados de Familia Especializados y el Departamento de Asistencia Social.

247 Cfr. Declaración pericial rendida por Miguel Cillero Bruñol ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017, y Organización Mundial de la Salud, *Responding to children and adolescents who have been sexually abused*. WHO Clinical Guidelines, 2017, pág. 21.

experiencia<sup>248</sup> en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, quien buscará minimizar y evitar causarles un trauma adicional o revictimizarlos<sup>249</sup>. Es recomendable que la víctima, o de corresponder su representante legal, pueda elegir el sexo del profesional<sup>250</sup> y que el examen esté a cargo de un profesional de salud especialista en ginecología infanto-juvenil, con formación específica para realizar los exámenes médicos forenses en casos de abuso y violación sexual<sup>251</sup>. Asimismo, el examen médico deberá llevarse a cabo luego del consentimiento informado de la víctima o de su representante legal, según su grado de madurez, tomando en cuenta el derecho de la niña, niño o adolescente a ser oído, en un lugar adecuado, y se respetará su derecho a la intimidad y privacidad, permitiendo la presencia de un acompañante de confianza de la víctima<sup>252</sup>. La procedencia de un peritaje ginecológico debe ser considerada sobre la base de un análisis realizado caso por caso, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en que se alega que ocurrió la violencia sexual. En vista de ello, la Corte considera que la solicitud de realizar un peritaje ginecológico debe ser motivada detalladamente y, en caso de no ser procedente o no contar con el consentimiento informado de la víctima, el examen debe ser omitido, lo

248 Cfr. Declaración pericial rendida ante la Corte Interamericana por Miguel Cillero Bruñol en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

249 De conformidad con la Organización Mundial de la Salud, los exámenes físicos a cargo de especialistas en salud deben procurar minimizar daños adicionales, traumas, temor, estrés, y respetar la autonomía y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cfr. Organización Mundial de la Salud, *Responding to children and adolescents who have been sexually abused*. WHO Clinical Guidelines, 2017, págs. 20 a 21. Véase también, UNICEF y Asociación por los Derechos Civiles (ADC), *Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos*, septiembre de 2013, págs. 33 a 34.

250 Cfr. Organización Mundial de la Salud, *Responding to children and adolescents who have been sexually abused*. WHO Clinical Guidelines, 2017, pág. 21.

251 Cfr. Declaración pericial rendida ante la Corte Interamericana por Miguel Cillero Bruñol en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

252 Cfr. Consejo Económico y Social, Resolución 2005/20, *Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos*, UN Doc. E/2005/INF/2/Add.1, 22 de julio de 2005, directrices 19 y 30.d); Organización Mundial de la Salud, *Responding to children and adolescents who have been sexually abused*. WHO Clinical Guidelines, 2017, pág. 21, y Declaración pericial rendida por Miguel Cillero Bruñol ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017. Véase también, UNICEF y Asociación por los Derechos Civiles (ADC), *Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos*, septiembre de 2013, págs. 33 a 34.

que en ninguna circunstancia debe servir de excusa para desacreditarla y/o impedir una investigación<sup>253</sup>.

170. Ahora bien, la Corte considera que la debida diligencia del Estado no solo abarca las medidas de protección reforzada antes y durante el desarrollo de las investigaciones y proceso penal, sino que debe incorporar también medidas a ser adoptadas con posterioridad, para lograr la recuperación, rehabilitación y reintegración social de la niña, niño o adolescente<sup>254</sup>, teniendo en cuenta su derecho a la supervivencia y al desarrollo integral<sup>255</sup>. Aquellas medidas deberán ser extendidas además a los familiares de las víctimas, en lo que corresponda. Es decir que, la atención médica y psicosocial se adoptará de forma inmediata y desde conocidos los hechos, se mantendrá de forma continuada, si así se requiere, y se extenderá más allá del proceso de investigación.

171. Teniendo en cuenta los criterios desarrollados anteriormente, con base en los artículos pertinentes de la Convención Americana y de la Convención de Belém do Pará y a la luz del *corpus juris* internacional de protección de las niñas, niños y adolescentes, la Corte analizará a continuación si, en el marco del desarrollo de las investigaciones y proceso penal por la violación sexual de V.R.P., el Estado incurrió en la violación de su deber de debida diligencia reforzada, protección especial y no revictimización, así como de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y familiar de la niña V.R.P. Para ello, analizará si las diligencias investigativas y actuaciones judiciales se adecuaron a los criterios en la materia desarrollados o si, por el contrario, sometieron a la víctima a una revictimización. Al respecto, la Corte considera importante resaltar que, en casos de violencia sexual, ésta ha destacado

253 Cfr. *Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú*, *supra*, párr. 256. Véase también, Organización Mundial de la Salud, *Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence*, 2003, págs. 18, 43 y 58.

254 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia*, *supra*, párrs. 52 y 53.

255 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia*, *supra*, párrs. 15, 59 y 62.



que la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o re-experimentación de la profunda experiencia traumática de la víctima<sup>256</sup>. Esto adquiere especial relevancia en el caso de niñas, en virtud del deber de diligencia reforzada del Estado y de la situación agravada de vulnerabilidad en la que se encuentran al haber sido víctimas de violencia sexual. En este sentido, el Tribunal se centrará en las siguientes diligencias y actuaciones: i) el examen médico forense al que fue sometida la niña V.R.P.; ii) la declaración testimonial de V.R.P.; iii) la participación de la niña V.R.P. en la inspección ocular y la reconstrucción de los hechos, y iv) la falta de acompañamiento y atención integral a la niña V.R.P.

*A.2.b El examen médico forense al que fue sometida la niña V.R.P.*

172. La Corte resalta que el presente caso se trata de la violación sexual de una niña cuando tenía ocho años, hechos que habría cometido su padre, quien se encontraba en una situación de poder sobre la misma, no solo por constituir una figura de autoridad frente a su hija, sino sobre todo, por la confianza que una niña deposita en la persona que estaba llamada a protegerla. La Corte nota que la denuncia penal realizada por la señora V.P.C. fue a consecuencia de los síntomas físicos que presentaba la niña V.R.P., quien ante los problemas para defecar y dolores en la región anal, fue llevada a dos médicos. Éstos concluyeron de forma conteste que los hallazgos médicos de V.R.P. correspondían a una víctima de abuso sexual, quien había sufrido penetración anal (*supra* párr. 71).

173. A pesar de que V.R.P. fue sometida a dos revisiones médicas a raíz de consultas privadas y que, con base en los hallazgos encontrados, se concluyó la existencia de violación sexual, esta información no fue

<sup>256</sup> Cfr. *Caso Fernández Ortega y otros Vs. México*, *supra*, párr. 196, y *Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú*, *supra*, párr. 256.



considerada con suficiencia probatoria por el Estado, sino que ordenó la realización de otro examen médico a cargo de un médico forense<sup>257</sup>. La Corte nota que se intentó someter a V.R.P. a este examen médico en tres oportunidades, debido a su negativa a someterse a la revisión ginecológica por las condiciones vejatorias en que se desarrollaba el examen (*supra* párrs. 77 y 78). En la tercera oportunidad se efectuó, bajo sedación de la niña, la revisión ginecológica. La Corte advierte que el Estado no consideró como una medida de protección el otorgarle suficiencia probatoria a los dictámenes médicos ya existentes, lo cual podría haber evitado someter a la niña a una reactualización del momento traumático ya experimentado, ni tampoco respetó su derecho a ser oída respecto a la realización de dicha diligencia, de conformidad con su edad, madurez y grado de desarrollo. La Corte estima que el sometimiento de la niña a revisiones ginecológicas de forma reiterada no atendió al objetivo de minimizar el trauma derivado de una violación sexual, sino que lo fortaleció. En suma, la Corte considera que, en las circunstancias de este caso, no fue justificada la necesidad de realizar un examen médico ginecológico.

174. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte subraya, además, una serie de omisiones y falencias en la realización del primer examen médico forense que resultan incompatibles con los requerimientos de una debida diligencia estricta: i) no consta que se brindara a la niña ni a la madre información sobre en qué consistirían dichos exámenes o cuál

257 La señora V.P.C. declaró ante esta Corte que el examen médico forense fue ordenado por la jueza, a pesar de que la madre le explicó sobre la existencia de una epicrisis del hospital, ante lo cual la jueza ordenó la diligencia con la presencia de una junta médica. *Cfr.* Declaración rendida por V.P.C. ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017. Asimismo, el perito Miguel Cillero Bruñol señaló que: “se repite dos veces más el mismo examen, lo cual también es contrario a todos los estándares, teniendo como base que ya existía desde el comienzo un informe privado, el cual toda la normativa internacional recomienda y la normativa de la OMS, que basta un examen que sea con los protocolos adecuados y es responsabilidad del Estado que ese examen aunque se haga en un recinto privado, sea válido para todo el juicio y no tenga que someterse a la víctima a ningún tipo de nuevo procedimiento”. Declaración pericial rendida por Miguel Cillero Bruñol ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

sería la práctica médica; ii) no se brindó la oportunidad de elegir el sexo del especialista forense<sup>258</sup>; iii) no fue comprobado que el médico forense asignado fuera un profesional especialmente capacitado en atender a víctimas menores de edad, específicamente de corta edad, o que fuera un especialista en ginecología con entrenamiento para este tipo de exámenes en casos de abuso y violación sexual; iv) a pesar de la presencia de una médica psiquiatra, no es claro en qué consistió el actuar de la misma y, concretamente, el acompañamiento brindado a V.R.P. en relación con esta diligencia<sup>259</sup>; v) el examen no fue realizado en una sala ginecológica, sino, según declaró V.P.C., en un lugar parecido a “la morgue de un hospital, porque habían planchas de aluminio [...] y era un lugar donde entraban y salían muchas personas”<sup>260</sup>, y vi) se constató la presencia de una cantidad excesiva de personal de salud.

175. Sobre lo anterior, la Corte considera que era de trascendental importancia no sólo que el médico esté capacitado para atender a una niña de nueve años víctima de violación sexual, sino que las salas de entrevistas y, en particular, de revisiones médicas, representen un entorno seguro, adecuado y no intimidatorio, hostil o insensible para la niña. De ahí la importancia de que constituyan ambientes que generen en la niña la confianza y protección necesaria, que proteja su intimidad y privacidad.

176. En esta línea, la Corte considera que la presencia de una multi-

258 Es preciso resaltar que, para el segundo examen médico que no se pudo concretar, se designó a una forense suplente mujer, conforme a lo solicitado por V.P.C., quien sería una médica forense de la Comisaría de la Mujer y la Niñez con experiencia en víctimas de abuso sexual. *Cfr.* Solicitud de la Fiscal Departamental de Jinotega de 23 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 12 al escrito de contestación, folio 8215). Asimismo, el examen médico legal realizado en Managua estuvo a cargo de una médica forense, bajo sedación.

259 *Cfr.* Acta judicial de 22 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.11 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7308 a 7309). La señora V.P.C. declaró ante esta Corte que la psiquiatra estuvo presente durante la primera diligencia médica, por pedido propio. Sin embargo, de dicha declaración se desprende que el actuar de la psiquiatra se limitó a señalar a la jueza, ante los alegados maltratos del médico forense que “no p[odían] hacerle esto [a la niña]”. *Cfr.* Declaración rendida por V.P.C. ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

260 Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

plicidad de personas durante la revisión ginecológica de una niña de nueve años víctima de violación sexual, es contraria a los estándares en la materia, pues la niña se encuentra desnuda, exponiendo sus genitales ante un grupo de personas a quienes no les correspondía estar presentes en una diligencia de dicha naturaleza, lo que implica una intromisión arbitraria en su vida privada e intimidad. La Corte estima que este tipo de exámenes deben ser llevados a cabo en una sola oportunidad, por un médico capacitado en la materia y experto en casos de niñas víctimas de abuso y violación sexual, y con la presencia de las personas estrictamente necesarias (*supra* párr. 169). El Tribunal entiende que este acto, especialmente grave, en contravención de la debida diligencia, expuso a V.R.P. a una situación de reactualización del trauma existente y denota la falta de profesionalización en la materia del forense a cargo de dicha diligencia. La Corte considera irrelevante si la madre solicitó la presencia de todo el personal que participó durante dicho examen<sup>261</sup> y ello no desvirtúa responsabilidad del Estado, ya que es el Estado quien debe adoptar las medidas de protección necesarias para que sus instituciones actúen bajo el principio del interés superior de la niña, y eviten que diligencias, que de por sí pueden traer consigo elementos de reactualización del trauma, constituyan un acto de violencia institucional.

177. Aunado a ello, surge de las declaraciones de V.R.P. y V.P.C. ante esta Corte, así como de las quejas interpuestas a nivel interno contra el médico forense, que la actuación del funcionario de salud durante

261 Cabe clarificar que, conforme al acervo probatorio del expediente, quien solicitó la conformación de la junta médica durante el primer examen médico, fue la jueza a cargo del caso. La señora V.P.C. solicitó que se mantuvieran los mismos médicos durante el intento de realización del segundo examen médico, con el fin de que no se designaran otros para proteger los derechos de su hija. *Cfr.* Escrito de V.P.C. presentado ante el Juzgado de Distrito de lo Criminal de 23 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 12 al escrito de contestación, folio 8213). Asimismo, el 21 de octubre de 2002 V.P.C. presentó una queja ante la Fiscalía General de la República aduciendo que la jueza permitió que durante el primer reconocimiento médico legal estuvieran presentes más de 10 personas y no adoptó ninguna medida para evitar la revictimización de su hija. *Cfr.* Presentación efectuada por la señora V.P.C. ante la Fiscalía General de la República el 21 de octubre de 2002 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 22 al sometimiento del caso, folio 6877).

la diligencia fue revictimizante, contraria al interés superior de V.R.P. y su derecho a ser oída, y contravino el deber reforzado de protección debida a favor de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. En efecto, la Corte constata que la señora V.P.C. presentó una queja ante el Director del Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) del Departamento de Jinotega, mediante la cual expuso que existió un “comportamiento antiético, grotesco y vulgar” por parte del profesional médico interviniente, al momento de examinar a su hija, ya que el médico habría proferido que la niña “tenía que someterse al trato vulgar de él y que ni siquiera tenía derecho a dar[le] algún sedante”<sup>262</sup>. Asimismo, presentó un escrito en contra de dicho galeno ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia en ese mismo sentido (*supra* párr. 127). Asimismo, no sólo solicitó que la forense suplente hiciera el dictamen con motivo del actuar del médico, sino que resaltó que “[el médico] se encontraba fuera de sí, lo que puso nerviosa a [su] hija y por ello [su] renuencia a que él específicamente se lo hiciera”<sup>263</sup>. La señora V.P.C. declaró que el médico no permitió ponerle una colcha debajo de la niña para alivianar sus heridas, y ante la renuencia de V.R.P. a someterse al examen, luego de gritos y llantos, el médico señaló que “si ella no se va a dejar examinar, porque las niñas del campo normalmente lo hacen, vienen aquí, abren las piernas y yo les hago los exámenes y ellas no se quejan [...] ¿Qué va a pasar cuando yo vaya a examinar el ano?”<sup>264</sup>. Estas declaraciones fueron corroboradas por la declaración

262 Presentación efectuada por la señora V.P.C. ante el Director del Sistema Local de Atención Integral en Salud el 22 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 9 al sometimiento del caso, folio 6769).

263 Escrito de V.P.C. presentado ante Juzgado de Distrito de lo Criminal de 23 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 12 al escrito de contestación, folio 8213).

264 Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017. La abuela de V.R.P. declaró a nivel interno que su nieta no se sintió cómoda con el examen médico ya que sintió que “los dedos del doctor en sus partes como que le hacía muy duro y no aguantaba el ardor que tenía tanto por delante como por detrás”. Declaración testimonial prestada el 23 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo E.12 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 7313).

de V.R.P. ante esta Corte, quien además resaltó que, ante el maltrato y rudeza del médico al examinarla, sintió “como que había sido violada, pero [le] dijeron que el examen se tenía que hacer para que [su] papá no saliera [de la prisión]”<sup>265</sup>.

178. La Corte considera que, si bien existe controversia respecto al lenguaje preciso y el contenido de las expresiones del médico legista en contra de V.R.P. (*supra* párr. 146), está comprobado que la niña se negó rotundamente a realizarse el examen y el profesional médico intentó continuar con el mismo en contra de la voluntad de V.R.P., sin tomar en cuenta su parecer y su consentimiento<sup>266</sup>. Incluso, de la declaración de V.R.P. en audiencia privada ante esta Corte, ella manifestó que la jueza solicitó la cooperación de la niña bajo la premisa de que, si la diligencia no se efectuaba y ésta no cooperaba, su padre saldría en libertad. Asimismo, la madre de V.R.P. presentó, al menos en dos oportunidades (*supra* párrs. 126 y 127), quejas a nivel interno a este respecto y de la información proporcionada por el Estado, la presentada ante la Corte Suprema de Justicia no fue tramitada por falta de pruebas, por lo que se ordenó su archivo (*supra* párr. 127). La presentación de estas quejas, luego de ocurrido el actuar revictimizante del médico forense, demuestra la inconformidad de V.P.C. respecto de la capacidad profesional del galeno, ante lo cual el Estado no solo no dio respuesta, sino que culpabilizó a la niña por no haber contribuido con la realización de la diligencia.

179. Con base en todo lo señalado, la Corte entiende que el médico legista no llevó a cabo la evaluación médica de forma adecuada con el trato debido a una niña víctima de violación sexual, reactualizando su situación traumática, en vez de protegerla y brindarle mecanismos de contención que la hagan sentirse segura, entendida y escuchada en el

<sup>265</sup> Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017.

<sup>266</sup> *Cfr.* Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017.

desarrollo de la diligencia para evitar su revictimización<sup>267</sup>. Aún más, para esta Corte, la utilización de fuerza para proceder al examen ante la negativa de la víctima claramente constituyó un acto de violencia institucional de índole sexual.

180. Finalmente, la Corte comprueba que, el mismo día en que se realizó el examen por una médica forense en Managua, bajo sedación luego de que V.R.P. expresara su conformidad<sup>268</sup>, el padre y presunto agresor de V.R.P. fue citado con el fin de someterse a una examinación médica ante la misma entidad (*supra* párr. 91). Al respecto, la señora V.P.C. declaró durante la audiencia pública que “[fueron] al Instituto de Medicina Legal y sorpresivamente [...] en ese momento [...] cuando [ellos] llegaron, en la sala estaba el procesado también, que la jueza le había ordenado de que llegara también a hacerse un examen [...]”. La señora V.P.C. señaló que intentaron evitar que su hija viera al agresor, y no pudo precisar con certeza si ella lo visualizó.

181. Sobre el particular, la Corte resalta que los dos peritos que declararon en la audiencia pública del caso coincidieron en señalar que las autoridades a nivel interno, en este caso concreto la jueza a cargo de la investigación, debieron haber adoptado las medidas de protección necesarias para evitar que la víctima tenga cualquier tipo de contacto con su perpetrador, por ser revictimizante<sup>269</sup>. Específicamente, el perito Enrique Oscar Stola señaló que:

267 El perito Enrique Oscar Stola consideró que el primer examen médico fue un hecho grave de violencia institucional en perjuicio de V.R.P. ya que el médico legista “no cuidó en absoluto establecer el mínimo de empatía, de cuidado, una cantidad de personas presentes, de funcionarios judiciales que no iban a aportar absolutamente nada a la evaluación que se tenía que hacer y, sin embargo, estaban presentes. Esto es una pérdida de intimidad y es una reactualización del trauma”. Declaración pericial rendida por Enrique Oscar Stola ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

268 Cfr. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017.

269 Cfr. Declaración pericial rendida por Enrique Oscar Stola ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017, y Declaración pericial rendida ante la Corte Interamericana por Miguel Cillero Bruñol en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

[...] nunca ni niños, ni niñas abusadas, ni mujeres que están sufriendo violencia de género extrema se tienen que encontrar con sus agresores, jamás. Cuando eso se produce, lo único que puede registrar la víctima es el inmenso poder que tiene el agresor, es una cuestión de poder que se está jugando [...]. Entonces, tiene que ser citado otro día, las víctimas tienen que ir al espacio judicial sabiendo que cuentan con todas las seguridades, que no se van a encontrar con el agresor nunca. El solo hecho que conozcan que está en un piso superior ya produce angustia, inquietud y muchísima tensión. Eso es revictimizante, cualquiera sea la edad de la persona<sup>270</sup>.

182. En este sentido, la Corte considera que el hecho de que la niña haya visto o no a su padre en el recinto del Instituto de Medicina Legal es irrelevante, ya que la autoridad judicial debió haber adoptado las medidas necesarias, por ejemplo citarlo en otra oportunidad, para impedir que dicho encuentro suceda. La sola potencialidad de encuentro derivada de la falta de debida diligencia estricta en el actuar de las autoridades judiciales durante las diligencias de investigación consistió en un acto de revictimización y un acto de violencia institucional.

### *A.2.c La declaración testimonial de V.R.P.*

183. La Corte nota que la declaración de V.R.P. fue recibida el 21 de noviembre de 2001, con la presencia de su madre y ante la Jueza de Distrito de lo Penal, en las instalaciones del despacho judicial y sin la participación de un profesional de salud específicamente capacitado en el acompañamiento de este tipo de casos<sup>271</sup>. A este respecto, la Corte estima que, dependiendo del caso y de la necesidad de recibir la declaración de una niña, si ésta decide recabarse, se debe hacer generando las condiciones adecuadas para un entorno seguro. El Tribunal considera

<sup>270</sup> Declaración pericial rendida por Enrique Oscar Stola ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

<sup>271</sup> Cfr. Declaración de V.R.P. de 21 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 9 al escrito de contestación, folios 8201 a 8202).

que la declaración de la niña V.R.P. buscó obtener información precisa, confiable y completa sobre los hechos denunciados a través de su relato. La jueza del caso preguntó si V.R.P. se sentía ofendida, por qué y por quién. Ante ello, de la declaración de la niña se denota que su relato fue libre y brindado con sus propias palabras. Sin embargo, la Corte nota que V.R.P. fue citada al despacho judicial a declarar como si fuera una adulta, la entrevista no se llevó a cabo en un ambiente especialmente acondicionado para este fin y por una profesional específicamente capacitada para interrogar, interactuar y conducir un intercambio con la niña. Por ello, es necesario que estas declaraciones sean llevadas a cabo por psicólogos especialistas o profesionales de disciplinas afines específicamente capacitados para recibir estos testimonios. La Corte considera que ninguna de estas salvaguardias fue proporcionada a V.R.P. durante su declaración rendida en el proceso penal interno.

*A.2.d La participación de la niña V.R.P. en la inspección ocular y la reconstrucción de los hechos*

184. El 29 de noviembre de 2001 se practicó la diligencia de inspección ocular en el lugar en el que ocurrió la violación sexual de V.R.P. y se procedió a reconstruir los hechos con la participación directa de la niña en la diligencia (*supra* párr. 88).

185. La Corte ha señalado que las niñas víctimas de un delito, especialmente de una violación sexual, deben participar en las diligencias que sean estrictamente necesarias (*supra* párr. 163). La Corte estima que, en casos como el presente, deben extremarse los recaudos para evitar la revictimización o un impacto traumático. Por ello, es especialmente grave que las autoridades judiciales hayan permitido en el presente caso la realización de una inspección ocular y reconstrucción de los hechos con la participación de V.R.P., quien contaba en ese momento con nueve años, es decir una niña de corta edad. Mediante su participación,



V.R.P. revivió experiencias sumamente dolorosas y traumáticas, tuvo que narrar nuevamente los hechos, a pesar de que ya lo había hecho ante la jueza en su declaración testimonial, e incluso tuvo que experimentar nuevamente el hecho de colocarse en la posición en la que recordó encontrarse luego de despertar con posterioridad al abuso al que fue sometida, momento que fue fotografiado.

186. V.R.P. señaló ante esta Corte que su participación en la citada diligencia significó volver a vivir una situación extremadamente traumática, la cual la hizo sentir “como que estaba ahí otra vez, los mismos sentimientos, el mismo dolor, las mismas cosas”. Asimismo, indicó que cuando iban a Managua se tapaba o se escondía en el carro cuando pasaban por el lugar donde fue agredida sexualmente, ya que no quería volver a ver ese lugar. Asimismo, V.R.P. narró cómo, a pesar de esto, en contra de su voluntad y su consentimiento, la jueza le solicitó su participación en la diligencia para mantener a su padre en prisión, a quien incluso vio cuando llegaron al lugar de la reconstrucción de los hechos. En efecto, declaró ante esta Corte que “la juez[a] dijo que si no se hacía [la diligencia] iba tener que sacar a [su] papá a la calle [... por eso,] simplemente hi[zo] lo que [l]e pidieron para poder salir de ahí y, después de todo eso, aun así, [su] papá salió”. Agregó que no solo tuvo que recorrer el mismo lugar y colocarse en la misma posición en la que fue abusada, sino que le hicieron utilizar la misma ropa que vestía ese día<sup>272</sup>.

187. Los peritos que declararon ante esta Corte coincidieron en señalar que la participación de V.R.P. en la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos constituyó un hecho grave de violencia institucional. El perito Enrique Oscar Stola sostuvo que “[era] la primera vez en [su] historia profesional de 40 años [que veía] que a una niña violada, [...] se la lleva[ra] al lugar para reconstruir, eso no se debería

<sup>272</sup> Cfr. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017.

haber hecho [...]. Todo lo que se hizo [fue] revictimizante. Entre esas cosas, hacerla tomar una posición que tiene que ver con la que tuvo cuando fue agredida sexualmente o el hecho de que existan fotografías [...] de esa situación tan traumática. El revivir esa situación traumática no le ayuda en nada, lo único que hace es profundizar el trauma". Agregó que "[n]unca una niña o una joven que ha sido violada, abusada, ni a una mujer que ha sido violada tiene que ir a recrear"<sup>273</sup>.

188. Por su parte, el perito Miguel Cillero Bruñol señaló que "la reconstrucción de los hechos, como una diligencia probatoria que en general no es recomendada, ha sido eliminada prácticamente de todo el derecho comparado en aquellos casos en los cuales estamos en presencia de niñas víctimas de delitos sexuales y, además, las condiciones en que esa reconstrucción de hechos se realizó, en este caso en particular, denota una extrema falta de cuidado y de especialización en el sentido de haberla hecho exactamente igual como si se tratara de un caso de una víctima adulta"<sup>274</sup>.

189. Adicionalmente, V.R.P. manifestó ante esta Corte que comunicó su negativa de participar en la reconstrucción de los hechos a la psiquiatra que la acompañaba, quien a su vez lo puso en conocimiento de la jueza, la cual decidió continuar con la diligencia, e incluso manifestó que, de no realizarse, el padre de la niña tendría que salir de prisión<sup>275</sup>. La Corte considera que la diligencia, además de revictimizante, no consideró como relevante que la niña, con su nivel de madurez y de acuerdo a su grado de desarrollo y entendimiento de los hechos, podía consentir u opinar respecto a su deseo de participar en la misma. Incluso, nuevamente, la jueza estableció la necesidad de la participación de

273 Declaración pericial rendida ante la Corte Interamericana por Enrique Oscar Stola en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

274 Declaración pericial rendida ante la Corte Interamericana por Miguel Cillero Bruñol en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

275 *Cfr.* Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017.

la niña, ya que de lo contrario su padre saldría en libertad (*supra* párr. 178), lo que obligó a que V.R.P. participara en contra de su voluntad. Por consiguiente, la Corte considera que la participación de V.R.P. fue concebida únicamente en términos de objeto de prueba y no como titular de derechos, cuyas opiniones debían ser tomadas en cuenta.

190. La diligencia tampoco contó con la presencia de una autoridad que pudiera velar por los derechos de la niña, ya que ni el fiscal del caso ni ninguna otra autoridad especializada en su protección estuvieron presentes. Si bien la psiquiatra estuvo presente en la diligencia, como una medida de acompañamiento de la niña, dicha profesional no se encontraba en la posición de autoridad de impedir la participación de V.R.P., ni de evitar el efecto revictimizante o las experiencias perjudiciales nuevamente vividas por la niña. Además, las autoridades estatales debieron evitar que el progenitor de V.R.P. participara en la reconstrucción de los hechos el mismo día que su hija, ya que la presencia de dicha persona en las inmediaciones del lugar potencializaba la posibilidad de un encuentro entre ambos y, por ello, colocó a la víctima en una situación agravada de vulnerabilidad.

191. La Corte entiende que, aun si conforme a la normativa de la época la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos era necesaria, aquella pudo haberse realizado con base en los hechos relatados por V.R.P. y sin necesidad de su participación directa. El Tribunal estima que, si la jueza encargada hubiera estado específicamente capacitada en la materia, conforme a las características del caso y a la situación en la que se encontraba V.R.P., no habría requerido su participación en una diligencia de tal naturaleza, a fin de evitar una contravención de lo que mandata la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, en cuanto a las medidas de protección en procesos judiciales.

192. Por otro lado, la Corte considera que el hecho de que la madre de V.R.P. solicitara la reconstrucción de los hechos no exime de respon-

sabilidad al Estado de Nicaragua, ya que como se mencionó *supra*, son las autoridades estatales las que deben decidir qué diligencias practicar, así como conducir las investigaciones y recabar las pruebas brindando las medidas de protección necesarias, con miras al bienestar y cuidado de la niña. En este sentido, que el Estado intente trasladar la responsabilidad por la realización de la reconstrucción de los hechos con la participación de V.R.P. a su madre, constituye una forma de culpabilizarla y victimizarla, lo cual a su vez, implica un incumplimiento de su deber de debida diligencia reforzada.

193. Con base en todo lo expuesto, la Corte concluye que la participación de V.R.P. en la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos constituyó una grave infracción al deber de diligencia reforzada y protección especial, y constituyó un acto de victimización secundaria y violencia institucional.

*A.2.e La falta de acompañamiento y atención integral a la niña V.R.P.*

194. La Corte ha destacado que la atención integral a una niña víctima no solo se circunscribe a las actuaciones de las autoridades judiciales durante el desarrollo del proceso penal con el fin de proteger sus derechos y asegurar una participación no revictimizante, sino que esta atención debe ser integral y multidisciplinaria antes, durante y después de las investigaciones y proceso penal. Asimismo, la Corte ha considerado que debe existir un enfoque coordinado e integrado que brinde distintos servicios de atención y apoyo a la niña para salvaguardar su bienestar actual y posterior desarrollo (*supra* párr. 164).

195. A este respecto, el perito Miguel Cillero Bruñol declaró ante esta Corte que:

[u]no de los objetivos más claros de las reformas legales en América Latina vinculadas a la creación de códigos, estatutos de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia [...] exigen [...] cuestiones fundamentales: [l]a coordinación de todas las actuaciones de asistencia, y eso está en toda la normativa y eso significa la coordinación de los sistemas de protección especial de niños víctimas o vulnerados sus derechos con los sistemas de políticas universales; un sistema de justicia completo que sea adecuado a las necesidades de los niños, particularmente [...] en aspectos probatorios y, fundamentalmente, en aspectos que tengan que ver con exámenes de salud u otros tipos de reparaciones; un sistema de terapias específicas y de asistencia específica terapéutica respecto a estas víctimas para tratarlas sobre su trauma; y finalmente, un conjunto de condiciones específicas en las cuales la familia de ese niño va a tener los apoyos necesarios (en los casos que ello sea conveniente y no sea contrario a los intereses superiores) mantener el ámbito familiar o bien soluciones alternativas para reconstruir ese vínculo familiar<sup>276</sup>.

196. Del expediente de este caso, la Corte no ha podido constatar que el Estado, a través de alguna de sus instituciones, haya requerido la participación inmediata después de interpuesta la denuncia de algún profesional especializado con el fin de que informara a la víctima o a su familia sobre el desarrollo del proceso y de las diligencias, así como sobre la disponibilidad de atención en salud y psicosocial, individual y como grupo familiar, y de las instituciones especializadas existentes para brindar acompañamiento.

197. A su vez, la Corte constata que la única acción que el Estado adoptó como medida de acompañamiento, consistió en el nombramiento de una psiquiatra el 23 de noviembre de 2001, para que “d[iera] seguimiento a la niña V.R.P., para que en su momento[,] se evacúe informe de [su] estado emocional” (*supra* párr. 80). La psiquiatra participó en las siguientes diligencias y emitió los siguientes in-

<sup>276</sup> Declaración pericial rendida ante la Corte Interamericana por Miguel Cillero Bruñol en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

formas: a) el 26 de noviembre de 2001 realizó una consulta externa de psiquiatría en el Hospital Victoria Motta de Jinotega, en donde concluyó que el relato de los hechos de V.R.P. era confiable, claro y veraz, que sufría de estrés post-traumático y que recomendaba verificar sus lesiones genitales con anestesia en el Instituto de Medicina Legal de Managua; b) estuvo presente en la inspección ocular y reconstrucción de los hechos y durante el intento del primer examen médico legal; c) el 21 de febrero de 2002 emitió un informe de seguimiento de V.R.P. donde recomendó que la niña “necesitará, casi siempre, hasta alcanzar su madurez biológica y emocional, ayuda de [p]sicoterapeuta, ya que el daño recibido en su esfera física y [p]síquica, es de secuelas y lesiones duraderas [...]. Si no se atiende terapéuticamente, puede llegar a desarrollar ideación suicida o hundirse en la depresión endógena. Por lo tanto, por precaución a no hacer más daño en su persona, se indica evitar la revictimización de la paciente, no permitiendo que ella siga estando presente en los recuerdos del hecho acaecido o de perjuicio que le haya sucedido o interrogándosele al respecto”, y d) el 22 de abril de 2001 emitió una epicrisis en la cual concluyó que V.R.P. sufría de estrés post-traumático a nivel psicológico y derivó su tratamiento a psicología por “prevención de secuelas por abuso sexual que podrían interferir en su conducta futura a nivel de comunicación y relación de su entorno”.

198. El Tribunal comprueba que, desde la valoración psicológica inicial realizada a V.R.P. el 27 de noviembre de 2001 por una psicóloga del Instituto de Medicina Legal a solicitud de la jueza penal del caso (*supra* párr. 84), se indicó que la niña requería un tratamiento terapéutico a largo plazo. Asimismo, en las evaluaciones posteriores realizadas por la psiquiatra se reiteró dicha solicitud debido a las afectaciones psicológicas y al estrés post-traumático diagnosticado. Ante tales indicaciones claras en cuanto a la necesidad de un tratamiento psicológico, no consta

que el Estado lo haya proveído a través de sus instituciones públicas de salud. Tampoco es claro si la psiquiatra brindó un tratamiento terapéutico a V.R.P. de manera constante, con el objetivo de que la niña iniciara un proceso de rehabilitación y reintegración, ya que desde su nombramiento el 23 de noviembre de 2001 hasta el 22 de abril de 2002, fecha en la cual la derivó a terapia psicológica, solo consta en la prueba aportada ante esta Corte que trató a V.R.P. en contadas ocasiones.

199. Si bien V.R.P., V.P.C. y N.R.P. salieron de Nicaragua el 6 de diciembre de 2002, la Corte constata que transcurrieron casi ocho meses sin que la niña ni su familia recibieran tratamiento psicológico. La Corte resalta que V.R.P., quien cuenta con 25 años de edad en la actualidad, continúa sufriendo las secuelas psicológicas de la violación sexual y de la falta de atención médica oportuna y continua que el Estado debió brindarle a efectos de recuperarse del cuadro estrés de post-traumático diagnosticado. A su vez, tampoco se brindó atención psicoterapéutica continua al grupo familiar de V.R.P. quienes debían también recibir medidas de atención integral con el fin de brindar un entorno familiar propicio para la recuperación y reintegración de la niña.

Asimismo, según informó el Estado, el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia solicitó al Ministerio de la Familia la realización de un estudio biopsicosocial a V.R.P. para la recuperación de las secuelas causadas a la niña<sup>277</sup>. Éste a su vez solicitó a un juez civil que se diera respuesta a la solicitud de nulidad de veredicto de inocencia presentado por V.P.C. “con la finalidad de que la retardación de justicia no afecte sus derechos humanos”<sup>278</sup>. No obstante, el Estado no informó si tal informe efectivamente se llevó a cabo u otras actuaciones que se hubieran derivado del mismo.

<sup>277</sup> abril de 2002 (expediente de Cfr. Oficio dirigido al Ministerio de la Familia de 30 de prueba, tomo XVII, anexo 18 a la contestación del Estado, folio 8235).

<sup>278</sup> Oficio dirigido al Juez Civil del Distrito de 30 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 18 a la contestación del Estado, folio 8236).

200. Por otra parte, el Tribunal nota que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos actuó como agente fiscalizador en el proceso penal por violación sexual en perjuicio de la niña y emitió un informe resaltando diversas irregularidades en el proceso (*supra* párr. 100). Sin embargo, conforme a la información con la que cuenta la Corte, dicha institución no tenía las competencias para representar los intereses de V.R.P. durante el proceso penal del caso, lo cual habría podido evitar los actos revictimizantes a los cuales fue sometida V.R.P. durante la sustanciación del proceso.

201. En conclusión, la Corte considera que el Estado no brindó acompañamiento y atención integral a la niña V.R.P. durante la sustanciación del proceso ni con posterioridad, para lograr su recuperación, reintegración y rehabilitación.

#### *A.2.f Conclusión*

202. A raíz de las consideraciones precedentes, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada y familiar y a la protección judicial, tanto por acción como por omisión, en los términos de los artículos 5.1, 8.1, 11.2 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma, así como por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de V.R.P. y V.P.C.

#### *B. La aplicación de las exigencias del debido proceso al juicio por jurados*

##### *B.1 Alegatos de las partes y de la Comisión en torno a la imparcialidad*



203. La *Comisión* resaltó que existieron denuncias sobre irregularidades en la conformación del jurado y emisión de la sentencia absolutoria en abril de 2002. Al respecto, la Comisión tomó nota de los alegatos de los peticionarios respecto a: i) la suspensión injustificada en dos ocasiones del jurado; ii) la afectación al derecho de defensa por haberse rechazado la solicitud de contar con dos abogados más durante la audiencia, y iii) la presunta entrega de un sobre al jurado y a la jueza por parte de la representación legal de la defensa al finalizar la audiencia. La Comisión agregó que el Estado no ha esclarecido debidamente las serias dudas que se plantearon en torno a la posible corrupción y presión ejercida por el agresor desde la situación de poder en la que supuestamente se encontraba, por haber estado vinculado en algún momento al poder judicial local.

204. Las *representantes* alegaron que el Estado no garantizó un juicio transparente y libre de influencias, y en él se observa la influencia política, el prejuicio por las creencias religiosas de la madre de la víctima y la afectación del derecho a defensa de la víctima al no darle la oportunidad de contradecir el contenido del papel rosado entregado al jurado para ser visto en privado. De igual forma, señalaron la actitud denigrante que habría tenido la jueza hacia la madre de la víctima por el trato dado, por permitirle a la defensa utilizar lenguaje que descalficara a la señora V.P.C. y no permitirle estar presente en el momento de desinsaculación de jurados, afectando la parcialidad y transparencia del juicio. Adicionalmente, señalaron que no se le permitió contar con igual cantidad de abogados que le fue autorizado a la defensa.

205. El *Estado* señaló que no era responsable por el veredicto emitido por los ciudadanos que conformaron el Tribunal de Jurados, quienes luego de debatir la prueba ofrecida en la etapa plenaria del proceso, no encontraron responsabilidad alguna en contra del señor H.R.A. en razón de su sana crítica e íntima convicción. Asimismo, destacó que no

existía ninguna denuncia por la conformación de los jurados, ni existió objeción o recusación alguna por parte del abogado de V.P.C.

En relación con las reprogramaciones de la audiencia, el Estado alegó que la suspensión del jurado en dos ocasiones se debió, en primer lugar, por prudencia y, en segundo lugar, por ser un acto consentido por las partes, entre ellas, el abogado de V.P.C. La segunda reprogramación se hizo porque el abogado defensor presentó constancia médica de reposo en virtud que no estaba apto para realizar el juicio por lo que la jueza decidió suspender el mismo por no afectar el derecho a la defensa y por estar justificado.

206. De igual forma, sobre el incidente de posible corrupción del jurado, el Estado señaló que se abrió a pruebas en forma de incidente en el que tuvieron amplia participación las partes durante el proceso y en la que se recibió la testifical de todos los implicados, se analizó el video y se inspeccionó el expediente en presencia de las partes quienes hicieron uso de sus alegatos y se pronunciaron al respecto. En el acta de inspección del expediente se indicó que en *éste* no constaba el documento de color rosado manuscrito entregado por la defensa del procesado al tribunal del jurado, y que las partes involucradas en el proceso manifestaron no haber observado anomalía ni protesta alguna en el desarrollo del proceso oral y público del jurado, por lo que no se decidió por la nulidad del veredicto.

207. Por otro lado, respecto a la supuesta influencia política a la que se refirieron las representantes, el Estado señaló que no ha sido comprobada, ni a nivel interno, ni ante la Comisión, por lo que ello constituye una aseveración subjetiva e infundada. Asimismo, destacó que el Estado de Nicaragua es un Estado Laico.

*B.2 Alegatos de las partes y de la Comisión en relación con el deber de motivar*

208. En relación con el veredicto absolutorio de abril de 2002, la *Comisión* destacó que el mismo fue inmotivado y en ninguna otra parte del expediente se indicaron las razones por las cuales el jurado llegó a esa determinación. A este respecto, recordó que el deber de motivación es un corolario de las garantías del debido proceso, no sólo desde la legitimidad misma de la decisión y la defensa de una persona acusada, sino también desde la expectativa de acceso a la justicia que tienen las víctimas de violaciones a sus derechos. Asimismo, indicó que el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, además demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores.

209. La Comisión especificó que, “en relación con las víctimas de violencia y violación sexual, el cumplimiento de este deber exige que la propia víctima que denuncia la vivencia de una experiencia severamente traumática, pueda contar con una explicación seria y detallada sobre cómo fue tomado en consideración su testimonio, y no una escueta y/o prejuiciada determinación de que su verdad no fue considerada como creíble”, lo cual está ligado a la forma en que debe valorarse el testimonio de una víctima de violencia y violación sexual como una prueba fundamental en el proceso. Agregó que, por tratarse de una niña de corta edad, su testimonio debía valorarse desde una perspectiva de género y el principio general del interés superior. Así, sostuvo que aún en el caso de procesos adelantados con tribunales de jurado, los Estados deben asegurar el cumplimiento de la obligación relacionada con que toda decisión judicial debe dar cuenta de manera motivada la forma en que

se ha considerado el parecer del niño o niña involucrado en el proceso. Si bien el Estado indicó que la decisión fue adoptada con base en la normativa penal interna vigente, la Comisión entendió que no pueden oponerse cuestiones de derecho interno para eximir el cumplimiento de las obligaciones internacionales.

210. La Comisión notó que, luego de la absolución, la representante de V.P.C. presentó distintos recursos a efectos de cuestionar las falencias e irregularidades del proceso. De la información disponible, la Comisión observó que dichos recursos no resultaron efectivos, en tanto no proveyeron a V.R.P. y a su madre de la posibilidad de que sus alegatos fueran analizados adecuadamente y se aplicaran los correctivos necesarios a la investigación.

211. Las *representantes* se refirieron a la jurisprudencia de esta Corte que ha señalado que el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso. Las representantes añadieron que la víctima no tuvo la posibilidad de conocer las razones en las que se basaba el veredicto de inocencia. Sostuvieron que en el presente caso, a 15 años del veredicto por el cual fue absuelto el agresor de la presunta víctima, no ha sido posible recibir una explicación de cuáles fueron los hechos, los motivos, las normas y las pruebas en las que se basó el jurado para tomar la decisión en un espacio de 15 minutos, sin creerle al relato “claro y coherente” de V.R.P. respecto a la culpabilidad de su padre. Indicaron que tampoco fue posible conocer si los alegatos planteados por el abogado acusador fueron tomados en consideración, si el jurado analizó las pruebas, o si por el contrario, fue el contenido del papel rosado que recibieron de uno de los defensores con la instrucción de leerlo en privado lo que influyó en la decisión, o si fue real y efectivamente la influencia política imperante en el país sobre la justicia, y que se puso de manifiesto en el caso. Concluyeron que, con sólo observar el veredicto, establecido en

media página de papel, es posible concluir que se trata de una decisión carente de motivación y “a todas luces arbitraria”, que no cumplió con los estándares establecidos por la Corte.

212. Aunado a lo anterior, las representantes estimaron que no solo no se conocieron las razones del veredicto de inocencia, sino que tampoco se le ofreció a las víctimas un recurso que les permitiera una revisión efectiva del caso. El Estado no pudo garantizar la sanción del responsable del trauma de agresión sexual, como tampoco la investigación y sanción de los que actuaron con negligencia o irregularidades durante el proceso, ni de los que contribuyeron a la revictimización de la niña.

214. El *Estado* señaló que la institución de jurado en Nicaragua no consistía en una figura excepcional en su ordenamiento jurídico interno, sino que existe en muchos países del mundo, siendo el jurado un juez de los hechos y jamás del derecho. Añadió que, la legislación interna de Nicaragua en el artículo 22 del Código de Instrucción Criminal, establecía en la época que “los delitos comunes que merezcan penas más que correccional deberán ser sometidos al conocimiento del Tribunal de Jurados, quien emitirá su veredicto de íntima convicción, pronunciándose sobre la responsabilidad del procesado declarándolo inocente o culpable. Con este veredicto, el Juez de Distrito dictará su sentencia absolviendo, o imponiendo la pena”. Asimismo, indicó que el Tribunal del Jurado estaba “exento de fundamentar su decisión, la cual se tomaba de acuerdo a la sana lógica y a la íntima convicción”. La ley no impone al juzgador ningún tipo de regla que deba aplicar en la apreciación de los diversos medios probatorios; y la convicción que logra obtener el jurado no se encuentra sujeta a ningún tipo de formalidad preestablecida. Agregó que, en virtud del marco jurídico de actuación del Tribunal de Jurados, no se les debe pedir razones por las que llegaron a la convicción de condenar o absolver a una persona sujeta a un proceso penal. Subrayó que lo señalado por la Comisión en

cuanto a que la sentencia de abril de 2002 debió motivarse se prestaba a confusión, debido a que lo que se emitió ahí fue un veredicto por el Tribunal de Jurados cuya conclusión fue declarar inocente al señor H.R.A. y no una sentencia interlocutoria. Los veredictos no requieren motivarse. Por tanto, el Estado indicó que el jurado no tenía la obligación ni el deber de razonar o fundamentar los motivos para haber dictado la sentencia, ya que la verdad del proceso se determina a partir de la convicción moral, la conciencia y libre albedrío del jurado popular. Finalmente, el Estado aclaró que, de acuerdo con el artículo 309 del Código de Instrucción Criminal de la época, el veredicto se escribiría con una fórmula prediseñada e indispensable.

### *B.3 Consideraciones de la Corte*

215. La controversia que la Corte abordará en este apartado se relaciona con los alegatos referidos a la imparcialidad y al deber de motivar los fallos, principalmente en lo que se refiere al accionar del Tribunal de Jurados, que fue el órgano encargado de conocer en la etapa de plenario y de impartir justicia en el presente caso. Ello remite a esta Corte a la cuestión de la aplicabilidad de las garantías del debido proceso al modelo del juicio por jurados, vigente al momento de los hechos en Nicaragua (*infra* párrs. 227 a 235), para luego hacer el análisis del caso en concreto.

216. La Corte ha definido el debido proceso legal como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos<sup>279</sup>. Es así que el artículo 8 contempla un sistema de garantías

<sup>279</sup> Cfr. *Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 69, y *Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319, párr. 209.

que condicionan el ejercicio del *ius puniendi* del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias, toda vez que se deben observar “las debidas garantías” que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso<sup>280</sup>.

217. En el presente caso, quien se reputa presunta víctima de la violación de estas garantías no es el inculpado del delito, destinatario originario de toda la arquitectura ilustrada que procuraba poner coto al avance del poder punitivo del Estado, sino la agraviada del delito y su madre. En esta medida, la Corte recuerda que las “debidas garantías” del artículo 8.1 de la Convención amparan el derecho a un debido proceso del imputado y, en casos como el presente, también salvaguardan los derechos de acceso a la justicia de la víctima de un delito o de sus familiares y a conocer la verdad de los familiares<sup>281</sup>.

218. En principio, nada excluye que las garantías judiciales recogidas en la Convención Americana sean aplicables al sistema de juicio por jurados, pues sus redactores no tenían en mente un sistema procesal penal específico. En efecto, la Corte ya ha afirmado que:

[l]a Convención no acoge un sistema procesal penal en particular. Deja a los Estados en libertad para determinar el que consideren preferible, siempre que respeten las garantías establecidas en la propia Convención, en el derecho interno, en otros tratados internacionales aplicables, en las normas consuetudinarias y en las disposiciones imperativas de derecho internacional<sup>282</sup>.

280 Cfr. *Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos* (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 de 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11, párr. 28, y *Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 152.

281 Cfr. *Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306, párrs. 156 y 157, y *Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra*, párr. 133.

282 *Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párr. 66.

219. En igual sentido se han expedido los órganos tanto del sistema regional europeo como del sistema universal. En efecto, en el *Caso Taxquet Vs. Bélgica*, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que:

[...] varios Estados miembros del Consejo de Europa conocen la institución del jurado popular, que procede de la voluntad legítima de vincular a los ciudadanos con la acción de la justicia, en particular respecto a los delitos más graves. [...] Se trata ésta de una ilustración entre otras de la variedad de los sistemas jurídicos existentes en Europa, que no corresponde al Tribunal uniformizar. En efecto, la elección para un Estado de uno u otro sistema penal escapa, en principio, al control europeo que el Tribunal ejerce, siempre y cuando el sistema admitido no vulnere los principios del Convenio [...]<sup>283</sup>.

[...] En efecto, los Estados contratantes gozan de gran libertad en la elección de los medios que permitan a su sistema judicial cumplir los imperativos del artículo 6. La tarea del Tribunal consiste en determinar si, en un litigio concreto, los resultados de la vía seguida son compatibles con el Convenio, teniendo en cuenta igualmente las circunstancias específicas de la causa, su índole y su complejidad. En síntesis, debe examinar si el procedimiento, en conjunto, tuvo un carácter equitativo<sup>284</sup>.

220. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos sostuvo que:

[...] el Pacto no reconoce el derecho a un juicio por jurado en un proceso ni civil ni penal, sino que su piedra angular es que todos los procesos judiciales, con o sin jurado, se sustancien con las debidas garantías<sup>285</sup>.

283 TEDH, *Caso Taxquet Vs. Bélgica* [GS], No. 926/05. Sentencia de 16 de noviembre de 2010, párr. 83. Véase también, TEDH, *Caso Achour Vs. Francia* [GS], No. 67335/01. Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 51.

284 TEDH, *Caso Taxquet Vs. Bélgica* [GS], *supra*, párr. 84.

285 Comité Derechos Humanos, *Saso John Wilson c. Australia* (Comunicación No. 1239/2004). Decisión sobre la admisibilidad adoptada el 1 de abril de 2004, UN Doc. CCPR/C/80/D/1239/2004, 29 de abril de 2004, párr. 4.4. Véase también, Comité de Derechos Humanos, *Kavanagh c. Irlanda* (Comunicación No. 819/1998), UN Doc. CCPR/C/71/D/819/1998, dictamen adoptado el 4 de abril de 2001, párr. 10.1.



221. La Corte advierte que diversos Estados parte de la Convención han adoptado la institución del jurado como forma de juzgamiento en sus diseños procesales penales, modelo que hoy sigue proyectándose a nivel regional. Los orígenes y motivos deben ser rastreados en el desarrollo histórico, social y cultural de los sistemas jurídicos de los países de la región, así como en el valor asignado a la participación popular en la administración de justicia como opción de política judicial. El juicio por jurados se ha concebido, además, como una forma de devolver a la sociedad la confianza en el sistema judicial, como forma de democratización y acercamiento de la impartición de justicia a la comunidad, otorgándole a ésta un rol fundamental en aquellos delitos sensibles al orden público.

222. En efecto, de los 35 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “OEA”), 21 Estados<sup>286</sup> prevén el juicio por jurados, siendo el modelo clásico<sup>287</sup> el más utilizado en la región. En este sentido, la Constitución de Nicaragua establece la necesidad de que se garantice la participación popular en el sistema judicial, delegando en el legislador la forma en que tal mandato se instrumente. Desde la sanción del Código de Instrucción Criminal, en el año 1879, la participación popular se canaliza mediante el sistema de juicio por jurados en el procedimiento penal.

223. El modelo de enjuiciamiento penal adoptado por un Estado no resulta inocuo, en tanto va a tener un impacto directo en el diseño orgánico y en la arquitectura del sistema de garantías judiciales. Por ejem-

286 Antigua y Barbuda, Argentina (el sistema se aplica en tres de las 23 provincias que la conforman, esto es Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, mientras que en otras dos provincias, Río Negro y Chaco, aún se encuentra en fase de implementación, y existen proyectos para hacerlo extensivo a otras), Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Dominica, El Salvador, Granada, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, y Guyana.

287 Se caracteriza porque los legos y el juez técnico tienen funciones diferentes. Le corresponde a los primeros deliberar y emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia, y al segundo determinar la sentencia aplicable en caso que el jurado encuentre al acusado culpable.

plo, el sistema de valoración de la prueba evidentemente va a moldear el esquema de fundamentación probatoria y, a la postre, la exigencia de motivación o la forma de exteriorización de la fundamentación. Sin embargo, como ya se adelantó, la Convención Americana no establece un modelo único de enjuiciamiento penal (*supra* párr. 219).

224. La afirmación anterior no implica que los sistemas de enjuiciamiento penal por jurados queden al arbitrio del diseño estatal o que la legislación interna tenga preeminencia sobre los requerimientos convencionales, sino que el diseño de los ordenamientos procesales debe responder a los postulados de garantía que exige la Convención Americana. Es en esta medida que la Corte deberá ejercer su control de convencionalidad para examinar si los procedimientos, tal como fueron diseñados e implementados por el Estado, se ajustan a los parámetros dictados por el artículo 8.

225. En suma, la Corte habrá de evaluar en cada caso “las circunstancias de un procedimiento particular, su significación, su carácter y su contexto en un sistema legal particular”<sup>288</sup>, para determinar la medida y el alcance de las garantías debidas y su conformidad con la Convención Americana. Dentro de este marco, a continuación, la Corte hará una breve exposición sobre el desarrollo del proceso penal en la etapa plenaria en Nicaragua al momento de los hechos y luego examinará la cuestión relativa a la alegada falta de imparcialidad y de motivación del veredicto emitido por el jurado.

### *B.3.a La legislación procesal penal relativa a los jurados en Nicaragua en la época de los hechos*

226. El sustrato del juicio por jurados en Nicaragua se encuentra en su Constitución de 1987. En este sentido, el artículo 166 establece que:

<sup>288</sup> Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90, *supra*, párr. 28.

“[l]a administración de justicia se organizará y funcionará con participación popular, que será determinada por las leyes. Los miembros de los Tribunales de Justicia, sean abogados o no, tienen iguales facultades en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”<sup>289</sup>.

227. En cumplimiento de ese mandato constitucional, la cláusula de participación popular en el poder judicial se canalizó procesalmente a través de la figura del jurado. El sistema fue implementado a nivel nacional tanto en el Código de Instrucción Criminal —legislación procesal penal vigente y aplicada al enjuiciamiento del presente caso— como en el posterior Código Procesal Penal —Ley N° 406; legislación procesal penal vigente en la actualidad—.

228. Dado que el proceso penal del presente caso se realizó bajo las disposiciones del entonces vigente Código de Instrucción Criminal<sup>290</sup>, la Corte pasará a describir cómo era el funcionamiento del juicio por jurados. En particular, en cuanto a la implementación del juicio por jurados, el Código de Instrucción Criminal establecía que se juzgarían por un tribunal de jurados aquellos “delitos comunes que merezcan penas más que correccionales”<sup>291</sup>. El jurado, integrado con base en listas de ciudadanos “propuestos por ellos mismos”<sup>292</sup>, emitía su veredicto de “íntima convicción” sobre la responsabilidad del acusado, declarándolo inocente o culpable.

229. Así, durante la etapa plenaria, el juez convocaba a la desinsaculación de la lista de diez ciudadanos que podían conformar el Tribunal de Jurados<sup>293</sup>, uno de los cuales podía ser recusado sin causa por cada

289 Artículo 166 de la Constitución Política de Nicaragua (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 1 a la contestación, folio 8017).

290 Dicho cuerpo normativo estuvo vigente desde el año 1879 hasta la entrada en vigencia del Código Procesal Penal el 23 de diciembre de 2002, conforme a lo señalado por el Estado.

291 Artículo 22 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8028).

292 Artículo 23 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8028).

293 Cfr. Artículo 274 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8066).

parte<sup>294</sup>. En esa misma ocasión, se designaba al juez de derecho que formaría parte del Tribunal de Jurados y se señalaba lugar, fecha y hora para realizar la audiencia de vista pública<sup>295</sup>. Antes de la vista pública se procedía a la integración del Tribunal de Jurados, oportunidad en la cual las partes podían recusar con causa, evidente o demostrable a cualquiera de los jurados<sup>296</sup>. La recusación era resuelta por el juez en la misma sesión, no siendo procedente ulterior recurso<sup>297</sup>. El juez de la causa escogía a los cuatro ciudadanos que, junto con el juez de derecho, integraban el Tribunal de Jurados<sup>298</sup>. Asimismo, el juez de la causa contaba con la posibilidad de reponer de oficio al jurado en determinados supuestos<sup>299</sup>.

230. Una vez instalados los jurados en su cargo, luego de prestar promesa<sup>300</sup>, se elegía a un presidente y al secretario<sup>301</sup>. Se procedía a la realización de la audiencia pública<sup>302</sup>, luego de lo cual los miembros del jurado se reunían en sesión secreta a fin de deliberar “sobre el hecho principal y sobre

294 Cfr. Artículo 275 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8066).

295 Cfr. Artículo 275 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8066).

296 Cfr. Artículo 277 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8066).

297 Cfr. Artículo 277 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8066).

298 Cfr. Artículos 278 y 284 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folios 8066 a 8067).

299 Cfr. Artículo 282 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8067).

300 El artículo 290 del Código de Instrucción Criminal dispone que:

Una vez reunidos los jurados, el Juez recibirá la promesa de todos ellos en la forma siguiente: “¿Prometéis delante de Dios y delante de los hombres, examinar con escrupulosa atención el proceso que se os va a someter; no traicionar ni los intereses del acusado ni los de la sociedad que le acusa; no dejaros llevar por el odio, ni por la antipatía, por la malevolencia, por el temor ni por el afecto; resolver siguiendo vuestra conciencia e íntima convicción con la imparcialidad y firmeza que conviene a un hombre probo y libre?”. Cada uno de los jurados llamados individualmente por el Juez responderá: “Lo prometo”. (Arto. 24 de la misma Ley).

(expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8068).

301 Cfr. Artículo 291 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8068).

302 Cfr. Artículos 292 a 303 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folios 8068 a 8069).

cada una de sus circunstancias”<sup>303</sup>. Al quedar solos los jurados, el presidente les hacía la siguiente advertencia, la que debía estar escrita con gruesos caracteres y fijada en la pieza en que se reunía el jurado:

La ley no pide a los jurados cuenta de los medios por los cuales han llegado a formar su convencimiento, ni les prescribe reglas de las cuales deban deducir especialmente la certeza de los hechos. Ella les prescribe solamente interrogarse a sí mismo, y buscar en la sinceridad de su conciencia qué impresión han hecho en su razón las pruebas producidas en contra y en defensa del acusado. La ley no les dice tendréis por verdad tal hecho afirmado, por tal número de testigos; ella no les hace sino ésta sola pregunta, que resumen todos sus deberes: “¿Tenéis una íntima convicción”<sup>304</sup>

231. Posteriormente y una vez discutido el proceso de forma suficiente, mediante votación secreta y de acuerdo a su íntima convicción, decidían la culpabilidad o la inocencia del procesado<sup>305</sup>. La votación de los jurados se realizaba en sesión secreta e ininterrumpida hasta alcanzar el veredicto, el cual requería de cuatro votos en un mismo sentido, teniendo el jurado disidente la facultad de razonar su voto por escrito separado<sup>306</sup>.

232. El artículo 309 del Código de Instrucción Criminal prescribía una fórmula fija para redactar el veredicto<sup>307</sup>, el cual era entregado al juez<sup>308</sup>.

303 Cfr. Artículos 304 y 306 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folios 8069 a 8070).

304 Cfr. Artículo 305 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8069).

305 Cfr. Artículo 307 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8070).

306 Cfr. Artículo 307 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8070).

307 El artículo 309 del Código de Instrucción Criminal dispone que:

El veredicto se escribirá en la siguiente e indispensable fórmula: “En la ciudad de ... (Nombre de la ciudad, la hora, fecha, mes y año). El jurado, habiendo examinado la presente causa, declara: (si es absolviendo) que fulano o fulanos es o no inocentes del delito o delitos, falta o faltas porque les ha proveído auto de prisión: (si es condenatorio) que fulano o fulanos es o son culpables del delito o delitos, falta o faltas, porque se les ha proveído auto de prisión, fulano su cómplice y fulano su encubridor”. Si se absuelve por un delito o falta y se condena por otro u otra, deben designarse claramente ambos. (Arto. 43 de la misma Ley).

(expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8070).

308 Cfr. Artículos 310 y 311 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8070).

Una vez recibido por el juez el veredicto del jurado, si era absolutorio, ponía en libertad al procesado inmediatamente<sup>309</sup>. En cambio, “[s]i el veredicto [era] condenatorio, el Juez dentro de ocho días de emitido, dicta[ba] sentencia bajo su responsabilidad, sea o no letrado, aplicando al reo o reos la pena establecida por la Ley; y si aquélla fuere gradual, en el grado que les corresponda y en los términos debidos, según las circunstancias de delito”<sup>310</sup>. Posteriormente, el juez remitía los autos en consulta a la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del tercer día de notificada la sentencia. Igual remisión hacía cuando el veredicto era absolutorio<sup>311</sup>.

233. El Código preveía como nulidades sustanciales, peculiares al veredicto o declaración del jurado, las siguientes<sup>312</sup>:

- 1a. No ser el negocio de aquellos en que el jurado debe intervenir.
- 2a. La falta de citación para la desinsaculación de los nombres que deben componer el tribunal de jurados.
- 3a. No haber admitido la recusación de los jurados en los casos en que la Ley lo permite.
- 4a. Si los jurados no prestaren la promesa establecida por esta Ley.
- 5a. El no estar escrito o firmado el veredicto o declaración en los términos que por la Ley se establecen.
- 6a. El formar parte del jurado persona que no haya sido desinsaculada para el caso, aunque esté en la lista de los jurados sorteados por el municipio.
- 7a. Si se probare fraude de parte del Juez, al hacer la desinsaculación de jurados.

309 Cfr. Artículo 321 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8072).

310 Artículo 322 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8072).

311 Cfr. Artículo 326 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8073).

312 Artículo 444 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folios 8090 a 8091).

8a. Si los jurados han sido cohechados.

9a. Si se hubiere formado el tribunal de jurados con un número mayor o menor del establecido en esta Ley.

10a. Si hubiera asistido a las deliberaciones secretas del jurado alguna persona extraña.

11 a. Si de la desinsaculación de los jurados a la sesión pública, transcurrieren más de ocho horas.

12a. Si el voto de uno o más jurados lo hubieren hecho depender de la suerte.

13a. Cuando forme parte del tribunal alguna de las personas comprendidas en el Arto. 16 de la Ley de Jurados. (Arto. 56, Ley 21 de Septiembre de 1897).

234. El efecto de las nulidades sustanciales era anular el proceso, de modo tal que el juez o tribunal mandaba a reponer la causa desde el primer acto válido inclusive. En el caso de las nulidades peculiares al veredicto, correspondía mandar a reponer la causa hasta practicar nueva desinsaculación para la organización del jurado previas las citaciones para el acto<sup>313</sup>.

235. El Código de Instrucción Criminal de Nicaragua fue derogado y sustituido por el Código Procesal Penal (CPPN), que entró en vigor en diciembre de 2002.

236. Asimismo, el Estado informó que actualmente “los procesos que provienen de delitos por violación y otros delitos sexuales, deben ser conocidos y resueltos por Jueces de derecho y no por Tribunales de Jurados, tomando en cuenta la necesidad de resolver de forma técnica y motivada los mismos”.

237. En efecto, actualmente se excluye la posibilidad de que un caso de violencia sexual sea sometido al juzgamiento de un jurado popular. El artículo 565 del Código Penal vigente en Nicaragua (Ley N° 641) dispone que

313 Cfr. Artículo 446 del Código de Instrucción Criminal (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 2 a la contestación, folio 8091).

se realicen con juez técnico los juicios por, entre otros, los delitos de violencia doméstica o intrafamiliar y los delitos contra la libertad e integridad sexual. Adicionalmente, en el mes de enero del año 2012 se aprobó la Ley N° 779, “Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley N° 641, ‘Código Penal’”, que entró en vigor en el mes de junio de ese mismo año. Conforme los considerandos expuestos a modo de expresión de los motivos de sanción de la ley, la nueva legislación se fundamenta en la evidencia de que “la normativa existente para frenar la violencia de género en contra de las mujeres, no ha obtenido los resultados buscados para la efectiva protección de su vida, libertad e integridad personal, por lo que resulta indispensable la promulgación de una Ley autónoma de carácter especial, que aborde en forma integral este problema, tipificando y sancionando las diferentes manifestaciones de violencia hacia la mujer”<sup>314</sup>. En particular, en cuanto aquí interesa con relación a la implementación del sistema de enjuiciamiento de casos de violencia de género, y casos de violencia sexual en particular, la ley dispone la creación de los Juzgados de Distrito Especializados en Violencia<sup>315</sup>, que se integran por un juez técnico especializado en la materia<sup>316</sup>.

314 Considerando I de la Ley N° 779, “Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No. 641, ‘Código Penal’” (expediente de prueba, tomo XX, anexo 3 de la prueba para mejor resolver, folio 9457).

315 El artículo 30 de la Ley N° 779 establece lo siguiente:

Órganos especializados.- Créense los Juzgados de Distrito Especializados en Violencia, integrados por un Juez o Jueza especializada en la materia. Deberá existir como mínimo un Juzgado de Distrito Especializado en Violencia en cada cabecera departamental y Regiones Autónomas y en los municipios en que, por su ubicación, sea difícil el acceso a los Juzgados ubicados en las cabeceras departamentales.

Adscritos a los Juzgados de Distrito Especializado en Violencia, se crearán equipos interdisciplinarios integrados al menos por una psicóloga y una trabajadora social, encargados de brindar asistencia especializada a las víctimas, en apoyo a la función jurisdiccional en las audiencias; y para brindar seguimiento y control de las medidas de protección impuestas por el juzgado.

(expediente de prueba, tomo XX, anexo 3 de la prueba para mejor resolver, folio 9464).

316 El artículo 56 de la Ley N° 779 dispone que: “[s]e realizará con Jueza o Juez técnico los juicios por los delitos a los que se refiere la presente Ley” (expediente de prueba, tomo XX, anexo 3 de la prueba para mejor resolver, folio 9468).



### B.3.b La garantía de imparcialidad de los jurados

238. Este Tribunal ha establecido que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad<sup>317</sup>. En este sentido, la recusación y la excusación son instrumentos procesales que permiten proteger el derecho a ser juzgado por un órgano imparcial. La garantía de imparcialidad implica que los integrantes del tribunal no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia, y que inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática<sup>318</sup>. La imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario, consistente por ejemplo en la demostración de que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes. Por su parte, la denominada imparcialidad objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona<sup>319</sup>. La Corte advierte que dichos parámetros son aplicables también a los miembros del jurado<sup>320</sup>.

317 Cfr. *Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 56, y *Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua*, *supra*, párr. 172.

318 Cfr. *Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela*, *supra*, párr. 56, y *Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua*, *supra*, párr. 172.

319 Cfr. *Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela*, *supra*, párr. 56, y *Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 233.

320 En igual sentido se han expedido tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Humanos. Cfr. TEDH, *Caso Gregory Vs. Reino Unido*, No. 22299/93. Sentencia de 25 de febrero de 1997, párrs. 22 a 25, y *Caso Sanders Vs. Reino Unido*, No. 34129/96. Sentencia de 9 de mayo de 2000, párrs. 22 a 25. Véase también, Comité de Derechos Humanos, *Caso Mulai c. Guayna* (Comunicación No. 811/1998),

239. En esta línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que, cualquiera sea el sistema procesal de enjuiciamiento que se implemente, resulta fundamental para la existencia de una sociedad democrática que los tribunales inspiren confianza a los ciudadanos y, sobre todo en el proceso penal, al acusado. Para ello, ha afirmado que todo tribunal, incluido el jurado, debe ser imparcial desde un punto de vista tanto objetivo como subjetivo<sup>321</sup>. La imparcialidad del juez y del jurado se presume, siempre que no se demuestre lo contrario<sup>322</sup>, según las circunstancias del caso concreto<sup>323</sup>.

240. En efecto, la Corte resalta que en el análisis de la vertiente objetiva de la imparcialidad no se cuestiona las capacidades personales o las convicciones sobre el caso concreto de los juzgadores o sus posibles relaciones con las partes, sino hechos que razonablemente podrían justificar en un observador objetivo falta de confianza en quienes se encuentran a cargo de la importante misión de impartir justicia en un determinado caso.

241. Bajo esta órbita, el Tribunal Europeo ha especificado que:

[b]ajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática, y sobre todo, en las partes del caso<sup>324</sup>.

UN Doc. CCPR/C/81/D/811/1998, dictamen adoptado el 20 de julio de 2004, párr. 6.1, y *Dole Chadee y otros c. Trinidad y Tobago* (Comunicación No. 813/1998), UN Doc. CCPR/C/63/D/813/1998, dictamen adoptado el 29 de julio de 1998, párr. 10.1.

321 Cfr. TEDH, *Caso Hanif y Khan Vs. Reino Unido*, Nos. 52999/08 y 61779/08. Sentencia de 20 de diciembre de 2011, párr. 138.

322 Cfr. TEDH, *Caso Hanif y Khan Vs. Reino Unido*, *supra*, párr. 139.

323 Cfr. TEDH, *Caso Hanif y Khan Vs. Reino Unido*, *supra*, párr. 140.

324 Cfr. TEDH, *Caso Pabla Ky Vs. Finlandia*, No. 47221/99. Sentencia de 22 de junio de 2004, párr. 27.

242. La Corte considera que en este caso no se encuentran implicadas causales de índole subjetiva que afectaran la imparcialidad de los juzgadores *ab initio*, en este caso constituidos por la jueza a cargo de la causa, la jueza de derecho presidenta del Tribunal de Jurados y los miembros del jurado, sino que los alegatos están relacionados con la vertiente objetiva de la imparcialidad. Por ende, la Corte pasará a analizar los hechos y aspectos alegados a fin de determinar si existió un temor fundado que pusiera en duda el ejercicio de las funciones de la jueza a cargo del proceso y del Tribunal de Jurados en el caso en concreto.

243. En este caso, los alegatos de falta de imparcialidad versan principalmente sobre las siguientes cuestiones fácticas: i) el hecho de que se habría suspendido en dos oportunidades la audiencia supuestamente de forma injustificada; ii) el hecho de que no se dejara participar a la señora V.P.C. en una de las audiencias de desinsaculación del jurado; iii) el hecho de que no se dejara al abogado de la parte acusadora contar con la colaboración de otro letrado, y iv) el hecho acaecido al finalizar la audiencia de vista y antes de que el jurado se retirara a su deliberación secreta: la entrega a la jueza presidenta de una bolsa gris metálica y de unas hojas de papel rosado enviadas por el imputado para que las leyeran en la sesión privada.

244. La Corte nota que el procedimiento central en que puede disiparse la posible imparcialidad del jurado es la audiencia de desinsaculación, que en los sistemas anglo-sajones se denomina *voir dire*. Este procedimiento cobra especial relevancia en casos de violencia sexual, a fin de establecer si los jurados portan prejuicios y creencias falsas al respecto que pudieran influir negativamente sobre su valoración del caso en concreto a través de los prejuicios y mitos presentes en el imaginario social. En el caso de Nicaragua, se preveía dicha instancia con la posibilidad de recusar a un jurado sin causa (*supra* párr. 230).

245. Sobre la suspensión de la audiencia en dos ocasiones (*supra* párr. 95), la Corte nota que, tal como indicó el Estado, no existen elementos que pudieran objetivamente indicar que ello afectó la imparcialidad de los juzgadores.

246. Otro de los vicios alegados en el desarrollo del proceso, es que no se le permitió a V.P.C. estar presente en una audiencia de desinsaculación del jurado, lo que le habría impedido recusar a algunos miembros. La Corte nota que su representante legal acreditado en la causa sí estuvo presente<sup>325</sup>. En este sentido, no se especificó qué hechos o circunstancias podrían haber constituido razones para recusar a alguno de los miembros del jurado que su abogado desconociera y que no pudo formular en dicha instancia. Por consiguiente, la Corte no encuentra que existiera una afectación en el caso en concreto, más aún que esa conformación no fue el Tribunal de Jurados que estuvo en la audiencia de vista pública.

247. Por otra parte, la Corte nota que, en lo que respecta a la composición del Tribunal de Jurados, las partes pudieron presentar recusaciones con y sin causa, de acuerdo a lo regulado en el Código de Instrucción Criminal (*supra* párr. 230), y que efectivamente hicieron uso de dicho derecho en todas las desinsaculaciones salvo justamente en la última. En efecto, el abogado de V.P.C. no presentó ninguna recusación en la desinsaculación de los jurados que finalmente conocieron de la vista pública y emitieron el veredicto. La Corte advierte que tampoco se hicieron preguntas a los jurados sobre sus creencias en torno a cuestiones susceptibles de ser condicionadas por estereotipos y prejuicios sociales, aspecto que no estaba previsto expresamente en la legislación nicaragüense. Todo ello es indicativo de que en lo que hace a la integra-

325 En el auto de 15 de abril de 2002, la jueza señaló que V.P.C. estuvo representada por su abogado, por lo que no se violó el procedimiento en la desinsaculación. *Cfr.* Auto emitido por el Juez del Distrito para lo Penal de Jinotega el 15 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo D.2 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7136 a 7137).

ción del jurado, no existían cuestionamientos o elementos subjetivos que afectaran la imparcialidad de sus miembros antes de la vista pública. Más aún, no fue alegada ninguna circunstancia particular respecto a la mecánica de dicha desinsaculación que pudiera poner en duda la imparcialidad subjetiva de los juzgadores.

248. En lo que se refiere al hecho de que no se dejara al abogado de la parte acusadora contar con la colaboración de otro letrado, la Corte constata que en el expediente con el que cuenta no surge que la jueza a cargo del caso hubiera dado una respuesta por escrito a dicho pedido, como sí lo hizo respecto de la solicitud de la defensa (*supra* párr. 97). De acuerdo a lo indicado, la respuesta habría sido brindada *in voce* sin que surja ninguna actuación que la cuestionara. La Corte entiende, en todo caso, que dicha circunstancia no tendría un agravio particular en relación con la garantía que se está analizando.

249. Ahora bien, la Corte es de la opinión que existen dos aspectos que, de acuerdo a lo alegado, tuvieron entidad suficiente para generar un temor fundado de parcialidad en la parte acusadora: la entrega a la jueza presidenta del jurado de una bolsa gris metálica y de dos hojas de papel rosado enviadas por el imputado para que las leyera en la sesión privada.

250. Al respecto, la Corte considera que, a pesar de que el video mediante el cual se filmó la audiencia de vista no ha sido aportado a este Tribunal<sup>326</sup>, la existencia de estos dos hechos no se encuentra controvertida, ya que ambos fueron verificados en la diligencia de inspección del mismo (*supra* párr. 118) y por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (*supra* párr. 100). Por lo tanto, la Corte da por establecida la entrega de una bolsa plástica metálica a la jueza de derecho y

326 Se solicitó el video al Estado como prueba para mejor resolver, el cual aclaró que la ley en aquel momento no establecía la grabación de las audiencias en video. Agregó que estaba imposibilitado de proveer dicho video por el tiempo transcurrido de 15 años desde que se denunció el caso ante la Comisión IDH en el año 2002, hasta esta fecha. Sin embargo, señaló que prueba de que sí existió dicho video y que fue inspeccionado por las partes en el proceso es el acta de inspección que el Estado proveyó a la Corte.

de dos hojas de papel de color rosado escritas por el imputado para que las leyera el jurado de forma privada. Lo que no se tiene certeza es cuál era el contenido tanto de la bolsa como del papel rosado.

251. Si bien tanto la señora V.P.C. como la jueza de derecho dieron su versión de los hechos<sup>327</sup> respecto de la bolsa plástica metálica, lo cierto es que esta Corte no tiene forma de establecer lo que la misma contenía. Por otra parte, las hojas de papel rosado no constan en el expediente, por lo que es imposible saber su contenido.

252. No obstante ello, la Corte considera que estos hechos por sí mismos constituyen elementos convincentes que permiten cuestionar a cualquier observador objetivo la imparcialidad de los miembros del Tribunal de Jurados, toda vez que pudieron generar un temor de parcialidad legítimo en la víctima y la parte acusadora que no fue disipado, dado que no se mostró el contenido de la bolsa ni se leyó lo escrito en las hojas de papel rosado en la presencia de las partes. Tampoco el Estado realizó una investigación de las denuncias de posible cohecho a raíz de estos acontecimientos, más allá de lo resuelto mediante el recurso de nulidad (*supra* párr. 107). Por consiguiente, el temor en este caso es

327 La señora V.P.C. señaló que: “[y]a casi cuando llevábamos alrededor de 23-24 horas, entró el secretario, estaba la jueza, la que siempre estuvo al frente del caso, que a pesar de que si él dice que si fue recusado o no recusado, ella siempre volvía otra vez, pasaba de jueces en jueces pero los casos siempre se los volvían a pasar a ella y en ese momento llevaron, como lo que se llama una bolsa como plateadas, que se miraba que lo que había eran como fajos de billetes, porque está el video que lo examinó el juez y todo, y se acercó uno de los tantos abogados que tenía el agresor y le dijo: ‘miren señores miembros del jurado, aquí está este sobre para que sea leído en una sesión privada’. Entonces en ese momento, me entiende, se le dijo que por favor mostraran el documento, dijeron que como habían indicado de que se leyera en la sesión privada, tampoco quisieron mostrar lo que había dentro de esa bolsa, pero cuando ellos entraron a deliberar en ese momento ellos llevaban la bolsa y llevaban el documento. Cuando ellos salieron y posterior a eso, la bolsa y el documento tenían que agregarse al documento porque formaban parte del expediente y nunca aparecieron. Y por esa razón es que se había promovido como un incidente de nulidad por el cohecho que era para los miembros del jurado [...]. Era una bolsa plateada, o sea cubierta, me entiende, estaba como así sellada, pero se miraba por fuera, porque era una bolsa que contenía dinero y había un video, ese video no sé qué fue lo que pasó con este video pero el video se desapareció en el Juzgado”. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017. Por su parte, la jueza de derecho indicó en su descargo ante la queja promovida en su contra: “que el d[í]a trece de [a]bril entre las diez y treinta y once minutos de la mañana por una necesidad imperiosa de carácter personal ya que me encontraba en mi período menstrual mi esposo hizo llegar una bolsa color gris que decía Lucky Strick con Ropa, un blumer y toallas sanitarias”. Descargo presentado el 29 de enero de 2003 (expediente de prueba, tomo XX, anexo 7.a de la prueba para mejor resolver, folios 9666 a 9669).

considerado por esta Corte como objetivamente justificado, lo que constituye una violación de la garantía de imparcialidad objetiva, prevista en el artículo 8.1 de la Convención.

### *B.3.c El deber de motivación y las garantías contra la arbitrariedad del veredicto*

253. La Corte ha señalado que “el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso”<sup>328</sup>. La Corte ha precisado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”<sup>329</sup> y conlleva una exposición racional de las razones que llevan al juzgador a adoptar una decisión. La relevancia de esta garantía se encuentra ligada a la correcta administración de justicia y a evitar que se emitan decisiones arbitrarias. Asimismo, la motivación otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática y demuestra a las partes que éstas han sido oídas<sup>330</sup>.

254. Ello, se encuentra ligado con otro de los aspectos que realzan el valor de la motivación como garantía, que es proporcionar la posibilidad, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. De este modo, la Corte ya ha señalado que “la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa”<sup>331</sup>. Sin embargo, la Corte también ha referido que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento

328 Caso *Apitz Barbera y otros* (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, *supra*, párr. 78, y Caso *Trabajadores Cesados de Petroperú y otros* Vs. Perú, *supra*, párr. 168.

329 Caso *Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez* Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107, y Caso *Trabajadores Cesados de Petroperú y otros* Vs. Perú, *supra*, párr. 168.

330 Cfr. Caso *Apitz Barbera y otros* (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, *supra*, párr. 78, y Caso *Trabajadores Cesados de Petroperú y otros* Vs. Perú, *supra*, párr. 168.

331 Caso *Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez* Vs. Ecuador, *supra*, párr. 118, y Caso *Zegarra Marín* Vs. Perú, *supra*, párrs. 147 y 155.

de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha<sup>332</sup>.

255. En el ámbito penal, como garantía del inculpado, se dirige también a asegurar el principio de presunción de inocencia, ya que permite a quien se ve sometido al poder penal del Estado comprender las razones por las que fue posible obtener convicción sobre la imputación y la responsabilidad penal, así como la apreciación de las pruebas para desvirtuar cualquier hipótesis de inocencia, y solo así poder confirmar o refutar la hipótesis acusatoria<sup>333</sup>. Lo anterior, permitiría desvirtuar la presunción de inocencia y determinar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, así como posibilitar el ejercicio de la defensa a través de la facultad de recurrir el fallo condenatorio.

256. Ahora bien, la Corte estima pertinente precisar que la motivación de las decisiones adoptadas por los órganos encargados de impartir justicia no es sólo relevante para el inculpado del delito, sino que permite también el control ciudadano de los actos de gobierno, en este caso de la administración de la justicia y los expone a su escrutinio. En el caso de los jurados, dicha vertiente se entiende cubierta en razón de la participación directa de la ciudadanía.

257. En esta línea, la Corte considera que el argumento de la Comisión, en cuanto a sostener que el hecho de que el veredicto absoluto fuera inmotivado implica *per se* una violación del artículo 8.1 de la Convención Americana, resulta en una afirmación general y abstracta, que no corresponde sea aceptada sin más argumentación o análisis del contexto histórico, social y cultural en que se desarrollaron los modelos de enjuiciamiento penal en los países del continente americano y, en particular, de cómo estaba diseñado el Tribunal de Jurados en Nica-

332 Cfr. *Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela*, *supra*, párr. 90, y *Caso Zegarra Marín Vs. Perú*, *supra*, párr. 178.

333 Cfr. *Caso Zegarra Marín Vs. Perú*, *supra*, párrs. 147 y 155.



ragua. Ello, toda vez que histórica y tradicionalmente el veredicto del jurado en un sentido clásico no exigía una motivación o exteriorización de la fundamentación, ya que la apreciación de la prueba se basaba en la íntima convicción de los juzgadores<sup>334</sup>. En este sentido, la Corte nota que la Comisión no expuso un razonamiento que haga eco de las particularidades de la figura del jurado desde la óptica procesal, ni en particular de su regulación en Nicaragua, al plantear la cuestión de su convencionalidad.

258. La Corte estima, como lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la falta de exteriorización de la fundamentación del veredicto no vulnera en sí misma la garantía de la motivación<sup>335</sup>. En efecto, todo veredicto siempre tiene motivación, aunque como corresponde a la esencia del jurado, no se expresa. Pero el veredicto debe permitir que, a la luz de las pruebas y el debate en la audiencia, quien lo valora pueda reconstruir el curso lógico de la decisión de los jurados, quienes habrían incurrido en arbitrariedad en el supuesto en que esta reconstrucción no fuera viable conforme a pautas racionales.

259. Algunos de los Estados de la OEA que implementan el sistema de enjuiciamiento por jurados establecen expresamente diferentes garantías de interdicción de la arbitrariedad en la decisión. Las instrucciones judiciales al jurado están previstas en las legislaciones procesales de Canadá<sup>336</sup>, Estados Unidos<sup>337</sup>, Nicaragua en la actualidad<sup>338</sup>, Panamá<sup>339</sup>,

334 Ello sin perjuicio de que en el derecho comparado existen las experiencias de Suiza y España en donde se exige la motivación de jurado. Cfr. TEDH, *Caso Taxquet Vs. Bélgica* [GS], *supra*, párrs. 56 a 58.

335 Cfr. TEDH, *Caso Saric Vs. Dinamarca*, No. 31913/96. Decisión de admisibilidad de 2 de febrero de 1999, págs. 14 a 15.

336 Cfr. Artículo 650.1 del Código Penal de Canadá.

337 Cfr. Regla 30 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos de América.

338 Cfr. Artículos 194, 298, 316, 317 y 318 de la Ley N° 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.

339 Cfr. Artículos 2358.8 y 2358.12 del Código Judicial de la República de Panamá.

El Salvador<sup>340</sup>, y las provincias argentinas de Buenos Aires<sup>341</sup>, Chaco<sup>342</sup>, Neuquén<sup>343</sup> y Río Negro<sup>344</sup>. La legislación panameña establece además que el juez técnico entregará a los jurados un cuestionario con las cuestiones a resolver, cuya respuesta deberán dar por escrito y se agregará al expediente<sup>345</sup>. Asimismo, la legislación de la provincia argentina de Buenos Aires<sup>346</sup> prevé que, cuando el veredicto de culpabilidad resulte manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso, el juez puede anularlo y ordenar un nuevo debate con otro tribunal. Por otra parte, la facultad de recusación con y sin expresión de causa se encuentra reconocida en los sistemas de Panamá<sup>347</sup> y de las provincias argentinas de Chaco<sup>348</sup>, Córdoba<sup>349</sup> y Río Negro<sup>350</sup>. Asimismo, las legislaciones de Estados Unidos<sup>351</sup>, Nicaragua<sup>352</sup> y en las provincias argenti-

340 Cfr. Artículo 411 del Código Procesal Penal de El Salvador.

341 Cfr. Artículos 371 bis y 371 ter del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Provincial N° 11.922 y modificaciones). El artículo 210 establece que la decisión del jurado se basa en su íntima convicción; no obstante, su artículo 106 agrega que: “[e]n el caso del juicio por jurados las instrucciones del juez al jurado constituyen plena y suficiente motivación del veredicto”.

342 Cfr. Artículos 53 y 68 a 71 de la Ley Provincial de Chaco N° 7661. Además, el artículo 92 establece que “[l]a sentencia se ajustará a las reglas del Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco, con la siguiente modificación: en lugar de los fundamentos de la decisión sobre los hechos probados, la culpabilidad del imputado y la calificación legal, contendrá la transcripción de las instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso y el veredicto del jurado”. Asimismo, el artículo 83 prevé que: “[s]i el veredicto fuere tan defectuoso que el juez no pudiese determinar la intención del jurado de absolver o condenar al acusado por el delito bajo el cual el acusado pudiera ser condenado de acuerdo con la acusación, o no pudiese determinar en qué hecho o hechos el jurado quiso absolver o condenar al acusado, el juez, previa opinión de las partes, podrá instruir al jurado para que reconsiderase dicho veredicto y exprese claramente su intención. Pero si el jurado persistiere en rendir el veredicto defectuoso, tal veredicto será aceptado, y el juez dictará un fallo absolutorio”.

343 Cfr. Artículos 205 y 206 de la Ley N°. 2784, Código Procesal Penal de la Provincia de Neuquén.

344 Cfr. Artículos 201 y 202 del Código Procesal Penal de Río Negro.

345 Cfr. Artículos 2374 a 2377 del Código Judicial de la República de Panamá.

346 Cfr. Artículo 375 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Provincial N° 11.922 y modificaciones).

347 Cfr. Artículo 2344.3 del Código Judicial de la República de Panamá.

348 Cfr. Artículos 34 a 40 y 43 de la Ley Provincial de Chaco N° 7661. El artículo 29, párrafo segundo, de esta ley establece, además, como garantía de representación ciudadana, que “[c]uando el jurado deba integrarse con hombres y mujeres de los pueblos indígenas, los convocados como potenciales jurados a la audiencia pertenecerán al Pueblo Indígena respectivo, en su mitad”.

349 Cfr. Artículos 18, 23 y 24 de la Ley Provincial de Córdoba N° 9182.

350 Cfr. Artículo 194.3 del Código Procesal Penal de Río Negro.

351 Cfr. Regla 24 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos de América.

352 Cfr. Artículo 296 de la Ley N° 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.

nas de Buenos Aires<sup>353</sup>, Chaco<sup>354</sup>, Neuquén<sup>355</sup> y Río Negro<sup>356</sup>, establecen una audiencia especial o momento procesal específico, previo al juicio oral, para la selección de los integrantes del jurado (*voir dire*), donde las partes cuentan con el derecho de vetar o recusar a los potenciales jurados con base en preguntas que pueden formularles sobre circunstancias que afecten su imparcialidad<sup>357</sup>. Por otra parte, la normativa de Estados Unidos<sup>358</sup> y de la provincia argentina de Chaco<sup>359</sup> establecen la facultad de las partes o del juez, tras el resultado del veredicto, de indagar a los jurados individualmente sobre la efectiva existencia de unanimidad en la decisión del veredicto. La legislación de la provincia argentina de Córdoba<sup>360</sup> prevé también cursos de capacitación para ciudadanos con el objeto de promover el conocimiento y adecuado cumplimiento de la función judicial de los jurados. La asistencia y aprobación de dichos cursos no constituye un requisito para ejercer la función del jurado, pero sirve para acreditar la idoneidad para cumplirla.

260. En ese sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que el sistema de decisión por íntima convicción no vulnera en sí el derecho a un juicio justo siempre que, del conjunto de actuaciones realizadas en el procedimiento, la persona interesada –en ese caso la condenada– pueda entender las razones de la decisión<sup>361</sup>. De esta forma, el Tribunal Europeo ha precisado que:

353 Cfr. Artículo 338 quáter del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Provincial N° 11.922 y modificaciones).

354 Cfr. Artículos 23, 26, 32, 33 y 34 de la Ley Provincial de Chaco N° 7661.

355 Cfr. Artículos 197 y 198 del Código Procesal Penal de la Provincia del Neuquén (Ley Provincial N° 2784). El artículo 198.6 establece, además, como garantía de integración plural, que “[e]l jurado deberá quedar integrado, incluyendo los suplentes, por hombres y mujeres en partes iguales. Se tratará de que, como mínimo, la mitad del jurado pertenezca al mismo entorno social y cultural del imputado. Se tratará también, en lo posible, que en el panel de jurados haya personas mayores, adultas y jóvenes”.

356 Cfr. Artículo 194.3 del Código Procesal Penal de Río Negro.

357 Cfr. Artículos 33 y 34 de la Ley Provincial de Chaco N° 7661.

358 Cfr. Regla 31.d de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos de América.

359 Cfr. Artículo 85 de la Ley Provincial de Chaco N° 7661.

360 Cfr. Artículo 51 de la Ley de Córdoba N° 9182.

361 Cfr. TEDH, *Caso Lhermitte Vs. Bélgica*, No. 34238/09. Sentencia de 29 de noviembre de 2016, párr. 80.

Teniendo en cuenta el hecho de que el cumplimiento de las exigencias del proceso justo se aprecia sobre la base del conjunto del procedimiento y dentro del contexto específico del sistema jurídico en cuestión, la tarea del Tribunal, frente a un veredicto no fundamentado, consiste en examinar si, a la luz de todas las circunstancias de la causa, el procedimiento seguido ofreció suficientes garantías contra la arbitrariedad y permitió al acusado comprender su condena<sup>362</sup>.

261. La íntima convicción no es un criterio arbitrario. La libre valoración que hace el jurado no es sustancialmente diferente de la que puede hacer un juez técnico, sólo que no lo expresa. En definitiva, cualquier tribunal (técnico o popular) debe reconstruir un hecho pasado, para lo cual utiliza la lógica metodológica que es común a cualquier persona, pues no depende de que tenga o no formación o entrenamiento jurídico. Toda persona que debe reconstruir un hecho del pasado, consciente o inconscientemente, emplea el método histórico, o sea, en un primer paso delimita las pruebas que tendrá en cuenta (heurística); a continuación valora si esas pruebas no son materialmente falsas (crítica externa); luego valora la verosimilitud del contenido de las pruebas (crítica interna) y, finalmente, llega a la síntesis. Quien valora el veredicto de un jurado, necesariamente debe reconstruir este camino, no bastando para descartarlo cualquier criterio diferente acerca de las críticas. Para descartar el veredicto de un jurado debe verificarse que la síntesis se aparte directamente de la lógica metodológica histórica antes referida, que es lo que sucede en el caso.

262. Por consiguiente, la Corte considera que lo que corresponde analizar es si el procedimiento penal en su conjunto ofreció mecanismos de salvaguardia contra la arbitrariedad y que permitieran comprender las razones del veredicto –no acotado al acusado sino también a la víctima o a la parte acusadora-. En esencia, la necesidad de que el

362 TEDH, *Caso Taxquet Vs. Bélgica* [GS], *supra*, párr. 93.

imputado y la víctima del delito o la parte acusadora comprendan las razones de la decisión de culpabilidad o inocencia, que adopta el jurado a través de su veredicto, mantiene plena vigencia, como garantía contra la arbitrariedad<sup>363</sup>.

263. Ahora bien, es necesario resaltar que el proceso penal por casos de violencia sexual lleva ínsito una serie de dificultades técnicas propias que hacen difícil su enjuiciamiento. Es común que existan escasas pruebas sobre lo sucedido, que el acusado afirme su inocencia, y que la discusión se circunscriba a la palabra de una persona contra otra. A ello se suman los prejuicios e ideas preconcebidas y estereotipadas propias del sistema patriarcal que existen en el imaginario social en torno a la violencia sexual. Los jurados son susceptibles de trasladar al procedimiento tales prejuicios e ideas y ser influenciados por ellos al momento de valorar la credibilidad de la víctima y la culpabilidad del acusado, condicionando de modo especial a quienes no poseen una capacitación especial en este tipo de delitos.

264. En razón de lo anterior, en el caso de juicio por jurados, algunos sistemas prevén, como buenas prácticas, medidas para mitigar el impacto de tales condiciones. Así, establecen, por ejemplo, el ofrecimiento de pruebas de expertos, llamadas pruebas contra-intuitivas, dirigidas a brindar información a los jurados sobre las particularidades de los hechos que se enjuiciarán, a fin de que puedan realizar una valoración de la prueba lo más objetivamente posible. Asimismo, se asigna al juez **técnico** la función de brindar instrucciones a los jurados sobre la forma de analizar determinadas pruebas en el procedimiento o bien se establecen preguntas que el jurado debiera contestar a través del veredicto. Por otra parte, en algunos sistemas se prevé una etapa especial, conocida en el sistema anglosajón como *voir dire*, para la selección de los jurados con carácter previo al juicio, en la cual las partes tienen la facultad de vetar

363 Cfr. TEDH, *Caso Taxquet Vs. Bélgica* [GS], *supra*, párr. 90, 91 y 92.

a aquellas personas que les puedan significar parciales o no aptas para el juzgamiento del caso.

265. Por lo tanto, teniendo en cuenta el sistema de Tribunal por Jurados vigente a la época de los hechos en Nicaragua en el que el veredicto era inmotivado y el hecho de que se trataba de un delito de violencia sexual, lo que corresponde a la Corte determinar es si, en el marco de lo dispuesto por la Convención Americana, el procedimiento en su conjunto ofreció garantías suficientes contra la arbitrariedad, de modo tal que las partes pudieran comprender el resultado del proceso como una consecuencia racional de la prueba incorporada al mismo durante la etapa instructiva y lo ventilado en la audiencia de vista pública.

266. La Corte nota que el Código de Instrucción Criminal no contenía una regulación expresa sobre las instrucciones del juez profesional a los jurados, tampoco contemplaba preguntas que el jurado debiera contestar a través del veredicto, ni incorporaba referencia alguna sobre la prueba contra-intuitiva, medidas todas que podrían haber puesto límites de racionalidad a una decisión y, que en definitiva, podrían haber fungido como garantías contra una decisión arbitraria (*supra* párr. 265), especialmente en este caso que trataba de un delito de violencia sexual cometido contra una niña.

267. La anterior afirmación, se ve corroborada por lo indicado por la jueza de derecho y presidenta del Tribunal de Jurados, quien manifestó en su descargo frente a la queja que interpuso en su contra la señora V.P.C. que:

En cuanto al veredicto[,] en ningún momento h[abía] incidido en el Tribunal de [J]urado[;] ellos c[o]mo tribunal de conciencia votaron de conformidad con su íntima convicción sin que [ella] haya tenido que intervenir en ningún momento, ni para aclarar un concepto técnico jurídico ya que no hubo necesidad, nadie lo solicitó todos ellos estaban claros que los dictámenes médicos legales no comprobaban

que el procesado fuera el transmisor de la enfermedad que la menor portaba y esto lo motivó a que el escrutinio que se realizó por única vez por unanimidad fuera declarado inocente al procesado<sup>364</sup>.

268. En suma, la Corte estima que el procedimiento no ofreció garantías suficientes para escrutar la decisión del jurado y, por ende, asegurar que la decisión no fuera arbitraria, por lo que es razonable concluir que el veredicto que desestimó la culpabilidad del acusado no podía ser previsto por las víctimas, ya que no mostraba correlato con los hechos, los elementos de prueba descriptos en la acusación y la evidencia recibida en el proceso interno.

269. Por ende, la Corte concluye que el procedimiento penal en su conjunto en el presente caso no aseguró a las víctimas que pudieran comprender las razones por las cuales H.R.A. fue absuelto, en violación del artículo 8.1 de la Convención.

### *B.3.d Conclusión*

270. Por las consideraciones precedentes, la Corte concluye que durante el procedimiento y enjuiciamiento llevado a cabo por el Tribunal de Jurados no se respetaron las garantías de debido proceso referidas a la imparcialidad objetiva y a la interdicción de la arbitrariedad, por lo que el Estado es responsable por la violación del artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma y el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de V.R.P. y V.P.C.

<sup>364</sup> Descargo presentado el 29 de enero de 2003 (expediente de prueba, tomo XX, anexo 7.a de la prueba para mejor resolver, folios 9666 a 9669).

C. *Plazo Razonable*

C.1 *Alegatos de las partes y de la Comisión en relación con el plazo razonable*

271. La *Comisión* alegó, con relación a la complejidad, que el Estado no justificó la demora del proceso en dicho factor. En cuanto a la participación de los interesados, la Comisión observó que la señora V.P.C. contribuyó activamente en el proceso, dando seguimiento e impulso a la investigación, quejándose en reiteradas ocasiones por la demora en la tramitación de diligencias así como de largos plazos de inactividad procesal. Respecto de la conducta de las autoridades judiciales, la Comisión identificó distintas omisiones en la realización de diligencias. Asimismo, observó que luego de la decisión absolutoria de abril de 2002, transcurrieron casi seis años hasta la culminación del proceso. La Comisión resaltó que, conforme a la documentación presentada, más de un juez se habría excusado de conocer el caso alegando tener afinidad con la persona procesada y que el propio Estado reconoció que un juez se excusó de conocer el caso “sin ningún motivo”. La Comisión indicó que, frente a esta situación, el Estado debió adoptar medidas para evitar que el mecanismo de las excusas se convirtiera en un factor de demora e impunidad en el presente caso. En cuanto al cuarto elemento, la Comisión consideró que, debido a la situación de niña y víctima de violación sexual de V.R.P., existía un deber reforzado del Estado de respeto y garantía de sus derechos, el cual no se vio reflejado en la manera en que se llevó a cabo la investigación y proceso penal. Finalmente, la Comisión resaltó que el propio Estado reconoció la demora en el proceso sin aportar justificación alguna.

272. Las *representantes* agregaron que no existía complejidad de la prueba, pues solo se hacía necesario hacer estudios médicos, psicológicos e indagatorias. Además, el caso solo tenía un presunto respon-



sable y una víctima. En cuanto a la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, las representantes indicaron que las innecesarias remisiones del proceso a personas que ya se habían pronunciado sobre el expediente, las excusas realizadas por jueces sin fundamento o mucho tiempo después de haber recibido el caso, los movimientos y cambios de jueces, y la existencia de plazos prolongados en los cuales el caso estaba inactivo de manera injustificada, sólo en espera de la decisión, son atribuibles al Estado, por lo que éste no actuó dentro de un plazo razonable. Las representantes sostuvieron que, si bien el veredicto del jurado fue emitido a los 4 meses y 23 días desde la denuncia, también observaron que desde el veredicto del jurado hasta el momento de la sentencia definitiva del incidente transcurrieron 5 años, 6 meses y 11 días; y un total de 5 años, 11 meses y 4 días desde la denuncia hasta el momento de la sentencia sobre el incidente de nulidad, lo cual convierte al plazo en irrazonable.

273. El *Estado* señaló que el proceso penal en este caso estaba conformado por dos etapas: la etapa instructiva, cuya duración de acuerdo al Código de Instrucción Criminal era de 10 días con procesado detenido y 20 días sin detenido; y la etapa plenaria que iniciaba con las primeras vistas después de la filiación y confesión con cargos del reo, concluyendo esta etapa con la sentencia definitiva cuando se elevaba el caso al conocimiento del Tribunal de Jurados quienes, por íntima convicción, emitían su veredicto. Según el Estado, se dictó sentencia en un plazo de 4 meses y 23 días, desde la presentación de la denuncia hasta el veredicto del Tribunal de Jurados. Estimó que dicha duración del plazo era razonable tomando en consideración el proceso vigente en ese entonces en Nicaragua. Además, el Estado afirmó que la Comisión incurrió en un error al extender el plazo de duración del proceso con otras incidencias o situaciones del proceso como son los recursos, incidentes y sus resoluciones lo que evidenciaba el desconocimiento técnico jurídico del sistema procesal

nicaragüense. En cuanto a la actuación de las autoridades, el Estado indicó que la etapa de incidentes y recursos posteriores a la sentencia definitiva, derivada del veredicto del jurado, duró 5 años, 6 meses y 10 días, lo cual incluyó una sentencia emitida por el Tribunal superior, resoluciones de autoridades judiciales e impulso procesal de las partes.

## C.2 Consideraciones de la Corte

274. La Corte ha señalado que el derecho de acceso a la justicia implica que la realización de todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y sancionar a los responsables se haga en un plazo razonable<sup>365</sup>. En este sentido, la Corte considera que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse<sup>366</sup>. Se ha considerado por este Tribunal que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales<sup>367</sup>.

275. Si bien es cierto que a efectos de analizar su plazo razonable, en términos generales la Corte debe considerar la duración global de un proceso hasta que se dicte sentencia definitiva<sup>368</sup>, en ciertas situaciones particulares puede ser pertinente una valoración específica de sus distintas etapas<sup>369</sup>.

365 Cfr. *Caso Fairén Garbí y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares*. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 90, y *Caso Pacheco León y otros Vs. Honduras, supra*, párr. 118.

366 Cfr. *Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo*. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 71, y *Caso Wong Ho Wing Vs. Perú, supra*, párr. 209.

367 Cfr. *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 145, y *Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra*, párr. 177.

368 Cfr. *Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, supra*, párr. 71, y *Caso Pacheco León y otros Vs. Honduras, supra*, párr. 159.

369 Cfr. *Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr. 403, y *Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 341, párr. 194.

276. Al respecto, la Corte nota que no existe controversia entre las partes respecto del plazo de duración del proceso desde la denuncia penal hasta el veredicto absolutorio del Tribunal de Jurados. La controversia se basa en el tiempo transcurrido durante la etapa recursiva del caso. En relación con lo anterior, la Corte nota que durante la etapa recursiva transcurrieron cinco años, seis meses y once días, desde el veredicto absolutorio (13 de abril de 2002) hasta que la decisión quedó firme (24 de octubre de 2007). Por lo tanto, debe examinarse si la demora ocurrida durante dicho período resulta justificada.

277. Los elementos que esta Corte ha establecido para poder determinar la razonabilidad del plazo son: *a)* complejidad del asunto; *b)* actividad procesal del interesado; *c)* conducta de las autoridades judiciales, y *d)* la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso<sup>370</sup>. La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar el caso y, de no demostrarlo, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto<sup>371</sup>. Asimismo, la Corte considera relevante remarcar que el proceso penal involucraba una niña víctima de violencia sexual, lo cual exige que en este caso la garantía judicial de plazo razonable establecida en el artículo 8.1 de la Convención Americana deba analizarse junto con el deber del Estado de actuar “sin dilaciones” y con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia contra la niña, dispuesto en el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará.

278. Este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la *complejidad del asunto*, como ser la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de vícti-

370 Cfr. *Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia del 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 77, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú, supra*, párr. 182.

371 Cfr. *Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 156, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú, supra*, párr. 182.

mas, el tiempo transcurrido desde la violación, y el contexto en el que ocurrió la violación<sup>372</sup>. La Corte nota que en el presente caso la víctima del hecho a investigar es solo una y que el delito tendría solo un autor material. Asimismo, durante el proceso penal pudieron realizarse diferentes pruebas en un corto tiempo, tales como declaración de la víctima, declaración indagatoria del imputado, declaraciones testimoniales, exámenes médicos, inspección ocular y reconstrucción de los hechos. Por ello, este Tribunal advierte que no existen elementos de complejidad.

279. En lo relativo a la *actividad procesal del interesado*, la Corte nota que existió un impulso procesal promovido por V.P.C. durante todo el proceso. Así, el 20 de noviembre de 2001 V.P.C. interpuso la denuncia contra H.R.A. por el delito de violación sexual en perjuicio de su hija V.R.P. (*supra* párr. 72), y el 29 de julio de 2002 solicitó la intervención de un fiscal especializado para que tutelara y garantizara los derechos de su hija en el proceso (*supra* párr. 110). Asimismo, consta que, en varias oportunidades, la interesada cuestionó la demora del proceso y solicitó que se agilizará el caso (*supra* párr. 115).

280. Respecto de la *conducta de las autoridades judiciales*, la Corte ha entendido que, como rectoras del proceso, tienen el deber de dirigir y encausar la investigación penal con el propósito de individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de los hechos<sup>373</sup>. En el presente caso, las autoridades estatales no han sido diligentes en la investigación de los hechos de violencia sexual en contra de V.R.P., ni han tomado en cuenta los efectos del tiempo durante la etapa recursiva del proceso penal, cerca de seis años desde el veredicto absolutorio del jurado.

372 Cfr. *Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua*, *supra*, párr. 78, y *Caso Pacheco León y otros Vs. Honduras*, *supra*, párr. 122.

373 Cfr. *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 211, y *Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela*, *supra*, párr. 145.

281. Lo anterior se constata dado que durante la etapa recursiva hubo períodos de inacción prolongados, sin que surja de los hechos alguna explicación o justificación por parte de las autoridades encargadas de encausar el proceso. En efecto, basta en este caso con advertir que no consta actividad alguna entre la remisión de la causa al Tribunal de Apelaciones el 15 de mayo de 2002 (*supra* párr. 108) y la declaración de nulidad del proceso dictado el 13 de enero de 2003 (*supra* párr. 111), es decir, un plazo de inactividad de ocho meses. También se advierte que, luego de las excusaciones pedidas por las partes cuya última petición fue rechazada el 12 de agosto de 2003 (*supra* párr. 112), dos jueces se excusaron sin ningún motivo (el 23 de febrero de 2004 y el 1 de marzo de 2004) (*supra* párr. 114) y, con posterioridad, el expediente quedó en estado de inacción hasta el 13 de enero de 2005, fecha en que el Juzgado de Distrito Penal de Juicio asumió jurisdicción y competencia para tramitar la causa y ordenó la apertura a pruebas del incidente de nulidad del veredicto. Es decir, la Corte nota un período de inactividad jurisdiccional de un año y medio. Por último, se advierte que el 9 de agosto de 2005 se rechazó el incidente sustancial del veredicto y el 25 de agosto de 2005 tanto el fiscal como V.P.C. apelaron esa resolución. Recién dos años y dos meses después, eso es el 24 de octubre de 2007, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia. En vista de lo anterior, si solo se consideran períodos de inactividad mayores de seis meses, ha habido, al menos, un tiempo mayor a cuatro años y cuatro meses de inactividad absoluta. Dado lo expuesto, lo que en definitiva generó la prolongación del proceso fueron distintos períodos de inactividad de las autoridades.

282. En lo relativo a *la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso*, este Tribunal ha establecido que, si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor

diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve<sup>374</sup>. Tratándose de una niña víctima de violencia sexual, la Corte estima que era exigible un criterio reforzado de celeridad.

283. En el presente caso, la Corte considera que la prueba que consta en el expediente confirma la grave afectación a la salud física y psíquica de V.R.P. ocasionada a raíz de la violencia sexual y sus posteriores necesidades de atención médica y psicológica. Por tanto, si las autoridades judiciales hubieran tenido en cuenta el estado de vulnerabilidad en que se encontraba V.R.P., hubiera sido evidente que el presente caso exigía por parte de las autoridades judiciales una mayor diligencia, pues de la brevedad del proceso dependía el objetivo primordial del proceso judicial, el cual era investigar y sancionar al responsable de la violencia sexual sufrida por V.R.P., como así también obtener las terapias necesarias para tramitar los hechos traumáticos vividos por la niña. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que se encuentra suficientemente probado que la prolongación del proceso en este caso incidió de manera relevante y cierta en la situación jurídica de la presunta víctima, por cuanto al retrasarse la resolución judicial del caso, se afectó el desarrollo diario de su vida.

284. Una vez analizados los cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo, la Corte concluye que las autoridades judiciales no actuaron con la debida diligencia y el deber de celeridad que exigía la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba V.R.P., tratándose de una niña víctima de violencia sexual, razón por la cual excedieron el plazo razonable del proceso, lo cual vulnera el derecho a las garantías judiciales establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma y el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de V.R.P. y V.P.C.

<sup>374</sup> Cfr. *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155, y *Caso Pacheco León y otros Vs. Honduras, supra*, párr. 120.

*D. El principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia de la niña V.R.P. y la violencia institucional*

*D.1 Alegatos de las partes y de la Comisión*

285. La *Comisión* destacó que el Estado se encontraba frente a un hecho grave de violencia sexual contra una mujer y niña, el cual constituía una manifestación de la discriminación contra la mujer vigente en la sociedad. Al respecto, en el marco de la investigación y proceso penal, el Estado tenía la obligación no sólo de abstenerse de asumir actitudes discriminatorias o revictimizantes contra la víctima, sino de llevar a cabo una investigación con el deber reforzado de tomar en cuenta el doble grado de vulnerabilidad de V.R.P, como mujer y como niña víctima de violencia sexual. Sin embargo, varios aspectos de la investigación fueron una manifestación de que el Estado no cumplió con dicho deber, como por ejemplo el actuar del médico forense a cargo del primer examen de V.R.P., así como el de la jueza a cargo del proceso, quien solicitó la participación directa de la niña y que la misma se colocara en la posición en la que habría sido violada sexualmente por el perpetrador, sin ningún tipo de mecanismo de contención o apoyo psicológico. Asimismo, la Comisión recordó que la influencia de patrones socioculturales discriminatorios podía dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia. Consideró que el Estado no había acreditado la manera en que, al momento de resolver la responsabilidad del presunto responsable, tomó en consideración las declaraciones consistentes de V.R.P., ni la manera en que valoró la prueba disponible. La Comisión consideró que existían suficientes elementos para concluir que la situación de impunidad en que se encontraba el caso obedeció precisamente a la falta de debida diligencia. En este sentido, concluyó que, si la situación de impunidad de un caso de violencia contra una mujer y niña se debía a las

acciones y omisiones del propio Estado, dicha situación de impunidad constituía en sí misma una forma de perpetuación de la discriminación manifestada en la violencia así como una forma de discriminación en el acceso a la justicia. Con base en lo expuesto, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación del principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de V.R.P. Adicionalmente, la Comisión consideró que la actuación irregular del médico constituyó un grave acto de revictimización y un nuevo hecho de violencia sexual contra V.R.P., por lo que “dicho acto de agresión sexual cometido por un funcionario del Estado, tomando en cuenta la intensidad y el sufrimiento provocado”, debería ser considerado por la Corte bajo el artículo 5.2 de la Convención. De igual forma se pronunció respecto de la inspección ocular y la reconstrucción de los hechos, por lo que solicitó que se analizara a la luz del artículo 5.2 de la Convención.

286. Las *representantes* alegaron que el Estado sometió a la niña V.R.P. a violencia física y psicológica a través de los actos de sus funcionarios, haciéndola víctima de una doble agresión, sin considerar el deber reforzado del Estado de adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de la niña, y obviando su condición de mujer. Las representantes coincidieron con la Comisión en afirmar que el Estado incumplió con su deber reforzado de tomar en cuenta el doble grado de vulnerabilidad de V.R.P., violando el derecho a la no discriminación establecido en el artículo 24.

287. El *Estado* señaló que no existieron actitudes denigrantes ni revictimizantes en perjuicio de V.R.P., sino que por el contrario, el proceso a nivel interno se llevó a cabo con la debida diligencia. Ello, debido a que se realizaron diversas diligencias y pericias a nivel interno para obtener el mayor cúmulo de pruebas encaminadas a demostrar lo sucedido y la



responsabilidad del autor, sin embargo, con base en la íntima convicción, el Tribunal de Jurados decidió un veredicto de inocencia. El Estado destacó que se brindó el apoyo psicológico a la víctima durante el proceso y que su declaración fue tomada en consideración por la jueza a cargo, quien con base en ella, ordenó la sentencia interlocutoria de auto de segura y formal prisión en contra de H.R.A.

## *D.2 Consideraciones de la Corte*

288. La Corte recuerda que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del *jus cogens*. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación *de jure* o *de facto*. En este sentido, mientras la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar, “sin discriminación”, los derechos contenidos en dicho tratado, el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. En definitiva, la Corte ha afirmado que si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana<sup>375</sup>. Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este

375 Cfr. *Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela*, *supra*, párr. 209, y *Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, párr. 214.

carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas<sup>376</sup>. En este caso, la Corte analizará las violaciones alegadas bajo ambas modalidades, toda vez que los argumentos se centran en la cuestión relativa a que no se tomaron medidas de acción positiva, específicas y reforzadas, para garantizar los derechos convencionales por motivos de sexo y género, así como por la condición de persona en desarrollo de la víctima, categorías protegidas convencionalmente.

289. La Corte ha considerado que la violación sexual es una forma de violencia sexual<sup>377</sup>. Tanto la Convención de Belém do Pará, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su órgano de supervisión, han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación<sup>378</sup>. La Corte ya resaltó la especial vulnerabilidad de las niñas a la violencia sexual, especialmente en la esfera familiar, así como los obstáculos y factores que pueden afrontar en su búsqueda de justicia (*supra* párr. 156). En este caso, dicha violencia fue ejercida por un particular. No obstante, ello no exime al Estado de responsabilidad ya que se encontraba llamado a adoptar políticas integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tomando particularmente en cuenta los casos en que la mujer sea menor de 18 años de edad.

290. La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra la mujer propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en gene-

376 Cfr. *Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 185, y *Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 248.

377 Cfr. *Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 359, y *Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra*, párr. 192.

378 Cfr. *Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México, supra*, párrs. 394 y 395, citando la Convención de Belém do Pará, preámbulo y artículo 6; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, artículo 1, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, *Recomendación General N° 19: La Violencia contra la Mujer*, UN Doc. A/47/38, 29 de enero de 1992, párrs. 1 y 6.

ral y envía un mensaje según el cual la violencia contra la mujer puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia<sup>379</sup>. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia.

291. En este sentido, como se mencionó anteriormente, el Estado debe reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal, cuando el caso se refiere a la violación sexual de una niña, máxime si esta violencia sexual fue ejercida en la esfera familiar, es decir en el ambiente en el cual debió haberla protegido. En estos supuestos, las obligaciones de debida diligencia y de adopción de medidas de protección deben extremarse. Además, las investigaciones y proceso penal deben ser dirigidos por el Estado con una perspectiva de género y niñez, con base en la condición de niña de la víctima y tomando en cuenta la naturaleza agravada de la violación sexual, así como los efectos que podrían causar en la niña.

292. La Corte nota que el Estado se encontraba ante un hecho de violación sexual, el cual es una manifestación de la discriminación contra la mujer, por lo que debía adoptar medidas positivas para garantizar un efectivo e igualitario acceso a la justicia, en los términos de lo establecido por esta Corte en el capítulo sobre los componentes esenciales del deber de debida diligencia y protección reforzada (*supra* párrs. 158 a 170). Así, la Corte se refirió a la información sobre el proceso y los servicios de atención integral disponibles; el derecho a la participación y que las opiniones sean tenidas en cuenta; el derecho a la asistencia jurídica gratuita; la especialización de todos los funcionarios intervinientes; y el derecho a contar con servicios de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica que permitan su recuperación, rehabilitación y reintegración.

379 Cfr. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México, *supra*, párrs. 388 y 400, y Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala, *supra*, párr. 176.

En el presente caso, quedó demostrado que dichas medidas no fueron adoptadas, por lo que existió una discriminación en el acceso a la justicia, por motivos de sexo y género, así como por la condición de persona en desarrollo de la víctima.

293. Además, correspondía a Nicaragua extremar las medidas de protección a favor de V.R.P. para no perjudicarla causándole ulteriores daños con el proceso de investigación, entendiendo que todas las decisiones que se adoptaran debían obedecer a la finalidad principal de proteger los derechos de la niña en forma integral, salvaguardar su posterior desarrollo, velar por su interés superior, y evitar su revictimización.

294. En este caso, el Estado requirió que la niña se sometiera a diversos exámenes médicos de manera innecesaria, fuera entrevistada para que contara lo sucedido en diversas ocasiones, participara en la reconstrucción de los hechos haciéndola revivir momentos sumamente traumatizantes, entre otros actos analizados anteriormente. Además, el actuar del médico forense fue discriminatorio, al no considerar el derecho de V.R.P. a ser oída y a brindar su consentimiento, cuando se negó a someterse al primer examen médico. El médico culpabilizó a la niña ante su negativa de someterse al examen. Todo ello, sumado a la falta de atención integral a la víctima, aumentó el trauma sufrido, mantuvo presente el estrés post-traumático e impidió la recuperación y rehabilitación de la niña, cuyo impacto perdura en su integridad personal hasta la actualidad. En consecuencia, la Corte estima que la forma en la que fue conducida la investigación por la violación sexual de V.R.P. fue discriminatoria y no fue llevada a cabo con una perspectiva de género y de protección reforzada de los derechos de las niñas, de acuerdo con las obligaciones especiales impuestas por el artículo 19 de la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.

295. Sobre la base de lo que antecede, la Corte considera que el Estado incumplió su obligación de garantizar, sin discriminación por mo-

tivos de sexo y género, así como por la condición de persona en desarrollo de la víctima, el derecho de acceso a la justicia en los términos de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1, 19 y 24 de la misma y el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de V.R.P.

296. Adicionalmente, la Corte estima que en el presente caso el Estado se convirtió en un segundo agresor, al cometer distintos actos re-victimizantes que, tomando en cuenta la definición de violencia contra la mujer adoptada en la Convención de Belém do Pará, constituyeron violencia institucional. En efecto, la Convención de Belém do Pará ha establecido parámetros para identificar cuándo un acto constituye violencia y define en su artículo 1° que “debe entenderse por violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”<sup>380</sup>. Asimismo, dicho instrumento resalta que dicha violencia incluye la que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

297. En conclusión, la Corte considera que la niña sufrió una doble violencia: por un lado, la violencia sexual por parte de un agente no estatal; y, por el otro, la violencia institucional durante el procedimiento judicial, en particular, a raíz del examen médico forense y la reconstrucción de los hechos. La niña y su familia acudieron al sistema judicial en busca de protección y para obtener la restitución de sus derechos vulnerados. Sin embargo, el Estado no solo no cumplió con la debida diligencia reforzada y protección especial requerida en el proceso judicial donde se investigaba una situación de violencia sexual, sino que respondió con una nueva forma de violencia. En este sentido, además de la vulneración del derecho de acceso a la justicia sin discriminación, la Corte considera que el Estado ejerció violencia institucional, causán-

380 Artículo 1 de la Convención de Belém do Pará.

dole una mayor afectación y multiplicando la vivencia traumática sufrida por V.R.P.

298. En consecuencia, este Tribunal determina que los actos revictimizantes llevados a cabo por funcionarios estatales en perjuicio de V.R.P. constituyeron violencia institucional y deben calificarse, teniendo en cuenta la entidad del sufrimiento provocado, como un trato cruel, inhumano y degradante en los términos del artículo 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

*E. Recurso efectivo y derecho a conocer la verdad*

*E.1 Argumentos de las partes y de la Comisión*

299. Las *representantes* señalaron que, a nivel interno, se presentaron en diversas ocasiones, escritos que contenían solicitudes ante los distintos órganos de justicia poniendo en conocimiento las irregularidades en el proceso, se ofrecieron medios de prueba, y se solicitaron diligencias, todo ello para pretender demostrar la forma viciada e irregular del actuar de los servidores públicos. V.P.C. no encontró en el Estado de Nicaragua un recurso efectivo que le permitiera la protección real a los derechos de su hija. Las representantes destacaron, además, la inexistencia de un recurso ordinario que le permitiera a las partes recurrir ante una instancia superior. Con base en ello, concluyeron que el Estado era responsable por la violación de los artículos 25 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Adicionalmente, las representantes alegaron que el derecho a la verdad fue violentado por el Estado, ya que no realizó una investigación completa y efectiva para esclarecer los hechos; no se llevaron a cabo las investigaciones necesarias a fin de conocer la verdad en relación a las razones que llevaron al jurado a decidir como lo hicieron, a pesar de existir todas las pruebas de la responsabilidad del procesado. Destacaron que tampoco se investigó ni se tomaron medidas con relación a las

denuncias interpuestas por V.P.C. sobre irregularidades por parte de algunos actores del proceso, ni se procesó a los funcionarios públicos por los delitos cometidos por ellos en ejercicio de sus funciones.

300. El *Estado* advirtió que en el desarrollo de la vista pública a nivel interno, no se presentó ningún incidente en relación con las supuestas irregularidades y que las incidencias fueron planteadas luego de que V.P.C. tuvo conocimiento del resultado del veredicto del jurado de inocencia. El Estado señaló que lo indicado por las representantes en el sentido de que “no se realizaron las investigaciones necesarias a fin de conocer la verdad” no tomó en consideración las pruebas recabadas que sirvieron de sustento para la sentencia interlocutoria de segura y formal prisión del señor H.R.A., ya que sin estas no se habría podido dictar dicha medida.

La *Comisión* no se pronunció sobre estos puntos.

## *E.2 Consideraciones de la Corte*

300. La Corte considera que el análisis relevante sobre los aspectos adicionales esgrimidos por las representantes, ya fueron debidamente considerados en los apartados anteriores, por lo que no estima pertinente emitir un pronunciamiento autónomo sobre su alegada violación.

## *D. Conclusión*

301. Con base en todo lo señalado, la Corte concluye que el Estado de Nicaragua no actuó con debida diligencia reforzada y protección especial requerida en las investigaciones y proceso penal por la violación sexual de la niña V.R.P., lo cual conllevó a la comisión de actos violatorios de sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada y familiar, y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 5.1, 5.2, 8.1, 11.2 y 25.1 de la Convención Americana, en rela-

ción con los artículos 1.1 y 19 del mismo instrumento y las obligaciones contenidas en el 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de V.R.P. y V.P.C.

## VIII-2

Derechos de Residencia<sup>381</sup>, a la Protección a la Familia<sup>382</sup>, y a las Medidas Especiales de Protección de Niñas<sup>383</sup> En Relación con las Obligaciones De Respetar y Garantizar los Derechos

### *A. Argumentos de las partes y de la Comisión*

302. La *Comisión* no se pronunció respecto a este punto.

303. Las *representantes* señalaron que la señora V.P.C. fue denunciada por los delitos de injurias y calumnias por diferentes servidores públicos que intervinieron en el procedimiento. Además, indicaron que la niña V.R.P. dejó de asistir al colegio porque sentía vergüenza y miedo al rechazo, y que tenían temor de que la señora V.P.C. fuera a prisión y que “el agresor se quedara con la custodia de la niña y continuara haciéndole daño”. Sostuvieron que, ante tales circunstancias, en diciembre de 2002 la señora V.P.C. “tuvo que abandonar y huir de Nicaragua” junto a sus hijas V.R.P. y N.R.P. debido a la “persecución del Poder Judicial politizado en su contra, persecución religiosa por ser mormona y persecución de género”, y recibieron asilo en los Estados Unidos. Alegaron que el Estado no prestó la protección debida a la familia, ya que “las denuncias y amenazas que provenían de los servidores públicos que participaron en dicho proceso” trajeron como consecuencia el desplazamiento de algu-

381 El artículo 22.1 establece que: “[t]oda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales”.

382 El artículo 17.1 dispone que: “[l]a familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”.

383 El artículo 19 prevé que: “[t]odo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.



nos integrantes de la familia. Señalaron que V.R.P., su madre y hermana quedaron sin vivienda. Asimismo, manifestaron que existió un desarraigo de su comunidad, la fragmentación del núcleo familiar y la pérdida de la figura esencial de la madre, quien era la única que velaba por sus hijos. Por lo anterior, las representantes alegaron que el Estado violó los artículos 1.1, 17.1, 12.1, 19 y 22.1 de la Convención Americana.

304. El *Estado* sostuvo que los funcionarios públicos que presentaron denuncia no actuaron en su carácter funcional sino como particulares. Agregó que los delitos de injurias o calumnias no conllevaban penas privativas de libertad. Consideró que el hecho de que las causas contra V.P.C. hayan sido interpuestas por particulares demuestra que no hubo persecución política. Asimismo, indicó que tampoco hubo persecución religiosa ya que las “iglesias mormonas” tienen libertad de culto y Nicaragua es un Estado laico. Respecto al abandono escolar de V.R.P., el Estado afirmó que se proveyó la atención psicológica necesaria a la niña para superar la situación; sin embargo, su madre decidió salir del país, a pesar de que en Nicaragua la educación es gratuita y podía ser inscrita en otro colegio. Con relación a la solicitud de asilo, el Estado indicó que V.P.C. abandonó el país debido a una decisión personal y voluntaria cuya consecuencia fue la separación de la familia. Afirmó que la decisión de un Estado de otorgar asilo a una persona se realiza en ejercicio de su soberanía de acuerdo a sus leyes internas. Asimismo, negó que la familia se haya quedado sin vivienda ya que V.P.C. continúa ejerciendo su derecho de dominio sobre una propiedad en la ciudad de Jinotega. Afirmó que V.P.C., V.R.P. y N.R.P., no han tenido restricción para ingresar a Nicaragua, como lo demuestran los movimientos migratorios de V.P.C. que ha ingresado al territorio nacional en dos ocasiones. En el mismo sentido, agregó que el resto de la familia sigue residiendo en el país. Por lo señalado, el Estado negó la violación a los artículos 1.1, 12.1, 17.1, 19 y 22.1 de la Convención Americana.

## B. Consideraciones de la Corte

305. El artículo 22.1 de la Convención reconoce el derecho de circulación y de residencia. En esta línea, la Corte ha considerado que esta norma protege el derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de un Estado Parte o a no tener que salir forzadamente fuera del territorio del Estado en el cual se halle legalmente<sup>384</sup>. Asimismo, este Tribunal ha señalado en forma reiterada que el derecho de circulación y residencia es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona<sup>385</sup>.

306. La Corte ha señalado que el derecho de circulación y de residencia puede ser vulnerado por restricciones *de facto* si el Estado no ha establecido las condiciones, ni provisto los medios que permiten ejercerlo<sup>386</sup>. En este sentido, el derecho de circulación y de residencia puede resultar afectado cuando una persona es víctima de amenazas u hostigamientos y el Estado no provee las garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas y hostigamientos provienen de actores no estatales<sup>387</sup>. Asimismo, la falta de una investigación efectiva de hechos violentos, así como la situación de impunidad, pueden menoscabar la confianza de las víctimas en el sistema de justicia y contribuir a condiciones de inseguridad<sup>388</sup>. Además, dicha situación de impunidad puede propiciar o perpetuar un exilio o desplazamiento forzado<sup>389</sup>.

384 Cfr. *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 186, y *Caso Yarce y otras Vs. Colombia, supra*, párr. 214.

385 Cfr. *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 115, y *Caso Yarce y otras Vs. Colombia, supra*, párr. 214.

386 Cfr. *Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párrs. 119 y 120, y *Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 328, párr. 174.

387 Cfr. *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra*, párr. 139, y *Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, supra*, párr. 174.

388 Cfr. *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 201.

389 Cfr. *Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, supra*, párrs. 119 y 120, y *Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, supra*, párr. 174.

307. La Corte ha señalado que la concesión de asilo en otro país permite dimensionar el alto nivel de credibilidad que las autoridades del Estado asilante le dieron a las denuncias hechas por las víctimas<sup>390</sup>. No obstante, tal reconocimiento tampoco es suficiente por sí solo para sostener que en el caso se configuró la vulneración del derecho de residencia. Se trata de un indicio más a tener en cuenta en el conjunto de circunstancias particulares del caso.

308. Respecto al artículo 17 en relación con el artículo 19 de la Convención Americana, la Corte ha señalado que el Estado se halla obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de niñas, niños y adolescentes, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. En consecuencia, la Corte ha establecido que la separación de niñas, niños y adolescentes de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación de su derecho a la familia reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana<sup>391</sup>, toda vez que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia<sup>392</sup>.

309. La Corte analizará a continuación si la señora V.P.C. y sus hijas V.R.P. y N.R.P. sufrieron un temor fundado de desprotección de sus derechos por el cual se vieron forzadas a salir de Nicaragua, provocando la vulneración de su derecho de residencia reconocido en el artículo 22.1 de la Convención. Asimismo, se determinará si las circunstancias de la salida del país generaron otras consecuencias jurídicas que impliquen vulneración de los derechos a la protección de la familia en perjuicio de V.P.C., N.R.P., H.J.R.P., V.A.R.P. y V.R.P. y, en particular, a las medidas especiales de protección de niñas en perjuicio de V.R.P.

390 Cfr. *Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párr. 161.

391 Cfr. *Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño*. Opinión Consultiva OC-17/02, *supra*, párr. 71, y *Caso Yarcé y otras Vs. Colombia*, *supra*, párr. 246.

392 Cfr. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas*, *supra*, párr. 142, y *Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285, párr. 104.

310. La Corte resalta que, en el presente caso, las alegadas vulneraciones de derechos humanos deben ser valoradas desde una perspectiva de género<sup>393</sup> y en observancia del paradigma de protección integral de niñas, niños y adolescentes<sup>394</sup>. En este sentido, la Corte observa que la violación sexual es causa de severos daños físicos y psicológicos<sup>395</sup>, que se intensifican cuando la víctima es una niña, y en especial cuando el agresor ostenta una posición de autoridad sobre la misma. Todo ello puede razonablemente generar en la víctima un temor fundado de desprotección equiparable a persecución. Dentro de ese marco, aunque la violación sexual haya sido cometida por un particular, la responsabilidad internacional del Estado ante tal situación de temor fundado de desprotección equiparable a persecución puede generarse en cuanto tolere deliberadamente el acto causante, o se niegue a brindar protección, o sea incapaz de hacerlo<sup>396</sup>.

393 Cfr. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), *Directrices sobre protección internacional: La persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de 1967*, UN Doc. HCR/619/02/01, 7 de mayo de 2002, en las cuales se establece que: “[e]s un principio básico que la definición de refugiado se debe interpretar con una perspectiva de género” (párr. 2).

394 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, *Observación General N° 6, Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen*, UN Doc. CRC/GC/2005/6, 1 de septiembre de 2005, párr. 74.

395 Cfr. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), *Directrices sobre protección internacional: La persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de 1967*, HCR/619/02/01, 7 de mayo de 2002, párr. 9, el cual señala que “[e]l derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional reconocen claramente que ciertos actos, como la violencia sexual, incumplen con estos estándares, y defienden su inclusión como forma grave de abuso equivalente a persecución. En este sentido, el derecho internacional puede asistir a los encargados de la toma de decisiones a determinar el carácter persecutorio de ciertos actos. No cabe duda de que la violación y otras formas de violencia de género, tales como la violencia relacionada con la dote, la mutilación genital femenina, la violencia doméstica y la trata de personas, constituyen actos que ocasionan un profundo sufrimiento y daño tanto mental como físico, y que han sido utilizadas como mecanismos de persecución, ya sea por agentes estatales o particulares”.

396 Cfr. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), *Directrices sobre protección internacional: La persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de 1967*, HCR/619/02/01, 7 de mayo de 2002, párr. 19, el cual indica que: “[d]entro de la definición de refugiado cabe reconocer agentes de persecución tanto estatales como no estatales. Si bien los actos de persecución son normalmente perpetrados por las autoridades de un país, el trato gravemente discriminatorio y otro tipo de ofensas perpetradas por la población local o por individuos pueden equipararse a persecución si las autoridades los toleran de manera deliberada o si éstas se niegan a proporcionar una protección eficaz o son incapaces de hacerlo”. En igual sentido, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), *Manual y directrices sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el protocolo de 1967*

311. De conformidad con tales consideraciones, la Corte toma como punto de partida de su análisis el hecho de que la niña V.R.P. fue víctima de violación sexual, perpetrada, según ella ha indicado en reiteradas ocasiones, por su padre, lo cual le produjo graves daños físicos y profundas afectaciones psicológicas, así como también a su entorno familiar (*supra* Capítulo VIII-3). A raíz de estos hechos, su progenitora presentó una denuncia por violación sexual. En la tramitación del proceso penal, el Estado no sólo no adoptó medidas especiales de protección de los derechos que correspondían a V.R.P., como niña víctima de violencia sexual, sino que faltó a su deber de debida diligencia reforzada y ejerció a través de sus funcionarios públicos actos de violencia institucional contra V.R.P., los que provocaron graves efectos de revictimización (*supra* párrs. 291 a 299). Los actos de violencia institucional consistieron, entre otros, en forzar a V.R.P. para que se sometiera al primer examen médico forense y participara en la reconstrucción de los hechos, a pesar de su negativa a hacerlo, mediante amenazas de que en caso contrario su agresor saldría en libertad (*supra* párr. 295).

312. Asimismo, como fue demostrado anteriormente, los hechos de violencia sexual quedaron en impunidad tras la decisión de un Tribunal de Jurados cuestionado por su falta de imparcialidad objetiva (*supra* párr. 253), cuyo veredicto de absolución significó un resultado imprevisible según las actuaciones realizadas a lo largo del proceso penal (*supra* párr. 269). Tras dicho veredicto, la señora V.P.C. y su hermana presentaron denuncia penal contra H.R.A. por amenazas que habrían sufrido la noche del mismo día en que se dictó la absolución (*supra* párr. 102). Por otra parte, la falta de respuesta de las autoridades frente a las

sobre el estatuto de los refugiados, HCR/19/4/Spa/Rev.3, diciembre de 2011, que en su párrafo 65 señala que: “[l]a persecución suele ser resultado de la actuación de las autoridades de un país. Puede también emanar de sectores de la población que no respetan las normas establecidas por las leyes de su país. [...] El comportamiento vejatorio o gravemente discriminatorio observado por ciertos sectores de la población local puede equipararse a la persecución si es deliberadamente tolerado por las autoridades o si éstas se niegan a proporcionar una protección eficaz o son incapaces de hacerlo”.

quejas presentadas por V.P.C. ante los actos de violencia institucional y demás irregularidades cometidas en el transcurso del proceso penal por violencia sexual (*supra* párrs. 125 a 132), se vio agravada por las denuncias interpuestas en contra de V.P.C. y de otros familiares que se habían involucrado en la búsqueda de justicia (*supra* párr. 133), por parte de funcionarios y servidores públicos que intervinieron en el proceso penal por violación sexual y las diferentes citaciones judiciales recibidas con motivo de los mencionados procedimientos penales a fin de que comparecieran al Juzgado Local de lo Penal de Jinotega para prestar declaración<sup>397</sup>. Además, quedó comprobada la estigmatización social sufrida por V.R.P. y sus familiares a consecuencia del proceso judicial, cuyos efectos se intensificaron tras el veredicto de absolución (*supra* Capítulo VIII-3).

313. Ante este contexto, la señora V.P.C. señaló en la audiencia ante esta Corte que, cuando salieron de Nicaragua, “iban con miedo, producto de todas las acusaciones criminales, que tanto el médico forense como la juez local y la otra persona del jurado habían interpuesto en [su] contra [...], en contra de [su] madre que era una señora de 70 años, y en contra de [su] hermana por el solo hecho de acompañar[la] en los procesos”. Precisó que el temor que sentían se refería al hecho de “ser castigadas o perseguidas por haber proseguido con todas las denuncias que se hicieron en contra de los funcionarios públicos”. Agregó que no

<sup>397</sup> Cfr. Boletas de citación judicial dirigidas a V.P.C. y L.A.C.G. por denuncias interpuestas en su contra: 1) boleta de citación judicial dirigida a V.P.C. de 19 de diciembre de 2001, en proceso penal por calumnias iniciado por la fiscal auxiliar del Departamento de Jinotega (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VII, folio 2862); 2) boletas de citación judicial dirigidas a V.P.C. de 29 de abril de 2002, 8 de mayo de 2002, 14 de mayo de 2002, en proceso penal por injurias iniciado por el médico forense (expediente de prueba, tomo XX, anexo 7.b de la prueba para mejor resolver, folios 9699, 9711, 9721); 3) boleta de citación judicial dirigida a V.P.C. de 22 de julio de 2002, en proceso penal por calumnias iniciado por el médico forense (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VII, folio 2495); 4) boleta de citación judicial dirigida a V.P.C. de 8 de mayo de 2002, en proceso penal por injurias y calumnias iniciado por la jueza de derecho y presidenta del Tribunal de Jurados (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VII, folio 2586); 5) boleta de citación judicial dirigida a V.P.C. de 8 de mayo de 2002, en proceso penal por calumnias iniciado por una integrante del Tribunal de Jurados (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VII, folio 2587), y 6) boleta de citación judicial dirigida a L.A.C.G. de 5 de junio de 2002 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo VII, folio 2496).

tenían “la confianza en el Estado de Nicaragua de que realmente las cosas se [iban] a hacer de una manera de respetar los derechos”<sup>398</sup>. En igual sentido se expresaron sus hijos V.R.P.<sup>399</sup> y H.J.R.P.<sup>400</sup> en torno a las circunstancias de la salida de Nicaragua de V.P.C., junto con sus hijas.

314. A partir de la valoración integral de las razones esgrimidas, la Corte encuentra probado que se trata de un cúmulo de factores que en su conjunto demuestran que el temor de desprotección de sus derechos por parte del Estado si permanecían en Nicaragua, era razonable y fundado. El Estado, a través del accionar que desplegó desde el momento en que tomó conocimiento de los hechos de violencia sexual y a lo largo de todo el proceso, demostró que era incapaz de brindar una protección adecuada a los derechos de las víctimas desde una perspectiva de género y en observancia del paradigma de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Incluso, el Estado se posicionó como un agente capaz de intensificar la violencia sufrida y sus efectos ante situaciones en que se requería su resguardo.

315. En cuanto a las denuncias interpuestas contra la señora V.P.C., la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que es evidente que un Estado no puede evitar que una persona ejerza alguna acción legal contra otra. En este sentido, es claro que el Estado no tiene responsabilidad por el hecho en sí de que esas personas hayan interpuesto una querrella y una denuncia o instaurado un proceso civil contra ella o de que las autoridades judiciales hayan abierto las causas respectivas<sup>401</sup>. No obs-

398 Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. en la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

399 Cfr. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.R.P. en la audiencia privada celebrada el 16 de octubre de 2017, en la cual sostuvo que: “[a su] mamá la empezaron a acusar de que lo que se había dicho del doctor, de la jueza eran calumnias. [Ella] tenía miedo que metieran a [su] mamá a la cárcel, de que [la] entregaran a [su] papá. Tenía miedo de que lo sacaran y [la] entregaran a él y que le hicieran algo a [su] mamá. [Se] tuvieron que ir, tuv[er]on que dejar a [sus] hermanos, [quienes] eran [su] apoyo, eran los que [la] hacía[n] sentir que estaba protegida, que [se] sintiera segura”.

400 Cfr. Declaración rendida ante fedatario público por H.J.R.P. el 9 de octubre de 2017 (expediente de prueba, tomo XVIII, *affidávits*, folio 8349).

401 Cfr. *Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua*, *supra*, párr. 192.



tante, la Corte advierte que en este caso existe una estrecha relación entre las denuncias interpuestas contra V.P.C. y el ejercicio de un cargo de poder como era la función pública o servicio público de las personas denunciantes. Los funcionarios y servidores públicos intervinientes en el proceso penal accionaron judicialmente en respuesta a las quejas y denuncias que V.P.C. había formulado alegando deficiencias e irregularidades en el desempeño de sus respectivos cargos públicos, que tuvieron la entidad de configurar violencia institucional y de género. En consecuencia, resulta razonable entender que las denuncias constituyeron para las víctimas una forma de amedrentamiento que generó, en su subjetividad, un temor fundado de hostigamiento judicial.

316. Asimismo, diferentes informes advirtieron sobre la posible influencia del poder político sobre el sistema judicial de Nicaragua y su falta de imparcialidad e independencia y, en particular, sobre la respuesta del sistema judicial frente a casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, en relación con la impunidad de los agresores y la obstaculización del acceso a la justicia de las víctimas<sup>402</sup>. Por ello, era razonable que la señora V.P.C. y sus hijas no quisieran acogerse a la protección de su país de origen debido a la desconfianza en el sistema judicial ante este tipo de delitos.

317. La Corte estima que el hecho de no querer acogerse a la protección del Estado por la desconfianza en su efectividad y, en consecuencia, trasladar el lugar de residencia, puede ser entendido como una decisión de las víctimas. No obstante, a partir de una valoración inte-

<sup>402</sup> Cfr. Consejo de Derechos Humanos, *Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Nicaragua*, UN Doc. A/HRC/14/3, 17 de marzo de 2010, párrs. 82, 92.36 a 92.39; Comité CEDAW, *Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Nicaragua*, 2 de febrero de 2007, UN Doc. CEDAW/C/NIC/CO/6, párrs. 19 y 20; Comité de Derechos Humanos, *Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 40 del Pacto. Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Nicaragua*, UN Doc. CCPR/C/NIC/CO/3, 12 de diciembre de 2008, párrs. 8, 12 y 19, y Comité de los Derechos del Niño, *Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 12, párrafo 1, del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía*, UN Doc. CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, 21 de octubre de 2010, párrs. 33 a 36.



gral de las circunstancias del caso, la Corte advierte que se trata de una decisión forzada, debido al cúmulo de factores objetivos que generaron la situación de desprotección de los derechos de las víctimas por parte del Estado y un temor fundado de hostigamiento judicial y de mayor vulnerabilidad ante eventuales ataques a sus derechos. De este modo, el Estado es responsable por haber generado las condiciones que forzaron a la salida de las presuntas víctimas de su país de origen, lo que a su vez conllevó a la separación de la familia.

318. Por tanto, si bien no consta que el Estado restringiera de manera formal la libertad de residencia, la Corte considera que en este caso dicha libertad se vio limitada a raíz del temor de desprotección de los derechos de V.R.P. y V.P.C., que se encuentra fundado por elementos objetivos imputables a la responsabilidad del Estado.

319. En consecuencia, la Corte considera que el Estado es responsable por la violación de los derechos de residencia y a la protección de la familia, reconocidos en los artículos 22.1 y 17.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma, en perjuicio de V.R.P. Asimismo, el Estado es responsable por la violación de los derechos de residencia y a la protección de la familia, reconocidos en los artículos 22.1 y 17.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de V.P.C. y N.R.P. Del mismo modo, el Estado es responsable por la violación del derecho a la protección de la familia, reconocido en el artículo 17.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1, en perjuicio de H.J.R.P. y V.A.R.P.

320. En relación con los alegatos de las representantes referidos a que la salida de Nicaragua se debió a una supuesta persecución religiosa en desmedro del principio de no discriminación y del derecho a la libertad religiosa, la Corte nota que tales afirmaciones no han sido probadas y no existen elementos que pudieran objetivamente indicar que las vulneraciones de derechos reconocidas en esta Sentencia hayan obedecido a

la religión profesada por las víctimas. Por tanto, la Corte considera que el Estado no incurrió en responsabilidad por la alegada vulneración del principio de no discriminación por motivo de religión, protegido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, así como tampoco incurrió en responsabilidad por la alegada vulneración del derecho a la libertad de religión, reconocido en el artículo 12.1 de la Convención Americana.

### VIII-3

A la Integridad en relación con el derecho personal<sup>403</sup> de los familiares obligación de respetar los derechos

#### *A. Argumentos de las partes y de la Comisión*

321. La *Comisión* observó que, de la declaración de V.P.C., se desprendían afectaciones a su integridad personal y a la de sus hijas e hijos. Además, la Comisión resaltó los distintos obstáculos que la señora V.P.C. tuvo que enfrentar en la búsqueda de justicia, y el hecho de que fue denunciada por dos miembros del jurado que resolvieron la absolución del acusado, así como por el médico forense que participó en el primer examen. La Comisión resaltó que dichas denuncias, a pesar de que posteriormente fueron archivadas, causaron una grave afectación a V.P.C. y su familia. Asimismo, tomó nota de que, debido a la situación de impunidad, la señora V.P.C. y sus dos hijas, decidieron abandonar Nicaragua y solicitaron asilo en otro país, donde se encontrarían actualmente. Con base en lo anterior, la Comisión consideró que existen suficientes elementos para concluir que la violación sexual sufrida por la niña V.R.P., las consecuencias de la misma y la impunidad en que se mantiene el caso atribuible al Estado, provocaron una afectación emo-

403 El artículo 5.1 de la Convención dispone que: “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

cional a V.P.C. y sus hijos e hija N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P., en contravención del derecho reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

322. Las *representantes* señalaron que, conforme a lo declarado por la señora V.P.C., el 6 de diciembre de 2002 tuvo que abandonar y huir de Nicaragua con sus dos hijas “debido a la persecución del Poder Judicial politizada en su contra, persecución religiosa por ser mormona”. Observaron que la madre y los hermanos de la niña V.R.P. sufrieron afectaciones psíquicas y morales debido al sufrimiento, dolor, impotencia, estigmatización y temor ocasionado ante la mencionada persecución de la señora V.P.C., por la desintegración familiar y la distancia que se ha ocasionado entre los miembros de la familia. Por lo expuesto, las representantes concluyeron que el Estado es responsable por la violación de los artículos 1.1, 5.1, 11 y 24 de la Convención Americana, en relación con la peticionaria, así como los artículos 1.1, 5.1 y 11 de dicho instrumento, en relación con los hermanos de V.R.P.

323. El *Estado*, conforme se señaló en las consideraciones previas (*supra* Capítulo V), no reconoció a los hermanos de V.R.P. como presuntas víctimas, por no haber sido determinados por la Comisión en su Informe de Fondo.

### *B. Consideraciones de la Corte*

324. La Corte ha afirmado, en reiteradas oportunidades, que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas<sup>404</sup>. Este Tribunal ha considerado que se puede declarar violado el derecho a la integridad psíquica y moral de “familiares directos” u otras personas con vínculos estrechos con las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que aquéllos han padecido como

<sup>404</sup> Cfr. *Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil*. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 156, y *Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia*, *supra*, párr. 249.

producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a estos hechos<sup>405</sup>, tomando en cuenta, entre otros elementos, las gestiones realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo familiar<sup>406</sup>.

325. La Corte ha señalado que se puede declarar la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de familiares de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción *iuris tantum*, siempre que ello responda a las circunstancias particulares en el caso<sup>407</sup>. En los demás supuestos, la Corte deberá evaluar, por un lado, la existencia de un vínculo particularmente estrecho entre los familiares y la presunta víctima del caso que permita establecer una afectación a su integridad personal y, por otro lado, si de la prueba que consta en el expediente se acredita una violación del derecho a la integridad personal<sup>408</sup>.

326. Al respecto, durante la audiencia pública, la señora V.P.C. se refirió a las graves consecuencias que tuvo para su familia la violación sexual de su hija, así como la violencia institucional y la revictimización a la que fueron sometidas durante el proceso judicial a nivel interno. Señaló que “los actos de dolor y coacción e intimidación que utilizaron las autoridades” en su perjuicio provocaron la desintegración de su familia. En este sentido, la señora V.P.C. declaró que:

405 Cfr. *Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo*. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114, y *Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 29 de noviembre de 2016. Serie C No. 327, párr. 142.

406 Cfr. *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo*. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 163, y *Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador, supra*, párr. 142.

407 La Corte ha aplicado una presunción *iuris tantum* respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, y compañeros y compañeras permanentes, por ejemplo, en casos de masacres, desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales. Cfr. *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra*, párr. 119, y *Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra*, párr. 296.

408 Cfr. *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra*, párr. 119, y *Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador, supra*, párr. 143.

[M]is hijos se tuvieron que quedar en Nicaragua y yo tuve que abandonar el país para poder ayudar a mi hija de que no siguiera en ese lugar donde prácticamente en vez de darnos justicia, lo que hicieron fue causarnos, infringirnos más dolor del que nosotros teníamos ya. [Salimos] con miedo, producto de todas las acusaciones criminales, que tanto el médico forense como la juez local y la otra persona del jurado habían interpuesto en contra mía, en contra de mi madre que era una señora de 70 años, y en contra de mi hermana por el solo hecho de acompañarme en los procesos. [E]n el momento que se dieron todos esos hechos, yo podía sostener a mis hijos en el sentido de que les estaba pagando una universidad privada a mi hija, la mayor. Mis otros hijos también estaban estudiando en un colegio privado, o sea, tenían ropa, tenían alimentos, medicinas [...], incluso también les pagaba una empleada para que atendiera las cosas de la casa, [...] estaban bien, no como están ahora<sup>409</sup>.

327. Respecto a las afectaciones y la revictimización sufridas por la señora V.P.C. al acudir a las instancias judiciales, el perito Enrique Oscar Stola señaló que “la madre, que es una madre protectora, también es una víctima y cuando analizamos la conducta del Poder Judicial en principio se había colocado que era una víctima secundaria, pero también pienso que la madre protectora recibe tal nivel de agresión dentro del Poder Judicial que puede ser una víctima primaria, tanto como la niña. Por último, las actitudes de hacerle reiterar y reiterar con diferentes profesionales lo vivido, lo único que puede hacer es aumentar el trauma y la prolongación del juicio, del proceso legal, [...] lo que hace es mantener activo el estrés post-traumático y profundizar alguna sintomatología”<sup>410</sup>.

328. En cuanto a las afectaciones a la integridad personal de la hermana y los hermanos de V.R.P., la señora V.P.C. declaró en audiencia

409 Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. durante la audiencia pública celebrada el 17 de octubre de 2017.

410 Declaración rendida ante la Corte Interamericana por el perito Enrique Oscar Stola durante la audiencia pública celebrada el 16 y 17 de octubre de 2017.

que “[su] hija mayor que fue la que vino con nosotr[a]s [a Estados Unidos], ella prácticamente asumió como un rol junto conmigo, porque entre las dos tratamos como de sacar adelante a mi hija [V.R.P.] porque yo muchas veces me quedaba con mi hija y ella se iba a trabajar. Ella actualmente tuvo un episodio demasiado fuerte porque estuvo internada en un psiquiátrico aproximadamente 10 días. Hasta el momento, eso ocurrió hace poco. A mi hijo H, cuando salí de Nicaragua, [...] tenían que estarle haciendo controles constantes porque él fue operado de un cáncer en el cerebro y yo tenía que darle el seguimiento necesario a él porque todavía tiene una válvula en la cabeza y prácticamente quedó en abandono porque yo no he podido ayudarle a él en cuanto a la salud”<sup>411</sup>. Señaló, además, que H.J.R.P. fue despedido de su trabajo a raíz de la denuncia internacional del presente caso. Respecto de V.A.R.P., sostuvo que no han podido sufragar las medicinas requeridas para sus problemas de salud<sup>412</sup>.

329. En el caso de H.J.R.P., de acuerdo con su declaración ante fedatario público, la salida de su madre y hermanas de Nicaragua “[destrozó su] vida”, ya que su madre era “[su] respaldo emocional, moral y económico” y, desde que ella salió de Nicaragua, no ha podido realizarse periódicamente la resonancia magnética por la válvula que tiene implantada en el cerebelo debido a una operación quirúrgica por un tumor cerebral. Por otra parte, manifestó que, con motivo de la petición de la señora V.P.C. ante la Comisión Interamericana, “la mayoría de los jueces y secretarios de los juzgados [crearon] un rechazo y temor [en su contra]. Ello “[lo] perjudicó profesionalmente ya que no [pudo] encontrar un trabajo estable”. Además, sostuvo que “[t]odo esto ha venido repercutiendo en [su] vida diaria [afectando] aún más [su] débil

411 Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. durante la audiencia pública celebrada el 17 de octubre de 2017.

412 Cfr. Declaración rendida ante la Corte Interamericana por V.P.C. durante la audiencia pública celebrada el 17 de octubre de 2017.

salud con gastritis, migraña y episodios depresivos acrecentados por la situación económica”<sup>413</sup>. Asimismo, V.A.R.P. indicó en su declaración ante fedatario público que, aparte de las graves afectaciones emocionales producto de la estigmatización y revictimización vivida por el proceso a nivel interno y la separación de su familia, no pudo estudiar y sus sueños se vieron truncados al no poder culminar con su educación universitaria<sup>414</sup>. Por su parte, N.R.P. relató que la situación que vivieron a raíz de los procesos legales iniciados “fue desgastante, aterradora, y denigrante para los miembros de toda la familia”. También señaló que “el deterioro en su salud emocional, física y psicológica [producto de los hechos del presente caso] ha impedido que pueda desarrollar[se] profesionalmente por el impacto que ha tenido en [su] vida la desintegración familiar [...] vivid[a]”<sup>415</sup>.

330. La Corte advierte que, en el presente caso, la conducta estatal a raíz de la violación sexual sufrida por la niña V.R.P., la revictimización, la violencia institucional provocada por las autoridades intervinientes, las denuncias interpuestas por funcionarios y servidores públicos, según se determinó en la presente Sentencia, provocaron una afectación psíquica y emocional de envergadura en la señora V.P.C. y sus hijos

413 Declaración rendida ante fedatario público por H.J.R.P. el 9 de octubre de 2017 (expediente de prueba, tomo XVIII, *affidávits*, folios 8352 a 8358).

414 Específicamente, manifestó que: “[a] salir [su] madre con [sus] hermanas de Nicaragua, [...] perd[ió] todas las esperanzas, no tenía quien [le] diera soporte emocional de madre no tuve quien [le] diera soporte económico para seguir estudiando [...] Todo se des[am]oronó, no solo producto de lo que le pasó a [su] hermanita sino por el hecho de que las personas que tenían que cuidar por ellas no lo hicieron, las dejaron solas. [...] El hecho de no haber podido estudiar [le] ha destrozado. [...] La separación y la desintegración de nuestra familia a todos nos ha afectado muy fuerte. Es algo que no podemos superar [...] Ese vacío es difícil de llenar aun después de tantos años. [Su] salud se ha debilitado por esa razón. [...] L[e] ha impedido esta situación desarrollar[se] como persona[, ... su] meta ha sido y fue el ser un profesional. No lo pud[o] concretar por no tener a [su] madre [...] Todo esto [le] ha afectado [su] sistema inmunológico con situaciones repetitivas en [su] salud”. Declaración rendida ante fedatario público por V.A.R.P. el 9 de octubre de 2017 (expediente de prueba, tomo XVIII, *affidávits*, folios 8364 a 8375).

415 En particular, señaló que: “[...] esta situación [le] ha afectado en todos los ámbitos de [su] vida. [...] Y en el mes de junio [de 2017] fu[e] internada en el hospital psiquiátrico porque tuv[o] un relapso de eventos ocurridos en [su] pasado [...]. Toda esta situación estresante vivida, post traumático estrés [sic], ha causado daños severos en [su] salud, pese a que [es] joven pero [su] salud [se ha] deteriorad[o] completamente”. Declaración rendida ante fedatario público por N.R.P. el 10 de octubre de 2017 (expediente de prueba, tomo XVIII, *affidávits*, folios 8378 a 8398).

N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P. Además, la Corte considera que, según quedó establecido (*supra* Capítulo VIII-2), la señora V.P.C. y sus dos hijas V.R.P. y N.R.P., se vieron forzadas a salir de Nicaragua y solicitaron asilo en otro país. Esta situación provocó dificultades socio-económicas en la familia así como la pérdida de sus empleos en el caso de V.P.C. y H.J.R.P. y, en el caso de V.A.R.P., la pérdida de la posibilidad de culminar sus estudios universitarios.

331. En consecuencia, este Tribunal considera que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de V.R.P., identificados como V.P.C., N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P.

## IX

### Reparaciones

#### (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana)

332. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana<sup>416</sup>, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado<sup>417</sup>.

333. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (*restitutio in integrum*), que consiste en el restablecimiento de la

416 El artículo 63.1 de la Convención dispone que “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

417 Cfr. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas*. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú*, *supra*, párr. 194.



situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron<sup>418</sup>. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación a fin de resarcir los daños de manera integral por lo que, además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados<sup>419</sup>.

334. La Corte ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho<sup>420</sup>. Asimismo, la Corte estima que las reparaciones deberán incluir un análisis que contemple no sólo el derecho de la víctima a obtener una reparación, sino que, además, incorpore una perspectiva de género y niñez, tanto en su formulación como en su implementación.

335. Tomando en cuenta las violaciones a la Convención Americana declaradas en los capítulos anteriores, a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia del Tribunal en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de reparar<sup>421</sup>, la Corte analizará las pretensiones presentadas por la Comisión y las representantes, así como los argumentos del Estado al respecto, con el objeto de disponer a continuación las medidas tendientes a reparar dichas violaciones.

418 Cfr. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas*, *supra*, párrs. 25 y 26, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú*, *supra*, párrs. 194 y 195.

419 Cfr. *Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas*. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párrs. 79 a 81, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú*, *supra*, párr. 195.

420 Cfr. *Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú*, *supra*, párr. 196.

421 Cfr. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas*, *supra*, párrs. 25 a 27, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú*, *supra*, párr. 197.

*A. Parte Lesionada*

336. Se considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quienes han sido declaradas víctimas de la violación de algún derecho consagrado en esta. Por lo tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” a V.R.P., V.P.C., N.R.P., H.J.R.P., y V.A.R.P., quienes en su condición de víctimas de las violaciones declaradas en esta Sentencia serán consideradas beneficiarias y beneficiarios de las reparaciones que la Corte ordene.

*B. Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables*

337. La Comisión señaló que, si bien en la recomendación primera de su Informe de Fondo solicitó que el Estado adelantara un proceso contra la persona responsable de la violación sexual en perjuicio de V.R.P., quien fue identificada de forma reiterada por la niña como su padre, de la información surgida luego de adoptada dicha decisión, se desprende que el presunto agresor falleció. Sin perjuicio de ello, la Comisión destacó que ese hecho no eximía al Estado de su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para procurar una justicia integral, la cual, en el presente caso, no podía entenderse limitada a la imposición de una pena y, en las circunstancias actuales, la imposibilidad de ejercer la acción penal contra el agresor. Para la Comisión, el componente de justicia, exige que el Estado de Nicaragua adopte todas las medidas necesarias para determinar “la verdad histórica de los hechos denunciados por V.R.P. y su madre V.P.C., incluyendo todas las graves irregularidades que perpetuaron la impunidad de esta grave violación de derechos humanos, y el establecimiento de las responsabilidades de distinta índole [administrativas, disciplinarias o penales] que correspondan a los funcionarios y funcionarias del Estado que contribuyeron a esta denegación de justicia [e impunidad]”.

338. Las *representantes*, por su parte, solicitaron que se ordenara al Estado adoptar las medidas necesarias para que las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de V.R.P. y sus familiares, sean efectivamente investigadas y sancionadas a través de procesos en los que se les otorguen todas las garantías judiciales. Agregaron que tales investigaciones deben comprender las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas que permitieron la impunidad de la agresión sexual materializada contra la niña V.R.P., así como la revictimización que sufrió.

339. El *Estado* manifestó que H.R.A., a quien V.R.P. sindicó como el autor de la violación sexual que sufrió, falleció el 29 de agosto de 2008 y que ese evento impide objetivamente el cumplimiento de la recomendación efectuada por la Comisión, pues tanto el Código de Instrucción Criminal como el Código Procesal Penal establecen que la muerte del imputado extingue la acción penal.

340. Por otro lado, en relación con la investigación a los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia y la impunidad en que se encuentra el caso, el Estado señaló que la Corte Suprema de Justicia conoció de varios “informativos” promovidos por V.P.C. y que todos ellos fueron resueltos administrativamente. Afirmó que los casos promovidos por V.P.C. contra funcionarios públicos intervinientes en el proceso penal por violación sexual se encuentran archivados.

341. La Corte toma en consideración que, desde el inicio del proceso penal por violación sexual, V.R.P. señaló en distintas declaraciones a su padre, el señor H.R.A., como el presunto autor de los hechos. Durante la tramitación del procedimiento ante la Comisión, en fecha 29 de agosto de 2008, el señor H.R.A. falleció<sup>422</sup>. En las circunstancias de este caso, la Corte considera que no corresponde ordenar la realización de un nuevo procedimiento penal que procure la investigación, identifica-

<sup>422</sup> Cfr. Certificado de defunción de H.R.A. (expediente de prueba, tomo XVII, anexo 43 a la contestación del Estado, folio 8344).

ción, juzgamiento y eventual sanción de los hechos de violación sexual.

342. Por otra parte, esta Corte estableció que distintas autoridades estatales no adoptaron medidas de protección especiales en beneficio de V.R.P. sino que, por el contrario, actuaron en vulneración de la debida diligencia reforzada durante el desarrollo de las investigaciones y proceso penal por la violación sexual de la niña V.R.P., lo que conllevó a su revictimización. Asimismo, la Corte concluyó que existió un temor fundado de parcialidad en el proceso interno en relación con el actuar del Tribunal de Jurados. Por ello, esta Corte considera que el Estado debe, dentro de un plazo razonable, determinar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, las eventuales responsabilidades de los funcionarios que contribuyeron con su actuación a la comisión de actos de revictimización y violencia institucional en perjuicio de V.R.P. y, en la medida que corresponda, aplicar las consecuencias que la ley pudiera prever.

### *C. Medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición*

#### *C.1 Rehabilitación*

342. La *Comisión* recomendó brindar, en forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas que así lo soliciten. Asimismo, teniendo en cuenta que algunas víctimas se encuentran fuera del país, precisó que esta recomendación puede ser cumplida mediante el otorgamiento de un monto económico que razonablemente permita costear la atención en salud requerida por ellas.

343. Las *representantes* solicitaron a la Corte que ordenara al Estado otorgar a H.J.R.P. y V.A.R.P., quienes viven en Nicaragua, tratamiento médico y psicológico en centros especializados, sin costo adicional y de manera gratuita. En relación con V.R.P., V.P.C. y N.R.P., en razón de que ellas no residen en Nicaragua, solicitaron que se disponga el pago en

efectivo de un monto prudencial ascendente a US\$ 200.000,00 a favor de V.R.P., US\$ 75.000,00 a V.P.C. y US\$ 30.000,00 a N.R.P., para que puedan cubrir su tratamiento psicológico y psiquiátrico, así como el costo de los medicamentos que se prescriban para su recuperación.

344. El *Estado*, no reconoció como presuntas víctimas a H.J.R.P. y V.A.R.P., arguyendo que no se acreditó tal condición ni en el informe de admisibilidad ni en el informe de fondo de la Comisión; agregó, no obstante ello, que el sistema nacional de salud en Nicaragua cuenta con hospitales especializados, clínicas y centros de salud totalmente gratuitos y de acceso a toda la población nacional y extranjera. Preciso que la situación de N.R.P. es idéntica a la de sus hermanos porque no se encuentra acreditada como presunta víctima.

345. Por otro lado, respecto a V.R.P. y V.P.C., el Estado adujo que debe realizarse una “valoración psicológica” que tome en cuenta la “valoración de salud física cuya causa podría provenir de los hechos puestos en conocimiento de la Corte”, lo que permitiría determinar el tipo de tratamiento que corresponde y, consecuentemente, el monto que procedería otorgarles como medida de rehabilitación acorde a parámetros nacionales, y no con relación al parámetro del valor de la salud en los Estados Unidos. En tal sentido, ofreció la atención gratuita e inmediata en Nicaragua para V.P.C. y V.P.R., dado que sobre ellas no existe ninguna orden de restricción para acceder a su territorio.

346. Habiendo constatado las graves afectaciones a la integridad personal sufridas por V.R.P. y sus familiares a raíz de los hechos del presente caso, la Corte estima, como lo ha hecho en otros casos<sup>423</sup>, que es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos, psicológicos y/o psiquiátricos sufridos por las víctimas derivados de las violaciones establecidas en la presente Sentencia.

<sup>423</sup> Cfr. *Caso Barrios Altos vs. Perú. Reparaciones y Costas*. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87, párrs. 42 y 45, y *Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil*, *supra*, párr. 296.

347. Con el fin de contribuir a la reparación de los daños físicos, psicológicos y/o psiquiátricos sufridos por V.R.P., y considerando que no reside en Nicaragua, el Tribunal dispone la obligación a cargo del Estado de otorgarle, por una única vez, la suma de US\$ 75.000,00 (setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de gastos por tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico, así como por medicamentos y otros gastos conexos, para que pueda recibir dicha atención en el lugar donde resida. En relación con los daños sufridos por V.P.C. y N.R.P., y tomando en cuenta que también residen fuera de Nicaragua, la Corte ordena la obligación a cargo del Estado de otorgarles, por una única vez, las sumas de US\$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América), y US\$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), respectivamente, por concepto de gastos por tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, así como por medicamentos y otros gastos conexos, para que puedan recibir dicha atención en el lugar donde residan. El Estado dispondrá del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, para realizar los pagos a cada una de las víctimas indicadas.

348. Con respecto a los daños sufridos por los hermanos H.J.R.P. y V.A.R.P., y teniendo en cuenta que residen en Nicaragua, el Tribunal dispone la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos. Lo anterior implica que las víctimas deberán recibir un tratamiento diferenciado en relación con el trámite y procedimiento que debieran realizar para ser atendidos en los hospitales públicos<sup>424</sup>.

<sup>424</sup> Cfr. *Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia*. Resolución emitida por la Corte Interamericana el 28 de mayo de 2010, Considerando 28, y *Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela*, *supra*, párr. 199.

Asimismo, los tratamientos respectivos deberán prestarse, en la medida de lo posible, en los centros más cercanos a sus lugares de residencia<sup>425</sup> en Nicaragua por el tiempo que sea necesario. Al proveer el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico se debe considerar, además, las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, según lo que se acuerde con cada una de ellas y después de una evaluación individual<sup>426</sup>. Los beneficiarios de esta medida disponen de un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, para confirmar al Estado su anuencia a recibir atención psicológica y/o psiquiátrica<sup>427</sup>. A su vez, el Estado dispondrá del plazo de tres meses, contado a partir de la recepción de dicha solicitud, para brindar de manera efectiva la atención psicológica y/o psiquiátrica solicitada.

## *C.2 Satisfacción*

### *a) Publicación de la Sentencia*

349. Las *representantes* solicitaron a la Corte que ordenara al Estado publicar, en un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la sentencia, un resumen en el diario oficial La Gaceta y en un diario de amplia circulación nacional. Asimismo, solicitaron que se ordenara efectuar la difusión de la sentencia, por un período de un año, en un sitio web oficial.

350. Ni el *Estado* ni la *Comisión* presentaron alegatos específicos sobre este punto.

425 Cfr. *Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 270, y *Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela*, *supra*, párr. 199.

426 Cfr. *Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala*, *supra*, párr. 270, y *Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela*, *supra*, párr. 199.

427 Cfr. *Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México*, *supra*, párr. 253, y *Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela*, *supra*, párr. 199.

351. La Corte estima, como lo ha dispuesto en otros casos<sup>428</sup>, que el Estado debe publicar, si V.R.P. así lo autoriza, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial en un tamaño de letra legible y adecuado; b) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional en un tamaño de letra legible y adecuado, y c) la presente Sentencia en su integridad, disponible por un período de un año, en un sitio web oficial del Estado, de manera accesible al público desde su página de inicio.

353. El Estado deberá informar de forma inmediata a este Tribunal una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de un año para presentar su primer informe dispuesto en el punto resolutivo 25 de la Sentencia.

*b) Becas de estudio*

352. Las *representantes* solicitaron, como forma de restablecer el proyecto de vida de las víctimas que no concluyeron sus estudios superiores, que la Corte ordenara al Estado brindarles los medios necesarios para que puedan hacerlo. En relación con V.R.P., teniendo en cuenta que ella aún no ha podido concluir sus estudios y no puede optar por una beca en Nicaragua, pues reside fuera de ese país, solicitaron que se le asigne un monto prudencial ascendente a US\$ 150.000,00 para cubrir sus estudios y pagos de préstamos estudiantiles. Respecto a V.A.R.P. pidieron que se le proporcione una beca y gastos académicos necesarios para que pueda realizar estudios superiores o universitarios en un centro de reconocida calidad académica, escogido de común acuerdo entre el Estado y la víctima.

<sup>428</sup> Cfr. *Caso Cantoral Benavides Vs. Perú*, *supra*, párr. 79, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú*, *supra*, párr. 218.



353. Respecto al pedido formulado para que se otorgue una suma de dinero a V.R.P., el *Estado* señaló que el monto solicitado carecía de fundamento y que, si a consideración de la Corte correspondía pagar alguna indemnización, debía efectuarse una tasación de acuerdo a parámetros nacionales. Asimismo, el Estado agregó que la Corte no podía ser una instancia a través de la cual se pretendiera resolver todos los aspectos de la vida de las presuntas víctimas y que, al encontrarse ellas asiladas en Estados Unidos por haberse alejado voluntariamente de Nicaragua, gozaban de “otras prerrogativas y facilidades de desarrollo”.

354. El Estado alegó que no puede imputársele obligación alguna respecto de V.A.R.P. porque su calidad de presunta víctima no habría sido acreditada ni en el informe de admisibilidad ni en el informe de fondo de la Comisión. Señaló que llamaba la atención el pedido de otorgamiento de beca de estudios y gastos académicos, pues a la fecha de la contestación V.A.R.P. tenía más de 34 años y, además, pudo y puede acceder a la educación superior en Nicaragua, ya que los centros universitarios nacionales son prácticamente gratuitos y su ingreso está condicionado únicamente a que apruebe un examen de admisión.

355. La *Comisión* no se pronunció específicamente sobre esta medida de reparación.

356. La Corte ha establecido en la presente Sentencia que los hechos del caso generaron una grave afectación a V.R.P. y sus familiares, que perdura en el tiempo y que ocasionó cambios significativos tanto en sus vidas como en sus relaciones personales y sociales, dañando su desarrollo personal (*supra* párrs. 295 y 299 y Capítulo VIII-3). En particular, el Tribunal destaca que los hechos sucedieron durante la etapa escolar de V.R.P., quien se vio obligada a abandonar la escuela y, posteriormente, trasladarse a Estados Unidos. Según su declaración en la audiencia, actualmente se encuentra realizando estudios universitarios en Estados Unidos “para tratar de ayudar a niños que pasaron cosas similares”.

Asimismo, su hermano V.A.R.P. declaró que la estigmatización y revictimización sufrida durante el proceso penal así como la desintegración familiar posterior provocaron la imposibilidad de que concluya su educación universitaria<sup>429</sup>.

357. En atención a lo anterior, como se ha dispuesto en otros casos<sup>430</sup>, la Corte estima oportuno ordenar, como medida de satisfacción en el presente caso, que el Estado otorgue a favor de V.R.P., por una única vez, la suma de US\$ 150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América), para poder sufragar los gastos necesarios para la conclusión de su formación profesional en el lugar donde resida. El Estado dispondrá del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, para hacer efectivo el pago del monto ordenado a V.R.P.

358. Por otra parte, el Tribunal dispone que el Estado debe otorgar una beca en una institución pública nicaragüense en beneficio de V.A.R.P., concertada entre éste y el Estado, para realizar estudios superiores técnicos o universitarios, o bien para capacitarse en un oficio. Dicha beca se otorgará desde el momento en que el beneficiario la solicite al Estado hasta la conclusión de sus estudios superiores técnicos o universitarios y deberá cubrir todos los gastos para la completa finalización de dichos estudios, incluyendo el material académico o educativo. Asimismo, deberá empezar a hacerse efectiva de la manera más pronta posible a partir de la notificación de la presente Sentencia, para que el beneficiario comience sus estudios en el próximo año, si así lo desea. La víctima o sus representantes cuentan con un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, para dar a conocer al Estado su intención de recibir dicha beca.

429 Cfr. Declaración rendida por V.A.R.P. ante fedatario público el 10 de octubre de 2017 (expediente de prueba, tomo XVIII, affidávits, folios 8363 a 8365).

430 Cfr. *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 237, y *Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia*, *supra*, párr. 286.

### *C.3 Garantías de no repetición*

#### *a) Medidas para el fortalecimiento de la capacidad institucional para enfrentar de forma integral la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes*

359. La *Comisión* solicitó a la Corte que ordenara al Estado adoptar políticas públicas y programas institucionales integrados, destinados a enfrentar la violencia contra las mujeres y niñas como forma de discriminación, así como a promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a la justicia.

360. Asimismo, recomendó que se ordenara al Estado fortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad frente a casos de violación sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres, incluyendo niñas, a través de investigaciones criminales efectivas, con perspectiva de género, garantizando así una adecuada sanción y reparación.

361. Las *representantes* solicitaron a la Corte que ordenara al Estado adecuar su legislación interna a los estándares mínimos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en procura de un debido proceso, especialmente en casos que involucren a personas menores de edad. Indicaron que los procesos debían ser administrados por personas capacitadas, y que el Estado debía tomar una serie de medidas de protección durante el proceso penal, conforme al derecho internacional, en beneficio de las personas menores de edad, para evitar su revictimización. Señalaron, además, que la protección del Estado no debió reducirse a la acción judicial, sino que debieron adoptarse medidas de tipo administrativo para resguardar a la víctima de incesto con el fin de que se logre su reintegración social.

362. El *Estado* adujo que, con la finalidad de hacer frente a la violencia contra la mujer y las niñas, modernizó su legislación, haciéndola más

eficaz y garante para la víctima, pues substituyó el sistema inquisitivo por formas orales y públicas de hacer justicia, además de incrementar las penas para los delitos. En este sentido, agregó que, en el año 2001, se promulgó el Código Procesal Penal mediante la Ley N° 406, basado en los principios de oralidad e inmediación que garantizan a la víctima el acceso a la justicia, y al acusado el derecho a ser juzgado sin dilación. Además, en el año 2008 se promulgó el Código Penal de Nicaragua, en el que se incrementaron las penas de diversos delitos y que constituye una herramienta para prevenir y detener los abusos sexuales, especialmente contra niñas, adolescentes y mujeres. Por otro lado, señaló que la Ley N° 779 tiene como objetivo principal proteger los derechos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia, conforme a los principios de igualdad y no discriminación. Esa norma creó nuevos delitos en materia penal, así como medidas de seguridad. Asimismo, el Estado señaló que se creó una política pública para el fortalecimiento de la familia y prevención de la violencia, cuyo objetivo es la promoción, protección y restitución de los derechos humanos de las familias, mujeres, niñas, niños y adolescentes, garantizando una vida libre de violencia y estableciendo medidas integrales para prevenir, sancionar y erradicar progresivamente la violencia a través de la atención a las víctimas e impulsando cambios en los patrones socioculturales. Esta política cuenta con estrategias de prevención, atención, coordinación interinstitucional, fortalecimiento institucional, comunicación y, finalmente, de articulación territorial y comunitaria.

363. Nicaragua agregó que, con la finalidad de disminuir los índices de impunidad, ha venido desarrollando a través del Poder Judicial, políticas, programas y buenas prácticas que reflejan el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad que hacen uso de los servicios judiciales, además de aplicar el contenido de las 100 Reglas de Brasilia. Preciso que el Poder Judicial cuenta

con un Plan Estratégico Decenal 2012-2021 para aumentar el acceso a la justicia de la población, en especial de las personas en estado de vulnerabilidad, con un enfoque y perspectiva de género. Los principales lineamientos de este plan son: continuar con la reducción de la retardación de la administración de justicia; garantizar a las partes la seguridad de que sus casos serán resueltos conforme a las leyes y con imparcialidad; facilitar el acceso a la justicia de la ciudadanía sin discriminación alguna y, finalmente, desarrollar la coordinación interinstitucional con el sector justicia y con otros poderes del Estado. Manifestó que la especialización y sensibilización de los y las funcionarias judiciales ha facilitado el acceso a la justicia de las víctimas con mayor confianza en el sistema de administración de justicia, en especial de las mujeres y la niñez. Así, de forma paulatina, se han creado los juzgados especializados en violencia de género, familia y justicia penal de adolescentes, en los 17 departamentos del país. El Estado alegó, además, que desde el año 2005, en el Ministerio Público se creó la Unidad Especializada contra los Delitos de Violencia de Género, de competencia nacional, con fiscales especializados en cada sede departamental, la que ejerce la acción penal defendiendo los derechos de las víctimas desde la investigación hasta la culminación del proceso judicial.

### *Consideraciones de la Corte*

364. La Corte nota que el Estado remitió documentación diversa relativa a normativa interna en relación con sus esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, en particular la violación sexual, a través de legislación, circulares y directrices del Fiscal General, manuales de procedimiento de la Policía Nacional, normas técnicas, protocolos, decretos de Presidencia, entre otros. De igual manera, la Corte nota que parte de esta normativa incluye ciertos criterios ge-

nerales sobre el tratamiento y atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual e intrafamiliar<sup>431</sup>.

365. Asimismo, conforme a la Ley N° 779, “Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley N° 641, ‘Código Penal’” y su decreto reglamentario, se crearon los juzgados de distrito especializados en materia de violencia, integrados por un juez o jueza especializada en la materia, así como equipos interdisciplinarios de atención a la víctima, compuestos al menos por una psicóloga y una trabajadora social, encargados de brindar asistencia especializada, en apoyo de la función jurisdiccional en las audiencias, y para brindar seguimiento y control de las medidas de protección impuestas por el juzgado<sup>432</sup>. De igual manera, de acuerdo con el mencionado reglamento y otro decreto, Nicaragua habría adoptado una política pública para el fortalecimiento de la familia nicaragüense y prevención de la violencia, mediante los cuales se establecen distintas estrategias (de prevención, atención, coordinación institucional, fortalecimiento institucional, articulación territorial y comunitaria, de comunicación, investigación y

431 Cfr. Disposición N° 010/03 de la Policía Nacional, Ministerio de Gobernación. “Manual de procedimientos policiales de atención especializada a víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar y sexual” (expediente de prueba, tomo XX, prueba para mejor resolver, folios 10009 a 10015); Protocolo de actuación en atención a víctimas de violencia de género de la Unidad especializada de atención a víctimas del Ministerio Público (expediente de prueba, tomo XX, prueba para mejor resolver, folios 10108 a 10112); Protocolo de actuación del Ministerio Público en la atención a las víctimas del delito (2010) (expediente de prueba, tomo XX, prueba para mejor resolver, folios 10174 a 10176); Protocolo de Actuación de la Gestión Fiscal en materia de violencia de género de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género (2009) (expediente de prueba, tomo XXI, prueba para mejor resolver, folios 10902 a 10906); Modelo de atención integral a víctimas de violencia de género en Nicaragua, del Equipo Técnico de Modelo de Atención Integral (MAI) (2012) (expediente de prueba, tomo XXI, prueba para mejor resolver, folios 11012 a 11013); Normativa 031 de la Dirección General de Extensión y Calidad de la Atención, Ministerio de Salud. “Normas y Protocolos para la prevención, detección y atención de la violencia intrafamiliar y sexual” (2009) (expediente de prueba, tomo XX, prueba para mejor resolver, folios 10281 a 10342), y Protocolo de Normas y Procedimientos para la Atención Especializada a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de las Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Policía Nacional (2014) (expediente de prueba, tomo XXI, prueba para mejor resolver, folios 10726 a 10728).

432 Cfr. Ley N° 779, “Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley N° 641, ‘Código Penal’” (expediente de prueba, tomo XX, anexo 3 de la prueba para mejor resolver, folio 9464), y Reglamento a la Ley N° 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, y de Reformas a la Ley No. 641 “Código Penal”, Decreto No. 42-2014 del Presidente de la República de Nicaragua (expediente de prueba, tomo XXII, anexo 9.g de la prueba para mejor resolver, folios 11160 a 11166).

resarcimiento) para lograr prevenir la violencia. Entre ellas, se establece incluir en los sistemas educativos, de salud, institucionales, entre otros, líneas de acción para una educación con perspectiva de derechos humanos, que promueva la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, e impulse cambios en los patrones socioculturales<sup>433</sup>.

366. El Tribunal valora los esfuerzos del Estado para adoptar legislación, otros actos jurídicos, instituciones y políticas públicas orientadas a combatir la violencia por razón de género, así como su esfuerzo por adecuar su sistema en materia de investigación penal y procesal penal. Estos avances constituyen indicadores estructurales relacionados con la adopción de medidas que, en principio, tienen como objetivo enfrentar la violencia y discriminación contra la mujer y las niñas, o que su aplicación coadyuva a ello<sup>434</sup>.

367. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte estima pertinente ordenar las siguientes garantías de no repetición, en tanto constituyen medidas que contribuirían a fortalecer la capacidad institucional del Estado en distintas esferas de actuación y brindar una atención integral a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual.

*a.1) Adopción de protocolos estandarizados de investigación y atención integral para casos de violencia sexual en perjuicio de niñas, niños y adolescentes*

368. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado desarrollar protocolos de investigación para que los casos de violación sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres, incluyendo niñas,

433 Cfr. Reglamento a la Ley N° 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, y de Reformas a la Ley N° 641 "Código Penal", Decreto No. 42-2014 del Presidente de la República de Nicaragua, y Decreto No. 43-2014 del Presidente de la República de Nicaragua, "Política de Estado para el fortalecimiento de la familia nicaragüense y prevención de la violencia" (expediente de prueba, tomo XXII, anexo 9.g de la prueba para mejor resolver, folios 11160 a 11167).

434 Cfr. *Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala*, *supra*, párr. 264, y *Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala*, *supra*, párr. 252.

sean debidamente investigados y juzgados conforme a los estándares establecidos en su informe.

369. Las *representantes* pidieron que se desarrolle un protocolo de investigación para los casos de agresión sexual contra la mujer, poniendo especial énfasis en lo relativo a la atención a las niñas víctimas.

370. El *Estado* señaló que esta recomendación ya se encontraba en cumplimiento, puesto que para el Estado de Nicaragua era importante la investigación de los casos de violación sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, niñas y niños. En esta línea, creó instrumentos de política institucional, como los Protocolos de Actuación de Atención a Víctimas y el Protocolo de la Gestión Fiscal en materia de violencia de género. Precisó que, en el año 2010, se puso en marcha el Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en Nicaragua (MAI), con el objetivo de articular el sistema de atención a favor de víctimas de delitos de violencia intrafamiliar y violencia sexual, lo que permitía realizar acciones de investigación, persecución y sanción penal desde el conocimiento del hecho y la protección para la recuperación de la víctima hasta la restitución y resarcimiento de los daños. Finalmente, señaló que de manera específica se planteó la implementación de normas de atención y actuación centrada en las víctimas que evitan la victimización secundaria, fortalecen la capacidad de respuesta institucional en los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, así como protegen la integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, con la aplicación de medidas precautelares a favor de las víctimas.

371. El Estado alegó, además, que desde el año 2005, en el Ministerio Público se creó la Unidad Especializada contra los Delitos de Violencia de Género y la Unidad Especializada de Atención a Víctimas. Ésta última se encarga de brindar atención integral en temas jurídicos, psicológicos, asesoría legal, trabajo social y acompañamientos, en el que las víctimas pasan por un proceso de empoderamiento, reforzamiento de



autoestima, preparación emocional y jurídica para enfrentar el proceso penal. Manifestó que otro de sus logros era la creación y funcionamiento de la clínica forense integral de la mujer y la oficina de ayuda a la víctima, que han contribuido a disminuir la impunidad y la victimización secundaria. Agregó que se ha logrado aportar elementos de prueba al sistema de justicia para demostrar o descartar faltas y delitos, entre otros, contra la libertad e integridad sexual, la trata de personas, violencia intrafamiliar, violencia física y psicológica.

372. La Corte nota que la mayoría de la normativa remitida por el Estado está enfocada en la prevención, combate y erradicación de la violencia de género de forma general. Sin perjuicio de ello, el Tribunal constata que las siguientes normas incluyen un apartado específico o lineamientos generales para casos en que la víctima sea una niña, niño o adolescente: *a)* Disposición N° 010/03 de la Policía Nacional, Ministerio de Gobernación. “Manual de procedimientos policiales de atención especializada a víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar y sexual”<sup>435</sup>; *b)* Protocolo de actuación en atención a víctimas de violencia de género de la Unidad especializada de atención a víctimas del Ministerio Público<sup>436</sup>; *c)* Protocolo de actuación del Ministerio Público en la atención a las víctimas del delito (2010)<sup>437</sup>; *d)* Protocolo de Actuación de la Gestión Fiscal en materia de violencia de género de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género (2009)<sup>438</sup>; *e)* Modelo de atención integral a víctimas de violencia de género en Nicaragua, del Equipo Técnico de Modelo de Atención Integral (MAI) (2012)<sup>439</sup>; *f)* Normativa 031 de la Dirección General de Extensión y Calidad de la Atención, Ministerio de Salud. “Normas y Protocolos para la prevención,

435 Expediente de prueba, tomo XX, prueba para mejor resolver, folios 10009 a 10015.

436 Expediente de prueba, tomo XX, prueba para mejor resolver, folios 10108 a 10112.

437 Expediente de prueba, tomo XX, prueba para mejor resolver, folios 10174 a 10176.

438 Expediente de prueba, tomo XXI, prueba para mejor resolver, folios 10902 a 10906.

439 Expediente de prueba, tomo XXI, prueba para mejor resolver, folios 11012 a 11013.

detección y atención de la violencia intrafamiliar y sexual” (2009)<sup>440</sup>, y g) Protocolo de Normas y Procedimientos para la Atención Especializada a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de las Comisarías de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Policía Nacional (2014)<sup>441</sup>.

373. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal cuenta con una Norma técnica sobre abordaje médico integral en la investigación de violencia sexual (2014)<sup>442</sup>, la cual hace una referencia general a las posiciones recomendables para la revisión ginecológica de niñas, así como a ciertos criterios que el psicólogo, psiquiatra, médico forense o cualquier otro personal de salud público o privado deberá tener en cuenta al momento de entrevistar a las niñas y niños víctimas de violencia sexual. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal cuenta con la Norma técnica para la peritación del daño psíquico en mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar, sexual y otras formas de violencia basada en género (2015)<sup>443</sup>, y la Norma técnica para la valoración médico legal integral en la investigación de la violencia intrafamiliar (2015)<sup>444</sup>. La Corte destaca que la norma técnica de 2014 recoge ciertos criterios de abordaje médico integral en casos de niñas víctimas de violencia sexual.

374. Con base en la normativa citada, la Corte advierte que, tanto a nivel policial como fiscal, existen ciertos criterios y lineamientos especiales para la atención diferenciada de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Entre ellos, se destacan la interacción especial que las autoridades deben tener con las niñas debido al impacto diferenciado que un acto de violencia sexual podría causarles y su mayor estado vulnerabilidad; la importancia de la declaración de la

440 Expediente de prueba, tomo XXII, prueba para mejor resolver, folios 11273 a 11296.

441 Expediente de prueba, tomo XXI, prueba para mejor resolver, folios 10726 a 10728.

442 Expediente de prueba, tomo XX, prueba para mejor resolver, folios 10227 a 10279.

443 Expediente de prueba, tomo XX, prueba para mejor resolver, folios 10181 a 10226.

444 Expediente de prueba, tomo XX, prueba para mejor resolver, folios 10281 a 10342.

niña, niño o adolescente; la necesidad de que no exista contacto con el perpetrador; el tacto y sensibilidad en el trato; el respeto con el que las autoridades deben actuar, sin forzar la entrevista, asegurando su privacidad y un ambiente de confianza y seguridad, entre otras. Asimismo, algunos de dichos documentos destacan ciertas técnicas para facilitar el establecimiento de un vínculo con la niña, niño o adolescente.

375. La Corte considera que los criterios generales establecidos en la documentación citada implican un avance significativo en cuanto a la adecuación de las normas y prácticas internas a la normativa internacional en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la Corte advierte que es preciso contar con normas más específicas que contemplen los criterios establecidos en la presente Sentencia y en otros instrumentos internacionales en la materia.

376. En este sentido, la Corte estima conveniente ordenar que el Estado adopte protocolos que establezcan medidas claras de protección y criterios a tomar en cuenta durante las investigaciones y procesos penales derivados de actos de violencia sexual en perjuicio de niñas, niños y adolescentes; que aseguren que las declaraciones y entrevistas, los exámenes médico-forenses, así como las pericias psicológicas y/o psiquiátricas sean llevadas a cabo de forma ajustada a las necesidades de niñas, niños y adolescentes víctimas, y delimiten el contenido de la atención integral especializada para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Por ello, la Corte ordena al Estado la adopción, implementación, supervisión y fiscalización apropiada de tres protocolos estandarizados, a saber: i) protocolo de investigación y actuación durante el proceso penal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; ii) protocolo sobre abordaje integral y valoración médico legal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, y iii) protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

377. En relación con el protocolo de investigación y actuación durante el proceso penal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, el Estado deberá tener en cuenta los criterios establecidos en los instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos del niño, niña y adolescente, así como los estándares desarrollados en esta Sentencia y en la jurisprudencia de la Corte. En este sentido, dicho protocolo deberá tener en consideración que la debida diligencia reforzada implica la adopción de medidas especiales y el desarrollo de un proceso adaptado a las niñas, niños y adolescentes con miras a evitar su revictimización, por lo que deberá incluir, conforme con los estándares desarrollados en los párrafos 158 a 168, al menos los siguientes criterios: i) el derecho a la información relativa al procedimiento, así como los servicios de asistencia jurídica, de salud y demás medidas de protección disponibles; ii) la asistencia letrada, gratuita y proporcionada por el Estado, de un abogado especializado en niñez y adolescencia, con facultades de constituirse en calidad de parte procesal, oponerse a medidas judiciales, interponer recursos y realizar todo otro acto procesal tendiente a defender sus derechos en el proceso; iii) el derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, que conlleve un criterio reforzado de celeridad; iv) el derecho de la niña, niño o adolescente víctima a participar en el proceso penal, en función de su edad y madurez, y siempre que no implique un perjuicio en su bienestar biopsico-social. Para ello, deben realizarse las diligencias estrictamente necesarias y evitarse la presencia e interacción de las niñas, niños y adolescentes con su agresor; v) generar las condiciones adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes puedan participar de forma efectiva en el proceso penal mediante las protecciones especiales y el acompañamiento especializado; vi) la entrevista deberá llevarse a cabo por un psicólogo especializado o un profesional de disciplinas afines debidamente capacitado en la toma de este tipo de declaraciones

de niñas, niños y adolescentes; vii) las salas de entrevistas otorgarán un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado, que les brinde privacidad y confianza; viii) el personal del servicio de justicia que intervenga deberá estar capacitado en la temática, y ix) deberá brindarse asistencia inmediata y profesional, tanto médica como psicológica y/o psiquiátrica, a cargo de un profesional específicamente capacitado en la atención de víctimas de este tipo de delitos y con perspectiva de género. La Corte considera que este protocolo deberá estar dirigido, especialmente, a todo el personal de la administración de justicia que intervenga en la investigación y tramitación de procesos penales en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual, sea que ésta haya ocurrido en la esfera pública o privada.

378. En relación con el protocolo sobre abordaje integral y valoración médico legal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, la Corte ordena al Estado de Nicaragua que adopte un protocolo específico estandarizado para que todo el personal de salud, ya sea público o privado y, de forma particular, el personal del Instituto de Medicina Legal, cuente con los criterios necesarios para la ejecución de los exámenes que correspondan, conforme con los criterios establecidos en el párrafo 169 de la presente Sentencia y la jurisprudencia de la Corte, así como los estándares internacionales en la materia. El Tribunal resalta que, de considerarse necesaria la realización de un examen médico, el Estado deberá garantizar al menos lo siguiente: i) deberá evitarse, en la medida de lo posible, más de una evaluación física; ii) debe ser realizado por un profesional con amplio conocimiento y experiencia en casos de violencia sexual de niñas, niños y adolescentes; iii) la víctima o su representante legal, según el grado de madurez de la niña, niño o adolescente, podrá elegir el sexo del profesional; iv) el examen debe estar a cargo de un profesional de salud especialista en ginecología infanto-juvenil, con formación específica para realizar los

exámenes médicos forenses en casos de abuso y violación sexual; v) deberá llevarse a cabo luego del consentimiento informado de la víctima o de su representante legal, según su grado de madurez, tomando en cuenta el derecho de la niña, niño o adolescente a ser oído, y vi) se realizará en un lugar adecuado y se respetará su derecho a la intimidad y privacidad, permitiendo la presencia de un acompañante de confianza de la víctima.

379. Finalmente, en relación con el protocolo específico estandarizado de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, la Corte ordena que este deberá brindar medidas de protección desde el momento en que el Estado conozca de la violencia sexual, conforme con los criterios establecidos en los párrafos 164, 165 y 170 de la presente Sentencia. En particular, la Corte ordena al Estado que dicho protocolo garantice el establecimiento de protecciones especiales y acompañamiento especializado, médico, psicológico y/o psiquiátrico para que las niñas, niños y adolescentes puedan participar de forma efectiva en el proceso penal, evitando la revictimización y conforme a sus vivencias y entendimiento. El protocolo además, deberá garantizar que se brinde asistencia antes, durante y después de las investigaciones y proceso penal para lograr la reintegración y rehabilitación de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. En este sentido, se brindará asistencia inmediata y profesional, tanto médica, psicológica como psiquiátrica a cargo de personal especializado, con perspectiva de género y sin discriminación, para las víctimas y sus familiares, durante el tiempo que sea necesario para lograr la rehabilitación. La Corte estima que este protocolo deberá estar dirigido no solo al personal de salud que interviene en casos de violencia sexual, sino también al personal de apoyo social y familiar que de forma integral brindan atención a las víctimas, por lo que deberá incluir los mecanismos de apoyo con los que cuentan dichas víctimas y sus familiares. El protocolo deberá,

asimismo, establecer claramente las acciones de coordinación entre distintas instancias estatales que brindan asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en Nicaragua<sup>445</sup>.

380. La Corte ordena que Nicaragua deberá cumplir con las medidas de reparación dispuestas en este apartado en el plazo de dos años desde la notificación de la presente Sentencia.

*a.2) Creación de la figura del abogado de niñas, niños y adolescentes que brinde asistencia jurídica a víctimas de delitos en materia penal de forma gratuita*

381. La Corte advierte que V.R.P. no contó con asistencia letrada propia ni con el apoyo de una entidad estatal que velara por los derechos de la niña durante las diligencias judiciales revictimizantes, que hubiera permitido hacer valer procesalmente su voz y su clara voluntad exteriorizada de no realizar dichas diligencias por el daño que le causaban. Este Tribunal nota que si la niña hubiera participado en el proceso penal con asistencia jurídica propia habría podido oponerse a las diligencias judiciales dañinas y, así, habría podido evitar los diversos actos de revictimización sufridos.

382. La Corte considera que, como una medida de fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado, Nicaragua debe crear e implementar una figura especializada que brinde asistencia jurídica a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, especialmente de violencia sexual, es decir un abogado de la niña, niño o adolescente, especializado en la materia, que defienda sus intereses durante las investigaciones y el proceso penal. Dicha asistencia técnica jurídica será

<sup>445</sup> El Tribunal nota que existen experiencias comparadas mediante las cuales se han adoptado guías de buenas prácticas para la atención a víctimas de violencia y violación sexual en casos de niñas, niños y adolescentes. Cfr. UNICEF y Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos, septiembre de 2013, págs. 66 a 69, y MSP, SIPIAV, UNICEF, Mapa de ruta para la prevención y la atención de situaciones de maltrato y abuso sexual infantil en el sector salud, Uruguay, 2009.

brindada por el Estado de forma gratuita, en caso de que la persona menor de edad cuente con la edad y madurez suficiente para manifestar su intención de constituirse como parte querellante en el proceso, con el fin de defender sus derechos de manera autónoma como sujeto de derechos, diferenciada de los adultos. La asistencia técnica será de libre elección, por lo que será ofrecida y se brindará si la niña, niño o adolescente así lo requiere, a menos que cuente con patrocinio jurídico propio. Nicaragua deberá cumplir con esta medida de reparación en el plazo de dos años desde la notificación de la presente Sentencia.

*b) Capacitación para funcionarios públicos*

383. La *Comisión* recomendó que se diseñaran e implementaran programas de capacitación permanentes para funcionarios públicos del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, sobre estándares internacionales en materia de investigación de violación sexual y otras formas de violencia sexual en contra de mujeres, incluyendo niñas. Asimismo, solicitó que se capacitara al personal de salud, tanto médico como psicológico, que esté vinculado a dichas investigaciones, sobre los estándares internacionales en materia de trato a niñas y niños víctimas de violencia sexual.

384. Las *representantes*, por su parte, solicitaron que los servidores públicos que por su función trabajen en temas de agresiones sexuales sean capacitados en el ámbito de derechos humanos y buenas prácticas en el manejo de víctimas de tales agresiones, impidiendo de ese modo la revictimización, especialmente cuando se trata de personas menores de edad.

385. El *Estado* señaló que se encuentra trabajando sobre esta recomendación como parte intrínseca de la actualización de su legislación en materia penal con una perspectiva de género. Agregó que la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional y el Minis-



terio Público de Nicaragua han creado la Unidad y Secretarías Técnicas de Género, para incluir la temática de género en el proceso de formación de la ley y las funciones propias de cada una de esas instituciones. Refirió que tanto la Unidad como las Secretarías Técnicas han brindado capacitaciones sobre enfoque de género a funcionarios y funcionarias. Preciso que, en el ámbito de la salud, se encuentran funcionando desde el año 2009 las Normas y Protocolos para la prevención, detección y atención de la violencia intrafamiliar y sexual.

386. La Corte nota que el artículo 33 de la Ley N° 779 se refiere a que el personal que atiende la investigación y tramitación de los procesos relativos a la violencia contra la mujer debe ser capacitado en la materia a través de programas de formación inicial, continua y especializada. Por otro lado, la Corte advierte que si bien dicha capacitación abarca a todas las instituciones que integran el sistema de justicia penal, ésta se refiere a la violencia contra la mujer, sin especificar las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Asimismo, el Estado no proveyó información concreta sobre la idoneidad, implementación y permanencia de los programas de formación referidos.

387. En consecuencia, este Tribunal estima que el Estado debe adoptar e implementar capacitaciones y cursos, de carácter permanente, para funcionarios públicos que por su función en el sistema de administración de justicia trabajen con temáticas de violencia sexual; en particular, los funcionarios pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional. Dichas capacitaciones y cursos deben versar sobre estándares de debida diligencia en la investigación de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como su erradicación y las medidas de protección a adoptar. Además, las capacitaciones deberán basarse en los criterios establecidos en la presente Sentencia, los cuales se corresponden con el contenido de los protocolos estandarizados ordenados por esta Corte (*supra* párrs. 381 a 384), en la jurisprudencia de

la Corte en relación con la violencia de género y protección de los derechos del niño, así como en los estándares internacionales en la materia. Las capacitaciones deberán impartirse desde una perspectiva de género y de protección de la niñez, tendente a la deconstrucción de estereotipos de género y falsas creencias en torno a la violencia sexual, para asegurar que las investigaciones y enjuiciamientos de estos hechos se realicen de acuerdo a los más estrictos estándares de debida diligencia.

388. Asimismo, la Corte ordena al Estado que adopte e implemente capacitaciones y cursos, de carácter permanente, dirigidas a profesionales médicos y al personal que conforma el sistema público de salud que intervienen en la detección, el diagnóstico y tratamiento de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, así como a los médicos forenses y demás personal del Instituto de Medicina Legal, con el objetivo de brindar formación sobre el trato adecuado a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual durante los exámenes médicos, y con miras a que dichos exámenes sean llevados a cabo conforme a los criterios establecidos en la presente Sentencia y a los estándares internacionales en la materia.

389. De igual manera, la Corte ordena al Estado que adopte e implemente capacitaciones y cursos, de carácter permanente, dirigidos al personal de salud que interviene en casos de violencia y violación sexual, así como al personal de apoyo social y familiar que, de forma integral, brinda atención a las víctimas de violencia y violación sexual. Las capacitaciones y cursos deben versar sobre los criterios desarrollados en la presente Sentencia; en particular, sobre el acompañamiento y la atención adecuada, integral, especializada y coordinada que debe brindarse a dichas víctimas para lograr su reintegración y rehabilitación.

390. El Estado debe cumplir con las medidas de reparación dispuestas en este apartado en el plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.

#### *C.4 Otras medidas solicitadas*

##### *a) Adecuación de la legislación interna a los estándares mínimos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de juicios por jurado*

391. Las *representantes* solicitaron a la Corte que ordenara al Estado adecuar su legislación interna a los estándares mínimos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en procura de un debido proceso en los conflictos judiciales, especialmente en casos que involucren a personas menores de edad. Pidieron que estos procesos fueran administrados por personas capacitadas, erradicándose el Tribunal de Jurados para casos de violación sexual o de cualquier hecho donde haya vinculación con una persona menor de edad, y que la responsabilidad de la administración de justicia recayera sobre jueces, quienes deben resolver de acuerdo a las pruebas presentadas y la sana crítica. Finalmente, solicitaron que se estableciera el derecho al recurso de apelación en todos los procesos, de manera indistinta, incluyendo los conocidos por el jurado.

392. El *Estado* sostuvo que, desde hace más de 10 años, ha efectuado cambios importantes en materia penal y de derechos humanos. Agregó que, uno de los elementos más importantes, es el rol protagónico que tiene la víctima en todas y cada una de las etapas del proceso, con un modelo de compensación inmediato. Con relación al sistema de enjuiciamiento penal, alegó que, desde el año 2008, los delitos contra la libertad e integridad sexual son juzgados por jueces técnicos y que, a través de la Ley N° 779 fueron creados juzgados especializados en violencia de género, por lo que dichos delitos ya no serían resueltos por jurados.

393. La *Comisión* no formuló alegato específico respecto a este punto.

394. La Corte comprueba que la Ley N° 779, “Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley N° 641, ‘Código

Penal''', aprobada en el mes de enero del año 2012 y publicada el 22 de febrero de 2012, implementa un sistema de enjuiciamiento de casos de violencia de género y, en particular, casos de violencia sexual, distinto al vigente en la época de los hechos del presente caso. Dicha ley dispone la creación de tribunales de primera y segunda instancia especializados en la materia, integrados por una jueza o un juez técnico. Se excluye así la posibilidad de que un caso de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes sea juzgado por un jurado popular. De este modo, la Corte considera que no es necesario ordenar una medida de reparación adicional a este respecto, ya que con base en el cambio legislativo indicado, los delitos de violencia sexual, incluidos los de violación sexual cometidos en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, ya no son juzgados por un jurado popular, sino por un juez especializado.

*b) Otras medidas*

395. Las *representantes* solicitaron adicionalmente a la Corte que ordenara al Estado de Nicaragua: i) proveer una vivienda adecuada, sin gastos adicionales y de manera gratuita, para que V.R.P., V.P.C. y N.R.P. pudieran vivir con dignidad en los Estados Unidos, ya que las víctimas se vieron obligadas a salir de Nicaragua y dejar abandonada su casa, quedándose sin un lugar donde vivir. Por ello, solicitaron que el Estado les asigne un monto prudencial de US\$ 200.000,00 a los fines de adquirir dicha vivienda; ii) emitir una comunicación a la Embajada de Estados Unidos solicitando la aprobación de visado de paseo en beneficio de H.J.R.P. y V.A.R.P., para que puedan viajar y reencontrarse con la familia; ello en razón de la desintegración familiar que se produjo por la salida de Nicaragua de V.P.C., V.R.P. y N.R.P. y las consecuencias que esto acarreó pues las dos últimas no volvieron a ver a sus hermanos; iii) aprobar un proyecto de soporte para las víctimas de abusos sexuales, el cual debe ser puesto en funcionamiento en la ciudad de Jinotega, inclu-

yendo la manutención del proyecto en cuanto a infraestructura, “transportación” y mantenimiento del mismo, y iv) no interponer ninguna acción criminal, civil o de cualquier índole en contra de la “exponente” y sus familiares por haber recurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

396. El *Estado* alegó lo siguiente: i) en cuanto a la solicitud de una vivienda, se opuso a la petición aduciendo que no se encontraba debidamente fundamentada y que V.P.C. seguía siendo propietaria de la casa habitación que poseía en Jinotega, la que se encontraba libre de gravámenes y podía ser vendida para adquirir otra vivienda; ii) el otorgamiento de la visa para H.J.R.P. y V.A.R.P., o de cualquier otra, era una potestad soberana de cada país y que cualquier ciudadano podía solicitarla ante el consulado de manera individual, cumpliendo con los requisitos que establece cada país. Agregó que el Estado no podía involucrarse en esta decisión soberana de los Estados Unidos, más aun cuando no existía impedimento para que V.A.R.P. y H.J.R.P. vean a sus hermanas V.R.P. y N.R.P. pues ellas podían entrar y salir libremente de Nicaragua, con plena garantía de no persecución, iii) en Nicaragua existían más de 6,000 ONGs legalmente constituidas e inscritas mediante regulaciones sencillas que no requerían establecer una medida de garantía especial, y cada una de ellas creaba y trabajaba con sus propias fuentes de financiamiento. Por esa razón, no le correspondía al Estado asumir los costos de infraestructura, transporte y mantenimiento del referido proyecto de soporte para las víctimas de abusos sexuales, pues ello implicaría la existencia de un centro de ayuda de víctimas con presupuesto del Estado y sujeto a fiscalización. Finalmente, precisó que sí podría trabajar de forma coordinada con otras ONGs de la misma naturaleza que la pretendida y que funcionan con sus propios medios de financiamiento, y iv) no existe indicio de persecución contra V.P.C. ni contra sus hijos que habitan en Nicaragua, tan es así que ella ha viaja-

do y circulado libremente por territorio nicaragüense. El Estado agregó que se reafirmaba en su vocación de respeto irrestricto a los Derechos Humanos, en especial el de petición, vida, integridad física, moral, psicológica y seguridad jurídica.

397. En relación con la solicitud de otorgamiento de vivienda, la Corte considera que, conforme con lo señalado por el Estado, lo cual no ha sido controvertido por las representantes, la señora V.P.C. aun sería propietaria de un inmueble en Nicaragua, el que estaría libre de gravámenes. En este sentido, este Tribunal no considera procedente ordenar una medida a este respecto. En cuanto a la solicitud de reintegración familiar, el Tribunal advierte que la emisión de visas es, efectivamente, una potestad de cada país, y que el acceso a las mismas por parte de los hijos de la señora V.P.C. no se encuentra impedido. Por otro lado, no se deduce de los alegatos en el presente caso ni de la prueba aportada, que la señora V.P.C. y sus hijas se encuentren imposibilitadas de viajar a Nicaragua para reencontrarse con sus seres queridos. Por ello, la Corte no considera procedente ordenar una medida en este sentido.

398. En suma, la Corte estima que el dictado de la presente Sentencia y las reparaciones ordenadas en este capítulo resultan suficientes y adecuadas para compensar las violaciones sufridas por las víctimas y no estima necesario ordenar las demás medidas solicitadas. Sin perjuicio de ello, la Corte reitera al Estado de Nicaragua que, conforme a la Convención Americana, las víctimas tienen el derecho de presentar peticiones ante la Comisión Interamericana si así lo estiman pertinente y que, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas o a sus representantes o asesores legales ni ejercer represalias contra ellos a causa de sus declaraciones o su defensa legal ante la Corte.

### *D. Indemnizaciones compensatorias*

399. La *Comisión* solicitó a la Corte, en términos generales, que ordenara al Estado reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en su Informe de Fondo, tanto en el aspecto material como en el moral.

400. El *Estado* alegó, en términos generales, que las reparaciones solicitadas por las representantes eran muy elevadas y pretendían únicamente un enriquecimiento, más que una indemnización. En ese sentido, solicitó que la Corte tomara en cuenta la situación económica de Nicaragua. Agregó que el monto solicitado por las representantes no se condecía con los montos fijados por la Corte en otros casos que revestían mayor gravedad.

#### *D.1 Daño material*

401. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y ha establecido que éste supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso<sup>446</sup>.

##### *a) Daño emergente*

402. Las *representantes* solicitaron que la Corte ordenara al Estado pagar a la víctima o a sus representantes, por concepto de daño emergente, todos los gastos directos e inmediatos que tuvieron que efectuar con ocasión del ilícito cometido, esto es, los gastos que realizó V.P.C., tanto en Nicaragua como en Estados Unidos, por las atenciones médicas (gastos quirúrgicos, terapéuticos y farmacias), el daño físico y la

<sup>446</sup> Cfr. *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas*. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú, supra*, párr. 215.

enfermedad sufridos por V.R.P., así como la afectación psíquica. Asimismo, incluyeron dentro de este rubro, los gastos judiciales efectuados en razón de la denuncia interpuesta contra la persona señalada por V.R.P. como su agresor, los cuales comprenden gastos por traslados, copias de documentos, pagos de impuestos judiciales y honorarios a nivel interno. Estos gastos se vieron incrementados por la necesidad de interponer acciones debido a las irregularidades del proceso, teniendo incluso que recurrir al sistema interamericano. Asimismo, las representantes señalaron que V.P.C. debió cubrir los gastos de traslado a los Estados Unidos y los del proceso de exilio en ese país para sus dos hijas y ella. Las representantes indicaron que varios de los gastos señalados se encontraban sustentados en diversos documentos y facturas. En este sentido, aportaron documentación respecto a los gastos hospitalarios por la suma de US\$ 2.023,94 y los gastos farmacéuticos por la suma de US\$ 281,50, lo que da un total de US\$ 2.305,44.

403. Las representantes agregaron que al monto señalado debía adicionarse aquellos gastos cuya cuantificación detallada resultaba imposible por el transcurso del tiempo y la informalidad. En ese sentido, las representantes adujeron que se efectuaron los siguientes desembolsos: *a)* US\$ 7.000,00 por gastos médicos producto del estado físico y psicológico de la niña, que comprende su ingreso al Hospital Victoria de Jinotega, intervención quirúrgica, exámenes-biopsia, pago al ginecólogo y al pediatra, medicinas, consultas por cuidados posteriores, gastos de psiquiatría, gastos de terapeuta, gastos de transportes, gastos de estadía, gastos médicos en los Estados Unidos, todos ellos sin soporte probatorio; *b)* US\$ 39.024,00 por gastos legales en Nicaragua, que comprende la formulación de la denuncia, el traslado de los testigos, gastos de copias, gastos por acusación criminal, traslado a la inspección ocular, traslado de los médicos forenses, traslado a Matagalpa por apelación de auto de prisión, presentación de pruebas, traslado a programación del



jurado, apelación de nulidad del veredicto, presentación de testificales, traslados por apertura a prueba del incidente, inspección, video, certificaciones, pagos de honorarios; c) US\$ 5.700,00 por gastos de diversas denuncias por irregularidades en el proceso, que comprende gastos por traslados y viajes de seguimiento por denuncia ante la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Especial de la República para la Niñez y Adolescencia; d) US\$ 15.250,00 por gastos relativos a la denuncia y seguimiento al caso ante la Comisión, lo cual abarca la localización, solicitud, copiado y remisión de expediente, gastos de abogado, FedEx-postal office; e) US\$ 2.500,00 por gastos de salida de Nicaragua a Miami, que incluye tres pasajes, pasaporte, viaje a Managua y traslado en Miami; f) US\$ 20.100,00 por gastos legales del proceso de exilio de V.P.C., V.R.P. y N.R.P., que comprende la “presentación de copias, FedEx y traslación de documentos para tres personas”, y g) US\$ 500,00 por gastos del proceso ante la Corte Interamericana, que comprende la realización de declaración jurada, copias y envíos de documentos. Con base en lo señalado, las representantes cuantificaron el daño emergente en la suma de US\$ 92.379,44, y destacaron que tales gastos fueron solventados por V.P.C., quien era la responsable de proveer a la familia.

404. El *Estado* solicitó que la Corte fijara el daño emergente siempre que comprenda los gastos directos e inmediatos que debió cubrir la víctima. Además, requirió que los desembolsos alegados sean corroborados mediante documentos o facturas, rechazando los gastos médicos argüidos sin soporte probatorio. El Estado adujo que si bien existía jurisprudencia en la que se señaló que la falta de comprobante no podía ser causal de rechazo de un justo resarcimiento, ello se dio por razones excepcionales, por lo que pidió que esa excepción no se convierta en regla dado que la naturaleza de la Corte no es fijar indemnizaciones que sean impagables. Además, no consideró lógico que existan compro-

bantes o recibos de algunos gastos y de otros no, o que existan recibos de gastos realizados con mucho tiempo de anticipación y no de los más recientes.

405. En relación con el daño emergente, la Corte advierte que las representantes basaron el monto solicitado en una serie de gastos desembolsados por la señora V.P.C., derivados de las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Entre estos se encuentran: *a)* gastos de atención médica por los daños físicos y psicológicos, así como por las enfermedades sufridas por su hija V.R.P.; *b)* gastos derivados del proceso penal por violación sexual; *c)* gastos por las quejas y denuncias interpuestas contra los funcionarios y servidores públicos intervinientes que provocaron las diferentes irregularidades en el proceso penal; *d)* gastos por la salida de Nicaragua y el establecimiento de su residencia y la de sus dos hijas en Estados Unidos, y *e)* gastos derivados de la denuncia y el desarrollo del caso ante el sistema interamericano. La Corte considerará bajo el rubro de daño emergente los gastos incurridos por la señora V.P.C. que no estén relacionados con los gastos relativos a la tramitación del caso, los cuales serán analizados bajo el concepto de costas y gastos (*infra* párr. 432).

406. En consecuencia, si bien el monto comprobado en el expediente ante esta Corte asciende a la suma de US\$ 2.131,26 (dos mil ciento treinta y uno con 26/100 dólares de los Estados Unidos de América), la Corte estima razonable presumir que la señora V.P.C. incurrió en gastos adicionales derivados de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en el presente caso. En este sentido, la Corte considera razonable ordenar el pago de la suma de US\$ 7.000,00 (siete mil dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de daño emergente, el que deberá ser pagado a favor de la señora V.P.C.

*b) Pérdida de ingresos*

407. Las *representantes* solicitaron a la Corte que ordenara al Estado pagar a la peticionaria V.P.C., en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la sentencia, la suma de US\$ 34.183,09 por “concepto de daño material por lucro cesante”. Adujeron que V.P.C. percibía una renta mensual ascendente a US\$ 600,00, más un salario por vacaciones y uno por aguinaldo, a lo que debiera agregarse un aproximado de US\$ 200,00 que recibía de manera informal de clientes para hacer diligencias judiciales; por ello pidieron que se tome como referencia para el cálculo del lucro cesante la suma de US\$ 800,00. Agregaron que la peticionaria se vio obligada a dejar su trabajo en el mes de octubre de 2001, cuando se agravó la salud de V.R.P. Dicha situación de desempleo que se extendió hasta el mes de diciembre de 2002, cuando salió de Nicaragua. En los Estados Unidos permaneció sin empleo hasta el mes de octubre de 2004.

408. El *Estado* señaló que los datos presentados para calcular el monto solicitado carecen de sustento probatorio porque se acompaña una “constancia de un salario supuestamente percibido” y porque el monto indicado no es acorde al salario que una gestora o asistente de despacho percibía en la época, pues es superior al salario que percibían “los jueces o fiscales con 10 - 20 años aproximados de experiencia”. Agregó que se incluyó un adicional que no constituye salario y un “catorceavo que tampoco demostró con alguna colilla”.

409. Precisó, además, que en un caso anterior la Corte consideró, para la proyección de reparación, únicamente el 50% del salario de un profesional. Por ello, solicitó que en el presente caso se realice el mismo ejercicio, es decir, se proyecten las reparaciones a favor de V.P.C. como probable oficinista, sin título profesional, ni especialidad, con base en la suma de US\$ 300,00, que equivale al 50% del monto indicado por las

representantes de las presuntas víctimas como el salario básico que percibió la peticionante. Adujo, además, que según la legislación laboral de Nicaragua, todo trabajador tiene derecho a que el empleador le pague un mes de salario adicional después de un año de trabajo continuo o la parte proporcional que corresponde al periodo trabajado. Por ello, V.P.C. habría tenido derecho a percibir un salario completo por este concepto por los años 2002 y 2003, en tanto que el año 2001 sólo habría percibido la parte proporcional correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, y en el año 2004, la parte proporcional correspondiente a los meses de enero a septiembre. Con base en lo señalado, estimó que la suma a pagarse por la pérdida de ingresos debía ser fijada en US\$ 12.575,00.

410. Agregó que, según el Ministerio de Trabajo y el Banco Central de Nicaragua, el salario mínimo en Nicaragua correspondiente al sector servicios, en el que se encontraba ubicada V.P.C., osciló entre 1.110,00 córdobas y 1.752,00 córdobas, montos equivalente a US\$ 82,56 y 130,32 en el 2001, en el 2002 a US\$ 77,88 y 122,93, en el año 2003 a US\$ 73,47 y 115,97, y en el año 2004 a US\$ 69,64 y 109,93.

411. La Corte sostuvo que la señora V.P.C. sufrió una vulneración de sus derechos a la integridad personal, a la vida privada y familiar, a las garantías judiciales, a la protección judicial, al derecho de residencia, a la protección de la familia y a las medidas especiales de protección, con motivo de los actos de revictimización y violencia institucional sufridos por su hija V.R.P., lo que condujo a su salida de Nicaragua. Esta situación provocó dificultades socioeconómicas en los miembros de la familia debido a que la señora V.P.C. era el sostén económico familiar y debió dejar su puesto de trabajo para atender la situación de su hija y, posteriormente, reclamar administrativa y judicialmente por las irregularidades cometidas en el proceso. Una vez en Estados Unidos, la seño-

ra V.P.C. fue contratada en el mes de octubre de 2004<sup>447</sup>. De este modo, el Tribunal considera que existe un nexo causal entre las violaciones declaradas en el presente caso y los daños económicos por concepto de pérdida de ingresos.

412. La Corte nota que, conforme a la prueba aportada en el expediente, existe una constancia de las actividades laborales que desempeñaba V.P.C. en Nicaragua como asistente jurídica, percibiendo un salario de US\$ 600,00 (seiscientos dólares de los Estados Unidos de América)<sup>448</sup>. Sin embargo, la Corte no cuenta con elementos probatorios que permitan comprobar el ingreso por la suma de US\$ 200,00 (doscientos dólares de los Estados Unidos de América) que, según las representantes, la señora V.P.C. también habría recibido como un devengado informal que haría parte de su salario. Por otro lado, el Tribunal constata que, conforme fue aclarado por el Estado, en Nicaragua se recibe un salario adicional al año por concepto de aguinaldo.

413. De igual forma, tomando en consideración lo señalado por la señora V.P.C., que no fue controvertido por el Estado, este Tribunal estima que la madre de V.R.P. se vio obligada a renunciar a sus labores como asistente jurídica desde el mes de octubre de 2001, debido a la violación sexual de la que fue víctima su hija, seguida de la falta de protección y respuesta estatal, la cual la llevó, finalmente, a salir de Nicaragua. De igual forma, la señora V.P.C. habría reanudado sus actividades laborales en los Estados Unidos en el mes de octubre de 2004.

414. Con base en lo expuesto, la Corte considera que, debido a las violaciones reconocidas en esta Sentencia, la señora V.P.C. sufrió una pérdida de ingresos desde octubre de 2001 hasta octubre de 2004, que, luego de considerar los salarios que dejó de devengar durante el tiempo

447 Cfr. Comprobantes de impuestos en Estados Unidos (expediente de prueba, tomo VXi, anexo H.2 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 7721 a 7730).

448 Cfr. Constancia de trabajo y salario a nombre de V.P.C. (expediente de prueba, tomo XVI, anexo H.1. al escrito de solicitudes y pruebas, folio 7719).

citado, asciende a la suma de US\$ 23.400,00 (veintitrés mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América). Dicho monto deberá ser pagado por el Estado a la señora V.P.C.

## D.2 Daño inmaterial

415. La *Comisión* afirmó que los hechos causaron un severo impacto en el proyecto de vida de V.R.P., su madre V.P.C. y sus hermanos y hermana, ya que la grave omisión del Estado en reconocer la condición de víctima de V.R.P. a su corta edad y la severa violencia que sufrió de parte de las autoridades estatales anuló las posibilidades de recuperación y reintegración de la víctima. Consideró que el deber de acompañamiento y protección integral del Estado hacia la víctima sigue pendiente, frente a lo que no se puede permitir que se oponga la salida del país de las víctimas para evadir su obligación de reparación integral, en particular teniendo en cuenta que dicha salida obedeció precisamente a la actuación estatal frente a las denuncias.

416. Las *representantes* señalaron que el daño sufrido por V.R.P. en manos de un tercero comprometió la responsabilidad del Estado por no haber garantizado efectivamente sus derechos y no haber realizado una investigación efectiva que conllevara la sanción del responsable. Asimismo, indicaron que la violencia institucional y la revictimización sufrida por la niña, debido a la actuación de personas que se desempeñaron en el marco de sus funciones públicas, le causaron un daño. Las representantes alegaron que todo ello afectó tanto a V.R.P. como a su entorno familiar, ocasionándoles un daño psíquico y moral, ya que se vieron estigmatizados y tuvieron que cargar con el dolor sufrido por V.R.P., además de sentir la impotencia de no recibir respuesta del Estado, lo que condujo finalmente a la desintegración familiar. Por ello, solicitaron que se ordenara el pago de US\$ 250.000,00 a favor de V.R.P.,

US\$ 150.000,00 a favor de V.P.C., y US\$ 50.000,00 a favor de cada uno de los hermanos. En consecuencia, el monto total solicitado por concepto de daño inmaterial asciende a US\$ 550.000,00.

417. Las *representantes* adujeron, con relación a V.R.P., que sus expectativas de desarrollo personal, sano y normal, le fueron truncadas desde el momento en que fue agredida sexualmente, pues dejó de ser una niña alegre, se negó a asistir a la escuela y desatendió sus cuidados personales, lo que se agravó cuando su agresor fue puesto en libertad. Su proyecto de vida se vio igualmente afectado cuando tuvo que retirarse de su entorno y su familia y se vio impedida de disfrutar de las relaciones afectivas de las personas que amaba. Respecto a V.P.C. adujeron que tuvo que dejar de trabajar para atender tanto la delicada situación de su hija como el proceso judicial instaurado, tuvo que dejar a su familia para ir a un país extraño, tuvo que dejar su casa para verse en la calle sin tener donde dormir, gastó sus fuerzas y su salud buscando la recuperación de su hija y la justicia que no llegó. Todo ello no formó parte de sus planes antes de interponer la denuncia contra el agresor de su hija. Con relación a N.R.P. arguyeron que su proyecto de vida se vio afectado cuando se le cerraron las posibilidades de desarrollarse en su carrera debido al rechazo social por lo acontecido en su familia y cuando tuvo que salir de su país para ser soporte de su madre y hermanita, dejando su carrera y sus sueños para dedicarse a trabajos menores que le permitieran ayudarlas. Con relación a H.J.R.P. y V.A.R.P., afirmaron que ellos no pudieron desarrollarse a nivel laboral ni académico por la falta de oportunidades ante el rechazo de la comunidad y la estigmatización que sufrieron. Concretamente, señalaron que H.J.R.P. no pudo desarrollarse en su carrera y V.A.R.P. no pudo estudiar porque, además, le faltó el respaldo económico de su madre, quien tuvo que salir de Nicaragua.

418. El *Estado* señaló que, si bien el daño inmaterial podía comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas

directas como a sus allegados que de forma directa hayan sufrido el menoscabo de valores muy significativos para las personas, y no era posible asignar o fijar al daño un precio equivalente en dinero para los fines de reparación, la suma pretendida por las representantes como compensación por el daño inmaterial, ascendente a US\$ 550.000,00, superaba la realidad de un país en desarrollo como Nicaragua. En esta línea, solicitó a la Corte que tuviera en cuenta que, según su jurisprudencia, “la sentencia puede constituir *per se* una forma de reparación”. El Estado consideró elevada la suma solicitada como compensación por la afectación al proyecto de vida alegado, aun cuando las representantes no precisaron suma específica, y se opuso a considerar a los hermanos de V.R.P. como beneficiarios dado que no habrían sido acreditados como víctimas por la Comisión. Además, invocando lo señalado en la jurisprudencia de la Corte sobre el proyecto de vida, solicitó que en esta sentencia se consideraran las proyecciones realizadas por el Estado en relación con el daño material presuntamente causado.

419. La Corte ha establecido en su jurisprudencia que el daño inmaterial “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas”. Por otra parte, dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad<sup>449</sup>.

<sup>449</sup> Cfr. *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas*. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú*, *supra*, párr. 227.



420. En consideración de las circunstancias del presente caso, las violaciones cometidas, los sufrimientos ocasionados y experimentados en diferentes grados, así como el cambio en las condiciones de vida de V.R.P. y sus familiares, las comprobadas afectaciones a la integridad personal y las restantes consecuencias de orden inmaterial que sufrieron, el Tribunal pasa a fijar en equidad las indemnizaciones por daño inmaterial a favor de las víctimas, las cuales deberán ser pagadas directamente a cada una de ellas.

421. En virtud de ello, la Corte ordena, en equidad, el pago de la suma de US\$ 65.000,00 (sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño inmaterial a favor de V.R.P. Asimismo, la Corte fija en equidad la suma de US\$ 45.000,00 (cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño inmaterial a favor de su madre, la señora V.P.C. Finalmente, la Corte fija en equidad la suma de US\$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño inmaterial a favor de la hermana de V.R.P., la señora N.R.P., así como la suma de US\$ 15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño inmaterial a favor de cada uno de sus hermanos, los señores H.J.R.P. y V.A.R.P.

422. La Corte reconoce que las violaciones de derechos humanos provocadas contra V.R.P., V.P.C., N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P., produjeron una afectación de su desarrollo personal y de su vida familiar, así como también una alteración de sus relaciones sociales, es decir un daño a su proyecto de vida. No obstante, el Tribunal considera que tales perjuicios se encuentran comprendidos dentro del daño inmaterial, así como dentro de otras medidas de reparación ya ordenadas en la presente Sentencia, como las becas de estudio y las medidas rehabilitación.

### E. *Costas y Gastos*

423. Las **representantes** solicitaron a la Corte que ordenara al Estado el pago de las costas y gastos que se hayan originado y originen en la tramitación del caso, tanto en el ámbito interno como ante el sistema interamericano.

424. Ni el *Estado* ni la **Comisión** presentaron alegatos específicos sobre este punto.

425. La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia<sup>450</sup>, las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su *quantum* sea razonable<sup>451</sup>.

426. El Tribunal ha señalado que “las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede, esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido

450 Cfr. *Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas*. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 79, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú*, *supra*, párr. 242.

451 Cfr. *Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas*, *supra*, párr. 82, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú*, *supra*, párr. 242.

con ocasión del procedimiento ante esta Corte”<sup>452</sup>. Asimismo, la Corte reitera que no es suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que se requiere que las partes hagan una argumentación que relacione la prueba con el hecho que se considera representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, se establezcan con claridad los rubros y la justificación de los mismos<sup>453</sup>.

427. La Corte nota que no fueron aportados comprobantes de los gastos derivados de la búsqueda de justicia a nivel interno por la violación sexual de V.R.P., de diversos gastos legales por la interposición de quejas y denuncias contra distintas autoridades, de gastos legales por el proceso de asilo iniciado por V.P.C. y sus hijas en los Estados Unidos, ni de aquellos que las representantes alegaron incurrir ante la Comisión. Sin perjuicio de ello, la Corte considera que es de presumir que V.P.C. incurrió en gastos adicionales con base en la búsqueda de justicia a nivel interno y ante el sistema interamericano, en particular en el trámite ante la Comisión Interamericana. La Corte considera preciso indicar que dicho monto no incluye el pago por concepto de gastos incurridos a raíz del proceso ante esta Corte, los cuales fueron cubiertos por el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas (*infra* párr. 434).

428. En consecuencia, la Corte decide fijar el pago de un monto total razonable de US\$ 15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos. Dicha cantidad será entregada a la señora V.P.C. En el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la presente Sentencia, el Tribunal podrá disponer el reembolso por parte del Estado a las víctimas o sus representantes de los gastos razonables debidamente comprobados en dicha etapa procesal<sup>454</sup>.

452 Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas, *supra*, párrs. 79 y 82, y Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú, *supra*, párr. 243.

453 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, *supra*, párr. 277, y Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú, *supra*, párr. 243.

454 Cfr. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 331, y Caso Pacheco León y otros Vs. Honduras, *supra*, párr. 224.

*F. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas*

429. En el 2008 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos creó el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el “objeto [de] facilitar acceso al sistema interamericano de derechos humanos a aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema”<sup>455</sup>. En el presente caso, mediante Resolución del Presidente de 21 de septiembre de 2017<sup>456</sup> se otorgó, con cargo a dicho Fondo, la asistencia económica necesaria para cubrir los gastos de: i) viaje, traslados y estadía necesarios para que las dos defensoras interamericanas pudieran asistir a la audiencia pública a ejercer sus labores de representación de las presuntas víctimas; ii) viaje, traslados y estadía necesarios para que las señoras V.R.P. y V.P.C. y el señor Enrique Oscar Stola comparecieran en dicha audiencia a rendir sus declaraciones y dictamen pericial, respectivamente; iii) los costos que irroque la declaración por affidavit de N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P., y iv) los demás gastos razonables y necesarios en que hayan incurrido o puedan incurrir las defensoras interamericanas, para lo cual debían remitir al Tribunal tanto la justificación de tales gastos como sus comprobantes.

430. El Estado tuvo la oportunidad de presentar sus observaciones sobre las erogaciones realizadas en el presente caso, las cuales ascendieron a la suma de US\$ 13.862,51 (trece mil ochocientos sesenta y dos con 51/100 dólares de los Estados Unidos de América). El Estado manifestó en su escrito de 21 de diciembre de 2017 que, si bien en el informe

455 AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08), Resolución adoptada por la Asamblea General de la OEA durante la celebración del XXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la OEA, en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008, “Creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Punto Resolutivo 2.a), y CP/RES. 963 (1728/09), Resolución adoptada el 11 de noviembre de 2009 por el Consejo Permanente de la OEA, “Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, artículo 1.1.

456 Cfr. Resolución emitida por el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 de setiembre de 2017 (expediente de fondo, tomo I, folios 838 a 852).

de la Secretaría de la Corte se adjuntó una tabla de cálculos “*per diem*” asignados en Panamá, no se apreciaba de dicho informe ninguna rendición de cuentas por parte de los beneficiarios de dichas erogaciones. El Estado señaló que el informe tampoco contaba con la firma ni el visto bueno de la contabilidad de la Corte, ya que las normas contables en Nicaragua exigían evidencias competentes y suficientes para justificar el uso de los fondos utilizados para este tipo de actividades. Por ello, señaló que ante la falta de soportes, facturas o recibos de la totalidad de los gastos efectuados por los beneficiarios, el Estado no contaba con respaldo probatorio para determinar el monto de los gastos realizados, por lo que solicitó que se provean soportes que justifiquen el uso de los fondos para la alimentación y hospedaje, y en caso que exista dinero no utilizado para dichos fines sea reembolsado al fondo de asistencia legal de víctimas.

431. De igual forma, el Estado alegó que el pago de honorarios del perito Enrique Oscar Stola, si bien fue autorizado mediante firma del Secretario de la Corte, dicho pago no se autorizó de conformidad con el artículo 4 del Reglamento del Fondo de Víctimas ni con los párrafos 43 a 46 de la Resolución del Presidente de 21 de septiembre de 2017. El Estado señaló que en ninguno de los párrafos de dicha resolución el Presidente resolvió realizar pagos por concepto de honorarios al perito en mención. Asimismo, indicó que de conformidad con el artículo 4 del citado Reglamento, las erogaciones al Fondo deben realizarse conforme a parámetros autorizados por la Presidencia, lo cual no ocurrió en el presente caso. Por ello, el Estado indicó que no podía ni debía pagar esa erogación, ascendente a más de cinco mil dólares.

432. En cuanto a las objeciones del Estado respecto a la falta de documentación que sustente los montos erogados por concepto de viáticos y gastos de transporte, la Corte recuerda que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del

Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, “a falta de disposición en [dicho] Reglamento, o en caso de duda sobre su interpretación, la Corte decidirá”. Al respecto, desde que comenzó a funcionar el Fondo<sup>457</sup>, este Tribunal ha establecido como política entregar a las personas cubiertas por éste, un monto fijo de viáticos, lo cual incluye hospedaje y alimentación, tomando como base de referencia la tabla de viáticos vigente de la OEA aplicable a la ciudad de Panamá, República de Panamá, sin necesidad de que presenten facturas que demuestren los gastos efectuados. Lo anterior, dado que esta tabla refleja el monto que, según la OEA, razonablemente desembolsaría una persona en hospedaje y alimentación en dicha ciudad. Asimismo, el procedimiento de requerir facturas a los beneficiarios del Fondo de Asistencia por los viáticos recibidos presentaría serios obstáculos para la correcta y expedita administración del mismo. También, por esta razón es que, en cuanto a los gastos terminales, es decir, los gastos por transporte para el traslado hacia y desde la estación terminal y otros gastos incidentales, el Tribunal únicamente requiere que se comprueben aquellos gastos realizados desde el punto de origen hasta la sede donde se llevará a cabo la audiencia, siendo razonable que el mismo monto sea desembolsado en el viaje de retorno de la persona correspondiente. Por tanto, la Corte desestima las objeciones del Estado<sup>458</sup>.

433. En cuanto a las objeciones del Estado respecto al pago de honorarios del perito Enrique Oscar Stola, la Corte resalta que, de conformidad con el considerando 42 de la Resolución del Presidente de 21 de septiembre de 2017, “en casos en que la representación sea asumida gratuitamente por un defensor interamericano en los términos del artí-

457 El Fondo de Asistencia de Víctimas fue aplicado por primera vez en el caso *Contreras y Otros Vs. El Salvador*, cuya Sentencia fue emitida el de 31 de agosto de 2011.

458 Cfr. *Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 299, párr. 355, y *Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú, supra*, párr. 237.

culo 37 del Reglamento de la Corte Interamericana<sup>459</sup>, se brindará ayuda a través del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas para sufragar, en la medida de lo posible, los gastos razonables y necesarios que origine tal representación. Es decir, la aplicación del Fondo en estas situaciones se rige por lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo de Entendimiento entre la Corte Interamericana y la Asociación Interamericana de Defensoría Públicas, de modo que el defensor interamericano designado “deberá presentar ante la Corte todos los comprobantes necesarios que acrediten los gastos en que se ha incurrido con motivo de la tramitación del caso ante ésta”. Lo anterior también fue expresamente señalado al notificar el sometimiento del presente caso.

434. Con base en lo anterior, en el considerando 43 de dicha Resolución, estableció que “la asistencia económica será asignada para cubrir los gastos de: [...] iv) los demás gastos razonables y necesarios en que hayan incurrido o puedan incurrir las defensoras interamericanas, para lo cual deb[ían] remitir al Tribunal tanto la justificación de tales gastos como sus comprobantes”.

435. Por ello, la Corte estima que el pago por honorarios del perito Enrique Oscar Stola se encuentra bajo el rubro “demás gastos razonables y necesarios en que hayan incurrido las defensoras”, el cual fue debidamente autorizado por el Presidente, conforme a lo señalado precedentemente.

436. Por lo tanto, en razón de las violaciones declaradas en la presente Sentencia y que se cumplió con los requisitos para acogerse al Fondo, la Corte ordena al Estado el reintegro a dicho Fondo de la suma de US\$ 13.862,51 (trece mil ochocientos sesenta y dos con 51/100 dólares de los Estados Unidos de América). Dicho monto deberá ser reintegrado en el plazo de seis meses, contados a partir de la notificación del presente Fallo.

459 Dicha norma prevé que “[e]n casos de presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada, el Tribunal podrá designar un Defensor Interamericano de oficio que las represente durante la tramitación de[l] caso”.

*G. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados*

437. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a las personas indicadas en la misma, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, sin perjuicio de que pueda adelantar el pago completo en un plazo menor, en los términos de los siguientes párrafos.

438. En caso de que los beneficiarios hayan fallecido o fallezcan antes de que les sea entregada la indemnización respectiva, ésta se efectuará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.

439. El Estado debe cumplir sus obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América a las beneficiarias que habitan en dicho país. Por su parte, el Estado debe cumplir sus obligaciones monetarias a los beneficiarios que habitan en Nicaragua mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio que se encuentre vigente en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.

440. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera nicaragüense solvente, en dólares de los Estados Unidos de América, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.



441. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a las personas y organizaciones indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.

442. En caso de que el Estado incurriera en mora, incluyendo en el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en la República de Nicaragua.

## X

### Puntos Resolutivos

443. Por tanto,

La Corte

Decide,

Por unanimidad,

1. Desestimar la excepción preliminar opuesta por el Estado relativa a la alegada falta de agotamiento de los recursos internos, en los términos de los párrafos 21 a 29 de la presente Sentencia.

2. Desestimar la excepción preliminar opuesta por el Estado relativa a la alegada falta de competencia *ratione temporis* de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 33 a 36 de la presente Sentencia.

3. Desestimar la excepción preliminar opuesta por el Estado relativa a la alegada falta de competencia *ratione materiae* de la Corte en relación con la presunta violación de artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, en los términos de los párrafos 40 a 42 de la presente Sentencia.

Declara:

Por unanimidad, que:

4. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada y familiar, y a la protección judicial, tanto por acción como por omisión, en los términos de los artículos 5.1, 8.1, 11.2 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma, así como por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de V.R.P. y V.P.C., en los términos de los párrafos 150 a 203 y 304 de la presente Sentencia.

5. El Estado es responsable por la violación de las garantías de debido proceso referidas a la imparcialidad objetiva y a la interdicción de la arbitrariedad, reconocidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma y el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de V.R.P. y V.P.C., en los términos de los párrafos 216 a 271 y 304 de la presente Sentencia.

6. El Estado es responsable por la violación de la garantía de plazo razonable del proceso, reconocida en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma y el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de V.R.P. y V.P.C., en los términos de los párrafos 275 a 285 y 304 de la presente Sentencia.

7. El Estado es responsable por el incumplimiento de su obligación de garantizar, sin discriminación por motivos de sexo y género, así como por la condición de persona en desarrollo de la víctima, el derecho de acceso a la justicia en los términos de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1, 19 y 24 de la misma y el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de V.R.P., en los términos de los párrafos 289 a 296 y 304 de la presente Sentencia.

8. El Estado es responsable por la violación de la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, establecida en el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de V.R.P., en los términos de los párrafos 297 a 299 y 304 de la presente Sentencia.

9. El Estado es responsable por la violación de los derechos de residencia y a la protección de la familia, reconocidos en los artículos 22.1 y 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma, en perjuicio de V.R.P. Asimismo, el Estado es responsable por la violación de los derechos de residencia y a la protección de la familia, reconocidos en los artículos 22.1 y 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de V.P.C. y N.R.P. Del mismo modo, el Estado es responsable por la violación del derecho a la protección de la familia, reconocido en el artículo 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de H.J.R.P. y V.A.R.P. Todo ello en los términos de los párrafos 308 a 322 de la presente Sentencia.

10. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de V.R.P., identificados como V.P.C., N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P., en los términos de los párrafos 327 a 334 de la presente Sentencia.

11. El Estado no incurrió en responsabilidad por la alegada vulneración del principio de no discriminación por motivo de religión, protegido en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como tampoco incurrió en responsabilidad por la alegada vulneración del derecho a la libertad de religión, reconocido en el

artículo 12.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos del párrafo 323 de la presente Sentencia.

12. No corresponde emitir un pronunciamiento sobre las alegadas violaciones del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del derecho a conocer la verdad, en los términos del párrafo 303 de la presente Sentencia.

Y Dispone:

Por unanimidad, que:

13. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.

14. El Estado debe, dentro de un plazo razonable, determinar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, las eventuales responsabilidades de los funcionarios que contribuyeron con su actuación a la comisión de actos de revictimización y violencia institucional en perjuicio de V.R.P., y en la medida que corresponda, aplicar las consecuencias que la ley pudiera prever, de conformidad con lo establecido en el párrafo 345 de esta Sentencia.

15. El Estado debe pagar a V.R.P., V.P.C. y N.R.P. las sumas establecidas por concepto de gastos por tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el párrafo 351 de esta Sentencia.

16. El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, a H.J.R.P. y V.A.R.P., de conformidad con lo establecido en el párrafo 352 de esta Sentencia.

17. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 355 de la presente Sentencia, si V.R.P. así lo autoriza.

18. El Estado debe pagar a V.R.P. la suma establecida en concepto de beca para poder sufragar los gastos necesarios para la conclusión de su formación profesional en el lugar donde resida, de conformidad con lo establecido en el párrafo 362 de la presente Sentencia.

19. El Estado debe otorgar a V.A.R.P. una beca en una institución pública nicaragüense, concertada entre el beneficiario y el Estado, para realizar estudios superiores técnicos o universitarios, o bien para capacitarse en un oficio, de conformidad con lo establecido en el párrafo 363 de la presente Sentencia.

20. El Estado debe adoptar, implementar, supervisar y fiscalizar de forma apropiada tres protocolos estandarizados, sobre las siguientes materias: i) protocolo de investigación y actuación durante el proceso penal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; ii) protocolo sobre abordaje integral y valoración médico legal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, y iii) protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, de conformidad con lo establecido en los párrafos 381 a 385 de esta Sentencia.

21. El Estado debe crear e implementar una figura especializada que brinde asistencia jurídica gratuita a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, especialmente de violencia sexual, de conformidad con lo establecido en el párrafo 387 de esta Sentencia.

22. El Estado debe adoptar e implementar las capacitaciones y los cursos, de carácter permanente, ordenados en los párrafos 392 a 395 de esta Sentencia.

23. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 411, 419, 426 y 433 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 442 a 447.

24. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos de los párrafos 441 y 447 de esta Sentencia.

25. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 356 de la presente Sentencia.

26. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Redactada en español en San José, Costa Rica, el 8 de marzo de 2018.

Corte IDH. Caso *V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot  
Presidente

Humberto A. Sierra PortoElizabeth Odio BenitoEugenio Raúl  
Zaffaroni L. Patricio Pazmiño FreirePablo Saavedra Alessandri

Secretario  
Comuníquese y ejecútese, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente  
Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

# ÍNDICE DEL TOMO 353

## MATERIA CIVIL

### -A-

ACUMULACIÓN DE JUICIOS AL CONCURSO MERCANTIL. SANCIONES Y JUICIOS INICIADOS POR EL COMERCIANTE Y LOS PROMOVIDOS Y SEGUIDOS CONTRA ÉL DE CONTENIDO PATRIMONIAL. NO SE REQUIERE LA OPINIÓN DEL CONCILIADOR DESIGNADO PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO EN EL CONCURSO MERCANTIL. No se requiere la opinión del conciliador designado para iniciar el procedimiento hipotecario, tomando en consideración que la declaratoria de concurso mercantil fue emitida con fecha diferente a la demanda del juicio hipotecario; por ello, de conformidad con lo que prevé el artículo 84 de la Ley de Concursos Mercantiles, que señala: “Las acciones promovidas y los juicios seguidos por el comerciante, y las promovidas y los seguidos contra él, que se encuentren en trámite al dictarse la sentencia de concurso mercantil, que tengan un contenido patrimonial, no se acumularán al concurso mercantil, sino que se seguirán por el comerciante bajo la vigilancia del conciliador, para lo cual, el comerciante debe informar al conciliador de la existencia del procedimiento, al día siguiente de que sea de su conocimiento la designación de éste...”. En consecuencia fue procedente iniciar por separado cualquier otro procedimiento de contenido patrimonial, sin que, por tanto, fuera procedente acumular al juicio de concurso mercantil el seguido ante el *a quo*.. 35

### -C-

CONTRATO. OMISIÓN DE EXHIBIR COMO BASE DE LA ACCIÓN DOCUMENTO PACTADO EN CLÁUSULA. Si bien, las partes pactan que el importe de la prestación de servicio materia de un contrato será liquidada al prestador de servicios, una vez que el área solicitante del mismo haya verificado fehacientemente su cumplimiento en los términos del instrumento; comprobado lo anterior, el paso para efectuar dicho pago será dentro del plazo establecido posterior a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas; aceptadas las facturas, se expedirá el contrarecibo correspondiente en el lugar oportuno; no menos cierto lo es, que el hecho de que ante la omisión de alguna de las partes de exhibir el documento pactado en la cláusula, no es obstáculo para que se realice el pago convenido en el contrato base de la acción, pues éste no se actualiza por meros trámites administrativos, sino que dicho pago se actualiza por la realización de los trabajos encomendados.. 7

## MATERIA MERCANTIL

### -I-

INTERÉS ORDINARIO Y MORATORIO. NATURALEZA JURÍDICA. El interés es el rédito que produce o debe producir el dinero prestado; es decir, el precio pagado por el uso del

propio dinero, de manera que su naturaleza jurídica consiste en la obtención de una cantidad como ganancia, por el simple hecho de que una persona dio a otra una cantidad de dinero que ésta necesitaba para satisfacer sus propias necesidades, por ello se afirma que al momento de regresar el dinero prestado, es cuando cesa la obligación del deudor de cubrir los intereses respectivos. En cambio los intereses moratorios, consisten en una indemnización cuya finalidad es desincentivar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones. 49

INTERESES MORATORIOS ESTABLECIDOS POR LAS PARTES CUÁNDO RESULTAN VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS. De conformidad con lo que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país se encuentran obligadas a respetar, proteger y garantizar no solo los derechos humanos que derivan de la Constitución, sino también aquellos que se encuentren contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, lo que conlleva a considerar que en materia de derechos humanos existe control difuso. En este sentido, es evidente que el juzgador puede estudiar y determinar a la luz de las circunstancias particulares del caso y de las constancias que obren en autos, sin dejar de advertir los factores externos, si efectivamente los intereses moratorios establecidos por las partes resultan usurarios y, por tal razón, violatorios de derechos humanos, pudiendo apartarse del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva a fin de preservar que no ocurra el fenómeno usurario. 85

## MATERIA PENAL

### -V-

LA PERICIAL COMO MEDIO DE PRUEBA PROBATORIO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. Los medios de prueba en relación a la pericial, a la cual se les concede valor probatorio con fundamento en el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales, que a la letra señala: “La fuerza probatoria de todo dictamen pericial, incluso el cotejo de letras y los dictámenes de peritos científicos, será calificada por el Ministerio Público, por el juez o por el tribunal, según las circunstancias”. Se establecen como idóneos virtud de que los peritos en la materia que intervinieron, practicaron todas las operaciones y experimentos que su ciencia les sugirió, expresando los hechos y circunstancias que sirvieron de base para emitir su dictamen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del Código en cita. Elementos de prueba que resultan aptos y suficientes para acreditar que la privación de la vida del pasivo ocurrió por una causa externa, esto es, debido a la neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, que fue clasificada de mortal. Ciudad de México, XX de XXX del XXXX. 125



## MATERIA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

-M-

MEDIDA CAUTELAR, CONSISTENTE EN INTERNAMIENTO DEL ADOLESCENTE. NO ES RAZÓN SUFICIENTE PARA REVOCARLA POR EL ESTADO DE INGRAVIDEZ DE LA INculpADA. De conformidad con lo que establecen los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 5.5 y 6.1 de la Convención Europea, así como 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal, debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el juicio. Por su parte, el numeral 34 de la Ley de Justicia para Adolescentes de esta Capital, establece que la detención provisional e internamiento del adolescente deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales. Tales disposiciones no implican que deba ignorarse la exigencia social de que se proteja el valor de la seguridad como sucede en el delito de robo calificado, el cual la doctrina denomina de núcleo duro, en virtud del impacto social que éstos generan. En este sentido, se advierte que la inculpada se encuentra en un estado de ingravidez no es razón suficiente para revocar la medida cautelar, consistente en internamiento del adolescente, pues ante ello, desde luego resulta obligatorio para la Comunidad donde se encuentra privada de la libertad, que le sea proporcionada la atención médica que requiera y se tengan las consideraciones propias a su condición física, respetándose así, el principio de proporcionalidad, en el que se sustenta la medida cautelar impuesta. 263

-P-

PRECISIÓN DEL NÚMERO DE DEPARTAMENTO DONDE SEÑALÓ LA INculpADA QUE HABITABA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA NEGAR ALGUNA MEDIDA DE MENOR SEVERIDAD, DIVERSA A LA DETENCIÓN PREVENTIVA. Si bien es cierto que la conducta tipificada como robo calificado, es considerada como grave por la Ley de Justicia para Adolescentes de esta Capital, no menos cierto lo es que esto no constituye por sí mismo un factor de anulación total de procedencia de medidas cautelares diversas a la detención preventiva, ya que esta debe ser limitada conforme a los principios de legalidad, presunción de inocencia, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en todos los casos, conforme a la relevancia del interés que se tutela a las personas, respecto de su libertad personal, como parte de la esencia de toda sociedad democrática, donde la restricción de dicha libertad, debe operar de manera excepcional. En este sentido, no es causa suficiente para negar alguna medida cautelar de menor severidad, diversa a la detención preventiva, se advierte que, la falta de precisión del número de departamento donde señaló la inculpada que habitaba, pues en este caso, no puede considerarse que la citada imprecisión, no implica la inexistencia de un domicilio cierto en el inmueble que la adolescente señaló, pues en todo caso el juzgador deberá exponer la razón por la que considere que ese como un factor de impedimento de la localización de la menor, ni de la eventualidad oportunidad de ubicación de ésta. 289

## **PUBLICACIONES ESPECIALES**

Corte Interamericana de Derechos Humanos  
Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua  
Sentencia de 8 de marzo de 2018  
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

327

# ÍNDICE DE SUMARIOS

## SEXTA SALA CIVIL

### Materia Civil

Acumulación de juicios al concurso mercantil. Sanciones y juicios iniciados por el comerciante y los promovidos y seguidos contra él de contenido patrimonial. No se requiere la opinión del conciliador designado para iniciar el procedimiento hipotecario en el concurso mercantil. No se requiere la opinión del conciliador designado para iniciar el procedimiento hipotecario, tomando en consideración que la declaratoria de concurso mercantil fue emitida con fecha diferente a la demanda del juicio hipotecario; por ello, de conformidad con lo que prevé el artículo 84 de la Ley de Concursos Mercantiles, que señala: “Las acciones promovidas y los juicios seguidos por el comerciante, y las promovidas y los seguidos contra él, que se encuentren en trámite al dictarse la sentencia de concurso mercantil, que tengan un contenido patrimonial, no se acumularán al concurso mercantil, sino que se seguirán por el comerciante bajo la vigilancia del conciliador, para lo cual, el comerciante debe informar al conciliador de la existencia del procedimiento, al día siguiente de que sea de su conocimiento la designación de éste...”. En consecuencia fue procedente iniciar por separado cualquier otro procedimiento de contenido patrimonial, sin que, por tanto, fuera procedente acumular al juicio de concurso mercantil el seguido ante el *a quo*.. 35

Contrato. Omisión de exhibir como base de la acción documento pactado en cláusula. Si bien, las partes pactan que el importe de la prestación de servicio materia de un contrato será liquidada al prestador de servicios, una vez que el área solicitante del mismo haya verificado fehacientemente su cumplimiento en los términos del instrumento; comprobado lo anterior, el paso para efectuar dicho pago será dentro del plazo establecido posterior a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas; aceptadas las facturas, se expedirá el contrarecibo correspondiente en el lugar oportuno; no menos cierto lo es, que el hecho de que ante la omisión de alguna de las partes de exhibir el documento pactado en la cláusula, no es obstáculo para que se realice el pago convenido en el contrato base de la acción, pues éste no se actualiza por meros trámites administrativos, sino que dicho pago se actualiza por la realización de los trabajos encomendados. 7

## JUZGADO QUINCUAGÉSIMO DE LO CIVIL

### Materia Mercantil

Interés ordinario y moratorio. Naturaleza jurídica. EL interés es el rédito que produce o debe producir el dinero prestado; es decir, el precio pagado por el uso del propio dinero, de manera que su naturaleza jurídica consiste en la obtención de una cantidad como ga-

nancia, por el simple hecho de que una persona dio a otra una cantidad de dinero que ésta necesitaba para satisfacer sus propias necesidades, por ello se afirma que al momento de regresar el dinero prestado, es cuando cesa la obligación del deudor de cubrir los intereses respectivos. En cambio los intereses moratorios, consisten en una indemnización cuya finalidad es desincentivar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones. 49

## **JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL EN CUANTÍA MENOR**

### **Materia Mercantil**

Intereses moratorios establecidos por las partes cuándo resultan violatorios de derechos humanos. De conformidad con lo que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país se encuentran obligadas a respetar, proteger y garantizar no solo los derechos humanos que derivan de la Constitución, sino también aquellos que se encuentren contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, lo que conlleva a considerar que en materia de derechos humanos existe control difuso. En este sentido, es evidente que el juzgador puede estudiar y determinar a la luz de las circunstancias particulares del caso y de las constancias que obren en autos, sin dejar de advertir los factores externos, si efectivamente los intereses moratorios establecidos por las partes resultan usurarios y, por tal razón, violatorios de derechos humanos, pudiendo apartarse del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva a fin de preservar que no ocurra el fenómeno usurario. 85

## **SEXTA SALA PENAL**

La pericial como medio de prueba. Los medios de prueba en relación a la pericial, a la cual se les concede valor probatorio con fundamento en el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales, que a la letra señala: “La fuerza probatoria de todo dictamen pericial, incluso el cotejo de letras y los dictámenes de peritos científicos, será calificada por el Ministerio Público, por el juez o por el tribunal, según las circunstancias”. Se establecen como idóneos virtud de que los peritos en la materia que intervinieron, practicaron todas las operaciones y experimentos que su ciencia les sugirió, expresando los hechos y circunstancias que sirvieron de base para emitir su dictamen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del Código en cita. Elementos de prueba que resultan aptos y suficientes para acreditar que la privación de la vida del pasivo ocurrió por una causa externa, esto es, debido a la neumonía bilateral, complicación determinada por la fractura de fémur, que fue clasificada de mortal. 125

## **SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES**

Medida cautelar, consistente en internamiento del adolescente. No es razón suficiente para revocarla por el estado de ingravidez de la inculpada. De conformidad con lo que establecen los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 5.5 y 6.1 de la Convención Europea, así como 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal, debe ser llevada

sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el juicio. Por su parte, el numeral 34 de la Ley de Justicia para Adolescentes de esta Capital, establece que la detención provisional e internamiento del adolescente deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales. Tales disposiciones no implican que deba ignorarse la exigencia social de que se proteja el valor de la seguridad como sucede en el delito de robo calificado, el cual la doctrina denomina de núcleo duro, en virtud del impacto social que éstos generan. En este sentido, se advierte que la inculpada se encuentra en un estado de ingravidez no es razón suficiente para revocar la medida cautelar, consistente en internamiento del adolescente, pues ante ello, desde luego resulta obligatorio para la Comunidad donde se encuentra privada de la libertad, que le sea proporcionada la atención médica que requiera y se tengan las consideraciones propias a su condición física, respetándose así, el principio de proporcionalidad, en el que se sustenta la medida cautelar impuesta. 263

Precisión del número de departamento donde señaló la inculpada que habitaba, no es causa suficiente para negar alguna medida de menor severidad, diversa a la detención preventiva. Si bien es cierto que la conducta tipificada como robo calificado, es considerada como grave por la Ley de Justicia para Adolescentes de esta Capital, no menos cierto lo es que esto no constituye por sí mismo un factor de anulación total de procedencia de medidas cautelares diversas a la detención preventiva, ya que esta debe ser limitada conforme a los principios de legalidad, presunción de inocencia, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en todos los casos, conforme a la relevancia del interés que se tutela a las personas, respecto de su libertad personal, como parte de la esencia de toda sociedad democrática, donde la restricción de dicha libertad, debe operar de manera excepcional. En este sentido, no es causa suficiente para negar alguna medida cautelar de menor severidad, diversa a la detención preventiva, se advierte que, la falta de precisión del número de departamento donde señaló la inculpada que habitaba, pues en este caso, no puede considerarse que la citada imprecisión, no implica la inexistencia de un domicilio cierto en el inmueble que la adolescente señaló, pues en todo caso el juzgador deberá exponer la razón por la que considere que ese como un factor de impedimento de la localización de la menor, ni de la eventualidad oportunidad de ubicación de ésta. 289

# ÍNDICE GENERAL

	Pág.
Materia Civil.....	5
Materia Mercantil.....	47
Materia Penal.....	123
Materia Justicia para Adolescentes.....	261
Publicación Especial.....	325
Índice del Tomo 353.....	553
Índice de Sumarios.....	557

**Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  
de la Ciudad de México**

*Mgdo. Dr. Álvaro Augusto Pérez Juárez*  
**Presidente**

**Consejeros de la Judicatura de la CDMX**

*Mtra. Ana Yadira Alarcón Márquez*  
*Dr. Miguel Arroyo Ramírez*  
*Mtra. Aurora Gómez Aguilar*  
*Dr. Jorge Martínez Arreguín*  
*Dra. Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés*

**Comité Editorial**

*Mgdo. Dr. Álvaro Augusto Pérez Juárez*  
**Presidente**

**Vocales**

*Dr. Jorge Martínez Arreguín*  
**Consejero de la Judicatura**

*Dr. Juan Luis González A. Carrancá*  
**Magistrado de la Cuarta Sala Familiar**

*Lic. Judith Cova Castillo*  
**Magistrada por Ministerio de Ley, Octava Sala Civil**

*C.P. Israel Soberanis Noguera*  
**Oficial Mayor**

*Dra. María Elena Ramírez Sánchez*  
**Directora General del Instituto de Estudios Judiciales**

*Lic. Raciél Garrido Maldonado*  
**Director General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial**



---

1933 - 2018

---

X Época



2018,  
*El poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia  
en los Juicios Orales*